



# TERRORISMO MEDIÁTICO

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
DEL MIEDO EN MÉXICO

CARLOS FAZIO

Lectulandia



# Terrorismo mediático

La construcción social del miedo en México

CARLOS FAZIO

*A Patricia Villafuerte, por todos estos días*

*A Bárbara y Fernando, que construyen su destino*

*A Manuel Pérez Rocha, humanista,  
hacedor de una universidad de puertas  
abiertas*

## Guerra imperial y desinformación. La mentira del Pentágono como arma de guerra

Desde hace 3 000 años, el arte de la desinformación ha sido un elemento clave en los conflictos bélicos. Los relatos acerca de guerras desde las narraciones históricas de Herodoto<sup>1</sup> y los poemas épicos de Homero,<sup>2</sup> han estado unidos al uso de la propaganda. Entonces no se trataba de escribir la historia objetiva sino de incitar o provocar emociones, positivas o negativas, para conformar la voluntad de la población, las más de las veces tergiversando o manipulando los hechos a favor de la cultura dominante.

En la actualidad, para la mayoría de las personas la de *propaganda* es una palabra sucia. Tiene un sentido de engaño, de falsedad y, en consecuencia, evoca emociones negativas. Aunque su significado moderno podría atribuirse a los franceses, ese término comenzó a ser utilizado en 1622, en la época del papa Gregorio XV, y remite al latín pontifical *propagare*. La Congregación para la Propagación de la Fe (*propaganda fide*) fue utilizada por la Iglesia católica en los tiempos de la Contrarreforma y casi no rebasó los límites del vocabulario eclesiástico propio del Colegio de la Propaganda, hasta que a finales del siglo XVIII el ciudadano Roland y su *Bureau de Propagande* la introdujeron en el mundo secular y en la lengua laica.<sup>3</sup>

Sin embargo, la propaganda desempeñó un papel clave desde que comenzaron las rivalidades políticas. Así, las *Filípicas* que dirigiera 11 Demóstenes<sup>4</sup> contra Filipo de Macedonia<sup>5</sup> formaron parte de una verdadera campaña de propaganda, igual que las invectivas de Cicerón<sup>6</sup> contra Catilina.<sup>7</sup> En los años 300 antes de Cristo, Alejandro Magno,<sup>8</sup> rey de Macedonia, ya contaba con un “departamento de relaciones públicas” que utilizaba con fines propagandísticos. Nicolás Maquiavelo<sup>9</sup> dio al objetivo y a las funciones de la propaganda política una interpretación particularmente afín a la teoría burguesa moderna, al plantear que sólo el Estado y el poder político constituyen un supremo valor independiente, mientras que el “súbdito” sigue siendo “objeto de manipulaciones”.

Alejadas de su primer sentido apostólico, las definiciones contemporáneas del vocablo señalan que “propaganda es una tentativa para ejercer influencia en la opinión y en la conducta de la sociedad de manera que las personas adopten una opinión y una conducta determinadas”.<sup>10</sup> Según otra definición, “la propaganda es el lenguaje destinado a la masa. Emplea palabras u otros símbolos a los cuales sirven como vehículos la radio, la prensa y la cinematografía. La finalidad del propagandista es ejercer influencia en la actitud de las masas en puntos que están sometidos a la propaganda y que son objeto de opinión”.<sup>11</sup> Se trata, en definitiva, de modificar la conducta de las personas a través de la persuasión. Es decir, sin parecer forzarlas. Y uno de los principales medios para ejercer influencia en la gente y obtener ese fin es la mentira. La mentira como arma.

Desde el siglo xx, el argumento de que informar sobre la conducción de una guerra podría ayudar al enemigo, se convirtió en la razón estándar para justificar la censura. En noviembre de 1940 Lord Halifax<sup>12</sup> informó que durante una sesión de gabinete, Winston Churchill<sup>13</sup> criticó con severidad a la British Broadcasting Corporation calificándola como “un enemigo al interior de la propia casa que causa continuamente problemas, haciendo más daño que bien”. Durante la guerra entre Estados Unidos y Corea (1950-1951), el jefe de prensa del general Douglas MacArthur, coronel Marion Echols trataba a los periodistas como “enemigos naturales”. En *Under Fire: The Story of American War Correspondents*, M. L. Stein argumenta: “Es un axioma de guerra que algunos comandantes temen más a la prensa que al enemigo”. Se atribuye a George Washington<sup>14</sup> haber expresado que “el secreto es una especie de desinformación”.

Cuando empieza un conflicto es habitual que ambas partes se escuden detrás de la “seguridad” y los “intereses” nacionales. Y que a través de los medios de difusión masiva, que actúan como mecanismos clave de la negación, las dos partes mientan, tergiversen los datos y calumnien al enemigo, queriendo hacer pasar por información objetiva lo que en realidad es propaganda interesada. Así, en el mundo de la “noticia”, las normas dobles estándares y las duplicidades se vuelven interminables. En el momento en que una noticia pasa a los medios adquiere, implícitamente, un carácter legal y sufre un proceso de oficialización. El espectador, el ciudadano común, muchas veces no puede distinguir esos dobles estándares, y a fuerza de escuchar la “verdad oficial” la hace parte de su “opinión personal”, lo que a su vez confluye hacia una falsa opinión pública, manipulada de principio a fin. A eso en el argot periodístico, se le denomina proceso de intoxicación. La mejor manera para que la opinión pública no pese en la conducción de una guerra, es que no sepa exactamente lo que está pasando en ella.

Pero a veces sucede que hasta los propios periodistas caen en las redes de la propaganda o el doble pensar. Es decir, se creen su propio cuento. O lo justifican

escudados en el “deber patriótico”, reproduciendo o reforzando el poder del Estado y su papel en la violencia nacional o internacional, al asumir —por sus intereses de clase o por conservar su estabilidad laboral— la ideología del patriotismo reaccionario. Lo mismo hacen los propietarios de los medios de difusión masiva dominantes, para quienes la información no tiene un valor en sí misma y es, ante todo, una mercancía sometida a las leyes del mercado —de la oferta y la demanda—, y no a los criterios éticos o cívicos.

En general, cuando estalla un conflicto, la prensa, medio de masas dominante, se inclina por silenciar las voces independientes, suprimir el debate crítico y aislar el disentimiento para reunir apoyo, orquestar y controlar las respuestas emocionales en masa, publicar todas las noticias “buenas” y suprimir las “malas”. Y, sobre todo por apoyar a sus soldados para ganar la guerra, glorificando algunos acondicionamientos y minimizando u ocultando otros. Todo lo anterior, claro, en Occidente, bajo la etiqueta de la “prensa libre”.

#### LOS GUARDIANES DE LA LIBERTAD Y LA INGENIERÍA DEL CONSENSO

Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en el territorio continental de Estados Unidos marcaron un nuevo paradigma en la fórmula “guerra y mentira” de comienzos del siglo XXI. Lo más probable es que nunca se conozca la verdad sobre esos hechos. O, como dijo Noam Chomsky, no la conoceremos a lo largo de los próximos 100 años.<sup>15</sup> Aunque de algo sí se podía estar seguro desde un comienzo: la versión oficial del gobierno de Estados Unidos fue falsa, o parcialmente falsa. Y otra cuestión más que fue quedando clara con el tiempo: lo que se montó a partir de los atentados fue una típica acción de terrorismo de Estado a escala global.

Cuatro días después de los hechos, desde la residencia campestre en Camp David, el presidente Bush anunció que Estados Unidos estaba “en guerra” y apuntó su dedo acusador contra el millonario saudita Osama Bin Laden, “protegido” de Afganistán, como “principal sospechoso” (intelectual) de los ataques.<sup>16</sup> Durante un mensaje por radio a la nación y en diálogo con periodistas, el jefe de la Casa Blanca pidió a los estadounidenses “paciencia y determinación” porque “el conflicto será largo”. Dijo Bush: “Éste será un conflicto distinto contra un enemigo distinto. Es un conflicto sin campo de batalla, donde el enemigo cree ser invisible. Pero se están equivocando. Serán descubiertos y descubrirán lo que otros en el pasado tuvieron que entender: los que le hicieron la guerra a Estados Unidos eligieron su propia destrucción”.

Un día antes, el Congreso había aprobado una resolución bicameral que permitía a Bush “emplear toda la fuerza necesaria y apropiada” contra “naciones,

organizaciones o personas” que “planearon autorizaron, cometieron o ayudaron” a perpetrar el atentado contra el World Trade Center de Nueva York, cuyas víctimas fueron estimadas, entonces, en 5 124 muertos además de los desaparecidos.<sup>17</sup> De manera premonitoria, al abordar ambas noticias, el diario uruguayo *La República* tituló su nota principal de portada: “Estados Unidos resolvió secuestrar a todos los terroristas estén donde estén”.<sup>18</sup>

El 24 de septiembre, cuando la Casa Blanca planeaba una respuesta militar contra los presuntos responsables de los ataques, en el marco de la nueva “guerra contra el terrorismo” denominada *Justicia Infinita*,<sup>19</sup> un oficial del ejército de ese país reveló al diario *The Washington Post* que en la “guerra informativa de gran intensidad” en curso, se iba a “mentir” a la prensa. Que se impondrían “nuevos y estrictos límites” a la información. Es decir, a la libre expresión.<sup>20</sup>

Como otras veces antes en la historia, bajo presión, la Casa Blanca inducía al “periodismo patriótico”. Pero ese clima de censura no se limitaba sólo a reporteros y noticieros. El programa de conversaciones y humor político *Political y Incorrect*, conducido por el cómico Bill Maher, que se transmitía cinco días a la semana en la cadena ABC, dejó de retransmitirse la última semana de septiembre en muchas estaciones de televisión, debido a comentarios que fueron considerados inoportunos.<sup>21</sup> “Hemos sido cobardes al lanzar proyectiles crucero desde distancias de dos mil millas, mientras que los terroristas tuvieron el valor de suicidarse por su causa. Quedarse en el avión mientras se le conduce para el choque contra un edificio, sea lo que sea, no es cobardía”, había dicho Maher.<sup>22</sup>

Limitada la libertad de expresión, comenzaba a ser difícil distinguir la diferencia entre las posiciones del gobierno y de los medios. Un día después, en un confuso desmentido, el propio secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, explicó que en el marco de la nueva estrategia militar de largo plazo —enmarcada en lo que la administración Bush definió como *homeland defense* (“defensa de la patria”), ante lo que señaló como “nuevas amenazas” o “amenazas asimétricas”— sería necesario intensificar las operaciones de inteligencia y “podría haber circunstancias en las cuales sería necesario no ofrecer la verdad” a los medios. Apremiado sobre sí en la “campaña de operaciones de información” —como parte de la guerra psicológica contra el enemigo— el Pentágono podría divulgar información falsa, Rumsfeld respondió: “Supongo que uno nunca dice nunca”. Y recordó la frase de Churchill, en el sentido de que “en tiempos de guerra, la verdad es algo tan valioso que debe ser cuidada por un guardaespaldas de mentiras”.<sup>23</sup>

A mediados de octubre de 2001, las cadenas de televisión adoptaron un tono resueltamente patriótico y la información había empezado a perder terreno en beneficio de la propaganda de guerra de la Casa Blanca. Se cumplía la máxima del cientista francés Armand Mattelart según la cual “la comunicación para lo que sirve



en primer lugar es para hacer la guerra”, al grado de llevar a análisis “su alistamiento al servicio de los ejércitos”.<sup>24</sup> Según ese patrón, la guerra contra Afganistán se presentó en los medios como una reedición de la miniserie de la primera guerra del Golfo Pérsico (1991), mediante el despliegue de una elaborada musicalización, diseño gráfico y títulos especiales durante los noticiarios, en los cuales destacó la manipulación de los símbolos nacionales estadounidenses. Una vez más, la aplanadora mediática actuó como un instrumento del gobierno de Estados Unidos. Como resultado, la fusión prensa-propaganda militar logró fijar en el inconsciente colectivo el concepto *bellum justus* (“guerra justa”).

#### CHOMSKY Y LOS ANTECEDENTES DE LA PROPAGANDA MODERNA

Uno de los principales vehículos de la propaganda bélica son los medios de difusión masiva. Pero, como dice Noam Chomsky “los medios son el soporte de los intereses del poder”.<sup>25</sup> A menudo distorsionan los hechos y mienten para mantener esos intereses. Si los medios fueran honestos —sostiene el profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts—, dirían: “Miren, éstos son los intereses que representamos y con esta perspectiva analizamos los hechos. Éstas son nuestras creencias y nuestros compromisos”. Sin embargo se escudan en el mito de la objetividad y la imparcialidad. Pero esa máscara de imparcialidad y objetividad forma parte de su función propagandística.

El tema no es nuevo. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, creó en 1917 el Comité de Información Pública, también conocido como Comisión Creel,<sup>26</sup> que Chomsky describe como la primera agencia oficial de propaganda gubernamental.<sup>27</sup> El comité enmarcado en el concepto de la “ingeniería del consenso” y el control elitista de la sociedad, fue diseñado para manufacturar una campaña de histeria entre la población, con la finalidad de arrastrar a la guerra a Estados Unidos, país que entonces era aislacionista. Ante la ausencia de la radio y la televisión, el comité, que tuvo como “blanco” al auditorio estadounidense e internacional, recurrió a la prensa escrita y al cine.<sup>28</sup> Los directores de los principales medios fueron convocados y se les pidió su ayuda para desinformar y manipular a la opinión pública y contrarrestar la resistencia de la población al conflicto.

Los objetivos planteados fueron los siguientes: 1) Movilizar la agresividad y el odio de la población y dirigirlos contra el enemigo para socavar y destruir su moral. 2) Dinamizar y preservar el espíritu de lucha del propio país. 3) Desarrollar y conservar la amistad de los países aliados. 4) Fomentar la amistad de los países neutrales y, en lo posible, obtener su apoyo y su colaboración durante la guerra.<sup>29</sup>

Uno de los grupos que quedaron impresionados con las nuevas técnicas de

propaganda fue el de los líderes empresariales. Sus dirigentes, dice Chomsky, fueron muy francos: “Tenemos que imponer a la gente una ‘filosofía de la futilidad’ y asegurarnos de que se interesen por ‘las cosas superficiales de la vida’, como por ejemplo el consumo. Deben intentar perseguir lo que se conoce como ‘necesidades imaginarias’, necesidades inventadas. Nosotros crearemos sus necesidades y entonces centraremos su atención en ellas. Así no nos molestarán”.<sup>30</sup> En buen romance, la manufactura de la oferta y la demanda.

Todo el sistema de ideas políticas del imperialismo tiende a argumentar su derecho a la dominación, a la intervención del Estado que se supedita a los monopolios en todas las esferas de la vida, a la manipulación de las masas y a la desinformación de la opinión pública. Según Walter Lippmann, consejero del presidente estadounidense Woodrow Wilson, la labor del público es limitada. No corresponde al público “juzgar los méritos intrínsecos de una cuestión u ofrecer un análisis o soluciones”. El público “no razona, investiga, inventa, convence, negocia o establece”. Por el contrario, “actúa sólo poniéndose del lado de alguien que esté en situación de actuar de manera ejecutiva [...] Es precisamente por ese motivo que ‘hay que poner al público en su lugar’. La multitud aturdida, que da golpes con los pies y ruge, ‘tiene su función’: ser el espectador interesado de la acción”. No el participante. La participación es deber de los hombres responsables.<sup>31</sup>

Harold Lasswell, quien definió la propaganda como el esfuerzo por “maximizar el poder doméstico al subordinar a grupos e individuos y al mismo tiempo reducir los costos materiales del poder”,<sup>32</sup> fue uno de los primeros científicos que trató de argumentar teóricamente esos problemas adaptándolos, además, a las relaciones internacionales. Llegó a declarar con toda franqueza que “la propaganda constituye, junto con la diplomacia, las medidas económicas y las fuerzas armadas, un instrumento de la política total. La propaganda política es la utilización de las comunicaciones masivas en interés del poder [...] El objetivo consiste en ahorrar medios materiales, necesarios para la dominación mundial”.<sup>33</sup>

El mismo principio básico, añade Chomsky, guía a la comunidad empresarial. Cuando el Estado pierde la capacidad de controlar a la población por la fuerza, los sectores privilegiados deben hallar otros métodos para garantizar que “la plebe” sea eliminada de la escena pública. De allí que se pongan en práctica las técnicas de la fabricación del consentimiento y todo un sistema de adoctrinamiento. La función de orientar la obediencia y la formación de la gente sencilla —“la chusma”, ironiza Chomsky— corresponde a los medios de difusión y al sistema de educación pública.

En *Los guardianes de la libertad*, Noam Chomsky y Edward S. Herman esbozan un “modelo de propaganda” que describe las fuerzas que hacen que los medios de difusión masiva, como sistema de transmisión de mensajes y símbolos para el ciudadano medio, desempeñen un papel propagandístico, así como los procesos

mediante los que activan los sesgos y los prejuicios, y la selección de noticias que se derivan de ellos.

La mayoría de las elecciones sesgadas de los medios de comunicación surgen de la criba previa de gente que piensa lo que hay que pensar, de preconcepciones interiorizadas, y de la adaptación del personal a las limitaciones de la propiedad, la organización, el mercado y el poder político. La censura es en gran medida autocensura por un lado de periodistas y comentaristas que se ajustan a la realidad de los requerimientos organizativos de las fuentes y de los medios de comunicación, y por otro de los responsables de alto nivel de dichos medios, que fueron elegidos para poner en práctica las constricciones —que en muchos casos han interiorizado— impuestas por los propietarios y por otros centros de poder, tanto del mercado como gubernamentales.<sup>34</sup>

Los ingredientes esenciales de ese modelo propagandístico, o conjunto de nuevos “filtros”, descritos por Chomsky y Herman, se engloban en los siguientes puntos: 1) La envergadura, la concentración de propiedad, la riqueza del propietario; 2) la publicidad como fuente principal de ingresos de dichos medios; 3) la dependencia de los medios de la información proporcionada por el gobierno, las empresas y los “expertos”,<sup>35</sup> información, por lo demás, financiada y aprobada por esos proveedores principales y por otros agentes de poder; 4) las “contramedidas” y los correctivos diversos como método para disciplinar a los medios de difusión masiva, y 5) el “anticomunismo” (hoy diríamos el “antiterrorismo”) como religión nacional y mecanismo de control. Esos elementos interactúan y se refuerzan entre sí. La materia prima de las noticias debe pasar a través de sucesivos tamices, tras lo cual sólo queda el residuo “expurgado” y listo para publicar. Asimismo, esos elementos determinan las premisas del discurso y su interpretación, la definición de lo que es periodístico y digno de publicarse, y exponen las bases y el funcionamiento de todo cuanto concierne a una campaña propagandística.

Como puede apreciarse, en la sociedad de masas las técnicas de propaganda se van refinando hasta alcanzar el grado de arte, mucho más allá de todo lo que George Orwell podía soñar.

#### LA GUERRA PSICOLÓGICA

Después de la segunda Guerra Mundial, la doctrina de la “guerra psicológica” del Pentágono abrevó de la experiencia nazi. Aunado al uso de las técnicas hitlerianas de propaganda, el ejército estadounidense realizó profundos estudios de las operaciones de contraterrorismo de la Alemania nazi en la Europa ocupada. Asimismo gracias a los consejos de los oficiales de la Wehrmacht, los métodos del nazismo se

convirtieron en los manuales de la contrainsurgencia y la guerra de baja intensidad (GBI). Según Chomsky, allí estaría el origen del terrorismo como arma de los fuertes, como instrumento al servicio de un sistema de poder en el mundo occidental, que él define como “terror benigno” o “terror al por mayor” (a diferencia del terror al por menor, protagonizado por individuos y grupos marginales, cuya violencia es menos extensa tanto en escala como en poder destructivo que la violencia oficial).<sup>36</sup>

En 1949, al comienzo de la Guerra Fría, D. Lerner, funcionario del departamento de propaganda de Estados Unidos, escribió: “Entre los principales cambios a que conduce la transición de la paz a la guerra, figuran: las sanciones se convierten en guerra económica, la diplomacia se convierte en guerra política, la propaganda se convierte en guerra psicológica”.<sup>37</sup> Un año después, el diccionario oficial de términos militares del Pentágono incorporó la siguiente definición: “La guerra psicológica es el uso planificado de medidas propagandísticas por la nación en tiempo de guerra o en estado de emergencia declarado, medidas destinadas para influir en las opiniones, emociones, actitudes y conducta de los grupos extranjeros, enemigos, neutrales o amigos a fin de apoyar la realización de la política y los objetivos nacionales”.<sup>38</sup>

Como señaló Georgui Arbátov, una de las particularidades de la guerra psicológica como tipo o doctrina de la propaganda consiste en que no sólo se plantea el objetivo de cambiar opiniones o influir en la conciencia de los objetos de la propaganda, sino también el de “crear situaciones políticas y psicológicas llamadas a provocar las formas deseables de conducta de la población, sus grupos concretos y hasta la de los gobernantes de otro país”.<sup>39</sup> Así, los intentos de crear y utilizar un acontecimiento como “núcleo de la operación futura” conduce, de por sí, a que la propaganda se acerque no sólo a la política en conjunto, sino también, en particular, a actividades como el espionaje, el sabotaje y la labor de zapa.

En ese sentido, la realización de operaciones clandestinas por los organismos oficiales en el marco de la guerra psicológica está vinculada siempre con el riesgo de que en caso de desenmascaramiento de las mismas se comprometa al gobierno. Por eso, durante la segunda Guerra Mundial, y después en el marco de la confrontación ideológica Este-Oeste, Estados Unidos reforzó el papel de varias organizaciones de propaganda “privada”, entre ellas, el de las agencias informativas Associated Press (AP) y United Press Internacional (UPI), y creó otras como la estación Radio Europa Libre,<sup>40</sup> cuyas transmisiones propalaban rumores falsos o llamaban a actividades hostiles y al sabotaje en el campo enemigo (la Alemania nazi primero, la Unión Soviética y el bloque socialista después), brindando incluso “instrucciones técnicas” sobre “la estrategia de subversiones eficientes” y la “técnica de conspiraciones abiertas”, sirviendo muchas veces de enlace con los elementos opositoristas y contrarrevolucionarios.<sup>41</sup>

No obstante la importancia de los esfuerzos “privados” en la propaganda política

de Estados Unidos, destinados a contribuir a la “liberación” de los países socialistas, en 1953 se creó la Agencia Informativa de Estados Unidos (USIA). Supeditada al presidente de esa nación a través del Consejo de Seguridad Nacional, la USIA se convirtió en el principal aparato oficial de propaganda política en el exterior, con 301 puestos informativos en 111 países.

A su vez, el Departamento de Defensa y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contaban con sus propios servicios de guerra psicológica y sus escuelas de preparación de cuadros propagandísticos. En plena Guerra Fría, el Pentágono contaba con 250 estaciones de radio y 34 de televisión fuera de los límites de Estados Unidos, dedicadas principalmente a la *propaganda negra*, es decir, a actividades subversivas.<sup>42</sup> En los años ochenta, junto con las labores de inteligencia, acción cívica y control de poblaciones, la guerra psicológica formó parte de la GBI, concebida por el Pentágono como una variable de la contrainsurgencia clásica. El conflicto de baja intensidad “es una lucha político-militar limitada para alcanzar objetivos políticos, sociales económicos y psicológicos. Con frecuencia es prolongada y varía desde presiones diplomáticas, económicas y psicológicas hasta el terrorismo y la insurgencia”.<sup>43</sup>

En la nomenclatura militar, el concepto *operaciones psicológicas* está relacionado, generalmente, con objetivos y herramientas que buscan influir en la conducta de la población civil, del enemigo y de la propia fuerza. En situaciones bélicas, la guerra psicológica trata de explotar las “vulnerabilidades” del enemigo y su base de apoyo: miedos, necesidades, frustraciones. Y eso incluye a mujeres y a niños, porque en esa guerra no declarada no hay leyes que protejan a los no combatientes; el terror se utiliza como instrumento político de control de las mayorías, que busca generar dependencia, intimidación e incapacitar cualquier respuesta autónoma de la población organizada.

El manual de operaciones psicológicas de la CIA en Nicaragua (*Omang*, 1985) define la guerra psicológica como un tipo de operación militar que se ha delineado a partir de la segunda Guerra Mundial en una modalidad escogida, de modo preferente, para controlar grandes masas y territorios, sin necesidad de recurrir a otras formas de guerra convencional. El ser humano es considerado el fin prioritario en una guerra política. Concebido como un objetivo militar el punto más crítico del ser humano es su mente. Cuando su mente es alcanzada, el “animal político” ha sido derrotado sin que necesariamente haya recibido un proyectil. El objetivo es la mente de la población civil, de toda la población: “Nuestras tropas, las tropas del enemigo y la población civil”.

Se trata de dominar la voluntad del otro, considerado enemigo. Para lograrlo se acude a medios habitualmente no calificados de guerreros. Entre ellos, la dominación del espíritu. Una de las características de la guerra psicológica es el ocultamiento

sistemático de la realidad.

#### PROPAGANDA BLANCA, GRIS O NEGRA

Para construir la “verdad oficial” se utilizan genéricamente tres tipos de propaganda: blanca, gris o negra.<sup>44</sup> La *propaganda blanca* es aquella que se difunde y se reconoce por la fuente o por sus representantes oficiales; es una actividad abierta, franca, en la que el emisor no oculta su identidad (habla en nombre de su gobierno y se centra en los aspectos favorables de su propio bando), y se disemina de manera amplia. Su debilidad intrínseca nace del hecho patente de ser propaganda enemiga. En el caso del gobierno estadounidense, un ejemplo es la USIA. La *propaganda gris* es anónima. Es decir, no es identificada por su fuente (no lleva firma alguna) y queda librada a la imaginación del público. En ocasiones se le define como “propaganda negra mal disfrazada”. La *propaganda negra* —elaborada con base en “auténticas patrañas”, acompañadas de algunas verdades y otras verdades a medias—<sup>45</sup> es aquella que aduce otra fuente y no la verdadera; esconde su origen detrás de nombres ficticios, o bien, material falso se atribuye a fuentes reales. Para encubrir su origen y sus intenciones se le rodea de ambigüedades, secretos y misterios. Su éxito depende del total ocultamiento de su origen real.

La *propaganda negra* es la más utilizada en las operaciones clandestinas (o encubiertas) de los servicios de inteligencia y, por eso mismo, es principalmente subversiva. Entre otros, ha recibido los nombres de propaganda “camuflada”, “clandestina” o “engañosa”, y su función principal es “desinformar” al enemigo.<sup>46</sup> Por lo general se le canaliza a los medios a través de “filtraciones”. Una fuente “oficial” declara en forma “anónima”, o el medio señala que no puede divulgar el origen de la información.

En la práctica, más allá de su color —blanca, gris o negra—, el 95% del contenido de la propaganda eficaz es verídico. El propagandista espera que el resto, ese 5% vital, oculto por una espesa capa de verdades evidentes, se lo “trague” el destinatario. La credibilidad es la condición inexcusable para que se acepte la propaganda. Algunas veces —y en determinadas coyunturas—, ese 5% de propaganda negra está encubierto en libros por encargo, firmados por algún escritor de prestigio. Un ejemplo clásico contemporáneo es *La hora final de Castro*, de Andrés Oppenheimer, periodista de *The Miami Herald* y Premio Pulitzer 1987 en Estados Unidos, quien de manera anticipatoria narró, en 1992 (!), “la historia secreta detrás de la inminente caída del comunismo en Cuba”.<sup>47</sup>

La guerra psicológica utiliza una caracterización simplista y maniquea (bueno/malo, negro/blanco) para describir al enemigo. El propagandista debe utilizar

las palabras claves capaces de estigmatizar al contrario y de activar reacciones populares. En realidad, de lo que se trata, al utilizar el mito de la guerra, es de satanizar al adversario, arrancarle todo viso de humanidad y cosificarlo, de tal modo que eliminarlo no equivalga a cometer un asesinato. En ese sentido, uno de los objetivos de la propaganda de guerra es sustituir el razonamiento por las pasiones y convencer a la población de la necesidad de participar en una misión purificadora, reivindicadora o justiciera.

#### DE CRIMEA A VIETNAM

La primera guerra que se fotografió fue la de Crimea, en 1860. Pero las imágenes reprodujeron naturaleza muerta, cadáveres o estructuras de defensa. La Guerra de Secesión, en Estados Unidos (el norte contra el sur), fue la primera de la era industrial con participación de masas. Y también la primera guerra contemporánea de los medios de comunicación, prensa y fotografía, de masas. Como señaló Ignacio Ramonet, la coincidencia de la guerra de masas y los medios de masas propició que los estados mayores tuvieran que plantearse cómo intervenir para que la “opinión pública” —los ciudadanos que financiaban la guerra y ponían los soldados, sus hijos— no supiera exactamente lo que pasa en ella, para que no pesara en su conducción.<sup>48</sup> Ese abismo entre lo que percibe la opinión pública y lo que viven los participantes, se acentuó durante la primera Guerra Mundial. Allí se inventaron los llamados *oficiales de comunicación*, que suministraban “información” a los corresponsales de guerra que no tenían acceso al frente ni una percepción directa de lo que estaba ocurriendo. Así, la historia mediática de la guerra de 1914-1918 se basó en la manipulación y en el “lavado de cerebro”.

El modelo se modificó en la segunda Guerra Mundial. Simbólicamente, fue la guerra de la democracia contra el totalitarismo nazi. Por lo tanto, la guerra de “la transparencia y la verdad” contra “la propaganda” de Goebbels y el régimen hitleriano. El Pentágono permitió que los corresponsales acompañaran a sus tropas de avanzada; la idea era que la sociedad tenía derecho a saber con exactitud lo que hacían sus soldados. Pero la lógica estadounidense de que la guerra debe ser tan transparente como la democracia, y de que los medios de masas deben ilustrarla y actuar como “espejo”, sin ningún tipo de filtro, produjo el llamado síndrome de Vietnam.<sup>49</sup> La del sudeste asiático fue la primera guerra filmada para la televisión, pero no en directo.<sup>50</sup> Sin embargo, el impacto de las imágenes en la opinión pública tuvo influencia en la derrota militar, simbolizada por la toma de Saigón en abril de 1975. La *Operación Espejo* de los medios generó un rechazo a la guerra —y a las “razones” que llevaron a hacerla— en la audiencia de Estados Unidos. Los

ciudadanos descubrieron a un ejército cruel e injusto. Vieron a sus soldados realizar ejecuciones masivas de civiles, torturar prisioneros, bombardear aldeas y utilizar armas y defoliantes químicos como el napalm,<sup>51</sup> contra la población vietnamita. En buena medida debido a la televisión, el país no estuvo ya detrás de sus soldados. La guerra se perdió militar y psicológicamente. La noción de la “transparencia” entró en crisis.<sup>52</sup>

La lección de Vietnam fue vivida como una verdadera catástrofe mediática por el ejército de Estados Unidos. El Pentágono y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) aprovecharon las enseñanzas. Aunque los militares no culparon únicamente a los medios de la derrota en el sudeste asiático, quedaron convencidos de la necesidad de canalizar y controlar a la prensa y mantenerla apartada de las operaciones bélicas.

#### DEL MODELO 1989 AL 11S

Durante la primera guerra del Golfo, Estados Unidos introdujo cambios estructurales en la información de masas. Ignacio Ramonet lo llama “Modelo 1989”, derivado de tres acontecimientos mediáticos ocurridos ese año: la revuelta de la Plaza de Tiananmen, en Pekín; la caída del Muro de Berlín, que separaba a las dos Alemanias, y los sucesos en Rumania.

Gracias a la autonomía de la televisión para ir a cualquier parte y transmitir en tiempo real, todo el mundo asistió en directo a la represión de estudiantes chinos por parte del gobierno de Deng Xiaoping. Durante la apertura del Muro de Berlín, Dan Rather, de la CBS, repitió la frase “Están ustedes viendo la historia en marcha”. Hasta entonces, como señala Ramonet, “la relación comunicacional estaba constituida por un triángulo: el acontecimiento, el mediador o periodista y el ciudadano, espectador o lector”.<sup>53</sup> Pero cuando Rather dijo: “Están ustedes viendo la historia en marcha”, proponía una modificación sustancial: que la relación ahora fuera directa entre el acontecimiento y el público; el ciudadano como “testigo” de lo que pasa. En la nueva fórmula, “ver para saber”, el periodista (mediador) desaparece de la relación.

Pasa a ser también “testigo” del hecho. Sólo se cree lo que se ve ya que la imagen es garantía de verdad. Surge así una nueva definición de la información. Sencillamente, informar es hacer asistir al espectador al acontecimiento mediático como *happening*. No hay causas. No hay actores. No hay contexto. No hay memoria. No existe la historia. La realidad ahora se ve como un espectáculo. Las leyes del espectáculo mandan sobre las exigencias y el rigor de la información.

El caso Rumania —“la mayor mentira mediática en la historia comunicacional moderna”, la llamó Ramonet—<sup>54</sup> se nutrió de los otros dos sucesos. Asistimos a la



guerra civil en directo, con base en otra tecnología: el montaje de la realidad y la mentira. No hubo ningún enfrentamiento entre la policía secreta rumana y los defensores de la democracia. Tampoco existieron tropas mercenarias sirias y palestinas que defendían al régimen rumano. Todo fue un montaje. Y se dio un “efecto biombo”: mientras el mundo estaba ocupado en Rumania, Estados Unidos invadía Panamá.

Dos años después, la primera guerra del Golfo se construyó con base en una serie increíble de manipulaciones y falsedades. “Es la suma de las Malvinas, más Pekín, más Berlín, más Rumania. Es el edificio de mentira más impresionante de los últimos tiempos” dice Ramonet. A la censura clásica por amputación (por ejemplo ocultar al público occidental que Arabia Saudita era un régimen autocrático), se añadió la absurda tesis de que Irak tenía el “cuarto ejército” más grande del mundo. Había que movilizar a la opinión pública estadounidense con el fin de obtener consenso para la intervención del Pentágono y dejar atrás al síndrome de Vietnam. Mike Digel, el mejor manipulador de masas de Estados Unidos —el hombre que inventó al mediocre actor Ronald Reagan como jefe de la Casa Blanca—, montó una serie de imágenes de alto impacto que reproducían el “salvajismo” iraquí. Pero fueron imágenes que jamás existieron en la realidad; se filmaron en Nuevo México. Fue un ejemplo de astucia.

El público no siempre logra darse cuenta de la manipulación de los medios. Fue lo que ocurrió en 2001 con la destrucción de las Torres Gemelas. Una vez más, aprovechando la tragedia, los expertos en propaganda y guerra psicológica de Washington lograron imponer su agenda a la audiencia; se impuso de nuevo la información espectáculo, disfrazada de información neutral. Afloró el modelo CNN. Horas y días en los noticieros las imágenes de los aviones estrellándose una y otra vez contra el World Trade Center de Nueva York. “Usted ve la historia hacerse ante sus ojos.” De nuevo la autoabolição del periodista, la ideología del directo. Pero el Pentágono ya había comenzado a fabricar al nuevo Satán, al nuevo Hitler; al bastardo de turno, Osama Bin Laden, una creación de Washington,<sup>55</sup> igual que Leónidas Trujillo en República Dominicana y Manuel Antonio Noriega en Panamá.

El 10 de octubre de 2001, la cadena de televisión CNN difundió la “recomendación” del vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, para abstenerse de difundir imágenes de Bin Laden, ya que los integrantes de Al Qaeda “podrían utilizar los consorcios mediáticos para enviar mensajes codificados”.<sup>56</sup> La preparación del consenso mediático a favor del ataque de Estados Unidos contra Afganistán se observó con precisión en las principales cadenas de televisión estadounidenses: ABC, CBS, CNN, FOX y NBC. Sin embargo, el virtual “bombardeo” de la imagen de Bin Laden tomada de la televisora árabe Al Jazeera<sup>57</sup> rompió con las reglas no escritas de la alta censura en los medios.

La mentira del Pentágono como arma de guerra entraría de nuevo en acción en 2002-2003, durante los preparativos para la invasión de Irak. Con sus historias de terror para promover el miedo, el odio al “otro” y la violencia bélica, el presidente George W. Bush y sus aliados —el “perro de presa” Tony Blair (Chomsky *dixit*) y el jefe del gobierno español, José María Aznar—, apoyados por los grandes medios de difusión occidentales, que explotaron la crisis para incrementar sus *ratings*, obligaron a las naciones de la “vieja Europa” y a otras potencias miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a acatar una nueva agenda política, un “nuevo orden mundial” al margen del derecho internacional.

Finalmente, la invasión se consumó. Pero las razones de la guerra de agresión neocolonialista contra Irak no fueron las patrañas que esgrimieron cada día, durante varios meses, los expertos en propaganda bélica de Washington y Londres.

Los motivos para la devastación de Irak fueron otros: Estados Unidos, la superpotencia imperial, vio amenazada su hegemonía. Según reveló un informe de la llamada comunidad de inteligencia de ese país, denominado *Tendencias globales al 2015: diálogo con expertos no gubernamentales acerca del futuro*,<sup>58</sup> de los escenarios posibles, el imperio temía que surgiera una alianza entre Alemania, Francia y Rusia que lo desplazara del liderazgo mundial. Además, veía muy peligrosa la irrupción de China en el escenario internacional; un eventual resurgimiento de Japón y, potencialmente, el papel que pudiera jugar India. Por eso, obsesionados con sus fantasías de poder mundial, Bush y los fundamentalistas genocidas de su entorno (Cheney, Rumsfeld Rice, Ashcroft, Ridge, Powell y los cabilderos sionistas Wolfowitz Perle, Feith y Bolton), junto con sus hombrecitos de paja en la “vieja Europa” (Blair, Straw y el neofranquista Aznar), querían reconfigurar el mapa geopolítico del Golfo Pérsico y todo el Medio Oriente.

Los verdaderos enemigos no eran Osama Bin Laden y Hussein. Tampoco el islam. Desde el 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos estuvo mintiendo todo el tiempo. La operación de *tierra arrasada* en Afganistán fue un gran montaje preparado por el Pentágono. Entonces, como ya apuntamos, el gran Satán era el viejo socio de la CIA, Bin Laden. Según señalaron entonces *The New York Times* y *La Jornada*, como parte de la guerra psicológica y las operaciones encubiertas diseñadas por expertos en inteligencia militar en el marco de la guerra contra el terrorismo, la nueva Oficina de Influencia Estratégica, creada por el Pentágono después del 11 de septiembre “plantaría” *propaganda negra* (mentiras deliberadas), desinformación y *propaganda blanca* (información verídica y creíble favorable a Estados Unidos y sus objetivos), en periodistas y medios extranjeros, para influir en la opinión pública internacional y en la de gobiernos amigos y enemigos.<sup>59</sup>

En un intento por calmar el escándalo provocado por las versiones según las cuales Washington planeaba una estrategia de desinformación deliberada, el secretario de Defensa, Rumsfeld, aclaró que el Pentágono decía “la verdad”. Pero no descartó la posibilidad de que, para engañar al enemigo, Estados Unidos apelara a “tácticas de manipulación”.<sup>60</sup> Sin embargo, ante la reacción que generó en el seno de Estados Unidos el establecimiento de esa oficina de corte orwelliano-totalitario, Rumsfeld tuvo que cerrarla. Pero Washington persistiría en lo mismo por otras vías. Una de ellas, la Unidad de Guerra Psicológica Mundial del Ejército, en particular el ala de operaciones especiales 193, con vasta experiencia en operaciones secretas en Vietnam, Corea del Sur, Puerto Rico, Arabia Saudita Egipto, Kuwait, Panamá y Afganistán.<sup>61</sup>

#### HUSSEIN Y LAS ADM: ¿MONTAJE O REALIDAD?

Desde septiembre de 2002, cuando arreciaron las presiones político-diplomáticas de Estados Unidos sobre los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, con la finalidad de obtener una resolución que autorizara una acción armada en Irak, Bush y sus expertos en *trucos sucios* —con la complicidad del británico Tony Blair— comenzaron a instrumentar la nueva ofensiva propagandística hollywoodense, con Saddam Hussein en el papel de villano mediático en sustitución del siempre oportuno Bin Laden, y con el pretexto de las armas de destrucción masiva —municiones químicas,<sup>62</sup> bacteriológicas<sup>63</sup> y nucleares con las que supuestamente contaba el gobierno iraquí— como principal justificación. Otro de los “argumentos” de fondo de la campaña de histeria mediática estadounidense fue el de los presuntos vínculos de Hussein con el grupo islamista Al Qaeda, el propio Bin Laden y otras organizaciones terroristas, a las cuales podría proveer “armas prohibidas”.<sup>64</sup>

Washington y Londres nunca presentaron pruebas de que Irak poseía armas de destrucción masiva (ADM); tampoco documentaron los presuntos nexos de Hussein con el “terrorismo internacional”. Durante más de 10 años, un equipo de inspectores de la Unscm —la Comisión Especial de las Naciones Unidas creada el 3 de abril de 1991 a partir de la resolución 687 del Consejo de Seguridad— verificó en territorio iraquí la eliminación de sus ADM, así como las plantas de producción, laboratorios y programas relacionados con las ADM. Según Scott Ritter, un ex infante de la Marina estadounidense, republicano y bushista, quien durante siete años se desempeñó como jefe de inspectores de la Unscm, “Irak había quedado desarmada por completo en 1998”, año en el que él renunció a la comisión debido en parte a que su director, el australiano Richard Butler, “permitió que fuera utilizada por la CIA y por otras agencias de inteligencia para espiar a Irak”, al margen del mandato de la ONU.<sup>65</sup>

El diabólico Hussein —quien fue uno de los ejes de la guerra psicológica a través de los medios— estaba “a punto” de fabricar armas atómicas. La “información” fue “confirmada” el 24 de septiembre de 2002 por el director de la CIA, George Tenet, durante una sesión secreta del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. El jefe de la agencia dijo entonces que “se había interceptado un cargamento de tubos de aluminio de alta resistencia”. También reveló que Irak había tratado de comprar a Níger 500 toneladas de óxido de uranio (*yellow cake*), una sustancia que puede procesarse para fabricar el uranio que se utiliza en la producción de armas nucleares. Sin embargo, el 7 de marzo de 2003, el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), Mohammed el Baradei, declaró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los documentos sobre la transacción de uranio entre Níger e Irak eran falsos. A pesar de lo anterior, el secretario de Estado, Colin Powell protagonizaría después, en Naciones Unidas, un ridículo *show* multimedia con el que trató de convencer al mundo, con fotos de satélite muy borrosas, sobre la existencia de las supuestas fábricas de armas químicas y nucleares iraquíes.

Durante todo el periodo que concluyó con la invasión a Irak, y aún después, la reportera de *The New York Times*, Judith Miller, fue una pieza clave en la orquestación de la campaña de desinformación masiva, monitoreada directamente por el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, uno de cuyos objetivos era explotar el temor del público estadounidense para obtener un consenso favorable a la guerra de agresión contra Irak. El propio subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz, confesaría después, sin rubor, que el argumento de eliminar las ADM en Irak había sido un pretexto y no un fin. “La verdad es que por razones que tienen mucho que ver con la burocracia gubernamental de Estados Unidos, elegimos una razón central [para la guerra], con la que todos estábamos de acuerdo, que eran las armas de destrucción masiva.”

La inducción de una guerra de rapiña “legitimada” por el mesianismo del Destino Manifiesto —“santurronería religiosa”, llamó John Le Carré a la “guerra sagrada” de Bush contra Irak—, con el fin de agitar las fibras patriotas y paranoicas del “rebaño” imperial —viejo recurso para la “construcción del consenso”—, se combinaba ahora, como en la época del macartismo,<sup>66</sup> con la psicosis y el terror interno ante el ataque “inevitable” y siempre “inminente” de los “terroristas” de afuera (Al Qaeda), provistos —afirmaba la propaganda de guerra de Washington— de armas biológicas, químicas nucleares y radiológicas. Una forma totalitaria de mantener a raya a la “chusma”,<sup>67</sup> mediante una “guerra de nervios” (*USA Today*) administrada por el *gran Hermano* (el procurador general de Estados Unidos, John Ashcroft) a través de códigos naranja, amarillo y rojo en las pantallas de los televisores.<sup>68</sup>

Estados Unidos se convirtió en un Estado policial hacia dentro —un Estado de características orwellianas, en el que un “verdadero *Big Brother*” con poderes excepcionales vigila desde entonces a la sociedad estadounidense—<sup>69</sup> y en una nación imperial hacia fuera, que a partir de enero de 2003 contó con un Centro de Integración de la Amenaza Terrorista, a cargo del director de seguridad interior, Tom Ridge, y una Oficina de Comunicaciones Globales, cuya función fue promover los intereses de Estados Unidos en el extranjero, reforzar el apoyo de los gobiernos aliados (que “cooperan” con Washington) e “informar” a la audiencia internacional sobre los propósitos de la Casa Blanca, para “prevenir” malentendidos. La orden ejecutiva firmada por Bush el 21 de enero de 2003 preveía, también, que la “oficina de imagen” podría enviar “equipos de comunicadores” a aquellas áreas donde existiera “alto interés” mundial y que acapararan la atención de los medios de comunicación. Se trataba, pues, de dar coherencia al mensaje “libertario” de Bush; de transmitir la “verdad” en el extranjero. En el lenguaje de George Orwell, de difundir la mentira organizada.

#### EMBRIAGUEZ CHOVINISTA<sup>70</sup>

Como toda guerra de agresión imperialista, la de Estados Unidos contra Irak contuvo, entre otros, tres importantes elementos: violencia, polarización y mentira. La utilización de la violencia no es atribuible tanto a pulsiones destructivas o a personalidades psicopáticas (se ha dicho que George W. Bush expresó durante sus dos mandatos una conducta de tipo paranoide, con delirio de grandeza y mesianismo, y al respecto Gore Vidal lo describió como un “maniático”<sup>71</sup> que aplicó una “política sicótica”),<sup>72</sup> cuanto a su valor instrumental para conseguir un objetivo planificado por la fracción gobernante mucho antes de la caída de las Torres Gemelas: la recomposición geopolítica del planeta mediante el poder militar para garantizar la hegemonía imperial amenazada por otras potencias de Europa y Asia.

En Irak, la violencia militar de Estados Unidos quedó exhibida de manera descarnada. Toda guerra desata una maquinaria para producir muerte, mutilaciones, sufrimiento y destrucción. Supone una polarización aguda; un desquiciamiento de grupos hacia extremos opuestos. Por eso, todo acto bélico debe ser presentado a la opinión pública como una *guerra justa*. Pero debido a que no se pueden revelar los auténticos intereses e intenciones de quienes la promueven (por ejemplo, el *holding* del Grupo Carlyle, Chevron-Texaco, Arbusto Energy, Halliburton, etcétera) ni someterla a escrutinio, se necesita “fabricar un consenso” (Walter Lippmann).

La propaganda, repetimos, es el principal procedimiento de acción psicológica e incluye la manipulación y el uso de la mentira intencional en el discurso público.

Consiste en el empleo deliberadamente planeado y sistemático de temas, principalmente a través de la *sugestión compulsiva* y de técnicas psicológicas afines, con el propósito de alterar y controlar opiniones, ideas y valores, mediante la exacerbación del miedo y el odio en la población. En última instancia, supone cambiar las actitudes manifiestas según líneas predeterminadas. Concebido como un objetivo militar, el punto más crítico del ser humano es su mente.

Se puso al país en guardia contra la “conspiración” de los de afuera. Los nuevos “bárbaros” que querían destruir la “democracia occidental” y acabar con el “mundo libre”. El terrorismo se personalizó en el Islam y el mundo árabe. Se enfrentó al “Dios bueno” de Bush con el “Alá malo” de los islámicos. Con base en la desconfianza y el temor se tejió una forma de relación predominantemente defensiva —que en realidad es ofensiva—, que llevó a la imposición-aceptación de una Ley Patriótica totalitaria, con algunos rasgos de corte nazi-fascista.

Simplemente, la persuasión y la manipulación ideológicas cambiaron de “árabe”. Con base en repeticiones y exageraciones, los propagandistas explotaron el sentimiento nacional patriótico. Se atizó la embriaguez chovinista. Reaparecieron el Destino Manifiesto y otros mitos y exaltaciones retóricas. Bush, el gran gesticulador, se envolvió en un mesianismo fundamentalista *ad hoc*. Sembró en la población la disposición al sacrificio. Y finalmente obtuvo el “consenso” que necesitaba para embarcarse en otra guerra de conquista imperial. De la primera fase de muerte y destrucción, después se pasaría a la etapa de los negocios de reconstrucción... hasta la próxima guerra.

#### EL SONADO MEA CULPA DE *THE NEW YORK TIMES*

Sin duda, el año 2003 no iba a ser el más glorioso en la historia de los medios de prensa estadounidenses. Según el historiador Alan Brinkley, decano de la Universidad de Columbia, célebre por su escuela de periodismo, se asistía a una “domesticación” de los medios, como parte de un fenómeno estructural, no transitorio.<sup>73</sup> Una vez más, como en los tiempos de McCarthy, Nixon y Reagan, los medios de difusión habían sido víctimas de manipulaciones y presiones gubernamentales, y dejando a un lado la crítica, habían “calentado” a la opinión pública con su patriotismo a ultranza.

Uno de los principales promotores del “miedo en las sombras” del que hablaba Wolin fue el venerable *The New York Times*, el diario donde el legendario Abe Rosenthal solía apuntalar sus arengas sobre ética periodística con una frase lapidaria: “En este negocio, sólo hay una cosa que se puede hacer cuando uno se equivoca: sacarlo a la luz tan pronto como se pueda”.

La anécdota había sido narrada por el ex editor del periódico Howell Raines, quien tuvo que renunciar en diciembre de 2003 como consecuencia del escándalo Jayson Blair, que hace alusión al periodista que durante meses publicó decenas de artículos basados en plagios e inventos.<sup>74</sup> Sin embargo, su sucesor, Bill Keller, tampoco tomó en cuenta el consejo del viejo Rosenthal, a pesar de las crecientes críticas de otros medios como *The Nation*, *Slate*, *The Columbia Journalism Review* y *The American Journalism Review*, sobre la cobertura del *The New York Times* respecto de las presuntas ADM en Irak. El diario neoyorquino demoraría un año en aceptar un sonoro *mea culpa*.<sup>75</sup>

En su edición del 26 de mayo de 2004, en la página 10, en un artículo firmado por “los editores”, el *Times* admitió que varias notas de su cobertura sobre los prolegómenos de la invasión y la primera fase de la ocupación no fueron revisadas de manera “rigurosa” y que información controvertida había sido “insuficientemente” evaluada o puesta en duda. En particular, los artículos problemáticos tenían que ver con las ADM y los presuntos vínculos de Saddam Hussein con Al Qaeda y el terrorismo.<sup>76</sup> Todos compartían un denominador común: sus fuentes habían sido un grupo de informantes iraquíes desertores y exiliados, directamente interesados en un “cambio de régimen”, encabezados por el no menos polémico Ahmad Chalabi quien proveía información a *The New York Times* desde 1991 y que era, también, uno de los personajes “preferidos” del ala dura de la administración Bush y las agencias de inteligencia (recibía 300 000 dólares al mes de la CIA),<sup>77</sup> cuya credibilidad fue duramente cuestionada desde el principio de la invasión.

En una muestra de aparente ingenuidad que, por cierto, cuestionaba la tan pregonada profesionalidad del *Times*, los editores anotaron que el tema “se complicaba” para los periodistas, porque las informaciones eran “confirmadas por oficiales de Estados Unidos convencidos de la necesidad de intervenir en Irak”. El diario se negó a echarle la culpa a un reportero en particular y atribuyó más responsabilidad a los editores, que debieron ser más “escépticos” en lugar de apresurarse a “ganar el *scoop* [la primicia informativa]”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Para el analista de medios William E. Jackson Jr., el *mea culpa* llegó tarde y mal, porque la carta editorial apareció perdida en la página 10, sin llamado de portada y sin hacer referencia alguna a Judith Miller, reportera estrella ganadora del premio Pulitzer y corresponsal de asuntos de inteligencia quien “escribió o coescribió cuatro de los seis reportajes más conocidos citados por el *Times*”.<sup>78</sup>

Según Jackson Jr., Miller no era una novata en el oficio y debió haber protegido al *Times* de los evidentes conflictos de interés. Sin embargo, usando como fuente a Chalabi y sus supuestos vínculos con funcionarios del Pentágono, hizo pensar al lector “que no había dudas de que había ADM en Irak antes de la guerra, así como que

serían descubiertas durante la guerra o poco después de la invasión”. Pero sobre todo le “sorprendió” que la nota editorial con la rectificación del diario no reconociera plenamente que “el *Times*, como institución, permitió que se volviera indistinguible la diferencia entre las afirmaciones de la administración Bush y los propios reportajes del periódico”. Para Jackson Jr., el diario líder de los medios estadounidenses nunca reconoció su “responsabilidad” en el camino hacia la guerra.

Antes de que el *Times* admitiera sus pifias, Michael Massing dirigió duras críticas a la cobertura del periódico, en particular al trabajo de Miller, atribuyendo “la sumisión de la prensa” al “clima político nacional” y a la habilidad de la administración Bush para “controlar el flujo de información”.<sup>79</sup> Ya desde hacía varios años, en un extenso artículo en *The New York Review of Books*, de febrero de 1979, Massing había dicho que el gran problema de la prensa estadounidense era su mentalidad de “manada”: una tendencia orgánica a no discrepar demasiado del consenso prevaleciente.

Otro caso singular fue la renuncia forzada de Jack Kelley, corresponsal estrella de *USA Today*, el segundo diario de mayor circulación en Estados Unidos. En marzo de 2004, el diario del imperio mediático Gannet acusó a Kelley —cinco veces aspirante al premio Pulitzer— de haber fabricado al menos ocho historias en un periodo de seis años, mentido abiertamente en notas de portada y utilizado párrafos plagiados de otros medios sin citar fuentes.<sup>80</sup> La editora en jefe, Karen Jurgensen, y otros dos editores dimitieron un mes después.<sup>81</sup>

Otra baja, pero con distinto fundamento, fue el despido del legendario corresponsal de guerra de origen neozelandés, Peter Arnett, de las cadenas de televisión NBC y MSNBC, y del *National Geographic Explorer*. Durante una entrevista con la televisión oficial iraquí, Arnett —ganador del premio Pulitzer en 1966 por su cobertura de la guerra de Vietnam y quien recobraría fama por sus trabajos para CNN durante la primera guerra del Golfo— criticó la estrategia militar del Pentágono para la toma de Bagdad y fue despedido el 31 de marzo de 2003. Neal Shapiro, presidente de la NBC, consideró incorrecto que Arnett hiciera declaraciones a una televisora “controlada por el Estado [iraquí], especialmente en tiempo de guerra”.<sup>82</sup> Ése fue su Waterloo, y así lo contó después el propio Arnett en el periódico británico *Daily Mirror*.<sup>83</sup>

#### CASO PLAME: ¿VENDETTA DE LA CASA BLANCA?

No eran los mejores días del periodismo estadounidense. Sin embargo, la saga del caso Miller no acabaría allí. El 30 de mayo de 2004, el representante de los lectores del *New York Times*, Daniel Okrent, volvería sobre el tema en una nota titulada “¿Armas



de destrucción masiva o de distracción masiva?” Según Okrent, los editores del *NYT* habían brindado una inadecuada explicación de las razones y prácticas que condujeron “cuesta abajo” al diario.<sup>84</sup> Para él, la falla no había sido individual sino institucional. Entre los factores que enumeró como fuente de los errores en la cobertura de la invasión a Irak, citó la ansiedad por las primicias, el “síndrome de la primera plana” y el uso de fuentes anónimas.

Okrent reconoció que muchos artículos nunca habrían sido impresos de tener que identificar la fuente. Al respecto, dijo que el periódico debía convencer a sus lectores por qué creía que la fuente que no identificaba le estaba diciendo la verdad. Y añadió que la respuesta automática del editor “no estamos confirmando lo que la fuente dice, sólo lo estamos consignando”, únicamente correspondía a planteos hechos *on the record*, porque aplicada a la información proveniente de fuentes anónimas constituye “una licencia para mentir”.<sup>85</sup>

El tema de las fuentes y la confidencialidad cobrarían nuevo brío a comienzos de 2005, a raíz de la investigación del fiscal federal especial, Patrick Fitzgerald, sobre la filtración periodística de la identidad de la agente encubierta de la CIA, Valerie Plame, dos años antes. El 15 de febrero, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos anuló el derecho de mantener confidenciales las fuentes de reporteros en una investigación criminal federal.<sup>86</sup> El fallo de los jueces estableció que la Primera Enmienda (de la Constitución sección que se refiere a la libertad de expresión) no “privilegia” ese secreto profesional. La resolución estaba destinada a rechazar el argumento de dos reporteros, Matthew Cooper, de la revista *Time* y Judith Miller, del *New York Times*, que se habían negado a revelar al fiscal Fitzgerald quién o quiénes les habían proporcionado la información sobre Plame.

De acuerdo con la Ley de Protección de las Identidades de Inteligencia de 1982, la puesta al descubierto de la identidad de un agente clandestino de manera intencional, constituye un delito serio punible con una multa o prisión. La pena es mayor si el oficial exhibido forma parte del Directorio de Operaciones (do) y trabaja como agente infiltrado.

La identidad de Valerie Plame había sido revelada por el comentarista conservador Robert Novak en una columna publicada el 14 de julio de 2003, en la cual citó como fuente a “dos altos funcionarios” gubernamentales. Todo apuntaba al círculo íntimo de Bush en la Casa Blanca. Lo curioso es que Judith Miller, objeto de las indagaciones del fiscal Fitzgerald, investigó el tema pero nunca escribió una línea sobre el asunto.

En realidad, el origen del escándalo habían sido 16 palabras (en la frase en inglés) pronunciadas por Bush en su informe sobre el “estado de la nación”, el 28 de enero de 2003, cuando afirmó que “el gobierno británico se ha enterado de que Sadam Hussein buscó recientemente cantidades significativas de uranio en África”.<sup>87</sup> El 6 de

julio siguiente, el esposo de Plame, el embajador (retirado) Joseph Wilson, publicó un artículo de opinión en *The New York Times* titulado “Lo que no encontré en África”, donde reveló que en febrero de 2002 había sido enviado a Níger, siguiendo instrucciones del vicepresidente Dick Cheney a la CIA, para investigar si Irak estaba intentando comprar uranio *yellowcake* para un programa de armas nucleares. La orden de Cheney tenía como base información de inteligencia “buena y confiable”, contenida en documentos con membrete del gobierno de Níger. Pero a su regreso a Washington Wilson reportó que las versiones sobre el plan nuclear de Hussein carecían de fundamento. El artículo provocó una tormenta política en la Casa Blanca, ya que Wilson dijo que se sentía obligado a revelar su viaje secreto a la ex colonia francesa en el corazón del África, porque Bush había incluido la acusación contra el régimen de Hussein en un discurso público en cadena nacional, a pesar de que sabía que no existían pruebas.

Para entonces, a pesar de que un año antes, el 7 de marzo de 2002 el jefe de la AIEA, Mohammed El Baradei había informado al Consejo de Seguridad de la ONU que los documentos de Níger eran falsos, éstos se habían convertido en el caballo de batalla de la administración Bush para justificar la invasión a Irak, que se insinuaba ya como un desastre prolongado y mal planeado.<sup>88</sup> Cheney, Rice, Rumsfeld, Powell Wolfowitz y hasta el propio Bush habían lanzado una intensa campaña de relaciones públicas donde insistieron, testimoniaron y juraron que tenían inteligencia confiable, creíble y verificada, que indicaba que Saddam Hussein estaba a punto de fabricar armas de destrucción masiva a partir de la adquisición de la “torta amarilla” en Níger. En tales circunstancias, el anticlimático Wilson puso en una situación embarazosa al gobierno, porque advirtió que Bush y su entorno estaban “mintiendo” de manera consciente a la población estadounidense sobre los motivos de la invasión a Irak. “¿En qué otras cosas podrían estar mintiendo?”, preguntó Wilson.

En medio de la controversia, el 14 de julio de 2003 apareció la columna de Robert Novak en el *Chicago Sun Times* y otras publicaciones, donde reveló: “Wilson nunca trabajó para la CIA, pero su esposa, Valerie Plame, es una operativa de la Agencia para temas de armas de destrucción masiva. Dos altos funcionarios del gobierno me dijeron que la esposa de Wilson sugirió que lo enviaran a Níger a investigar...” De inmediato, la divulgación de la identidad de Plame que terminó con su carrera de espía encubierta, fue vista como una *vendetta* política de la Casa Blanca contra Wilson. En lugar de emprender la retirada, Wilson pasó a la ofensiva. En septiembre, en diversos editoriales y entrevistas, denunció de manera exhaustiva el uso criminal de los documentos falsos por la administración Bush y las mentiras de Cheney sobre la “misión” en Irak.

Para 2003, el origen de los documentos de Níger era motivo de múltiples interpretaciones. Según un despacho de Associated Press del 13 de julio, los papeles falsificados fueron entregados por fuentes desconocidas a una periodista del *Corriere della Sera*, que los puso en manos del Servicio de Inteligencia Italiano, que a su vez los canalizó a la embajada de Estados Unidos en Roma. Una versión similar fue manejada por Seymour Hersh en *The New Yorker*. Según ambas, los documentos fueron fabricados no más de tres meses y medio después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Pocos meses antes del despacho de AP, el 8 de marzo de 2003, *The Washington Post* presentó una historia diferente. Citando “círculos informados”, el diario señaló que los documentos falsificados contenían “errores burdos” y habían sido entregados a inspectores de la ONU por Gran Bretaña. La información agregaba que la CIA también había obtenido los documentos, y tras una exhaustiva revisión dudaba si “eran exactos”, por lo que decidió no incluirlos en su archivo sobre el programa de Irak para obtener armas de destrucción masiva. En un artículo complementario, el 13 de marzo, *The Washington Post* citó a un “alto funcionario” que dijo que estaban tratando de determinar si los documentos habían sido falsificados para tratar de “influnciar” la política de Estados Unidos, o “como parte de una campaña de desinformación dirigida por un servicio de inteligencia extranjero...”.

Un dato que pasó casi inadvertido entonces fue consignado en otro despacho de AP el 14 de marzo de 2003, pocos días antes de la invasión a Irak:<sup>89</sup> Jay Rockefeller, el más importante demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado y miembro de la dinastía petrolera vinculada a la Standard Oil, solicitó una investigación al FBI sobre el origen de los documentos de Níger. Dos días después, el *Boston Globe* informó que el senador trataba de determinar si funcionarios de la administración Bush habían falsificado los documentos para obtener apoyo ciudadano y del Congreso para la invasión a Irak. Finalmente, la eliminación de las ADM fue la base exclusiva para que el Congreso le aprobara a Bush el recurso de la fuerza.

Otro bombazo informativo fue lanzado por Seymour Hersh en un artículo publicado en el *New Yorker*, titulado “The Stovepipe”.

Citando a un antiguo alto oficial de la CIA, Hersh escribió que “alguien” había permitido de manera deliberada que “algo falso” fuera introducido en los papeles atribuidos al gobierno de Níger. Según su fuente, los documentos fraudulentos fueron confeccionados por un pequeño grupo de agentes clandestinos retirados de la CIA.<sup>90</sup>

La versión de Hersh llevó a Michael C. Ruppert, director de From the Wilderness Publications, a consignar que la CIA “se estaba defendiendo”. Según él, “se trataba de una bien orquestada operación clandestina a largo plazo, exactamente lo que la CIA hace en todo el mundo”. ¿Pero de qué o de quién se defendía la CIA? De acuerdo con Ruppert, de los daños que, con la invasión a Irak, los neoconservadores que rodeaban

a Bush estaban ocasionando a las grandes corporaciones y a los banqueros de Wall Street. De allí que el director de la agencia, George Tenet, hubiera advertido a Bush que no utilizara los documentos de Níger, argumentó Ruppert.<sup>91</sup>

Según Ruppert, la filtración de Novak no sólo había puesto al descubierto la identidad de Plame sino también la de la compañía *pantalla* que le servía de cobertura, Brewster, Jennings & Associates, vinculada a la American Oil Company, el mayor grupo petrolero del mundo, propiedad de la familia real saudí. La Brewster Jennings era lo que en la jerga de la comunidad de inteligencia se conoce como coberturas no oficiales (NOC) y por definición Plame era una NOC en un país de importancia estratégica para Washington. Pero a diferencia de otras NOC que temen quedar al descubierto por la represalia de gobiernos hostiles, ella había sido destruida debido a una “venganza personal” por alguien dentro de la Casa Blanca,<sup>92</sup> lo que fue visto dentro de la compañía como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Ésa sería la razón, a su vez, por la cual el fiscal Fitzgerald ordenó a sus investigadores que interrogaran al presidente Bush sobre la filtración del nombre de la agente Plame. Si Bush supo de la revelación del nombre de la agente encubierta a periodistas en un intento por desacreditar a su esposo, crítico de su administración, y no actuó para impedirlo, podía haber incurrido en una acción criminal.

#### JUDY MILLER: ¿DE HEROÍNA A VILLANA?

En ese contexto, el caso Plame envolvería en una suerte de tragedia griega a dos poderosos “cerebros” de la Casa Blanca: Karl Rove considerado el principal artífice de la reelección de Bush, y Lewis Libby, jefe de equipo del vicepresidente Dick Cheney. Según la revista *Newsweek*, Rove fue la fuente que reveló información clasificada (la identidad de Plame) al reportero de *Time*, Matt Cooper.<sup>93</sup> La versión, con base en el testimonio de dos abogados del caso estaba contenida en correos electrónicos y anotaciones en la libreta de Cooper, donde aparecía el nombre del principal asesor político de Bush, que habían sido enviados por la revista *Time* al Gran Jurado, luego de que Rove liberara al reportero del acuerdo de confidencialidad. El testimonio de Cooper le evitó purgar 120 días de cárcel y 1 000 dólares diarios de multa.

Su colega Judith Miller no corrió con la misma suerte. El 6 de julio de 2005 la corresponsal de *The New York Times* especializada en seguridad nacional y Medio Oriente comenzó a cumplir una condena de cuatro meses por desacato en una celda del Centro de Detención Alexandria, en Virginia, por desafiar la orden judicial de divulgar ante un Gran Jurado el nombre del funcionario que había destapado la identidad de Plame.<sup>94</sup> En la corte, Miller, de 57 años, se acogió al derecho a la

desobediencia civil. Con voz entrecortada, dijo: “Si no se puede confiar en los periodistas para garantizar la confidencialidad, los periodistas no pueden funcionar y no puede haber prensa libre”.

Luego, dirigiéndose al magistrado, añadió: “No quiero ir a la cárcel y espero que no me envíe. Pero creo que no tengo otra opción”. El juez federal Thomas Hogan rechazó su argumento y consideró que la fuente anónima de Miller “potencialmente cometió un crimen”.<sup>95</sup>

Lo paradójico del caso fue que mientras el columnista Robert Novak, quien dio a conocer el nombre de Plame, estaba libre, la reportera de *The New York Times*, que habló con su fuente pero no publicó nada sobre la agente de la CIA, compartía ahora el penal con el supuesto “aeropirata número 20” del 11S, Zacarías Moussaïou.<sup>96</sup> No obstante, en esa coyuntura hubo quienes sugirieron que la prestigiosa reportera del *Times*, quien había escrito una serie de artículos sobre el supuesto arsenal nuclear iraquí, podría estar buscando el medio para componer su dañada reputación.<sup>97</sup>

Miller pasó 12 semanas en prisión. El 29 de septiembre de 2005 fue liberada tras recibir lo que ella misma describió como “luz verde” de parte de su fuente, que le dijo que no estaba atada a ningún compromiso de confidencialidad con él.<sup>98</sup> Un día después rompió el silencio ante un Gran Jurado y quedó identificada la fuente que había protegido a costa de perder su libertad: Lewis Scooter Libby,<sup>99</sup> jefe de gabinete del vicepresidente Cheney.

A su salida del tribunal, tras testificar por más de tres horas ante el jurado del fiscal Fitzgerald, Miller dijo que había pasado 85 días en prisión por su “convicción” sobre la importancia de preservar la relación confidencial que los periodistas tienen con su fuente.<sup>100</sup> Su proyección como una heroína que se sacrificó por la causa de la libertad de expresión fue ponderada e impulsada por los directores de *The New York Times* y de otros medios y organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos y en el mundo occidental.

Sin embargo, su alegato y su profesionalismo fueron descalificados por algunos colegas del *Times* y del gremio periodístico, que si bien estuvieron a favor del principio de proteger fuentes confidenciales, la identificaron como ariete de la estrategia de propaganda de Bush para promover la invasión a Irak y no como una defensora de la libertad de expresión. Gabriel Moysen, por ejemplo, se refirió al “confuso esfuerzo por lavar su conciencia en *The New York Times*”.

Según Moysen, lejos de ser una mártir del periodismo, Miller había cobrado fama como “gatillera de los neocons”, al propalar en el *Times*, sin ningún pudor, otras mentiras que allanaron el saqueo al país árabe, como las armas de destrucción masiva, prestándose a la manipulación, entre otros, de Ahmed Chalabi, apátrida a sueldo de la CIA y en ese momento vicepremier interino iraquí.<sup>101</sup>

A su vez, Frank Rich, columnista de *The New York Times*, argumentó que el asunto

Rove/Libby revelaba no sólo “una pequeña conspiración de venganza” contra un crítico del gobierno de Bush sino que más bien exhibía “la gran conspiración” de los jefes de ambos, el presidente Bush y el vicepresidente Cheney, para llevar a Estados Unidos a la invasión a Irak con “pretextos inventados”.<sup>102</sup> Según Rich, esa conspiración había iniciado en agosto de 2002 cuando la administración Bush organizó algo llamado “Grupo Irak de la Casa Blanca”, integrado por Rove, Libby, el entonces jefe de gabinete Andrew Card, Condoleezza Rice, quien se convertiría en secretaria de Estado, y las asesoras presidenciales de relaciones públicas, Karen Hughes y Mary Matalin, con un solo objetivo: vender una guerra contra Irak al público estadounidense.<sup>103</sup>

#### SCOOTER LIBBY, CHIVO EXPIATORIO

En esos días, mientras el desbarajuste de Miller y su falta de ética profesional exhibía el enredo interno de los editores del *Times*, una eventual acción legal del fiscal Fitzgerald en contra de la Casa Blanca pudo haber significado el principio del fin de la administración Bush. Incluso, en el marco de las críticas por las distorsiones de “inteligencia” y los engaños y las manipulaciones sobre la desastrosa invasión a Irak, surgía una creciente división en la cúpula política republicana. El final del silencio por lealtad pareció llegar cuando el coronel Lawrence Wilkerson, brazo derecho del secretario de Estado, Colin Powell, denunció que el secretario de Defensa, Rumsfeld, y el vicepresidente Cheney habían creado una “camarilla” que tenía secuestrada la política exterior de Estados Unidos.<sup>104</sup> Wilkerson, un *marine* con 31 años de carrera, quien se había desempeñado como jefe de equipo del Departamento de Estado hasta principios de 2005, advirtió que la política exterior del país estaba “destruida”. Citó como ejemplo las posiciones de Washington respecto del Protocolo de Kyoto y las convenciones de Ginebra. El militar no era el único en romper con el gobierno. También el ex asesor de seguridad nacional de la administración Bush padre, Brent Scowcroft cuestionó la invasión a Irak y denunció a Cheney como la “verdadera anomalía” en la Casa Blanca.<sup>105</sup>

El 28 de octubre, después de 22 meses de pesquisas, el fiscal especial Patrick Fitzgerald acusó de manera formal a Lewis Libby de obstrucción de la justicia, perjurio y declaraciones falsas. Fitzgerald demostró que Libby había sido el comienzo de una cadena de conversaciones telefónicas que derivó en la divulgación pública del nombre de la agente Plame a través de los medios de difusión masiva. “Después mintió, bajo juramento, repetidamente”, aseveró Fitzgerald.<sup>106</sup> Reveló, también, que Libby testificó ante el tribunal que se había enterado de la identidad de Valerie Plame por el periodista Tim Russert, de *NBC News*, y que luego comentó ese

“chisme” a otros reporteros. Pero el fiscal aseguró que la identidad de la agente de la CIA le había sido revelada a Libby por su jefe, Dick Cheney, y luego esa información circuló entre altos funcionarios del gobierno incluidos el vocero presidencial, Ari Fleischer, abogados del jefe del Ejecutivo, un funcionario de la CIA y un subsecretario de Estado. Con posterioridad, Libby divulgó información clasificada sobre un agente encubierto a periodistas, lo que puso en “peligro” la seguridad nacional de Estados Unidos.

En el curso de las pesquisas Libby dio respuestas falsas a dos agentes del FBI que investigaban el asunto, de allí los cargos por falso testimonio; había mentido ante el Gran Jurado sobre qué, cuándo y cómo supo acerca de la identidad de Plame (cargo de perjurio), y buscó desviar la investigación de los hechos, con lo que obstruyó a la justicia. El hecho de que Cheney fuera quien reveló a su subordinado la identidad de Plame, tras recibir la información del director de la CIA, George J. Tenet, colocaba al vicepresidente de Estados Unidos en medio de la crisis legal y política.<sup>107</sup> De inmediato se especuló que Libby, al buscar obstruir la investigación, estaba protegiendo políticamente a su jefe. Incluso, ante el anuncio de que la investigación seguiría y la eventualidad de que Cheney fuera obligado a presentarse como testigo ante el tribunal, no se descartó que Libby decidiera negociar con el fiscal y aceptara su responsabilidad total o parcial para evitar el juicio.

Según el senador Harry Reid, jefe de la minoría demócrata, la acusación contra Libby era muy seria, porque indicaba que un alto asesor de la Casa Blanca había puesto la política enfrente de la seguridad nacional y el régimen de derecho. “El caso es más grande que la filtración de información altamente clasificada [...] tiene que ver sobre cómo la Casa Blanca de Bush fabricó y manipuló inteligencia para apoyar su argumento para la guerra en Irak y desacreditar a cualquiera que se atreviera a retar al presidente”, dijo Reid.<sup>108</sup> A su vez, Larry Johnson, ex analista de inteligencia de la CIA, dijo que el pueblo estadounidense se estaba dando cuenta lentamente de que “el ataque del gobierno de Bush contra Valerie y Joe Wilson fue parte de una conspiración más amplia para ocultar que nuestros líderes políticos fabricaron un argumento para la guerra”. Johnson, también ex funcionario del Departamento de Estado dedicado al antiterrorismo, agregó que Dick Cheney, Libby, Rove y otros habían preferido destruir a una oficial de inteligencia antes que revelar la verdad de que Estados Unidos fue a la guerra en Irak “sobre la base de mala información y decepción”. A su juicio, ése era un crimen que merecía “el castigo más serio”.<sup>109</sup>

Mientras tanto, la defensa de Libby retomaría una larga tradición en los escándalos de Washington: como declaró el abogado Joseph Tate, no se podía esperar que un funcionario muy ocupado, “en medio de un frenético apuro” a raíz de “asuntos y eventos” ocurridos en “una época ajetreada de nuestro gobierno”, pudiera recordar detalles de algunas conversaciones. Según él, el fiscal Fitzgerald estaba buscando

“contradicciones” en los recuerdos de su cliente para imputarle “declaraciones falsas”. Además, dijo, Libby era un “patriota”.<sup>110</sup>

Cuando el 3 de noviembre de 2005 el ex funcionario Lewis Libby se presentó ante el juez federal Reggie B. Walton en Washington, dijo: “Con respeto, su señoría, no culpable”. Su declaración de inocencia fue registrada por el juez en un proceso que duró apenas 10 minutos. Después Libby fue fotografiado, se tomaron sus huellas digitales y fue liberado.<sup>111</sup> Quince meses después, el 6 de marzo de 2007, un jurado lo declaró culpable de perjurio y obstrucción de la justicia.<sup>112</sup> El ex asesor de Cheney no fue enjuiciado por la filtración del nombre de Valerie Plame en sí, sino por mentir sobre su papel en el escándalo. Igual que en el escándalo Watergate, el encubrimiento de un delito político tenía peores consecuencias que el delito mismo. El 6 de junio siguiente, el juez Walton condenó a Libby a 30 meses de prisión, 250 000 dólares de multa y dos años de libertad condicional.<sup>113</sup> Sin embargo, el 2 de julio de 2007, en una decisión que provocó una oleada de críticas, el presidente George W. Bush le perdonó la pena de prisión y dejó en el aire la posibilidad de concederle el perdón completo.<sup>114</sup> “Fue una decisión difícil”, dijo Bush. “Sentí que 30 meses de prisión eran duros.” *The New York Times* recordó entonces que Bush jamás había perdonado una condena a muerte cuando era gobernador de Texas. Según el precandidato presidencial demócrata Barack Obama, la gracia parcial de Bush a alguien de su círculo íntimo venía a constatar “la herencia de una administración marcada por una política de cinismo y división”.<sup>115</sup> El FBI ya había designado a Libby como el preso número 28301-016 pero Bush le tiró la toalla. Ahora, Libby regresaría a su casa, limpio de polvo y paja.

#### ATANDO CABOS

Más allá de las mentiras de Libby, durante el largo juicio quedaron exhibidas las estrategias de manipulación de los medios por la Casa Blanca. Con detalle, saldrían a la luz pública la propaganda o las mentiras del Pentágono como arma de guerra. Como consignó David Brooks en *La Jornada*, quedó revelada la manera en que se decidía a quién filtrarle una nota o no, cuáles medios eran más confiables para ofrecer la versión oficial preferida, y cómo se determinaba cuándo se daba una noticia.<sup>116</sup> Por lo demás la ex directora de comunicación de Dick Cheney, Catherine Martin, llegó a ofrecer detalles extraordinarios sobre cómo se decidió filtrar información a ciertos reporteros famosos de *The New York Times* y del *Washington Post*, pero no a otros (con nombres y apellidos), cómo y en qué programas de entrevistas de televisión participar y en cuáles no, y cómo soltar malas noticias los fines de semana, cuando había menos atención del público.<sup>117</sup>



A modo de conclusión cabe consignar varios hechos. El 14 de diciembre de 2005, Bush reconoció y asumió toda la responsabilidad sobre los “errores de inteligencia” en torno al presunto arsenal nuclear iraquí.<sup>118</sup> El 6 de abril de 2007, un informe desclasificado del Pentágono descartó los supuestos nexos entre Saddam Hussein y la red Al Qaeda, otro de los argumentos utilizados por la administración Bush para invadir Irak.<sup>119</sup> El 16 de septiembre de 2007, al darse a conocer adelantos del libro de memorias del ex presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, *La edad de la turbulencia: aventuras en un nuevo mundo*, quedó ratificado lo que todo el mundo sabía: que “la guerra en Irak fue por petróleo”.<sup>120</sup> En marzo de 2008, el número de soldados de Estados Unidos muertos en Irak, desde el “fin” de la guerra en 2003, ascendía oficialmente a 4 000.<sup>121</sup> Según la BBC, la cifra de víctimas fatales iraquíes rebasaban el millón.<sup>122</sup> El 14 de diciembre de 2008, durante un viaje de despedida de George W. Bush en Irak, el periodista iraquí Muntazer Zaidi lo llamó “perro” y le tiró sus zapatos en señal de desprecio.<sup>123</sup>

## El caso Stanley y el golpismo mediático

El 7 de junio de 1999, a las 12:08, a plena luz del día, un comando armado ejecutó a quemarropa al conductor y animador de televisión Francisco Stanley,<sup>1</sup> quien recibió cuatro impactos de bala en la cabeza cuando se encontraba a bordo de su camioneta Lincoln Navigator, en el estacionamiento del restaurante El Charco de las Ranas ubicado sobre Periférico Sur y San Jerónimo, en el Distrito Federal.<sup>2</sup>

La reacción pública suscitada de inmediato fue de explicable indignación. Paco Stanley, de 56 años, era una de las figuras más populares de la televisión mexicana. Por eso su muerte, en cualquier circunstancia habría sido así, despertó gran interés. Pero en las condiciones en que sucedió tuvo implicaciones adicionales. A todas luces no se trataba de un crimen común como el que padecían a diario los habitantes del Distrito Federal. Stanley había recibido amenazas llevaba escolta y portaba una credencial de la Secretaría de Gobernación que lo acreditaba como “servidor público”, la cual le permitía portar “cualquier tipo de arma de fuego para uso de persona civil”.<sup>3</sup>

Desde un principio, los agentes policiales encargados del caso descartaron la posibilidad del robo o el secuestro como móviles del crimen y determinaron como línea de investigación que el asesinato del conductor de TV Azteca había sido una acción concertada ejecutada por profesionales, con el sello de una típica venganza o ajuste de cuentas de las bandas criminales. Sin embargo, el atentado fue utilizado por los conductores Jorge Garralda y Javier Alatorre empleados de TV Azteca, y Jacobo Zabudovsky, quien ese día regresó a las pantallas de Televisa obligado por la muerte del “amigo”, el “compañero entrañable”,<sup>4</sup> para montar una vasta campaña de linchamiento político en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas.

Sumada a la irritación de una audiencia que había vivido de manera cotidiana la violencia y la inseguridad en las calles, la excitación mediática y la politización del caso se conjugaron para crear una situación de histeria en algunos segmentos de la población. Con dislates amarillistas, con base en la mentira y la distorsión

informativa la “campaña de odio” —como la llamó el jefe de gobierno capitalino en un comunicado a la opinión pública—<sup>5</sup> tuvo la primera intención de azuzar la angustia de los habitantes de la ciudad de México y el evidente propósito de señalar a Cuauhtémoc Cárdenas como “culpable” del crimen, al mismo tiempo que se exigía su renuncia. El de 1999 era un año preelectoral y Cárdenas aparecía como el candidato “natural” a la Presidencia de la República por el Partido de la Revolución Democrática.

#### LA PRENSA ESCRITA Y LA PISTA DEL NARCO

Con el paso de las horas quedó claro que ambas televisoras habían buscado convertir la justa indignación de los seguidores de Paco Stanley —adorado por sus *fans* y visto como un carismático gurú por parte de su audiencia— en una sobredimensionada manifestación de protesta contra el jefe de gobierno de la capital. TV Azteca en particular, explotó el asesinato de manera demagógica y convenenciera al presentar una versión alarmista del hecho. La construcción del acontecimiento llegó a su clímax en el noticiero *Hechos* de las 22:30 horas, cuando en un acto insólito en la historia de la televisión mexicana el presidente del consorcio, Ricardo Salinas Pliego —quien integraba la lista de los megamillonarios de la revista *Forbes* y había iniciado su carrera como miembro de la nueva plutocracia del sistema mexicano—, apareció a cuadro en la pantalla e increpó en vivo y en proyección nacional a las autoridades de la capital del país; un discurso de “estilo fascista”<sup>6</sup> que sería definido, después, por algunos analistas, como una singular pieza de manipulación mediática, que, mientras por un lado propiciaba la desestabilización política del país, incitaba, por el otro, al “golpismo” contra un gobernante democráticamente elegido por los ciudadanos del Distrito Federal.<sup>7</sup>

Desde el principio resultó evidente que Francisco Stanley no fue una víctima del clima de inseguridad que padecía la población de la ciudad de México. Según fuentes policiales, al locutor no lo mataron por equivocación; los gatilleros que le dispararon iban por él y actuaron por órdenes de alguien. Como señaló el investigador Raúl Trejo Delarbre, se trató “de una acción artera y miserable. Pero es distinta de los atracos que padecen todos los días millares de habitantes del Distrito Federal”.<sup>8</sup> Por su forma, el homicidio tuvo un gran parecido con las “narcoejecuciones” cometidas los meses precedentes en Ciudad Juárez, Tijuana y el Distrito Federal, como admitió el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar.<sup>9</sup>

Con base en fuentes de la policía judicial local y funcionarios de la agencia antidrogas estadounidense, DEA, el periódico *Reforma* señaló a Stanley como presunto “enlace” del ex capo del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes. El

matutino, que citó “tarjetas informativas” elaboradas por la Sección Segunda del Ejército Mexicano (Inteligencia Militar), publicó que el animador figuraba dentro de la “estructura” del cártel de Juárez, cuando lo dirigía *el Señor de los Cielos*, hasta su muerte oficial en junio de 1997.<sup>10</sup> Los informes de inteligencia habían sido divulgados parcialmente por la revista *Proceso* en 1997, a raíz de la detención del ex zar antidrogas de México, general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien al momento de la ejecución de Stanley era juzgado por un tribunal militar acusado de brindar “protección” al cártel de Amado Carrillo. Los presuntos vínculos de Francisco Stanley con Carrillo y Gutiérrez Rebollo formaban parte de los anexos del expediente penal 1160/97, utilizado para acusar al coronel Pablo Castellanos, quien habría robado información clasificada de la Secretaría de la Defensa Nacional.<sup>11</sup>

Con el paso de los días, la hipótesis de que el asesinato de Stanley había sido obra del narcotráfico se fortaleció. Con base en fuentes policiales, versiones periodísticas aseguraron que el animador de televisión se desempeñaba como “proveedor” de droga entre adictos del mundo del espectáculo y aparecieron más datos que aludían a sus presuntos vínculos personales con capos del cártel de Juárez, como los hermanos Rafael y Eduardo Muñoz Talavera, y Rafael Aguilar Guajardo, propietarios de la empresa Espectáculos Prodesa, S. A., ex administradora del centro de espectáculos Premier, curiosamente el lugar donde comenzó a transmitirse el último programa de Stanley *¡Sí hay... y bien!*, producido por TV Azteca.<sup>12</sup>

Pero según algunas fuentes, Stanley también tenía una relación directa con Amado Carrillo, “con quien gustaba de jugar billar”.<sup>13</sup> De acuerdo con el testimonio de Jaime Olvera, ex lugarteniente del *Señor de los Cielos*, Carrillo suministraba cocaína a Stanley. La versión, divulgada por *El Universal*, constaba en el “maxiproceso” abierto al cártel de Juárez en junio de 1998 por la Procuraduría General de la República.<sup>14</sup> A su vez, citando informes de la DEA, el diario *Reforma* aseguró que “las relaciones de Francisco Stanley con el narcotraficante Amado Carrillo pasaron de ser netamente amistosas a convertirse en una relación de negocios en la que el conductor de televisión [...] llegó a fungir como prestanombres del fallecido jefe del cártel de Juárez”.<sup>15</sup> El periódico publicó que “de los regalos y la relación de cuates y de fiestas, se pasó a un acuerdo por el cual el conductor de televisión registró a su nombre propiedades de Amado Carrillo”. Se supo también que Stanley, quien era un visitante frecuente de Guamuchilito y Navolato, tierra natal de los Carrillo Fuentes, fue intervenido quirúrgicamente en 1996 por el cirujano Carlos Ávila Melger, quien formó parte del grupo médico que un año después sometió al *Señor de los Cielos* a la operación de liposucción y cirugía plástica que oficialmente le costó la vida.<sup>16</sup>

A partir de los exámenes toxicológicos practicados a la víctima, el director del Servicio Médico Forense, José Ramón Fernández Cáceres, concluyó que Stanley era “un consumidor crónico de cocaína”.<sup>17</sup> Como había señalado el diario *La Jornada* al otro día de la ejecución, las evidencias del uso de drogas en el fallecido y en su acompañante Mario Bezares indicaban que “entre éstos y el narcotráfico existía por lo menos, el vínculo del consumo”.<sup>18</sup>

Tales resultados exhibieron la doble moral de los dos consorcios televisivos y pusieron en severo entredicho sus alegatos en el sentido de que Paco Stanley fue sólo una víctima más de la inseguridad urbana en el Distrito Federal. Pero también desnudaron “la vasta inmoralidad del uso que se ha hecho de este crimen para acosar al gobierno de la ciudad”, en un año preelectoral.<sup>19</sup>

Según varios analistas, el manejo de la información que hicieron TV Azteca y Televisa sobre el homicidio de Stanley buscó tres objetivos: asegurar la concesión de las emisoras para el siguiente año impedir que Cuauhtémoc Cárdenas fuera candidato a la Presidencia en los comicios de 2000 y establecer una “videopolítica” en los medios electrónicos para “incitar” a la sociedad a asumir, eventualmente, posturas a favor del partido de gobierno, el PRI.<sup>20</sup>

Por otra parte, ¿dónde quedaba la campaña *Vive sin drogas* de TV Azteca?

El día del atentado, durante varias horas, la televisora del Ajusco y Televisa le habían construido una imagen de mártir a Francisco Stanley, convirtiendo una nota roja (policíaca) en un hecho “histórico”.

#### ¿TELEVISIÓN O INQUISICIÓN?

El caso Stanley resultó paradigmático en una doble vertiente distorsionadora. Por un lado, en lo que tiene que ver con la construcción de la noticia (y de la realidad) en los medios, en particular en lo que atañe a la (in)seguridad urbana. Por otro, fue un caso significativo en cuanto a la construcción de la verdad jurídica y la verdad social.<sup>21</sup>

Sobre el primer punto, que alude a la (ir)responsabilidad de los medios privados en la construcción de la noticia, en particular los electrónicos, el caso Stanley exhibió distintas aristas que guardan relación, entre otras cosas, con la competencia por el mercado entre las dos empresas que conforman el duopolio televisivo —una lucha que las empuja a vender y buscar el *rating* a toda costa para arrebatarse una cuota del mercado a la otra, ajenas a cualquier consideración de orden ético o social públicos y sin estar sometidas a ningún mecanismo regulador, estatal o ciudadano, efectivo— y con el hecho de que tanto Emilio Azcárraga Jean como Ricardo Salinas Pliego representan intereses y proyectos ideológicos y empresariales con una posición política y de clase definida (ambos integran la lista de plutócratas del sistema

mexicano), a lo que se suma el poder real que trae consigo ser propietarios de una cadena monopólica de televisión; es decir, cuentan con un instrumento propagandístico y de control social al servicio de sus intereses y de los del gran capital.<sup>22</sup>

El asesinato de Paco Stanley exhibió el abuso de la tragedia por ambas corporaciones privadas, que *inflaron* el suceso y politizaron la noticia hasta convertirla en un virtual magnicidio, para lanzarse luego a una abierta campaña inquisitorial en contra del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal, provocando excitación social y un clima de histeria colectiva que culminó en una tumultuosa manifestación de protesta en el Panteón Español, donde fue enterrado el comediante —divertido y ocurrente para muchos simplón para otros—, a quien la magia de la televisión había elevado a la categoría de héroe, santo y mártir.

Cabe consignar que a partir del día de la ejecución de Stanley TV Azteca elaboró un juicio informal, paralelo al realizado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Sin argumentos jurídicos, el discurso construido por TV Azteca como parte de ese proceso paralelo estuvo apegado a la versión de que las aprehensiones realizadas por la PGJDF se debieron al capricho del procurador Samuel del Villar y no estaban apegadas a derecho. La politización de la investigación llevó a un largo enfrentamiento entre TV Azteca y Samuel del Villar, en el transcurso del cual fueron llamados a declarar el presidente de la televisora, Salinas Pliego, y varios funcionarios, entre ellos Raúl Sánchez Carrillo y la reportera Lilly Téllez. Mario Bezares fue arraigado y luego encarcelado acusado por la Procuraduría de Justicia capitalina como presunto coautor intelectual del atentado, al haber “puesto” a su jefe en manos de los asesinos, quienes buscaban saldar una deuda de drogas que la víctima adquirió con el narcotraficante Luis Ignacio Amezcua Contreras, preso en el Reclusorio Preventivo Sur y a quien la PGJDF fincó la probable responsabilidad del homicidio de Stanley.<sup>23</sup>

Al hacer una reconstrucción del caso Stanley con base en el análisis del discurso, la investigadora Fátima Fernández Christlieb examinó la manera como TV Azteca construyó el acontecimiento mediático y propuso la interpretación del hecho desde una representación social de la “inseguridad” en la ciudad de México, mezclando el género informativo y la narración descriptiva con elementos de interpretación y una articulación argumentativa gestual y escenificada.<sup>24</sup>

Mediante el seguimiento cronológico de los conductores que manejaron la información del asesinato, Fernández Christlieb analizó la forma en que el locutor de *A Quien Corresponda*, Jorge Garralda, en un lapso de 12 minutos construyó cinco objetos de discurso principales: 1) consternación, 2) transgresión a las normas de la práctica televisiva, 3) Cuauhtémoc Cárdenas, 4) indignación y 5) reclamo político.<sup>25</sup>

Entre las 12:23 y las 6:00 de la tarde, TV Azteca utilizó diversos recursos en la

construcción de su pro discurso argumentativo, incluidos los testimonios de actores que trabajaban para los canales 7 y 13 y entrevistas a “gente de la calle”. De ese modo se buscó robustecer la idea fuerza sobre la “culpabilidad” de las autoridades y la exigencia de su renuncia y apareció un nuevo elemento vinculado con el valor/noticia de la “inseguridad”: la pena de muerte, introducido por la actriz Claudia Islas y retomado por gente del público en llamadas a la televisora o en “entrevistas de banqueta”.

Las reacciones a la cobertura de los dos principales monopolios televisivos privados, en particular la de TV Azteca, no se hicieron esperar. En los medios impresos, la mayoría privados, los análisis de algunos articulistas tuvieron un común denominador: el manejo informativo había sido irresponsable. Fátima Fernández analizó los textos de 56 articulistas, todos centrados en la cobertura noticiosa del asesinato más que en el crimen por sí mismo.<sup>26</sup> En líneas generales en ese grupo heterogéneo hubo consenso en que durante la cobertura televisiva se distorsionaron los parámetros de la ética y la responsabilidad periodísticas desde el punto de vista del interés público; los medios electrónicos manipularon a la audiencia, mintieron y lanzaron acusaciones difamatorias; propiciaron el encono político atizaron el enojo popular, generaron un clima de histeria o psicosis colectiva y manejaron la información de manera sensacionalista para conquistar *rating* o audiencia; construyeron un clima de linchamiento en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, un alto funcionario público elegido en comicios libres; generaron miedo y desconfianza hacia la democracia, exhibiendo una conducta irresponsable, desestabilizadora y facciosa; instigaron a la violencia y al golpismo político; se colocaron por encima de la ley, y de manera impune abusaron de una concesión federal para emitir juicios cuestionables, con ataques infundados a las instituciones del Estado.

De acuerdo con la lógica del gran capital, ajena a toda forma de democracia, TV Azteca y Televisa actuaron como si sus concesiones fueran un púlpito para desinformar y excitar a la población en función de sus intereses económicos particulares y para arengar al público a un linchamiento al estilo fascista del gobierno de la ciudad. Asimismo, la intención de provocar psicosis buscaba que la población viera, en las posiciones de derecha que alentaban la represión y la *tolerancia cero*, la solución a sus problemas de (in)seguridad. Visto así, la manipulación del caso Stanley obedeció a un intento desestabilizador orientado a generar miedo, para que la población buscara respuestas en el autoritarismo.

El día de los hechos casi pasó inadvertido el hecho de que, como consignó el diario *Reforma*, “no habían transcurrido 10 minutos del atentado en el que perdió la vida Paco Stanley, cuando Ricardo Salinas Pliego ya coordinaba la cobertura informativa y ofrecía recompensa a quienes aportaran algún dato para localizar a los responsables”.<sup>27</sup> Una cabeza intermedia de la nota informativa decía: “El presidente

de Televisión Azteca toma el control de las transmisiones especiales con motivo del asesinato de Paco Stanley”.<sup>28</sup> No es un dato baladí, ya que cuestiona el libre albedrío de locutores conductores y comentaristas que el día de los hechos participaron en la cobertura de TV Azteca. Como empleados del magnate para quien trabajaban, hablaban por la voz del amo; teledirigidos por el dueño de la televisora, a quien servía también el narcoempresario Stanley, señalado por los investigadores policiales como “proveedor” o “distribuidor” de drogas en el ambiente artístico.

Como se especuló en círculos de la Procuraduría capitalina, ¿era Stanley el eslabón de una cadena que conectaba a los propietarios del duopolio televisivo con el capo Amado Carrillo? ¿Con su eliminación se quiso “distraer” y borrar las pistas que condujeran a la *Señor de los Cielos-connection*? ¿Resultaba el modelo utilizado por TV Azteca válido sólo para el mes de julio de 1999? ¿Se podría repetir en etapas posteriores? Es evidente que algunos de sus efectos se hicieron presentes en años posteriores.

En todo caso, aquel 7 de junio, signado por el media-escándalo Stanley, quedó registrado como la ruptura del huevo de la serpiente incubado durante siete décadas de regímenes presidencialistas del PRI. Fue esa, tal vez, la manifestación más clara del tránsito del priísmo obsoleto hacia un nuevo sistema plutocrático,<sup>29</sup> que en los años siguientes utilizaría la retórica de la “transición a la democracia” como una cortina de humo para consolidar su poder.



## A propósito de la ingeniería del consenso. Los megaultras del poder y la reconquista de la UNAM

En todas las épocas y en todas las latitudes, la reacción ha apostado siempre al analfabetismo, a la ignorancia, a las tinieblas. Los que mandan en México no son una excepción. Están convencidos de que cuanto menor sea el nivel cultural de las clases populares menos incentivos hallarán éstas para las luchas reivindicativas, para la rebeldía. El caso de la huelga estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es elocuente. Los amos del país —banqueros y empresarios, y los poderes fácticos— quisieron privatizar la educación superior en 1999, para que los excluidos de los beneficios económicos tampoco tuvieran acceso a la enseñanza. Ése fue el quid del asunto. Y para encubrir tal propósito, el gobierno de Ernesto Zedillo mintió durante nueve meses y en febrero de 2000 avasalló una vez más la autonomía universitaria, enviando a la policía política militarizada a “solucionar” el conflicto.

Así, desde abril de 1999 hasta el 6 de febrero de 2000 —y aún después—, a través de los medios masivos de difusión como repetidores de la verdad oficial, se vulgarizó la idea de que el conflicto de la UNAM se había empantanado debido a la “intolerancia” de una “minoría radical” del Consejo General de Huelga (CGH), que no quería dialogar y mantenía “secuestrada” a la universidad. En México se estaba todavía en la etapa en que la calumnia pesaba más que la verdad. Por eso, la repetición “ad náusea” (como diría Carlos Monsiváis) de imágenes verbalizadas y editorializadas, contrarias a los estudiantes que luchaban por la gratuidad de la enseñanza y la democratización del conocimiento, generó un clima de linchamiento y asfixia progresiva que terminó creando el acostumbramiento en un auditorio genéricamente pasivo.

Muy atrás quedaron el origen de la huelga, la justeza de las demandas estudiantiles y las turbias razones del poder. El martilleo fue constante y unilateral. Maniqueo el discurso. El mensaje final que se metió en la cabeza de la gente fue que los huelguistas eran unos jóvenes marihuanos, sucios y terroristas —violentos y

subversivos— a los cuales había que aplicar toda la fuerza del Estado... en un país donde la ley se viola, se violenta, se tuerce cotidianamente y se usa de manera discrecional. Y así fue: la violación de la autonomía universitaria por la Policía Federal Preventiva (PFP) se llevó a cabo en nombre del famoso Estado de derecho (Jorge Madrazo *dixit*) y mediante “trámites legales impecables” según la apreciación del líder del ultraliberalismo dependiente, el presidente de México, Ernesto Zedillo.

#### UNA GESTAPO MEXICANA

Si todos los *media* dicen que algo es verdad, es verdad, incluso si es falso: los estudiantes de la UNAM son “terroristas y motineros”, afirmó el gobierno. “Son terroristas y motineros”, repitió la jauría de comunicadores de Estado. Punto. Implacable, el tribunal de la televisión los mandó presos. Justicia instantánea; expedita y vengativa. Ejemplar y paralizante. Para meter miedo. Igual que en Chiapas: los indios culpables. Y sobre estos ingredientes se fabrica el discurso inquisidor del poder: estudiantes e indios “atentan” contra la seguridad pública. Son un “peligro” para la seguridad nacional. El coro clama por el Estado de derecho. Pide a gritos la intervención de la fuerza pública. ¡Orden! Entonces se lanza contra ellos a militares y policías. Después, la “razón” de Estado y su remedio clásico: una justicia clasista, feudal. A modo para los enemigos del régimen.

En la era de la cultura global y de la tiranía de la comunicación la estandarización y la repetición de la mentira que se hace verdad —fórmula consustancial a todo Estado autoritario— busca que el receptor interiorice de manera subconsciente el glosario del poder. El telespectador no se da cuenta y acepta de manera pasiva las categorías del régimen. Como dice Noam Chomsky, la propaganda, a través de la manipulación del lenguaje, desarma a la gente y la inhibe en su capacidad de ejercer la crítica. Así, nada parece importante, y eso desarrolla el conformismo y la indiferencia, y estimula el escepticismo.

La dictadura de la televisión no deja que nadie se forme una opinión propia; para que todos asuman como opinión propia y reproduzcan con convicción el producto doctrinario de los *media*, que se convierte así en la opinión pública homosintonizada, única y omniexcluyente. Se trata de evitar que se reflexione sobre lo esencial a partir de la información. Por eso, los “comunicadores” abundan en estereotipos y esgrimen un simplismo supino pero demoledor.

#### LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA

“El que pueda que pague; el que no pueda, no”, fue el estribillo utilizado por el ex rector Barnés, el que tiraron los estudiantes huelguistas.<sup>1</sup> Pero lo más trágico fue que ese lema mediático, que esgrimió un seudodiscurso de corte socialista y justiciero — grotesco en un país con 60 millones de excluidos en situación de pobreza extrema, producto de tres sexenios de políticas neoliberales— respondió a una verdad oculta: una recomendación del Banco Mundial cuyo objetivo final era convertir la universidad pública en un servicio de paga. Es decir, la eliminación escalonada de la enseñanza pública gratuita; lo que en los hechos encierra otra trampa, ya que la “educación gratuita” es pagada por la población en forma vitalicia a través de la política fiscal elaborada por el gabinete económico y aprobada por el Congreso. Con lo que, en realidad, la nueva cuota sería un doble pago.

Nada dijeron sobre eso los *media*. Tampoco sobre otra de las causas del conflicto: las necesidades financieras del escandaloso y multimillonario “rescate” bancario<sup>2</sup> se habían comido el gasto social del presupuesto federal y el gobierno zedillista decidió el recorte de subsidios a los centros de educación superior; básicamente a la UNAM y al Instituto Politécnico Nacional, además del alza de cuotas. También minimizaron las voces disidentes de intelectuales y académicos que advirtieron sobre las verdaderas intenciones del régimen: convertir a la universidad en un *shopping center* de la enseñanza. El proyecto de una universidad-empresa al servicio del gran capital. Una UNAM despojada de su función social y convertida en un supermercado del siglo XXI; una transnacional del saber cuya formación esté orientada por la mano invisible del mercado.

No obstante, a varios meses de iniciado el conflicto, algunos seguían pensando que el movimiento estudiantil había sido causado por 20 centavos. A su vez, los adeptos a las teorías conspirativas insistían en que los huelguistas eran manipulados por un partido político interesado en mantener a la universidad en la zozobra en un año electoral. En un caso se refrendaba el estereotipo de una juventud levantisca por motivos baladíes; en el otro, la imposibilidad de que emerjan movimientos sociales independientes del sistema político y con demandas genuinas.

Muy escasamente fue atendida otra pregunta: ¿por qué el empeñamiento del gobierno en alterar el equilibrio tan frágil que había en la UNAM hasta el 20 de abril de 1999? Es evidente que se trató de transformar una estructura educativa que estorbaba menos financiera que políticamente en los planes de reestructuración capitalista. El presupuesto de la UNAM palidecía ante los escandalosos rescates carretero y bancario. La asfixia financiera de la educación superior no era —y sigue sin serlo— sólo una expresión del adelgazamiento del Estado mexicano; era y es el medio de reconfiguración neoliberal de la universidad.

El aumento de las cuotas de inscripción fue el detonante de un conflicto no resuelto desde 15 años antes. Pero tampoco ocurrió en el aire. Se produjo en un

contexto específico determinado por tres sexenios de políticas neoliberales y ajuste estructural, generadoras de exclusión social y de una expoliación de tal magnitud que rebasó los límites de lo tolerable en los marcos de la economía moral. A la población se le cerraron las fuentes de trabajo, se privatizó la salud muchos perdieron un techo que significaba el ahorro de toda una vida a raíz de la tempestad financiera de 1994 —el famoso “error de diciembre” que dio paso al “efecto tequila”— e incluso el Estado dejó de garantizar la seguridad de la población. La vorágine descuidadadora estuvo a punto de abarcar a la enseñanza superior y de convertir a los estudiantes en meros consumidores de servicios educativos.

Es cierto que el poder político estatal y las élites económicas siempre ejercieron una influencia mayúscula en la conducción de la UNAM. Pero también es inocultable que la universidad constituyó uno de los pocos espacios para el florecimiento del pensamiento crítico, sin el cual no hay un verdadero ejercicio intelectual. En una sociedad como la mexicana, signada por el autoritarismo, la corrupción y la impunidad propias de un régimen corporativo y clientelar que había mantenido una hegemonía de siete décadas desde el poder estatal, la disidencia pudo contar con un espacio relativamente libre de expresión. Por ello, la UNAM debe entenderse como el más importante fenómeno cultural de masas que produjo el siglo XX mexicano. En otras palabras, puesto que la producción cultural es construcción de proyectos y propuestas sociales, de utopías, el lugar de la UNAM en la sociedad mexicana es de primer orden. Se entiende, entonces por qué el conflicto universitario rebasó la cuestión de las cuotas y su incremento. ¿Cómo podría un régimen económico como el mexicano dotar de recursos culturales con los que es posible imaginar un mundo diferente a aquellos a quienes todos los días vuelve más pobres?

#### LOS BUENOS, LOS MALOS Y LOS FEOS

Frente a ese estado de cosas, el estribillo del rector Barnés: “El que pueda que pague; el que no pueda, no”, fue seguido por una homosintonización del mensaje en los *media* y comentado profusamente en horarios triple A por conductores “estrellas” de la radio y la televisión, y por los intelectuales orgánicos del régimen. Con una constante: el linchamiento de los huelguistas, que en boca de los hacedores de la verdad se convirtieron en “delincuentes” y “subversivos”. Así, la “noticia” fue que la UNAM quedó inmovilizada por un “grupúsculo de vándalos”, una “minoría de pseudoestudiantes” que “secuestraron” y tomaron de “rehén” a la institución y a los “verdaderos estudiantes”. Se machacó que esos “holgazanes” fueron manipulados por “agitadores” y “agentes externos”, entre quienes los servicios de inteligencia de la Secretaría de Gobernación identificaron a colaboradores cercanos de Cuauhtémoc

Cárdenas y a funcionarios del Partido de la Revolución Democrática y, después, a supuestos guerrilleros clandestinos y armados del EZLN, del EPR y hasta de... Sendero Luminoso.<sup>3</sup>

El investigador Sergio Zermeño demostró que en los primeros nueve días de huelga, para manipular la verdad, la Rectoría de la UNAM gastó en desplegados en los periódicos la mitad de las cuotas estudiantiles que se proponía recabar en 1999; sin contar la publicidad (propaganda) en la radio y la televisión, siempre más cara.<sup>4</sup> Si se multiplica por los nueve meses que duró la huelga y se le suma la organización de un plebiscito de Estado... ¡la cifra es astronómica!

Satanizado por los noticieros de televisión y los comentaristas radiales de mayor *rating*, el movimiento huelguista se transformó en un grupo de “delincuentes”, “amantes de la violencia”, integrado por jóvenes *nacos*, irresponsables y majaderos. “Seudoestudiantes”, fue el término preferido de los medios electrónicos. Verdaderos “indios metropolitanos”, según el instinto oligárquico y racista de los “hombres de razón”. En realidad, la llamada generación del desastre —desconfiada de la clase política y sus partidos, presa del desencanto y la frustración propios de clases medias pauperizadas, sin aparentes horizontes utópicos, ni futuro ni presente— se convirtió con el paso de los días y los meses en una protagonista caótica, incómoda y resistente a los usos y costumbres del poder. Un poder que reaccionó echando mano de provocaciones, mentiras, secuestros y espionaje.<sup>5</sup> Desde que comenzó la huelga, la Secretaría de Gobernación infiltró a “orejas” y a agentes provocadores dentro de la cúpula del CGH,<sup>6</sup> que circulaban entre los estudiantes con la cobertura de “periodistas” “vendedores de dulces”, “niños de la calle” o “pordioseros”.<sup>7</sup> Según testimonios de estudiantes, parte de sus tareas era provocar confrontaciones internas dentro del CGH y cometer “actos vandálicos”.<sup>8</sup>

El carácter contracultural del movimiento, el surgimiento de nuevas formas de hacer política que éste encarnó, su autonomía, la horizontalidad radical de sus formas organizativas, de participación y representación, de tipo anarquista, assembleísta, que chocó con las estructuras disciplinarias y verticales de la tecnoburocracia universitaria, tan acostumbrada a un sistema caciquil de representación ligado a la corrupción, el soborno y la cooptación —elementos que permean la cultura política dominante y que abarca a los partidos de izquierda y de derecha—, rebasó a las autoridades de la UNAM y al gobierno, pero también a los líderes de opinión y a intelectuales diversos, quienes, carentes de categorías de análisis y atados por vestiduras anquilosadas que les impidieron descifrar el estallido generacional del CGH, recurrieron a las mitificaciones, la descalificación y la condena a ultranza.<sup>9</sup>

Con base en esas premisas maniqueas, atizadas desde los medios electrónicos, el régimen y sus aliados fueron construyendo un consenso adverso al CGH. Y se fue allanando el camino para la represión “consensuada”. “No queda de otra; los estudiantes no entienden”, justificaba la llamada a la represión. La “razón del garrote” sumó adeptos como sinónimo de la imposición violenta de la razón de Estado. El recurso de la violencia legal, institucionalizada, que se aplicaría contra los estudiantes para imponer el principio de autoridad tuvo un nombre: la “doctrina Labastida”. Una estrategia con base en la “línea dura”. La famosa “tolerancia cero” de cuño represivo, importada de Estados Unidos. A quienes no aceptan la legitimidad y el consenso oficiales, policías y cárcel.

Preparado el terreno, se recrudeció el oscurantismo televisivo. El paroxismo tumultuario se sumó a la galería de los “abajofirmantes”.<sup>10</sup> De nuevo, como en los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, apareció el fantasma de la “conjura” y la “subversión externa”. Por extensión, los “agitadores externos” (Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD, ex alumnos y académicos que no se adhieren a las ideas “políticamente correctas”, presuntos guerrilleros) fueron identificados como “violentos” y “desestabilizadores”. La más pura lógica del macartismo salinista transexenal: los culpables de todo eran los intolerantes cegeacheros mezclados con populistas arcaicos y zapatistas trasnochados. El PRD siempre ha tenido fines inconfesables;<sup>11</sup> la guerrilla, ya se sabe, es subversiva. Del CGH no quedaba nada por decir. Todos juntos encarnaban el odio, la violencia. Eran los diablos del reparto predeterminado en la propaganda del régimen. La coartada perfecta para que el partido de Estado, el PRI, que llevaba 71 años monopolizando el poder de modo autoritario y antidemocrático, pudiera reeditar, de cara a los comicios del año 2000, “el voto del miedo” que llevó a Ernesto Zedillo a Los Pinos seis años antes.<sup>12</sup>

La misma técnica de intoxicación y desinformación desplegada por el ex secretario de Gobernación, Francisco Labastida, para el conflicto de Chiapas. La misma lógica contrainsurgente aplicada contra los insumisos indígenas “monolingües” (como diría Jacobo Zabludovsky). La misma estrategia de dejar pudrirse los conflictos. La idéntica perversión de enfrentar a estudiantes contra estudiantes (“ultras” versus “moderados”), que reprodujo la táctica chiapaneca de oponer a indígenas contra indígenas, reservándose el ejército el papel de “pacificador” y “salvador de la patria”. El mismo caceroismo mediático que se utilizó contra los zapatistas en 1994 y 1995 convocando ahora a la reconquista violenta de la UNAM. La misma vocación autista de una derecha con larga tradición represiva. Al igual que en la cruzada antizapatista de Zedillo-Labastida, en la campaña de saturación desarrollada en los *media* contra el movimiento estudiantil apareció otra forma de criminalización de la pobreza con base en “las fuerzas externas” (equiparables a “los extranjeros” en Chiapas).

Con el nuevo rector itinerante, designado por un *dedazo* del presidente Zedillo, siguió el montaje publicitario con ribetes de propaganda negra. Diálogo, ofreció De la Fuente al CGH; pero como Marco Antonio Bernal y los negociadores gubernamentales en las pláticas de San Andrés con el EZLN, después de los acuerdos alcanzados el 10 de diciembre en el Palacio de Minería, la delegación de Rectoría se levantó unilateralmente de la mesa y preparó un plebiscito-ultimátum de Estado. Luego llamó a una recuperación violenta de los planteles de la UNAM, mientras se instrumentaban las provocaciones de los paramilitares de Brígido Navarrete<sup>13</sup> —ojos y oídos de Rectoría— y los grupos porriles.<sup>14</sup> Los fotomontajes del rector —similares a las escenografías publicitarias montadas por el gobernador Roberto Albores en Chiapas— tuvieron como objetivo victimizar a De la Fuente ante la opinión pública. “Orden y legalidad”, fue la consigna, mientras el gobierno propalaba la versión de que había “armas y explosivos” en los planteles controlados por los huelguistas. Mientras tanto, intelectuales orgánicos del régimen convocaban a la fuerza pública a acabar con la “guerrilla” en la UNAM y se desataba una cacería de brujas.<sup>15</sup> Fue una campaña difundida en los *media* con la pretensión de convertir un problema social en un asunto penal; el derecho de huelga asimilado al delito. La solidaridad social también fue criminalizada.

Finalmente, la salida de fuerza del 6 de febrero. De nuevo los camiones y los helicópteros castrenses sobre la UNAM. Militares disfrazados de policías en el *campus* universitario. La contrainsurgencia en la máxima casa de estudios. La solución policiaco-militar para un problema social. La autonomía universitaria avasallada. De nuevo el gobierno y su eco, la televisión porril. Lo diferente al 68, ahora, fue el *show* montado por Televisa y TV Azteca, en vivo y en directo sobre la “liberación de la UNAM”.<sup>16</sup> El almirante Wilfrido Robledo comandante de la Policía Federal Preventiva, fue cubierto de loas;<sup>17</sup> su golpe quirúrgico había sido pulcro y aséptico. “Ni un solo muerto” cuantificaron los filatélicos del sufrimiento. La simple aplicación de la “justicia”, explicó después el procurador general de la República, Jorge Madrazo. “Fue disuasión, no represión”, puntualizó el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco. ¿Armas encontradas? Ninguna. Un taladro, cuatro cocteles molotov y tres plantitas de marihuana.

Durante horas, el *script* homosintonizado por los locutores de la televisión repitió hasta el cansancio: “Es un hecho para todos los mexicanos”: la UNAM había sido “recuperada para la democracia”. Pero nada dijeron sobre la verdad de los huelguistas: “Después del plebiscito de Estado de Juan Ramón de la Fuente vendrá la represión”. Ni una sola palabra sobre la autonomía universitaria pisoteada por las botas militares. Un millar de estudiantes fue a parar a la cárcel, acusados de “terrorismo”, “motín” y “sabotaje”. Después se les agregó el delito de “peligrosidad social”. Permanecieron en prisión un tiempo, rehenes de la Rectoría. También siguió

la petulancia del poder. La soberbia. El autohalago. La humillación de los vencidos. La destrucción de los murales rebeldes para que no quedara memoria del movimiento estudiantil.<sup>18</sup> La tortura psicológica. La parodia jurídica. Una universidad bajo el “resguardo” permanente de los federales, prisionera de la guerra de baja intensidad. La UNAM gris de De la Fuente, con el aval de los personajes “políticamente correctos”. La náusea. Lo demás es conocido por todos: el sistema sigue funcionando y, la máquina, “comunica”.



## De los *videoescándalos* a la crisis con Cuba

La noche del 1° de marzo de 2004, una grabación en video exhibida en *El noticiero* de Joaquín López Dóriga por el Canal 2 de Televisa mostró al secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Gustavo Ponce Meléndez, realizando apuestas en el casino del exclusivo hotel Bellagio de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. El conductor de televisión aseguró que tenía documentados, cuando menos, 17 viajes del funcionario al mismo destino, entre el 30 de diciembre de 2003 y el 5 de enero de 2004.<sup>1</sup> En la cinta, Ponce se veía espiado por una cámara de televisión que lo mostraba en la mesa de apuestas de la zona VIP del casino, fumando un puro.

La presentación del video orilló al procurador capitalino, Bernardo Bátiz, a hacer una llamada telefónica al programa de López Dóriga, con la cual rompió el sigilo que la dependencia a su cargo había mantenido respecto de una investigación por un fraude de más de 30 millones de pesos cometida en contra del propio Gobierno del Distrito Federal. En el presunto ilícito estaban involucradas al menos seis empresas de Ahumada y tres delegaciones: Gustavo A. Madero, Tláhuac y Álvaro Obregón.<sup>2</sup> Un día después, el jefe de gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador, anunció la separación de Ponce de su cargo como secretario de Finanzas, en tanto la Procuraduría de Justicia capitalina iniciaba una averiguación contra el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.<sup>3</sup> Para entonces, Ponce se había esfumado.<sup>4</sup>

Si la grabación de Ponce en Las Vegas demostró ser letal, su implacable efecto dominó desataría nuevos escándalos políticos. Pero una cosa resultaba evidente: los videos clandestinos habían llegado para quedarse. A la luz de los sucesos posteriores, la exhibición de las corruptelas del presidente del PVEM, Jorge Emilio González, *el niño Verde*, había sido un globo sonda para medir reacciones sociales ante las revelaciones en cascada que habrían de llegar más tarde.

Como en una película de gánsters de los años cincuenta en blanco y negro, la imagen de un hombre retacándose los bolsillos del saco y el pantalón con varios fajos de dólares que no habían entrado en un portafolio ya repleto de billetes posado sobre una mesa circular causó impacto en México y en pocos minutos dio la vuelta al mundo. Comenzaba la mañana del 3 de marzo de 2004 y aquella imagen no era parte de una ficción cinematográfica. Se trataba de un inmoral video profesional grabado de manera secreta con fines de extorsión, que fue proyectado en el noticiero *El Mañanero* del consorcio Televisa, conducido por Víctor Trujillo, caracterizado por *Brozo, el Payaso Tenebroso*, un personaje de pelo verde, atuendo circense y lenguaje alburero a veces soez, clara expresión de la política informativa como espectáculo.

Los principales protagonistas fueron un empresario del *jet-set* Carlos Ahumada Kurtz, propietario del Grupo Quart,<sup>5</sup> del periódico *El Independiente* y de los equipos de fútbol Santos y León, quien apareció en la trama con la cara cubierta por una mancha tecnológica, y un importante operador político del Partido de la Revolución Democrática, René Bejarano, ex secretario particular del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Presidente de la comisión de gobierno de la Asamblea Legislativa capitalina y coordinador de la fracción perredista en la misma, Bejarano fue pescado *in fraganti* en el momento de recibir un “donativo” del empresario mexicano de origen argentino.

En realidad, las *videocorruptelas* mostraron de manera descarnada lo que todo mundo ya sabía en México: la colusión entre empresarios amorales y agentes públicos corruptos (políticos, legisladores tecnoburócratas), con su larga cadena de compra de voluntades chantaje, soborno, tráfico de influencias, manipulación de licitaciones, enriquecimiento inexplicable y el uso de la fuerza —la violencia como reguladora entre el mercado económico y el mercado político— cuando se rompe el círculo vicioso de la ilegalidad (el secreto *anómico*) o se fracturan las reglas y las obligaciones dictadas por el miedo, que da paso a la venganza.

Precedido por la filtración a los medios electrónicos de otro par de piezas audiovisuales *sucias* y editadas —dosificadas no sólo por razones de *rating* sino de un maquiavélico juego político enlazado con el calendario electoral— que, como se señaló antes, involucraban al senador Jorge Emilio González, del Partido Verde, y al jefe de Finanzas del Distrito Federal, Gustavo Ponce (el mismo que persiguió a Raúl Salinas de Gortari por actos de corrupción y enriquecimiento inexplicable),<sup>6</sup> el incidente adquirió un sesgo amarillista y fue seguido con expectación morbosa por una opinión pública que asistió como simple espectadora a un linchamiento mediático en serie de actores políticos venales.

De acuerdo con la versión oficial que difundiría después la empresa Televisa, la “carnaza”<sup>7</sup> del *affaire* Bejarano le fue entregada a Víctor Trujillo por el diputado federal de Acción Nacional Federico Döring, considerado el “enemigo público

número uno” del PRD y entusiasta lector de las biografías de Winston Churchill y Adolfo Hitler.<sup>8</sup> Entrevistado por la prensa, Döring —cuyo jefe político para los lopezobradoristas era el secretario de Gobernación Santiago Creel, apoyado a su vez dentro de Acción Nacional, en sus aspiraciones presidenciales, por el senador Diego Fernández de Cevallos— declaró que se juntó con el casete luego de haber recibido una llamada en su teléfono celular, en la que alguien simplemente le dijo: “Tenemos un documento que te puede interesar. Si quieres te lo hacemos llegar. Es para acabar con la corrupción”.<sup>9</sup> Él respondió que sí y le fue enviado a su domicilio particular; ahí lo recibió el servicio doméstico.<sup>10</sup>

¡NO ME PENDEJEES!

Dice John B. Thompson que “los escándalos mediáticos, como todos los escándalos, no se limitan a ‘suceder’: son traídos al mundo”.<sup>11</sup> Son *acontecimientos ubicados* que se encuentran invariablemente insertos en contextos sociohistóricos específicos. La idea se robustece si se observa que, en rigor, la empresa de Azcárraga Jean le tendió una trampa a Bejarano en sus instalaciones. Esa mañana, el líder de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal había acudido a una entrevista con Leonardo Kourchenko en el informativo *En Contraste*, en el Canal 2. Tema: el sonado caso Ponce. De manera simultánea, en el programa *El Mañanero*, por el Canal 4, Brozo pasaba una primera grabación donde se veía a Bejarano aceptando un soborno en efectivo de manos de Ahumada.<sup>12</sup> Al salir del estudio, terminada su entrevista con Kourchenko, una persona le dijo a Bejarano que Brozo quería saludarlo.

Sin saber lo que le esperaba y desconociendo que parte de la audiencia de Televisa ya había presenciado el video, aceptó. Ya en el estudio, sin avisarle que estaba al aire, le soltaron de golpe que le iban a pasar un video. De manera increíble, estrechó la mano al diputado panista Federico Döring y se sentó en el banquillo. Ignoraba que para millones de televidentes lejanos, él mismo era ya una “mercancía pública”, dado que la “noticia” se había propagado con antelación y había asumido el rango de “evidencia acusatoria” ante el *santo tribunal de la mediocracia*.<sup>13</sup> Víctima de un montaje dramática y mediáticamente perfecto, al contemplarse en el video que exhibía su lado oscuro como político profesional —ése que lo ubicaba en las antípodas de la imagen social que había intentado proyectar hasta entonces como dirigente de izquierda—, desnudado ante millones de ojos de terceras personas y sin poder escapar a la evidencia brutal de las imágenes, es previsible que Bejarano se haya sentido un cadáver político.

Esa mañana del 3 de marzo habían sucedido cosas extrañas en el foro donde se transmitía el noticiero *En Contraste*. De manera inusual, estaban presentes Leopoldo

Gómez, vicepresidente de Noticieros, el responsable de seguridad y el jefe técnico, quien se encargó personalmente de cambiar el canal de los monitores para evitar que dentro de las instalaciones de Televisa se viera el programa de *Brozo*.<sup>14</sup> Asimismo, se pidió a todas las personas que estaban en el foro que apagaran sus celulares. Bejarano estaba “incomunicado”. Por otra parte, no quedó duda de que Víctor Trujillo fue una pieza fundamental del operativo que echó a andar la televisora para exhibir a Bejarano. Después, el propio Trujillo, en su representación de *Brozo*, declararía a Carmen Aristegui que Bejarano fue invitado a su programa “para ser exhibido, no para ser entrevistado”.<sup>15</sup> Y ante la percepción de la locutora radial de que un payaso estuviera asumiendo el papel de fiscal e influyendo en la política del país, el comediante respondió que las críticas querían “matar al mensajero”, que lo de menos era el personaje representado por él.<sup>16</sup>

#### LA SOMBRA DE LA TRAICIÓN

En esa primera grabación, que exhibió el momento en que recibía un “donativo” de 45 000 dólares de Carlos Ahumada, Bejarano apareció con la guardia baja, confiado, suavizados sus mecanismos de autocontrol ante quien consideraba un amigo benefactor del PRD. En la cinta, filmada clandestinamente en las oficinas centrales del Grupo Quart el 21 de abril de 2003, Ahumada prometió entregarle un total de seis millones de pesos y afirmó que hasta esa fecha ya le había dado 3.8 millones.<sup>17</sup>

En un segundo video, difundido por el noticiario *nueva Visión* de Televisa, se consignó una conversación entre Ahumada y Bejarano ocurrida el 29 de julio de 2003. En esa nueva entrega, un molesto Ahumada presionó e incluso amenazó a Bejarano ante el “incumplimiento” de pagos por parte del gobierno local. Le dijo, incluso, que su enojo inmediato era la traición: “La película completa la tengo yo aquí el único problema es que te voy a ser franco, esto es a lo que yo ya llegué, a un extremo, a un límite, a una situación de que sabes qué [...] ya estoy por decir, harto, o sea, ya, ya, ya [...] mientras más me pegan, más doy [...] O sea, a mí me están partiendo la madre, voy a partírtela a ti”, le dijo Ahumada a Bejarano.<sup>18</sup> Entonces, el político prometió: “Voy a tratar de convencer a Andrés [Manuel López Obrador] de lo que me dijiste, de que es demasiado riesgo apretar demasiado”. Al menos en tres ocasiones mencionó que llevaría el asunto ante el mandatario capitalino, aunque anticipó que no podía asegurar el éxito de su misión.<sup>19</sup>

La difusión de las cintas de los casos Ponce y Bejarano convirtió al consorcio de Emilio Azcárraga Jean —principal beneficiado por los filtradores— no sólo en difusor de escándalos sino en un instrumento y actor directo en el circo del poder. Un actor político principal que, más allá del propio campo de los negocios lucrativos —

Televisa es una empresa comercial que persigue beneficios económicos y el escándalo “vende”—,<sup>20</sup> se constituyó, con fría prepotencia, “en tribunal de alzada, guillotina virtual y fiscalía implacable”,<sup>21</sup> con capacidad para administrar los conflictos entre actores sociales incluso entre los poderes políticos previstos en la Constitución y, en general, entre los particulares. Resultó obvio, además, que una vez que le fueron filtrados los videos, la empresa quedó en capacidad de decidir con criterios políticos y comerciales, según sus alianzas, afinidades ideológicas y fobias partidistas, cuándo difundirlos, en qué horarios y en qué canales.

Es normal que quien establece la agenda informativa, la controla. ¿Estaba metida, Televisa, un medio de comunicación masiva de tipo comercial, en los “tiempos” marcados por la disputa política? ¿Acaso había caído seducida Televisa por la *videopolítica* y perdió el control de la agenda y de la información ante la embestida de los políticos? ¿O administraba al público la información para obtener *rating* y beneficiar de paso a quien o quienes estaban detrás del golpeteo político contra López Obrador?

Quienes diseñaron la conjura de los videos partieron de la base de que la política es sucia y despiadada. Pero, ¿cuántos videos más sería capaz de soportar el cascarón de la seudodemocracia mexicana? ¿A quién le servía una sociedad enfurecida con los sucios enjuagues del poder? Ante el regodeo del presidente Vicente Fox, la dirigencia de Acción Nacional y sus aliados en el salinismo y en el PRI, y tras un primer control de daños en las filas del PRD que incluyó la renuncia de Bejarano al partido del sol azteca y un pedido de licencia a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para someterse a la justicia; la purga de la ex jefa del gobierno capitalino Rosario Robles, “amiga íntima” de Ahumada y acusada por la cúpula perredista de estar coludida con las prácticas de extorsión del empresario mafioso, y de un par de otros altos funcionarios del gobierno perredista de la capital,<sup>22</sup> pronto se vio que la *operación video* fue parte de una escaramuza política de varias bandas.

#### DON DIEGO Y SU PANDILLA

El principal damnificado, López Obrador, quien antes de la *videoguerra* iba muy despegado en la preferencia de los electores de cara a los comicios presidenciales de 2006 (diversas encuestadoras le daban una ventaja de 20 a 30 puntos arriba de su más cercano adversario),<sup>23</sup> fue el primero en denunciar que era víctima de un “complot político” urdido por fuerzas de la derecha, en el que estaban involucrados del presidente Fox y Carlos Salinas de Gortari, “el innombrable”.<sup>24</sup>

Resistida por sus adversarios, la teoría de la conspiración se tornó verosímil cuando el 9 de marzo de 2004 investigaciones del gobierno capitalino y un reportaje

periodístico en el programa conducido por Carmen Aristegui en W Radio revelaron que el 20 de febrero anterior había tenido lugar una reunión sospechosa —por la talla y la investidura de los actores involucrados— en un hotel de Polanco en la capital mexicana. En ella participaron el empresario Carlos Ahumada; el abogado y senador de Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos, muy vinculado a la *famiglia* Salinas<sup>25</sup> y protagonista él mismo de sonados casos de conflictos de interés,<sup>26</sup> y el abogado Juan Collado, defensor, entre otros, de Raúl Salinas de Gortari acusado del asesinato de su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu; de Eduardo Fernández, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acusado de lavado de dinero y de tener cuentas bancarias en Suiza después de señalar a Lino Korrodi y a los Amigos de Fox; del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva preso por delito de narcotráfico; de Mario Ruiz Massieu, el ex procurador acusado de *lavado* de dinero, quien presumiblemente murió en Estados Unidos mientras se hallaba en prisión domiciliaria, y del ex presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol, Edgardo Codesal, implicado en grabaciones telefónicas ilegales del también silbante Felipe Ramos Rizo.

En el cónclave, presentado por las autoridades como una “diligencia ministerial” en la que, supuestamente, el empresario Ahumada habría “ratificado” una denuncia por extorsión en contra de Bejarano,<sup>27</sup> estuvieron presentes, además, José Carlos Villarreal agente del Ministerio Público federal, adscrito a la Procuraduría General de la República, y José Luis Valles López, ex miembro de la desaparecida *Brigada Blanca*, brazo operativo clandestino de los gobiernos priístas durante la *guerra sucia* de los años setenta y quien en el momento de la reunión era delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, la policía política que depende de Gobernación) en la capital del país.

Valles, cuya presencia contraria a la ley quedó comprobada,<sup>28</sup> sufragó todos los gastos de la reunión celebrada en el Hotel Presidente Intercontinental,<sup>29</sup> que operó como *agencia externa* del Ministerio Público.<sup>30</sup> Reputado como uno de los mejores agentes de los servicios de contrainteligencia del Estado mexicano, y al frente de la delegación más importante del Cisen, la del Distrito Federal, su presencia en el encuentro entre Ahumada y Fernández de Cevallos fue interpretada inicialmente en la lógica de una “mediación” o como “garante de un acuerdo”.<sup>31</sup> Pero sin duda quien concentró los reflectores de los medios fue el legislador y litigante Diego Fernández de Cevallos. Durante una entrevista radial con Carmen Aristegui, a las 13:30 del martes 9, le contestó de manera brusca que no iba a participar en “esa cuestión de escándalo” y adujo que la información que momentos antes había difundido la locutora formaba parte de “una estrategia de distracción”. Por la noche, al comparecer en *El noticiero* de Televisa, el senador del PAN siguió sin aclarar de manera contundente su participación en la diligencia de Ahumada, pero admitió con

López Dóriga que conocía los videos con antelación.<sup>32</sup>

Un par de días después, el comparecer de nuevo ante Joaquín López-Dóriga, fiscal de turno de esas escandalosas jornadas de marzo el llamado Jefe Diego que el abogado Juan Collado le había presentado a Ahumada entre “los últimos días de enero y los primeros de febrero”, quien “entre cuatro, cinco o siete sesiones” le mostró con imágenes “borrosas” e “inaudibles” en una laptop.<sup>33</sup> De paso, confirmó que el 20 de febrero había estado en el hotel Presidente compartiendo un desayuno con el empresario Isaac Chertorivsky y el escritor Héctor Aguilar Camín, pero negó haber asistido a la ratificación de la denuncia de Ahumada. Y aclaró “Sólo hubo unos minutos que me levanté por las horas que ahí tenía, al baño y a hablar con dos de mis colaboradores: Ismael Romero y Sonia González”.<sup>34</sup>

El furtivo encuentro de Fernández de Cevallos con Romero y González despertaría algunas suspicacias. “Coincidencia del destino o ayuda técnica especializada”, inquirió Julio Hernández López en su columna “Astillero”.<sup>35</sup> A la sazón, Ismael Romero era director de Comunicación Social de la fracción senatorial del PAN y Sonia Morales, subdirectora. Pero ella tenía una particularidad adicional: era especialista en videos. Era dueña de TV Imagen, una empresa conocida en el mundo de las agencias de video por la prosperidad que tuvo en los tiempos de hegemonía priísta,<sup>36</sup> y esposa de Héctor Cervera, quien fue director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia de la República (Cepropie) durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Cervera mantuvo amistad y fidelidad con el ex presidente, a tal grado que medió para que su esposa grabara una entrevista que Salinas dio por separado a Joaquín López Dóriga y a Sergio Sarmiento, en 2000. “TV Imagen, Salinas, Diego”, subtuló Hernández López su columna que llamó “Video coincidencias”.<sup>37</sup>

Por otra parte, de la cita en el hotel de las sospechas quedaría un eslabón perdido. De acuerdo con una versión difundida en la sede del Congreso de San Lázaro por el diputado perredista de Nueva Izquierda, Jorge Martínez Ramos, en esa reunión también estuvo presente su primo, el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez Martínez.<sup>38</sup> La eventual participación de Bernardo Gómez en la reunión del Hotel Presidente de Polanco ponía otro ingrediente a la crisis de marzo. En concreto, los expertos del Canal 6 de Julio, Carlos Mendoza y Mario Viveros, denunciaron una “conspiración mediática”. Después de una investigación concluyeron que los videos del escándalo fueron manipulados técnicamente y que la transmisión de las cintas “formó parte de un proyecto cuidadosamente planeado por Televisa y Los Pinos”.<sup>39</sup>

NADA ES LO QUE PARECE

La liga Ahumada-Cisen-PGR-Fernández de Cevallos dio pie a la teoría del complot esgrimida por AMLO y alentó la visión de que el gobierno federal permitió un uso faccioso de los *videoescándalos*. Al menos dos miembros del gabinete de Fox, Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación y aspirante a la Presidencia de la República, y el general Rafael Macedo de la Concha, titular de la PGR de quien se habían hecho señalamientos públicos sobre un presunto vínculo personal con Carlos Ahumada —del cual existían registros fotográficos—,<sup>40</sup> quedaron envueltos en la trama. A su vez, y con sobrada razón, la presencia de Fernández de Cevallos en el cónclave semiclandestino (negada por éste) y su conocimiento previo de los videos llevó a los senadores panistas Carlos Medina Plascencia, Luisa María Calderón y César Jáuregui, así como al secretario general del PAN, Manuel Espino, a preguntarse por las razones del litigante para haber ocultado a su partido la existencia de los videos. Dijo Espino: “El PAN, como institución, no lo sabía, y lo dice el secretario general del PAN. Un miembro distinguido del PAN lo sabía; habrá que preguntarle a Diego, a mí me interesa que Diego me diga a mí y le diga a los mexicanos y a los panistas: ¿por qué sabías, Diego?, ¿por qué sabías?”<sup>41</sup>

En el marco del escándalo también se supo que sus primeros negocios en México, Carlos Ahumada los realizó al lado de José Francisco Ruiz Massieu —cuñado de Carlos y Raúl Salinas de Gortari—,<sup>42</sup> como gobernador del estado de Guerrero.<sup>43</sup> Asimismo el compañero de andanzas comerciales de Ahumada, Ignacio Morales Lechuga, a quien el empresario corruptor llamaba en público “papá”, fue procurador del Distrito Federal durante la presidencia salinista. Según se deduce de declaraciones de Roberto Aníbal Ahumada Kurtz, su hermano Carlos aprendió “los beneficios de la impunidad y el poder” al lado de Morales Lechuga, quien luego sería notario público del principal accionista del Grupo Quart.<sup>44</sup> Tal vez por una simple coincidencia, el ex procurador del Distrito Federal era el padre de Ignacio Morales Rivas, vicepresidente del club León propiedad de Ahumada.

Es posible, además, que a raíz de sus vínculos con el entorno salinista, Ahumada haya definido a Andrés Manuel López Obrador como su único “enemigo”. Así se lo había hecho saber en 2003 varios meses antes de que estallaran los *videoescándalos*, a la periodista argentina Olga Wornat, cuando lo entrevistó para la revista *Poder* de Miami, Florida:

Haré todo lo que sea necesario para que este güey [AMLO] no llegue. Le conozco todas, la gente está engañada con él, no es lo que parece. Nadie se imagina lo que este hombre tiene al lado, la gente que lo rodea, yo sí. Son corruptos que se venden por dos pesos. López Obrador es el peor de los hipócritas y yo lo voy a mostrar tal cual. Después de todo soy el dueño de un diario, ¿no?<sup>45</sup>

En realidad, la obsesión de Ahumada coincidía con la del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien a mediados de 2003 había salido de manera definitiva del



clóset político y, aprovechando el vacío de poder dejado por el presidente Fox, estaba de nuevo en México, donde comenzaba a reconstruir las redes de lealtades, favores, compromisos y clientelas que había tejido durante su mandato.

La puerta para el regreso a México del “villano favorito” la había abierto el ex canciller Jorge G. Castañeda, quien se había reunido con Salinas en Bruselas el 13 de mayo de 2002, la víspera de la llegada del presidente Fox a Bélgica.<sup>46</sup> En una operación estratégica perfectamente planeada, desde julio de 2003 el ex mandatario se había hecho notar detrás de Roberto Madrazo, presidente del PRI; del brazo de la secretaria general de ese partido, Elba Esther Gordillo quien coordinaría la nueva bancada priísta en la Cámara de Diputados, y conectado a Diego Fernández de Cevallos —el 15 de marzo de 2004 el *Jefe* Diego expresaría en el recinto legislativo de San Lázaro “no ser cobarde, no tener miedo y sostener su relación con Carlos Salinas de Gortari de la ‘cual no me avergüenzo’ ”—<sup>47</sup> como posible puente entre el panismo declinante y el priísmo conspirativo para armonizar lo peor de ambas agrupaciones políticas en el afán mafioso de las privatizaciones aún pendientes (el sector eléctrico y la industria petrolera) y para cerrarle el paso hacia la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador.

La idea del complot denunciado por AMLO quedaba reforzada con algunos datos concretos. En enero de 2004, instancias administrativas del gobierno de López Obrador habían detectado el pago irregular de 18 cuentas sin contratos a seis empresas del Grupo Quart, por un monto de tres millones de dólares. El 19 de febrero habían sido detenidos los administradores de dos de las empresas de Ahumada involucradas en el fraude a una delegación. El 20 tuvo lugar el citado cónclave de Ahumada con los abogados Fernández y Collado y los elementos del Cisen y la PGR, para ratificar, supuestamente, una denuncia por “extorsión” para “gastos de campañas electorales del PRD”. Ese día Ahumada voló a Las Vegas y según confirmó después el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos durante una comparecencia en el noticiero de Joaquín López Dóriga, videograbó al secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Gustavo Ponce.<sup>48</sup> El video sobre Ponce en el casino del hotel Bellagio fue difundido por la televisión el 1º de marzo. Un día después, el diario *La Jornada* dio a conocer que el gobierno capitalino había iniciado una investigación por fraude contra Carlos Ahumada, y al otro día Televisa presentó el audiovisual con Bejarano al momento de recibir un soborno de Ahumada en abril de 2003.

A partir de esos datos parece verosímil que en la reunión del 20 de febrero en el Hotel Presidente Intercontinental de Polanco se acordó tenderle una trampa política a López Obrador. Con el paso de los días cobró fuerza la hipótesis de que la policía y su jefe, el procurador Macedo, conocían desde antes parte de los videos grabados por

Ahumada, que involucraban a colaboradores cercanos al jefe de gobierno capitalino. Y en vez de proceder legalmente y llevar el caso a los tribunales, prefirieron “litigar” en los medios y brindaron “protección” al empresario para que viajara a Las Vegas a consumir la obra: el audiovisual que involucraría al jefe de Finanzas de López Obrador. Todo lo cual tuvo que contar con el aval de algunas instancias de poder en Estados Unidos.

La versión se robusteció luego de un análisis minucioso, cuadro por cuadro, realizado por los expertos del Canal 6 de Julio, Carlos Mendoza y Mario Viveros. Según ellos, el video de Gustavo Ponce en Nevada fue “una operación o montaje planeado”. Los anónimos productores, guionistas, directores, editores y distribuidores de los videos tuvieron acceso al centro de control del sistema de monitoreo del hotel Bellagio —es decir, utilizaron el *master* o circuito cerrado del casino—, pero también usaron una cámara convencional operada manualmente en las áreas comunes del lugar de juego.<sup>49</sup>

En abril siguiente aparecería otro dato clave: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad Mexicana de Inteligencia Financiera, dependiente de la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones de esa secretaría, había iniciado el 18 de febrero una serie de pesquisas en torno a Gustavo Ponce y su esposa, Esperanza González.<sup>50</sup> Y en el marco del Acuerdo de Cooperación Mutua suscrito entre los gobiernos de Estados Unidos y México, la SHCP había pedido información sobre los movimientos financieros y comerciales efectuados por Ponce, a la Unidad de Investigación contra Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen, por sus siglas en inglés).<sup>51</sup> Asimismo, con carácter de urgente, la instancia investigadora de la SHCP pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) copias certificadas de contratos, tarjetas bancarias, registros de finanzas, documentos donde aparecieran nombres de los beneficiarios e identificaciones personales, así como estados de cuenta y constancias de operaciones mayores de 50 000 pesos o su equivalente en dólares, de 1996 a febrero de 2004, a nombre de Ponce Meléndez y González Ocampo.<sup>52</sup>

El Fincen registró el caso Ponce con el expediente número 200401V85558, y cinco días después, el 23 de febrero —una semana antes de que Televisa difundiera el video—, entregó los resultados de sus averiguaciones. El documento del Tesoro estadounidense incluía dos reportes de “actividades sospechosas” y 33 informes sobre transacciones en divisas realizados por Gustavo Ponce y Esperanza González. Algunos de los informes reseñaban viajes conjuntos de Ponce y Ahumada a Las Vegas. Es decir que ambos personajes mantenían un vínculo estrecho.

El 1° de marzo, durante la transmisión del video, López Dóriga había difundido datos contenidos en los informes que el Fincen y la CNBV habían entregado a la SHCP el 23 de febrero. Lo que dio validez a la versión de López Obrador, difundida a los

medios el 14 de abril de 2004, de que Hacienda y la PGR se habían “confabulado” y actuado de manera “facciosa” al utilizar información confidencial con el propósito de golpearlo políticamente. Además, acusó a ambas dependencias de haber violado el Acuerdo de Cooperación con Estados Unidos, al filtrar a Televisa partes sustanciales de la investigación.<sup>53</sup>

Al final podía quedar la duda acerca de si la cámara manual que registró a Ponce apostando en Las Vegas fue manipulada por Carlos Ahumada o por un agente encubierto del Tesoro estadounidense. Pero en cualquier caso la realidad parecía darle la razón a AMLO: en vez de detener al supuesto responsable de soborno, quien presuntamente buscaba beneficiarse de licitaciones fraudulentas de obras públicas en la capital, las instancias federales (SHCP, PGR, Gobernación) ampararon al empresario corruptor, quien después se dio a la fuga y, supuestamente era buscado por la propia Procuraduría General de la República por los presuntos delitos de crimen organizado y lavado de dinero.

#### MUERTES EXTRAÑAS

Para López Obrador, quien siguió insistiendo en la teoría del complot, la PGR estaba “encubriendo” y “protegiendo” a Ahumada. Pero fuere quien fuere que estuvo detrás de los *videoescándalos*, el golpe en contra del virtual candidato del PRD a la Presidencia de la República había sido contundente. Una encuesta publicada por *Milenio* el 22 de marzo de 2004 reveló un triple empate en la carrera por la sucesión: Santiago Creel (PAN), 33%, Roberto Madrazo (PRI) y López Obrador (PRD), 30% cada uno. Con 6% aparecía Jorge G. Castañeda, el ex canciller de Fox y, según algunos analistas, uno de los candidatos de Washington.

“López Obrador perdió el tema de la honestidad”, se apresuró a señalar con afán de capitalización política Castañeda. La abierta participación en el “caso Ahumada” de los servicios de espionaje locales —ampliamente penetrados por la llamada *comunidad de inteligencia* de Estados Unidos— y la intensa actividad política del “candidato sin partido” Castañeda, a quien el 4 de marzo anterior el magnate venezolano Gustavo Cisneros había exhibido en el hotel Biltmore de Miami como “el próximo presidente de México”,<sup>54</sup> podían alimentar futuras líneas de investigación. Los nexos de Castañeda con la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), una organización contrarrevolucionaria con sede en Miami ligada a las *operaciones encubiertas* ejecutadas por el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Estado durante varias administraciones estadounidenses, eran públicos y notorios. En ese sentido, una de las rutas del dinero en el caso de los financiamientos ilegales de campaña a los Amigos de Fox conducía a la FNCA.

A su vez, el saldo para el Partido de la Revolución Democrática había sido catastrófico. La emblemática Rosario Robles, ex jefa del gobierno capitalino, renunció antes de ser purgada por haber mantenido una relación sentimental con Ahumada, que la dirigencia del sol azteca consideró fue utilizada para que el empresario pudiera penetrar al partido y destruir desde adentro la imagen de López Obrador como político honesto. Bejarano, quien adujo que “sólo cumplía órdenes” pero no dio nombres, pasaría algunos meses en prisión. Otro actor relevante del caso, Gustavo Ponce, quien desapareció en los días de los *videoescándalos*, sería detenido poco después en Tepoztlán, Morelos. En ese contexto, militantes del PRD como el conocido novelista del género policial Paco Ignacio Taibo II, consideraron que el partido se había agotado como opción de izquierda y estaba en una fase de descomposición. Según el escritor Carlos Monsiváis, “la obsesión electoral ha sido el *beso de la muerte* para el PRD”.<sup>55</sup> Por su parte, el politólogo Lorenzo Meyer sentenció: “Toda la clase política quedó desprestigiada”. En algunos círculos surgía con fuerza la consigna coreada en los días del llamado *corralito* en Argentina: “Que se vayan todos”.

Por lo pronto, la saga de la *videoguerra* se tiñó de rojo. El caso había cobrado tres o cuatro víctimas mortales, todas del entorno de Carlos Ahumada: Alejandro Balderas Méndez, un ex funcionario de obras públicas en dos delegaciones del Distrito Federal, Álvaro Obregón y Tláhuac, y en el gobierno de Michoacán, presuntamente vinculado con el empresario, quien según la necropsia falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico, producto de un golpe que sufrió al caer de las escaleras de su casa... en estado etílico (*sic*);<sup>56</sup> Martín Fernández del Castillo, un panista asesinado que se había desempeñado como director jurídico de Luis Eduardo Zuno, ex titular de la delegación Álvaro Obregón, también del PAN, quien benefició a las constructoras de Ahumada con contratos fraudulentos,<sup>57</sup> y un menor de 11 años que fue descuartizado y su cuerpo desmembrado enviado por paquetería a Monterrey.<sup>58</sup> Este último caso el más complejo —y del que existen dos versiones policiales, una federal y otra de las autoridades capitalinas—, podía estar vinculado con redes de pornografía infantil que involucraban al Grupo Croma encargado de realizar trabajos de publicidad del Grupo Quart (de Ahumada), en cuyo domicilio capitalino se encontraron copias de los *videoescándalos* exhibidos por Televisa. Otra versión indicaba que el degollado sería Enrique Arroyo Preciado, un hombre de 45 años al que las primeras diligencias identificaron como el encargado de reproducir los videos que fueron entregados al diputado Federico Döring y luego transmitidos por la televisión.<sup>59</sup>

El caso Ahumada dio un giro inesperado cuando el 30 de marzo el gobierno de Cuba anunció en la isla el arresto del empresario mexicano. Su captura en una casa particular de La Habana —las autoridades mexicanas dijeron al principio que había sido apresado en el balneario Varadero—<sup>60</sup> tuvo lugar en cumplimiento de una solicitud de detención que había sido girada el 12 de ese mes por la Procuraduría General de la República a la Policía Internacional (Interpol). De acuerdo con la información oficial, Carlos Ahumada se había internado en Cuba el 27 de febrero, con visa de turista y un pasaporte mexicano en regla, en un vuelo privado que salió del aeropuerto de Toluca. Es decir, 11 días antes de que el juzgado decimoprimer de lo penal del Distrito Federal librara una orden de aprehensión en su contra por fraude genérico.<sup>61</sup>

Según el entonces titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, una de las pistas claves para dar con el dueño del Grupo Quart fueron las bitácoras de vuelo de un avión Lockheed Jet Star 731, matrícula XA-TVK, propiedad de Ahumada en el cual la ex dirigente del PRD, Rosario Robles, había viajado a La Habana, donde permaneció los días 3 y 4 de marzo.<sup>62</sup> La PGR dio a conocer que comenzaría de inmediato el proceso de extradición para que Carlos Ahumada fuera trasladado a México y se le juzgara por ese acto ilícito, aunque también estaba en curso una investigación por lavado de dinero.<sup>63</sup>

Sin embargo, más allá del escándalo mediático, las frivolidades y las anécdotas, la sospecha seguía rodeando al “seductor Señor de los Videos”. Por ejemplo, la PGR tuvo que manifestar que no tenía “ninguna evidencia” de que Salinas estuviera “protegiendo” a Ahumada. Otras muchas interrogantes quedaban en el aire. Entre otras el papel del Cisen en las maniobras del empresario; la deferencia de la PGR, que atendió la presentación de una demanda de Ahumada en un hotel capitalino; la resistencia de esa institución a iniciar una averiguación previa por lavado de dinero; la extraña muerte del ex funcionario Alejandro Balderas Méndez, ligado al magnate; los nexos de amistad del dueño del Grupo Quart con el procurador Macedo de la Concha; la posible participación de Ahumada en la campaña electoral de Fox; la presunta mano de la Presidencia de la República y de la fundación Vamos México en la difusión de los *videoescándalos* de Bejarano e Ímaz, en el acto de recibir dinero; el empecinamiento de Fernández de Cevallos en proclamarse defensor “informal” de Ahumada, quien le fue presentado por Juan Collado abogado defensor de Raúl Salinas de Gortari.

Más allá de las contradicciones y las adivinanzas —algunas de ellas con un claro tinte político e ideológico— que siguieron tras la onda expansiva sobre la detención de Ahumada en Cuba, la noticia fue que no hubo noticia. Tal situación fue abonada por el mutismo del gobierno isleño en torno al caso; con lo cual aumentaron las especulaciones.

Un tema inexplicable sobre el *affaire* de la fuga y posterior detención de Ahumada fue por qué ninguna autoridad mexicana detectó su salida desde el Distrito Federal o de cualquier otro punto del territorio nacional. En todo viaje de un avión privado el piloto debe realizar un plan de vuelo, con la ruta y el itinerario, el destino y el tiempo previsto para cubrir el recorrido. Pero además deben incluirse los nombres de tripulantes y pasajeros, y todos deben pasar por la aduana y migración. Si, como se dijo en un principio, Ahumada salió en su avión privado desde el aeropuerto de Toluca, ¿por qué no quedó ningún registro? ¿Recibió el empresario apoyo de alguna autoridad federal encargada de controlar y registrar el vuelo? ¿Alguien había facilitado su huida? ¿Quién?

#### AHUMADA, CUBA Y LA TEORÍA DEL COMLOT

El 5 de abril, seis días después de haber sido detenido en La Habana, la Fiscalía General de Cuba le dictó a Ahumada prisión preventiva con fines de extradición. Ante “la gravedad y complejidad de los hechos”, en un caso que calificó como “delicado y de incuestionable connotación política”, el fiscal Luis Lorenzo Palenzuela dispuso investigar los “daños ocasionados” por el empresario en la isla y le dictó prisión provisional en respuesta a la petición mexicana de arraigarlo con fines de extradición.<sup>64</sup>

La situación de Ahumada, quien entró con visa de turista a Cuba pero reportó un falso lugar de hospedaje, quedó consignada en el expediente de fase preparatoria número 19 de 2004 del órgano de Instrucción Penal del Departamento de Seguridad del Estado de Ciudad de La Habana. Según el fiscal, “los hechos expuestos e informados” por la Interpol y la embajada mexicana en Cuba “ponen en riesgo la seguridad del Estado cubano, en una coyuntura especialmente peligrosa para el país”. Tales hechos fueron expuestos en una petición de la Interpol el 12 de marzo anterior, para que Cuba “informe los movimientos de Ahumada, buscado en relación con un caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)”, y en la nota diplomática entregada por la embajadora de México, Roberta Lajous, al canciller cubano Felipe Pérez Roque el 31 de marzo, “pidiendo la detención de Ahumada con fines de extradición por fraude contra el gobierno del Distrito Federal”.<sup>65</sup>

Cuba había actuado con prontitud en cumplimiento de un requerimiento internacional. Correspondía ahora a México, en particular a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, integrar el documento que serviría de base legal para reclamar al empresario Ahumada a Cuba. El trámite se sustentaría en el Tratado de Extradición Recíproca de Delincuentes suscrito por ambos países en 1930. El 27 de abril, 13 días antes de que venciera el plazo legal de

40 días para que el gobierno federal fundamentara la solicitud de extradición, la PGR recibió de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el expediente con las pruebas ministeriales para acusar a Ahumada por su presunta responsabilidad en el delito de fraude genérico por 31 millones de pesos en perjuicio del gobierno capitalino.

Pero un día después ocurrió lo que el periódico mexicano *Milenio* denominó en su primera plana como un “*Fidelazo*”.<sup>66</sup> De manera sorpresiva, temprano por la mañana del 28 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano solicitó a la sede local de la Interpol que informara a la sección mexicana la decisión unilateral de deportar al dueño del Grupo Quart a México, sin imputarle cargos y sin esperar la solicitud formal de extradición mexicana. Poco después la embajadora de México en la isla, Roberta Lajous, fue llamada a la cancillería en La Habana, donde el viceministro Bruno Rodríguez Parrilla y el director para América Latina, Aramis Fuentes, le informaron sobre la decisión de deportar a Ahumada Kurtz. Luego se hizo público un comunicado con los pormenores del caso y el anuncio de que a las tres de la tarde Ahumada sería enviado a México en una aeronave de Cubana de Aviación.

No obstante que cumplía con todas las formalidades del caso, el comunicado de la cancillería cubana contenía elementos políticos mismos que fueron interpretados como “inadmisibles juicios de valor” por su contraparte mexicana, lo que a la postre desataría una nueva confrontación diplomática entre ambos países. En su parte más controversial, decía textual el comunicado:

Carlos Ahumada Kurtz ha declarado que la operación realizada con empleo de videos sobre corrupción difundidos en México fue calculada deliberadamente para alcanzar objetivos políticos y planificada con meses de antelación.

La investigación realizada en Cuba demuestra que los hechos relacionados con el señor Ahumada Kurtz y el escándalo público desatado en torno a ellos tienen una incuestionable connotación política y afectan, de un modo u otro, tanto a funcionarios y autoridades del gobierno como a otras personalidades políticas de ese país. Se trata de cuestiones absolutamente internas sobre las que a Cuba no le corresponde emitir juicios.

Cuba no desea en modo alguno inmiscuirse en los asuntos internos de México. Se nos ha mezclado indebidamente en ese escándalo.

Por tanto, el gobierno cubano, fiel a su invariable política de absoluta transparencia, cuya ética no transige con la manipulación política y que mantiene una inalterable lealtad a sus principios, ha decidido proceder a la inmediata deportación a México de Carlos Ahumada Kurtz.

El Ministerio de Relaciones Exteriores cubano explicó la deportación con base en tres argumentos: México no había pedido aún la extradición formal de Ahumada, “pese a que ha transcurrido casi un mes” desde que solicitó la detención provisional; la petición de la Interpol de arrestar a Ahumada fue por lavado de dinero, mientras que la demanda mexicana de arresto provisional “sólo recogía un presunto delito de fraude genérico”, y la petición de interrogatorios (por parte de la procuración de justicia mexicana a través de la vía diplomática) se realizó por cuatro averiguaciones previas “relacionadas con procesos en los cuales Ahumada comparece como

denunciante o testigo, pero en ningún caso como acusado”.

En otras palabras, el gobierno cubano detalló fallas e inconsistencias en las gestiones oficiales mexicanas y dio a entender que el gobierno de Vicente Fox y la PGR no estaban trabajando para acusar a Ahumada por lavado de dinero. Al respecto, según declararía después el subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, esa dependencia estaba investigando a Carlos Ahumada por lavado de dinero, narcotráfico, venta de armas y tráfico de migrantes. “La acumulación de una fortuna de al menos 50 millones de dólares en sólo 10 años no cuadra y rompe con toda lógica empresarial [...] debió ser un mago de las finanzas, y no veo que lo sea. Es un cuate inteligente y abusado, pero tiene un corte más de tipo delincencial que el de un hombre brillante en las finanzas”, explicó Santiago Vasconcelos.<sup>67</sup>

El titular de la SIEDO, quien describió a Ahumada como “un personaje seductor, inteligente, amoral, extraordinariamente ambicioso y sin límites” —componentes de una personalidad que podía rebasar cualquier barrera—, consideró que el dueño del Grupo Quart pudo crear múltiples empresas de “fachada” con algún fin ilegal y advirtió que los negocios relacionados con la industria de la construcción (las 21 firmas de Ahumada estaban vinculadas a ese ramo) y las organizaciones deportivas (era propietario de los equipos de fútbol Santos y León) son muy socorridas para lavar dinero ilícito.<sup>68</sup> Una hipótesis de la PGR, dijo el funcionario, “es que Ahumada pudo haber lavado dinero del crimen organizado, se lo quedó y ahora no sabe cómo reponerlo”. Eso explicaría el temor del empresario de ser asesinado y el uso de chaleco antibalas.

Más allá del manejo de las formas y los tiempos en una situación de crisis, el documento del Ministerio del Exterior cubano fortalecía la hipótesis de la conspiración tantas veces enunciada por Andrés Manuel López Obrador. Así lo interpretaron y difundieron en sus primeras planas dos medios impresos mexicanos de signo ideológico contrario: *Reforma* y *La Jornada*. En el primero, la nota de portada del jueves 29 de abril rezaba: “Confiesa Ahumada conspiración: Cuba”.

En el segundo, una sola palabra definía la situación: “Complot”. Y en un cintillo, complementaba: “Los videos, plan con objetivos políticos, confesó Ahumada en Cuba”.

Por otra parte, la llegada de Carlos Ahumada al Distrito Federal derivó en una nueva confrontación entre las procuradurías federal y capitalina. Cuando el empresario fue entregado por agentes cubanos a elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) a las 4:45 de la tarde, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, dio inicio un vergonzoso desaseo en los procedimientos: se recluyó a Ahumada en el hangar de la PGR y se negó el acceso al edificio y al deportado a los funcionarios y médicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,



quienes, encabezados por el titular de la dependencia, Bernardo Bátiz, se presentaron en el lugar.<sup>69</sup>

#### CUBA, QUÉ LINDA ES CUBA...

En el ínterin ocurrió otro par de hechos que vendrían a fortalecer la teoría de la conspiración. El 5 de abril, el mismo día en que la Fiscalía General de Cuba le dictó a Carlos Ahumada prisión preventiva con fines de extradición, agentes del Departamento de Seguridad del Estado habían detenido en La Habana a Antonio Martínez Ocampo apoderado legal del empresario corruptor. A través de una escueta nota diplomática, la cancillería local notificó el hecho a la embajada mexicana el 16 de abril; la noticia trascendería en México tres días después.<sup>70</sup>

Según la misiva, Martínez Ocampo llegó a Cuba el 27 de febrero en compañía de Ahumada, y “con motivo de las investigaciones que se practican en el expediente de fase preparatoria [contra Ahumada], se le decretó medida cautelar de prisión provisional”.<sup>71</sup> Las autoridades habaneras no especificaron bajo qué cargos. Miembro de los consejos de administración de varias empresas del Grupo Quart y considerado “mano derecha” y “testaferro” de Ahumada Kurtz, sobre Martínez Ocampo pesaba una orden de aprehensión en México pero no había sido *boletinado* por la Interpol. Fue deportado a México el 3 de mayo y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad fue trasladado del aeropuerto capitalino a la sede de la SIEDO para que declarara en torno a la averiguación previa que se llevaba a cabo en contra de Ahumada Kurtz por presunto lavado de dinero.<sup>72</sup>

El 21 de abril se conocía en México de otra detención en Cuba: la de Enrique Arcipreste del ábrego, principal protagonista de otro sonado caso que involucraba al Gobierno del Distrito Federal.<sup>73</sup> Arcipreste, quien se ostentaba como beneficiario de la indemnización de 1 810 millones de pesos por la expropiación del Paraje San Juan, en Iztapalapa,<sup>74</sup> había sido requerido en México por falsificación de documentos y fraude procesal, y se hallaba prófugo de la justicia desde hacía tres meses.<sup>75</sup> De manera críptica, mediante una “nota verbal”, la cancillería cubana informó a Tlatelolco sobre la detención de Arcipreste “en el contexto de las investigaciones contra el acusado Carlos Agustín Ahumada Kurtz”.<sup>76</sup>

La presunta conexión Ahumada-Arcipreste fue resaltada en las primeras planas de la prensa el día siguiente: “Capturan en Cuba ahora a Arcipreste. La medida en el marco del caso Ahumada”, destacó *El Universal*. “Carlos Ahumada, vinculado al caso Paraje San Juan”, fue la principal de *Milenio*. “Capturan en Cuba a Arcipreste; lo ligan con Ahumada”, tituló *La Jornada*.

Juan Collado, abogado de Ahumada, negó al principio conocer vínculos entre su

cliente y Arcipreste. Lo mismo hizo Cristina Padilla Hernández, abogada de Arcipreste y de Ahumada.<sup>77</sup> Sin embargo, sendos reportes periodísticos mencionaron que Ahumada y Arcipreste “se conocían y apoyaban mutuamente”. Así lo consignó el diario *Reforma* en una información donde señalaba que “el 26 de octubre del 2003 luego de presenciar un partido de futbol en León, Guanajuato, Arcipreste viajó con Ahumada en su avión, de León a Toluca, y de la capital mexiquense volaron en helicóptero a las instalaciones de *El Independiente*, en la ciudad de México”.<sup>78</sup> Agregaba la versión: “Arcipreste dio una entrevista exclusiva a ese medio acerca del litigio sobre el Paraje San Juan. Fuentes del diario recuerdan que Ahumada estuvo presente en la mayor parte de la entrevista, a la cual también asistieron sus abogados comunes”.<sup>79</sup> A su vez, en una nota informativa, *Milenio* señaló que

el único eslabón entre ambas partes [...] es el que proporcionan sus respectivos abogados: tanto Arcipreste como Ahumada son defendidos por el mismo grupo de profesionales, Cristina Padilla y Amado Anaya, quienes llevan la demanda del primero contra el Gobierno del Distrito Federal y del segundo en el caso del equipo de futbol León. Padilla y Anaya viajaron en el avión de Ahumada Kurtz, según consta en la bitácora de vuelo del *jet star* propiedad del empresario.<sup>80</sup>

No obstante esas evidencias, al testificar en el marco de la visita consular que le hiciera la primera secretaria de la embajada de México en la isla, Olga García Guillén, en Villa Marista, donde estaba detenido, Arcipreste del Ábrego afirmó

que no conoce a Carlos Agustín Ahumada Kurtz, que nunca lo ha visto en persona ni ha cruzado palabra con él; que el 24 de diciembre de 2003 viajó a Cuba en un avión particular, pero que desconocía que fuera del dueño del Grupo Quart, y que viajó en el avión a propuesta de los abogados Alberto Pantoja Rojas y Amado Anaya Méndez, pero que desconocía que ellos trabajaran para Ahumada.<sup>81</sup>

De acuerdo con la versión oficial difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, los litigantes de Ahumada “le ofrecieron financiamiento durante el proceso judicial del llamado Paraje San Juan y firmó un contrato con ellos, en el que se llevarían un porcentaje si ganaban el caso”.<sup>82</sup>

A partir de esos datos, Miguel Ángel Granados Chapa concluyó que el viaje de Arcipreste a Cuba “resultó de la alianza estratégica que habían entablado meses antes Ahumada y el propio presunto propietario del Paraje San Juan”.<sup>83</sup> Según el periodista del Grupo Reforma, *Proceso* y Radio UNAM, Ahumada “entró en la escena” cuando Arcipreste vio alejarse paulatinamente la esperanza de una cuantiosa indemnización. A través de sus abogados Cristina Padilla, Amado Anaya y Alberto Pantoja, “ofreció a Arcipreste apoyo financiero y cobertura periodística que reforzara su posición”. Ahumada obtendría con ello no sólo una eventual participación en la enorme suma que Arcipreste esperaba cobrar sino “dirigir otro venablo<sup>84</sup> contra Andrés Manuel López Obrador, contra quien hacía armas en consonancia con la inquina dirigida al jefe de gobierno, confesada a la periodista Olga Wornat”.<sup>85</sup> Como señaló el influyente

periodista, no es inusual que abogados pacten con sus clientes el cobro de honorarios sujeto a los resultados. Pero “es menos frecuente que aporten además financiamiento y trato amistoso”.<sup>86</sup> De paso destacó la “flaca memoria” de Arcipreste, quien declaró en Cuba no conocer a Ahumada. “Tan lo conocía —escribió— que cuando en diciembre se dictó orden de aprehensión en su contra escapó de México en el avión en el que ya también había viajado.”<sup>87</sup> Enrique Arcipreste fue deportado a México por las autoridades cubanas el 4 de abril de 2004, y tras su arribo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez y las revisiones de rigor, fue internado en el Reclusorio Norte.

De manera inesperada, el 27 de mayo siguiente la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) descubriría “por casualidad” cuatro expedientes que probaban que el Paraje San Juan siempre había sido propiedad de la nación. Eran 171 fojas que desde 1968 acumulaban polvo en los archivos de una dependencia que aún tenía que desahogar 19 000 solicitudes similares.<sup>88</sup> El “hallazgo” se produjo como resultado del “inventario” de terrenos nacionales que realizaba la SRA. A raíz del descubrimiento, la secretaría de Estado concluía que la expropiación del predio de 306 hectáreas realizada por Carlos Salinas de Gortari en 1989 había sido injustificada.

Ante esta situación, el titular de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, reconoció que el jefe de gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador, no debía pagar la indemnización de 1 810 millones de pesos que había determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anunció, también, que solicitaría a la Procuraduría General de la República que ejerciera las acciones legales correspondientes contra Enrique Arcipreste del ábrego.<sup>89</sup>

Parecía llegar a su fin un proceso legal irregular y viciado, que exhibía la ineficiencia gubernamental y la venalidad de las dependencias del Poder Judicial o bien que, como había argumentado AMLO, era una prueba fallida más de la mala fe con que había actuado el foxismo en su contra. Esta última opción fue la que se manejó en el editorial oficial de *La Jornada*, al comentar el hecho: “El *hallazgo* de la SRA [...] parece manifestar [...] más bien la desesperación y el empantanamiento del gabinete foxista, más enredado que nunca en lo que se percibe como una conspiración para destruir mediática, política y jurídicamente al titular del Ejecutivo capitalino”.<sup>90</sup>

#### MÉXICO Y LA HABANA AL BORDE DE LA RUPTURA

El 28 de abril, el gobierno de Cuba deportó a Ahumada sin imputarle cargos. Las tensiones en las relaciones diplomáticas México-Cuba se agudizaron el 1° de mayo. Ese día, en La Habana, ante un millón de cubanos reunidos en la Plaza de la

Revolución con motivo del mitin del Día Internacional de los Trabajadores, el presidente Fidel Castro dijo en una parte de su alocución:

En México, pueblo entrañable y hermano para todos los cubanos, el Congreso Nacional solicitó en vano a su presidente abstenerse de apoyar la resolución que le demandó el presidente Bush. Duele profundamente que tanto prestigio e influencia ganados por México en América Latina y en el mundo por su intachable política internacional, emanada de una revolución verdadera y profunda, hayan sido convertidos en cenizas [...] Más de la mitad del territorio de México le fue arrebatado por su vecino del norte y enormes retos amenazan al que resta. Prácticamente la frontera de Estados Unidos con México no está ya en el río Bravo del que hablaba Martí. Estados Unidos está mucho más adentro de México. Aquella frontera es hoy la línea de muerte, donde alrededor de 500 mexicanos pierden la vida cada año tratando de cruzarla. Todo en virtud de un brutal y despiadado principio: libre tránsito para los capitales y las mercancías; persecución, exclusión y muerte para los seres humanos. Pese a ello, millones de mexicanos corrieron ese riesgo. Hoy el país recibe más ingresos por sus remesas que por las exportaciones de petróleo.

¿Acaso una situación tan desigual e injusta se resolverá votando resoluciones contra Cuba en Ginebra y acusándola de violar los derechos humanos? [...] Lo peor y más humillante para México fue que las noticias relativas a su votación en Ginebra, tanto el día 15 como el 22, eran anunciadas desde Washington.<sup>91</sup>

Con el telón de fondo del caso Ahumada, el mensaje de Castro fue inequívoco sobre el punto de deterioro que habían alcanzado las relaciones bilaterales. Peor, incluso, que la crisis que se había desatado en marzo de 2002, cuando el presidente cubano reveló que Fox había impuesto condiciones a su asistencia a la Cumbre sobre Financiación para el Desarrollo convocada por la Organización de las Naciones Unidas en Monterrey, a fin de no causar un disgusto al presidente estadounidense George W. Bush. La bochornosa situación derivó en el famoso “comes y te vas”, que se convertiría en símbolo de la torpeza político-diplomática de la administración foxista.

#### JUEGO RUDO

El domingo 2 de mayo los hechos se precipitaron. En una conferencia de prensa conjunta de los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Santiago Creel y Luis Ernesto Derbez, se anunció la decisión unilateral del gobierno foxista de retirar a la embajadora mexicana en La Habana, Roberta Lajous; solicitar al gobierno de Fidel Castro el retiro inmediato de su embajador Jorge Bolaños, en un “término máximo” de 48 horas, y se declaró “persona *non grata*” al consejero para Asuntos Políticos de la representación diplomática cubana Orlando Silva, por “francas violaciones a la Convención de Viena”, quien debería abandonar de inmediato el territorio mexicano.<sup>92</sup>

Las relaciones diplomáticas quedaban reducidas al rango de encargados de negocios y al borde de una ruptura total. ¿La causa esgrimida? “Injerencia indebida” del gobierno de la isla en asuntos internos de México. Creel adujo, también,

actividades “inaceptables”, “fuera del marco institucional”, realizadas en México por “dos funcionarios del gobierno” cubano, José Arbesú y Pedro Lobaina altos dirigentes del Partido Comunista de Cuba, el primero jefe del Departamento América del Comité Central del PCC y el segundo jefe de la Sección México del mismo. El comunicado oficial de México señaló que “la Secretaría de Gobernación se reserva, en términos de ley, la información detallada de lo sucedido”.

Entre las razones esgrimidas, Derbez añadió las declaraciones de la cancillería cubana ante la deportación de Carlos Ahumada; el discurso del presidente Fidel Castro del 1° de mayo y la “injerencia directa en asuntos internos” de México de los dos cubanos aludidos. Como consignó entonces la columna “Rayuela” de *La Jornada*: “Mejor hubiera sido aducir que las palabras de Castro eran inadmisibles. Mejor hubiera sido reconocer que la entrega de Ahumada no convenía. Todo, menos hacerlo tan desaseadamente”.<sup>93</sup>

Un día después, hechos ya añicos las formas y el lenguaje diplomáticos, al tratar de explicar los motivos del súbito enfriamiento de relaciones con Cuba y rechazar que fueron producto de un “arrebato”, Santiago Creel advirtió a los actores políticos y sociales locales: “Para quedar claros, el problema es con Castro [...] que nadie tome banderas en contra del gobierno de México”.<sup>94</sup> Y con una “jeringonza cantinflasca” —según reseñó un columnista del diario *Reforma*—,<sup>95</sup> habló de la “transparencia” del gobierno “democrático” mexicano, pero se escudó en el “derecho de reservarnos información [...] no es cuestión de informar a la opinión pública”. La norma invocada por el secretario de Gobernación estaba contenida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que califica como “información reservada y confidencial” aquella cuya difusión pueda “comprometer la seguridad nacional”.<sup>96</sup>

#### QUIEN A VIDEO MATA, A VIDEO MUERE

El miércoles 5, el canciller Pérez Roque dio una “lección de diplomacia” a México.<sup>97</sup> En una insólita conferencia de prensa que se prolongó durante casi cuatro horas en la capital habanera, ante 129 periodistas que representaban a medios de 32 países y que tuvo una audiencia masiva directa en México a través de las cadenas de radio y televisión nacionales,<sup>98</sup> el ministro del Exterior cubano expuso de manera sólida, apasionada y contundente pero al mismo tiempo diplomática y mesurada, las razones y el papel de su gobierno en la *crisis de los videoescándalos*. Asimismo, demostrando un desempeño bilateral apegado a las normas legales, exhibió la inexperiencia y la improvisación de su contraparte mexicana, aunque dejó un amplio margen para la recomposición de las relaciones bilaterales a futuro.

El ministro cubano respondió todos los cargos formulados por México, dijo que

fueron parte de una “cortina de humo” del gobierno foxista, pero no contraatacó, cuidándose de no escalar el conflicto. Pérez Roque afirmó que la crisis fue creada por “la actuación injustificable, irreflexiva y soberbia” del gobierno de Fox e interpretó el diferendo como un intento por “desviar la atención” sobre el escándalo abierto en México por el caso Ahumada y “las crecientes sospechas en ese país sobre la existencia de un complot”.<sup>99</sup> Para ello agregó, México “ha creado una confrontación diplomática, que es totalmente artificial, usando pretextos que son insostenibles”.<sup>100</sup>

Con habilidad y responsabilidad, eludió responder las reiteradas preguntas de los periodistas acerca de los nombres de los políticos y funcionarios mexicanos involucrados en la “conspiración” de los videos de Ahumada,<sup>101</sup> fragmentos de los cuales fueron exhibidos en la sala. Un breve segmento de cuatro minutos, de las 40 horas de grabaciones que según dijo Pérez Roque tenía en su poder la seguridad cubana, exhibía al empresario Ahumada sentado en un sofá de brocado color ocre pasado de moda, desenvuelto y con buen semblante, cuando le decía a sus interlocutores:

Le di los videos porque era mi forma de probar, era mi manera de demostrar lo que me decían. ¿Cómo demostraba ese hecho? Pero mi intención, ni mi idea era que se publicaran en la televisión; ya después me dicen ellos que sí es importante que se publiquen en la televisión; porque yo no quería soltar los videos, porque era, de alguna manera, mi única forma de poder negociar lo que estaba queriendo negociar, o sea, que me ayudaran. Y, bueno, lamentablemente, terminé soltándolos —los videos— y terminé dándolos todos, y hasta ahorita no me dieron nada; porque, bueno, la protección jurídica no me la han dado, al contrario, me gané que me acusaran de lavado de dinero, y la económica tampoco me la han dado.<sup>102</sup>

Varias preguntas de los periodistas insistieron en que identificara a quiénes se había referido Ahumada como “ellos”, a lo que Pérez Roque se negó, argumentando que la respuesta deberían darla las autoridades mexicanas luego de investigar al empresario. En relación con la presencia de Ahumada, Ocampo y Arcipreste en Cuba y concretamente a la interrogante sobre “¿quién mezcló indebidamente [a] esos tres personajes; ellos, a los que se refiere Ahumada o alguna autoridad mexicana? ¿Quiénes mezclaron a Cuba?”, el ministro respondió:

Bueno, ellos tres lo hicieron al escoger a Cuba como lugar donde vinieron a refugiarse. Si ello obedeció a un plan y otros detrás de ellos le sugirieron venir, no lo sé. Si estuvieron otros detrás, no lo sé; pero de cualquiera de las dos maneras, al final Cuba terminó involucrada en el tema, porque estaban aquí, Cuba los arrestó, y entonces fue más involucrada Cuba, cuando comenzaron las especulaciones de que Cuba lo quería proteger; de que Cuba seguramente lo usaría para negociar el voto de México en la Comisión de Derechos Humanos; de que Cuba estaba manipulando; de que Cuba no quería cooperar.<sup>103</sup> Por primera vez en muchos años, los cuatro principales periódicos de México coincidieron al día siguiente (6 de mayo) en su foto de portada: una imagen que exhibía al canciller cubano Felipe Pérez Roque observando en una pantalla a Carlos Ahumada mientras corría el video. Asimismo, los titulares recogieron el fondo del asunto: “Negoció Ahumada videos. Autoridades le ofrecieron protección: Pérez Roque”, cabeceó *El Universal*; “Lanza Cuba sus misiles. Presentan videos donde Ahumada acepta que intentó negociar con autoridades mexicanas”, señaló *Reforma*; “Negoció con el gobierno. Ahumada dijo que canjeó los videos por protección” puso *Milenio*; “Ahumada: fue de ellos la idea de exhibir los videos”, tituló *La Jornada*.

En relación con las “actividades clandestinas” de los “agentes cubanos”, señalada como una “injerencia” en los asuntos internos de México y que llevaron a declarar “persona *non grata*” al diplomático Orlando Silva, el canciller cubano identificó como interlocutores de Arbesú y Lobaina a 15 personalidades de la vida pública local entre ellos, cuatro connotados políticos del PRI, incluido su presidente, Roberto Madrazo y Beatriz Paredes, presidenta de la Fundación Colosio y ex embajadora en Cuba; cinco del PRD, entre los que figuraban Cuauhtémoc Cárdenas y la actriz y diputada María Rojo; el senador Diego Fernández de Cevallos, del PAN, pro gubernamental; dos dirigentes del Partido del Trabajo; el ex presidente Luis Echeverría, la directora de *La Jornada* Carmen Lira y Jesús Escamilla, del Comité de Solidaridad con Cuba.

Señaló, también, que los únicos que se mostraron satisfechos con las decisiones de México fueron el secretario de Estado, Colin Powell; el gobernador de Florida, Jeff Bush, y el ex canciller mexicano —“¿quién si no?”— Jorge Castañeda.

Pérez Roque consideró como una “señal positiva” la nota que le enviara la víspera su homólogo Ernesto Derbez, donde le expresaba la posibilidad de retomar “el camino de la normalidad diplomática” pero advirtió que los eventuales pasos en ese sentido tenían que ser “sobre la base de la dignidad y la soberanía de cada país”. Pese al tono y lo extenso de su intervención, fue evidente que Pérez Roque tenía instrucciones de no profundizar la crisis diplomática con México. En rigor, en su larga exposición no hubo grandes revelaciones; el canciller cubano dosificó la información. Cuba guardó sus cartas para esperar la reacción del gobierno mexicano.

El 6 de mayo, durante una conferencia conjunta en Palacio Nacional para contestar el informe del jefe de la diplomacia cubana, los secretarios Luis Ernesto Derbez y Santiago Creel insistieron en que México mantenía “la mano extendida” a La Habana.<sup>104</sup> El gobierno de Fox no tiene “interés” ni “razón” para romper relaciones diplomáticas con Cuba, dijo el titular de Tlatelolco.<sup>105</sup> A su vez el secretario de Gobernación volvió a negar la teoría del complot. Y cuando un reportero le preguntó: “¿Es usted el alto funcionario que negoció con Ahumada?”, Creel respondió: “¡Falso de toda falsedad, no soy ese funcionario!”<sup>106</sup>

Los argumentos de Santiago Creel para justificar la presunta injerencia de dos funcionarios del Partido Comunista Cubano en México y la expulsión del consejero político de la embajada de Cuba, Orlando Silva, no convencieron ni al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Juan de Dios Castro ex asesor jurídico de la Presidencia de la República. Castro consideró “lo más normal que algún funcionario cubano se haya entrevistado con algunos personajes, funcionarios o no, del gobierno y pueblo mexicano”. Y aclaró que el artículo 10 de la Convención de

Viena “evidentemente no exige que determinen si se toman tres cafés, si hablan de la situación política mundial, si se entregan puros, parabienes o si hay conversaciones de más profundidad. Eso no lo marca como violación el derecho internacional”.<sup>107</sup>

Ese mismo día, en Washington, el presidente Bush y el secretario asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roger Noriega, anunciaban una nueva estrategia de desestabilización contra Cuba. Entre las medidas propuestas, se hacía la convocatoria para que se sumaran al plan países “que en su momento apoyaron a Cuba” y que actualmente “han comenzado a pronunciarse públicamente” en su contra, fue una alusión directa al gobierno de Vicente Fox y sus infundados desfiguros diplomáticos de esos días contra las autoridades de la isla. Resultó evidente que la crisis diplomática provocada por el titular del Ejecutivo mexicano en las relaciones con Cuba coincidió con las peticiones de Washington y encajaban a la perfección con los designios mesiánicos de Bush de llevar la “libertad” a los cubanos.

Si realmente se había tratado de una desafortunada coincidencia el gobierno mexicano debía deslindarse de la campaña estadounidense por derribar a Fidel Castro y restituir a corto plazo, y a plenitud, los nexos diplomáticos con La Habana.

Así lo hizo Fox un día después. “México no se sumará de ninguna manera a esta propuesta que se ha hecho contra la soberanía de Cuba y no aceptaremos injerencias en aquel país de algún otro país”, afirmó el presidente de México durante una gira por Culiacán Sinaloa.<sup>108</sup>

El 18 de julio siguiente, casi 50 días después de haber llegado al umbral de una ruptura diplomática, en el marco de una visita de Derbez a La Habana, la relación bilateral entre México y Cuba reflató a un nivel que los cancilleres de ambos países calificaron como una “normalización”. Ese día, Luis Ernesto Derbez y Felipe Pérez Roque acordaron el regreso a sus puestos de la embajadora mexicana en Cuba, Roberta Lajous, y del jefe de la misión cubana en México Jorge Bolaños. La fecha escogida para la reinstalación de los diplomáticos fue el 26 de julio, aniversario del asalto al Cuartel Moncada e inicio de la primera etapa de la Revolución cubana. La decisión pareció un guiño de desagravio a la nación caribeña.

Ese 26 de julio, el embajador Bolaños presidió la celebración de la fiesta nacional de Cuba en la misión de la calle Presidente Masaryk. El hecho hizo evidente que el gobierno de Vicente Fox —quien en la emergencia, según se dijo, “quería una ruptura total”—<sup>109</sup> había tomado una decisión desproporcionada al ordenar rebajar las relaciones diplomáticas al rango de encargados de negocios. La restitución de los embajadores fue, sin duda, un primer paso formal en aras de una normalización diplomática, pero quedaban algunos asuntos políticos pendientes y las explicaciones en torno a la crisis más profunda en la historia de las relaciones entre ambos países. En principio, el informe con las misteriosas actividades de los “agentes cubanos” (Creel *dixit*) quedaría encapsulado en los archivos secretos de Gobernación y se



podrían conocer hasta 2016. Sin embargo según aventuró en diciembre de 2006 el periodista Raymundo Riva Palacio, fueron los “servicios de inteligencia estadounidenses” los que, tras entregar al gobierno mexicano “la ficha de diplomáticos cubanos”, le pidieron implícitamente que los “expulsara”. “Fox así lo hizo y, para ocultarlo, clasificó el episodio como secreto durante 12 años.”<sup>110</sup>

Mientras tanto, el malo de la película, el Jay Gatsby mexicano que había disparado la crisis de los *videoescándalos* y casi llevado a una ruptura de relaciones entre México y Cuba, en 58 días había perdido todas sus empresas, su periódico, sus equipos de fútbol, su dinero su libertad. Complotista calculador o víctima de las circunstancias Carlos Ahumada, el hombre que desnudó a la política mexicana tal cual es, seguía siendo desde la prisión la clave del complot o quien invalidaría su existencia. Tejedor de redes complejas ahora atrapado en ellas, Ahumada, corruptor en un país de corrompibles, poseía información que podría alterar el equilibrio de las fuerzas políticas del país y afectar la sucesión presidencial. Era, a todas luces, un preso incómodo.

## La danza del desafuero I. La PGR como instrumento político del poder

En medio de los *videoescándalos* y el *affaire* Ahumada se había venido incubando otro conflicto de grandes proporciones: el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. El asunto se aceleraría a partir del 14 de mayo de 2004 —el mismo día que el presidente Fox, durante una gira de trabajo en Varsovia, Polonia, negaba ser parte de un “complot” y querer llevar a juicio político a López Obrador—,<sup>1</sup> cuando la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó la averiguación previa 1339/FESPLE/2001 contra el jefe del Gobierno del Distrito Federal como presunto responsable de los delitos de abuso de autoridad y desacato a una resolución judicial.<sup>2</sup>

Tres días después, el 17 de mayo, la PGR solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que iniciara un juicio de procedencia para retirar el fuero a López Obrador por el caso El Encino un predio ubicado en Totolapa, delegación Cuajimalpa de Morelos en el Distrito Federal. Ese lunes quedó declarada la guerra política. Un peligroso juego estaba en marcha y una de las partes debía quedar eliminada. “Acorralan a AMLO”, fueron las ocho columnas de *Reforma*.<sup>3</sup> La nota de primera plana del diario capitalino evidenciaba una motivación política del régimen foxista: hacer abortar las aspiraciones presidenciales de López Obrador con base en el artículo 38 de la Constitución, que señala que ningún ciudadano puede ser candidato a puesto de elección popular si está sujeto a proceso criminal.<sup>4</sup>

Según informó entonces el subprocurador especializado en Delitos Federales de la PGR, Carlos Vega Memije, la dependencia había “acreditado” la violación del artículo 206 de la Ley de Amparo por parte del jefe de gobierno, al desacatar una decisión que lo obligaba a suspender los trabajos de apertura de las avenidas Carlos Graef Fernández y Vasco de Quiroga en el predio El Encino expropiado en Santa Fe, al poniente de la ciudad de México, el 10 de noviembre de 2000 por la jefa del Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles.<sup>5</sup> El juicio de amparo 862/2000 fue promovido por el supuesto propietario del predio, Federico Escobedo Garduño, un controvertido empresario titular de Promotora Internacional Santa Fe, quien había

estado dos veces preso acusado de actos fraudulentos.<sup>6</sup> El área expropiada eran dos franjas de terreno que medían en total 15 000 metros cuadrados, los cuales permitirían extender dos vialidades desde y hacia la lateral de la carretera México-Toluca, y servirían de acceso al hospital ABC.

#### PGR FACCIOSA Y HUIZACHERA

La reacción en el círculo cercano a López Obrador no se hizo esperar. Llegó el 17 de mayo, después de las diez de la noche, a través de un texto leído en conferencia de prensa por el subsecretario de gobierno del Distrito Federal, Martí Batres. El funcionario calificó como “irresponsable”, “arbitraria” y “fuera de la ley” la decisión de la PGR; dijo que la forma como se condujo el caso no sólo confirmaba un “complot” contra el jefe del Ejecutivo local sino que expresaba un “claro manejo político” cuyo fin era impedir la candidatura de AMLO en 2006, y de paso acusó al senador Diego Fernández de Cevallos de estar detrás del litigio de El Encino.<sup>7</sup>

Batres contextualizó el caso con la lucha desplegada por López Obrador, desde el comienzo de su administración, contra grandes acaparadores de predios públicos —a los que llamó “*coyotes*, verdaderos profesionales del despojo de cuello blanco”—, cuyo ejemplo más emblemático fue el incidente sobre el llamado Paraje San Juan, con su presunto dueño, Arcipreste del Ábrego.

Según Batres, el Ministerio Público federal no debió proceder a solicitar el desafuero de López Obrador, porque el delito de abuso de autoridad es clasificado como “doloso”, lo que hubiera implicado una instrucción expresa del jefe de gobierno para desobedecer, incumplir o violar, de manera intencional, la suspensión ordenada por el juez de distrito. Lo que nunca ocurrió. “Por el contrario, [AMLO] ordenó en su momento el acatamiento puntual de la orden suspensiva del Poder Judicial federal.” Por otra parte, dijo que resultaba “aberrante” que se quisiera proceder a desaforar a López Obrador “por el simple hecho de haber intentado construir una calle para darle servicio a un hospital”.

En la parte conclusiva del texto, el funcionario del Distrito Federal afirmó que la manera como se condujo el caso “no sólo confirma la colusión” entre autoridades judiciales y abogados influyentes, sino que “expresa un claro manejo político”:

En el fondo, al no funcionar la utilización del caso Ahumada para destruir políticamente a Andrés Manuel López Obrador, ahora se usa el caso El Encino para el mismo fin, pues no se buscó sancionar un supuesto incumplimiento de una suspensión ordenada por un juez sino la inhabilitación del jefe de gobierno con el propósito de evitar que pudiera ser eventualmente candidato a la Presidencia en 2006 [...] En otras palabras, nos quieren ganar a la mala.<sup>8</sup>

El país iba de controversia en controversia, de encono en encono y como tantas

veces antes, las posiciones se radicalizaron. Los políticos trataron de capitalizar el incidente en función de sus intereses partidarios. En las filas del PAN y del PRI hubo pronunciamientos en defensa de la ley. El líder de Acción Nacional, Luis Felipe Bravo Mena, rechazó que hubiera una “acción programada” para afectar la carrera política de López Obrador. “No tiene patente de corso o de impunidad por el simple hecho de ser aspirante a la presidencia ni es víctima de alguna persecución política del Estado.”<sup>9</sup> Fiel a su estilo el senador Diego Fernández de Cevallos manifestó: “Primero desata la guerra y luego pide amor y paz. Primero pide que se aplique la ley y luego dice que todo es un complot. ¡Yo creo que ya basta de payasadas!”<sup>10</sup> A su juicio, la argumentación de los perredistas era un “capote de distracción”, una “cortina de humo” para desviar la atención del caso judicial que involucraba al jefe de gobierno de la ciudad de México. También entró a la polémica el secretario de Gobernación, el presidenciable Santiago Creel: “Aquí no se trata de competencia política, futurismo o de estar pensando en elecciones, porque de otra suerte esto se va a politizar y va a tomar un camino equivocado, de victimización. Aquí hubo un incumplimiento, según el juez de una suspensión de amparo”.<sup>11</sup>

El 18 de mayo, en su acostumbrada conferencia de prensa matinal, López Obrador afirmó que fuera o no candidato a la Presidencia de la República, iba a defender el proyecto alternativo de nación del PRD para 2006. Y acusó a la PGR de “torcer la ley” para tratar de inhabilitarlo. “Se trata de una maniobra política; nos quieren ganar en la mesa [...] a la mala, porque este proceso llevaría, en el caso de que tuvieran éxito, a la inhabilitación. ¿Y qué es inhabilitarme? Poner en mi expediente que tengo antecedentes penales y no poder aspirar a ser candidato a ningún cargo. Tienen mucho miedo.”<sup>12</sup>

#### SIEMBRA DE TERRENOS, COCHUPOS DE ESPECULADORES

En definitiva, el foxismo seguía funcionando como una variable del antiguo régimen. En la tarea de liquidar a López Obrador se basaba en la política del silencio —la secrecía, Santiago Creel *dixit*— y la razón de Estado. Como escribió Rafael Segovia en *Reforma*, “la maniobra es demasiado burda y los medios utilizados excesivamente torpes”.<sup>13</sup> Otros actores se metieron a la pelea. Por espíritu de cuerpo, las máximas autoridades del Poder Judicial de la Federación emitieron un comunicado a la opinión pública donde calificaban como “carentes de fundamento” las imputaciones de “deshonestidad” contra jueces y magistrados que habían intervenido en el caso del predio El Encino.<sup>14</sup> En un hecho poco usual, sólo registrado en dos ocasiones en la historia contemporánea del Poder Judicial,<sup>15</sup> los plenos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal<sup>16</sup> señalaron de manera “categórica” su “confianza

generalizada” en el juez noveno de distrito en materia administrativa y en el séptimo tribunal colegiado de circuito, las dos instancias involucradas en el caso.

No obstante, en una acción que generó malestar en la cúpula judicial, el ministro retirado Juventino Castro y Castro consideró “grave” y como un “terrible error” de procedimiento la decisión del juez noveno, Álvaro Tovilla León, de darle vista a la PGR, cuando, según él, debió haber turnado el caso a la Suprema Corte. En declaraciones al programa *El Mañanero*, el ex miembro de la Corte aseveró que la Constitución y la Ley de Amparo establecen que en caso de que un juez incumpla una orden judicial, debe dirigirse a la Suprema Corte y decirle: “En mi concepto se incumplió la sentencia; ahora tú, Corte, aprecia lo que dicen la ley y la Constitución revisa si hay incumplimiento, si es excusable o no, si se agotó algún término, y, finalmente, puedes proceder a la destitución”.<sup>17</sup> La Ley de Amparo, añadió, establece que si la persona que no acató el fallo tiene fuero, “la Corte, pero la Corte”, es la que tiene que dirigirse a la Cámara de Diputados y decirle: “¡Quítale el fuero, porque definitivamente lo voy a suspender y lo voy a inhabilitar! [...] Es muy grave que un juez tenga independencia para dirigirse a la PGR y decirle: ‘Persígueme a fulano o zutano’ ”.<sup>18</sup>

De modo reactivo, en la que fue su primera alusión a la solicitud de desafuero de López Obrador por la PGR, el presidente Fox afirmó que él no daba “línea” a magistrados ni a legisladores y se reivindicó como titular del “primer gobierno de la democracia”. Dijo: “Quedó atrás el tiempo en que la impartición de justicia se subordinaba a consideraciones políticas y en el que el jefe del Ejecutivo intervenía en las resoluciones”.<sup>19</sup> En el caso El Encino, dijo, “la PGR no actuó *motu proprio*; sólo cumplió una orden del Poder Judicial”.<sup>20</sup>

La ofensiva contra López Obrador se dio en varios frentes. Así por ejemplo, el ex canciller y autodenominado candidato presidencial ciudadano Jorge G. Castañeda, sin llamarlo por su nombre, puso a López Obrador como ejemplo de “populismo político” y de “antitransparencia administrativa”.<sup>21</sup>

En defensa de López Obrador salió el secretario de gobierno capitalino, Alejandro Encinas, quien calificó como una “operación de Estado” la ofensiva contra su jefe. Encinas advirtió que los adversarios de López Obrador estaban “jugando con fuego” y desatando una “crisis política” que se podía salir del control de la autoridad federal. Consideró lamentable, también, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prestara a una “leguleyada” para inhabilitar al mandatario del Distrito Federal, y mencionó que el procedimiento de desafuero no debió concretarse, pues en ocho ocasiones anteriores se determinó que no había violación a la suspensión provisional y prueba de lo anterior era que se había iniciado una obra alterna al predio en litigio para dar salida al hospital, sin “utilizar un solo metro cuadrado de éste, por lo que estamos frente a un asunto de índole política, no jurídica”.<sup>22</sup>

Mientras tanto, el subprocurador Vega Memije echaba más leña al fuego. En una rueda de prensa afirmó que durante el desahogo de pruebas que había realizado el Ministerio Público federal para integrar la averiguación previa contra AMLO, al menos tres funcionarios del Gobierno del Distrito Federal habían “entregado” a su jefe: Estela Ríos, consejera jurídica y de asuntos legales del Gobierno del Distrito Federal; Carlos Heredia, director de Servicios Metropolitanos (Servimet), y José Agustín Ortiz Pinchetti, ex secretario de gobierno del Distrito Federal. Según el funcionario de la PGR, el Ministerio Público actuó exclusivamente contra López Obrador porque sus “colaboradores” lo señalaron como “único responsable” de que se violara un amparo. No se actuó penalmente contra ellos, aclaró, porque “se cuidaron” de cometer un delito. “Dijeron que informaron a su jefe y que éste no actuó.” Según Vega Memije, el delito de abuso de autoridad, presuntamente cometido por AMLO, estaba “concluido guisado y cocinado”.<sup>23</sup> Aunque López Obrador se echara para atrás y quisiera llegar a un arreglo con la autoridad, ya no podía; el ilícito estaba constatado y la justicia tenía que actuar. Es decir, no existía el perdón y el delito se perseguiría de oficio.

Sin embargo, dos de los implicados en el caso, Carlos Heredia y José Agustín Ortiz Pinchetti, desmintieron públicamente a Vega Memije, y después se reveló que, en su declaración ministerial, María Estela Ríos dijo haber recibido una instrucción de López Obrador para que acatara todas las órdenes que dieran los jueces en ese asunto.<sup>24</sup> Heredia, quien estuvo al frente de Servimet en el periodo 2000-2002 adujo que, por conducto de la Consejería Jurídica y Servicios Legales López Obrador le dio instrucciones “de acatar el mandato judicial [...] o sea, el jefe de gobierno cumplió [y] nosotros cumplimos al acatar inmediatamente ese mandato judicial y al mantener libres los accesos” al predio, por lo que “es falso” lo que dijo el subprocurador.<sup>25</sup>

Ortiz Pinchetti, diputado federal perredista en la coyuntura en que se produjo el pedido de desahogo, afirmó que “en ausencia” de su ex jefe López Obrador, y como “un asunto de rutina”, él había firmado una instrucción para que se suspendieran las obras en el predio El Encino. “Teníamos la política de ordenar que se respetaran inmediatamente esos decretos.”<sup>26</sup> En “El Encino, confesiones de un presunto responsable”,<sup>27</sup> Ortiz Pinchetti reveló que a principios de 2003, poco antes de que dejara su cargo en el gobierno capitalino tuvo una “amable reunión” con el general Macedo de la Concha durante la cual el procurador le preguntó qué había sucedido con la vialidad en el predio El Encino. Él le contestó que tenía entendido que la obra estaba suspendida hacía meses, lo que corroboró después: había quedado interrumpida hacía dos años y tuvo que construirse otra vía “muy costosa” para respetar “los derechos del quejoso”.

Después de ese “veranillo”, las relaciones entre los gobiernos federal y de la capital “se echaron a perder”. “Entonces percibimos que la Procuraduría ya no quería investigar, sino condenar.” En octubre de 2003 le llegó un “desagradable oficio”

donde se le notificaba que el agente del Ministerio Público lo señalaba como “presunto responsable” por haber “desobedecido el auto de suspensión definitiva”. Ortiz Pinchetti refutó la acusación y compareció en dos ocasiones por escrito ante la Procuraduría federal.<sup>28</sup>

Ortiz Pinchetti abundó en una entrevista sobre las presuntas irregularidades en torno al predio motivo del litigio. Dijo que cuando López Obrador asumió la titularidad del gobierno capitalino, se dieron cuenta de los “cochupos” que se hacían con terrenos baldíos que pertenecían al patrimonio de la ciudad de México. Con “información privilegiada” de desarrollos urbanos tipo Santa Fe, los especuladores “sembraban terrenos” con la obtención de un “certificado falso” en el Registro Público de la Propiedad, para después cobrar indemnización; el gobierno “se defendía de la forma más torpe de que era capaz y terminaba por entregar el dinero”. Ése, aseguró “es el *modus operandi*” de Federico Escobedo, presunto dueño de El Encino.<sup>29</sup> Por otra parte, consideró “irresponsable” a la administración de Vicente Fox, a quien criticó por su “falta de oficio y miras altas”. Para Ortiz Pinchetti no había duda: el móvil de la acción gubernamental era sacar “una ventaja inmoral, artera”, en una “competencia desleal” contra López Obrador. El riesgo, para el país, era deslizarse hacia una “restauración autoritaria”.<sup>30</sup>

#### LA BOLA NEGRA

A los ojos de la gente, el rigorismo legal estaba convirtiendo a López Obrador en una víctima del abuso de poder. Instrumento de golpeteo político y de presión, el procurador general de la República Rafael Macedo de la Concha, era visto como el abogado de Vicente Fox y no de los mexicanos. La parcialidad de la PGR y el doble discurso de su titular quedaron evidenciados una vez más el 31 de mayo cuando Andrés Manuel López Obrador reveló que de al menos 4 688 casos en los que autoridades de todos los niveles habían desacatado una resolución judicial, e incumplido sentencias de amparo, sólo se habían fijado en él.<sup>31</sup>

Apenas el 14 de mayo anterior, Fox declaró a los periodistas mexicanos que lo acompañaron en su gira por Polonia: “Nosotros no queremos desestabilizar, nosotros no queremos llevar a juicio político o a desafuero al jefe de gobierno del Distrito Federal, no tenemos ninguna intención de hacer eso. Queremos evitarlo a toda costa. Sin embargo, hay un desacato judicial, que nos ha presentado un juez. Hay que dejar que la acción de la justicia haga su tarea”.<sup>32</sup>

En su conferencia matutina, mostrando la portada de *Milenio*, el jefe de gobierno de la capital dijo: “Cómo es posible que de 4 688 denuncias judiciales que existen actualmente contra autoridades que son acusadas de incumplir sentencias de amparo,

se hayan fijado en nosotros para actuar penalmente; o sea, sacamos bola negra”.<sup>33</sup> López Obrador aseguró que él no había violado ninguna ley y agregó: “Todo esto es muy extraño, muy raro”. Insistió que a nadie se le había quitado el fuero o había sido destituido y mucho menos enviado a la cárcel, como era la pretensión en su caso por un asunto de ese tipo.

Tres días después, la sección instructora de la Cámara de Diputados notificó a López Obrador del inicio del proceso de desafuero en su contra, otorgándole un plazo de siete días naturales para responder en su defensa.<sup>34</sup> Se supo entonces que la “investigación” realizada por la Procuraduría General de la República para solicitar el juicio de procedencia estaba basada en notas y reportajes periodísticos. El Ministerio Público había decidido darle “valor indiciario” a informaciones publicadas en tres diarios.<sup>35</sup> Junto con una tarjeta informativa, las “pruebas” fueron suministradas a la PGR el 4 de febrero de 2004, por el abogado Fernando Espejel, apoderado legal de Promotora Internacional Santa Fe.

Se trataba de 35 notas, de las cuales 23 correspondían a *La Crónica de Hoy*, ocho a *Reforma* y cuatro a *El Universal*. La PGR consideró que “los originales de los diversos periódicos, que constan en la indagatoria, tienen valor indiciario de conformidad con lo establecido en el precepto 285 del Código Federal de Procedimientos Penales”.<sup>36</sup> Una de las pruebas era una nota del diario *La Crónica*, publicada el 6 de noviembre de 2001, sobre declaraciones del diputado del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Federico Döring, cuya cabeza decía: “El juez puede tramitar destitución de AMLO. La autoridad judicial no ha iniciado el trámite porque le tiembla la mano: Döring”.<sup>37</sup>

A todas luces se trataba de pruebas circunstanciales e indicios vagos y endeble, lo que en todo caso configuraba “un manejo faccioso de las evidencias”, como indicó entonces López Obrador.<sup>38</sup> No obstante, para la PGR, “a través de la prueba circunstancial”, se podía acreditar “por su articulación precisa, lógica, jurídica [...] que se encuentran acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad” del jefe de gobierno de la ciudad de México.<sup>39</sup>

López Obrador aseguró que su defensa estaría basada en su convicción de inocencia, y en ese sentido aceptó que prefería ir a la cárcel que negociar: “No voy a dejar trozos de dignidad en el camino”.<sup>40</sup> El 9 de junio de 2004 los principales diarios de circulación nacional publicaron un desplegado sobre el caso El Encino, con la firma del jefe de gobierno del Distrito Federal. Allí describía lo que, para él, lejos de ser un asunto legal constituía un uso evidente de “la ley y las instituciones” como “instrumentos de acoso y descalificación política”. Acusó al Ministerio Público federal de actuar “por consigna” y reiteró que no había ningún escrito o informe que demostrara que hubiera desobedecido las órdenes judiciales. “Tampoco nadie me inculpó y nunca se violó la suspensión definitiva del juicio de amparo.”<sup>41</sup>



Por si no tuviera suficiente, con un juicio de desafuero pendiendo sobre su cabeza, tras 100 días de acoso mediático y de una ininterrumpida ofensiva política sin precedentes en la historia contemporánea de México —donde se habían eslabonado todo tipo de acusaciones y ataques en su contra con el obvio propósito de hacer disminuir las intenciones de voto a su favor—, López Obrador debería afrontar un nuevo problema que, montado en las justas demandas ciudadanas de mayor seguridad en un centro comercial del sur del Distrito Federal, formaba parte de la agresiva campaña de sus adversarios para denostarlo y reforzar en la opinión pública la imagen de que desacataba las leyes. Como había dicho el ex canciller y autodefinido “agitador social” Jorge G. Castañeda,<sup>42</sup> había que eliminar a ese adversario “por las buenas, por las malas o como sea”.<sup>43</sup>

## La danza del desafuero II. El *affaire* Bejarano

No acababan de calmarse los ánimos ante la crisis de la inconformidad ciudadana por causa de la inmanejable inseguridad, cuando a comienzos de julio de 2004 surgiría una nueva fuente de conflictos derivada de las circunstancias que rodearon la renuncia de Alfonso Durazo Montaña a su cargo como coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República y secretario particular de Vicente Fox.

Durazo, quien en el pasado había estado muy ligado a Luis Donaldo Colosio, el asesinado candidato del PRI a la Presidencia representaba uno de los últimos remanentes en el gobierno foxista de una amplia coalición integrada por panistas, ex priístas, ex perredistas, empresarios y ex activistas sociales unidos en torno a la consigna del voto útil, que diera al cambio de mando del año 2000 una cobertura de pluralidad, amplitud y tolerancia. Por eso, su renuncia que cobraría estatus público el 5 de julio, fue un duro golpe para la credibilidad del presidente Fox.

Más importante aún, en su demoledora misiva de 19 cuartillas dirigida al titular del Poder Ejecutivo, Durazo confirmaba —por momentos de manera implícita— los principales señalamientos adversos que se formulaban desde la oposición política y la opinión pública a la administración foxista. En particular, en relación con la incompetencia y la falta de liderazgo de Vicente Fox, así como sus “pretensiones dinásticas” al querer que su esposa, Marta Sahagún fuera la candidata a la Presidencia por el Partido Acción Nacional.<sup>1</sup> La importancia del hecho, ahora, radicaba en que las severas críticas al mandatario surgían desde el seno de Los Pinos. Es decir, desde el centro de la operación política de la casa presidencial y del hombre que había sido el más cercano colaborador del mandatario.

Traduciendo el lenguaje elíptico utilizado en algunos párrafos de su carta de renuncia, Durazo decía que se iba, porque pensaba que la estrategia del gobierno de Fox se orientaba a propiciar, o al menos a tolerar, la construcción de una probable candidatura presidencial de Marta Sahagún y en el camino propiciaba la confrontación política con las otras fuerzas, además de que en ese mismo proceso

dejaba dudas respecto de si era Fox quien mandaba o era la señora Sahagún o ambos. En realidad, no había nada nuevo en esas afirmaciones y en esas dudas. La picaresca política mexicana las comentaba todos los días desde hacía meses. Pero ahora los hechos quedaban al descubierto y eran fundamentados por alguien proveniente del más íntimo y enterado círculo del poder.

Entre otros tópicos, sin mencionarlo por su nombre, Durazo se refirió en dos frases claves al conflicto entre el presidente Fox y el jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador. En la primera subrayó que “pretender decidir desde el gobierno quién será el próximo presidente, como quién no debe ser el próximo presidente, fue el pecado original del viejo régimen”. En la segunda, como parte del paralelismo que en varios pasajes ubicó con las prácticas políticas autoritarias de los gobiernos del PRI, Durazo advirtió: “Si no hay legalidad, equidad, democracia y arbitraje presidencial imparcial, la disputa electoral de 2006 podría llegar a convertirse en una repetición de las viejas y nocivas rondas de desconfianza sobre los resultados electorales. Y si las elecciones no se resuelven en las urnas, se van a resolver en las calles”. Según Durazo, había iniciativas que si bien eran válidas, “violentan coyunturalmente todos los esfuerzos de coordinación y acuerdo político, y nos llevan a perder, como país lo más por lo menos”. Además, agregaba, “no todos creen que atrás de todo este espectáculo jurídico-político que estamos padeciendo la situación es moralmente transparente”.<sup>2</sup>

No quedaba duda de que la nueva crisis política, que se agregaba a las anteriores, impactaba de lleno al gobierno federal y permitía presagiar que la cuesta de 2006 sería mucho más difícil de escalar de lo se hubiera esperado ante la consolidación de un “proceso de cambio” que, según el discurso propagandístico del régimen, buscaba afianzar el juego limpio, la rendición de cuentas y la transparencia por encima de los proyectos impulsados desde el poder. Las cosas parecían ser muy distintas de lo que expresaba la retórica gubernamental.

Cuando el 22 de agosto siguiente Vicente Fox fue entrevistado a bordo del avión presidencial *Benito Juárez* de la Fuerza Aérea Mexicana, descartó que fuera a buscar una salida política al proceso de desafuero que enfrentaba López Obrador. Dijo: “No comparto lo que se está diciendo, que hay que buscar una salida política. ¿Por qué? ¿Por qué hay que darle una solución política a un tema legal? No. Lo legal en lo legal. Lo político en lo político”.<sup>3</sup>

Habían transcurrido cinco meses de una guerra sin cuartel entre el presidente Fox y López Obrador. El fuego cruzado, salpicado de epítetos, ironías y descalificaciones, parecía encaminar al país hacia la descomposición social. La clase política se había convertido en un arquetipo de la esquizofrenia y utilizaba a los medios de comunicación como bocinas y mensajeros pasivos de demagogia. Era tal el griterío en el teatro de la política mexicana, que un columnista propuso “un embargo al ruido

y la palabrería inservible” como camino hacia la “profesionalización de los políticos”.<sup>4</sup> Algunos actores de la vida pública nacional —entre ellos el cardenal primado de México Norberto Rivera; el general secretario de la Defensa, Clemente Vega García; el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, y el empresario Carlos Slim— lanzaron llamados a la reconciliación y a la concordia entre los mexicanos; a una salida política.

No obstante, el 26 de agosto de 2004, en vísperas de una marcha convocada por el Partido de la Revolución Democrática para detener lo que en el círculo de colaboradores más cercano de López Obrador comenzaba a manejarse como un “golpe de Estado”, el responsable de la seguridad interior, Santiago Creel, afirmó que el país estaba en calma y había estabilidad política. Y a quienes reclamaban diálogo y negociación, pidió que precisaran: “¿Acuerdo para qué? ¿Entre quiénes? Si lo que quieren es que la ley no se aplique, que se olviden”.<sup>5</sup>

#### FOX Y LA DICTADURA DE LA CORRUPCIÓN

El PRD había convocado a una marcha-mitin para el 29 de agosto en la ciudad de México, con la que concluiría la campaña de 100 días de acciones en defensa de la legalidad, la democracia y contra el juicio de desafuero del mandatario capitalino que se seguía en la Cámara de Diputados. Como era de esperarse en tiempos de gran crispación política, la convocatoria provocó una nueva polarización de posiciones. El PAN y la cúpula empresarial criticaron la medida. León Halkin Bider, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales anticipó que la protesta dominical sería la “marcha del fracaso”, porque, dijo, atentaba contra la “unidad”.<sup>6</sup> A su vez, Germán Martínez coordinador adjunto del grupo parlamentario del PAN en San Lázaro sostuvo que todos los que acudirían a la marcha serían “acarreados” “aplaudidores” y “paleros”.<sup>7</sup> Quien mejor sintetizó el sentir de los grupos de poder, asumiendo de paso la ideología de la clase dominante, fue el periodista Jorge Fernández Menéndez. En su columna “Razones” del diario *Milenio*, argumentó que López Obrador ya había mostrado su “peor cara [...] la de la intolerancia, la de la dureza innecesaria, la del político rencoroso y bronco”.<sup>8</sup> Para él, al participar en la manifestación en su propia defensa, López Obrador cometería un “error grave”. Argumentó:

Un gobernante que, además, aspira a presidir el país, debe apostar necesariamente a las leyes y a las instituciones. Enfrentarlas con la movilización y las presiones, descalificar la necesaria negociación política entre los diferentes actores, considerándola conspiraciones en lo oscuro, rechazar la política que en buena medida es sinónimo de negociación y acuerdos en el marco de la ley, lo equiparará a un personaje con el cual, hasta hace unos meses, López Obrador no quería compararse pero que, ahora, después de los resultados del referéndum revocatorio, sus epígonos han redescubierto: con un Hugo Chávez que difícilmente podría transitar políticamente por un México mucho más complejo social, política, cultural y geográficamente que Venezuela.<sup>9</sup>

Aparte de recuperar el símil entre AMLO y el “populista radical” Chávez, tan caro a los círculos de propaganda del Departamento de Estado estadounidense y del foxismo, Fernández Menéndez reforzó la idea de que la concentración lopezobradorista sería un mitin de “acarreados”, con “pase de lista” para comprobar que los empleados del gobierno de la capital y los distintos “grupos clientelares” participaran con sus respectivas “cuotas” de manifestantes.<sup>10</sup>

#### LA TEORÍA DE UN GOLPE ANUNCIADO

Empezaba septiembre y Javier Quijano Baz, ex presidente de la Barra Mexicana de Abogados y distinguido jurista, generaría una nueva discusión con su teoría acerca de que el proceso de desafuero era, en realidad, un golpe de Estado. En un escrito que tuvo amplia difusión en los círculos políticos, Quijano aludió a la proclividad de los mexicanos a recurrir a la simulación, los eufemismos y el decoro para encubrir expresiones o hechos que pueden resultar duros o malsonantes.

Y argumentó que lo que se estaba fraguando era “un liso y llano golpe de Estado: un vulgar y corriente golpe palaciego [...] O más elegantemente, un *coup d’État*”.<sup>11</sup> Según él, los golpistas siempre se cuidan muy bien de no ser descubiertos antes de consumir su hazaña; no quieren que se sepa qué proyectan. Y eso era lo que ocurría ahora con el intento por desaforar a López Obrador.

Siguiendo su razonamiento, al tener el PAN y el PRI mayoría en la Cámara de Diputados, si actuaban aliados, la sola acusación o denuncia, además de la remoción, inhabilitaría al gobernador depuesto —elegido con el voto mayoritario de sus conciudadanos en una elección democrática y libre— para el ejercicio de cualquier otro cargo de elección popular, tal como lo dispone el artículo 38 fracción II de la Constitución, que señala que los derechos y las prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal que merezca pena corporal. “Léase bien —enfaticó Quijano—, por estar sujeto a un proceso y no por haber sido condenado.” Por eso según él, se estaba ante “una burda añagaza”.<sup>12</sup> En rigor, lo que se había fraguado desde las altas esferas del poder era una maniobra para defenestrar a AMLO. Lo explicó ética y jurídicamente así:

Si la sola imputación de una falta, en la que por lo demás no se ha incurrido, tiene como consecuencia el derrocamiento de un gobernante legítimamente electo y, por añadidura, el impedirle que se postule a cualquier cargo de elección popular sin ser juzgado, sin ser oído, sin oportunidad de defensa alguna y con violación de las más elementales garantías de un debido proceso legal, tiene que concluirse que el desafuero es un eufemismo que significa golpe de Estado, un simple y llano *coup d’État*.

La represión política mediante el uso torcido de ciertas normas jurídicas y la utilización de procedimientosseudolegales, que se sustentan en la debilidad de la magistratura y en la amenaza implícita de la fuerza del Estado, de cuyo brazo armado es comandante supremo el presidente de la República, son algunos de los ingredientes más visibles de todo golpe de Estado. Dejemos pues de hablar con eufemismos. Llamemos a las

cosas por su nombre y no nos resignemos a ser en el futuro cercano, cronistas vergonzantes de un golpe de Estado larga y profusamente anunciado.<sup>13</sup>

También entró a la polémica el abogado litigante Xavier Olea Muñoz, quien, en un texto repleto de adjetivos calificativos, manifestó su “total desacuerdo” con la tesis de su “entrañable amigo” don Javier Quijano y justificó el proceso de desafuero como un acto de estricta aplicación de la ley, fundado en el artículo 206 de la Ley de Amparo.<sup>14</sup> En el marco de lo que definió como una “interesante pero perfectible, transición democrática”, dijo que López Obrador debía pagar, con su desafuero, “su pertinaz desprecio a la ley”. Llamó a AMLO “el rey de los demagogos y de los manipuladores sociales”; le achacó “argumentos zafios” —como sinónimo de toscos o groseros— y agregó que con su “nefasta actitud” el tabasqueño había devenido en un “peligro social”.<sup>15</sup>

Por su parte, el abogado y diputado federal del PAN Germán Martínez Cázares tildó de “amarillista” el alegato de Javier Quijano. “¿En verdad Quijano cree que el PAN, Fox y algunos jueces federales buscan trastocar el orden constitucional al someter a López Obrador a un procedimiento previamente establecido en nuestra Carta Magna?”, se preguntó Martínez. Para él, la tesis golpista de Quijano era “la misma tesis lopezobradorista de la intriga, desarrollada con brillantez, erudición y cultura. No es lo mismo decir complot que *coup d’État*”. De paso, atribuyó a AMLO la pretensión de dar un verdadero “golpe” al Poder Judicial, al desobedecer una orden. Y concluyó: “No hay golpismo. El país empieza a vivir la división de poderes. La democracia está haciendo existir derechos que antes vegetaban. Las facultades y los deberes se simulaban cumplir. Los eufemismos, los mediocres y las ambigüedades triunfaban. No hay golpes de Estado ni golpes abajo de la mesa”.<sup>16</sup>

#### LOS CAMINOS TORCIDOS DE... MARIANITO

Pero otro escándalo se había incubado en las trastiendas del sistema político mexicano de la mano del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón; un nuevo incidente que abriría un signo de interrogación sobre la autonomía del Poder Judicial.

Nieto del ilustre novelista Mariano Azuela, autor de *Los de abajo*, e hijo de Mariano Azuela Rivera, un ex ministro de la Suprema Corte, hombre de talante conservador e ideas socialcristianas, el ahora máximo magistrado de la SCJN había adquirido creciente protagonismo en el usufructo de las facultades constitucionales concedidas a ese cuerpo colegiado por las reformas al artículo 105 constitucional promovidas por el gobierno de Ernesto Zedillo en 1995.

Los hechos se precipitaron en los primeros días de septiembre, en forma paralela a

la polémica sobre el golpe de Estado técnico. Mariano Azuela tuvo un par de intervenciones públicas que provocaron controversia. El 6 de ese mes, el ministro presidente aseveró en un acto público que no se podía ni se debía permitir que el Estado de derecho fuera violentado por la “terquedad o ignorancia” de personas que no acatan las sentencias de los jueces, magistrados y miembros del Poder Judicial.<sup>17</sup> Sin querer dar nombres ni referencias y sin hacer mención específica del jefe de gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la SCJN defendió el principio de “cosa juzgada”.<sup>18</sup>

Dos días después lanzó un llamado a “salvaguardar [...] la majestad del derecho que elimina para siempre el capricho de un gobernante que pretende estar por encima de la ley”.<sup>19</sup> Durante un acto académico convocado por la Unión Internacional del Notariado Latino en el bicentenario del Código Napoleónico,<sup>20</sup> Azuela consideró que había que “oponerse a quienes por cualquier motivo tratan de violentar [el derecho]”, porque si se generaliza tal actitud la consecuencia “será el desorden y la injusticia, y por lo mismo el rompimiento de la paz que en mayor o menor medida se traduce en guerra”.<sup>21</sup> Varias preguntas quedaron en el aire. ¿Qué juez, qué jueces desacatarían la línea fijada por su presidente? ¿Actuarían por consigna, por cadena de mando, para desbaratar a quienes les resultaran antipáticos o incómodos ideológicamente?

Pero no eran esas, por cierto, las primeras alusiones veladas de Azuela en contra del “caprichoso” AMLO. Habían sido constantes desde el año anterior. Una, recogida por Carlos Monsiváis, bordó sobre el tema de la demagogia populista y la masa, aspectos que formaban parte de la campaña de propaganda del gobierno foxista y de los grandes empresarios contra López Obrador. Durante la inauguración de la Feria del Libro Jurídico, el 27 de octubre de 2003, Azuela evocó a *Fahrenheit 451*, la novela de Ray Bradbury sobre la persecución de la lectura en un futuro no muy remoto,<sup>22</sup> y ese recuerdo desembocó en conclusiones un tanto inesperadas.

Las dos intervenciones del presidente de la SCJN de comienzos de septiembre de 2004 habían arrancado reacciones en el seno del PRD y provocado un nuevo debate en la Cámara de Diputados. A guisa de ejemplo, el líder nacional perredista Leonel Godoy puso en duda la imparcialidad del ministro y dijo que con sus “pronunciamientos políticos” con dedicatoria, Azuela estaba perdiendo “autoridad moral” y “credibilidad”.<sup>23</sup> Óscar González, del Partido del Trabajo señaló que la inclinación ideológica del togado estaba contaminando el dictamen sobre el desafuero. “Azuela es un hombre que tiene sus inclinaciones ideológicas y evidentemente él no simpatiza con el proyecto político de López Obrador. La pregunta es si prevalece sobre él la ley o su simpatía”, dijo González.<sup>24</sup>

Desde el ámbito periodístico y “con el debido respeto”, Ricardo Rocha definió al ministro presidente de la Suprema Corte como “un fajador de miércoles en la Arena Coliseo”. Según el conocido locutor de radio y televisión, Azuela se había trepado al

“ring político” y un día sí y otro también “intenta golpear” a AMLO.<sup>25</sup> Rocha sugirió que desde su sitio en el máximo organismo de impartición de justicia, Azuela estaba girando instrucciones al resto del aparato judicial con la intención de “exterminar” a López Obrador. Recordó, de paso, que la infalibilidad de la Suprema Corte no pasaba de ser un “mito” y que sus integrantes, seres humanos al fin de cuentas, no estaban exentos de caer en actos de cohecho y corrupción.<sup>26</sup>

#### EL WATERLOO DE AZUELA

Un nuevo ingrediente vendría a ponerle más sazón al asunto. Los días 13 y 14 de septiembre Carlos Marín, director del diario *Milenio*, reveló en sendas entregas en su columna política “El Asalto a la Razón” que el ministro Mariano Azuela había sostenido una reunión con el presidente Vicente Fox en Los Pinos, el 6 de abril anterior, donde el punto central había sido el desafuero de López Obrador.<sup>27</sup> El periodista indicó que el propio Fox había relatado el encuentro a un grupo de importantes hombres de negocios (no más de 15), entre quienes estaban Claudio X. González y el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, José Luis Barraza. Según Marín, en el encuentro Fox-Azuela estuvieron presentes el secretario de Gobernación, Santiago Creel; el procurador Rafael Macedo de la Concha, y la asesora jurídica de la Presidencia de la República, María Teresa Herrera. De acuerdo con el relato, Fox le dijo a Azuela que sabía del “tamaño del problema” y le preguntó en un par de ocasiones si no había otra “salida legal” para evitar llegar al desafuero de AMLO.<sup>28</sup>

Las revelaciones de Marín darían lugar a una retahíla de especulaciones en los medios sobre las consecuencias de aquella reunión en Los Pinos y generarían una crisis en el seno de la SCJN. Dos días después, el procurador Macedo confirmó el encuentro de abril, pero rechazó que el gobierno federal hiciera acuerdos “en la sombra o en lo oscurito” o que se hubiera fraguado un “complot” con Azuela en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal.<sup>29</sup> Según el titular de la PGR, no era la primera vez que en ese nivel se platicaran “casos delicados” en el marco de la “armonía” entre los poderes del Estado. Por eso, pidió a los reporteros que no “complicaran” las cosas, que no “indujeran”, “desorientaran” ni “confundieran” a la ciudadanía ya que no había ninguna “ilegalidad” en el hecho de marras.<sup>30</sup>

Para Luis Javier Garrido, colaborador semanal en las páginas de opinión de *La Jornada*, la Suprema Corte se hallaba otra vez en entredicho, ahora por las “manipulaciones” de Vicente Fox al hacer intervenir como un “subordinado” suyo al ministro Azuela en el caso del predio El Encino y en la planeación del juicio de procedencia contra el jefe de gobierno de la capital, con el fin de inhabilitarlo como



candidato presidencial. El asunto, según Garrido, afectaba directamente el principio de la división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución y violaba los fundamentos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, “politizando a la judicatura”.<sup>31</sup> El artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica establece que el presidente de la Corte, además de llevar la administración de ese alto tribunal, lo debe representar, y Azuela no parecía haberlo hecho con “la legalidad y la integridad” que se requería, incurriendo en “graves responsabilidades” al tratar de ayudar a Fox en el caso El Encino, asesorándolo y llevando a cabo durante meses una campaña en contra de López Obrador.

El tema de la infidencia daría lugar a un nuevo desaguizado. En una entrevista concedida por el presidente de la República a Alberto Barranco, Fox señaló como responsable de la filtración a su ex secretario particular y ex vocero, Alfonso Durazo. “Se trata de una traición más de Durazo”, dijo Fox, quien dejó entrever que hubo una “negociación previa” con el diario *Milenio*.<sup>32</sup> Pero la versión presidencial fue desmentida al día siguiente por los directores general y editorial del periódico, Federico Arreola y Carlos Marín. El primero dijo que la filtración “provino de dos empresarios y una persona del primer círculo del gobierno federal”, y desafió a los servicios de espionaje del régimen —que graban las conversaciones telefónicas— a que comprobaran que el infidente no había sido Durazo.<sup>33</sup> Marín acusó al presidente Fox de ser el “primer sospechoso” del país —según el neologismo acuñado en esos días por Santiago Creel— y señaló categóricamente que el titular del Ejecutivo había proferido una “rotunda mentira”. Además, dijo que sería bueno saber “qué piensa Fox que se ‘negoció’ y a cambio de qué”.<sup>34</sup>

Acosado por las críticas, el ministro Mariano Azuela tardó siete días en romper el silencio. Lo hizo el 21 de septiembre mediante una declaración en la que admitió públicamente que había asistido a Los Pinos a una reunión convocada “por el jefe del Estado mexicano” en la que se tocaron temas relacionados con “situaciones derivadas de resoluciones emitidas con anterioridad por jueces de distrito, confirmadas por tribunales colegiados”, pero que en ningún momento “se ha vulnerado la autonomía e independencia del Poder Judicial ni los principios éticos que deben regir la conducta de sus integrantes”.<sup>35</sup> Asimismo, argumentó que el hecho de abordar el tema relativo al acatamiento de una sentencia de amparo por la Procuraduría General de la República “no denota intromisión o sumisión de un poder a otro”, y aseguró que las reuniones entre representantes de los distintos poderes de un Estado “constituyen una práctica habitual en los Estados modernos”.<sup>36</sup>

No obstante las aclaraciones del presidente de la SCJN, la cuestión no parecía tan sencilla. Eso quedó exhibido en las formas. En efecto, más allá del deslinde de Azuela, lo más insólito fue la manera en que reaccionó ante el incidente el pleno de los ministros de la Suprema Corte: lo dejaron solo. Después se supo que sus

compañeros ministros habían acordado, en una sesión privada el día anterior que Azuela hiciera las aclaraciones pertinentes sobre el caso a título personal. Su reunión con Fox y su falta de tacto político habían provocado conflicto y enojo entre sus pares, que le reclamaron haber lastimado la imagen de autonomía de la Suprema Corte.

#### ¿LA MANO DE MANLIO F. BELTRONES?

La saga de los *videoescándalos* cobraría un nuevo impulso el 18 de octubre, fecha en que la Procuraduría capitalina presentó ante la sección instructora de la Cámara de Diputados, la PGR y el juez 50 de lo penal con sede en el Reclusorio Oriente una nueva grabación que sería utilizada como prueba en contra Carlos Ahumada, en el juicio por operación de recursos de procedencia ilícita y promoción de conductas ilícitas que se le seguía en ese juzgado (causa 104/04).<sup>37</sup>

“Exhiben chantaje de Ahumada”, fueron las ocho columnas de *El Universal* el día siguiente. “Carlos Salinas, el cerebro del complot”, cabeció su nota de portada *La Jornada*. Como si fueran piezas de un complicado rompecabezas, en el nuevo video parecían irse acomodando los nombres y los apellidos de quienes habían fraguado el complot denunciado por el jefe de gobierno del Distrito Federal y que en una cinta mostrada en Cuba por el canciller Felipe Pérez Roque, en mayo anterior, fueron mencionados por el dueño del Grupo Quart como “ellos”. “Yo no quería soltar los videos porque era la única manera de poder negociar, o sea, de que me ayudaran. Terminé soltándolos y ellos no me dieron nada. Sólo me gané que me acusaran de lavado de dinero. Tampoco me dieron ayuda económica y aquí estoy preso...”, dijo entonces Ahumada.

Cinco meses después, el procurador Bernardo Bátiz difundía una nueva grabación en video, producto de la requisita a Quart, donde el empresario Carlos Ahumada advertía a René Bejarano que si el jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, no cumplía sus exigencias —la salida de dos funcionarios de la contraloría capitalina y el pago de supuestos adeudos— desataría “un pinche súper escándalo”.<sup>38</sup>

En lo que parecía ser un intento de chantaje, el video —nueve minutos de grabación, de un total de una hora 45 minutos—<sup>39</sup> exhibía a Ahumada diciendo que si no se lograba un acuerdo, “Carlos Salinas me va a hablar y me va a decir: ‘Oye, ¡confirmado!, ¿eh? [silbido], este, confirmado lo que te dije, arráncate ya...’” A cambio ofrecía a Bejarano que si le pedía a López Obrador que levantara el teléfono y le ordenaba al contador del Gobierno del Distrito Federal que le pagara y le ayudara —petición que le había hecho antes a Ramón (presuntamente Sosamontes)—, no

tenía por qué enterarse nadie. “No se tiene que enterar Carlos Salinas, Creel, *Reforma*, Televisa, ni nadie, punto. Ésa es una; dos, si estos dos güeyes pa’ fuera, por decirte algo, pues no se tiene que enterar nadie.”<sup>40</sup> Las dos personas de la contraloría a las que se refería el empresario eran supuestamente Alfredo Domínguez Marrujo y José Antonio García de León, quienes ya estaban investigando los contratos otorgados a las empresas de Ahumada para llevar a cabo obras en distintas delegaciones del Distrito Federal, en particular en la Gustavo A. Madero y en Tláhuac.

En la cinta, editada y trabajada en laboratorio sobre un video filmado el 1° de agosto de 2003, Ahumada le solicitaba a Bejarano que interviniera para parar a “este demonio o este juego”. Mostrándose acosado, una y otra vez advertía que ya no podía ni quería aguantar: “Es que Andrés me quiere partir la madre; ésa es la lectura general”. Ahumada mencionaba en la grabación al periodista Javier Solórzano ex director de *El Independiente*, quien el mismo día de la difusión del video por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en el noticiero televisivo de Multivisión, reconoció ante su compañera Carmen Aristegui que en agosto de 2003 había realizado una “gestión” para propiciar un encuentro entre López Obrador y Ahumada, propietario del diario.<sup>41</sup>

Como consignó *La Jornada*, la nueva revelación parecía confirmar quiénes eran ellos: Carlos Salinas de Gortari y Santiago Creel, con Televisa y el periódico *Reforma* como instrumentos de difusión.<sup>42</sup> En una entrevista con Canal 40, René Bejarano, preso en el Reclusorio Sur, confirmó ese encuentro con Ahumada el 1° de agosto de 2003 y dijo que el contenido del video era una prueba de su inocencia. De paso, aunque admitió no tener elementos para probarlo, sostuvo la hipótesis de que quien había filtrado la videograbación difundida por *Brozo* en el Canal 4 de Televisa, en la que aparecía recibiendo dinero, fue Manlio Fabio Beltrones, el líder de la Cámara de Diputados. “Creo que tiene la experiencia y el conocimiento. Él forma parte orgánica, directa y cercana del equipo de Carlos Salinas.”<sup>43</sup>

#### SARTORI, EL INFIERNO Y LAS PRUEBAS DEL COMLOT

Noviembre de 2004 volvería a reactivar la teoría del complot. Esta vez, en el marco del proceso de desafuero de René Bejarano. El inicio del juicio de procedencia para poder actuar por la vía penal contra Bejarano fue solicitado a la Cámara de Diputados por la PGJDF el 16 de marzo anterior.<sup>44</sup> El ex coordinador de la bancada perredista en la Asamblea Legislativa solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo, pero no había perdido el fuero constitucional.

En la coyuntura de marzo, Bejarano admitió haber cometido un “error”, pero no se reconoció culpable de los delitos que se le imputaban. Dijo haber actuado por solicitud expresa de “algún personaje político”, pero deslindó a López Obrador.<sup>45</sup> Y enigmático, planteó: “En su momento diré quién fue”. A su juicio, lo querían convertir en un “chivo expiatorio”, en “rehén político”.<sup>46</sup>

El 22 de octubre, con el voto unánime de sus cuatro integrantes la sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para retirar el fuero a Bejarano.<sup>47</sup> Éste aceptó la decisión como “normal” y criticó el clima de linchamiento promovido por algunos de sus correligionarios perredistas. En particular, definió como “canibalismo de izquierda” la actitud del presidente de la sección instructora, Horacio Duarte, del PRD.<sup>48</sup>

La víspera de la sesión de desafuero en San Lázaro, Izquierda Democrática Nacional (IDN), creada tras la renuncia obligada de Bejarano al PRD en marzo anterior y heredera de la Corriente de Izquierda Democrática (CID), consolidada por él en los años noventa y de la que emanaron dirigentes del partido del sol azteca, diputados y funcionarios públicos, en un desplegado fijaron su posición sobre el desafuero de su líder político. Dijeron que la “sucesión adelantada” que vivía el país tenía como uno de sus elementos característicos “la ofensiva sistemática del hampa de la política articulada por Carlos Salinas de Gortari, el gobierno federal, el PAN y el PRI” y que el objetivo era desgastar e inhabilitar a López Obrador como posible candidato en 2006.

Los días previos, Bejarano dejó entrever a los medios que más que una defensa legal haría un alegato político. Dijo que revelaría información comprometedor, y a manera de adelanto distribuyó a la prensa copias de algunos documentos que formaban parte del expediente que la PGR tenía en su contra, los cuales utilizaría como pruebas de descargo. Durante 15 días, Bejarano se presentó en la Procuraduría para revisar el expediente que lo involucraba con presunto lavado de dinero. En realidad, se dedicó a exprimir con su puño y letra la averiguación previa PGR/SIEDO/UEJOFM/18/2004 que luego vació en una computadora para armar su defensa. Básicamente, eran cartas y textos de supuestos correos electrónicos que la Procuraduría le había decomisado a Carlos Ahumada el día que llegó deportado de Cuba.<sup>49</sup> En ellos, Ahumada comprobaba que había actuado junto a Carlos Salinas de Gortari, Rosario Robles y Diego Fernández de Cevallos para afectar políticamente a López Obrador.<sup>50</sup>

“Ahumada documentó el complot contra AMLO”, tituló el día del desafuero su nota principal el diario *Milenio*. Entre los documentos citados por el periódico figuraba un correo electrónico dirigido al ex presidente Salinas, que decía: “Tocayo: qué va a pasar/dijo/verlo/ arraigo o fianza/presión”, contenido en el folio 110 del tomo XII de la averiguación previa.<sup>51</sup> En el folio 265 del tomo IX había una carta escrita de puño y letra, donde Ahumada le decía a Salinas: “El *Peje* ya declaró que atrás de esto está

usted y el gobierno de los Estados Unidos, además de Martha Sagún [sic]”.<sup>52</sup>

En ese mismo correo, Ahumada mencionaba que sería “testigo protegido” de la PGR en contra de “los actos de corrupción” de funcionarios del gobierno capitalino, y hacia el final solicitaba a su esposa: “Háblale a Rosario [Robles] urgente y explícale la situación y que es urgente que le hable a Ramón Martín [Huerta]<sup>53</sup> y a su jefe para poder detener esta injusticia [...] si es necesario que hable con Lázaro para detener esto [...] si esto sucede sería una locura para todos, que por favor no consignen al señor Javier Uribe”.<sup>54</sup> En sus textos Ahumada se refería al senador panista Diego Fernández de Cevallos como “el señor de Las Lomas” y lo ubicaba como el encargado de entregar el dinero por los videos que a comienzos de marzo habían detonado el mayor escándalo político del sexenio foxista. También mencionaba al ejecutivo de Televisa Bernardo Gómez.

En medio del escándalo Bejarano, una encuesta de María de las Heras publicada en *Milenio* pasó casi inadvertida. Dicha encuesta indicaba que si el protagonista principal de la trama, Andrés Manuel López Obrador, fuera desaforado a la mala, 13 millones de mexicanos estarían dispuestos a apoyar su resistencia civil.<sup>55</sup> Se trataba de una suerte de fotografía social del momento. Ciro Gómez Leyva comentó que la medición de la opinión pública pintaba un panorama “preinsurreccional”.<sup>56</sup> Siete millones se animarían a bloquear carreteras y a tomar aeropuertos, comentó con base en los datos el responsable editorial de *Milenio*.

#### LA JUSTICIA, REHÉN DE LA TELECRACIA: BEJARANO

Con la carga a cuestas de ser el prototipo del político corrupto, ataviado con traje negro, camisa blanca y corbata roja, Bejarano tomó asiento de cara al salón del pleno, acompañado de sus dos abogados, Luis Argüelles Meraz y Agustín Acosta. En una mesa contigua se ubicaron los miembros de la parte acusadora; el fiscal Juan G. Ramos; el subsecretario de Averiguaciones Previas, Renato Sales, y el agente del Ministerio Público, Miguel A. Rangel.

Primero se desahogaron algunos trámites de rigor; entre ellos se procedió a la exclusión del proceso de los legisladores panistas Federico Döring y Jorge Triana, directamente involucrados en la trama (el primero había recibido el video de Ahumada y Bejarano y lo llevó al programa de *Brozo*, y el segundo cerró la pinza presentando la demanda penal contra el acusado). Constituida en jurado de procedencia, la sesión de la Cámara de Diputados dio inicio cuando el presidente de la mesa directiva del cuerpo legislativo, el priísta Manlio Fabio Beltrones, solicitó al fiscal Ramos que diera a conocer los fundamentos de la acusación contra Bejarano.

Éste así lo hizo y presentó como pruebas videos, conversaciones transcritas,

dictámenes periciales y la transcripción del programa *El Mañanero* del 3 de marzo anterior.<sup>57</sup> Según la fiscalía, la acusación más grave, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), quedaba acreditada porque Bejarano había recibido de manera “furtiva” cantidades de dinero de “procedencia ilícita” en las oficinas de Carlos Ahumada.

Beltrones pidió a Bejarano que utilizara el atril para defenderse. Ante una lluvia de flashes, el acusado intentó convertir su virtual castigo en una oportunidad. Inició con una frase lapidaria: “Torturar el derecho no es sana costumbre para el ejercicio de la política”.<sup>58</sup> Después invitó a los legisladores a hacer a un lado las querellas basadas en “los odios, las imposturas y en las circunstancias que quieren volvernos rehenes de la *telecracia*”, y dijo que la democracia mexicana no podía basarse “en las felonías de un payaso tenebroso ni en los vocingleros ni en el oportunismo fácil del insulto mediático. Los decisores mediáticos no son los jueces ni los fiscales, y mal haríamos en volverlos y tratarlos como tales, porque ahora soy yo, después cualquiera”.<sup>59</sup>

Planteó que asumir con dignidad “la responsabilidad de un acto indebido” no era la confesión de un delito y volvió a ofrecer disculpas a la sociedad por el daño ocasionado, “pero no se interprete como cinismo —dijo— el derecho a la defensa propia”, porque la presunción de inocencia “supone ser considerado como tal” hasta que la autoridad asuma la carga de la prueba y lo determine un juez “que tenga criterio, que se ajuste a la serena ley, que no se deje llevar o presionar por la pasión política o por la consigna mediática”.

Finalizó su alegato diciendo que no podía aceptar ni pedir que se votara a favor del desafuero, porque “sería asumir la presunción de mi responsabilidad delictiva y el que haya cometido un error [...] que haya reconocido esa conducta, no me lleva [...] a asumirlo, pero les digo muchas gracias por abrir la posibilidad de que la verdad salga y de que pueda yo, ahora sí, estar ante un juez y poder demostrar mi inocencia”.<sup>60</sup>

Cuando tras la maratónica sesión (duró seis horas y 42 minutos) Bejarano y sus abogados se retiraron del recinto legislativo, la discusión entre los diputados se arrastró una hora más. Pero antes de que se procediera al voto electrónico la sentencia ya estaba dictada: René Bejarano perdería su fuero. Además, para sorpresa de la mayoría, Bejarano siguió libre en virtud de sendas suspensiones provisionales, previa garantía de 70 000 pesos, que le había concedido un juez federal de Pachuca, Hidalgo.<sup>61</sup>

#### BEJARANO TRAS LAS REJAS

Un día después del desafuero, René Bejarano siguió insistiendo sobre el que había sido eje de su alegato ante el Congreso: el papel de los grandes medios de difusión,

en particular la televisión. Según él, en México no se podía permitir que la televisión se convirtiera en gobierno y reiteró que los *videoescándalos* fueron un “golpe mediático” para desestabilizar un proyecto democrático. En una rueda de prensa, interrogado sobre el énfasis que le había dado durante su defensa en San Lázaro a la palabra *mediocracia* y el verdadero significado de esa expresión, respondió con una sintaxis un tanto desprolija:

Se trata de una perversión de quienes detentan el poder en las televisoras. Pretenden ostentar funciones que la ley no les otorga. La *telecracia* supone el gobierno de la televisión, y que quienes la controlan definan los rumbos del país a partir de la influencia que tienen, que influyan en las decisiones de las autoridades, que acusen, que sancionen, que exoneren, que encubran, que protejan, que linchen y que además los propietarios de las televisoras tomen como rehén a las autoridades, porque en la medida en que las autoridades no hagan lo que ellos quieran, entonces las maltratan.<sup>62</sup>

Los plazos se acortaban para Bejarano y él lo sabía. Finalmente, el 9 de noviembre, el juez 32 de lo penal con sede en el Reclusorio Sur Jesús Ubando López, emitió una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de dinero —considerado delito grave y que no alcanza el beneficio de la libertad bajo fianza—<sup>63</sup> y promoción de conductas ilícitas.<sup>64</sup> Bejarano recibió la noticia en su domicilio y aseguró que en el momento en que fuera notificado oficialmente se pondría a disposición de la autoridad. Dijo que el mandato judicial era un “error” porque obedecía a una decisión política. Por eso, se asumió como un “rehén político”.<sup>65</sup>

A las 3:40 horas del día 10 se presentó por propia voluntad en el Reclusorio Sur, y 15 minutos después del mediodía rendía su primera declaración ante el magistrado tras la rejilla de prácticas. En su alegato, Bejarano solicitó al impartidor de justicia que considerara “que las declaraciones periodísticas no tienen valor ministerial”; que anexara al expediente la versión estenográfica de la sesión en la cual el Instituto Electoral del Distrito Federal había aprobado por unanimidad que no había elementos para inculparlo por delitos electorales durante la campaña de 2003, y que se tomara como prueba a su favor la resolución de la Procuraduría General de la República acerca del expediente número PGR/SIEDO/UEIOFM/034/2004, en el cual el Ministerio Público federal resolvió el no ejercicio de la acción penal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de Carlos Ahumada Kurtz.<sup>66</sup>

La acusación de lavado de dinero contra Bejarano se derivaba en rigor, de la declaración ministerial emitida por Ahumada el 19 de mayo de 2004, en calidad de denunciante, ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, según la cual entre 2001 y 2003 había entregado a Bejarano la cantidad de 12 millones 50 mil pesos.<sup>67</sup> El periodista Ciro Gómez Leyva formuló, al respecto, varias interrogantes: “¿Cómo se lo dio, dónde se lo dio y, sobre todo, por qué se lo dio?” Él mismo respondió que 50 000 pesos habrían sido a cambio de un favor que le resolvió

Bejarano a Ahumada, relacionado con una amenaza de invasión a un rancho en Topilejo, propiedad de la esposa del empresario, Cecilia Gurza. Los otros 12 millones se habrían entregado, seis millones de pesos en 2001-2002, para las elecciones locales del Estado de México, Hidalgo y Guerrero, y seis millones de pesos en 2003 para las elecciones locales y federales de los candidatos del PRD en el Distrito Federal y el Estado de México.<sup>68</sup>

Cabe consignar al respecto, que desde un principio llamó la atención en el medio periodístico la defensa a ultranza que Gómez Leyva hizo de Ahumada en el diario *Milenio* y en sus espacios radiofónico y televisivo. El 16 de noviembre de 2004, en una carta a la opinión pública desde su centro de reclusión, Bejarano formuló una serie de preguntas. Una de ellas decía: “¿Por qué la incisiva defensa de Ciro Gómez Leyva a Carlos Ahumada? ¿Hubo acuerdos de diverso tipo entre Carlos Ahumada, Rosario Robles y el Canal 40, representado por Ciro y/o Javier Moreno Valle?”<sup>69</sup>

#### ¿UN PARTIDO DE LOS MEDIOS?

Sin duda, el caso Bejarano tenía cierta singularidad. Salvo el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que también fue filmado y transmitido en la televisión una y otra vez, los casos de Bejarano e Ímaz eran únicos. Como argumentó Julio Boltvinik, “la mente enferma de Ahumada los filmó para poder presionarlos y comercializar su evidencia a cambio de protección del gobierno federal”, que ya lo había exonerado del delito de lavado de dinero y le había devuelto las propiedades que le había *asegurado*, “cumpliendo su parte del trato”.<sup>70</sup> Lo insólito era que la conducta de René Bejarano fue observada por todo México, no en palabras, sino en imagen.

La videoteca clandestina de Ahumada y su utilización con fines de poder y lucro por Televisa desató otro tipo de racionalizaciones. Por ejemplo, Marco Rascón habló del emergente “partido de los medios”. Un nuevo “partido político” alimentado desde el poder del Estado con prerrogativas y subsidios, a costa del erario y con recursos recaudados de la corrupción y dinero proveniente de actividades ilícitas, que de manera creciente se trasladaron del ámbito de los negocios a la política a través de los medios.<sup>71</sup> Dijo que los gobernantes habían creado un “monstruo” al cual tenían que alimentar con el desprestigio de ellos mismos.

Como ejemplo de la corta “libertad” del monopolio mediático Rascón citó la llamada “cena de la charola” en 1993 —de la que no informaron oportunamente los medios—, cuando el entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari, reunió en la casa de Antonio Ortiz Mena a un grupo de 20 grandes empresarios y les pidió que aportara cada uno 25 millones de pesos para su campaña electoral de 1994. Nadie vio a ese grupo de magnates en tan agradable



circunstancia... Y como no hubo video nadie recordó a Tartufo. Sin embargo, desde aquella cena quedó establecido que existía una oligarquía en México que, a partir de su fuerza económica, adquirida gracias a prebendas, subsidios y a la política de privatizaciones, ahora era dueña de la política bajo la fórmula: las empresas son “honestas” y la política es “corrupta”.

#### NUEVA TEMPORADA DE VIDEOS

La degradación de la política seguiría con nuevos videos en el horizonte, complementados por testimonios del reo Bejarano que implicarían a otros personajes de la vida nacional. Así, por ejemplo durante la ampliación de su declaración preparatoria ante el juzgado 32 de lo penal, el ex asambleísta aseguró que existía el testimonio ministerial de un ex empleado del Grupo Quart, Juan González Hernández, quien el 25 de octubre anterior había relatado a las autoridades correspondientes que entre las personas que visitaban con frecuencia a Carlos Ahumada en sus oficinas de avenida Revolución estaban Ana Cristina Fox, hija del presidente de México; Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa; el ex candidato presidencial priísta Francisco Labastida; el gobernador panista de Morelos, Sergio Estrada; el mandatario mexiquense, Arturo Montiel; los senadores Enrique Jackson y Humberto Roque Villanueva, del PRI; Federico Döring, diputado federal del PAN; el priísta Dionisio Pérez Jácome, y Enrique Arcipreste, quien se había ostentado como presunto dueño del paraje San Juan. Mencionó, también, a los políticos perredistas Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán; a la ex dirigente nacional, Rosario Robles, y al ex delegado en Tlalpan, Carlos Ímaz.<sup>72</sup> El testigo citado por Bejarano declaró al Ministerio Público que el 3 de marzo de 2004, día en que se dio a conocer el primer video de Ahumada y el diputado perredista en el programa *El Mañanero*, personal del Grupo Quart guardó cintas grabadas en bolsas de plástico y las trasladó en camionetas al lugar conocido como La Mina, una planta de asfalto ubicada en la carretera México-Toluca.<sup>73</sup>

La noche del 15 de noviembre Televisa difundía un nuevo video. La cinta exhibía una conversación entre Carlos Ahumada y el ex dirigente del PRD, Ramón Sosamontes, en la que presuntamente se planeó la estrategia para atacar al gobierno de López Obrador. “Pasaré a la pinche historia como el que le quitó la máscara al pinche PRD; Manlio lo mismo”, se escuchó decir a Ahumada. Y en lo que parecía ser un anuncio de lo que ocurriría meses más tarde, el empresario advertía: “Sé que lo que estoy diciendo algún día va a salir a la luz pública. No dependerá de mí [...] la información ahí está. Inclusive ya no está en mis manos. Pum y se acabó”.<sup>74</sup>

El 16 de noviembre, René Bejarano le ganaba la primera batalla jurídica a la

Procuraduría capitalina al desacreditar la investigación realizada en su contra que lo acusaba del delito de lavado de dinero, único considerado grave. El juez Ubando López determinó que el Ministerio Público no había presentado los elementos de prueba suficientes que justificaran la existencia del delito, por lo que le notificó el auto de libertad en lo que hacía a esa imputación.<sup>75</sup> El juez consideró que en la averiguación previa integrada por la PGJDF únicamente había indicios de una probable responsabilidad en el delito electoral, considerado no grave. Bejarano podía obtener la libertad bajo fianza, pero sus abogados explicaron que permanecería en la cárcel hasta que se resolviera su situación jurídica por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita del que lo acusaba la PGR.

Tal vez para apuntalar esa última acusación del orden federal, fue filtrada al diario *Reforma* la declaración ministerial rendida por el ex secretario de Finanzas del Distrito Federal, Gustavo Ponce, recluso en el penal de La Palma, que exhibía a López Obrador y a Bejarano. Ponce había sido capturado por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en Tepoztlán, Morelos, el 9 de octubre anterior luego de permanecer siete meses prófugo de la justicia.

En un interrogatorio realizado por la Unidad Antilavado de la PGR, el 22 de octubre, reproducido y destacado en primera plana por el rotativo capitalino, Ponce señaló que Bejarano era lo más parecido a una agencia de colocaciones en las demarcaciones políticas del Distrito Federal, sobre todo en las delegaciones Cuauhtémoc Coyoacán y Magdalena Contreras.<sup>76</sup> Dijo, también, que conoció a Carlos Ahumada a raíz de que López Obrador le había encomendado, tres años antes, “arreglar y encubrir irregularidades financieras” cometidas por la ex jefa de gobierno, Rosario Robles. Ponce aseguró que en varias ocasiones Ahumada le comentó que había entregado a Bejarano 11 millones de pesos en efectivo —en moneda nacional y en dólares—, para que lo ayudara a resolver asuntos pendientes que el dueño del Grupo Quart tenía con el gobierno capitalino, y que “ya era inaguantable la presión y la extorsión” de la que estaba siendo objeto.<sup>77</sup>

#### EL HOMBRE DE LAS LIGAS A PRISIÓN

El 18 de noviembre, después de un largo día de tensiones, el juez noveno de distrito con sede en el Reclusorio Sur, Reynaldo Reyes Rosas, dictó el auto de formal prisión contra René Bejarano por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones de procedencia ilícita. Según Luis Argüelles, uno de los abogados del ex perredista, fue una decisión con “tintes políticos”.<sup>78</sup> Por su parte, el abogado Víctor Carrancá adujo que a su cliente se le estaba juzgando dos veces por el mismo delito (lavado de dinero), de los que ya un juzgado local lo había exonerado.<sup>79</sup>

La diputada Dolores Padierna, esposa del inculpado, dijo que fue una “resolución por consigna”. Que la decisión se tomó “muy arriba”. Que el presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, había sido “tremendamente presionado” para que el juez Reyes cambiara su resolución en el último momento. ¿El objetivo? Que la PGR tuviera a Bejarano en su poder, “para obligarlo a incriminar a López Obrador”.<sup>80</sup> Pero según el principal acusador de Bejarano, Santiago Vasconcelos de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO), finalmente el juez había considerado que los 10 millones que entregó Ahumada al ex perredista procedían de una “extorsión” y que el ex asambleísta “conocía la ilicitud de su origen”.<sup>81</sup> Los abogados de Bejarano interpusieron un recurso de amparo, pero calcularon que al menos, su cliente pasaría seis meses en prisión.

El caso Ahumada-Bejarano había dominado el año 2004, en el marco de lo que Andrés Manuel López Obrador definió como un complot de Estado urdido para quitarlo de la carrera presidencial. Una persona cercana al jefe de gobierno de la capital, Martí Batres argumentó que por extraño que pudiera parecer, el escándalo de los videos no se había desatado por permitir la corrupción, sino por perseguirla.<sup>82</sup> Como dijo el propio Carlos Ahumada, recuperó Batres los “negocios” del empresario con el gobierno de la ciudad se realizaban desde hacía 13 años, antes de que López Obrador llegara a la jefatura del Distrito Federal y nunca había tenido problemas. “Tenía contratos, había cobrado por servicios reales o ficticios y nunca nadie lo paró. Tal vez nadie lo detectó. Y, en cambio, encontró padrinos y apoyos en el poder.”<sup>83</sup>

Cuando comenzó la gestión de López Obrador, señaló Batres comenzaron a llamar la atención los contratos multianuales y otro tipo de “relaciones extrañas e irregulares” del empresario, y se sospechó de él. La desconfianza creció a tal grado que, en 2002, la administración López Obrador prefirió declarar desierto el concurso de los segundos pisos del Periférico, antes que entregarle la realización de la obra a Ahumada. También le canceló contratos multianuales. Entonces Ahumada buscó reconstruir sus “vínculos de protección” en el gobierno de la ciudad. Ofreció “ayudas”, pidió “favores” y “financió” a posibles interlocutores. “Y grabó todo.” Pero el gobierno siguió investigando y encontró obras no realizadas, pero sí cobradas, en la delegación Gustavo A. Madero. Ahumada respondió con los videos. “Ahumada siempre encontró las vías para torcer la ley para falsificar, para defraudar, para comprar, para corromper, para someter... hasta que se topó con López Obrador [...] Con videos o sin videos, su *modus operandi* no tenía futuro en el Gobierno del Distrito Federal”, escribió Batres.<sup>84</sup>

Soledad Loaeza comparó al empresario mexicano de origen argentino con el ángel/demonio creado por Pier Paolo Pasolini en su película *Teorema* (1968). Igual que el protagonista del filme, el “seductor” Ahumada envileció y removió las pasiones y los apetitos de algunos dirigentes del partido del sol azteca, aun cuando

sus víctimas —entre ellas Bejarano— intentaron justificar su rendición ante el embeleso de Ahumada, con el argumento de que aceptaron los sobornos por “la causa” o por “el bien del proyecto”. Ante la opinión pública, escribió Loaeza, “han quedado al descubierto las flaquezas de los perredistas que cayeron bajo el encanto del dinero de Ahumada”.<sup>85</sup>

Según la investigadora y columnista de opinión de *La Jornada* de nada servía denunciar la existencia de un complot, pues de ser cierta esa versión lo único que revelaba era la “malévola inteligencia de los conspiradores” que supieron identificar las debilidades de un adversario para el cual “el perfume de la *lana* es irresistible”. La responsabilidad de los perredistas en ese escándalo era irrenunciable entre otras muchas razones porque “no se trata ni mucho menos de vírgenes imprudentes”. Los dirigentes del partido y los funcionarios de gobierno que se habían dejado seducir por el “empresario progresista” de Rosario Robles, agregó Loaeza, eran adultos, administradores de larga data, políticos experimentadísimos, concedores sabedores y poseedores ellos mismos de muchas de las “artimañas” que había utilizado Ahumada para “atraerlos a su nómina”. Así que “si acaso los engatusaron, fue porque así lo quisieron”.<sup>86</sup>

#### A MANERA DE COLOFÓN

Los abogados de Bejarano se equivocaron por un par de meses. El ex presidente de la Asamblea Legislativa pasaría ocho meses en prisión. El 5 de julio de 2005 un tribunal federal de la ciudad de México determinó absolverlo del delito de lavado de dinero; el Ministerio Público de la Federación no pudo comprobar el cargo.<sup>87</sup>

El “hombre de las ligas” —como le habían llamado en son de mofa sus adversarios en alusión a los elásticos con que iban sujetos los billetes que lo llevaron al escarnio público— recuperó su libertad después de 16 meses de “trance”. En una entrevista, dijo que salía sin rencor y con “la penitencia a costas” por aquella imagen depredadora del 3 de marzo de 2004. “Espectáculo bochornoso desagradable”, lo llamó. Pero dijo que había que relativizarlo, porque la recolección de apoyos económicos para actividades políticoelectorales es común. “Hay quien lo hace mediante transferencias electrónicas en el extranjero, como en el caso Amigos de Fox, y hay quien pasó la *charola*.” Afirmó tener forma de comprobar y documentar los vínculos de Carlos Ahumada con las televisoras, con la *mediocracia*: “Hablemos de ligas, sí, pero de las ligas de Ahumada con los medios [electrónicos], lo que tarde o temprano se tendrá que saber [...] los tribunales mediáticos, los loros que condenan en la pantalla chica, son jueces y parte, no son imparciales, son receptores y tienen ligas con Carlos Ahumada”.<sup>88</sup>

Los sucesos de 2004 exhibieron una profunda crisis del Estado mexicano. Pero los pronósticos para 2005 no eran muy halagüeños.

## De las *maras* y Al Qaeda a una narcoguerrilla mexicana

Históricamente, los planes de Estados Unidos para México y América Latina han estado supeditados a diversos instrumentos de la diplomacia de guerra de Washington. Lo anterior abarca múltiples modalidades, desde procesos de desestabilización, guerra psicológica, acciones clandestinas y golpes de Estado, pasando por presiones políticas y económicas, hasta la injerencia directa o encubierta en los procesos electorales de los países de su tradicional *patio trasero*.

A partir del modelo ideológico de dominación neoliberal impuesto a sangre y fuego en el Cono Sur desde comienzos de los años setenta del siglo xx, tras el regreso de los militares a los cuarteles tres lustros después, en los países de América Latina no hubo ruptura sino adaptaciones o modificaciones a nivel del Estado, la economía, los actores y los sujetos sociales. Y una reestructuración de los modelos de represión. La imposición de los modelos ideológico y represivo que conforman el nuevo Estado policial en ciernes —con epicentro, en los albores del siglo xxi, en Colombia y México— se apoyó en las nuevas tecnologías, la comunicación satelital y la monopolización de los medios de difusión masiva, públicos y privados como vehículos de propaganda y de terrorismo mediático, donde se prioriza la mercadotecnia-imagen y la mentira organizada frente al discurso y los argumentos de la política y los políticos.

El 11 de septiembre de 2001 fue la oportunidad para un golpe de Estado técnico contra la República en Estados Unidos. Mediante el uso de la mentira como arma de guerra y una recurrente campaña de miedo neomacartista con base en Al Qaeda, ántrax y otros compuestos peligrosos, la administración Bush logró imponer la forma de un Estado policial-militar en el interior de su país, y neohitleriano en ultramar, con sus guerras relámpago dizque preventivas en Medio Oriente y en otras partes del mundo, y sus políticas de grandes áreas y “espacio vital” en el hemisferio occidental.

Asimismo, Washington logró fabricar a escala mundial la imagen del terrorismo como enemigo unificador. Y en nuestras latitudes ha tratado de imponer al

“narcoterrorismo” como amenaza idónea que hay que aniquilar. De allí la implementación del Plan Colombia para combatir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN). También, con apoyo de gobiernos locales, Estados Unidos y sus socios han manufacturado nuevos enemigos a modo, funcionales según las coyunturas, como el populismo radical, o la *Mara Salvatrucha* y *Los zetas* para el caso de México, con sus antidotos: la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) el Plan México y las “guerras” de Vicente Fox y Felipe Calderón contra el crimen organizado.

Los tres ejes claves en esa construcción del miedo, como caballos de Troya para militarizar al nuevo Estado autoritario e imponer la tolerancia cero de la doctrina Giuliani, son el terrorismo y el “eje del mal” (Cuba y Venezuela incluidas), el populismo radical (Hugo Chávez, Evo Morales, Andrés Manuel López Obrador) y el crimen organizado. Ante esos enemigos míticos, imaginarios, impredecibles, utilizados como distractores (que en algunos casos existen, pero son potenciados por los medios de difusión masiva como propagandistas de “la razón de Estado” para imponer leyes más duras y recortar las garantías constitucionales e individuales), el modelo que busca imponer el sistema de dominación en el seno de nuestros países es la “mano dura”: la militarización de las policías y la policialización de las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina).<sup>1</sup>

En ese escenario manufacturado, el nuevo Estado policial autoritario se presenta ante la sociedad como “el salvador”. No como parte del conflicto sino como su solución. Así, la respuesta es la violencia institucionalizada. Por eso busca legitimar el uso de la fuerza y genera *de facto* un Estado de excepción. Con el juego de la “lucha contra el terrorismo” y el “crimen organizado” encarcela a la sociedad. La vigila. Limita los espacios públicos. Invade la privacidad de las personas. Impone nuevas leyes represivas como la Ley Antiterrorista en Argentina, El Salvador, Paraguay o México —a imagen y semejanza de la Ley Patriota en Estados Unidos—, que permite la intervención de las comunicaciones privadas (telefónicas, internet o grabaciones ilegales). Inventa guerras para que las veamos en vivo y en directo por la televisión. Discrimina. Fomenta la delación. El “no te metas”. Mata en los retenes. Viola mujeres. Y deja expedito el camino para que “agentes privados, corporaciones del mercado mercenarios, paramilitares y sicarios detecten la oportunidad de lucrar con el crimen”.<sup>2</sup>

LA INICIATIVA MÉRIDA,  
MEJOR CONOCIDA COMO PLAN MÉXICO

Es porque el pueblo se viene organizando desde abajo de múltiples maneras,

sistémicas y antisistémicas, acumulando fuerza, elaborando proyectos alternativos, avanzando en grados de conciencia y organización, que los que mandan y sus administradores necesitan militarizar al Estado.

En el caso de México, país que comparte una enorme y porosa frontera de 3 152 kilómetros con Estados Unidos, el “hacer gritar la inseguridad” respondería a las necesidades de “seguridad nacional” de Washington, lo que convirtió *de facto* al polo más débil de esa relación asimétrica en parte del “perímetro de seguridad” geográfica de la superpotencia. Al declararse en estado de guerra contra Al Qaeda, el gobierno de estadounidense dejó atrapado a México en una contradicción: si para Estados Unidos el origen de la inseguridad era directamente el grupo radical islámico, para México lo era un Estados Unidos amenazado por Al Qaeda.

A partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001, la Casa Blanca y la comunidad de inteligencia estadounidense explotarán esa contradicción al máximo. En 2002, durante la Cumbre de Monterrey, Bush le impuso a Fox un “plan de acción” de 22 puntos, cuya meta era llegar a una “frontera inteligente”, es decir, eficiente y segura en la regulación del paso de mercancías y personas.<sup>3</sup> Además Fox aceptó el intercambio de información de inteligencia y la existencia de ciertos controles de seguridad en México por agentes de Estados Unidos (del FBI, la CIA, Aduanas y otras agencias), así como la capacitación de elementos mexicanos en ese tipo de tareas por sus contrapartes estadounidenses.

El tema cobró alta visibilidad los primeros días de enero de 2004 cuando varias terminales aéreas mexicanas (entre ellas los aeropuertos de la ciudad de México, Guadalajara, Los Cabos, Monterrey Mérida y Acapulco) fueron ocupadas por agentes del FBI, la CIA y funcionarios de la embajada de Estados Unidos en el marco de un operativo de control antiterrorista. El 3 de enero, los principales encabezados de la prensa dieron cuenta de lo que algunos medios definieron como un acto de “histeria, intromisión y majadería” estadounidense<sup>4</sup> y una nueva “rendición” de Fox<sup>5</sup> ante la paranoia antiterrorista de Washington: “Toma Estados Unidos control de revisiones en el aeropuerto del Distrito Federal” (*La Jornada*); “Supervisa el FBI aeropuerto del Distrito Federal” (*Reforma*); “La intromisión de agentes de Estados Unidos indigna al Congreso” (*Milenio*); “Controla Estados Unidos seguridad aérea en México” (*El Independiente*).

#### AL QAEDA, LA MARA SALVATRUCHA Y LA SEGURIDAD NACIONAL

A finales de abril de 2004, en el marco de un viaje de la secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice a Bogotá, en un despacho fechado en la capital colombiana que llamó “Terrorismo, narcotráfico y populismo radical”, Jorge



Fernández Menéndez estableció lo que, dijo, era una “relación imposible de separar”, en alusión a los tres elementos que componían el título de su envío periodístico.<sup>6</sup> La fuente de su información era de primer nivel: el coronel David McWilliams, miembro del Comando Sur del Pentágono. Según el militar, las amenazas regionales de Estados Unidos eran el terrorismo; el narcoterrorismo, con eje en Colombia; el narcotráfico en general, incluido el lavado de dinero; el tráfico de personas; la posibilidad de migraciones masivas; los secuestros transnacionales; las crecientes bandas urbanas como la *Mara Salvatrucha*, y el populismo radical.

Sobre esa última amenaza, citando a McWilliams, apuntaba Fernández Menéndez en su escrito: “¿Qué se entiende por populismo radical? A un gobierno que puede haber llegado al poder en forma democrática, pero que se convierte en un peligro para la democracia porque utiliza el apoyo de sectores populares para subvertir las instituciones democráticas de su propio país, generando la inestabilidad y la desestabilización del sistema”.<sup>7</sup> Y agregaba: “¿Por qué considera [Estados Unidos] que eso tiene relación con el terrorismo y el narcotráfico? Porque en la medida en que las instituciones se ‘subvierten’ [...] y se genera ese ambiente de desestabilización institucional, se crea un clima propicio para el crecimiento del terrorismo, del narcotráfico y de las bandas urbanas”. Todas esas amenazas contempladas en la visión estratégica de seguridad regional de Estados Unidos estaban presentes, según Fernández Menéndez, en México. Incluido “el tema López Obrador”.<sup>8</sup>

En realidad no era así, aunque algunos de esos “enemigos” identificados habían recibido amplia visibilidad y cobertura en la prensa mexicana. Por supuesto, el caso más notable era el de López Obrador. Y, curiosamente, otra “amenaza” potencial mencionada por Fernández Menéndez irrumpiría con fuerza en la segunda mitad de 2004, de una manera poco ortodoxa: la *Mara Salvatrucha*, que muy pronto llegaría a convertirse en un nuevo peligro para la “seguridad nacional”.

La presencia de las *maras* en México cobraría notoriedad hacia agosto de ese año, cuando el diario *El Universal* reveló que en círculos de inteligencia estadounidenses existía “temor” por el posible uso de esas pandillas de origen centroamericano para “infiltrar” terroristas islámicos de Al Qaeda en Estados Unidos.<sup>9</sup> El autor de la nota, José Carreño, quien se desempeñaba como corresponsal en Washington, citó como fuente de la información a la organización de inteligencia privada Stratfor y a un ex agente del FBI, Armando Lara, director de la compañía de seguridad Control Risk Group.

Según Lara, la comunidad de inteligencia tenía indicios de que Al Qaeda “habría establecido contacto” con grupos de la delincuencia organizada de Centroamérica, formados por jóvenes pandilleros deportados de Estados Unidos. La intención de los contactos “sería aprovechar los canales clandestinos que usan las *maras* para transportar drogas, para infiltrar terroristas islámicos en Estados Unidos a través de

México”. A cambio de su ayuda, “las *maras* recibirían dinero de Al Qaeda”. Lara reportó “haber escuchado versiones” de que presuntos terroristas islámicos habrían financiado una “cumbre” de pandillas de las *maras* en la ciudad hondureña de San Pedro Sula, donde existe una pequeña comunidad de “origen árabe o palestino, de religión cristiana”.

A la sazón, una semana antes, un titular de *Milenio* daba cuenta de otra noticia inquietante: “México y FBI, tras terrorista integrante de Al Qaeda”.<sup>10</sup> Según la nota, el gobernador de Baja California Eugenio Elorduy, informó a los medios que autoridades de ese estado fronterizo con Estados Unidos estaban colaborando con el FBI para localizar a “un importante terrorista” de Al Qaeda, Adnan El Shukrijumah, quien podría estar en alguna ciudad de esa entidad.

El mismo día, 23 de agosto, se divulgaba en Washington un informe de la comisión investigadora de los atentados del 11 de septiembre de 2001, según el cual miembros de Al Qaeda habrían usado redes de contrabandistas humanos (*polleros*) para ingresar a Estados Unidos.<sup>11</sup> De acuerdo con el reporte, que aparecía en el sitio de internet de la comisión bipartidista, gracias a sus contactos con esos contrabandistas, la organización islámica había desarrollado durante años una sofisticada red para trasladar clandestinamente a sus miembros a ese país. Los legisladores resaltaron que ante la relativa facilidad de movimiento de Al Qaeda, la zona fronteriza debía ser la piedra angular de las políticas de seguridad nacional de Estados Unidos.

LA REVISTA *TIME* Y MÉXICO  
COMO TRAMPOLÍN DE AL QAEDA

En octubre, varios funcionarios mexicanos rechazaron el paso de terroristas por México. También la existencia de *narcoterrorismo* en el país. Entre ellos, el secretario de Gobernación, Santiago Creel;<sup>12</sup> el director general de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol Ricardo Gutiérrez Vargas, de la PGR,<sup>13</sup> y el jefe de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos.<sup>14</sup> Sin embargo, según apuntaría Raymundo Riva Palacio, el “riesgo” para la seguridad nacional ante el fenómeno del “terrorismo global” estaba ahí.<sup>15</sup> Hacía tiempo que Washington había dejado de confiar en la seguridad mexicana, escribió el periodista. Pese a las advertencias de la comunidad de inteligencia estadounidense, que había “detectado células de Al Qaeda en Ciudad Juárez, el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey y Tijuana”, ¡el gobierno mexicano no hacía nada! “La insensibilidad se estaba convirtiendo en irresponsabilidad.” Máxime, tomando en cuenta que de acuerdo con Riva Palacio, los servicios estadounidenses tenían registrados al menos 13 operadores de Al Qaeda en México.

Uno de ellos era, precisamente, El Shukrijumah, el mismo al que había estado buscando sin éxito el gobernador de Baja California Eugenio Elorduy. Se trataba de un saudita identificado por el procurador general de Estados Unidos, John Ashcroft, en mayo anterior como uno de los “lugartenientes” de Osama Bin Laden.<sup>16</sup> Incluso su cabeza tenía precio: según el diario conservador *The Washington Times* había una recompensa de cinco millones de dólares.<sup>17</sup> El escurridizo terrorista había sido visto el 14 de agosto en México adonde habría ingresado procedente de Honduras. En Tegucigalpa El Shukrijumah se habría entrevistado con miembros del grupo MS-13 de la *Mara Salvatrucha*, que supuestamente tenían un centro de contrabando de personas en la ciudad mexicana de Matamoros Tamaulipas. Desde allí, según la versión de Riva Palacio citando al *The Washington Times*, lo ayudarían a infiltrarse a Estados Unidos. De paso, el lugarteniente de Bin Laden había mantenido en México reuniones con bandas de narcotraficantes de Perú y Colombia.

Lo que no explicó el agudo analista de inteligencia fue por qué la CIA, que venía secuestrando y asesinando presuntos terroristas de Al Qaeda por todo el mundo —de lo que se ufano en su momento el propio presidente Bush y lo que luego cobraría estatus público bajo la denominación “los vuelos de la CIA”—, no capturó a El Shukrijumah en México. Ni tampoco a los otros 12 terroristas detectados. Sin duda, un misterio.

Lo cierto es que el asunto de las *maras salvatruchas* había llegado para quedarse. Washington logró ponerlo en la agenda de México y de cuatro países centroamericanos. Ése fue el tema central del encuentro que, en el marco del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, analizó Fox con sus homólogos de Honduras Guatemala, Costa Rica y El Salvador el 12 de noviembre de 2004 en la capital chiapaneca.

Dos días después, la revista *Time* insistiría: México era el “trampolín” de Al Qaeda hacia Estados Unidos.<sup>18</sup> La publicación estadounidense se hacía eco del testimonio de un egipcio, Sharif al Masri, presuntamente arrestado en agosto anterior en la frontera de Pakistán con Irán y Afganistán. Bajo custodia de autoridades estadounidenses, Masri habría revelado planes de Al Qaeda para utilizar a México como punto idóneo para introducir armas de destrucción masiva a Estados Unidos. Entre ellas, “materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares” (*sic*). La información de *Time* se complementaba con otro dato: durante una reciente visita a México del secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Tom Ridge, éste habría enterado al secretario de Gobernación, Santiago Creel, sobre la “posible contratación” de pandillas de traficantes para introducir terroristas a Estados Unidos.

La mañana del 22 de noviembre, el *affaire maras* adquiriría un toque dramático sensacionalista en Chiapas. Como el 30 de octubre de 1938 en Nueva York, cuando la población entró en pánico al escuchar al cineasta Orson Welles transmitir por CBS y decenas de estaciones a través de Estados Unidos una adaptación de la novela *La guerra de los mundos* de H. G. Wells,<sup>19</sup> una “alerta” sobre un presunto ataque de *maras salvatruchas* contra centros educativos de Tapachula, lanzada desde la estación radial Océano FM y en mensajes por telefonía celular, causó histeria colectiva y provocó que las 200 escuelas de la localidad fueran desalojadas en tropel por padres de familia angustiados. Los comercios cerraron y la población se refugió en sus casas. El detonante fue una llamada anónima a la Secundaria Técnica 62, difundida poco después por Carlos Wong Nolasco, conductor del programa *Hoy en la noticia* que transmite la radiodifusora local XEQK en el corazón del Soconusco.<sup>20</sup>

Con el paso de las horas el miedo y el caos disminuyeron. Pero un día después la psicosis entre la población continuaba, por lo que el gobierno de Chiapas, al tiempo que reforzaba el operativo antimara “Acero Dos”, se vio obligado a iniciar una campaña en medios electrónicos para desmentir la versión. Según las autoridades, se había tratado de rumores tendenciosos e irresponsables.<sup>21</sup> El saldo de la redada policial fue de 64 presuntos pandilleros arrestados, y al final como en Nueva York, todo quedó en un escándalo.

Más allá del fenómeno juvenil sintetizado con el nombre genérico de *maras*,<sup>22</sup> con profundas raíces en la grave situación social y económica de los barrios marginales de Los Ángeles, California, de México y de los países centroamericanos, la ola de histeria había sido abonada en los últimos meses por los medios de difusión masiva, que pusieron un énfasis a veces morboso en la actividad criminal de esas *tribus urbanas* <sup>23</sup> y estigmatizaron el vocablo popular hasta convertirlo en sinónimo de terrorismo, alta peligrosidad o muerte.

Los artículos reproducían crónicas nihilistas sobre ritos de iniciación y ejercicios de exterminio, historias de terror y mutilación de migrantes y el dominio feudal de los furgones del ferrocarril en la zona maya por las *clicas* (células) de *cipotes* (jóvenes), acompañadas con fotos de *chavos* con sus señas de identidad sembradas en todo el cuerpo, en particular tatuajes simbólicos o metafóricos macabros que forman parte del ritual de pertenencia y aceptación a la banda con visiones, números y letras góticas, representaciones de la piedad (vírgenes) y del mal (serpientes y figuras humanoides con cuernos) de corazones atravesados con flechas, o telarañas que identifican a quienes han estado presos, además de los RIP, que hablan de la pérdida de compañeros muertos, sus cruces, sus tumbas y sus lemas como “la vida loca”.

Daban cuenta, también, de su origen en Los Ángeles, California. *La Barrio dieciocho* (B-18 o *Eighteen Street*) apareció en los suburbios chicanos en los años sesenta y la *Mara Salvatrucha* (MS-13), fundada por jóvenes salvadoreños, en los

ochenta. Ambas pandillas remiten a la calle, a la alianza entre los desposeídos por sobrevivir, nucleados en una suerte de ejércitos sin arraigo, acosados y sin expectativas; a la guerra entre bandas juveniles por el control de territorio. Pandillas confrontadas a muerte para hacer honor a la reivindicación de su existir marginal entre la xenófoba sociedad angloamericana y porque eso, “andar crispadas, en pie de guerra, les da cada vez una razón de ser.<sup>24</sup> La *B-18* aludía a la reunión de los *vatos* (sujetos) mexicano-estadounidenses. El nombre de la segunda remite a marabunta — hordas de hormigas de las selvas amazónicas que arrasan con todo en cuestión de minutos y que dio el título en español a *The Naked Jungle* de Byron Haskin en 1954 — y al lenguaje coloquial de El Salvador donde *mara* es sinónimo de “bola”, “palomilla” (grupo de amigos) o “pandilla”. A su vez, *Salvatrucha* es la unión entre salvadoreño y *trucho*, expresión acuñada por los *pachucos* y luego por los *cholos* como sinónimo de alerta, espabilado o “abusado”. Es decir, el salvadoreño listo, al que nunca sorprende el enemigo; bien trucha para no morir. Su apellido: el número 13 (la calle donde nació o la M del alfabeto).

Convertidas luego en cofradías transfronterizas de parias, cuando muchos de sus antiguos líderes fueron encarcelados en Estados Unidos y luego deportados a sus países de origen con su leyenda negra a cuestas, los *mareros* centroamericanos llegaron a la vieja estación del ferrocarril Chiapas-Mayab, en Tapachula, a mediados de los años noventa, y la convirtieron en su coto de caza. Tras el huracán *Mitch*, los sismos de 2001 y la crisis económica en El Salvador, Honduras y Nicaragua, el regreso al norte por la ruta de los migrantes pobres se recrudeció y con ellos llegaron, también, a la porción costera del Pacífico chiapaneco, algunos pandilleros *maras*.

El 17 de mayo de 2004, unos 104 reos, la mayoría miembros de la *Mara Salvatrucha*, murieron calcinados o asfixiados y otros 27 sufrieron quemaduras graves durante un incendio en el penal de San Pedro Sula.<sup>25</sup> “Su plan es encarcelarnos a todos y luego prendernos fuego”, dijo un sobreviviente.<sup>26</sup> Pablo Cardona, otro prisionero que salvó su vida, denunció que los guardias les dispararon desde el exterior para impedir que salieran de sus celdas.<sup>27</sup>

Según Ramón Custodio, presidente de la Comisión Nacional Hondureña de Derechos Humanos, decenas de pandilleros fueron secuestrados, torturados y asesinados por fuerzas de seguridad secretas, del tipo de los antiguos *escuadrones de la muerte*, en lo que describió como una “lenta limpieza social”.<sup>28</sup> En el periodo 1998-2000 se registraron en Honduras ejecuciones extrajudiciales de 1 000 menores de edad mientras en Guatemala eran asesinados un promedio de 30 jóvenes por mes.<sup>29</sup> A su vez, en El Salvador reaparecían grupos de exterminio como *La Sombra negra*, responsable del secuestro y homicidio de *mareros*.<sup>30</sup>

En ese contexto, Tapachula y la costa Pacífico chiapaneca se convirtieron en un espacio de confluencia de funcionarios y policías corruptos, traficantes de drogas y

armas, *polleros*, *coyotes* y “tratantes” de gente y, sin duda, de pandillas centroamericanas y vernáculas. En un lugar idóneo para que los cárteles llevaran a cabo una regularización del pandillerismo, incorporando jóvenes desarraigados a las filas del crimen organizado, como narcomenudistas o sicarios, haciéndoles cumplir tareas propias de la limpieza social en las cárceles, en las calles y en los barrios populares, y eliminando líderes campesinos y urbanos.

DE LAS CALLES DE LOS ÁNGELES  
A PELIGRO TRANSNACIONAL

El 2 de diciembre, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) Eduardo Medina Mora, informaron sobre los logros gubernamentales en el combate al pandillerismo juvenil en México: en los últimos dos años habían sido detenidos más de 1 000 *maras salvatruchas*.<sup>31</sup> El asunto se había convertido en un problema de “seguridad nacional”, dijo Creel. Como antes en Honduras, El Salvador y Guatemala. Además, había quedado *sembrada* la idea de que las llamadas “pandillas de la globalización”<sup>32</sup> mantenían vínculos con el grupo terrorista islámico Al Qaeda.

Poco después, el subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, señaló que la Procuraduría General de la República tenía “evidencias” de que miembros de la *B-18* y la *MS-13* eran utilizados como sicarios, asesinos a sueldo y para proteger cargamento de drogas por los cárteles de los hermanos Arellano Félix y los Carrillo Fuentes.<sup>33</sup> Era cuestión de tiempo para que la situación se empatara con la que reinaba en la californiana ciudad de Los Ángeles —con su añeja cultura pandilleril—, donde el jefe de policía local, William J. Bratton, ex lugarteniente de Rudolph Giuliani en Nueva York e ideólogo de la represiva doctrina de la “tolerancia cero”, había definido a los integrantes de esas bandas como “terroristas nacionales”.<sup>34</sup> Lo anterior había motivado, en 2004, que el FBI estableciera una unidad especial antimaras en coordinación con los gobiernos de América Central. Incluso, en abril de 2005 los jefes de estado mayor de los ejércitos de Honduras, El Salvador y Guatemala solicitaron al Comando Sur del Pentágono crear una fuerza especial combinada de militares y policías para combatir a las pandillas que se movían en el istmo centroamericano.<sup>35</sup> Las *maras* se habían transformado, ya, en un problema de seguridad transnacional.

Al terminar 2004, la agenda de Washington había sido recogida por Santiago Creel y la PGR. México ya tenía otro “enemigo interno”: las *maras*, presuntas asalariadas de bajo costo del narcotráfico y, como irían construyendo después los servicios de inteligencia mediante filtraciones a los medios, “aliadas” de la guerrilla. Un coctel ideal para construir el clima de miedo que propiciara un consenso nacional tendiente

a la aplicación de políticas represivas más duras que alejaran la atención pública de otras alternativas y soluciones con un enfoque más integral y de desarrollo nacional con equidad justicia y dignidad. Todo eso en un año preelectoral.

Como colofón episódico, dado que el tema de la *Mara Salvatrucha* había llegado para quedarse, cabe consignar que la realidad y la ficción por encargo volverían a mezclarse. Temprano en 2005, otra vez Jorge Fernández Menéndez abonaría el terreno de las teorías conspirativas. En su espacio de opinión, en *Milenio*, con el título “Entre Tom Clancy y la *Mara*: Al Qaeda en la frontera”, el periodista escribió lo que, dijo, pensaban “exactamente” que podía suceder en México las agencias de inteligencia estadounidenses: una alianza entre las *maras* y Al Qaeda.<sup>36</sup> Al respecto, citó una reciente novela de espionaje de Clancy, *Los dientes del tigre*, que acababa de ser publicada en español, donde el escritor estadounidense describía “con precisión” cómo se realizarían los próximos ataques de Al Qaeda en el territorio continental del imperio. Y no estuvo de más una aclaración de Fernández Menéndez: Tom Clancy es un novelista que suele tener “buenos *tips* de áreas de seguridad del gobierno estadounidense”.

Ahora, según la novela, ante las dificultades para entrar por las vías legales al territorio estadounidense, debido a más estrictos controles en los aeropuertos, los miembros de Al Qaeda lograrían acuerdos con los principales cárteles de las drogas colombianos, para que éstos, vía sus contactos en México, los ayudaran a ingresar una decena de fundamentalistas islámicos, con nociones básicas de español, a Estados Unidos. A cambio, recibirían apoyo de Al Qaeda para colocar cocaína en Europa.

#### EL CASO TLÁHUAC

El 23 de noviembre de 2004, dos agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) fueron linchados y quemados vivos y un tercero quedó gravemente herido, cuando pobladores de San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac, en la frontera rural del Distrito Federal con el Estado de México, los tomaron por secuestradores de niños en la puerta de una escuela. Las víctimas fueron retenidas y golpeadas durante casi cuatro horas, sin que elementos de las distintas dependencias federales y capitalinas de la seguridad del Estado, algunas con presencia física en el lugar, intervinieran de manera decidida para evitar el desenlace.<sup>37</sup> Incluso, 130 elementos de tropa de las Fuerzas Federales Preventivas y Motorizadas de la PFP estuvieron listos para intervenir en el cuartel de avenida Las Bombas, al sur de la ciudad capital, pero sus mandos no dieron la orden para acudir a rescatar a sus compañeros.<sup>38</sup>

Hubo un registro puntual de los hechos, ya que fueron seguidos paso a paso durante casi cuatro horas por fotógrafos, camarógrafos y reporteros de los medios de

difusión masiva. Convertido en dantesco espectáculo, el linchamiento fue transmitido en horario triple A por el duopolio de la televisión y por varias estaciones de radio, por lo que la audiencia nacional —incluidas las autoridades y los mandos de las distintas corporaciones policiales, federales y capitalinas— tuvo conocimiento de los hechos en tiempo real. La prensa grabó las golpizas habló con algunos ejecutores enardecidos de la turba, interrogó incluso a las víctimas que yacían desfiguradas y moribundas sobre la calle y tomó después registro audiovisual de la incineración de los agentes.

El presidente de la República, Vicente Fox, intervino con la finalidad de capitalizar políticamente la tragedia. En lo que fue considerado como un acto de propaganda por algunos medios dio audiencia en la residencia oficial de Los Pinos a familiares de las víctimas. Además cesó al comisionado de la PFP, almirante José Luis Figueroa, y destituyó por “incapaz” al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal,<sup>39</sup> Marcelo Ebrard,<sup>40</sup> e instruyó al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, para que de manera facciosa y auxiliado de artilugios leguleyos imputara o fabricara delitos a Ebrard, en una acción que distintos analistas consideraron dirigida a abrirle paso a su esposa, Marta Sahagún, en la carrera hacia la candidatura del gobierno del Distrito Federal.<sup>41</sup> También llamó a la ciudadanía a “sacar al policía que se lleva dentro”.<sup>42</sup>

#### POLICÍAS Y LADRONES

Desde un comienzo llamó la atención que la primera hipótesis descartada por los investigadores federales como causa del linchamiento fue, precisamente, la esgrimida por los victimarios: que se trataba de secuestradores de niños. Testimonios de personas que integraron la turba la noche del suceso dieron cuenta de que varios días antes del hecho algunos lugareños vieron a unos hombres ajenos a la comunidad, en un auto Focus color arena, tomando fotografías del lugar y de las personas cerca de la escuela primaria Popol Vuh. Los extraños se convirtieron en una preocupación colectiva. El director y los maestros del plantel recomendaron a las madres cuidar mejor a sus hijos.<sup>43</sup> Para entonces ya se había esparcido el rumor de que “andaban buscando niños para secuestrarlos y vender sus órganos”.<sup>44</sup>

La noche del crimen tumultuario, el rumor de que habían sido secuestrados dos escolares creció en la localidad. “Agarramos a los secuestradores”, fue el grito que convocó y aglutinó a una multitud mayoritariamente juvenil, pero conformada también por mujeres y niños. A través de la transmisión en vivo y en directo de los hechos por la radio y la televisión, se pudo percibir que el desenlace (la incineración de los cuerpos todavía con vida de dos agentes) sobrevino luego de que el



subinspector Víctor Mireles —ex agente de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)—<sup>45</sup> y su compañero, el suboficial Edgar Moreno, entrevistados por Televisa en medio de la golpiza, revelaron su pertenencia a la Dirección de Terrorismo de la Coordinación General de Inteligencia para la Prevención de la PFP. La furia homicida creció tras conocerse su identidad como funcionarios policiales. Como argumentó el abogado Javier Rosas en una entrevista, “en todo caso, ser policía no significa que no eran delincuentes”.<sup>46</sup> Lógica simple en un país como México.

¿Qué hacían tres elementos adscritos a la unidad de antiterrorismo de la PFP en San Juan Ixtayopan? Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública federal, “tenían órdenes precisas de recopilar información sobre delitos denunciados por los propios ciudadanos sobre supuesta venta de droga al menudeo, secuestros y robo de vehículos” en ese lugar.<sup>47</sup> Se aclaró, incluso, que entre sus funciones estaba “investigar, a manera de prevención, acciones relacionadas con narcotráfico y delincuencia organizada”.<sup>48</sup>

Una información atribuida a la Secretaría de Seguridad Pública SSP federal señaló que los agentes Mireles, Moreno y Bonilla “investigaban a policías preventivos y judiciales del Distrito Federal [...] vinculados con actividades de narcomenudeo en la zona”. Elementos que, presuntamente, “cobraban” por brindar “protección” a vendedores de cocaína y marihuana al menudeo en dos colonias vecinas.<sup>49</sup>

El presunto vínculo entre policías “protectores” y *narcomenudistas* en un “pueblito tranquilo” de Tláhuac, donde “todo se sabe”, lleva por lógica a la conclusión de que los lugareños sabían perfectamente dónde y quién le vendía a sus hijos churritos de marihuana y cocaína “a 50 pesos el sobrecito”.<sup>50</sup> Dado que en México, en pleno siglo XXI, sigue imperando una estructura nuclear familiar, que en zonas semirurales suele expresarse en formas caciquiles o de mafias familiares que controlan cada giro económico específico del pueblo —incluidos grupos y bandas dedicadas a la economía criminal— puede especularse que algunas “familias” del lugar (los cárteles de la droga también son entrelazamientos familiares: los Arellano Félix los Carrillo Fuentes, los Guzmán Loera, los Amezcua, los Valencia, los Beltrán Leyva, que se disputan de manera violenta el control de territorios) vieron como un problema a los policías fuereños, a los que presumiblemente identificaron como parte de una organización criminal o *hermandad* rival, y apelando a una dinámica de autodefensa exacerbada por la privatización de la seguridad, ante la renuncia del Estado a brindar seguridad pública a la ciudadanía, aplicaron la justicia por propia mano; una acción de escarmiento para que se fueran a preñar a otro coto.

Con el antecedente de la “doctrina Montiel” — en 1999, en su campaña por la gubernatura del Estado de México, el candidato del PRI Arturo Montiel lanzó una propaganda radial donde se decía que “los derechos humanos son de los humanos, no

de las ratas”, refiriéndose a presuntos delincuentes, a quienes dijo no les reconocería derechos y trataría con mano dura—,<sup>51</sup> en “la histórica marcha del silencio” contra la inseguridad pública del 27 de junio de 2004 convocada por grupos de ultraderecha y los consorcios privados de la radio y la televisión, la “gente bien”, toda vestida de blanco, había reclamado “muerte a secuestradores”.<sup>52</sup> En su crónica “Un bosque de pancartas”, Homero Aridjis reseñó entonces más de medio centenar de leyendas que expresaban el “sentir popular” de las clases media y alta, entre las que figuraban: “Para secuestradores, pena de muerte. Muerto el perro se acabó la rabia”; “Muerte a secuestradores”; “Mata a un secuestrador, haz patria”; “Derechos humanos, no”; “Ya basta. Sí pena de muerte”; “Fuera políticas de derechos humanos”; “Rescatemos a México: sociedad civil”.<sup>53</sup>

Con base en esas consignas se puede deducir que los ejecutores tumultuarios de Tláhuac estuvieron más cerca del espíritu patriótico y clasista de la “gente bonita” convocada por los Azcárraga Jean y los Salinas Pliego, que de los “usos y costumbres” indígenas.

#### A PROPÓSITO DE LA MASA Y LOS MEDIOS

Más allá de los análisis y las interpretaciones sociológicas y psicoanalíticas que proliferaron en los días del hecho, no hay ninguna explicación suficiente para el bárbaro linchamiento de Tláhuac. Resultó obvio que para parte de la población la justicia no pasaba por el Estado; más aún, para muchos el Estado era sinónimo de injusticia. Fue evidente, asimismo, que algunos protagonistas del linchamiento no se percibían a sí mismos como criminales. Como sentenció ante las cámaras y los micrófonos de los medios una matrona de Ixtayopan sin el más mínimo arrepentimiento: “No matamos a nadie, hicimos justicia”. O como dijo otra: “Ya hacía falta un escarmiento”.<sup>54</sup> Las mujeres también son capaces del despliegue de saña, apuntaría Carlos Monsiváis, al consignar en un texto extenso que “las turbas luchadoras son unisex”.<sup>55</sup> ¿Qué hace que un grupo humano se convierta en turba? ¿Cómo se da la metamorfosis de ciudadano en verdugo? Se argumentó entonces que en acciones de ese tipo el comportamiento brutal de la turba y la mecánica irracional a la cual obedece siempre está fundado en el miedo, la crueldad y la imitación. En la masa el individuo pierde todo lo que lo define como ser humano. Pierde su identidad y su capacidad de discernimiento, deja a un lado sus principios éticos, olvida las reglas de la sociedad, imita, no razona, se guía por sus instintos y por lo que hace el vecino, gana fuerza, poder y sobre todo da rienda suelta a su inquina. Todos tienen derecho a golpear. Todos deben parecerse a todos. Se presume que el crimen cometido por muchos no es culpa de nadie. Al amparo de la venganza, la turba ejerce

funciones expeditas de suprema corte de justicia y se produce una conversión de la matanza en hazaña.

Simbólicamente, el linchamiento es un intento por protegerse de las “amenazas”. El sentimiento que acompaña gran parte de esa forma de violencia es “el miedo al otro”. Y en ello, el rumor —como ocurrió en San Juan Ixtayopan— juega un papel fundamental, pues alimenta la sensación de una amenaza externa. La mayoría de las víctimas son gente ajena a la comunidad, forasteros o maleantes de otros pueblos. En el caso Tláhuac, los tres agentes fueron detectados dos semanas antes en el lugar tomando fotos a los niños de una escuela y el rumor de los secuestros se expandió por la comunidad. Eso generó miedo. La gente creyó que los policías eran delincuentes. Luego no fue fortuito que al identificarse como elementos de seguridad de la PFP, las víctimas del linchamiento enardecieran aún más a la ya desenfrenada turba, que consideró, en todo caso, que eran policías delincuentes.

Pero el asunto de esos juicios sumarios comunitarios no debe reducirse a los “usos y costumbres”, sino interpretarse como actos de desesperación en contextos explosivos. El rumor crece en situación de crisis. Además, cabe considerar que al sentimiento de vulnerabilidad propio de la marginalidad y la exclusión social se suma la vulnerabilidad de la inseguridad pública y los abusos, la corrupción y las extorsiones de policías y autoridades administrativas. Del temor se pasa a la aprensión y de allí a la histeria. La historia nos recuerda que las masas florecen por doquier; el nazismo fue el clímax.

Por otra parte, el calvario de los tres agentes de la PFP en Ixtayopan puede achacarse, también, al extendido y muy mexicano odio a la policía. “Deben tantas nuestros guardianes de la ley y desde hace tanto tiempo, que la venganza rabiosa quizá tenga que considerarse como una parte indómita de la caracterología nacional, surgida seguramente desde el corrupto y sangriento virreinato”, señaló Fernando Solana Olivares.<sup>56</sup>

Pero de allí no se podía caer en el reduccionismo discriminatorio de atribuir el linchamiento de Tláhuac a los “usos y costumbres” indígenas, como hicieron algunos funcionarios e insistieron con profusión los profesionales de los medios. Una cosa es hacerse justicia por propia mano y otra muy diferente es ejercer la justicia propia como lo hacen los pueblos indígenas. Como señaló Magdalena Gómez, a diferencia de cómo opera el andamiaje jurídico oficial —que vive la esquizofrenia entre la “verdad legal” y la “verdad real”, a la que en tiempos recientes se había sumado la “verdad mediática”—, entre los indígenas sí se logra la justicia pronta y expedita que establece la Constitución mexicana.<sup>57</sup> En general, los conflictos se abordan y se resuelven en una sesión, durante la cual se discuten y se reconstruyen los hechos, con la intervención de la parte acusadora y de la parte acusada. Los miembros de la comunidad brindan su testimonio, y la autoridad tradicional va orientando la

discusión, señalando el tipo de valores que la comunidad quiere preservar. Por otra parte, no existe como pena la reclusión prolongada en la cárcel —menos el linchamiento—, sino que se fija la reparación del daño de manera que las partes queden reconciliadas y conformes; para ello se utiliza el trabajo comunitario como método de readaptación y reinserción en la comunidad, así como la cooperación económica y el respeto a la palabra empeñada.

En ese contexto, los medios electrónicos, que transformaron un hecho en acontecimiento de la primera plana del país, también hicieron lo suyo. El ojo de la televisión vio y multiplicó el horror envilecido. “Ni espectador comprometido, ni mensajero, la televisión participa y provoca reacciones entre los individuos que se funden y confunden en la multitud”, escribió León García Soler.<sup>58</sup> Hubo quienes incluso sugirieron que ese hecho “maligno y oscuro” pudo haber sido “artificial e inducido”, y “permitido con alguna aviesa y atroz intención. ¿Y quizá exhibido a sabiendas en todos los televisores del estupefacto país?”<sup>59</sup> Según Fernando Solana Olivares, los rastros de lo visible indicaban que la parálisis policiaca federal y metropolitana, la inexplicable y homicida tardanza operativa para intervenir a tiempo en auxilio de los tres agentes linchados por la turba, obedeció, sobre todo, “a la inclemente guerra política que libran entre sí las administraciones de Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador”.<sup>60</sup>

Lo que más destacó Solana fue “el escalofriante espectáculo televisivo, tan deplorable, inquietante y sospechoso como el linchamiento mismo. Tan malignamente banal, tan chusco y trágico a la vez”. La “omnipotencia mediática de este tiempo insano” logró que los linchadores suspendieran unos instantes su “encarnizada” tarea para permitirles hablar a las víctimas delante de las cámaras y los micrófonos de “la única realidad real que socialmente se comparte”: los noticieros.

#### FIGUEROA Y LA HIPÓTESIS DEL SECUESTRO

A propósito de los hechos de San Juan Ixtayopan, el presidente Fox dijo: “No descansaremos hasta eliminar esta dolosa, vergonzosa práctica, de hacerse justicia por propia mano. No aceptaremos explicación alguna de *usos y costumbres* <sup>61</sup> o de prácticas que no fueran castigadas debidamente *en el pasado*”.<sup>62</sup> (Cabe consignar que se trataba del mismo Vicente Fox que había llamado a la población a “sacar al policía que se lleva dentro”, en una suerte de invitación al vigilantismo popular, mediante el cual, implícitamente, estaba delegando la responsabilidad estatal de procurar y administrar justicia en la “participación ciudadana”).

Sin que tenga justificación alguna el linchamiento colectivo de Tláhuac, ¿no resultaba verosímil la causal o el móvil esgrimido por los homicidas en el momento

del hecho ante los medios masivos de difusión, de que su acción fue motivada por la presunción de que estaban ante un grupo de secuestradores? Con otro elemento adicional que refuerza lo anterior: el 14 de enero de 2005, a más de un mes y medio del hecho, Luis Javier Rojas, abogado defensor del defenestrado almirante José Luis Figueroa, declaró a un medio que el ex comisionado de la PFP no ordenó rescatar a sus elementos en Ixtayopan, porque creyó que “se trataba de presuntos responsables de un delito de secuestro” y que de haber enviado un batallón para salvarlos “se hubiera entendido que protegía a delincuentes de la corporación”.<sup>63</sup> Lo que hizo, según Rojas, fue enviar al representante jurídico de la PFP, Jorge Montoya Rodríguez.<sup>64</sup>

Es evidente que el día del acontecimiento, ante la gravedad de los hechos que se estaban transmitiendo en vivo y en directo por la televisión, Figueroa tuvo que comunicarse con su superior en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Ramón Martín Huerta, para pedir instrucciones, y éste a su vez debió haber consultado al titular del Ejecutivo. ¿Por qué no se puso en marcha un operativo federal para rescatar a los tres elementos de la corporación, lo que provocó incluso que en un acto de indisciplina un grupo de oficiales de la PFP rompieran la cadena de mando al amotinarse y acusar a sus jefes de haber dejado morir a dos de sus compañeros?<sup>65</sup> ¿Por qué cuando dos semanas antes de los hechos la subsecretaría de Seguridad Pública capitalina informó a la PFP que sus agentes de inteligencia habían sido detectados por los vecinos, se les mantuvo en el lugar a sabiendas de la zozobra que estaban generando entre los pobladores y al margen de los criterios de seguridad que implican ese tipo de operaciones encubiertas?

Como dijo Gabriel Regino al comparecer ante una comisión de diputados del Distrito Federal, “quizá ese haya sido el propósito generar la zozobra y aumentar el miedo”.<sup>66</sup>

#### DE LA TEORÍA DEL COMLOT A LA CONSTRUCCIÓN DE UN ENEMIGO IDÓNEO

La desaseada politización y evolución del caso Tláhuac, con el inédito giro de las investigaciones y la celeridad con que el Ministerio Público de la Federación logró alcanzar la “verdad” de los hechos,<sup>67</sup> para encaminarse hacia lo que se presumía sería una acción ejemplarizante de la “justicia”, con la destitución y el eventual encarcelamiento de funcionarios públicos de alto nivel, sugerían más que un cambio real en las políticas oficiales de combate a la inseguridad pública y a la delincuencia organizada enquistada en las estructuras estatales, un montaje gubernamental con varias pistas de interpretación, cuya incidencia trascendía el marco capitalino.

De la hipótesis inicial, que responsabilizaba del linchamiento de tres agentes de

inteligencia de la PFP a una muchedumbre enardecida, guiada por instintos y emociones irracionales y movilizada por un rumor: el supuesto secuestro de escolares, se pasó luego a conjeturar que fue una acción inducida y manipulada por vendedores de droga al menudeo, lo que por lógica derivaría las pesquisas hacia las mafias del crimen organizado —en particular las del narcotráfico— que actúan bajo la protección o en colusión con mandos de distintas corporaciones de seguridad del Estado.

Sin embargo, con el correr de los días, a través de una sostenida campaña de propaganda que utilizó simples especulaciones, declaraciones de funcionarios gubernamentales y filtraciones atribuidas a miembros de la comunidad de inteligencia y a fuentes anónimas, confiables, reservadas o confidenciales —con la consiguiente *siembra* de “información” y “evidencias” en los medios masivos de difusión— las autoridades lograron construir la versión de lo que en “realidad” ocurrió en San Juan Ixtayopan el 23 de noviembre de 2004: “Iban por *narcos* y encontraron subversivos”, sintetizó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta.<sup>68</sup>

Los primeros “indicios” sobre la mano de la “subversión” en Tláhuac fueron manejados por Jorge Fernández Menéndez en sendos artículos de opinión, en el diario *Milenio*, los días 25 y 26 de noviembre, un par de días después del hecho. Según el conocido analista, la violencia irracional protagonizada por una turba en San Juan Ixtayopan había sido inducida y conducida por bandas de narcotraficantes al menudeo y por grupos armados ultrarradicales coludidos con políticos locales, que no sólo llevaban a cabo acciones de “control y defensa territorial” en la delegación Tláhuac sino también en Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco.<sup>69</sup> De acuerdo con su versión, distintos desprendimientos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) actuaban desde hacía años en zonas semiurbanas, rurales y marginales de esas cuatro delegaciones del Distrito Federal. Entre ellas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), con presencia también en Morelos, y el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP), con lazos en Morelos y Puebla.

El 27 de noviembre, el titular de la portada del diario *La Jornada* destacaba: “Iban a la *caza* de ‘subversivos’ los agentes linchados”. Y en su cintillo agregaba: “Fueron *sembrados* en Tláhuac sin protección: fuentes de la PFP”.<sup>70</sup> En interiores, la cabeza de la nota identificaba que el verdadero objetivo de los policías preventivos era investigar presuntas actividades de las FARP en el lugar. Las FARP habían hecho su aparición pública en Xochimilco, en 1999.

Según la nota, firmada por Miguel Ángel Velásquez —quien atribuyó los datos a fuentes de la PFP que “pidieron el anonimato”— los agentes investigaban los vínculos con las FARP de “un profesor” que habría estado ligado a “los hermanos Cerezo Contreras (Héctor Alejandro y Antonio)”.<sup>71</sup> Las “pruebas” que mostraban la labor de

los agentes eran, según los informantes, unas fotografías difundidas en televisión dos días antes, donde habían quedado impresas la fachada de un domicilio particular, unas placas de circulación del Estado de México y un camión de carga, que no tenían “explicación lógica” con las tareas que a nivel oficial le habían atribuido: indagar actividades de *narcomenudeo*. Las fuentes señalaron que dados los datos curriculares del mando del operativo, Víctor Mireles Barrera, los agentes estaban en algo “más gordo”.

Otro elemento destacado en la información fue que dado que era imposible que pasaran inadvertidos en un poblado de las características de San Juan Ixtayopan —lo que quedó corroborado con el hecho de que algunas madres de escolares los habían encarado en un par de ocasiones días antes del linchamiento—, el trabajo de los policías “no era una labor encubierta”. Eso, ratificado con el dato de que no tenían “una retaguardia que los protegiera” y carecían de “un sistema de comunicación que les permitiera tener acceso inmediato a los apoyos con que todo *operativo encubierto* debe contar”, llevó a las fuentes policiales a concluir que los “espías” Mireles, Bonilla y Moreno habían sido “sembrados”. A su vez, para algunos pobladores de San Juan —según les atribuyó Velásquez en su nota—, se había tratado de una “provocación”.

#### OLOR A ROQUEFORT EN TLÁHUAC

El 29 de noviembre Raymundo Riva Palacio añadió nuevos elementos y protagonistas a la trama. En su colaboración “El gruyere de Fox”, el periodista dejó asentada la idea de que Tláhuac podía constituir un “terreno fértil” para establecer “una base terrorista contra Estados Unidos” (*sic*).<sup>72</sup> A su juicio, la “ejecución” de dos agentes de inteligencia pertenecientes a una unidad de narcotráfico y terrorismo de la PFP exhibía la incapacidad del gobierno de Vicente Fox para mantener la seguridad del Estado y mostraban a México “como un territorio desde el cual, sin duda alguna, se pueden montar acciones de terrorismo contra Estados Unidos”.

En su argumentación, Riva Palacio introdujo algunos datos del contexto global, como la presunta liga terrorismo-narcotráfico que había sido establecida por la administración Bush en su agenda internacional, y trajo a colación el caso de las FARC, “la guerrilla que usa el narcotráfico como fuente de financiamiento”. De acuerdo con “informes policiales —abundó Riva Palacio—, las FARC tienen nexos con el cártel de Tijuana”, que a su vez “maneja redes de *narcomenudeo* en el corredor Tláhuac-Iztapalapa, en el suroriente de la ciudad de México”.

Entre otras variables, citó que en Tláhuac se encontraban “las casas de seguridad de la guerrilla urbana y rural del Partido Revolucionario Obrero-Campesino/Unión

del Pueblo (PROCUP)". Al desintegrarse el PROCUP, "varios de sus miembros se sumaron al EZLN", y cuando "el subcomandante Marcos aceptó con celeridad sospechosa negociar con el gobierno salinista", a los 11 días del levantamiento de 1994, "más de 100 cuadros militaristas abandonaron al EZLN en busca de una auténtica lucha armada" y se "sumaron" al EPR —"una derivación del PROCUP"—, al que calificó como "la organización armada más peligrosa, por seria y profesional, que hay en México". Para entonces, "los cuerpos de seguridad del Estado" ya habían "detectado" que varios comunicados zapatistas "fueron redactados por un grupo de intelectuales y asesores que tenían como nervio central Iztapalapa". Además, agregó, como sus antecesores, "el EPR mantiene casas de seguridad en Tláhuac".

En el tejido de su telaraña delincriminal-subversiva, Riva Palacio admitió que no existía una relación EPR-narcotráfico, pero introdujo una nueva pista: que en el corredor Iztapalapa-Tláhuac "se tiene registro de que operan las *maras salvatruchas*", que en su "invasión" a México "se han involucrado con el *narco*". Aunque "no se sabe" si mantienen relaciones con el cártel de Tijuana, están "conviviendo" con él en el sur de México. El columnista sugirió que esas podrían ser algunas líneas de investigación de la PFP, "sobre todo si las *maras*, según los servicios de inteligencia estadounidenses, han establecido contactos recientes con Al Qaeda, el principal enemigo de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo".

#### RECUERDOS DE OCOTAL Y LA GUERRILLA DE OCOSINGO

El *affaire* Ixtayopan se iba a enredar aún más a raíz de una nota informativa publicada por Jaime Avilés en *La Jornada*, cuyo titular decía: "De mi padre, la casa que vigilaba la PFP en Tláhuac: Francisco Cerezo".<sup>73</sup> En su texto, Avilés afirmaba que la vivienda cuya fachada había quedado registrada por la cámara fotográfica de los agentes de la PFP había sido construida por "el profesor Francisco Cerezo Quiroz", padre de los tres jóvenes que estaban reclusos en el penal de máxima seguridad de La Palma desde agosto de 2001 acusados de haber colocado unos petardos en sucursales bancarias de Xochimilco, en una acción atribuida a las FARP. Su fuente era inobjetable: Francisco Cerezo Contreras, hermano de los enjuiciados.

De acuerdo con la versión, los Cerezo Contreras habían llegado a la colonia Peña Alta, sobre la falda del cerro Teutli, en Tláhuac, hacía más de dos décadas y allí pasaron su infancia los hijos de la pareja. Sin embargo, a mediados de los años noventa habían dejado el lugar. Por eso, "nos sorprende que la PFP vigile de manera constante, a través de su sección antiterrorismo, una casa en la que desde hace mucho tiempo no vivimos", escribió Avilés atribuyéndoselo a Francisco.



Un día después, en el marco de un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública federal, que negaba que la misión de los agentes linchados hubiera sido indagar sobre “la presencia de presuntos grupos subversivos en la zona”,<sup>74</sup> *La Jornada* publicó una carta de Francisco Cerezo Contreras, en la que aclaraba que en sus declaraciones a Jaime Avilés, “en ningún momento *escribimos* que la casa que vigilaban los miembros del grupo antiterrorista de la PFP era un domicilio conocido, mucho menos el de mi padre”.<sup>75</sup> Y puntualizaba: “No conocemos ni tenemos relación alguna con la casa que se muestra en una fotografía, de la supuesta cámara de los agentes de la PFP, como erróneamente infiere el periodista Jaime Avilés”.

El 1° de diciembre, en un comunicado dirigido “al pueblo de México”, las FARP aseguraron que la misión de los tres agentes de la PFP en Ixtayopan “no tenía nada que ver con el *narcomenudeo*” sino que “actuaban como señaladores de los luchadores políticos y sociales”.<sup>76</sup> Asimismo, reiteraron que los hermanos Cerezo Contreras “no formaron ni forman parte de nuestras filas”, y si estaban reclusos “es porque son presos políticos por consigna”.

En un contexto que cada día tendía a complicarse más ante la revelación de nuevos datos, incluida una declaración del procurador Rafael Macedo de la Concha en el sentido de que las versiones sobre la presencia de la guerrilla en Tláhuac eran meras “especulaciones” que trataban de “desviar la atención de la opinión pública,<sup>77</sup> Jorge Fernández Menéndez volvió a insistir en su teoría sobre la “estrategia senderista” en la zona suroriental del Distrito Federal.

En su artículo de opinión “De Chiapas a Tláhuac: no es lo mismo pero es igual”,<sup>78</sup> el colaborador de *Milenio* trajo a colación su versión de un hecho ocurrido el 23 de marzo de 1993 en el poblado chiapaneco de San Isidro Ocotál. Ese día, escribió Fernández Menéndez, mientras recorrían a pie, vestidos de uniforme y sin armas, el Cerro del Extranjero hasta Villa Alcalá, donde había indicios de que se estaban entrenando grupos guerrilleros, el capitán de la Fuerza Aérea Mexicana Marco Antonio Romero, y el teniente de Infantería Porfirio Millán, adscritos a la zona militar de San Cristóbal de las Casas, “fueron capturados por un grupo de pobladores [de San Isidro], golpeados, linchados y destazados y sus cadáveres incinerados”. “Semanas después se supo que en realidad ese había sido el primer enfrentamiento formal entre lo que en 1993 los documentos militares llamaban ‘la guerrilla de Ocosingo’ (y que después conocimos públicamente como el EZLN) y miembros del Ejército.”

“¿Tiene algo que ver esto con lo sucedido en Tláhuac?”, se preguntó Fernández Menéndez. Y él mismo se respondió: “Por supuesto, no sólo porque de forma directa o indirecta varios de los protagonistas de la historia son los mismos, y porque los hechos son terriblemente similares, sino también porque se intenta oscurecer el punto central: el asesinato irracional y salvaje, como se hizo entonces, con preguntas que

son secundarias: ¿qué investigaban?, ¿drogas o grupos armados?” De allí pasó a ratificar su convicción de que en Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco “conviven los grupos supervivientes del EPR con grupos criminales interrelacionados y con un objetivo común: tener la zona bajo su control”. Pero ahondó en un dato que en su escrito anterior estaba insinuado de manera débil: en el caso de Tláhuac, la presunta alianza narcosubversiva contaba además con un “acuerdo” de las autoridades locales (del PRD) para que esos grupos “se hagan cargo de la ‘seguridad’ del lugar”. El objetivo, enfatizó, “es que fuerzas de seguridad que no sean del ‘grupo’, en este caso federales, no entren al lugar, y si lo hacen el escarnio debe ser tan terrible como para que no se repita”.

#### ¿TRAMPA DEL EPR O PERIODISTA CHAMAQUEADO?

Un día después, Raymundo Riva Palacio publicó dos textos en *El Universal* sobre los linchamientos de Tláhuac. En uno, que tituló “Ensayo de un golpe de Estado”, señaló que a raíz de lo acontecido en Ixtayopan se había sufrido una “ruptura del orden institucional” similar a la que conduce a una “asonada”. Se refería a la pérdida de control sobre sus subalternos del alto mando de la PFP, acusado de haber dejado morir a dos agentes de la corporación. Según él, los oficiales que cuestionaron la actitud del almirante José Luis Figueroa incurrieron en un acto de “indisciplina”, y al romper con la cadena de mando habían protagonizado un “incipiente motín”. Recordó que la PFP fue creada con una brigada del Ejército y era considerada un cuerpo de élite de las fuerzas de seguridad civiles, y que los policías “no protestan ni en público ni en privado, menos aún suspenden labores”. Lo que procedía, dijo, era que José Luis Figueroa cesara a los insubordinados, y al no hacerlo había exhibido “debilidad y confusión”. Igual su jefe, Ramón Martín Huerta.<sup>79</sup>

El otro texto, destacado en la primera plana del periódico, se titulaba: “Presumen ‘trampa’ de EPR”.<sup>80</sup> En él, expuso que “de acuerdo con información confiable”, los agentes de inteligencia de la PFP “investigaban a la comandancia general del Ejército Popular Revolucionario”, cuyo “máximo dirigente”, Francisco Cerezo Quiroz “presuntamente vivía en una casa adyacente al lugar donde se torturaron y quemaron vivos” a los dos policías. Asimismo, citó “una fuente con acceso privilegiado a la información de la PFP”, según la cual “el servicio de contrainteligencia del EPR” había detectado 10 días antes a los agentes y montó un “operativo de vigilancia” sobre ellos.

Ante la negativa gubernamental de relacionar el linchamiento con la guerrilla, escribió Riva Palacio: “Información reservada a la cual ha tenido acceso *El Universal* contradice los pronunciamientos públicos y destaca que los agentes se encontraban

[...] vigilando la casa de seguridad donde [...] vivía Francisco Cerezo Quiroz”. A partir del *modus operandi* del EPR, sus “informantes” sugirieron al reportero que “cuadros” de la guerrilla “sembraron” en la comunidad la idea de que estaban secuestrando niños, describieron el vehículo de los agentes y crearon las “condiciones psicológicas para el linchamiento”.

Siempre “de acuerdo con reportes de inteligencia”, Riva Palacio señaló que el EPR “tiene alrededor de 200 cuadros totalmente militares, que son el núcleo armado más poderoso que tenga una guerrilla en México”. Según esa información, “la comandancia general del EPR se encuentra en la zona metropolitana de la ciudad de México operando en Tláhuac; en Coacalco y Ojo de Agua, en el norte de la capital, y en Cuajimalpa, al poniente”. Fuera de la capital, tiene presencia en la ciudad de Oaxaca y en la región de Los Loxichas, en la Costa Grande de Guerrero, en la Huasteca hidalguense y en el área de Huejutla, Veracruz.

Quedó la incógnita —porque el periodista y sus fuentes anónimas no lo revelaron— acerca de por qué razón los servicios de seguridad del Estado no habían procedido antes a capturar a “la comandancia general del EPR” en sus *santuarios* <sup>81</sup> de Xochimilco y Tláhuac, y por qué, si en el momento en que Riva Palacio escribió la nota sus informantes tenían detectados “campos de entrenamiento” de la guerrilla fuera de la zona metropolitana y “casas de seguridad” por el rumbo de la Cabeza de Juárez, en la delegación Iztapalapa tampoco actuaban.

En la columna sabatina de Jaime Avilés, correspondiente al 4 de diciembre de 2004,<sup>82</sup> con el título: “Corea del Norte en Tláhuac” Avilés admitió haber cometido un “error” de interpretación y haber sacado “una conclusión falsa” al leer el texto que Francisco Cerezo Contreras le había enviado por internet, para contarle cómo sus padres participaron en la construcción de la colonia Peña Alta, en lo que ahora era San Juan Ixtayopan. Su “equivocación”, aceptó Avilés, consistió en “deducir” que la vivienda que habían fotografiado los agentes linchados era la que había edificado “el profesor Cerezo”. Y con base en eso, “hice decir a Francisco Cerezo hijo que ‘la casa que vigilaba la PFP era la de mi padre’”. La “distorsión” en la que había incurrido, agregó el columnista de *La Jornada*, le pareció “oportunísima” porque venía a confirmar lo que “fuentes anónimas” de la PFP le habían declarado a su compañero Miguel Ángel Velásquez el 26 de noviembre, en el sentido de que la misión de las víctimas era seguir una pista vinculada con las FARP.

Tras el desmentido, Avilés supuso que el asunto quedaba cerrado. Pero no fue así. Señaló que, para su sorpresa, su error fue usado como “evidencia” de que en Tláhuac abundaban los grupos armados. Dijo que llegó a esa conclusión al “examinar” la nota elaborada por Raymundo Riva Palacio para *El Universal* de acuerdo con una “información confidencial”.

Todo sugiere —escribió Avilés— que la “pista” de la guerrilla en Tláhuac es la

que desde hace varios días propuso, y ahora trata de fortalecer, el citado Riva Palacio, quien como ex empleado de Carlos Ahumada, de seguro goza de inmensa credibilidad en las oficinas de Rafael Macedo de la Concha, o “de la Cancha”, como una ingeniosa periodista rebautizó al procurador por su afición al fútbol, deporte que alguna vez practicó con Ahumada y Riva Palacio en las instalaciones del periódico *El Independiente*.

Añadió todavía un dato más: dijo que a partir de una conversación personal con Francisco Cerezo Contreras la noche del 30 de noviembre, se enteró de que la “modestísima vivienda” que había pertenecido al presunto líder del EPR “quedaba a más de 500 metros” de la casa fotografiada con la “supuesta cámara” de los agentes de la PFP. Y concluyó: “Ahora, resulta que mi lamentable pifia se ha convertido en ‘información confidencial’, pese a que fue publicada y desmentida de inmediato en este diario”. De allí que sintetizara en el título y en los balazos de su columna, que con “el descubrimiento de una sucursal de Corea del Norte en Tláhuac” el gobierno de Vicente Fox intentaba vincular al Gobierno del Distrito Federal con el “terrorismo” y, para ello, la PGR mantenía a los hermanos Cerezo como “rehenes”.

#### FILTRACIONES A GRANEL

Para entonces se había ido fortaleciendo la hipótesis de que el linchamiento de Tláhuac fue una “acción concertada”, atribuida, según quienes alimentaron esa versión en los medios, a una singular alianza que involucraba al EPR y sus supuestos métodos *senderistas*,<sup>83</sup> a la familia Cerezo Contreras (algunos de cuyos integrantes estaban en la clandestinidad y otros presos), al cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix, a las FARC, a la *Mara Salvatrucha*, al grupo terrorista islámico Al Qaeda, al Frente Popular Francisco Villa y al Grupo Bejarano, ambos ligados al Partido de la Revolución Democrática (PRD), y a elementos “radicales” del Consejo General de Huelga (CGH) de la UNAM. Todo ello, con la “complicidad” de autoridades del Gobierno del Distrito Federal. Un coctel realmente explosivo que, de tener bases de sustentación en la realidad y ante los nulos resultados en la consignación de responsables, exhibía la total ineficacia de los órganos de seguridad del Estado.

El 8 de diciembre *Reforma* publicó una nota de Abel Barajas con el título: “Vincula Procuraduría a EPR en linchamiento. Ubican a principal indiciado como activista guerrillero”.<sup>84</sup> Como fuentes citó a la “PGR”, a “un funcionario federal” y a “órganos de seguridad nacional”; no dio ningún nombre propio. El día 10, en una nota de interiores, *Milenio* cabeceó: “SSP: iban por narcos y encontraron subversivos”. La fuente era el secretario de Seguridad Pública federal Ramón Martín Huerta.<sup>85</sup>

Por esos días, el asesinato de Enrique Salinas de Gortari opacó un poco el interés

por las investigaciones de lo sucedido en San Juan Ixtayopan. Pero el 13 de diciembre, en su columna de la revista *Milenio*, con el título “La reunión de Tláhuac”, Jorge Fernández Menéndez aludió de nuevo a la presunta participación de organizaciones armadas (“en realidad grupos vinculados o desprendimientos del EPR”) y de masas (Frente Popular Francisco Villa) en el corredor Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Iztapalapa, y a una supuesta reunión de la dirección del EPR en San Juan Ixtayopan el día de los linchamientos.<sup>86</sup> Basándose en sus propios dichos y sin aportar elementos concretos, se volvió a referir a las “sólidas relaciones políticas” de militantes del EPR y los “panchos villas” con “enlaces” gubernamentales de las administraciones de Manuel Camacho, Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador en el Distrito Federal.

En la parte más sustancial de su texto, que atribuyó a “información de las autoridades”, dijo que en la vivienda que era vigilada por los agentes linchados, y que era “una suerte de escuela de cuadros”, “se reunía uno de los organismos de cúpula” del EPR. Y abundó —exhibiendo en todo caso la torpeza de la unidad antiterrorista de la PFP— que el mismo 23 de noviembre, “en esa famosa casa [...] habría una reunión del grupo armado”. Incluso, escribió Fernández Menéndez, “varios de los dirigentes llegaron al lugar y permanecieron allí mientras comenzaban los hechos y luego se retiraron” (*sic*).<sup>87</sup>

El 17 de diciembre, mientras se consignaba una declaración del secretario de Gobernación, Santiago Creel, donde se descartaba la existencia de un grupo armado urbano en Tláhuac, ya que según el funcionario no existía ninguna información previa del Cisen,<sup>88</sup> en sendas notas, los diarios *El Universal* y *La Jornada* titularon, respectivamente: “Labastida, desde 98, guerrilla en Tláhuac” y “Labastida: desde 98, indicios de grupos extremistas en Tláhuac”.<sup>89</sup> Otra nota daba cuenta de la posible presencia de agentes del Cisen en el lugar de los hechos. Según un reporte de inteligencia del gobierno federal, en poder de *El Universal*, personal del Cisen hizo una crónica detallada del linchamiento y concluyó que hubiera sido “imposible” realizar un rescate.<sup>90</sup>

A su vez, en su columna habitual en *El Universal*, titulada “Mensajes cifrados”, Raymundo Riva Palacio aludió de nuevo a supuestos nexos entre el EPR, las *maras salvatruchas* y actividades de *narcomenudeo*, y enfrentó de paso a la PGR con la Secretaría de Seguridad Pública. Según Riva Palacio, al divulgar la presunta cinta casera,<sup>91</sup> la PGR había puesto en el “cadalso” al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, quien “falló trágicamente” al intentar vincular a una fracción del PRD con el EPR, con la finalidad de iniciar procesos políticos cuando menos contra un diputado y un delegado.

El día 21, en primera plana, *Reforma* encabezó una nota: “Detecta el GDF células de EPR”. En la sección “Ciudad y Metrópoli”, la cabeza decía: “Delinque EPR en Distrito

Federal para obtener ingresos”, y en el cintillo agregaba: “Señala la SSP que grupo subversivo asalta y secuestra”. La información, ilustrada con un mapa de ocho delegaciones capitalinas y siete municipios del Estado de México donde presuntamente actuaban células del EPR, fue atribuida a “un informe de la Secretaría de Seguridad Pública local”. Pero el 22 de diciembre, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el informe era “falso” y lo atribuyó a una “filtración del Cisen”.<sup>92</sup> Un día después, AMLO volvió a insistir en que las “filtraciones” de la PGR eran parte de una campaña contra el subsecretario de Seguridad Pública capitalino, Gabriel Regino y exigió que el Cisen dejara de ser usado “con fines de chantaje e intimidación contra opositores”.<sup>93</sup>

#### TLÁHUAC Y LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN

En un primer balance, entre el 25 de noviembre y el 26 de diciembre de 2004 — durante un mes, y todavía el 6 de enero de 2005, de manera tardía—, varios medios de difusión masiva contribuyeron a propagar “información”, en su mayoría anónima, que aludía a los sucesos de Tláhuac como parte de una conspiración subversiva.

Pero existen elementos para pensar que a partir de un acontecimiento real: la tumultuaria ejecución por incineración de dos agentes adscritos al área de inteligencia y contraterrorismo de la PFP y el rescate oportuno de un tercero, el gobierno de Vicente Fox montó de manera deliberada una acción de distracción, intoxicación y manipulación de la opinión pública, destinada a recrear un clima de inseguridad, confusión y anarquía, para lo cual se utilizaron elementos de propaganda blanca, gris y negra<sup>94</sup> propios de las operaciones de guerra psicológica.

De ser correcta esa variable, estaríamos ante *la creación de un escenario para ser utilizado como núcleo de una operación futura*. Eso explicaría el rápido “hallazgo” de la “verdad real” por los investigadores de la PGR que atribuyeron la “responsabilidad” de los hechos a presuntos guerrilleros, narcotraficantes y sicarios de la *Mara Salvatrucha* ligados con el terrorismo islámico, que habrían actuado en colusión con la complicidad o al amparo de autoridades del Distrito Federal y legisladores del PRD. Una construcción simplista y maniquea (amigo-enemigo) de lo ocurrido en San Juan Ixtayopan, que echó mano de la teoría de la conspiración, que suele proponerse como la “explicación” de forma más rigurosa, profunda, contextualizada e informada, de un hecho negativo cuya comprensión resulta insatisfactoria. La teoría del complot recupera datos encubiertos (secretos de gobierno, mecanismos de los medios de comunicación masiva etcétera) y por lo general está destinada, de antemano, a demonizar o a descalificar de manera absoluta y rígida a un “grupo enemigo” generador del miedo y de todos los males.

Así, la “conjura” de Tláhuac dejó *plantada* en la audiencia la socorrida fórmula sobre la presunta existencia del “narcoterrorismo” en México. Precisamente, el escenario que Estados Unidos había querido establecer desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 con el argumento de defender su “seguridad nacional”. En la esfera local, la *guerra sucia* mediática impulsada por la Presidencia de la República —el Gobierno del Distrito Federal “de alguna manera ha tolerado” los linchamientos, dijo Fox en su programa radiofónico—,<sup>95</sup> con la contribución de la Secretaría de Gobernación y la PGR, formó parte de la campaña de propaganda del gobierno federal en contra de la administración de Andrés Manuel López Obrador en sus intentos por hacer abortar su candidatura de cara a la elección presidencial de 2006.

Según el subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, Gabriel Regino, indiciado a raíz de los hechos por la PGR en Tláhuac “se trató de inducir al Gobierno del Distrito Federal a una matanza”.

Cabe consignar, finalmente, que el 13 de enero de 2005 el procurador Macedo de la Concha señaló que la PGR no tenía acreditado de manera plena que integrantes de grupos armados hubieran participado en el linchamiento de Tláhuac. Rechazó, también, que en México existiera un renovado activismo de las guerrillas, y atribuyó a diversos medios la difusión de “conceptos y opiniones con los cuales se ha pretendido descalificar la tarea de la PGR, tratando de desorientar y de confundir” a la población.<sup>96</sup>

El caso Tláhuac “reventó” el aparato oficial de seguridad e incrementó los enfrentamientos políticos. La fabricación de un “enemigo interno” afín a la *guerra al terrorismo* del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, tenía la virtud de diluir otras pistas de investigación en torno a los hechos. En particular, la lucha política que se venía librando desde comienzos de la administración Fox entre los distintos aparatos de seguridad del Estado. Una lucha sorda por el control de los organismos de inteligencia y de otras estructuras del área de la seguridad —entre ellas la Agencia Federal de Investigación, el Cisen y la PFP—, que involucraba a la Secretaría de la Defensa Nacional a la Secretaría de Gobernación y a la PGR. Esa pugna también tenía que ver, en aquella coyuntura, con la distribución de los recursos del presupuesto para el periodo fiscal 2005 y los siguientes años. En ese contexto, la hipótesis de la “narcoguerrilla” sería la coartada perfecta para justificar, *a posteriori*, la reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública federal, con la llegada a la dependencia de Miguel Ángel Yunes, un ex priísta con fama de represor político —se estrenó en el cargo declarando que “la sociedad reclama mano dura”—, y el nombramiento del general de división retirado Tomás Valencia Ángeles como nuevo comisionado de la PFP.

Valencia sobrevivió de manera inexplicable a la purga que se produjo en el área de inteligencia de esa corporación tras los sucesos en San Juan Ixtayopan, ya que

ocupaba la jefatura del Estado Mayor de la misma y cuando ocurrieron los hechos era el responsable de coordinar la sección III.

La formación de un Consejo de Seguridad Pública encabezado por el presidente Fox e integrado por los secretarios de Defensa, Marina, Gobernación, y en calidad de invitado el procurador general de la República, generó malestar en el interior del Ejército. El responsable del consejo era Ramón Martín Huerta, quien estaría por encima de un general, de un almirante y de su ex jefe en la secretaría de Bucareli.

Según algunos indicios, la nueva estrategia estaba encaminada además, a generar un clima propicio para la creación de una nueva Secretaría del Interior, que asumiera las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que la Secretaría de Gobernación pasaría a funcionar sólo en el área política, al tiempo que se trataría de inducir o presionar al Congreso para que se aprobara la ley de reforma al sistema de seguridad pública y justicia penal.



## La danza del desafuero III. Tiempo de canallas

Al comenzar 2005 Vicente Fox atravesaba por el peor momento de su mandato. Con el país en medio de una grave crisis de seguridad y sometido a fuertes presiones de Estados Unidos, con el Partido Acción Nacional postrado en el plano electoral, exhibiendo evidencias mayúsculas de sus incompetencias y envuelto en sucesivos escándalos en su entorno más cercano, el presidente enviaba señales de una voluntad prematura por abandonar el cargo cuando aún faltaban dos años para cumplir su mandato —en 2006 “me van a extrañar”, dijo durante una gira por España—, lo que profundizaba una sensación de vacío gubernamental en todo el país.

El desempeño de la economía mexicana durante el gobierno de Fox era representativo del comportamiento que había tenido la economía durante los 22 años de perseverante aplicación de los dogmas del Consenso de Washington, cuando el PIB per cápita apenas había crecido a una tasa media de 0.4% (periodo 1983-2004). El malestar no estaba referido sólo a la administración Fox, sino al modelo neoliberal, que supuestamente conduciría a México a la “tierra prometida” de las elevadas tasas de crecimiento de la economía y del bienestar. Después de tres sexenios de experimentación neoliberal el foxismo había resultado más de lo mismo, al reproducir de manera acrítica el fundamentalismo y la ortodoxia macroeconómica de los últimos tres gobiernos del PRI.

En ese contexto, el año 2005 no prometía ser distinto a los anteriores. Con un agravante: el “desafuero patriótico”<sup>1</sup> de Andrés Manuel López Obrador se había venido cocinando a fuego lento en la Cámara de Diputados y había entrado en su fase final. El PRI de Roberto Madrazo y Emilio Chuayffet, maestros del juego sucio tenía en sus manos la decisión de desaforar o no al líder del sol azteca, ya que de su voto dependería en última instancia el destino del informe de la sección instructora de la cámara baja, compuesta por cuatro miembros: un panista, Álvaro Elías; un perredista, Horacio Duarte, y dos priístas, la diputada Rebeca Godínez y Francisco Frías ambos incondicionales de Chuayffet.

El 4 de febrero, en su conferencia de prensa matutina, el titular del Gobierno del Distrito Federal anunció que su respuesta a un eventual desafuero sería la “resistencia civil pacífica”. Según López Obrador, su suerte ya estaba echada: le quitarían el fuero. La decisión, dijo, había sido acordada por “el innombrable” (Carlos Salinas de Gortari), con el presidente Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún; el secretario de Gobernación, Santiago Creel; el líder nacional priísta, Roberto Madrazo Pintado; el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones; el líder de la fracción del PRI en el órgano legislativo, Emilio Chuayffet, y el senador y “líder moral del partido de la decencia”, el panista Diego Fernández de Cevallos.

Pocos días después, mientras diversas organizaciones civiles anunciaban su disposición de iniciar acciones de “desobediencia pacífica” en pro del tabasqueño, López Obrador ratificaba su decisión de enfrentar sin amparo el proceso penal en su contra en caso de que la Cámara de Diputados lo despojara de la inmunidad que le confería el cargo. Dijo: “No voy a dejar de luchar, [pero] eso sí, ya lo dije y lo repito: no me voy a amparar y eso es parte de la resistencia civil pacífica; no voy a salir de la cárcel bajo fianza y si así conviene, en su momento, desde la cárcel me inscribiría para ser candidato del PRD a la Presidencia”.<sup>2</sup> En tales circunstancias, redes ciudadanas de apoyo a López Obrador, agrupadas en el llamado —no sin humor— Lado Izquierdo Opositor (LIO), compuesto por el Proyecto Esperanza, la Red Nacional de Jóvenes con AMLO, la Iniciativa Flor y Canto, y el Plan de los 3 Puntos, denunciaron que el desafuero era un “golpe de Estado” contra el Gobierno del Distrito Federal, las instituciones democráticas de la República mexicana y los derechos políticos de todos los ciudadanos del país, y un atentado contra las victorias populares en la conquista del sufragio efectivo, la soberanía y la autodeterminación.<sup>3</sup>

Como parte de su “plan de acción”, el Movimiento Ladoísta llamó a formar brigadas en pueblos, barrios y colonias; a instalar campamentos en plazas y parques; a instrumentar acciones de protesta frente a embajadas y consulados; a tapizar las ciudades con pancartas y mantas de repudio al desafuero. Desconocidos hasta entonces, los grupos que firmaron la convocatoria eran un síntoma del malestar que existía en la sociedad. Fue evidente que no se trataba de un movimiento espontáneo sino de una iniciativa claramente programada. Aunque quedaban dudas sobre quién o quiénes asumirían la responsabilidad en la dirección de la lucha con López Obrador encarcelado, y si llegado el caso la resistencia civil cruzaría la línea de la legalidad, enfrentándose al Estado, desautorizándolo.

#### EL COCO POPULISTA

Un nuevo escrito periodístico del abogado Javier Quijano Baz volvió a poner como

tema de debate público la hipótesis de que el desafuero respondía a una maniobra golpista. Lo llamó “El golpe de Estado en marcha”.<sup>4</sup> En él recordó que su opinión sobre un *coup d’État* publicada varios meses antes le habían valido denostaciones *ad hominem* y el calificativo de “cuentacuentos” por parte del carismático vocero de Acción Nacional, su “amigo” Juan Ignacio Zavala. Pero Quijano centró su exposición en las críticas del académico Raúl Trejo Delarbre, quien había sostenido que su tesis sobre el golpe de Estado, además de “embustera”, era “peregrina y estridente, ligera y precipitada”, y había sido expuesta “con el único fin de propagandizar [ *sic, rectius*: propagar]” las ideas del jefe de gobierno de la capital.

Tras repasar los pormenores de la acusación que pesaba sobre López Obrador y repetir —de acuerdo con el viejo adagio latino *nullum crimen sine poena legale*—<sup>5</sup> que se trataba de un delito sin sanción prevista en la ley para castigarlo, Quijano, ex presidente de la Barra de Abogados, volvió a concluir que, en rigor, lo que se quería no era someter a prisión al tabasqueño, sino “solamente sujetarlo a proceso”; con eso era “suficiente”. En su nuevo escrito, preguntó por qué se acusaba a AMLO de una desobediencia como si se tratara de un delito, si en realidad no lo era y tampoco importaba que se le impusiera alguna pena. Y respondió que la razón era que de acuerdo con el artículo 38 constitucional, fracción II, bastaba que una persona estuviera sujeta a un proceso criminal por un delito que mereciera pena corporal, para que se le suspendieran sus prerrogativas políticas como ciudadano; ni siquiera se requería una condena.

Para Julio Boltvinik, la amenaza del gobierno federal constituía un fenómeno adicional al “voto útil” de los comicios del año 2000 ahora bajo la forma de un “desafuero patriótico”, en lo que a su juicio constituía un “doble golpe de Estado en grado de tentativa”.<sup>6</sup> Manuel Camacho Solís también se refirió al “desafuero patriótico” como una forma retorcida de la alianza gobernante de impedir el acceso de la izquierda al poder, ya que representaba, dijo, un modelo económico distinto al vigente. “Su justificación es vergonzosa” señaló Camacho. “Dicen que AMLO no es confiable porque es un populista que no respeta la ley.”<sup>7</sup>

El politólogo Octavio Rodríguez Araujo coincidió en que el “veto” a López Obrador obedecía a una fabricación de Los Pinos pero agregó un nuevo elemento: la decisión de impedir a AMLO el paso a la Presidencia se originó en Washington: “Bush no quiere otro Hugo Chávez en América Latina”.<sup>8</sup> Según el académico de la UNAM, los estrategas de Estados Unidos y los asesores de Fox ya habían evaluado que si la sociedad mexicana se levantaba en contra del desafuero, la protesta no duraría mucho tiempo. La gente se cansaría.

Rodríguez Araujo tenía razón. En realidad, la fabricación de la figura de López Obrador como “populista radical” tenía su origen en las usinas propagandísticas de Washington. Ya en enero de 2003 el periodista Andrés Oppenheimer, señalado por

sus presuntos vínculos con la “comunidad de inteligencia” de Estados Unidos había dedicado su colaboración en *Reforma* al “alcalde izquierdista” de la ciudad de México. Allí dijo que las obras públicas que llevaba a cabo López Obrador en la capital tenían “un tufillo de populismo”.<sup>9</sup>

Pero sería hasta marzo de 2004 cuando el general James Hill jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, elevaría al populismo al rango de enemigo de la “seguridad hemisférica”. En un informe presentado ante el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 24 de marzo de ese año, además de las obligadas menciones al narcotráfico y al terrorismo, el general Hill dijo que había surgido una nueva amenaza que socavaba los procesos democráticos de América Latina al reducir los derechos individuales: “el populismo radical”.<sup>10</sup>

Según el alto jefe militar del Pentágono, esa corriente política la encarnarían “algunos dirigentes latinoamericanos” que “explotan frustraciones profundas por el fracaso de las reformas democráticas en entregar los bienes y los servicios esperados”. Al explotar esas frustraciones, “las cuales van de la mano con frustraciones causadas por la desigualdad social y económica, los dirigentes están logrando a la vez reforzar sus posiciones radicales al alimentar el sentimiento antiestadounidense”.<sup>11</sup> Como ejemplo mencionó a Venezuela, a Bolivia y a Haití. Pero también señaló el cuestionamiento de “la validez de las reformas neoliberales” expresado en el Consenso de Buenos Aires, que en octubre de 2003 habían firmado los presidentes de Brasil y Argentina, Luis Inacio *Lula* da Silva y Néstor Kirchner, donde se ponía el acento en “el respeto a los países pobres”.

Según el “general sociólogo” —como llamó Adolfo Gilly a James Hill—, el nuevo sujeto político no identificado era el “populismo radical”, amenaza materializada en dirigentes que, en rigor, respondían “a la irrupción de los subalternos, a sus modos de hacer política y organizarse, a sus imaginarios y subjetividades, a sus demandas, a sus organizaciones transitorias o permanentes y a sus amotinamientos”, y estaban volviendo a llenar las plazas, los barrios, las rutas, los pueblos y los territorios “desde afuera hacia adentro y desde abajo hacia arriba” en varios puntos del hemisferio occidental.<sup>12</sup>

#### EL ORÁCULO DE LA CIA Y EL NACIONALISMO RADICAL

Avanzado febrero, algunos medios se hicieron eco de una versión que ganaba cuerpo con rasgos de certidumbre: en diversas reuniones privadas a las que habían asistido el presidente Fox y su esposa, el comentario recurrente en relación con López Obrador era muy directo y visceral: “Hay que parar a ese loco”.<sup>13</sup> La confrontación entre Fox

y López Obrador arreciaba. El mundo político giraba en torno a la inminente defenestración del tabasqueño. El encono crecía día a día en sectores de la población y parecía haber rebasado un punto crítico. Muchos políticos y analistas especulaban que si la Cámara de Diputados daba cauce al desafuero, todo México se incendiaría.

La idea de un *tsunami* amarillo encarnado en el líder de la oposición y sus bases de apoyo auguraba grandes convulsiones sociales. El propio oráculo de la Agencia Central de Inteligencia había dado un grito de alarma con la intención de prevenir males mayores: en su comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, el director de la agencia, Porter Gross, incluyó a México entre los países con “riesgo de inestabilidad” durante 2005, año preelectoral.

Gross advirtió que las campañas de 2006 podrían “paralizar” las reformas fiscales, laborales y energéticas.<sup>14</sup> Por su parte, el Consejo Nacional de Inteligencia (NIC), órgano encargado de elaborar información para la toma de decisiones de la Casa Blanca, señaló en un reporte la posibilidad de que en México y Brasil surgieran gobiernos “de izquierda radical o nacionalista”, lo que provocaría “contagio e ingobernabilidad” y “actitudes antiestadounidenses” en la región.<sup>15</sup>

El Apocalipsis según la CIA y los temores del NIC habían sido acompañados de sendos pronunciamientos del Departamento de Estado y del cada vez más injerencista embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza, sobre la inseguridad, el “vacío de poder” y la *narco guerra* imperantes en todo el territorio nacional.<sup>16</sup> En realidad, junto con la CIA, el NIC y otros organismos de inteligencia, Garza, conocedor e impulsor de la agenda de Washington por razones obvias, era parte del *team* de calentamiento de la situación en México, con vistas al lanzamiento de un proyecto en ciernes: la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (aspan) con base en la lucha antiterrorista de la administración Bush.

La alianza era tejida con sigilo en los círculos diplomático, militar y empresarial de Estados Unidos, Canadá y México, y Garza ya había adelantado algunos de sus componentes. Durante la instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos en la Cámara de Diputados, en presencia del presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, Garza delineó el 24 de febrero el camino hacia la “prosperidad”. Su fórmula: el establecimiento de mejores métodos para compartir información de inteligencia y una mejor cooperación entre las instituciones de seguridad pública en la frontera norte. Objetivo: derrotar al terrorismo.<sup>17</sup>

EL SEMBRADÍO DE SAM-7  
Y MÉXICO COMO ESTADO FALLIDO

Por esos días, otra noticia alarmista vendría a sazonar el caldo de cultivo que hacía de México un país al borde del caos y virtual presa del terrorismo internacional: según

reportes de inteligencia de los departamentos de Estado y de Defensa de Estados Unidos, recabados por la organización privada Stratfor y divulgados por el periódico conservador *The Washington Times*, misiles tierra-aire SAM-7 de fabricación rusa, con capacidad para derribar aviones comerciales se estaban vendiendo en el mercado negro y ya estaban en manos de bandas terroristas, guerrillas y narcotraficantes. Entre ellos, el grupo paramilitar *Los zetas*, sindicado como sicarios de los cárteles del Golfo y de Juárez, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).<sup>18</sup>

La versión, difundida en México por Raymundo Riva Palacio en su columna “Estrictamente Personal”, sugería como “blancos potenciales” a los presidentes de México, Colombia y Honduras (Vicente Fox, Álvaro Uribe y Ricardo Maduro, respectivamente). De acuerdo con el periodista mexicano, las estimaciones de inteligencia estadounidenses adjudicaban a las FARC la posesión de al menos 16 misiles tipo CL-28 y cuatro SA-6. Pero la información era confusa, porque se basaba en “creencias” del Pentágono y el Departamento de Estado, según las cuales militares de alto rango del ejército nicaragüense tenían una reserva secreta aproximadamente de 80 SAM-7, que “deseaban vender” en el mercado negro.

Riva Palacio parecía dar por cierta una información de Stratfor fabricada sobre una oración condicional. Pero él añadió otro elemento a la trama, al afirmar que lo que no habían tomado en cuenta en Estados Unidos, “es que grupos vinculados con narcotraficantes en México ya disponen de misiles tierra-aire”. Y agregaba: “Informaciones policiales preliminares apuntan a que el grupo militar de *Los zetas* [...] cuenta cuando menos con dos misiles tierra-aire del tipo SAM-7, que supuestamente ya fueron decomisados durante operativos recientes en Tamaulipas y Veracruz”.

Un día después, en la sección “Voz del Lector” de *El Universal* apareció una réplica al texto de Riva Palacio, firmada por el general brigadier Efrén Martínez Guzmán, de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional. El militar señaló que la información publicada por el columnista era errónea, “toda vez que las Fuerzas Especiales de esta secretaría no cuentan con armamento SAM-7 [...] y por otra parte, en ningún momento han sido entrenadas por la CIA”.<sup>19</sup> También aclaró que el adiestramiento de Fuerzas Especiales se lleva a cabo en “varias fases” y los integrantes de los denominados *zetas* “sólo recibieron una parte del adiestramiento de referencia, mismo que siempre ha sido impartido en nuestro país”. El general Martínez remataba su misiva con un pedido sugerente: “Finalmente, si el periodista Riva Palacio tiene conocimiento de dónde se localizan los misiles SAM-7 de los que hace mención, esta secretaría le agradecerá le indique el lugar, con el fin de tomar las acciones correspondientes”.<sup>20</sup>

Riva Palacio no contestó. Pero lo más sorprendente fue que en la misma edición la dirección de *El Universal* decidió publicar en primera plana un adelanto de

información con el título: “Siguen la pista de misiles de narcos”. En interiores, la nota, firmada por David Aponte, reproducía prácticamente en forma idéntica los contenidos de la columna de Raymundo Riva Palacio del día anterior.<sup>21</sup>

Asimismo, de manera un tanto contradictoria con el despliegue de esa información el editorial del diario fue dedicado al tema. Entre otras consideraciones, y con el título “Probar lo de los misiles”, en el texto, sin mencionar a su columnista, el diario admitía la posibilidad de que la información utilizada por Riva Palacio formara parte de un “reporte alarmista sin mayor fundamento, propalado por ciertos medios en Estados Unidos y cuya intención no es otra que sembrar la duda y la intranquilidad en ambas naciones”.<sup>22</sup> Un par de párrafos adelante, añadía: “Es posible, también, que se esté fomentando un temor artificial de una supuesta incapacidad del gobierno mexicano para hacer frente a amenazas graves a la seguridad, tanto de México como de Estados Unidos”. Otra consideración oportuna señalada en el editorial fue que, en su *modus operandi*, los cárteles de la droga mexicanos no llevaban a cabo acciones de tipo terrorista y de alto impacto.

La intervención de la Sedena parecía haber incidido en el cambio de la línea editorial del periódico. Pero la cuestión sobre los proyectiles antiaéreos portátiles SAM-7 no acabaría ahí. La noticia ya estaba *sembrada*. Un día después, el corresponsal de *El Universal* en Washington, José Carreño, reportó que el subsecretario de Seguridad Fronteriza y Transporte de Estados Unidos, Asa Hutchinson no tenía “datos específicos” sobre los misiles ni los presuntos vendedores y compradores.<sup>23</sup> Tampoco pudo confirmar la información el Departamento de Estado. Había sólo “sospechas”. En su nota, Carreño añadió que, en todo caso, los misiles de la era soviética habrían superado su edad operativa de 22 años.

A su vez, en sendas notas aparte, el titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, declaró, por un lado, que la PGR estaba investigando si la información de Stratfor sobre los misiles era “cierta, falsa o extraída de algún guión cinematográfico”,<sup>24</sup> y, por otro, que *Los zetas* estaban pasando a la historia y sólo quedaban alrededor de 30 gatilleros.<sup>25</sup>

No obstante, pese a los desmentidos oficiales en México, era obvio que por su oportunidad y recurrencia, los señalamientos de altos funcionarios de Estados Unidos y sus amplificadores locales apuntaban a la fabricación del “enemigo interno” (Al Qaeda, EPR narcoguerrilla, la *Mara Salvatrucha*, etcétera). Como tendencia, eso llevaría a la configuración de México como un *Estado fallido*. Es decir, un Estado débil, inmerso en la corrupción y el crimen, incapaz de proteger a sus ciudadanos contra la violencia y, por tanto, al perder el control de su territorio y el monopolio del uso de la fuerza inviable. Lo que le daba “derecho” a los *Estados ilustrados*, como en la antigua Yugoslavia, a recurrir al uso de la fuerza bajo el eufemismo de una *intervención humanitaria*, con la supuesta meta de proteger poblaciones, de un modo

que podría resultar “ilegal pero legítimo”. La categoría fue utilizada por William Clinton en los años noventa y la doctrina Bush ampliaría el concepto de *Estado fallido* para que incluyera la noción “vacío de poder”.<sup>26</sup>

#### WINTILO, EL PEJE Y LOS BRUJOS DE CATEMACO

En ese contexto, los legisladores del PAN sabían que no podían dar marcha atrás. Estaban metidos en un juego irrecusable de ganar o perder: votarían en bloque el desafuero. El PRI sería el fiel de la balanza. En la coyuntura, los medios hablaron de “división” entre los parlamentarios del partido tricolor. Pero otras hipótesis sostenían que los diputados Manlio Fabio Beltrones y Emilio Chuayffet supuestamente enfrentados en una “guerra intestina”, en realidad jugaban “al policía bueno y al policía malo”, pero al final se alinearían detrás del desafuero de López Obrador. Ésa sería la “señal” encriptada que emitirían los dos priístas de la sección instructora; el llamado “voto de conciencia” de Chuayffet era una simple coartada.<sup>27</sup> En el PRI seguiría predominando la cultura de la línea; le haría el trabajo sucio al gobierno foxista.

El viernes 18 de febrero la sección instructora cerró el periodo de presentación de alegatos jurídicos y políticos sobre la acusación del delito de desacato judicial que se le imputaba a López Obrador. Comenzaba la cuenta regresiva para el político tabasqueño. El domingo siguiente se realizó una docena de caravanas vehiculares en el Distrito Federal en contra del desafuero. Según algunos medios, participaron alrededor de 40 000 personas.<sup>28</sup> Sería la primera de una serie de manifestaciones de protestas pacíficas, a la que se sumarían asambleas ciudadanas en los barrios de la capital.

Los síntomas de un desbordamiento colectivo que pudiera abrir un nuevo periodo de violencia política en el país llevaron a un alto jerarca de la Iglesia católica, el cardenal y arzobispo primado de México, Norberto Rivera, hombre muy reactivo ante el sentimiento popular y con densas inclinaciones hacia los poderosos, a atreverse a mover por un delgado filo argumentativo que no identificaba la legítima protesta con el caos. “Apoyar a López Obrador no es el *apocalipsis*”, dijo el purpurado;<sup>29</sup> quienes consideraran que se estaba cometiendo una injusticia podían manifestarse públicamente en el marco de la ley.

El 28 de febrero, 110 integrantes de la comunidad artística y cultural de México suscribieron un llamamiento denominado “Sí a la democracia, no al desafuero”, donde calificaban como una “aberración” las “maquinaciones seudolegales y notoriamente injustas” que estaban en marcha para deshacerse de un candidato. El documento estaba firmado, entre otros, por Pedro Armendáriz, Julieta Egurrola Ana



Ofelia Murguía, Héctor Bonilla, Lucía Méndez, Diego Luna Gael García, Alfonso Cuarón, María Rojo, Rogelio Naranjo, Luis de Tavira, los hermanos Bichir, Diana Bracho, Alejandro González Iñárritu y Luis Mandoki.<sup>30</sup>

Junto a los apoyos vinieron los vaticinios. Entre ellos, el del politólogo Pablo González Casanova, quien adujo que “cerrarle el paso a la izquierda llevaría el país al caos”.<sup>31</sup> Pero uno en particular llamó la atención: el de los chamanes y hechiceros de la región selvática de los Tuxtlas, en Veracruz, quienes pronosticaron que aun siendo desaforado, López Obrador se veía sentado en el futuro en la silla presidencial, “pues tiene más cojones que sus adversarios”. Según ellos, Creel y “Martita” iban al fracaso porque “no tienen buena vibra ni los quiere la gente”, y “salvo una *cochinada*” del gobierno, el *Peje* les ganaría a todos. Distinguidos por honrar una tradición milenaria de convocar a las fuerzas del bien y del mal, acostumbrados durante décadas a realizar amuletos y conjuros para políticos priístas, entre ellos varios ex presidentes como José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari —y también “trabajos negros” a familiares de *capos* del narcotráfico como Ernesto Fonseca, *don neto*, y Rafael Caro Quintero—, los brujos de Catemaco aseguraron que “el *Peje* les gana a todos, incluyendo a Madrazo [...] le tienen miedo y quieren hundirlo [...] los problemas son grandes, pero tiene poder espiritual que lo acompaña”.<sup>32</sup>

Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, líderes empresariales de la Coparmex, la Concanaco y la Canacintra exigieron una tregua política a Fox y a López Obrador.<sup>33</sup> La respuesta del presidente de la República fue inequívoca: en sendos pronunciamientos públicos, sin mencionarlo, advirtió sobre el “peligro” que implicaba para México un liderazgo como el de AMLO. “Cuidado con el populismo, cuidado con la irresponsabilidad en el gasto público, cuidado con el paternalismo y el corporativismo...”, dijo en el salón Manuel Ávila Camacho de la residencia oficial de Los Pinos.<sup>34</sup> Dos días después, en su programa de radio *Fox Contigo*, el mandatario habló de las bondades del “mercado libre globalizado” y de nuevo llamó a tener cuidado con “el estatismo y el populismo”, ya que “cuando un Estado controla todo y decide todo, las consecuencias las pagan los gobernados”.<sup>35</sup>

#### LA OPINIÓN DE WALL STREET Y LONDRES

Unas declaraciones del secretario de Gobernación, Santiago Creel al periódico estadounidense *The New York Times*, en el sentido de que si López Obrador llegaba a la Presidencia “podría llevar la economía al desastre”, vinieron a complicar más las cosas.<sup>36</sup> Aunque el titular de la secretaría negó el dicho publicado por el rotativo neoyorquino, el asunto fue aprovechado por los detractores de AMLO. “El texto del *New York Times* ha significado un rudo golpe para el jefe de gobierno”, escribió Jorge

Fernández Menéndez.<sup>37</sup> No obstante, al acercarse la fecha del dictamen en la Cámara de Diputados, esa lectura parecía un poco forzada. Era obvio que López Obrador no era santo de devoción del *New York Times* y los círculos financieros de Wall Street. Pero había matices. El desafuero *a la brava* del tabasqueño estaba poniendo “nerviosos” a los mercados. Algunos analistas financieros y económicos de Washington y Nueva York, que no simpatizaban con el proyecto de López Obrador —entre ellos voceros de la Morgan Stanley, BCP Securities, UBS Investment Research y Goldman Sachs—, veían que la inhabilitación política de AMLO mediante un juicio de procedencia, podría tener graves consecuencias para la estabilidad económica de México y crear un clima de incertidumbre que generaría temor en los inversionistas.

El 7 de abril, el propio *New York Times* publicó un editorial con el título “Dejen que los votantes de México decidan”, donde exponía que la campaña presidencial para 2006 había tomado “el aire de los viejos malos tiempos, cuando el PRI dictatorial inclinaba las elecciones para sus candidatos”.<sup>38</sup> Aunque aclaraba que no endosaba las acciones de López Obrador, e incluso lo tachaba de “demagogo”, el diario más influyente de Estados Unidos señaló que “a los votantes de México se les debería permitir hacer su propia decisión, y no que ésta se haga por ellos”. El editorial concluía: “Ya que los poderosos aún pueden salirse con lo que quieran en México”, pocos creen en la justificación de que los promotores del desafuero sólo están intentando apoyar “el imperio de la ley”. López Obrador “podría no ser el hombre indicado para la Presidencia, pero ese asunto debería ser decidido por el electorado mexicano”.<sup>39</sup>

A su vez, en Londres, un editorial del diario *Financial Times* titulado “El autogol de México”, alertaba sobre la posibilidad de una crisis política y económica en el país. “Esto es innecesario y puede ser rápidamente evitado si los congresistas mexicanos actúan racional e inteligentemente.”<sup>40</sup> A juicio del diario londinense, el “error” de López Obrador parecía una falta “relativamente menor”, un “descuido”, frente a conocidos casos de “incompetencia gubernamental negligencia y corrupción”. En ese contexto, el desafuero de quien en ese momento iba adelante en las encuestas de intención de voto con 37%, aparecía como “arbitrario o políticamente motivado” y podía debilitar el respeto por las frágiles instituciones legales.

Para entonces, un grupo civil fantasma autodenominado México en Paz patrocinó una onerosa campaña de desprestigio contra López Obrador en cadena nacional y en el horario triple A de la televisión. El promocional destacaba la calidad jurídica de los ciudadanos frente al fuero de que gozan aquellos mexicanos que ocupan cargos de elección popular. Decía el mensaje: “Ella no tiene fuero. Ni ellos. Y tú tampoco tienes fuero. En una palabra, todos estamos desafortunados. Y no tenemos miedo a la ley porque sabemos que somos inocentes. Sólo un gobernante culpable le tiene miedo al

desafuero. Un gobernante inocente no teme perder el fuero, porque sabe que tiene toda la protección de la ley. La ley nos protege a todos. México en Paz, A. C.”<sup>41</sup> La voz en dichos mensajes era similar a la del locutor que intervenía en los anuncios para radio elaborados por la Secretaría de Gobernación, y el esquema del *spot* era semejante al formato utilizado en su momento en campaña por el candidato Vicente Fox. Además, la supuesta asociación civil no estaba registrada en la Secretaría de Desarrollo Social ni en la cancillería mexicana.

#### “ESTO APENAS COMIENZA”

Para muchos mexicanos, el 7 de abril de 2005 fue un día histórico. Las previsiones se cumplieron y la Cámara de Diputados, erigida en jurado de procedencia, consumó el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. La mancuerna legislativa PRI-PAN funcionó e incluso pretendió destituir de su cargo al jefe de gobierno del Distrito Federal. En su “Yo acuso”, el político tabasqueño responsabilizó a Vicente Fox de haber tramado el deshonroso procedimiento.

La jornada estuvo enmarcada en dos escenarios: la Plaza de la Constitución y el Palacio Legislativo de San Lázaro. En ambos, el personaje central fue López Obrador, quien primero decidió reunirse con el pueblo en el Zócalo, la principal plaza pública del país, y después con los diputados. En uno y otro foros expresó su convicción de que la “conjura” en su contra sería legalizada, pero recordó su determinación de no ampararse ni solicitar libertad bajo fianza porque dijo, “no soy culpable”. Reiteró, asimismo, que protestaría de manera pacífica contra la arbitrariedad y que desde donde estuviera iba a contender en las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática para ser candidato a la Presidencia de la República. Durante 42 minutos, desde una tribuna emplazada frente a la Catedral Metropolitana —a la sazón enlutada debido a los funerales del papa Juan Pablo II—, López Obrador habló de la “canallada” del desafuero. Dijo que no había que caer en “la trampa de la provocación” y convocó a la resistencia civil pacífica. “Esto apenas comienza”, expresó a la multitudinaria concentración. Sabía que sus palabras debían ser las de aguafiestas. Que debía manejar a la muchedumbre con mano de seda para evitar desbordes; que no había de otra. “Un dirigente puede poner en riesgo su propia vida, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás”, argumentó tajante.<sup>42</sup>

Advirtió que sus adversarios tratarían de desgastar el movimiento de resistencia popular. Por eso pidió a sus seguidores actuar con inteligencia y con mucha decisión. “Nada de violencia. Nada de caer en provocaciones. Este movimiento es y ha sido pacífico. Tenemos la mayoría. Sólo acuden a la fuerza los que no tienen la razón.”<sup>43</sup>

Como tarea, dejó básicamente ocho acciones: meditar, reflexionar y hablar con familiares y amigos sobre lo que estaba sucediendo en México y lo que se debía hacer para fortalecer al movimiento; portar el distintivo tricolor y colocar carteles en casas y autos; realizar una marcha silenciosa el 24 de abril siguiente;<sup>44</sup> participar en reuniones informativas los domingos en plazas públicas; utilizar los medios de comunicación y recurrir a sistemas alternativos como volantes e internet; intensificar la creación de comités ciudadanos a favor del Proyecto Alternativo de Nación; llamar a votar por los candidatos del PRD en los próximos comicios en el Estado de México y Nayarit e informar a organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de carácter internacional sobre el “intento de retroceso de la democracia mexicana”.

#### EL “YO ACUSO” DE LÓPEZ OBRADOR

Casi al mismo tiempo que López Obrador hablaba a un Zócalo repleto, con un quórum de 489 legisladores quedaba instalado en San Lázaro el jurado de procedencia. Desde la presidencia de la mesa directiva, Manlio Fabio Beltrones, secundado por el panista Juan de Dios Castro —ex consejero jurídico del presidente Fox en Los Pinos—, fue agotando los puntos de la agenda del día como parte de un guión previamente acordado y cuyo final había sido largamente anunciado. La frase acuñada por Jorge Castañeda, tan quemante que él mismo tuvo que retirarla 24 horas después de haberla pronunciado, terminó imponiéndose: “A López Obrador hay que pararlo como sea”. No hubo, pues, sorpresa.

Durante más de cuatro largas horas, en un Palacio Legislativo prácticamente sellado por la Policía Federal Preventiva, que revisó el salón de sesiones con perros entrenados en busca de bombas y por granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, y ante el escaso interés de los pocos legisladores que permanecieron en la sala, la secretaría dio lectura a un resumen del dictamen de la sección instructora y a un documento en que el presidente de dicha sección el perredista Horacio Duarte, argumentó en contra.

López Obrador llegó al recinto legislativo 15 minutos antes de la una de la tarde, pero debió esperar un par de horas más en el antiguo salón de protocolo. Veinte minutos antes de las tres, una vez que los secretarios concluyeron la lectura, el “inculpado López” —como lo llamó en repetidas ocasiones Federico Döring— fue recibido en el pleno y empezó la parte medular.

Primero, en su papel de parte acusadora, Carlos Vega Memije con el peso de su extensa biografía como militante del PRI y ahora funcionario de un régimen panista, litigó el caso. Aunque en realidad el subprocurador de la PGR utilizó breve espacio en consideraciones jurídicas y el resto de su tiempo lo dedicó a alusiones políticas contra

López Obrador. Incluso, terminó su intervención con una cita de Ignacio L. Vallarta, que causó sorpresa en la sala: “La época de la sedición ha concluido, sólo la ley debe imperar”. Del área de invitados especiales surgió entonces una voz atronadora: “¡Tartufo!”<sup>45</sup> Después, cuando le tocó su turno, el tabasqueño acusó al presidente Fox de tramar desde Los Pinos los “procedimientos deshonorosos” para desaforarlo, con la complicidad del titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, a quien responsabilizó de “supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a meras consignas políticas”.<sup>46</sup> Dijo también que Fox estaba actuando de “manera facciosa”, y mencionó una reunión en casa de Rómulo O’Farril, donde un grupo de empresarios le había pedido al jefe del Ejecutivo federal no permitir, por ningún motivo que él llegara a la Presidencia de la República.

Sereno, se dio tiempo para ironizar, al señalar que no hablaba desde la tribuna más alta de la nación —en referencia a que se le había impedido intervenir desde el podio principal— y advirtió que en el país de la impunidad, del Fobaproa, del *Pemexgate*, de Amigos de Fox y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora lo acusaban y juzgaban, a él lo iban a desaforar, encarcelar y despojar de sus derechos políticos “por intentar abrir una calle” para comunicar un hospital. Recordó varias decisiones “indignas” de ese órgano legislativo, entre otras, haber aceptado las renunciaciones de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, que equivalió a desaforarlos, o “prestarse a la farsa” de legalizar el nombramiento por 45 minutos de “un tal Pedro Lascuráin”, quien luego renunció para que *el Chacal* Victoriano Huerta se convirtiera en presidente de la República.

En otro pasaje de su alocución lamentó que el “voto útil se haya convertido en voto inútil”. Pero dijo que no hay mal que por bien no venga, y en una clara alusión a los miembros del Partido Acción Nacional, el del llamado “gobierno del cambio”, arremetió: “Hacía falta conocer a fondo a los santurriones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas costumbres y del bien común hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con toda claridad a qué atenernos”.

Por último, expresó a los diputados que lo enjuiciaban que no era ingenuo, que sabía que con el voto de la mayoría lo iban a desaforar porque habían recibido la orden de los jefes de sus partidos y actuarían por “consigna” aunque se hicieran llamar “representantes populares”. Pero les advirtió que no debían ufanarse de esa “especie de desafuero patriótico”, porque sus conductas tendrían que pasar por el escrutinio público, por la opinión y la decisión de la gente.

Después, en uso de sus derechos, López Obrador se retiró del recinto legislativo. La sesión continuó con intervenciones alternadas en pro y en contra del dictamen, y al filo de las 19:30, erigida en jurado de procedencia, la Cámara de Diputados consumó el desafuero con el voto de 360 legisladores del PRI, del PAN y del PVEM.<sup>47</sup>

Las fracciones del PRD, del PT y de Convergencia, con 11 priístas, siete “ecologistas” y una panista votaron en contra; en total sumaron 127 votos.<sup>48</sup> Las diputadas Tatiana Clouthier (ex panista, independiente) y la poblana María del Carmen Izaguirre, del PRI, se abstuvieron.

El intento por inhabilitar a López Obrador había pasado el filtro político. Los partidos hicieron sus cálculos y decidieron. El bloque conformado por el partido de la derecha organizada (PAN) y el de la tecnocracia neoliberal (PRI) votó por el sí. Otros por el no. Como argumentó Agustín Basave, para el gobierno de Fox y el PAN el “peligro” que representaba AMLO era más grave que los riesgos de desbordamiento social, de deslegitimación electoral, de que el PRI volviera al poder e incluso de que se empujara a sectores de la “izquierda violenta” a descreer otra vez de la vía pacífica e institucional.<sup>49</sup> Por eso, al decir de Jorge Camil, a la hora señalada los honorables diputados del PAN actuaron como “rebaño” y junto con los del PRI le dieron “callo” al *candidato* López Obrador.<sup>50</sup>

Tras la decisión, el jefe de gobierno del Distrito Federal quedaba a disposición de las autoridades ministeriales y del Poder Judicial de la Federación, para enfrentar el cargo por violación a una suspensión de amparo que le imputaba la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público podía ejercer la acción penal contra López Obrador y, a su vez, el juez estaba en libertad de librar una orden de aprehensión y, en su caso, dictar el auto de formal prisión correspondiente.

#### LA MISMA OLIGARQUÍA DE SIEMPRE

Al final de la jornada, y a juzgar por la respuesta de los sacrosantos “mercados accionarios”, el saldo fue *positivo*. Sendos mensajes de López Obrador contra la violencia, en el Zócalo y en San Lázaro habían “tranquilizado” a inversionistas y especuladores, y la Bolsa Mexicana de Valores cerró ese día con ganancia récord en lo que iba del año.<sup>51</sup> No obstante, un analista de Wall Street, Tim Kearney, economista de la prestigiosa firma Bear Stearns, señaló que la decisión de los diputados generaría incertidumbre de largo plazo y no dudó en calificar el desafuero como “una maniobra política desafortunada”.<sup>52</sup>

Era evidente que el gobierno de Fox y sus aliados iban perdiendo la batalla de opinión en varios de los círculos más influyentes del mundo. A esa tendencia se sumaron después *The Wall Street Journal* y la revista británica *The Economist*. En la columna de opinión “Americas”, publicada por ese diario, la influyente Mary O’Grady escribió que si se sacaba de la contienda a López Obrador, ganara quien ganara, la elección de 2006 marcaría al próximo gobierno con “dudas de legitimidad”.<sup>53</sup> A su vez, *The Economist*, que dedicó dos artículos al desafuero,

planteó que la decisión del PRI y el PAN en el Congreso tenía varios “aspectos cuestionables”. Entre ellos, que el castigo estaba fuera de toda proporción al delito supuestamente cometido y que, presumiblemente, el proceso criminal contra AMLO era “la única forma en que podía ser bloqueada su candidatura a la Presidencia”; que el procedimiento había sido promovido por una instancia “política”, el procurador general, y que en otros casos judiciales que implicaban a Luis Echeverría, Francisco Labastida y Fox la ley había sido “menos celosa”.<sup>54</sup>

En el balance de los acontecimientos, desde su espacio “Razones”, Jorge Fernández Menéndez sancionó: “Perdió López, no ganó nadie”.<sup>55</sup> Según él, no sólo el desafuero fue correcto sino que López Obrador había buscado “afanosamente ese desenlace” para sacar “partido” del mismo.

Así, el “ataque” lopezobradorista al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Poder Legislativo “sin distinciones”, sólo podía entenderse como parte de una estrategia para “polarizar a la sociedad entre buenos y malos”, en el marco de lo que Fernández Menéndez describió como el “discurso de apertura” de López Obrador en su campaña por la Presidencia de la República.

Singularizado por su adhesión a la causa de López Obrador y sus seguidores, el diario *La Jornada* dedicó su editorial del 8 de abril a los sucesos del día anterior.<sup>56</sup> Según el periódico que dirige Carmen Lira, la decisión de los 360 diputados que aprobaron el desafuero fue la legalización de una “conjura” contra López Obrador y la izquierda democrática y civilista del país; un atentado a las perspectivas de la democracia en México; una negación de las posibilidades de construir “una nación más justa, libre y equitativa por medios pacíficos e institucionales”. Y también “una confirmación del control del país y de sus instancias de poder por parte de una coalición clandestina político-empresarial que tiene como instrumentos al actual grupo gobernante y a las dirigencias priísta y panista y, por medio de éstas al Poder Legislativo”.<sup>57</sup>

Según *La Jornada*, “disfrazado de procedimiento legal”, el “derrocamiento” de López Obrador era sólo la más reciente reacción de los “dueños reales” del país ante el riesgo de que un proyecto popular y nacional alcanzara el poder presidencial y empezara a esclarecer algo de la “cadena de complicidades” eslabonadas desde los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz.

#### EL TERRENO DE LO ABSURDO

Ante la resonancia internacional que tomaba el caso, sometido Vicente Fox a la presión externa y a una agudización de la polarización interna, las vacilaciones quedaron exhibidas en el entorno gubernamental.

Un signo evidente de lo anterior fue que la Procuraduría General de la República no se animó a consignar de inmediato a López Obrador ante un juez, y el propio Vega Memije anunció que la orden de aprehensión podría demorar “varias semanas”.<sup>58</sup> Algunas columnas periodísticas mencionaron que el presidente Fox estaba “sumamente deprimido”, “desconcertado” y que le “temblaba la mano para consignar al *Peje*”.<sup>59</sup> Se dijo también que había caído en “su propia trampa”, y con su brazo político-judicial “paralizado” no sabía cómo salir de la situación.<sup>60</sup> Como sugirió Octavio Rodríguez Araujo, si Mary Shelley volviera a nacer y escribiera una nueva versión de *Frankenstein*, ahora su novela se titularía *Foxestein*, el monstruo creado por el mandatario mexicano se llamaría “Desafuero” y él terminaría como víctima de su criatura, es decir, alienado a ella, como ya estaba ocurriendo.<sup>61</sup>

En ese contexto, una declaración del director de prensa internacional de la Presidencia, embajador Agustín Gutiérrez Canet formulada al corresponsal del diario *The Washington Post*, Kevin Sullivan, vendría a generar más revuelo. Según el *Post*, Gutiérrez, un funcionario con amplia experiencia diplomática y buen conocedor de la gran prensa estadounidense, declaró que Fox había recibido con “tristeza” las airadas críticas de los principales medios informativos del mundo, y que en caso de que López Obrador fuera encontrado culpable, uno de los escenarios posibles que estaba considerando el jefe del Ejecutivo era el “indulto”. Tras la publicación de la declaración en Washington, la Presidencia de la República desmintió de inmediato a Gutiérrez Canet.<sup>62</sup> Según aclaró el vocero oficial de Fox, Rubén Aguilar, su subordinado hizo la declaración *motu proprio* e incluso había reconocido que cometió un “error”. Un error costoso en lo personal, porque Agustín Gutiérrez Canet fue cesado pocos días después. Por su parte, López Obrador dijo que no aceptaría un “perdón” porque no había cometido ningún delito.<sup>63</sup>

El tiempo parecía correr contra Fox. Para algunos analistas la única salida posible para el presidente era el desistimiento de la acción penal. Acudir al clásico “usted disculpe”, reestructurar su *gabinetazo* y devolver certidumbre a los mercados. Sin embargo, el 20 de abril ocurrió un desaseado incidente que puso en evidencia la complicidad entre la Presidencia, la PGR y el PAN: López Obrador fue consignado por la Procuraduría ante el juez 12 de distrito del Reclusorio Oriente, pero lo que llamó la atención fue el oportuno auxilio que recibió la fiscalía de dos diputados locales de Acción Nacional Jorge Lara y Gabriela Cuevas, quienes depositaron una especie de “fianza preventiva” en una oficina de Bansefi antes de que el magistrado dictara el auto de formal prisión.

Según reconocieron ante los micrófonos de *CNI noticias* los dos legisladores capitalinos del PAN, la acción se dio en el marco de una “estrategia conjunta” con la cúpula de su partido y con el aval del precandidato presidencial Felipe Calderón, que tuvo como fin evitar que AMLO pisara el reclusorio y se convirtiera en mártir.<sup>64</sup> Al



explicar su altruismo, dijeron textualmente: “No queremos que siga utilizando las instituciones para el martirologio”.<sup>65</sup> No dejó de resultar curioso que quien reveló la noticia a una emisora radial fuera el propio Vega Memije. El funcionario de la PGR dijo que dos “ciudadanos” habían pagado una fianza de 2 000 pesos “para que el señor López Obrador no tuviera que ir a la cárcel”.<sup>66</sup> AMLO podía gozar de su libertad provisional bajo caución. Ante lo exiguo del monto fijado, Miguel Ángel Granados Chapa comentó: “Esa cifra da idea de la infracción penal” que se le atribuye a López Obrador pues según las reglas procesales, “la fianza debe garantizar ‘el monto estimado en la reparación del daño’ y ‘sanciones pecuniarias’ que en su caso puedan imponerse, y también debe asegurar ‘el cumplimiento de las obligaciones’... que la ley establece en razón del proceso”.<sup>67</sup>

La Operación Desafuero estaba dejando demasiadas huellas delatorias y una vez más exhibía la politización de la justicia. Tan era así, que el repudio a las chapucerías de la PGR y sus auxiliares se extendió a las propias filas de Acción Nacional, desde las cuales voces destacadas como las de Francisco Barrio y las de los senadores Javier Corral y Felipe Vicencio criticaron la maniobra del pago de fianza y pidieron al gobierno y al partido rectificar.<sup>68</sup> Quien sí admitió haber participado en la planeación de la medida fue el aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Felipe Calderón. Según él, una imagen de AMLO detrás de las rejas “sólo provocaría polarización y tensión social”; juzgó “totalmente imprudente” que el tabasqueño estuviera buscando a como diera lugar una prisión preventiva, y por eso reconoció que durante una gira por Guadalajara había conversado con el diputado Jorge Lara y se había ofrecido para “trabajar en la libertad caucional” del líder perredista.<sup>69</sup>

Mientras Calderón hacía alarde de su capacidad de estrategia desde Los Pinos el vocero Aguilar respaldaba la fianza pagada por los dos panistas para que el “señor López” —como quedó consignado de manera despectiva en nueve ocasiones en el boletín presidencial el nombre del tabasqueño, sin que se aludiera a su segundo apellido—<sup>70</sup> pudiera seguir el juicio sin pisar la cárcel. A su vez, el imputado acudía al Reclusorio Oriente a solicitar la revocación de su libertad provisional bajo caución, que de manera “tramposa”, dijo le había otorgado la PGR con la “complicidad” de Lara y Cuevas.<sup>71</sup> Como argumento, esgrimió que se había violentado en su perjuicio un derecho personal tutelado en el artículo 20 constitucional. A fin de cuentas, la ridícula fianza depositada por los legisladores del PAN había terminado por favorecer y darle mayor legitimidad a López Obrador. En virtud de los errores de sus adversarios, su imagen como perseguido político del régimen se consolidaba.

Convertido el desafuero en la “plataforma del ridículo” de Fox (*Monsiváis dixit*), la PGR sufriría el 22 de abril un nuevo revés jurídico, cuando el magistrado Juan José Olvera negó la orden de presentación del jefe de gobierno capitalino y decidió devolver a la fiscalía el expediente de la causa penal 34/2005 y el billete de depósito

de la fianza.<sup>72</sup> Según argumentó el juez Olvera, el Ministerio Público había cometido un “error técnico” al disponer de la libertad personal del indiciado sin que estuviera a su disposición, pues al otorgar esa libertad, López Obrador no estaba detenido ni había en su contra pendiente de ejecutar, una orden de detención ministerial fundada en la urgencia. La resolución del juez no resolvía las cuestiones de fondo, sólo las posponía. Pero López Obrador podía regresar a sus funciones de gobierno en el antiguo Palacio del Ayuntamiento y despachar sin gozar de fuero, sin incurrir en actos ilegales.

La resolución del juez, en víspera de la Marcha del Silencio convocada por López Obrador para el domingo 24 de abril, podía tener varias lecturas. Por un lado, si la PGR tenía un delito real que perseguir, lo que menos tenía que interesarle era la libertad del perseguido. De allí que resultara al menos incongruente que el gobierno federal ordenara consignar a AMLO ante un juez y al mismo tiempo enviara al “dúo samaritano” —como llamó Carlos Monsiváis a los panistas Lara y Cuevas— a pagar una fianza ridícula por su monto.<sup>73</sup> Las pifias y los enredos legales churriguerescos de la Procuraduría resultaron “extraños” al penalista Raúl Carrancá y Rivas: “¿Qué habrá pasado?”, se preguntó. “¿Descuido, incompetencia, mala fe perversidad o ignorancia? No lo sabemos.”<sup>74</sup> ¿Había sido acaso un recurso maquinado de manera conjunta por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para bajar la tensión ante la marcha silenciosa? La idea de un “ardid” gubernamental la sugirió uno de los abogados del tabasqueño, Álvaro Arceo Corcuera, quien declaró que “desde la tarde del viernes 22” habían comenzado a surgir “rumores” de que el juez anunciaría “una salida política”.<sup>75</sup> Incluso, en el espacio “Trascendió...” del diario *Milenio* se manejó la posibilidad de que el procurador Rafael Macedo presentara su renuncia.<sup>76</sup>

#### HABEMUS PEJE

La jornada de protesta amaneció con un pronunciamiento emitido en el Pen American Center de Nueva York por un grupo de escritores encabezados por Salman Rushdie, Ryszard Kapuscinski, Laura Restrepo, Breyten Breytenbach y Tomás Eloy Martínez, donde condenaban “el espectacular asalto político” contra el derecho de los mexicanos de expresar libremente su voluntad y decidir en las urnas el futuro del país.<sup>77</sup>

Después, a medida que avanzaba la mañana, un río humano protagonizó la Marcha del Silencio en apoyo de López Obrador. Como deseaba la dirigencia del PRD, la muchedumbre “reventó” el Zócalo capitalino. Fue la más grande concentración de la izquierda en la historia de México: más de un millón de manifestantes repudiaron el abuso del poder. Un millón 200 000 personas según varios medios de difusión y la

Secretaría de Seguridad Pública capitalina; 120 000 de acuerdo con los “cálculos” de la SSP federal.<sup>78</sup>

El no a la sordera gubernamental y la envidia antifoxista se expresó en miles de pancartas, mantas y camisetas, y también en los tapabocas blancos con que muchos manifestantes cubrieron parte de su rostro. Una consigna pintarrajeada en pequeñas cartulinas: “Nosotros los López, ustedes los jijos”, sintetizó el estado de ánimo de cientos de manifestantes agrupados en la identidad del silencio. Otras gritaban: “Todos somos López”, “Soy totalmente AMLO” “¡ *Peje el Toro* es inocente!”, “Voy callado, escuchen mis mentadas” “No se apenDG, el bueno es el PG”, “¡ *Habemus Peje!*”<sup>79</sup>

#### NO SE HAGA TONTO, SEÑOR PRESIDENTE

La marcha del 24 de abril, replicada en el extranjero (Madrid, Barcelona, Río de Janeiro, París, California, Washington, Nueva York Vancouver, Québec, Montreal, Londres, Berlín, Sydney e Indonesia),<sup>80</sup> había significado un nuevo hito en la lucha por la democracia en México. AMLO le había propinado otra derrota política a Vicente Fox y a sus aliados, y asegurado su regreso a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Con la PGR contra la pared, los datos de la realidad parecían indicar que Fox tenía que buscar una solución política al entuerto que él mismo había generado.

Por esos días ganó cuerpo una versión que indicaba que el 19 de abril, en el primer círculo de colaboradores de Fox, en la residencia oficial de Los Pinos, había quedado claro que como consecuencia del desafuero la figura del presidente de la República era la más afectada. Entonces comenzaron a ensayarse estrategias para rescatar a Fox del desplome. Concluyeron que la batalla del desafuero estaba perdida. Y en un documento confidencial se le planteó al presidente “dar un giro de 180 grados”.<sup>81</sup> La estrategia consistió en desinflar el tema del enfrentamiento con López Obrador; sacar a Fox de la zona minada y “cambiar de canal a la ciudadanía”. Vicente Fox tenía que volver a ganarse el corazón de la gente; proponerse como un presidente para todos, que no dividiera a la nación. Tal vez a esa estrategia había respondido la decisión del juez Olvera que hizo de la “fórmula perfecta” del procurador Macedo un verdadero fiasco; un desastre jurídico. Ese revés terminó de convencer a Fox de que toda la estrategia se derrumbaba. Su popularidad estaba en caída franca. Entonces pensó poner fin a la trama.

La víspera de la Marcha del Silencio, un Fox molesto reunió a un pequeño grupo de asesores en su rancho San Cristóbal, en Guanajuato, y les recriminó no haberle previsto los escenarios de “descomposición social” a los que se había llegado con el desafuero. Les reprochó que su gobierno estaba ahora ubicado en una situación

contraria a la que querían: “El crecimiento del adversario político”. Y les dijo: “No estoy loco para seguir en esto”.<sup>82</sup> Después les ordenó buscar una salida política. Un día después, la “revolución de los López” en contra del uso político de la procuración de justicia, que culminó en el Zócalo capitalino, terminó de convencerlo de que si seguía adelante con el plan para eliminar al contendiente que iba arriba en las encuestas, no pasaría a la historia como un “demócrata” ni como “el hombre del cambio” en México.

#### DE LOBOS Y CORDERITOS

El 26 de abril entró a jugar un factor internacional que se montó en la coyuntura mexicana. Desde La Habana, en una de sus habituales intervenciones nocturnas en cadena nacional por radio y televisión el presidente de Cuba, Fidel Castro, dirigió su más violento discurso contra Fox, a quien llamó “corderito” de Estados Unidos y le sugirió que renunciara a la Presidencia como salida al conflicto surgido por el desafuero del jefe del Gobierno del Distrito Federal.<sup>83</sup>

Con frases hirientes y sarcásticas, el líder cubano dijo que el orden económico vigente “está desestabilizando y va a desestabilizar gobiernos”, incluso el de México. Afirmó que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (entre Estados Unidos, Canadá y México) había acabado con la agricultura mexicana. “Hay una situación dura. Hay que ver cómo maltratan, cómo cazan a los emigrantes mexicanos.” Y elevando el tono de voz y endureciendo el semblante acusó al gobierno de Fox de estar “aliado al imperio contra Cuba [...] conducido como un corderito por la mano del amo, hasta la última situación, el engaño de Ginebra” (el mandatario cubano reveló que México había prometido abstenerse en la votación sobre la isla en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero a última hora cambió el voto). Luego reprochó el “silencio bochornoso” del gobierno foxista sobre el posible paso por territorio mexicano del terrorista Luis Posada Carriles en tránsito hacia Estados Unidos “su complicidad para dominar la OEA, introducir el ALCA, destruir el esfuerzo de los sudamericanos y los caribeños, que quieren cambios y no quieren ALCA, que quieren una integración de otra forma, que quieren defender sus derechos, sus intereses”.<sup>84</sup>

Después leyó una nota sobre el origen del caso El Encino, y dijo: “Está un poco extraña la cosa, ¿no? Si alguien vende el país completo, no le pasa nada. Pero si alguien suspende la obra vial en un terreno expropiado a un particular, hay que desaforarlo. No entiendo bien [...] ¿Ahora qué va a hacer el caballero? ¿Va a llamar a su amigo [George Bush]? ¿Qué le va a pedir? ¿Qué le envíe la división aerotransportada para sacar al gobernador, que ha vuelto a tomar posesión, apoyado

por más de un millón? No será fácil [...] O le pide la división aerotransportada o se jubila anticipadamente”.<sup>85</sup>

Al día siguiente, el canciller mexicano Luis Ernesto Derbez lamentó las expresiones de Fidel Castro y dijo que México mantendría “una mano extendida buscando una relación positiva con el gobierno cubano”. Según fuentes diplomáticas, la cancillería cubana había estimado que después de las cautelosas declaraciones de Derbez seguiría el rompimiento de relaciones en un mensaje de Fox programado para las 20 horas del 27 de abril. Según esa versión, el gobierno cubano tomó la delantera y a las 17:45 horas de México se comunicó con la cancillería de Tlatelolco para advertirle que en caso de romper relaciones, su respuesta sería difundir durante la manifestación del 1° de mayo en La Habana, 17 de las 42 cintas que había grabado al empresario Carlos Ahumada, el hombre clave en los *videoescándalos* de 2004, quien se hallaba preso en México. En dos de ellos, según la fuente, aparecerían los hijos de Marta Sahagún (la polémica esposa de Fox) e incluso la primera dama hablando de negocios con el empresario argentino-mexicano.<sup>86</sup>

#### FOXIO PILATOS

No obstante, el mensaje nocturno de Fox fue en otro sentido. Bajo la presión multitudinaria de la marcha pacífica convocada por López Obrador, que se convirtió en un plebiscito en su contra, acosado por las sucesivas protestas de simpatizantes del tabasqueño que en las últimas semanas lo habían encarado en sus actos oficiales en diversos puntos del país, y con el telón de fondo de la alarma de la comunidad internacional por la desestabilización política y económica que se veía venir en México, el 27 de abril de 2005 el presidente de la República rectificó el rumbo, y en cadena nacional anunció la remoción —apenas disfrazada de renuncia para observar las mínimas formalidades del caso— del procurador Rafael Macedo,<sup>87</sup> operador principal de las maquinaciones legaloides contra López Obrador. También se comprometió a realizar una revisión exhaustiva del expediente penal inventado contra éste y ofreció enviar al Congreso una iniciativa de ley que garantizara los derechos políticos de los ciudadanos sujetos a juicio hasta en tanto no se dictara sentencia definitiva en sus casos.<sup>88</sup>

Durante su mensaje a la nación desde Los Pinos, con una persistente referencia a sus “convicciones democráticas” y en uso de un muy calculado lenguaje político y de distensión, Fox aseguró que siempre sería mejor para México “nuestra disposición al diálogo y no al desafío”. Asimismo, sin mencionar a López Obrador, dijo que su gobierno no impediría a nadie participar en la próxima contienda electoral.

Lo cierto es que de un día para otro el desafortunado “señor López” de la propaganda

gubernamental pasó a ser nuevamente el jefe de gobierno del Distrito Federal, y el presidente Fox, calificado como traidor a la democracia, volvió a ser un “estadista demócrata”. Como recordó el abogado Mariano Albor, “los asuntos políticos y la justicia siempre corren el riesgo de terminar en una farsa”.<sup>89</sup> El nuevo golpe de timón, su autocrítica implícita y la apuesta de Fox por una salida política a la situación fueron bien recibidos en círculos empresariales y en los partidos de oposición. Se abría un nuevo espacio para el diálogo o, al menos, para una tregua momentánea que permitiera analizar nuevas tácticas para proseguir la pelea.

Quien sí “trinó” contra Fox, molesto por la decisión de sepultar el desafuero, fue Roberto Madrazo. El dirigente nacional del PRI calificó de “extraña” la actitud del mandatario; acusó a Fox de haber sumido al país en el caos y la confusión, y lo tildó de incongruente.<sup>90</sup> Según la visión de Miguel Ángel Granados Chapa, Madrazo reaccionó con despecho. “No pudo ocultar su reconcomio ante el mensaje presidencial” y sus “reproches” lo exhibieron como alguien que “siente vulnerado un pacto, como el que padece el que se falte a la palabra comprometida”. Cuando todo el mundo gozaba “el derrumbe” de López Obrador, indignó al líder del PRI que se reulara en el propósito de “destruir al indestructible”.<sup>91</sup> Fue evidente que los conductores de la asonada contra la democracia habían equivocado su cálculo estratégico y que el presidente no tuvo suficiente fuerza para seguir adelante. Se habían concentrado en la batalla de la Cámara de Diputados y descuidado otros frentes. Fracasado el “desafuero patriótico” de López Obrador; convertida la “clase política” mexicana en hazmerreír de buena parte de la población; ratificado en su liderazgo su “odiado adversario”<sup>92</sup> mientras declinaba su propia popularidad según revelaban las encuestas,<sup>93</sup> “deprimido” por la crítica de la prensa internacional, Vicente Fox se vio enfrentado a la disyuntiva de consumar un golpe de Estado técnico o dar un paso atrás. Escogió la segunda opción, aunque para ello tuvo que traicionar sus convicciones. No obstante, en el momento final evitó un daño mayor al país. Su situación no sería fácil. Tendría que gobernar lo que restaba de su mandato con un gabinete debilitado y con aliados desconfiados.

Pese a los esfuerzos de la propaganda oficial por presentarlo como un “presidente demócrata” y un “hombre de Estado”,<sup>94</sup> Vicente Fox no pudo sacudirse la impresión de que se había comportado como un político blando y que en un esfuerzo por conservar su imagen personal había vuelto a torcer la ley sin querer pagar un costo político por ello.<sup>95</sup> Según Raymundo Riva Palacio, el “pusilánime” Fox había “claudicado” y lejos de terminar su pesadilla apenas comenzaba.<sup>96</sup>

El 3 de mayo la primera plana del diario *La Jornada* anunciaba en un gran titular: “Presidencia: el asunto AMLO quedó zanjado”. Dos días después, durante la conmemoración del 143 aniversario de la batalla de Puebla, el presidente Fox dijo que “la concordia y el diálogo” eran “el mejor camino para defender nuestra

democracia”.<sup>97</sup> El viernes 6 tendría lugar un encuentro entre el presidente Fox y López Obrador en Los Pinos, que según las expectativas gubernamentales, debería marcar un “punto de inflexión” en el estado de tensión nacional que ponía en duda el ejercicio de la democracia en México.<sup>98</sup> El encuentro, simplemente formal, parecía marcar la superación de las hostilidades y era el inicio de una nueva etapa de signo incierto. En principio, a juzgar por la rijosidad de los dos principales actores en los tres últimos años, más que abrir una nueva fase de armonía republicana y estabilidad política, era una tregua para reposicionarse de cara a la contienda electoral de 2006.

A finales de julio de 2005, López Obrador se separaría de la jefatura de gobierno del Distrito Federal para buscar la candidatura presidencial por el PRD. Con su salida concluía un ciclo. Dejaba buenos números; en particular, en materia de obras públicas generadoras de empleo: un distribuidor vial en Zaragoza, un segundo piso en el Periférico, tres puentes espectaculares en Santa Fe, la remodelación de la zona financiera comercial del Centro Histórico, la construcción de la Plaza Juárez y de las nuevas torres de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la ciclopista, el corredor Reforma, el Metrobús, una nueva universidad pública y 16 preparatorias en la capital de la República 120 000 viviendas de interés social y distintos programas sociales como la pensión universal ciudadana y las becas para madres solteras y personas con discapacidad.

Pero, además, en el campo político había logrado sobrevivir a una feroz ofensiva en su contra desde el poder, no cometiendo errores estratégicos y elevando el costo político de la intentona, cuando estuvo dispuesto a ir a la cárcel por una falta menor de la que siempre negó su responsabilidad, para desde ahí dirigir la resistencia civil. El principal acierto de López Obrador frente a sus adversarios fue apostar a que la sociedad había cambiado. Y parecía haber acertado. En la gente, en la incipiente organización de un amplio movimiento social pacífico que quería cambios y salía a la calle a defender sus posiciones, AMLO tenía la base para iniciar su carrera hacia la Presidencia en la jornada electoral de julio de 2006.

## Estrategia de lodo y odio en una República plutocrática

El ajedrez político nacional vino a complicarse más con la reaparición de un actor clave en el México contemporáneo: el EZLN. El 19 de junio de 2005, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional decretó una “alerta roja”, ordenó el paso a la clandestinidad de las juntas de buen gobierno y el cierre de los Caracoles, y acuarteló a sus tropas regulares.

Una semana después, la organización anunció que con el aval de 98% de sus bases de apoyo emprendería “una nueva iniciativa política de carácter nacional e internacional”. El Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN informó que la decisión fue resultado de una serie de reuniones y asambleas en más de 1 000 comunidades indígenas del sureste mexicano, realizadas entre el 20 y el 26 de junio, en las que participaron “decenas de miles de bases de apoyo”, hombres y mujeres “100 por ciento indígenas y 100 por ciento mexicanos”, que después de analizar “las ventajas y las desventajas, los peligros y los riesgos”, resolvieron dar un “nuevo paso” para “construir otra cosa”. En una serie de comunicados posteriores, que comenzaron a publicarse en los medios por entregas sucesivas a partir del 29 de junio, el EZLN inició la difusión de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, en la que planteaba que habían llegado a un punto

en que no podemos ir más allá y, además, es posible que perdamos todo lo que tenemos si nos quedamos como estamos y no hacemos nada más para avanzar. O sea que llegó la hora de arriesgarse otra vez y dar un paso peligroso pero que vale la pena [...] Un nuevo paso adelante en la lucha indígena sólo es posible si el indígena se junta con obreros, campesinos, estudiantes, maestros, empleados, o sea los trabajadores de la ciudad y el campo.

En los hechos, el EZLN hacía pública una nueva fase del conflicto, distinta a la primera, de diálogo y negociación, y a la segunda de construcción de autonomías indígenas *de facto*, en el marco de los Acuerdos de San Andrés negados por el gobierno. La agenda de San Andrés parecía haber quedado rebasada en la etapa,



aunque todavía no estaba claro qué había llevado a los zapatistas a dar ese “riesgoso paso”. Los comunicados no reflejaban una problemática coyuntural y defensiva sino estratégica y propositiva. En una situación de vacío de poder en el ámbito nacional, el EZLN rompía el *impasse* y volvía a ganar la iniciativa política y militar para rehacer las condiciones de su accionar.

Quedaba pendiente, además, el tema de las armas. En ningún momento se refirieron al abandono de la vía armada. El EZLN seguía siendo la organización militar clandestina que el 1° de enero de 1994 había declarado la guerra al Ejército federal y que luego de negociaciones con los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo quedó protegido por una Ley de Concordia y Pacificación que dio lugar a una tregua armada, la cual caducaría ante un eventual reinicio de las hostilidades bélicas por alguna de las partes.

La reaparición del zapatismo había ocurrido a través de un polémico texto del subcomandante Marcos, titulado “La (imposible) ¿geometría? del poder en México”, que contenía una descalificación en bloque de la “clase política” mexicana, incluido el virtual candidato del Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador, a quien el líder insurgente definió como “el paradigma del operador del reordenamiento neoliberal”. Para Marcos la “oferta” de AMLO era la “estabilidad macroeconómica” y “crear las bases de un Estado moderno [...] el nuevo modelo de Estado no nacional (ese engendro de la guerra neoliberal en América Latina)”.

A su modo, el EZLN llamaba a reflexionar con argumentos de peso en torno de la existencia de un compromiso a fondo de López Obrador con la lucha social y popular. Según Marcos, la victoria de López Obrador en el proceso de desafuero había generado una serie de “espejismos”. El principal de ellos era que López Obrador tenía prácticamente ganada la Presidencia de la República. Las declaraciones de AMLO al *Financial Times*, en el sentido de que, si ganaba, continuaría con las políticas económicas de los últimos cuatro gobiernos neoliberales, llevaron al EZLN a poner el dedo en la llaga: había más evidencias sobre una reestructuración del Estado desde la derecha que desde la izquierda.

Un día después, el 21 de junio, el EZLN decretó una “alerta roja general”. Con la fuerza simbólica de sus actos y un manejo de los ritmos, los tiempos y los espacios — diferentes a los del orden institucional y su desprestigiada clase política—, el zapatismo hizo un paréntesis cargado de sentido: clausuró el espacio privilegiado de la apuesta civil, los Caracoles; cerró las oficinas públicas de las juntas de buen gobierno en las comunidades de Oventic, La Realidad, La Garrucha, Morelia y Roberto Barrios, evacuando a las autoridades autónomas para ponerlas a resguardo, y regresó a su refugio en la selva para reflexionar sobre el camino a seguir.

La primera reacción en los círculos gubernamentales y en el seno de los partidos políticos parlamentarios fue definir la “alerta roja” zapatista como un despropósito.

Algunos analistas interpretaron la llamativa reaparición del EZLN en el muy deteriorado escenario político mexicano como una manera de insertarse en el calendario electoral. La “ofensiva mediática” habría respondido a un intento del grupo armado para no ser marginado como un actor imprescindible en el proceso de reconfiguración política ligado a la elección presidencial de julio de 2006.

La reaparición zapatista se dio después de un par de hechos en apariencia inconexos, que podrían haber arrojado indicios de que se preparaba una nueva ofensiva gubernamental contra el EZLN en Chiapas. Uno de esos hechos fue la decisión unilateral del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Bancomer, firma de capital español, de cancelar a finales de mayo nueve cuentas de Enlace Civil, agrupación encargada de gestionar donaciones nacionales e internacionales destinadas al EZLN. El argumento esgrimido por la institución bancaria fue “protegerse del lavado de dinero” y “evitar riesgos operativos”. No dejó de resultar paradójico que tal insinuación hubiera sido formulada por una institución que estaba sujeta a investigaciones judiciales en su país de origen (España), precisamente por presunto lavado de dinero en la compra de los bancos mexicanos Mercantil Probusa y Bancomer.

Un segundo hecho, en la misma perspectiva, fueron los operativos “antinarcoóticos” realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional los días 15, 16 y 17 de junio, previos a los comunicados zapatistas. Según una información oficial, soldados del Ejército destruyeron 44 plantíos de marihuana y amapola “en tres municipios de la región de los Altos, en el estado de Chiapas, dentro del área de influencia del grupo inconforme autodenominado EZLN”. Sin embargo, especialistas en el tema precisaron que ninguno de esos tres municipios se destacaba por tener “presencia zapatista”, por lo que la aseveración del Ejército llamó la atención. Lo cierto fue que columnistas con acceso a fuentes de inteligencia militar comenzaron a difundir en los medios “información” sobre el presunto vínculo del EZLN con el “negocio del narcotráfico”. Se trató de la misma estrategia utilizada por Estados Unidos en los países andinos que de funcionar, le serviría al Pentágono para poner un pie dentro de México. La instrumentación del operativo *México Seguro* contra el narcotráfico, junto con la reactivación de grupos paramilitares en Chiapas, alimentaban la hipótesis de una eventual provocación gubernamental en ciernes.

#### POLÉMICA POR IZQUIERDA<sup>1</sup>

El lanzamiento de *La Otra Campaña* y el “fuego amigo” de Marcos contra López Obrador generó desconcierto y desazón en amplios círculos solidarios con el zapatismo y la izquierda legal. Los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática “han construido una relación de desprecio en contra de nosotros, y van a

pagar, se lo aseguramos, se lo prometemos y lo vamos a cumplir”, amenazó Marcos el 6 de agosto al reaparecer en la comunidad de San Rafael, en la región de la selva tzeltal, después de cuatro años y cuatro meses de ausencia.

Ante delegados de 32 organizaciones que asistieron a la primera de seis reuniones programadas con distintas agrupaciones de la izquierda no parlamentaria de México para analizar la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y sentar las bases, de manera conjunta, de lo que debería ser la campaña política nacional del EZLN —cuyo objetivo primordial era crear un movimiento estratégico anticapitalista, no partidario, de los “jodidos”, autónomo de la clase política y generador de la autoorganización y de una nueva forma de hacer política de abajo hacia arriba—, el jefe insurgente descartó cualquier posibilidad de acuerdo o apoyo político a López Obrador de cara a los comicios presidenciales de 2006.

En su nueva ofensiva mediática, Marcos señaló que el EZLN no iba a apoyar a López Obrador ni la candidatura de ningún partido. Y en ese sentido, advirtió: “Vamos con todo, no los vayamos a salpicar; sin disparar un tiro, compañeros, sin equipos de campaña, sin asesores de imagen, sin anuncios pagados por televisión [...] van a pagar todos ellos lo que han hecho, o vamos juntos a pasarles la cuenta o vamos solos, pero todos son una bola de vividores, se han burlado de nosotros y de mucha gente y lo van a pagar porque lo van a pagar”. Varias veces en sus dos intervenciones aclaró que “no es cierto que nada más estamos en contra del PRD; vamos contra toda la clase política” en obvia alusión a los integrantes de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. No obstante este último matiz, las baterías estuvieron dirigidas contra AMLO y el PRD, y ése era el sentido final de una frase que subrayó ante la concurrencia: “No podemos enganchar *La Otra Campaña* a una campaña electoral”.

*La Otra Campaña* marcaría el nuevo rumbo de los zapatistas fuera de la geografía chiapaneca y no estaba sujeta al calendario electoral aunque en la coyuntura se superponía con el arranque de las campañas de los precandidatos a la Presidencia con vistas a los comicios de 2006. Las críticas a López Obrador, hasta ese momento el único precandidato del PRD y quien marchaba primero en las encuestas habían sido recurrentes en los últimos comunicados de Marcos, que coincidieron con la “alerta roja” que volvió a darle visibilidad pública al EZLN.

Así, el 24 de julio, en un comunicado titulado “Un pingüino en la selva Lacandona”, el vocero del EZLN dijo que los zapatistas desconfiaban del “Proyecto alternativo de nación”, documento de 50 puntos que reunía las bases programáticas para un eventual gobierno de López Obrador. Marcos no vio en ese documento más que un “maquillaje plástico” que contenía “una lista de promesas olvidables”. En ese comunicado también cuestionó a dos de los coordinadores nacionales de las “redes ciudadanas” creadas por AMLO en forma paralela al PRD: Socorro Díaz, subsecretaria

de Gobernación durante la administración de Carlos Salinas, cargo que ocupaba en el momento de la insurrección zapatista del 1° de enero de 1994 cuando, a nombre de la seguridad interior, dijo que “los grupos violentos que están actuando en Chiapas presentan una mezcla de personas e intereses nacionales y extranjeros y muestran afinidades con otras facciones violentas [...] que operan en Centroamérica”, y Ricardo Monreal, quien como diputado del PRI —antes de cambiar de chaqueta política y pasar a ser gobernador de Zacatecas por el Partido de la Revolución Democrática—, pocos días después de la matanza de Acteal afirmó que el EZLN era un “grupo paramilitar” igual al que había ultimado a los 45 indígenas tzotziles el 22 de diciembre de 1997. Dijo, también, que los zapatistas “sirven a intereses extranjeros” que buscan “obtener el dominio de la zona del Istmo de Tehuantepec, sus recursos y su ubicación estratégica”. El istmo que vincula los océanos Atlántico y Pacífico a través de los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, y de Salina Cruz, en Oaxaca, es la columna vertebral del Plan Puebla Panamá, proyecto geoestratégico al servicio de las compañías multinacionales con casa matriz en Estados Unidos que, como recordó Marcos con un dejo de sorna, “figura” en el punto 28 del programa de gobierno de López Obrador.

El 6 de agosto, al reabrir el fuego verbal en la comunidad de San Rafael, ubicada en lo que antes de 1994 había sido la finca El Zapote, *el Sub* aludió a López Obrador y pronunció una frase que generó desconcierto en el mundo político de México y, sobre todo, entre las bases perredistas: “Él no quiere regresar al pasado populista, nos va a partir la madre a todos”. A esa cita se sumó otra que a la postre resultó falsa y un día después obligó a una rectificación pública del diario *La Jornada*: supuestamente había dicho a las delegaciones presentes: “Están con López Obrador o están con el EZLN”.

Antes de la aclaración del periódico que desde 1994 se singularizó por ser la principal tribuna pública del zapatismo, algunos intelectuales como Elena Poniatowska, Octavio Rodríguez Araujo y la crítica de arte Raquel Tibol cuestionaron al líder rebelde. La autora de *La noche de Tlatelolco* y *Tinísima*, quien había dado su apoyo solidario al EZLN y a AMLO, declaró que “lo que está haciendo Marcos es dividir a la izquierda, lo cual me parece absurdo”. A su vez, Rodríguez Araujo, ferviente seguidor del zapatismo en los primeros años dijo que para entender las palabras de Marcos habría que “consultar a un psicoanalista”. Más dura, Tibol señaló: Marcos “es un golpeador tramposo y exhibicionista, que en su aventurerismo de ostentarse como legitimador de las izquierdas arrastra peligrosamente a los indígenas de Chiapas”.

NI CÁRDENAS SE SALVÓ

En su intervención, Marcos también mencionó una entrevista del diario estadounidense *The New York Times* al aspirante presidencial perredista, quien, interrogado sobre su “fama de autoritario”, respondió que los movimientos sociales “exigen mano dura” (durante su mandato como jefe de gobierno del Distrito Federal, López Obrador pagó una millonaria asesoría al ex alcalde de Nueva York Rudolf Giuliani, quien le recomendó que aplicara la “tolerancia cero” en la capital mexicana). “Se darán cuenta qué pasó con el movimiento urbano popular durante su gobierno”, comentó Marcos.

Pero no sólo AMLO fue motivo de las críticas del líder zapatista; también Cuauhtémoc Cárdenas, a cuyo movimiento de masas dio su apoyo el EZLN en 1994. Marcos dijo que cuando Cárdenas y el PRD ganaron las elecciones por la jefatura de gobierno del Distrito Federal, en 1997, comenzó “un proceso de descomposición acelerado” de su dirigencia.

Dejaron de apoyar las demandas del EZLN y de los pueblos indios. Ya les valió madres. Simple y sencillamente con un cálculo político que era: “Nos conviene mejor que el EZLN se quede en las montañas del sureste mexicano, a tenerlo aquí, luchando como cualquier organización”. Entonces [Cárdenas y el PRD] decidieron: “No nos conviene que hagan política. Si reconocemos los Acuerdos de San Andrés, el EZLN va a hacer trabajo político abierto; es mejor que se quede allá”. Ése fue claramente un cálculo político en reuniones secretas.

El jefe insurgente aseguró que “el punto de quiebre [del EZLN] con la clase política, no sólo con el PRD, es abril de 2001”; la fecha en que el Senado de la República votó con sustanciales modificaciones una ley sobre derechos y cultura indígenas elaborada inicialmente por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), calificada luego como una “contrarreforma” por los zapatistas. Según Marcos “el proceso de descomposición de la clase política es tan grande, que no hay nada que hacer”. Ésa es “una definición de la Sexta”. Otra definición “clara” es que una alternativa de transformación en México, distinta del neoliberalismo, “solamente va a salir de la izquierda”.

Las declaraciones y los comunicados de Marcos generaron desconcierto y asombro en algunos dirigentes y militantes de base del PRD que desde 1994 habían brindado su apoyo a la lucha zapatista. También en algunos intelectuales del entorno del EZLN, o que habían sido solidarios con ellos, como el filósofo Luis Villoro y el politólogo Guillermo Almeyra. Tras rescatar una frase de Marcos que reiteraba que para el EZLN “el problema del poder no es nuestro problema. [El EZLN] no lucha por el poder, pero no dice que no hay que luchar por el poder”, Villoro señaló con delicadeza que no se podía “obstruir el camino”, “la alternativa” que representaba para muchos mexicanos la candidatura de López Obrador. Según él, “es necesario pasar por la contienda electoral. Ése es un medio, no un fin”.

El “lenguaje pendenciero” de Marcos y la “distancia combativa” del EZLN respecto

del PRD —según las expresiones utilizadas por Miguel Ángel Granados Chapa— llevaron al intelectual cristiano Javier Sicilia, hasta ese momento firme aliado del zapatismo, a cuestionarlo que colocara

como su enemigo más acérrimo al único partido con el que pueden tener y exigir una interlocución [...] ¿Por qué ahondar en este momento la enemistad con un partido que, de entre todos los que hay, y con toda la porquería que arrastra [...] es, sin embargo, el único al que, en las condiciones actuales, se le pueden exigir los espacios que permitan avanzar en la lenta construcción [de una alternativa popular]? ¿Por qué sabotear la posibilidad de que un partido de “izquierda” llegue al poder y logre así mejores condiciones para el avance de la alternativa zapatista? ¿Qué quieren usted y el EZLN con esta pugna: hacer fracasar al PRD y fortalecer al PRI que, con su voto duro y el dinero del narco, llegará sin un buen contrincante al poder? [...] O, por el contrario, ¿usted, el EZLN y las organizaciones de la izquierda radical apuestan con ese proceder a crear los focos de insurrección que en 1994 no pudieron crear y generar una revolución; o simplemente pretenden apostar por una desestabilización más aguda del país que permita crear las condiciones para que el país avance por el camino de las autonomías? ¿Es posible en condiciones de mayor inestabilidad generar procesos de independencia política, que suponen años de construcción crítica de las conciencias?

El subcomandante Marcos no respondió de inmediato a las críticas, aunque en la segunda reunión preparatoria de *La Otra Campaña*, celebrada con organizaciones indígenas en la comunidad autónoma zapatista Javier Hernández, el 15 de agosto, dijo que el EZLN hablaría y escucharía

lo mismo a gente humilde que a personalidades que ponen luz, que nadie les regaló sino que conquistaron con su esfuerzo, al servicio de los jodidos en todo el mundo. No convertiremos al zapatismo, ni a *La Otra Campaña* en un movimiento antiintelectual ni chovinista. Nos esforzaremos por darle su justo valor a la reflexión y a la teoría, así como a las luchas que en América Latina y el mundo tienen muchos colores, muchos modos y lenguas y un solo pensamiento: por la humanidad y contra el neoliberalismo.

#### AMLO, EL PRD Y LA GENTE<sup>2</sup>

En Hermosillo, Sonora, en su segundo día de precampaña electoral (12 de agosto de 2005), Andrés Manuel López Obrador dijo que “el triunfo no va a depender sólo de la militancia del PRD y de la estructura partidista, sino del pueblo”, y advirtió que “si la gente no se organiza y participa, que no quepa la menor duda de que ganará el partido que tiene más estructura” (en obvia alusión al PRI). Antes en una entrevista con *La Jornada*, AMLO declaró: “Imaginen que no triunfe el dinero sobre la moral, imaginen que el pueblo derrota al poder de las mafias y del hampa de la política. Ganar la Presidencia de la República no va a ser fácil. Nos estamos enfrentando a quienes van a utilizar todo el dinero del mundo, todas las trampas, los conozco bien, los he padecido”. En esa ocasión expresó que no era un hombre de centro, “nunca lo he sido; soy de izquierda y no voy a ser ni líder moral ni cacique político”.<sup>3</sup>

Como en 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas, la candidatura de AMLO entrañaba la posibilidad de derrotar a las derechas panista y priísta. También era cierto que el PRD,

a pesar de sus liderazgos verticales y personalistas, con sus *tribus* y sus grupos de presión, sus peleas por cuotas de poder y sus corruptelas, era el instrumento electoral a través del cual amplios sectores populares creían que podían acceder al gobierno de manera pacífica. No había otro. Aunque no fuera un partido de izquierda, el PRD era un mal necesario.

Alejado de sus principios y de las luchas populares, el PRD se había convertido en un partido electorero controlado por oportunistas pragmáticos y no había logrado superar la antidemocracia ni el corporativismo, como tampoco la corrupción y la impunidad, rasgos todos heredados del sistema priísta del partido de Estado. A lo anterior se sumaba un hecho incontrastable: AMLO era el que establecía la estrategia y el programa, quien decidía los tiempos y quien ocupaba los espacios.

Portador de esos elementos negativos en su seno, era previsible también, que ante el desgaste de los dos partidos conservadores (PRI-PAN), en caso de una victoria, el PRD pudiera ser refuncionalizado en la perspectiva del sistema de dominación vigente. De allí la importancia de la organización y la participación popular en una perspectiva de izquierda, como planteó López Obrador en su discurso. En ese escenario se podría estar asistiendo a una transición del modelo neoliberal a un gobierno alternativo de signo progresista. Pero esa transición había que pensarla y tratar de negociarla. El grupo que rodeaba a AMLO, la dirigencia del PRD y los aliados que se sumaran, tenían la obligación de pensar seriamente la transición, medidas de gobierno, acuerdos internacionales, políticas hacia el endeudamiento de los productores y de los afectados por la crisis financiera. Se trataba de establecer un paquete global y de discutirlo con las fuerzas sociales sindicales y empresariales. Ésa era la tarea del conjunto de la fuerza política que, de triunfar en 2006, asumiría el gobierno nacional.

Un gobierno popular tenía que construir su propia estructura de gobierno. Debía gobernar con la gente y, para hacerlo, tenía que transferir capacidad de decisión y de gestión a la gente organizada. Se trataría, pues, de estructurar desde abajo una organización de respaldo al gobierno, pero no había mucho tiempo ya que los comicios estaban cerca. Esa organización, además, tendría que velar por el cumplimiento de las metas con que la fuerza política y los aliados que impulsaran a AMLO se comprometieran. No podía haber gobierno popular de verdad si no se estructuraba el apoyo desde abajo. Si no se apoyaba en la gente y le daba a la gente posibilidades de hacer efectivo ese apoyo. Todo eso, al final, sería complementario de *La Otra Campaña*, la del EZLN, en la perspectiva de otro proyecto de nación. De la refundación de México y de otra forma de hacer política. Eso, claro, en la medida en que los zapatistas, AMLO, el PRD y sus aliados en la etapa, sumaran fuerzas, identificaran al enemigo principal y fueran conformando una alianza estratégica antioligárquica y antiimperialista. No eran tareas fáciles y, además, el polo opuesto

también se preparaba para la nueva fase de confrontación.

#### EL CLUB DE PLUTO

En la mitología griega, Pluto, hijo de Jasón y Deméter, era el dios de la riqueza. Por extensión, la plutocracia es la preponderancia de la clase rica en el gobierno del Estado. Durante la época del partido de Estado el Revolucionario Institucional, la clase rica —definida usualmente como oligarquía— entró en una relación de subordinación y complicidad simbiótica con el sistema presidencialista y los gobiernos autoritarios del PRI. Los empresarios financiaban al partido oficial, a distintos grupos de interés y la actividad electoral, y ese financiamiento era utilizado como instrumento de influencia sobre el gobierno. A cambio de legitimar al presidencialismo y al PRI, los poderes fácticos utilizaban al Estado y se amasaban fortunas bajo su manto protector. Esa colusión entre el poder económico y el poder político tenía como eje una gran corrupción, garantizada a su vez por una impunidad a toda prueba.

Pero en los tres últimos lustros del siglo XX la relación entre el PRI y el gran capital privado cambió de modo cualitativo. El proyecto neoliberal permitió la acumulación y la redistribución de la riqueza hacia arriba. Es decir, se conformó un Estado benefactor al servicio de un puñado de poderosos. Así, con base en la rapiña, se dio un acelerado proceso de plutocratización. Un pequeño grupo de familias concentró la riqueza y surgió una clase oligárquico-plutocrática. Signado por la atomización de la representación y la degeneración del papel de los partidos políticos —que fueron sometidos a una persistente campaña de desprestigio mediático organizada por los poderes fácticos—, el ahuecamiento de la democracia llevó a una transformación del Estado. El modelo plutocrático generó una nueva “clase política”, depredadora y mafiosa, conformada por individuos amorales que amasaron fortunas ilegales gracias a sus nexos con el gran capital y otros que operan de manera circense como capataces de los dueños del dinero y se arrodillan y juran lealtad ante el *diktat* del dios Pluto. Eso fue, ni más ni menos, el llamado Pacto de Chapultepec, suscrito en el alcázar del castillo el 29 de septiembre de 2005.

Los empresarios, sus aliados políticos y los propagandistas (Televisa, TV Azteca, cadenas radiales, la prensa escrita, la jerarquía católica, actores, futbolistas, sindicalistas, rectores e intelectuales de derecha tipo Enrique Krauze), pusieron en práctica un vasto proyecto de guerra psicológica e ingeniería social para manufacturar un consenso (Celebremos México), que terminaría por agitar aún más la lucha de clases contra los trabajadores y el pueblo. Slim y su club de magnates que reunió, entre otros, a Lorenzo Zambrano (Cemex), Alfredo Harp Helú (Banamex), Gilberto



Borja (ICA), Isaac Saba (Grupo Saba), Olegario Vázquez Raña (Hospital Ángeles y Camino Real), Roberto González Barrera (Gruma y Banorte), Carlos Hank Rhon (Interacciones y Mercedes Benz), Alejandro Soberón (CIE), Carlos Fernández (Grupo Modelo), Claudio X. González (Kimberly-Clark), María Asunción Aramburuzabala (presidenta del Grupo Modelo y esposa del embajador de Estados Unidos, Antonio O. Garza), Marcos Martínez (Santander), Manuel Medina Mora (Banamex), Emilio Azcárraga (Televisa) Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca), Joaquín Vargas (MVS) y Lorenzo Servitje (Grupo Bimbo), no representan los intereses de la mayoría. Los firmantes de la *enchilada Sanborns* con sazón salinista (Enrique Galván Ochoa *dixit*)<sup>4</sup> sólo buscaban preservar sus intereses de grupo.

Impulsora del “nuevo nacionalismo competitivo”, la élite económica que reúne 80% del PIB, los *notables* de México que por años minaron y acabaron con el viejo contrato social, querían establecer ahora, de manera directa, las políticas de Estado. Ya no se conformaban con limitar su actividad política al financiamiento de las campañas electorales para proteger sus intereses; ahora se organizaban para financiar ordenadamente sus opciones. Antes de iniciarse la campaña, los dueños de México adoptaban el papel de interlocutores principales de candidatos y partidos. ¿Con qué representatividad quienes ejercían —y siguen ejerciendo— el monopolio telefónico el duopolio televisivo, el oligopolio radiofónico, pretendían erigirse en la vanguardia de la unidad nacional? Por otra parte, ninguno de ellos creía en el mito del libre mercado ni en nada que se le parezca. Lo que querían en la coyuntura era un Estado de bienestar poderoso que les siguiera proporcionando recursos y los protegiera en el marco de la crisis estructural que se dibujaba para el futuro mexicano cercano. En definitiva, pugnaban por un “Estado niñera” que ofreciera subvenciones y recursos públicos a los ricos.

Para seguir saqueando al país y controlar a la “gran bestia” (el *populacho*), los plutócratas y sus aliados necesitaban un cambio de modelo. Un modelo protofascista, con base en el Pacto de Chapultepec y Celebremos México, con la bendición, claro, del cardenal Norberto Rivera. El objetivo era conformar una República plutocrática en un país de pobres. Todo lo demás fue propaganda, incluida la aparición de un nuevo “enemigo” en la geografía mexicana.

#### CHÁVEZ VS. FOX: LA FORMA Y EL FONDO

En noviembre de 2005 se produciría un nuevo desaguado de la política exterior foxista. El escenario fue Mar del Plata, Argentina donde tuvo lugar un agudo enfrentamiento entre dos concepciones de la integración americana. Por un lado, la integración para la servidumbre. Por otro, la integración para la liberación. Se trató de

una antinomia que, en esa coyuntura, venía a sustituir a otra más antigua que oponía revolución y contrarrevolución.

En ese contexto se ubicó la grave crisis político-diplomática desatada entre los gobiernos de México y Venezuela en el marco de la Cuarta Cumbre de Presidentes de las Américas, celebrada los días 4 y 5 de noviembre en Mar del Plata, que a la postre derivó en un retiro recíproco de embajadores y redujo la relación bilateral a nivel de encargados de negocios.

Las razones de fondo de la confrontación entre Fox y Chávez en la cumbre fueron de carácter político-ideológico y tenían alcance geopolítico. El diferendo tuvo como eje la discusión sobre la utilidad y la viabilidad del área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que en la coyuntura —y con muchos matices— enfrentaba a regímenes neoliberales proestadounidenses y gobiernos nacionalistas y reformistas con cierto sentido social. Fox y Chávez habían llegado a Mar del Plata como vanguardia de dos posiciones divergentes sobre los procesos de integración comercial a escala continental: el ALCA y el Alba (Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe). En el marco de la creciente resistencia al Consenso de Washington, un bloque de gobiernos regionales y movimientos sociales puso en entredicho la capacidad de mandar de George W. Bush presente en la cumbre. Mar del Plata selló el entierro del ALCA. Pero el ALCA, en definitiva, no era un asunto prioritario para México cuando menos en cuanto a sus intereses directos. México ya tenía con Estados Unidos y Canadá un Tratado de Libre Comercio, que a una década de vigencia exhibía resultados catastróficos. El “libre comercio” depredador entre Estados Unidos y México, dos países asimétricos, había dejado como saldo la destrucción de la cadena productiva del agro y de sus estructuras sociales, y el cierre de miles de fábricas, que dejaron en la miseria a millones de mexicanos, lo que a su vez provocó un mayor flujo migratorio de trabajadores indocumentados hacia La Meca del capitalismo.

El ALCA, en Mar del Plata, formaba parte de la agenda de Washington. Era un problema de Bush, no de Fox. Fue contra Bush y el ALCA que se preparó la Tercera Cumbre de los Pueblos de América,<sup>5</sup> que tuvo como principales protagonistas a Hugo Chávez, Evo Morales, Emir Kusturica y Diego Armando Maradona (“Fidel es Dios, y Bush un asesino”, dijo Maradona), cuya motivación central era que no se reviviera el cadáver del ALCA. El objetivo, como sintetizó Hugo Chávez, era ¡mandar al carajo al ALCA! Y el momento político, allí, importaba. Bush había dejado de ser todopoderoso en Estados Unidos. Llegaba a Argentina debilitado por la furia de la naturaleza simbolizada en el huracán *Katrina*, por la resistencia iraquí a la ocupación del Pentágono, por su pérdida de popularidad y por un asunto judicial, el caso Plame (la filtración de identidad de una agente de la CIA), que involucró a Lewis Libby, ex jefe de asesores del vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, acusado de

obstrucción a la justicia. Libby podría arrastrar a Kart Rove, asesor político de primer nivel de Bush, y al propio Cheney. Era inocultable que en Washington se respiraban aires que recordaban los tiempos del Watergate, y que Bush estaba acorralado y a la defensiva porque las élites conservadoras habían marcado distancia y querían limpiar la mesa como en los tiempos de Richard Nixon.

En ese contexto Vicente Fox, de manera vergonzante, fue a jugar en Mar del Plata el papel de promotor y defensor a ultranza del proyecto hegemónico de Estados Unidos. No fue otro viaje turístico de su sexenio, no. Fox llegó a Mar del Plata de manera provocadora, a dar línea. Como capataz de Bush y de la fracción imperial que éste representaba. Estados Unidos maniobró en Mar del Plata para introducir en la agenda su exigencia de avanzar hacia el ALCA. Para ello utilizó a los presidentes de México y de Panamá. La cuestión no era la diplomacia esquizofrénica de Tlatelolco y la gran capacidad de Fox para *meter la pata* cada vez que abría la boca e improvisaba. Eso era un dato anecdótico. Fox no se equivocó en Mar del Plata. Fue a hacer su trabajo. Como dijo Rosario Green, ex canciller de México y ex embajadora en Argentina, fue a hacer el “trabajo sucio” de Estados Unidos. A “dividir” a América Latina. Intervencionista, se enfrentó al Mercosur; dividió la cumbre. Se malquistó con Néstor Kirchner quien a su vez acusó a Fox de “ser sumiso ante Estados Unidos”<sup>6</sup> y de “confundir la diplomacia con la pleitesía”.<sup>7</sup> También se peleó con Hugo Chávez y fracturó a la región. Remedo de Carlos Menem en los tiempos de las *relaciones carnales* con Bush padre,<sup>8</sup> Vicente Fox, según un analista del diario bonaerense *Clarín*, se vio “más bushista que Bush”.<sup>9</sup> Algo debería. O como dijo Federico Arreola, igual que el niño de Atocha, José María Aznar, Fox ya estaba pensando en su retiro y buscaba la “protección” de Bush y su pandilla.

El tema de fondo, entonces, fue que Fox se dejó utilizar por Washington como punta de lanza del ALCA. Como señalaron legisladores del PRI y el PRD, Fox fue el “cabildero oficioso” de Bush.<sup>10</sup> Su papel era alinear a los países que conformaban el Mediterráneo de Estados Unidos (México y el Caribe). La ecuación 27 a 5 citada alegremente por el canciller Derbez, que supuestamente reflejaba un abrumador apoyo al ALCA, habló del fruto de su labor.<sup>11</sup> No obstante el ALCA descarriló en Mar del Plata y Fox cumplió el papel que en los años ochenta desempeñó Napoleón Duarte, entonces al frente de la república bananera de El Salvador. Por eso, no había que dejarse llevar por la retórica y los golpes de pecho de políticos, intelectuales y seudoperiodistas, que envueltos en la bandera mexicana se dijeron “ofendidos” y “agraviados” por las acusaciones altisonantes de Hugo Chávez,<sup>12</sup> cuando dijo que Fox se “arrodillaba” ante Estados Unidos y lo llamó “cachorro del imperio”.<sup>13</sup>

Pero el fondo de la cuestión trascendía al ALCA. Hubo datos objetivos que indicaban que Vicente Fox y el PAN, bajo la conducción de Manuel Espino, estaban llevando a cabo la agenda del Departamento de Estado estadounidense.<sup>14</sup> El activismo

de Espino vía la ultraconservadora Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) que presidía, era a todas luces intervencionista en Venezuela. Tanto Collin Powell como su sucesora al frente de la diplomacia imperial Condoleezza Rice, habían identificado como enemigos regionales a Cuba y a Venezuela. Más específicamente a Fidel Castro y a Hugo Chávez. Incluso, Washington admitió en la coyuntura que estaba cabildeando contra Chávez, según declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Thomas Shannon.<sup>15</sup> Un repaso de la política exterior foxista hacia el hemisferio en los cinco años de gobierno, marcaba una sucesión de hechos respecto de Cuba que iban del famoso “comes y te vas” a Fidel Castro en la cumbre de la ONU en Monterrey, hasta el retiro de embajadores y la casi ruptura de relaciones con la isla en 2004, lo que llevó a un enfriamiento de los nexos bilaterales que persistía hasta el presente. A lo que se sumaba, ahora, el conflicto con la Venezuela de Hugo Chávez, que llegó a su clímax cuando el 14 de noviembre las cancillerías de México Distrito Federal, y Caracas retiraron sus embajadores, Manuel Loaeza y Vladimir Villegas,<sup>16</sup> mientras Fox advertía que estaba dispuesto a llegar a la ruptura total de relaciones diplomáticas.<sup>17</sup>

#### LOS TEMORES DE NEGROPONTE

En las postrimerías de 2005 quedaría exhibida otra faceta de la colusión entre el gobierno federal, las élites políticas y los dueños de los medios de difusión masiva. Se trataba de un acuerdo ambiguo que tenía que ver con un lucrativo negocio en expansión: el de las erogaciones millonarias que por concepto de publicidad realizan los precandidatos en campaña, en beneficio, fundamentalmente, de Televisa y TV Azteca. Se trataba de otra variable del tributo en dinero y decisiones que debían “pagar” los partidos políticos y sus dirigentes, a quienes fuera del control estatal y ciudadano se erigían en el “primer poder” político-ideológico existente en la sociedad mexicana: el *cártel* de las dos poderosas televisoras privadas.<sup>18</sup>

Televisa —que durante el viejo régimen de partido de Estado se había desempeñado como la vocería mediática del poder presidencialista, y que ahora, como parte de la constelación plutocrática que dominaba México se había convertido en un verdadero poder fáctico y seguía fijando la agenda del dominio oligárquico— había demostrado su gran capacidad de convocatoria al organizar un acto político en el Palacio de Bellas Artes (Celebremos México). En octubre se anticiparía a cualquier intento de reformar la legislación en materia de radio y televisión sin su aval, al firmar un convenio con el Instituto Federal Electoral para “transparentar” los gastos de propaganda electoral, y en diciembre promovería ante la Cámara de Diputados una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión a su medida conocido como el

“decreto Televisa”.

Además, como se comentó arriba, Azcárraga Jean y Salinas Pliego habían suscrito el llamado Pacto de Chapultepec, en el que un grupo de magnates encabezados por Carlos Slim y Lorenzo Servitje propuso un “acuerdo de unidad nacional” y exigieron “juego limpio” a los políticos en los comicios de 2006, lo que constituyó una maniobra desembozada y con proyección hegemónica de los dueños del dinero para erigirse en árbitros de la contienda electoral.

Pero lo que siguió, por cierto, no fue el “juego limpio”. Antes bien, la campaña de lodo y descomposición diseñada por “expertos mediáticos” estadounidenses al servicio de Felipe Calderón, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional se vio reforzada por una “estrategia de tensión” que, por la vía represiva, parecía estar dirigida a reforzar el “voto del miedo”, cuyo objetivo final sería plasmar una nueva elección de Estado en México.

A comienzos de 2006 la larga mano de Washington se hizo sentir de manera descarnada sobre México. El 2 de febrero, durante su comparecencia ante un comité del Congreso de Estados Unidos el director nacional de Inteligencia, John Dimitri Negroponte, dijo que los comicios presidenciales de México serían “cruciales” para la Casa Blanca. Recordó que en el curso de ese año se celebrarían 10 elecciones en América Latina, y de éstas, subrayó, “ninguna es más importante para los intereses de Estados Unidos que la de México el próximo julio”. En la audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, el viejo *halcón* de la diplomacia de guerra de Washington identificó las “amenazas” a la seguridad nacional y los intereses de Estados Unidos, junto a los rubros tradicionales de la agenda imperial: el terrorismo, el narcotráfico y la competencia económica y por los recursos, en particular el petróleo, ubicó la emergencia en la subregión de “figuras populistas radicales” que abogan por “políticas económicas estatistas y demuestran poco respeto por las instituciones democráticas”.

Si bien citó como ejemplo al presidente de Venezuela, Hugo Chávez —“el nuevo Hitler latinoamericano”, según lo calificó ese mismo día en el Club Nacional de Periodistas el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld—, fue obvio que estaba haciendo un paralelismo con Andrés Manuel López Obrador, a quien el discurso peyorativo de los corporativos empresariales mexicanos, la tecnoburocracia gobernante y la derecha vernácula había aderezado con frecuencia los motes de “populista”, “caudillo autoritario” “demagogo”. Pero Negroponte no se refirió sólo a los comicios de julio. Dijo que la administración Bush estaba “preocupada” porque México había caído en un “ciclo vicioso”, en el que narcotraficantes y organizaciones criminales socavaban la credibilidad y la autoridad del Estado. Utilizó, asimismo, una serie de calificativos para definir al gobierno de Vicente Fox, entre ellos “débil”, “corrupto”, “incapaz para imponer la ley”. Y para redondear la imagen de un Estado

vulnerado por el *narco*, afirmó que 90% de la cocaína detectada con destino a Estados Unidos había sido contrabandeada a través del corredor México-Centroamérica; que casi toda la heroína mexicana se hacía para el mercado estadounidense, y que México era “la principal fuente foránea” de marihuana y metanfetaminas de ese mercado. El nexo entre un Estado débil, corrupto, sin ley, socavado por las mafias de la economía criminal y la posibilidad de un gobierno “populista radical” en México encerraba un doble mensaje vinculado con las “amenazas” a los intereses y a la seguridad nacional de Estados Unidos. Era evidente el vacío de poder dejado por la incompetencia del presidente Fox y su equipo de *estrellas*, que había derivado en un Estado semicolonial. Pero también era cierto que en la generación de tal situación había intervenido la diplomacia de fuerza de Washington. En particular, Negroponete.

En un memorando confidencial girado al Departamento de Estado, hecho público en mayo de 1991, Negroponete aseguró que “la diplomacia mexicana ha cambiado dramáticamente, de una nacionalista y tercermundista por otra más pragmática y muy acorde a los intereses de Washington”. Su incidencia en el orden político y de “seguridad nacional” fue clave. Si a la postre el TLC fue el instrumento para la proyección hemisférica del imperio vía el área de Libre Comercio de las Américas, las presiones ejercidas por la unidad militar de comando, control y comunicaciones que operaba en la embajada de Estados Unidos en la época de Negroponete permitió establecer los “candados” policiaco-castrenses que allanaron el camino para “el tercer vínculo” de la relación bilateral (el militar) que una década y media después configuraron una Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte que acentuaba la subordinación de México.

En el plano simbólico, las innegables señales de Negroponete de cara a la futura relación bilateral —ya que la administración Fox iba de salida— no dejaban lugar para el optimismo: su comparecencia se dio flanqueada por el director de la CIA, Porter Goss; el director del FBI, Robert Mueller; el general Michael Hayden, director de la Agencia Nacional de Seguridad; Michael Maples, director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, y Charles Allen, jefe de Inteligencia del Departamento de Seguridad Interna. Dado que México era un peón muy importante en la conformación de la *Fortaleza América*, la presión seguiría por las vías políticas, diplomáticas, económicas y militares. En ese contexto, ante el cercano cambio de mando en México y la eventual emergencia de un gobierno más nacionalista —o menos entreguista que el de Fox—, el doble mensaje de Negroponete tenía como objetivo generar condiciones para seguir perpetuando el círculo perverso de la dependencia.

Tras la aprobación de la Ley Televisa se desató una guerra de encuestas y una campaña de miedo a través de artículos periodísticos y *spots* televisivos, algunos de ellos diseñados por los publicistas estadounidenses Dick Morris y Rob Allyn, que fueron amplificados por los medios electrónicos, en lo que dio en llamarse un “golpe de Estado cibernético”. Con esa estrategia, Acción Nacional logró construir la imagen de que López Obrador encarnaba “un peligro para México”.

El 9 de abril de 2006, en su editorial, con el título “Las ‘manos limpias’ impulsan la guerra sucia”, el periódico *La Jornada* aludió así a un *spot* televisivo del PAN y de su candidato, Felipe Calderón, en el que, utilizando imágenes de Ponce y Bejarano, atacaban a López Obrador y a la reconocida escritora Elena Poniatowska. El anuncio se iniciaba con un letrero de película de cine mudo y una voz en *off* que decía: “Ahora resulta que los segundos pisos del Periférico fueron hechos con...”, y entraba la imagen de la escritora Poniatowska afirmando: “Con ahorro y buen gobierno”. Luego, la voz en *off* agregaba, engolada: “¿Buen gobierno?”

Entonces la pantalla se dividía y se veían los conocidos videos de Ponce y Bejarano incurriendo en actos de corrupción. Luego aparecía a cuadro la imagen de un López Obrador con mala facha y la voz en *off* agregaba: “López Obrador permitió esto. Que no te engañen. López Obrador es un peligro para México”. La última frase estaba apoyada por un letrero diseñado con intención alarmista.

El *spot* estaba firmado por el PAN, aunque curiosamente sin su logotipo. Como consignaba el editorial, a pesar de que la ley electoral prohibía que en los procesos comiciales se hicieran campañas de calumnia y difamación, hasta ese momento el IFE no se había pronunciado sobre el particular, mientras subía la visceralidad de los anuncios. Según *La Jornada*, ese *spot* no era parte de una campaña de descrédito: “Es terrorismo verbal que convierte al adversario en enemigo y busca exterminarlo porque un ‘peligro para México’ no se disipa con votos”. El periódico preguntó si los millones de personas que votarían por AMLO “¿son también un peligro para México porque lo harán conscientemente o porque son idiotas manipulados?”

Ese mismo día, el diario que dirige Carmen Lira reproducía unas declaraciones de López Obrador en Pátzcuaro, Michoacán donde denunciaba que Banamex, el magnate Roberto Hernández y otros banqueros estaban financiando la campaña de Felipe Calderón y la *guerra sucia* mediática.<sup>19</sup> “Tengo prueba de ello [...] Nos quieren ganar con mucho dinero y con la televisión”, afirmó López Obrador. Dijo que estaban “dale y dale en todas las estaciones de radio y en las televisoras” con anuncios en los que se le vinculaba con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Y agregó: “Son calumnias que no se pueden probar, pero que a base de repetirlas pretenden, como en las teorías nazis, que se crean como verdad”.<sup>20</sup>

El *spot* panista que involucraba a Elena Poniatowska fue considerado una “atrocidad” por algunos intelectuales y artistas. Según Fernando del Paso, era “la

maniobra política más sucia y repugnante en muchos años”; otra “barbaridad” del PAN, en el marco de una campaña “amarillista” que buscaba cultivar el miedo o el temor de amplios sectores de la ciudadanía.<sup>21</sup> La actriz Jesusa Rodríguez dijo: “Sabíamos que los panistas eran ignorantes, pero no tanto”, y atribuyó el *spot* a “alguien que no conoce bien nuestro país, algún asesor extranjero que no sabe que Elena Poniatowska es una de las fuerzas morales y una de las voces con mayor credibilidad en México”.<sup>22</sup> Carlos Montemayor consideró que el *spot* del PAN era una muestra de “la peligrosidad latente y futura, en esta *guerra sucia* entre partidos políticos que cada vez se parecen más entre sí”.<sup>23</sup> A su vez, Carlos Monsiváis opinó que era el turno del IFE; que la frase “AMLO un peligro para México” traspasaba todo límite polémico y situaba al adversario como un enemigo a “destruir” e incluso “al linchamiento sin más”.<sup>24</sup> Según él, el IFE debía intervenir y exigir, de acuerdo con la ley, un nivel de dignidad en las campañas. También externó que era un asunto de los ciudadanos oponerse a “los proyectitos de guerra civil”.

Mientras el coordinador de campaña de Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, sostenía que se mantendría la misma línea de ataque a López Obrador y anunciaba que habría más *spots* con propaganda negativa en los próximos días, el candidato del PAN insistía en que las encuestas marcaban un empate técnico y que él iba a ganar los comicios. La campaña en lógica de “guerra” había sido defendida por el propio Calderón en marzo anterior, durante una arenga a diputados y senadores de su partido. Les había dicho: “Esto es una guerra, señores”. Y, como tal, quería un “ejército” que hiciera campaña por él. Por eso, dijo, “les ordeno” ir a la calle, a la “trinchera”, para enfrentar una lucha “cuerpo a cuerpo”, con “disciplina” y “mentalidad ganadora” para decidir el futuro de México.<sup>25</sup>

Sin embargo, avanzado abril, no todo era disciplina en el “ejército” de Calderón. El día 18 el candidato panista había salido a desmentir al presidente de su partido, Manuel Espino, al decir que no creía que el millonario Carlos Slim apoyara la campaña de López Obrador.<sup>26</sup> La víspera, Espino había declarado a *La Jornada* que era pura “faramalla, fantochería”, la afirmación de que el PRD y AMLO representaban a los pobres. A su juicio, un hecho lo desmentía: “Slim está vinculado a la campaña del tabasqueño”.<sup>27</sup> Pero, según Calderón, las posiciones “maniqueas respecto de quién es el abogado de los pobres o el abogado de los ricos” no contribuían a su campaña.<sup>28</sup>

El intercambio de declaraciones revelaba un grave conflicto en el seno de Acción Nacional. En entrevista con *La Jornada*, Espino describió a Calderón como “el chaparrito peloncito de los lentes” aseveración que denotaba una evidente falta de respeto del presidente del partido hacia su candidato.<sup>29</sup> Pero más allá de esos pleitos internos, existía una estrategia electoral del PAN basada en la crispación el ataque verbal y el enfrentamiento visceral, ambiente propicio para que Espino, un rijoso ligado al grupo derechista El Yunque, pudiera desarrollar su arrogancia y su



intransigencia, como había quedado demostrado en el caso de la escritora Poniatowska, de quien el dirigente del PAN había dicho que “esa pobre señora” le daba “pena” por apoyar a AMLO. Como señaló entonces José Emilio Pacheco de Espino, “sus propias palabras son su más cruel autorretrato y la crítica más devastadora de él mismo contra sí mismo”.<sup>30</sup>

Por esos días se supo que un asesor extranjero, Dick Morris, estaba detrás de la campaña *negra* de Calderón. En su columna semanal en el diario conservador y amarillista *The New York Post*, Morris, uno de los asesores políticos más controvertidos de Estados Unidos vinculó al “ultraizquierdista” López Obrador con Fidel Castro y con Hugo Chávez.<sup>31</sup> Dijo que AMLO era parte de un “gran plan” para hacer “arrodillar” a Estados Unidos ante la izquierda de América Latina; pero la única prueba que ofreció fueron “rumores” de que la campaña del perredista recibía financiamiento del mandatario venezolano.

La columna llevaba por título “Amenaza en México”, y en ella escribió que en marzo anterior el representante federal republicano Jim Kolbe, de Arizona, había dicho a varios legisladores mexicanos que tenía informes de inteligencia que revelaban apoyo de Chávez al PRD. Y como Chávez era aliado de Castro, López Obrador “podría ser la pieza final en “su gran plan para arrodillar a Estados Unidos ante la resurgente izquierda latinoamericana”.<sup>32</sup> Morris alertó, también, que como Venezuela y México exportaban cuatro millones de barriles de petróleo diarios a Estados Unidos, con ambos países en manos de izquierdistas “la oportunidad de tener a Washington de rehén será extraordinaria”.

El corresponsal de *La Jornada* en Nueva York, David Brooks reportó en la nota que Morris, también comentarista del *Fox News Channel* del conservador Rupert Murdoch, confesó que había trabajado en la campaña de Vicente Fox y del PAN. Asimismo, citó un reporte del *Wall Street Journal*, según el cual la nueva iniciativa publicitaria de Calderón giraba en torno de una “estrategia inusual”: hacer campaña contra Hugo Chávez, misma que, al parecer, estaba funcionando, pues el impacto de los *spots* de ataque “estilo estadounidense” se apreciaba en encuestas recientes. Según el *Journal*, eso alimentaba la especulación de que la campaña de Calderón estaba recibiendo asesoramiento de Dick Morris, el mismo que fue el estratega principal de Víktor Yushchenko, en Ucrania.<sup>33</sup> Cabe consignar que en 2004 tuvo lugar en Ucrania una *Revolución naranja* basada en las técnicas del *golpe suave* de la Einstein Institution, con financiamiento de la USAID, la NED, Freedom House, el IRI y el Open Society Institute de George Soros.<sup>34</sup>

Tras sendos desmentidos de los gobiernos de Cuba y Venezuela, acerca de estar participando en el “complot” montado por Dick Morris,<sup>35</sup> el vocero de la Presidencia, Rubén Aguilar, declaró que la administración federal no contaba con información alguna sobre una posible conexión entre el gobierno venezolano y la campaña de

López Obrador.<sup>36</sup> En mayo trascendería que otro publicista extranjero, Antonio Solá, un español ligado al ex jefe de gobierno José María Aznar, era el encargado de la campaña “del miedo y el terror” contra el candidato de la coalición Por el Bien de Todos.<sup>37</sup> Según el diputado perredista Inti Muñoz, Solá aparecía en los actos de campaña con Calderón y participaba directamente en la campaña mediática “fundada en trampas, mentiras y calumnias” contra los opositores. A su vez, el diputado de Convergencia, Jesús González Schmal, aseguró que Solá estaba vinculado a José María Aznar, quien perdió las elecciones en España por “mentirle a su pueblo”.<sup>38</sup>

#### EL PAN Y SU ANTIINTELECTUALISMO ORGÁNICO

La machacona utilización del *marketing* político y la *propaganda negra* en la multimillonaria campaña del PAN dio paso a una aguda polémica que derivó en denuncias ante el Instituto Federal Electoral máxima instancia reguladora de los comicios en México, encabezado por el consejero presidente Luis Carlos Ugalde. Para Jesús Cantú ex consejero del IFE, los dos *spots* más polémicos —uno que utilizaba una imagen de Hugo Chávez y otro con la voz en *off* de la escritora Elena Poniatowska— eran difamatorios, contrarios a la legalidad y a la constitucionalidad, y calificaban como “propaganda negra” y “guerra sucia”.<sup>39</sup> El objetivo de ambos, dijo Cantú, sería “promover el voto del miedo” entre la ciudadanía.

Pero según Carlos Monsiváis la “campaña del miedo” era en realidad una “estrategia de odio”.<sup>40</sup> “El antiintellectualismo orgánico” de Acción Nacional y su candidato Calderón —quien había reconocido que su partido tenía “muchísimo respeto” por el dictador Francisco Franco— “es una reacción furibunda contra la politización de los *nacos* y el carisma de su líder”, dijo Monsiváis, para quien “el odio magnifica la idea de sí mismo que tiene el odiador”. Más que el miedo, agregó, lo que se quería manejar en la coyuntura era “el coraje de la cacería”. Se trataba de manipular el odio con el “ideario testiculario: yo soy gallo, le dice Calderón a López Obrador, y te volveré gallina”.

La génesis del polémico *spot* del PAN que incluía una imagen de Hugo Chávez estuvo vinculada con sendas entregas de lo que podría definirse como periodismo de “infiltración” o “encubierto”.<sup>41</sup> Una suerte de periodismo “de los servicios” (de inteligencia) que retrotraía a cierta prensa a los años de la matanza de Tlatelolco y a la *guerra sucia*, cuando la propaganda del régimen autoritario priísta estigmatizaba y criminalizaba de manera sistemática a la disidencia ante una audiencia pasiva y temerosa que prefería mirar para otro lado. Se trataba, ahora, de una variable mexicana de los periodistas “insertados” (*embedded*) entre la tropa de ocupación de Estados Unidos durante la invasión a Irak, protagonistas del incesto de la

desinformación. Un periodismo mercenario que reapareció en México de la mano de los *videoescándalos* y fue reactivado en 2006 en el inicio de las campañas por la Presidencia de la República.

En marzo de 2006, en sendos reportajes de primera plana, el periódico salinista *La Crónica* reprodujo dos entregas de su “reportero encubierto” (*sic*) Francisco Reséndiz, cuyo titulares eran de suyo elocuentes: “Células chavistas apoyan aquí eje Caracas-La Habana-México” y “Operan grupos bolivarianos 10 centros logísticos en el Distrito Federal”.<sup>42</sup> En interiores, la cabeza de esa última entrega señalaba: “Círculos bolivarianos reciben dinero del gobierno chavista”. Aunque los titulares no lo consignaban, el “interés periodístico” de *La Crónica* era subrayar el supuesto apoyo político, ideológico y financiero que estaría recibiendo la candidatura de López Obrador de los gobiernos de Hugo Chávez y Fidel Castro, y dejar establecida la presunta vinculación entre los “círculos bolivarianos”, “grupos subversivos” mexicanos y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el de López Obrador.

Junto con el aporte “testimonial” del narcisista Reséndiz (cito: “El reportero de *La Crónica* se *infiltró* durante tres meses en uno de los círculos bolivarianos que reciben dinero, asesoría logística e instrucción ideológica de activistas capacitados por el gobierno de Venezuela”),<sup>43</sup> ambos trabajos —manufacturados con base en fuentes anónimas e “informes de inteligencia de México y Venezuela”— recogían los prejuicios, el lenguaje ideológico y la estructura maniquea propios de la *guerra fría*. Con base en una misma matriz que combinaba información verídica con elementos de la guerra psicológica (propaganda negra, gris y blanca), juicios de valor, exageraciones y distorsiones de la realidad, rumores y teorías conspirativas, lo que se pretendía era *crear* o *fabricar* un acontecimiento para utilizarlo como núcleo de una operación futura, a la vez que manipular, sembrar confusión, alimentar la paranoia e influir en la opinión pública para construir un consenso que, invariablemente, sirviera a la agenda y a los intereses de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sus agentes en los aparatos de seguridad del Estado mexicano, el gran capital y la derecha vernácula.

Si 40 años antes, en la época de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, en plena *guerra fría*, el “enemigo interno” era la “subversión apátrida” y la “conjura comunista”, en la coyuntura de 2006 —siguiendo la agenda y el guión de la *comunidad de inteligencia* de Washington— las amenazas eran un eventual gobierno “populista radical” encarnado por López Obrador, quien vendría a sumar a México al “eje” La Habana-Caracas; las “células bolivarianas” ligadas con “grupos violentos” locales (EPR, ERPI, etcétera) e internacionales (las FARC-EP colombianas), así como una serie de agrupaciones de “corte radical” y organizaciones “fachada de grupos armados”, entre los que figuraban, todos revueltos y sin especificar matices ni circunstancias, desde el Movimiento Mexicano Juarista Bolivariano hasta la

Promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo, pasando por los presuntos semilleros “subversivos” que, alimentados por “agentes venezolanos” (*sic*), florecían —según las notas— en los cubículos de las facultades de Economía, Filosofía y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Incluso, de manera burda, como si fueran fichas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)<sup>44</sup> o Inteligencia Militar el diario aportaba nombres de los “subversivos” mexicanos y fotos y direcciones de los “centros de reunión bolivarianos”.

La fabricación periodística de *La Crónica* estuvo apoyada en otras noticias *plantadas* por los servicios de inteligencia del régimen, reproducidas con anterioridad en diversos medios nacionales. Una, en particular, con el título “Armas para el EPR” y con la firma de Raymundo Riva Palacio,<sup>44</sup> aludía a una rocambolesca “historia secreta de espías y contrabando de armas” que involucraba a tres países (Venezuela, Cuba y México), a un partido político mexicano (el PRD) y a la guerrilla del EPR, e incluso, eventualmente, al grupo islámico Al Qaeda.

Según Riva Palacio, quien citó como fuente a “los servicios de inteligencia mexicanos”, un lote de fusiles de asalto Ak-47 de manufactura rusa, conocidos coloquialmente como *cuernos de chivo* —“utilizados en México sólo por narcotraficantes”—, había sido “comprado” por el gobierno de Hugo Chávez en el mercado internacional y destinado al Ejército Popular Revolucionario (EPR), “la guerrilla más seria que opera en México”. Pero la historia no terminaba ahí. De acuerdo con el autor, los fondos para la compra de las armas habían salido de las arcas del Gobierno del Distrito Federal, bajo la administración de López Obrador, y llegaron a Caracas vía una operación financiera “triangulada” a través de La Habana. ¡La trama perfecta! Los *malosos* Fidel y Chávez, coludidos con López Obrador y un grupo armado.

La *información* dejaba algunos puntos oscuros y no pocas dudas (no especificaba, por ejemplo, el número de armas ni las fechas exactas de la operación) y consignaba con cierta jiribilla que “tampoco se sabe si en la operación participaron funcionarios cubanos de la embajada en México”, lo cual no era óbice para que Riva Palacio especulara sobre un eventual cambio en la *real politik* del gobierno de Fidel Castro respecto de México: el apoyo a las guerrillas mexicanas algo que nunca había hecho en el pasado.

Con la recuperación de ese antecedente debidamente *plantado*, la fabricación artificial de la información por *La Crónica* tuvo como fin trabajar sobre las emociones de la gente y dejar fijada la idea sobre el nuevo “eje del mal” emergente Chávez-Castro-López Obrador (la misma idea manejada después por Dick Morris y la propaganda negra panista), así como reforzar la caracterización del candidato del

PRD como una figura “violenta”, cuyos partidarios estarían formando “grupos de autodefensa” para “resistir con las armas” en caso de una derrota electoral en julio de 2006. Lo que dio pie a la premisa: “AMLO, un peligro para México”.

Para concluir sobre el punto, conviene repasar lo siguiente: la acción de propaganda negra revestida de información fue *plantada* en el diario salinista *La Crónica*, dirigido entonces por Pablo Hiriart y en el que escribían otros ex miembros del entorno de Carlos Salinas de Gortari, como José Carreño Carlón y Otto Granados (ambos ex voceros de su administración), Claudia Ruiz Massieu (de la familia política del ex mandatario) y Francisco Rojas. Con la “información” *sembrada* en *La Crónica* sobre los presuntos nexos entre las “células bolivarianas”, las FARC colombianas, Cuba y AMLO, el Partido Acción Nacional promovió una denuncia ante la Procuraduría General de la República, y luego la utilizó en un *spot* de campaña para fabricar la figura de un López Obrador violento e integrante del “eje del mal”, imagen dirigida a provocar miedo en la población.

## El caso Atenco: ¿laboratorio para un Estado contrainsurgente?

Los días 3 y 4 de mayo de 2006 se produjeron violentos enfrentamientos entre diversos cuerpos de las fuerzas de seguridad y ejidatarios de San Salvador Atenco, un poblado del Estado de México cercano a la capital del país. La refriega dejó como saldo inicial un muerto, decenas de heridos de ambos lados, una veintena de mujeres violadas por elementos de la fuerza pública y 217 detenidos, entre ellos nueve menores de edad.

Los hechos de violencia se desencadenaron cuando ocho floricultores temporaleros, que habitualmente comerciaban sus productos en la vía pública, a un costado del mercado Belisario Domínguez de Texcoco, cabecera municipal del Estado de México, se negaron a ser reubicados y fueron desalojados con excesivo uso de la fuerza pública por elementos de las policías municipal y estatal. Los floristas y unos 40 campesinos de Atenco que les daban apoyo solidario, entre ellos el dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle, se atrincheraron en una casa y fueron sitiados por la policía.

Como consecuencia de la acción represiva se inició una escalada de violencia. Ante el sitio policial a sus compañeros en Texcoco, ejidatarios de Atenco bloquearon la carretera federal Lechería-Texcoco y en cinco ocasiones lograron rechazar a la Fuerza de Acción y Reacción del Estado de México y a elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), que intentaron romper el retén. La muerte del menor Francisco Javier Cortés desató la ira de los atenquenses, que obligaron la retirada desordenada de las fuerzas de seguridad. Dos agentes rezagados fueron brutalmente golpeados por ejidatarios enfurecidos. Mientras tanto, en Texcoco, tras nueve horas de asedio, la policía estatal tomó por asalto la casa donde se habían parapetado los floricultores y sus aliados. Con gases lacrimógenos, golpes de macana y patadas, las fuerzas del orden redujeron a 28 personas, entre ellas a Ignacio del Valle.<sup>1</sup>

Ubicada a 16 kilómetros del centro de la ciudad de México, Atenco es una

localidad de 33 435 habitantes, en su mayoría campesinos ejidatarios que se dedican a la agricultura de subsistencia y al comercio formal e informal. El pueblo, que tiene una gran tradición organizativa y de lucha, cobró gran visibilidad pública en 2001, luego de que el gobierno de Vicente Fox decretara la expropiación de alrededor de 5 000 hectáreas de tierras agrícolas para construir una terminal aérea en la zona de Texcoco, alternativa al Aeropuerto Benito Juárez de la ciudad de México. La acción gubernamental se llevó a cabo sin consulta previa con los ejidatarios, a quienes las autoridades ofrecieron por sus tierras la cantidad de... ¡siete pesos por metro cuadrado!<sup>2</sup> Luego se supo que lo que fue considerado “el megaproyecto” del sexenio foxista fue negociado con grandes empresas constructoras e inmobiliarias entre ellas ICA, Gutsa y el Grupo Martínez Hermanos.

Ante el decreto expropiatorio, en diciembre de 2001 un grupo de 500 campesinos formaron el FPDT e iniciaron un movimiento de resistencia y en defensa de sus tierras. Su herramienta de trabajo, el machete, pasó a ser el símbolo del movimiento. Los gobiernos estatal y federal respondieron criminalizando y estigmatizando la lucha de los atenuenses. Para ello contaron con la colaboración de las principales cadenas privadas de radio y televisión y de algunos medios impresos. Sin embargo, después de nueve meses de conflicto el gobierno federal se sentó en una mesa de diálogo y negociación con los ejidatarios, y el 1º de agosto de 2002 las autoridades anunciaron la cancelación del proyecto del aeropuerto en Texcoco y la abrogación del decreto expropiatorio, que se oficializó con su publicación en el *diario Oficial de la Federación* el 5 de agosto siguiente.

El 10 de septiembre de 2002 el frente intentó transformar San Salvador Atenco en un municipio autónomo y se instaló un concejo popular en sustitución del ayuntamiento local priísta. Pero el intento no prosperó. Con posterioridad, en el marco de una serie de negociaciones con representantes de los gobiernos federal y estatal los campesinos de Atenco renunciaron a constituirse en municipio autónomo a cambio de que las instancias de procuración de justicia, estatal y federal, enviaran a reserva 51 denuncias penales que se habían levantado en contra de integrantes del FPDT.

A partir de ese momento el FPDT adquirió carácter de actor político regional y se solidarizó con distintos movimientos sociales en México y en el exterior. También se adhirió a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los días 24 y 25 de abril de 2006 recibió al subcomandante Marcos en San Salvador Atenco, en el marco de *La Otra Campaña*. Ocho días después se desencadenaron los hechos de violencia en Texcoco y Atenco. Con una particularidad: por la parte oficial intervinieron la autoridad municipal, en manos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el gobierno del Estado de México cuyo titular Enrique Peña Nieto pertenecía al Partido Revolucionario

Institucional (PRI), y el gobierno federal, encabezado por el presidente Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (pan).

Según consignó en un informe de observación el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C.,<sup>3</sup> en la *toma* de Atenco, el 4 de mayo, participaron 4 000 elementos de las policías federal, estatal y municipal —entre ellos 1 500 elementos de la PFP,<sup>4</sup> incluido el Grupo de Operaciones Especiales de esa corporación, y 1 500 uniformados pertenecientes a la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) mexiquense—<sup>5</sup> para reducir a 300 civiles; una relación de 10 a 1. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, escopetas de sal, macanas, escudos, armas de fuego y un helicóptero. Los civiles usaron machetes, petardos, palos, piedras, bombas molotov y cañones de pólvora.

De acuerdo con el Centro Pro, la acción policial exhibió un uso excesivo de la fuerza pública, “no ceñido a los principios de *proporcionalidad, absoluta necesidad y razonabilidad*”, lo que se tradujo en la violación masiva de derechos humanos como consecuencia de allanamientos de morada; detenciones arbitrarias (no hubo orden de aprehensión ni flagrancia); la privación arbitraria de la vida de Francisco Javier Cortés, un joven de 14 años que murió de un impacto de arma de fuego calibre.38 especial, disparada por un agente de la policía estatal;<sup>6</sup> un saldo de varios heridos de gravedad entre ellos el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alexis Benhumea, quien fue alcanzado por un proyectil de gas lacrimógeno, disparado por un policía, que se le incrustó en la cabeza y le causó doble fractura de cráneo, por lo cual falleció el 7 de junio siguiente,<sup>7</sup> y Arnulfo Pacheco, un parapléjico de 55 años quien, pese a su discapacidad, fue golpeado “brutalmente” por elementos de la policía;<sup>8</sup> agresiones y violaciones sexuales a 23 de las 44 mujeres detenidas, así como violaciones a los derechos procesales de los prisioneros. Además, las autoridades procedieron a la expulsión arbitraria de cinco personas de nacionalidad extranjera. Inicialmente fueron consignadas 189 personas por delincuencia organizada y algunos detenidos enfrentaron cargos de secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación por el bloqueo de la carretera federal Lechería-Texcoco, delitos considerados graves, por lo que fueron reclusos en el penal de máxima seguridad de La Palma.

#### ATENCO Y EL TERROR BENIGNO

La violencia en México es fascinante. Todos la condenan y, sin embargo, aparece en todas partes. Nos atrae y, a la vez, nos horroriza. La violencia gira en redondo: un día explota en Ciudad Juárez, al día siguiente en Acapulco, Nuevo Laredo o Santa Fe. Ha pasado por Ciudad Lázaro Cárdenas y San Salvador Atenco. Pasó por aquí pasará por



allá. Es el juego de las prendas. Un círculo perverso de violencia y contraviolencia, de terror y contraterror, envuelve a todo el país. Violencia oficial. Violencia del crimen organizado. Violencia de los de abajo en respuesta y/o en venganza de la violencia estatal. Con un agregado: dado que en julio de 2006 habría elecciones en México, el círculo de violencia deshumanizada se alimentó y retroalimentó con campañas de odio y *guerras sucias* mediáticas, dirigidas a preparar el voto del miedo, como en 1994 y 2000.

Durante los sucesos de Atenco y los días subsiguientes, como antes en el caso de los mineros de Sicartsa, la mayoría de los medios informativos, y no pocos conductores, columnistas y editorialistas “estrellas”, se unió en una campaña de linchamiento orientada a forjar ante la opinión pública una imagen de los atenguenses como intrínsecamente violentos y levantiscos. Desde las siete de la mañana del 3 de mayo, los noticieros del duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca), medrando con el escándalo, se dedicaron a tergiversar los datos y a calumniar a las víctimas de la violencia oficial, tratando de hacer pasar por información objetiva lo que en realidad era propaganda interesada. Incluso, los “comunicadores” de la televisión y la radio llegaron a sugerir que el conflicto podía estar vinculado a la presencia del subcomandante Marcos en la capital del país, lo que alimentaba la hipótesis de la “subversión” deslizada en los medios por altos mandos de los organismos de seguridad del Estado.

Imbuidos de un “deber patriótico” de claro sesgo reaccionario los medios y sus empleados utilizaron como tantas veces antes un doble estándar o rasero que confunde a la audiencia, al ciudadano común, que no puede distinguir esas duplicidades y que a fuerza de escuchar la “verdad oficial” la hace parte de su “opinión personal”.

Nunca está de más repetir que la propaganda es el principal procedimiento de acción psicológica e incluye la manipulación y el engaño intencional (la mentira deliberada) en el discurso público. La acción propagandística consiste en el empleo deliberadamente planeado y sistemático de temas, principalmente a través de la sugestión compulsiva y de técnicas psicológicas afines, con el objetivo de alterar y controlar opiniones, ideas y valores.

#### MUJERES DE ATENCO: ¿BOTÍN DE GUERRA?

De manera paulatina, la información sobre la represión gubernamental en San Salvador Atenco fue desnudando los aspectos más horribles del protofascismo mexicano. De la mano de una guerra antisubversiva que no se atrevía a decir su nombre, irrumpió en México la tortura sexual; una doble tortura. Los testimonios de

las presas políticas del penal de Santiaguito, en el Estado de México, no dejaron lugar a duda: revelaron que sus captores-violadores tuvieron un mismo patrón de conducta sádica y lasciva. Señalaron que fueron encapuchadas o les cubrieron la cara con su propia ropa; las desnudaron de manera violenta; las sometieron al peor trato verbal y a insultos sexistas (“putas”, “perras”, “hijas de la chingada”, “pendejas”) mientras las golpeaban con saña en todo el cuerpo; tocaron sus genitales y su ano con brutalidad; en muchos casos las penetraron con sus dedos y con diversos objetos, y en alguno con el pene; varias fueron obligadas a hacer sexo oral, en algún caso de manera tumultuaria; durante varias horas fueron sometidas a torturas física, psicológica y moral; las amenazaron de muerte para que no denunciaran las vejaciones; las mantuvieron incomunicadas y en un estado de indefensión física y mental. A todas se les negó asistencia médica y legal de su confianza, lo que aumentó su vulnerabilidad.

En Atenco fue evidente que hubo un cambio en la modalidad represiva del régimen de Vicente Fox y los organismos de seguridad del Estado. Con un antecedente: las técnicas de “interrogatorio” utilizadas contra los *altermundistas* detenidos en el marco de la Cumbre de Guadalajara, en 2004, ya combinaban distintas formas de tortura con la desnudez de la víctima, la humillación, el ataque lascivo.<sup>9</sup> Las mujeres fueron violadas y ultrajadas de manera intencional, como un medio de degradación humana y desmoralización, de aniquilación y desvalorización. En ese sentido, como dijo la dirigente del Grupo Eureka, Rosario Ibarra, fue “una violación de Estado”. Y como apuntó Adolfo Gilly, “se violaron mujeres, seres humanos, no [sólo] derechos humanos”.<sup>10</sup> Pero además es necesario inscribir los hechos como parte de otra cuestión: la de Atenco fue una acción de tipo contrainsurgente. Y en ese marco, la tortura buscaba generar un sentimiento de terror en el resto de la población.

Los mandos del operativo contrainsurgente, vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid,<sup>11</sup> jefe de la ase, y el general de brigada Ardelio Vargas Fosado,<sup>12</sup> jefe del Estado Mayor de la PFP —apoyados en Atenco por el experto en contraterrorismo Genaro García Luna director de la Agencia Federal de Investigaciones—, dijeron a la opinión pública que actuaron en contra de un “grupo violento” constituido por “secuestradores”, “homicidas” y “delincuentes”.<sup>13</sup> En ese contexto hay que analizar los hechos, incluida la tortura con su componente sexual.

Cabe destacar que la tortura es un instrumento político de la dominación violenta ejercida a través del Estado que busca crear un clima de miedo en la población. Es una actividad intencional y premeditada, programada de manera sistemática y científica para la producción de dolores físicos y psíquicos, que, además, constituye un asalto violento a la integridad humana.

Durante una entrevista al vicealmirante Wilfrido Robledo, el director del semanario *Milenio*,<sup>14</sup> Carlos Marín, y el reportero Ciro Gómez Leyva, le preguntaron:

—¿Tus policías violaron a tres mujeres?<sup>15</sup>

“No, no. No, hombre, olvídase. Los policías no son tontos. Es falsa la versión de las violaciones [...] Sus abogados tienen que salir a la ofensiva [...] A veces dicen que hubo tortura. Ahora sacan lo de las violaciones. Es parte de su estrategia [...] No hubo ninguna violación.”<sup>16</sup>

En declaraciones posteriores, el comisionado de la ase afirmó que durante el traslado de prisioneros y prisioneras de Atenco a Santiaguito “no sucedió absolutamente nada” y que ocho policías que fueron investigados por actos de violencia “están limpios”.<sup>17</sup> Cinco días después, Robledo, quien asumió su responsabilidad como jefe del operativo,<sup>18</sup> informó que se había aplicado “la prueba del polígrafo” a 50 policías que participaron en los traslados y que, con base en los exámenes realizados, “no se han encontrado indicios de responsabilidad en actos de abuso sexual o violaciones contra las detenidas”.<sup>19</sup> Las aseveraciones del funcionario fueron refutadas por organizaciones humanitarias, que cuestionaron ese método y adujeron que el jefe de la ase “busca darle valor definitivo al polígrafo y fundamentar una autoexculpación, negándose a la posibilidad de una investigación rigurosa e imparcial”.<sup>20</sup>

Con un negro historial en su haber —a sus antecedentes represivos por la intervención en la UNAM Robledo sumaba, en 2002 una investigación en su contra de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) por la adquisición ilegal de 12 aeronaves y la adjudicación directa de varios contratos cuando se desempeñaba como comisionado de la PFP, y en 1977 el periódico *The New York Times* publicó su nombre en una lista de funcionarios mexicanos “que no deberían ocupar cargos jerárquicos en un régimen nuevo y honesto”—,<sup>21</sup> en la coyuntura de la *toma* de Atenco el comisionado de la ase se autoerigió en paladín del Estado de derecho. Sin embargo, tras asumir que el operativo del 4 de mayo lo había coordinado él,<sup>22</sup> cayó en algunas contradicciones con respecto a la capacitación profesional de sus subordinados. Declaró: “Tampoco tenemos al mejor policía equilibrado psicológicamente.

Ahí tenemos que hacer mucho trabajo, pero en el momento de los trancazos, las cosas también dependen de los perfiles. Tenemos que ir platicando del uso y el abuso de la fuerza del servidor público”.<sup>23</sup>

Un par de días después se divulgó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República sobre los maltratos, vejaciones, violaciones y abusos sexuales que sufrieron 23 de 47 mujeres detenidas, en particular siete de ellas. El

representante legal de las ofendidas, Juan de Dios Hernández Monge, señaló que “al menos 23 tienen el problema de haber sido violadas por penetración de pene con los dedos u otros objetos”.<sup>24</sup>

Añadió que “un hombre fue violado con un tolete”. A su vez en una carta a la opinión pública, las 47 denunciadas acusaron: “Fuimos tocadas, pellizcadas, pateadas, golpeadas con puños, toletes macanas y escudos en senos, nalgas y genitales. Mientras seguían amenazándonos, fuimos mordidas en senos, pezones, orejas, labios y lengua. Penetradas con dedos y objetos, algunas obligadas a hacer sexo oral mientras se burlaban de nuestra condición de mujeres”.<sup>25</sup> Se quejaron, también, de negligencia médica; algunas padecieron infecciones vaginales o en las heridas.

Según un reportaje periodístico, la noche del 3 de mayo el vicealmirante Robledo le planteó una disyuntiva al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto: “Me dejan hacer el operativo o de lo contrario renuncio ahorita”. Después, “cuando el procurador estatal Abel Villicaña dijo que se iba a ver en la necesidad de ‘freír judicialmente a unos cuantos policías’, Wilfredo le advirtió ‘que ni se le ocurriera tocar con el pétalo de un citatorio a cualquiera de sus muchachos, pues habían actuado tal como la situación ameritaba’ ”.<sup>26</sup>

#### LOS DIÁLOGOS DE LA VAGINA

El 11 de mayo siguiente, en la austriaca Viena, tras una semana de silencio sobre los sucesos de Atenco, el presidente Vicente Fox aseguraba que sí había habido “diálogo” de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) con los integrantes del FDPT, “antes durante y después” de los choques sangrientos. El mandatario añadió que el uso de la fuerza policiaca fue para “traer paz” a los habitantes de ese municipio ante una “embestida de violencia”.<sup>27</sup>

Lorena, una estudiante universitaria de 22 años, presa en el penal de Santiaguito tras ser capturada en el *Operativo Rescate* instrumentado por el gobierno federal, rindió su testimonio sobre cómo vivió ese “diálogo”. La mañana del 4 de mayo se escondió en una vivienda. Hasta allí llegaron los uniformados gritando y lanzando gases lacrimógenos. “Empezaron a golpearnos con las macanas en la cabeza. Me empezaron a hacer tocamientos en los senos y en las nalgas. Sentí que una mano tocaba mis genitales e introducía sus dedos en mí.” Dos mujeres policías la filmaron y la interrogaron: “A cada pregunta y respuesta me daban una cachetada”. Después la subieron a un camión con la cara tapada. Le ordenaron acostarse sobre otros cuerpos. “Quedé mero arriba, boca abajo.” Un policía le dijo: “Te vamos a hacer lo mismo que le hicieron a nuestro compañero”. Otro sugirió: “A esta perra hay que hacerle *calzón*”

*chino*”, y le empezó a jalar la pantaleta. “Se dio cuenta de que estaba en mi periodo de menstruación, porque tenía una toalla sanitaria, y le gritó a otros policías: ‘Miren, esta perra está sangrando, vamos a ensuciarla un poquito más’. Sentí cómo introdujo violentamente sus dedos en mi vagina, repetidamente, hasta el cansancio.”<sup>28</sup>

Junto con otros prisioneros fue trasladada a otro camión que la llevó al penal de Santiaguito. En el camino sufrió más golpes y manoseos. Oyó sollozos de otras mujeres y voces de policías que gritaban: “Gime, perra. Gime como una puta”. En el penal no terminó su tormento: “Un policía empieza a patear detrás de mis tobillos a fin de abrimme las piernas, empalma sus genitales en mi trasero. Sentí que ya estaba excitado y me toca de nueva cuenta mis senos”. Otro policía le dijo que la dejara. Entonces “se separó y dijo violentamente: ‘Chingada madre’, y aventó mi cabeza contra la pared”. Después le ordenaron pasar en medio de una fila de policías. “Nos insultaban me golpearon con sus macanas en la cabeza y en las costillas, me pellizcaron los senos y las nalgas. Cuando me revisaron, me dijeron que tenía desgarré vaginal y una infección. De medicamento sólo me dieron un óvulo.”<sup>29</sup>

#### QUE LO PRUEBEN: CARDENAL RIVERA

El domingo 14 de mayo, tras su homilía en la catedral metropolitana, el arzobispo primado de México, cardenal Norberto Rivera, declaró a los medios en torno a las denuncias sobre violación de mujeres en Atenco: “Es un asunto delicado. Primero se tiene que investigar y no basta que sólo digan ‘a mí me violaron’, para que ya se dé como un hecho. Se tiene que probar. No es que mientan o no mientan, pero creo que nadie de ustedes tiene pruebas”.<sup>30</sup>

En una carta manuscrita que entregó a su abogado defensor, relata Gabriela: “Cuando me subieron al camión me tomaron fotos y de inmediato me manosearon los pechos, me tomaron de la cara y me metían los dedos en la boca; querían que los chupara. Me obligaron a hacerle sexo oral a tres policías que me mancharon de semen el suéter; otros se masturbaban. Al final me amenazaron con que si yo decía algo me iban a romper la puta madre”.<sup>31</sup> A su vez, una de las dos ciudadanas españolas deportadas, Cristina Valls, declaró que ella no fue “penetrada”, pero que “me tocaron la vagina, los senos y me introdujeron sus dedos varios policías”.<sup>32</sup> Dijo que no pudo ver a sus agresores porque “nos taparon la cara con capucha y nos ataron las manos”.<sup>33</sup> El uso de la capucha como norma también fue denunciado por su compatriota María Sastres: “Nos hicieron de todo, y como estábamos encapuchadas no veíamos quiénes eran [...] No quiero entrar en muchos detalles sobre las agresiones sexuales, pero nos quitaron la ropa, nos la rompieron, nos pasaban las manos muchos policías y prefiero ya no decir más cosas [...] Llegué [a Santiaguito]

con los pantalones rotos, sin sujetador, con la camiseta desgarrada y con golpes en todo el cuerpo”.<sup>34</sup>

La fiscal especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra las Mujeres, Alicia Elena Pérez Duarte, de la Procuraduría General de la República, reconoció que cuando trató de ubicar a las detenidas, los representantes del gobierno del Estado de México negaron que hubiera mujeres encarceladas, lo que retrasó la actuación de la fiscalía.<sup>35</sup> Ese ocultamiento permite conjeturar acerca de la existencia de una red de complicidades que hicieron posible la estrategia policiaca de terror y hostigamiento sexual, y la impunidad posterior. Una red de complicidades que involucró a cuadros superiores, medios y bajos de los organismos de seguridad del Estado que participaron en los hechos (PEP y ase, fundamentalmente), a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, al Poder Judicial de la Federación y al Instituto Nacional de Migración.<sup>36</sup>

#### SOBRE ABUSOS DESHONESTOS Y OTROS DESLICES

Al exponer la posición del gobierno foxista sobre las agresiones físicas y sexuales contra mujeres, durante y después del operativo policial en Atenco, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública, Miguel Ángel Yunes, negó en la Cámara de Diputados que hubiera habido “violaciones tumultuarias”. Dijo: “Lo que hay, son declaraciones de algunas personas que han hablado desde el extranjero, y que se refieren, no a la violación sino a abusos deshonestos, que es otra figura, penada también por el Código Penal”. Según Yunes —quien contaba con antecedentes represivos en Veracruz y como jefe de reclusorios del gobierno federal, y presuntamente está involucrado en la red de agresiones contra menores que encabezaba el pederasta Jean Sucar Kuri—, la actuación de las policías en el caso Atenco se sustentó en la ley. Aseguró que “actuaron de acuerdo con la norma”. Y agregó: “Es increíble que se hayan dado violaciones tumultuarias [...] no empecemos a caer en la trampa de las denuncias anónimas”.<sup>37</sup>

Dos días antes de las declaraciones de Yunes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya había anunciado que tenía 150 quejas de habitantes de San Salvador Atenco, entre ellas 16 por abuso sexual y siete por violaciones contra mujeres de 20 a 50 años de edad. De acuerdo con la recopilación de testimonios la CNDH denunció: “Las tenían ya hincadas, les ordenaban subirse la ropa de la cintura para arriba, y en los camiones en los que eran trasladadas al penal de Santiaguito los policías les metían mano, las toqueteaban, hurgaban en su sexo, en su ano, y a algunas les introducían objetos. Otras eran obligadas a realizar sexo oral”. Al presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, le impresionó el caso de un ama de casa,

de 50 años, “que fue obligada a hacer sexo oral a tres policías para que la dejaran libre”. Había salido a comprar un regalo a su hijo cuando la detuvieron. “Si quieres quedar libre tienes que darnos una mamada a cada uno.” Por miedo a los golpes, accedió y la dejaron libre.<sup>38</sup>

Un testimonio similar, de una joven de 18 años, señala: “Me empezaron a pegar. [Un policía] me metía los dedos en la boca y en la vagina; me obligó a hacerle sexo oral; me echó su espermatozoides en el suéter blanco y vino otro policía y lo mismo [...] Vino un tercero y me hizo lo mismo y me dijo que si quería que me ayudara tenía que ser su puta por un año e irme a vivir con él [...] Llegó un cuarto policía, me manoseó en la vagina y en los pechos y quería que le hiciera sexo oral, y llegó otro y le dijo: ‘Ya no, güey, porque ya llegamos’ ”.<sup>39</sup>

#### OPERATIVO CONTRAINSURGENTE DEL ESTADO

¿Qué pasó en San Salvador Atenco el 4 de mayo? Existen muchos indicios que permiten manejar la hipótesis de que el gobierno federal ordenó que se llevara a cabo un operativo de guerra psicológica en ese poblado del Estado de México. La llamada *Operación Rescate* fue diseñada y planificada con antelación por mandos expertos en lucha antsubversiva pertenecientes a la PFP, con apoyo de elementos del Cisen y de la ase. Dada la envergadura del operativo y la coyuntura política del país —la fase final de una disputa electoral teñida por una “guerra de spots” y ataques mediáticos—, la acción paramilitar con cobertura policial tuvo que ser consultada con el gabinete de Seguridad Nacional del presidente Vicente Fox, y aprobada por éste.

Se trató, en rigor, de un operativo militar quirúrgico —que a la postre resultó parcialmente fallido—,<sup>40</sup> precedido por una breve pero eficaz campaña de saturación propagandística, cuyos objetivos principales fueron recuperar el “control” de un poblado en manos de un grupo de disidentes políticos y sociales, y descabezar al FPDT cuyos integrantes fueron señalados por los mandos de la acción militar como “delincuentes” y “secuestradores”, y asimilados al “crimen organizado”.

La incursión en Atenco el día 4, mediante una acción envolvente ejecutada de manera breve y con violencia desproporcionada por fuerzas especiales de la PFP, que fueron respaldadas por elementos de élite de la policía estatal, se inscribe en lo que en la jerga castrense se conoce como “control de población”. Ese tipo de operativo que se basa en la “doctrina Lacheroy” —denominada así por el nombre del coronel Charles Lacheroy, quien la aplicó en la batalla de Argel tras la derrota francesa en Dien Bien Phu—, forma parte de la guerra psicológica antsubversiva, una forma de guerra irregular (no convencional) que combina labores de inteligencia, acción cívica propaganda y control de masas sobre un territorio específico, con la tortura y la

desaparición forzosa de las víctimas.

Los hechos del 4 de mayo fueron precedidos por la cruenta refriega del día 3 entre campesinos amotinados y elementos de las fuerzas de seguridad. En apariencia, el enfrentamiento violento derivó de un incidente “menor”: el desalojo de ocho floristas en un recinto municipal de Texcoco. Pero una recapitulación sobre el desarrollo de los acontecimientos en la “batalla de Atenco” permite conjeturar que el motín de los atenguenses pudo haber sido “inducido”, según recomiendan los manuales sobre “operaciones especiales” (o “psicológicas”) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Si se analizan paso a paso los acontecimientos del día 3, veremos que un suceso “menor”, en un mercado de Texcoco, que debía arreglarse por la vía del diálogo y la negociación, fue seguido por un desmesurado desplazamiento de la fuerza pública de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) a San Salvador Atenco para “reabrir” el tránsito en la vía Lechería- Texcoco, que había sido bloqueada por integrantes del FPDT.

La acción policial desató la furia de los atenguenses, que repelieron a los uniformados con palos, piedras, bombas molotov y machetes. El “escenario” ya estaba cubierto por los enviados de las principales cadenas de radio y televisión, que transmitieron los hechos en “vivo” y “en directo”. Junto con la retirada desordenada de federales preventivos y policías estatales, las imágenes y los comentarios de los locutores de radio y televisión se centraron en la brutal golpiza a que fue sometido un policía inerte, tirado en el piso, por un pequeño grupo de ejidatarios. Con el transcurso de las horas, inclusive en el contexto de la represalia paramilitar de las fuerzas del orden, el día 4 la imagen del “policía tirado, semimuerto [que recibe] la criminal patada en los güevos” —según historió el periodista *Ciro Gómez Leyva*, en lo que también puso énfasis la colega *Carmen Aristegui*, quien prefirió utilizar la palabra *testículos*— fue un elemento clave para “fijar” en la opinión pública la idea de que los atenguenses eran “un pequeño grupo violento”, “subversivo” integrado por seres “irracionales” y “bárbaros” sobre los que debía recaer “todo el peso de la ley”.

Otro elemento que gravitó durante los acontecimientos y ayudó a aceitar la visión “confabulatoria” de la realidad, fue el uso del rumor, elemento propio de la propaganda negra, tan afín a las operaciones encubiertas. Según reza un manual de la Sedena, “rumor [es un] informe cuya autenticidad es dudosa y cuyo origen no se puede verificar”. Y agrega: “Los rumores causan generalmente un histerismo y un pánico desmoralizante”. Así, el rumor sobre “uno” o “dos” policías muertos en Atenco, repetido como “noticia” (sin verificar) a través de los medios masivos (el día 3), ayudó a generar un clima de histeria y pánico en la audiencia, y por la vía de la manipulación de las emociones (es decir, de la explotación del odio y del miedo) preparó a la opinión pública para la represión brutal del día siguiente. Otro hecho



difundido como noticia por los “comunicadores” fue la muerte del joven Francisco Javier Cortés, quien falleció cuando “un petardo le estalló en sus manos” en el momento en que “intentaba arrojárselo a los policías”; después una versión periodística señaló que fue víctima de “un cohete arrojado por uno de los revoltosos, que le impactó en el pecho”; luego, cuando se verificó que había sido alcanzado por una bala, se adujo que había caído víctima del “fuego cruzado”.<sup>41</sup>

Según confirmó uno de los mandos operativos de la acción contrainsurgente, el vicealmirante Robledo, uno de los objetivos claves fue “recuperar el control del pueblo”, que estaba en manos, dijo, de un grupo de “secuestradores” y “homicidas”, a los que vinculó con la “delincuencia organizada”. La hipótesis de la “subversión”, amplificada hasta la saciedad durante varios días por los medios de difusión masiva, tuvo como objetivo encuadrar a las víctimas de la represión en los lineamientos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que a la letra dice: “Se considera que se cometió el delito de delincuencia organizada, cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada delitos como terrorismo, falsificación o alteración de moneda acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos”.

Pero más allá del uso faccioso y maniqueo de esa ley, como nuevo factor represivo del Estado mexicano para resolver los conflictos sociales por la vía de criminalizarlos, el operativo en Atenco fue, además, una acción de escarmiento orientada a generar terror y miedo paralizante en la población “blanco” de la acción represiva gubernamental. Por esa vía, se pretendía inhibir o disuadir la lucha de los integrantes del FPDT y de grupos similares en el resto del país. De allí que se hubiera reprimido con saña a víctimas inermes y que se echara mano de la tortura y la agresión física y sexual de mujeres y hombres, ya reducidos y hechos prisioneros.

#### ATENCO: BURLA PERVERSA

El 15 de junio de 2006, durante una gira de trabajo por Nueva York para promover inversiones en el Estado de México, el gobernador Enrique Peña Nieto asumió que él había ordenado “restablecer el orden” en Atenco y aseguró que se investigarían a fondo los hechos con “estricto apego a la ley”. Pero alertó sobre la posible “fabricación” de acusaciones, en tácita alusión a las denuncias por violación formulada ante la justicia por 23 mujeres detenidas.<sup>42</sup>

Según Peña Nieto, acusar a elementos policiales de haber violado prisioneras era una “táctica” de grupos radicales, con un objetivo definido: “la fabricación de culpables”. Dijo: “Es conocido que [en el caso de las mujeres] los manuales de los

grupos radicales dicen que hay que declararse violadas”.<sup>43</sup> El gobernador mexiquense siguió el mismo libreto utilizado por su subordinado, el comisionado Wilfrido Robledo, quien, como ya vimos, argumentó que las denuncias de violación formaban parte de una “estrategia” de la defensa y que otras veces se dice que hubo “torturas”.<sup>44</sup> Peña y Robledo no eran estúpidos. Admitir que “sus muchachos” habían violado y torturado mujeres en el marco del operativo represivo era ponerse una soga al cuello. Por eso, ambos usaron la ley como impostura. Buscaron revestir sus actos de barbarie con dispositivos seudolegales. No es novedoso que los regímenes de fuerza pongan tanto acento en la legalidad: el viejo régimen de partido de Estado en México y las dictaduras de Centro y Sudamérica también disfrazaban su brutalidad con una mascarada de ley. Hay una sagacidad perversa en la lógica del orden instituido que utiliza los efectos psicológicos y sociales de la impostura. La eficacia de esa impostura permitía encubrir la represión de Atenco con un manto de seudolegalidad. Fachada jurídica que no sería necesaria si no buscara otra eficacia, más allá de la que puede lograr la violencia brutal y desnuda. El pasaje de la brutalidad a la legalidad buscaba la apropiación de instancias interiores de control y vigilancia.

Hay que desterrar la idea común de que la tortura es expresión de un arcaísmo bárbaro. Al contrario, es una práctica rutinaria del sistema; quizá una de las condiciones de su funcionamiento. En ese contexto, la tortura sexual es un acto de crueldad refinada motivado por una situación de naturaleza política, que tiene como fin agredir y causar daño físico y psicológico en la víctima para castigar determinadas conductas, reales o supuestas. Como forma agresiva deshumanizada y sádica, la tortura sexual busca humillar, degradar y perturbar la sexualidad del hombre y la mujer privados de su libertad y sometidos a una condición extrema de pasividad e indefensión. El objetivo es la destrucción de su identidad como persona. Y, también generar un miedo aterrador en la población.

Los testimonios ofrecidos por organismos de derechos humanos dieron cuenta no de un caso aislado, sino de una “estrategia de agresión sexual”. Como se ha dicho, entre los captores-violadores de Atenco hubo un mismo patrón de conducta sádica y lasciva. Si en México se aplicara la justicia podría acreditarse que se trató de una violación generalizada o sistemática, intencional. Esto, a su vez, permitiría establecer la responsabilidad criminal no sólo de los elementos policiales que materializaron el hecho, sino también la de los mandos que ordenaron a sus subordinados proceder así. Es decir, se podría fincar responsabilidad a quienes ocupan los niveles altos y medios de la cadena de mando y que participaron por acción u omisión en los acontecimientos. Sin embargo, cuando el 12 de junio de 2006 el secretario de gobierno mexiquense, Humberto Treviño, dio a conocer los resultados de las investigaciones administrativas para castigar los “excesos” cometidos por elementos

de la ase, sólo arrojaron sanciones para nueve uniformados, de un total de 2 000 que tomaron parte en el operativo de Atenco. Cuatro policías fueron destituidos y cinco más suspendidos por 90 días. De ellos sólo uno ocupaba una posición de mando, Esteban Valor Ponce un comandante de sector adscrito a Chiautla.<sup>45</sup> Dos días después, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México anunció que había iniciado una averiguación previa por “abuso de autoridad” en contra de 19 elementos de la ase y de cuatro efectivos de la Dirección General de Seguridad Pública de Texcoco. Entre ellos había un jefe de sector, dos jefes de grupo y 20 policías rasos. Todos podían enfrentar su proceso en libertad porque el delito no es considerado grave por el Código Penal mexiquense.<sup>46</sup> Al comisionado de la ase Wilfrido Robledo, ni siquiera se le investigó, ya que, como dijo el procurador estatal Abel Villicaña, “nadie lo ha señalado”.<sup>47</sup>

A todas luces, los policías destituidos, suspendidos y consignados por “abuso de autoridad” y por “tolerar la violencia” de sus compañeros contra los prisioneros de Atenco fueron *chivos expiatorios*. Las seudoinvestigaciones de la Procuraduría estatal fueron una burla macabra que desnudaba la genial impostura del gobernador Peña Nieto y el comisionado Robledo, y exhibía la red de complicidades enquistada en las estructuras del gobierno mexiquense. Si en México existiera Estado de derecho, ambos, junto con el procurador Villicaña y el secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora debieron ser investigados. Los primeros por ordenar y ejecutar el operativo de escarmiento. Villicaña y Medina Mora por ser los superiores jerárquicos de los encargados de desplegar el uso excesivo de la fuerza pública en Texcoco y Atenco. Medina Mora ocupaba el primer lugar en la cadena de mando de la PFP, cuyo comisionado, general Alejandro Martínez Aduna, era el superior inmediato del general Ardelio Vargas Fosado, quien coordinó con Wilfrido Robledo la *toma* de Atenco. Todos eran responsables y no debían quedar impunes.

#### EL MIEDO Y LA PALABRA

Con el transcurso de los días y los meses la verdad se abrió paso lentamente. Fue cobrando certidumbre la versión de que el 4 de mayo de 2006 medio centenar de mujeres fueron capturadas con lujo de violencia en San Salvador Atenco, en el marco de un operativo contrainsurgente en el que participaron elementos de las policías militarizadas, federal y estatal.

La mayoría de las prisioneras fueron sometidas a torturas físicas psicológicas y sexuales. En algunos casos fueron violadas de manera tumultuaria. Sus desgarradores testimonios llevaban a rozar los límites de lo impensable; nos acercaban al horror. “La gente normal no sabe que todo es posible”, decía David Rousset. Los testimonios

de las presas políticas de Atenco sobre los ataques sádicos y lascivos que sufrieron en manos sus captores-violadores uniformados podían provocar rechazo o bloqueo. Resistencia. En general, la comunidad “no puede creer” y “no quiere saber”. Pero además, el caso nos acercaba al fenómeno de la “banalidad del mal” del que nos hablaba Hannah Arendt, que consiste en que personas “normales”, ni monstruos ni demonios, pueden cometer actos sumamente malvados.

Pese a las evidencias del horror, los mandos del operativo, el general Vargas y el vicealmirante Robledo —y sus jefes políticos el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto—, negaron los hechos. Después admitieron que hubo “excesos”, eufemismo para justificar el terrorismo de Estado. Pensamos que es necesario conocer el origen y la naturaleza del discurso que justifica la barbarie oficial; porque conocerlo implica quizá desarmar su lógica, su vigencia, su eficacia. El acto inaugural del poder totalitario es definir al enemigo: el judío, el extranjero, el comunista, el machetero. Utilizados por los nuevos cruzados de una verdad maniquea como justificación para ejercer la violencia del Estado, conceptos como “subversivo” o “enemigo interno” pueden desencadenar una espiral ascendente, gradual y metódicamente calculada. Con el tiempo podrán ser subversivos todos los que no piensan como los hombres del poder. Y se corre el riesgo de que sólo haya una verdad y que la misma sea absoluta: la del régimen.

La resistencia a saber, individual y colectivamente, y el asco y el miedo que siempre despierta pensar en estos temas, son una realidad. De allí que representar lo irrepresentable del horror sea, hoy, en México, una tarea de salud pública. El silencio (o silenciamiento) es aliado o cómplice del terror. La palabra engendra esclarecimiento. La palabra intransigente, empecinada. La violación y el suplicio de la carne persiguen, también, la humillación de la palabra.

Para una mirada no comprometida, y puesto en parangón con el festín planetario de violencia diaria, el caso Atenco puede parecer menor. Pero el silencio y el olvido, la indiferencia y la impunidad sobre el horror de Atenco favorecerán la persistencia y la reproducción de ese mal endémico. No se puede silenciar la historia. Otra vez, en Atenco, a floraba con terquedad el problema de las relaciones con el pasado, que muchos quisieran sepultado y amortajado, y las formas de resurgencia en el presente individual y colectivo. Como en la matanza de Tlatelolco y en la *guerra sucia* de los años setenta, no era ningún ánimo vengativo, sino preventivo el que animaba a los que no pueden ni quieren olvidar el horror. El fascismo —“espíritu de miedo envuelto en ira”, recordaba Antonio Machado un verso de Herrera— tortura porque teme y teme porque sólo torturando puede sobrevivir. No se trata de ser exorcistas que por conjurar a las brujas las convocan. Pensamos, por el contrario, que hay que vencer el asco y el miedo, el pánico y la huida que provocan hechos brutales como la violación y la tortura contra las presas políticas de Atenco, y que hay que poner la violencia

política en el orden del día, para que su debate y su conocimiento logren su erradicación.

## Una elección envenenada y la protesta ciudadana

Después de un largo y tortuoso proceso electoral salpicado hasta el final por escándalos de corrupción, una inusual *guerra sucia* mediática y la sospecha de que el Instituto Federal Electoral (IFE) podría actuar de manera parcial en beneficio de Felipe Calderón, 40 millones de mexicanos decidirían el domingo 2 de julio el curso político y económico de México para los próximos seis años.

Signado por la confrontación, el cierre de las campañas se vio ensombrecido por un virulento enfrentamiento de clase entre los dueños del dinero, reunidos en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y el candidato opositor Andrés Manuel López Obrador de la coalición Por el Bien de Todos, integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) y Convergencia por la Democracia (CD).

La revelación, seis días antes de los comicios, de que el equipo de campaña de Felipe Calderón tenía en su poder bases de datos de uso exclusivo del gobierno federal, aumentó el cúmulo de sospechas fundadas en torno a posibles manipulaciones del padrón electoral orientadas a favorecer al candidato de “las manos limpias”, como se autonombró para efectos propagandísticos el aspirante presidencial del PAN.

De acuerdo con las encuestas de cierre de campaña, López Obrador mantenía una ventaja de uno a cinco puntos en la intención del voto de la ciudadanía sobre su más cercano perseguidor, Felipe Calderón. Esa diferencia, manejada como un “empate técnico” por los panistas, representaría, en el caso de un punto porcentual, aproximadamente 400 000 votos a favor de AMLO, mientras que cinco puntos equivaldrían a dos millones de votos; dato, ése, que de ratificarse en las urnas traería aparejado un auténtico *tsunami* amarillo, según el color que identifica al partido del sol azteca fundado por Cuauhtémoc Cárdenas.

Más allá de las corridas demoscópicas, duramente cuestionadas por los sectores más conscientes de la población ante la irrefutable evidencia de la irrupción de

encuestadoras “fantasmas” durante el proceso electoral, y la presunción de que algunas firmas con reputación de realizar “mediciones científicas” habrían elaborado sondeos “a modo” para tal o cual candidato buscando influir en la intención del voto, otros datos “en caliente” permitían aventurar que la ventaja de López Obrador tenía base en la realidad.

En ese sentido, nada más representativo de lo que estaría por venir que el instinto de conservación exhibido por algunos actores de la vida pública mexicana, en particular los que representaban al gran capital, que, ante el descalabro del oficialismo y al margen de las leyes que regían los comicios, saltaron a la palestra mediáticaelectoral y entraron al quite para mantener la *campaña del miedo* del calderonismo con el fin de defender sus intereses. La aguda confrontación, que asumió la forma de un enfrentamiento entre ricos y pobres en los medios electrónicos, circulaba en México desde hacía meses como broma: “¿Por qué los niños *pirrurris* quieren que López Obrador gane las elecciones?, pregunta Pepito. Y responde: porque sus papás les dijeron que si eso sucedía se iban a vivir a Miami”.

Ironías aparte, rebasados gobierno, partido y candidato oficiales al desinflarse la burbuja panista tras la acusación de López Obrador en el debate televisivo de los presidenciables el 6 de junio, cuando con documentos legales en mano denunció que el candidato de “las manos limpias” estaba involucrado en presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias<sup>1</sup> que rebasaban a la familia política de Calderón (el escándalo tuvo como base el conglomerado empresarial Hildebrando S. A. de C. V., del que era socio prominente su “cuñado incómodo” Diego Zavala Gómez del Campo,<sup>2</sup> cuya conexión española llegaba hasta las alturas del Partido Popular de José María Aznar)<sup>3</sup> y se incrustaban directamente en la casa presidencial (beneficiando supuestamente los negocios de los hermanos del presidente Vicente Fox y los de los hijos de la primera dama Marta Sahagún),<sup>4</sup> el CCE se metió de lleno a la pelea como nunca antes en un proceso electoral.

Mediante sendos *spots* propagandísticos y con la coartada de promover el voto de manera “apartidista”, el CCE —la llamada “cúpula de cúpulas”, que en rigor responde al Consejo Mexicano de Hombres Negocios que reúne a los 35 *barones* que acumulan en sus bolsillos cerca de 40% del producto interno bruto— dejó entrever sus filias y sus fobias electorales para incidir en la libertad de los votantes, al “invitarlos” a sufragar por el candidato que representa las “exitosas” políticas de la última década, ya que “apostarle a algo distinto implicaría retroceso”.<sup>5</sup>

Pese a que el artículo 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala de manera inequívoca que contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto “es derecho exclusivo de los partidos políticos” el proselitismo publicitario de los dueños del dinero no dejaba lugar a equívocos: promovía de manera descarada el voto a favor de Calderón, quien

había prometido conservar la estrategia neoliberal vigente en el último cuarto de siglo y aplicar la “mano dura” para garantizar el orden, y fue un intento por desalentar el sufragio a favor de López Obrador, quien se había opuesto a la privatización del sector energético, además de que manejaba una retórica opuesta al modelo del Consenso de Washington y quien, en su programa, planteaba cambios que supuestamente darían una “cara humana al neoliberalismo” lo que el sociólogo canadiense James Cockcroft definió como una “estrategia socialdemócrata *lite*”.

En la coyuntura, el franco activismo político de banqueros y capitanes de industria que se oponían al más mínimo cambio del modelo económico —así fuera dentro de los marcos del actual sistema de dominación— fue reconvenido de manera tímida y obsecuente por el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, quien solicitó implícitamente a la cúpula de la *iniciativa privada* abstenerse de realizar “prácticas de inducción del voto hacia algún candidato o coalición” y realizar otras actividades que pudieran interpretarse como “un mecanismo de presión o coacción del voto”.<sup>6</sup> No obstante la exhortación no tuvo más fuerza que las llamadas a misa. Y el enfrentamiento recrudeció cuando López Obrador advirtió durante sus actos de cierre de campaña que los dirigentes del CCE no eran empresarios sino “traficantes de influencias” que se habían beneficiado con “negocios jugosos al amparo del poder público”.<sup>7</sup> Dijo también, “que los de arriba no pagan impuestos” —lo que provocó la amenaza de una “huelga fiscal” lanzada por un dirigente empresarial en caso de que el tabasqueño ganara los comicios— y que los poderes fácticos se habían puesto “nerviosos” y por eso “se sumaron a la campaña del miedo” del PAN.

La falta de certeza de un triunfo de Acción Nacional había propiciado, desde finales del año anterior, que los organismos empresariales y su entorno dieran forma a un nuevo corporativismo y emprendieran una intensa actividad para apoyar a Calderón. El objetivo fue que los trabajadores de los empresarios, incluidos los empleados domésticos, votaran a favor de los candidatos del partido gubernamental a la Presidencia y al Congreso. Los medios utilizados fueron cartas que hicieron circular en sus centros de trabajo, reuniones en sus residencias, actos de ex funcionarios federales ante la servidumbre y la distribución de 10 millones de historietas en fábricas y empresas para “orientar” a los electores acerca de por qué debían rechazar a López Obrador.<sup>8</sup>

La campaña de miedo y odio clasista de los empresarios —en un país rico con millones de pobres, pero que tenía más multimillonarios que Suiza, según la revista *Forbes*— ubicaba a AMLO como el anticristo y se empataba con la propaganda del PAN que, machaconamente, identificaba al candidato de la coalición Por el Bien de Todos como “un peligro para México”. Así, en mensajes reiterativos a través de internet y mediante *spots* en la radio y la televisión, se pretendió construir una imagen de López Obrador como un hombre ignorante, autoritario, deshonesto, cobarde, demagogo,



violento antiinstitucional, mentiroso, de personalidad múltiple, que aborrecía a la gente con dinero y que, si ganaba, crearía una América Latina comunista con Fidel Castro y Hugo Chávez.

Sobre la base de que “todos los votos cuentan”, esos sectores del gran capital, que a partir de una mentalidad genuinamente feudal habían hecho la promoción histórica del *voto asustado*, decidieron darles el domingo 2 de julio libre a sus empleados, para que votaran por el “candidato de las manos limpias”.

En ese contexto, cabe consignar el apoyo que recibieron Calderón y el PAN, tanto en dinero y “entrenamiento” de cuadros como en el diseño de las campañas, de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, que depende del Departamento de Estado), del National Endowment for Democracy (NED, organismo pantalla de la Agencia Central de Inteligencia), del International Republican Institute (IRI) y de *think tanks* y fundaciones ultraderechistas de Estados Unidos.

En la coyuntura preelectoral llamó la atención la similitud de las campañas del PAN y del Partido Nuestra Ucrania, cuyo candidato, Víctor Yushchenko —el “hombre de la NED”, prooccidental— finalmente ganó la presidencia en una segunda elección. Ambos procesos fueron asesorados por politecnólogos estadounidenses que optaron por utilizar el mismo lema de campaña, “las manos limpias” y medios semejantes para proyectarlas: la inducción del miedo hacia el posible triunfo del adversario. Si en Ucrania se utilizó el fantasma del presidente ruso, Vladimir Putin, en el caso mexicano se bombardeó a la opinión pública con el riesgo del “totalitarismo”, proyectando como “cuco” al presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Pese a esos apoyos que se inscribían en los métodos de acción clandestina de los círculos de inteligencia de Washington y exhibían una telaraña de complicidades intervencionistas, llamó la atención el mutismo de la Casa Blanca y la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre los comicios mexicanos. Según la gran prensa estadounidense, la administración Bush, los miembros del Capitolio y los inversionistas preferían una victoria de Calderón, pero no les preocupaba un triunfo de López Obrador, ya que lo consideraban un político pragmático, de “izquierda moderada”, enfocado sobre todo a la política interna, quien, de ganar, había prometido que mantendría la estabilidad macroeconómica.

Un informe elaborado por Pamela Starr señalaba que México “entiende que su futuro está inevitablemente entrelazado con su vecino del norte”, ya que de ahí obtiene dos tercios de sus flujos de capital y virtualmente todo de los 20 o 25 000 millones de dólares en remesas de migrantes. Además de que envía a Estados Unidos casi 90% de sus exportaciones y más de 80% de los turistas que lo visitan son estadounidenses.

Por otra parte, un perfil de López Obrador publicado por el diario *Los Angeles Times* destacó su arraigo en el pueblo y su instinto político, en contraste con

Calderón. “Imaginen a un Bill Clinton mestizo”, decía la semblanza, que ponderaba el carisma y el *sex appeal* del tabasqueño. Añadía que López Obrador era “el candidato del hombre común (y, claramente, de la mujer común), y pese a que sus críticos lo califican como un ‘populista irresponsable’, para millones de personas ‘es la esperanza encarnada, guerrero y figura del padre todo en uno’”.

No cabía duda de que si Estados Unidos y sus socios locales no podían derrotar a López Obrador en las urnas, intentarían después atarle las manos y refuncionalizarlo para que legitimara, desde la “izquierda”, el estado de cosas vigente. No obstante, para millones de mexicanos pobres y de clase media la opción de centro-izquierda de la coalición Por el Bien de Todos representaba una alternativa real.

Durante su campaña, AMLO había prometido que combatiría la evasión fiscal, los negocios ilícitos, la especulación socialmente dañina y la corrupción. Y había dicho que si bien no iba contra los ricos, sí se oponía a la desigualdad extrema.

En otro sentido, era obvio que una victoria de AMLO cambiaría el balance de fuerzas en el continente y acentuaría el sentimiento antiimperialista en boga, y que, en el plano interno, si bien no significaría un rompimiento total con el neoliberalismo, representaría un pequeño cambio en la correlación de fuerzas políticas y sociales mexicanas. En sentido contrario, una victoria de Calderón profundizaría las aristas más perversas del modelo de dominación, con la expansión de la violencia, la corrupción, la impunidad, la violación de los derechos humanos y la criminalización de los movimientos sociales.

En todo caso, fuere cual fuera el resultado, la verdadera zona de zozobra comenzaría el 3 de julio, “el día después” de los comicios. Entre esa fecha y el 1º de diciembre, cuando se produciría el cambio de mando, se abriría un interregno en la vida política de México una ambigua zona gris, en la que el ganador de la contienda tendría que encarar, entre otras muchas cosas, la relación con los poderes fácticos y los *barones* del crimen organizado, en un marco de profundo malestar social.

#### UN OPERATIVO DE ESTADO

La participación de la ciudadanía en los comicios del 2 de julio y el sentido diversificado de su voto fueron una lección de democracia electoral. Pero otros protagonistas de la contienda no actuaron de igual forma. En particular, la instancia oficial que tenía la obligación legal de ejercer su función de arbitraje sin sesgo alguno: el Instituto Federal Electoral.

La decisión del IFE de dejar en suspenso el anuncio de los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) hasta el miércoles 5 de julio, parecía confirmar la sospecha de que ese organismo había sido un aliado del gobierno federal

en su empeño por evitar a toda costa que López Obrador llegara a la Presidencia. Con el paso de las horas y los días todo indicaba que en México se estaba por consumar un golpe de Estado técnico contra el proceso electoral y el sistema constitucional. La parcialidad del IFE proyectó la sombra de un sofisticado fraude cibernético a favor de Felipe Calderón, el candidato de los poderes fácticos y la derecha local, y los grupos de interés en Washington.

La del jueves 6 fue una verdadera madrugada de suspenso. México no durmió. Avanzada la mañana todavía no se sabía el resultado final, pero la tendencia favorecía por décimas al candidato de Acción Nacional, Felipe Calderón. A las 8:30 de la mañana, cuando todavía faltaban 400 casillas por computar, López Obrador anunció al país que impugnaría los resultados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y convocó a sus simpatizantes a una asamblea en el Zócalo de la ciudad de México el sábado siguiente. Se abría, pues, el peor escenario posible: el de una larga confrontación política y judicial, en un país geográfica y electoralmente dividido y con una sociedad polarizada en extremo. El maratónico recuento de votos en los 300 distritos electorales del país había comenzado a las ocho de la mañana del miércoles, y durante más de 20 horas López Obrador se mantuvo al frente. Pero a las 4:07 de la madrugada del jueves Calderón tomó la delantera por unas pocas décimas, lanzó un mensaje de conciliación nacional y “tendió la mano” a López Obrador, en un gesto poco creíble en quien había utilizado una verdadera *guerra sucia* mediática durante su campaña para descalificar a su principal adversario. En su discurso mañanero del jueves 6, AMLO fue claro: dijo que hubo un “operativo de Estado” para favorecer a Calderón, y agregó:

Asistimos a un acto de provocación. Siguen funcionando el aparato y los recursos del Estado para favorecer al candidato de la derecha [...] es evidente que hubo una manipulación [de las cifras] del PREP [el órgano de conteo rápido del IFE]. Hubo poca transparencia. Le faltó independencia al IFE. Hubo consigna para que no se abrieran los paquetes electorales y una prisa inusual para resolver en menos de 24 horas una elección numéricamente reñida [...] No podemos reconocer el resultado. Son muchas las inconsistencias, las irregularidades. Vamos a impugnar la elección, a exigir que se abran los paquetes y se cuente voto por voto.

En medio de gran incertidumbre, el llamado “factor Hildebrando” —la presunta manipulación de un algoritmo en el sistema cibernético del IFE, cuyo *software* había sido instalado por la empresa Hildebrando, S. A. de C. V., que pertenecía al “cuñado incómodo” de Calderón, Diego Zavala— abría la posibilidad de que desde el domingo 2, día de los comicios, todos los mexicanos hubieran asistido a un *show* mediático electoral, montado para aparentar una cerrada competencia en un país dividido en tercios. Según los expertos, se trataría de un algoritmo que habría servido para inhibir la ventaja de López Obrador y que significaba todo un reto matemático.<sup>9</sup> La confianza y la serenidad de Calderón y de la alta dirigencia panista a lo largo de la jornada del miércoles y la madrugada del jueves, cuando López Obrador mantenía la

delantera, permitió conjeturar que el IFE estaba administrando las cifras y que ellos ya sabían el resultado.

El día de los comicios, a las ocho de la noche, dos horas después del cierre de las casillas de votación, estaba previsto que el IFE diera a conocer el nombre del ganador de la contienda. Y si bien comenzaron a fluir lentamente las cifras que daban una leve ventaja a Calderón sobre López Obrador, el anuncio se postergó tres horas. En ese lapso, el IFE se ausentó del escenario y dejó su tarea informativa en manos de los “difusores”: los grandes medios electrónicos. En particular, los consorcios privados Televisa y TV Azteca. Es decir por incompetencia o perversidad, en un hecho sin precedente en las transiciones democráticas, las autoridades electorales literalmente se borraron del mapa y dejaron en manos de terceros el desempeño de sus funciones. Cuando finalmente apareció ante las pantallas el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, anunció la imposibilidad de ofrecer los resultados del conteo rápido del PREP, porque la diferencia entre los punteros era muy pequeña. Y decretó un paréntesis electoral hasta el miércoles 5. Segundos después, sin que hubiera tenido tiempo de asimilar el contenido de la exposición de Ugalde, el presidente Vicente Fox dirigió un mensaje a la nación que estaba en total sincronía y sintonía con el formulado por el titular del IFE. Fue evidente que Fox ya sabía lo que iba a decir Ugalde y, sin el menor escrúpulo de cuidar las formas, pronunció un discurso gemelo; la producción y la coordinación de ambos mensajes fue muy clara, lo cual restó credibilidad al árbitro de la contienda, Ugalde, y proyectó la idea de unos comicios contaminados.

Con un agregado: como si se tratara de un mismo guión, los “comunicadores” de los medios masivos repitieron machaconamente a la opinión pública lo que habían dicho a lo largo del día: por un lado, que México había vivido una “fiesta de la democracia” que no tenía nada que envidiar al “paraíso electoral” suizo. Por otro, que había un “empate técnico” entre Calderón y López Obrador, con leve ventaja del primero.

Una ciudadanía entre incrédula y pasmada asistía en vilo a un desenlace que era administrado con cuentagotas por las autoridades electorales y que al final se postergaba tres días. Todavía no se conocían los grandes desaseos, vicios e irregularidades del proceso electoral que irían saliendo a la luz pública a lo largo de la semana. Pero ya se percibía la parcialidad gubernamental, de las autoridades del IFE y de la “videocracia” para hacer ganar al candidato de Acción Nacional. Con el paso de las horas el “empate técnico” afloró como un escenario construido desde los poderes político, económico y electoral para facilitar el triunfo de Felipe Calderón.

Ante el alud de pruebas que se iban acumulando y configuraban un fraude de grandes proporciones, el martes 4 la Coalición por el Bien de Todos desconoció la legitimidad del PREP y exigió que en las sesiones de los 300 distritos electorales, previstas para el miércoles se contara voto por voto, acta por acta y casilla por casilla,

para que la ciudadanía tuviera plena certeza del resultado. Además, se pidió la revisión de los sufragios nulos (2.2%), dado que, con una diferencia tan estrecha, podrían cambiar el resultado final de la elección. Un día antes, López Obrador había denunciado la “desaparición” de más de tres millones de votos de las cifras del PREP. Veinticuatro horas después, un funcionario del IFE anunció que habían mandado poco más de dos millones y medio de votos al “archivo de las inconsistencias” y que constaban en “actas ilegibles”. Es decir, ante la denuncia, admitieron su existencia y las sumaron al PREP; pero no se aclaró en qué momento dejaron de ser ilegibles y cuándo se volvieron confiables. ¿Por qué un día no lo eran y al otro sí? Al sumarlas, la ventaja de Calderón sobre López Obrador se redujo de 1.04 a 0.64%, es decir, una diferencia de 257 532 votos. Ante esta situación, la confusión siguió prevaleciendo. Pero las sospechas sobre la actuación facciosa del IFE no habían aflorado el 2 de julio: estuvieron presentes a lo largo del proceso comicial, sobre todo por la complacencia de ese organismo con el descarado intervencionismo del presidente Fox y los dueños del dinero —reunidos en el CCE—, y las campañas de miedo y odio clasista promovidas por el partido oficial, copado por una ultraderecha beligerante que, de confirmarse los resultados, tendría amplia representación parlamentaria y ocuparía algunas gubernaturas.

Un primer balance aproximado sobre los comicios, dado que todo podía cambiar a partir de lo que resolviera el TEPJF, permitía constatar la existencia de un electorado genuinamente dividido entre los partidarios del continuismo neoliberal y quienes optaron por un cambio de rumbo de signo progresista. El país quedó virtualmente marcado por una verdadera contradicción norte-sur, que dividía al México rico del México pobre, lo que combinado con otros elementos dibujaba un escenario de gran incertidumbre y conflictividad social a corto y mediano plazos.

Un segundo dato duro fue que la campaña negativa del gobierno, el oficialismo y la cúpula empresarial contra López Obrador había funcionado. A través de una campaña de medios multimillonaria, los estrategas del voto del miedo lograron fijar la idea, en un amplio espectro de ciudadanos, de que López Obrador encarnaba “un peligro para México”. Dicha campaña fue combinada con una “estrategia de tensión” que consistió en operativos de tipo contrainsurgente en Michoacán y en Atenco, dirigida a amedrentar a la población. Otro elemento irrefutable que arrojaron los comicios fue el colapso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su candidato Roberto Madrazo. El PRI perdió cinco millones de votos en relación con la elección presidencial de 2000, siendo empujado hacia el tercer lugar como fuerza política nacional. Otra de las certezas que arrojó la elección, fue que más allá de quién fuera el próximo presidente electo, lo sería con el voto más minoritario con el que haya llegado al gobierno un mandatario mexicano. Alrededor de dos tercios de los electores, dos de cada tres votantes, habrían experimentado la sensación de derrota y

se podrían asumir como no representados por el vencedor. Otra evidencia era que habría un Congreso dividido y un Ejecutivo sin mayoría parlamentaria, lo que obligaría a alianzas y negociaciones políticas. Sin duda, con su 22%, el viejo partido *aplanadora*, el PRI, seguiría siendo el fiel de la balanza. Otro dato fue que el Partido de la Revolución Democrática, el de López Obrador, arrasó en el Distrito Federal, centro político del país, y mantuvo la jefatura de gobierno por tercera elección consecutiva. En ese contexto, lo que seguía era de pronóstico reservado. Se abrían escenarios complejos para México. La disyuntiva inevitable era que en un escenario de crisis política se aceptara un conteo general de votos, uno por uno (cosa que parecía improbable y a lo que el PAN ya se había opuesto), o que el TEPJF optara por anular la votación y se diera paso a un gobierno provisional. El 10 de julio se puso en marcha el periodo para que la coalición Por el Bien de Todos presentara los recursos de impugnación. El TEPJF, que ya había fallado contra el PAN por la guerra de *spots* contra López Obrador, tenía capacidad legal para invalidar el proceso comicial, por ejemplo, si se llegara a anular 20% de las casillas o por graves irregularidades. El 31 de agosto era la fecha límite para resolver las impugnaciones de los juicios de inconformidad de la elección presidencial, y el 6 de septiembre era el último día para que el TEPJF declarara si había presidente electo. El tribunal tenía facultad plenipotenciaria, inapelable, para calificar la elección. Hasta que ocurriera eso, todo indicaba que el país pendería de un hilo. Con 99.6% de los distritos computados, la ventaja de Calderón sobre López Obrador era de 35.8 contra 35 por ciento. El coro de la derecha procalderonista comenzaba a arreciar con sus llamados a la conciliación de clase, el diálogo, la unidad nacional la reconciliación de los mexicanos, el acuerdo. Combinado, claro con la “preocupación” de los ideólogos de la derecha vernácula y sus aliados internacionales: Enrique Krauze lanzó un llamado a la “solidaridad” de América Latina para defender la democracia, sobre el supuesto, dijo, de que López Obrador “ya optó por la revolución”.

#### LA GENTE SALE A LAS CALLES

Desde un principio Felipe Calderón se comportó como un presidente electo. Respaldado por una gran operación propagandística, dio los pasos iniciales para administrar su victoria de 0.58 por ciento. Tendió la mano a sus adversarios, incluso a quien hasta la víspera de los comicios había considerado “un peligro para México”, como el demonio mismo: Andrés Manuel López Obrador. Prometió cogobernar con los demás partidos e impulsar un gobierno de coalición, incluyendo las propuestas y las ideologías de sus acérrimos adversarios en su plan de gobierno. Pero carecía de certificación y de credibilidad. La elección presidencial continuaba; su fase

jurisdiccional apenas estaba por comenzar.

Existían múltiples indicios de que los comicios habían sido un “cochinero”, según la expresión utilizada por la revista *Proceso*.<sup>10</sup>

Se habló de un sofisticado fraude cibernético combinado con una operación mediática de legitimación. Se afirmó que votaron hasta las momias. Los índices de “participación” electoral se dispararon en comunidades fantasmas de migrantes. Hubo múltiples denuncias de urnas *embarazadas*, del clásico *carrusel*, de *rasuramiento* del padrón, de casillas *zapatos*, de compra de votos y de otros trucos sucios propios del antiguo régimen priísta. Al final, los pragmáticos foxistas también habían resultado alquimistas.

A su vez, los neopanistas adujeron que habían sido los comicios más limpios de la historia de México. Afirmaron que el proceso electoral estaba “blindado”; que no existía posibilidad de fraude. Repitieron a coro que “en la democracia, un voto basta para ganar una elección”. Argumentaron que la ciudadanía ya había votado y exigieron que se respetara el resultado. Acusaron a López Obrador de irresponsable, de dividir a los mexicanos. Señalaron que era ilegal volver a contar los votos. Querían poner punto final a la elección. Los promotores de la *guerra sucia* electoral pedían ahora armisticio; la paz incondicional.

Los *barones* del dinero apoyaron al partido de la continuidad y a Calderón, pero no celebraron. Habían dado por muerto a López Obrador muchas veces, y siempre revivía. Creyeron que lo sacarían de la contienda electoral con los *videoescándalos* de 2004, y no pudieron. Se sumaron al desafuero del salinismo y el foxismo en 2005, y AMLO volvió fortalecido. Diez días antes de los comicios participaron en la embestida final contra el candidato del sol azteca, promoviendo el voto del miedo, y algo lograron. Pero no lo derrotaron. La ventaja de Calderón fue mínima: 243 000 sufragios sobre poco más de 42 millones de votos emitidos (poco más de medio punto porcentual). Pero el conteo oficial estaba marcado por la sospecha, y en ese escenario el CCE echó más leña al fuego: acusó al PRD y al *Peje* de “regresionistas”, “autoritarios” y “maximalistas”.

La situación era explosiva. El clima estaba enardecido. México vivió días de crispación y encono. Del miedo se pasó al odio. La discusión ya no se limitó a quién había ganado y quién había perdido, sino que se tradujo en mutuo rencor. Cuando el jueves 6, sin atribuciones para ello, el IFE declaró ganador a Felipe Calderón, la Casa Blanca se apresuró a felicitarlo en una *cargada* al estilo priísta. También lo hizo el jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. En medio de la incertidumbre, durante una asamblea ciudadana en el centro político del país, López Obrador llamó al presidente Vicente Fox “traidor a la democracia”. Y dijo que Calderón era un “pelele”. Fox, mandatario de todos los mexicanos, respondió que “por más que haya renegados [...] el país avanza”. La pregunta se imponía: ¿Había 15 millones de renegados en México? ¿Se pretendía así forjar la “unidad nacional”?

¿“Reconciliar” a los mexicanos?

## ZÓCALO LLENO

López Obrador seguía en la pelea. Dijo que recurriría a las instancias legales y que promovería un juicio de inconformidad apegado a derecho. El artículo 41 constitucional establece que los principios rectores en la organización de las elecciones federales son: certeza, legalidad, independencia y objetividad. Una parte de la sociedad pensaba que los comicios no se habían dado en ese marco. Se sentía burlada y estaba agraviada. Además, después de los comicios, se trataba de una fuerza electoral que había sumado prácticamente los mismos votos del que había sido declarado vencedor: casi 15 millones. No era poca cosa y López Obrador lo sabía mejor que nadie. Por eso, como parte de una estrategia general, llamó a una asamblea informativa en la capital del país y la gente le respondió de manera masiva en sólo dos días.

Ante una plaza que hervía, AMLO arremetió contra los responsables de una política económica “antipopular” y “entreguista”, y contra el “núcleo de poder que está acostumbrado a triunfar a toda costa con tal de mantener sus privilegios”. Atacó a los que se habían quedado con empresas y bienes de la nación y ahora ambicionaban la privatización del sector energético. Dijo: “Son los que ahora quieren imponer en la Presidencia a un empleado incondicional, a un pelele que les garantice perpetuar la corrupción. Que les garantice la corrupción, el influyentismo y la impunidad”. En ese contexto, afirmó que Fox “ha terminado por ser todo un traidor a la democracia”.

Cientos de miles gritaron: “No al fraude electoral”, “Prensa vendida”, “Muera Televisa”. Había mucho coraje, mucha bronca acumulada. Entonces, AMLO los convocó a una movilización ciudadana, a una resistencia civil pacífica. A la defensa del voto y la legalidad, sin alterar el orden y sin afectar derechos de terceros. Sin caer en provocaciones. Ahora estaba en su elemento: la calle.

En las próximas semanas la protesta poselectoral se organizaría en torno a una marcha nacional que confluiría en la ciudad de México el 30 de julio. Ese miércoles comenzaron a salir de 300 ciudades de la República marchas pacíficas rumbo a la capital. Como tantas veces antes, la movilización social sería un nuevo ingrediente de la política e intentaría influir en el desenlace de la justa electoral. Era una porción de la ciudadanía consciente de sus derechos. Gente informada e irritada. Muy enojada. Reclamaban transparentar los comicios. Decían que se había contado mal y hecho trampa. Y como en Italia y en Costa Rica, países donde los comicios también tuvieron final de fotografía, pedían que se recontaran los sufragios.

El PRD y sus aliados de la coalición Por el Bien de Todos no estaban solos. Fuerzas



circunstanciales apoyaron su demanda. Algunas del exterior, como la organización no gubernamental estadounidense Global Exchange y el periódico *The New York Times*, y el *Financial Times*, de Londres, se sumaron a la nueva consigna emblemática: “voto por voto”, para impedir que México enfrentara una profunda crisis política. También el subcomandante Marcos, del EZLN, que antes había atacado a López Obrador, dijo que hubo fraude y respaldó la movilización popular por una “causa justa”.

La calificación de la elección presidencial ahora estaba en manos del TEPJF, que tenía hasta el 31 de agosto para resolver impugnaciones y hasta el 6 de septiembre para declarar presidente electo. Sólo entonces concluiría la elección y empezaría otra etapa de signo incierto. Muy incierto. En una república dividida. Partida. El norte con el PAN, el sur con el PRD. Un país con una mayoría conservadora si se sumaban los votos del PAN y del PRI, que tenía un ala militantemente reaccionaria, popular católica, proimperialista, que habría de enfrentar a unas izquierdas divididas, que contaban con una sólida base de masas pero no tenían una clara definición política anticapitalista y eran electoralistas.

Un escenario posible en el periodo poselectoral era la agudización de los enfrentamientos entre quienes representaban al neoliberalismo católico represivo, singularizado en la máxima foxista de “un gobierno de empresarios para los empresarios”, y el proyecto lopezobradorista, que impulsaba un desarrollismo igualitario, laico y progresista, resumido en la consigna de campaña: “Por el bien de todos, primero los pobres”. La derecha, con la pírrica victoria de Calderón, se preparaba para la continuidad y el horizonte dibujaba la sombra de una *dictablanda*. Pero la movilización de la gente en las calles podía cambiar el sentido de las cosas.

#### LA RESISTENCIA CIVIL

En una concentración que reunió a más de un millón de simpatizantes, Andrés Manuel López Obrador convocó a la resistencia civil pacífica y dijo que la paz social y la estabilidad de México estaban en juego. El domingo 16, durante la movilización más numerosa en la historia política del país, AMLO anunció el inicio de las primeras acciones de resistencia civil en contra de un fraude electoral que incluyó, dijo, “la falsificación” de 60% de las actas de escrutinio y cómputo. Eso significaba que había un millón y medio de votos no sustentados en las boletas electorales, en el marco de unos comicios en que, según el conteo preliminar oficial, la diferencia entre Calderón y AMLO fue de apenas 0.58 por ciento. En este sentido, cabía tomar en cuenta que un error humano o “intencionado” de un promedio de dos votos por casilla, sobre un total aproximado de 700 sufragios por casilla, podría modificar el resultado.

En el marco de su segunda “asamblea informativa” en la Plaza de la Constitución,

tras un recorrido de cinco kilómetros por Paseo de la Reforma, López Obrador afirmó que México no merecía “un presidente espurio, sin autoridad moral y política”, y recomendó a Felipe Calderón que pensara que “una elección fraudulenta no se borra ni con todas las aguas de los océanos”. Calderón, agregó debería aceptar la revisión de las actas y el recuento voto por voto en todas las casillas del país. “Si él sostiene que ganó, no tiene por qué negarse [...] Nadie debe temer que la elección se limpie.” Un día después, en un tácito rechazo a un nuevo conteo, Calderón respondió: “No aceptaré chantajes ni amenazas. Nadie puede pretender ganar en las calles lo que no obtuvo en las urnas”. La movilización del 16 de julio, considerada un parteaguas en la vida política del país, reunió a más de un millón y medio de personas, según los organizadores, y un millón cien mil, de acuerdo con la policía del Distrito Federal. Miles de manifestantes vestidos de amarillo, color que identificaba al PRD, gritaron la consigna: “Voto por voto, casilla por casilla” y enarbolaron carteles con leyendas que decían: “Todos somos renegados”, “Yo también soy un peligro para México” o “Espacio sin prisa, Televisa te idiotiza”. Una niña de siete años portaba una cartulina que rezaba: “Aunque soy pequeñita, me doy cuenta de su *pinche* trampita”. Pero uno de los que más destacaba era un cartel con la imagen del presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, rematado por dos palabras: “Delincuente electoral”. Cuando millares de simpatizantes de López Obrador aún no iniciaban su recorrido en el Museo de Antropología, ante un Zócalo abigarrado, pluriclasista, Carlos Monsiváis comenzaba a leer un texto elaborado de manera conjunta con Sergio Pitlor, flamante Premio Cervantes de Literatura. “Sin presumir el monopolio de la verdad”, ambos escritores llamaron a “no abandonar nuestros votos en la fosa común de la resignación o la apatía”. A la gente indignada, alegre, informada y muy decidida que allí estaba, le recordaron que

la violencia ha sido el instrumento de la derecha; una violencia ideológica, de mentiras y compra de voluntades, calumnias grotescas y difamaciones y fraudes hormigas [...] Los que desataron la campaña de “López Obrador, un peligro para México” exhiben también su mentalidad clasista: si un candidato presidencial es “un peligro para México” lo son también los que deciden votar por él en números tan elevados [...] Si el dinero a raudales decide quién gobierna, el gobierno que llega obedecerá al dinero a raudales. Si así han querido ganar así inevitablemente querrán gobernar. Tanto gastan, tanto han de recuperar con creces. Mentir para imponerse es ignorar en definitiva la ubicación de la verdad.

A su turno, López Obrador convocó a sus seguidores a reforzar los campamentos ciudadanos ubicados en las afueras de los 300 distritos electorales, donde se encontraban resguardados los votos en las urnas. Dijo que esa vigilancia era indispensable para evitar que se introdujeran o se extrajeran boletas de los paquetes electorales de manera ilegal. Propuso, además, que esos 300 campamentos se convirtieran en centros de toma de decisión. Y alertó: “Tengamos presente que nuestros adversarios apuestan, entre otras cosas, al desánimo y al desgaste de nuestro

movimiento”. La multitudinaria concentración se dio a contrapelo de la nueva campaña de los círculos empresariales, grupos derechistas como Sociedad en Movimiento que pagó grandes inserciones en los diarios y en los grandes medios de difusión masiva, en particular en los electrónicos, que sostenían que la protesta callejera era ilegal, polarizaba a la sociedad y conducía a la violencia. Todo indicaba que la confrontación recién comenzaba, o que había entrado en una nueva fase. Pero parecía evidente que se estaba en presencia de un amplio movimiento social de largo alcance, que trascendería el resultado legal de los comicios. La estabilidad política descansaba ahora en la decisión que tomaría el TEPJF. La crisis política podría resolverse o profundizarse a partir de lo que decidieran siete magistrados, a quienes la Constitución les otorgaba facultades amplísimas. Incluso la de decidir abstenerse de declarar válida la elección, debido al estrecho margen entre el primero y el segundo lugar; el equívoco comportamiento del Consejo General del IFE y el gran cúmulo de irregularidades que habían ido surgiendo; la enorme cantidad de juicios de inconformidad ya presentados y, sobre todo, la violación de los principios de certeza, equidad e imparcialidad tanto en la campaña como en la jornada comicial. La decisión del tribunal era especialmente difícil, porque no sólo habría de tomar en cuenta las violaciones a la ley que rodearon todo el proceso electoral sino también la evaluación de las consecuencias de sus actos en una sociedad agraviada, dividida y polarizada. La presión sobre ellos era enorme. Pero no era sólo la de los perredistas y sus aliados en la calle. La presión más fuerte provenía de los poderes fácticos y de los protagonistas políticos de la derecha en el poder, quienes contaban, además, con la presión mediática ejercida por destacados comentaristas y editorialistas del consorcio Televisa que ya había decidido que el ganador era Felipe Calderón y buscaba imponerlo a toda costa.

Se manejaban tres posibilidades: confirmar el resultado preliminar anunciado por el IFE el 6 de julio, que arrojaría una precaria ventaja para Calderón; aceptar como válidas las impugnaciones del PRD que involucraban unas 50 000 casillas y ordenar un nuevo conteo de votos, lo que podría modificar el resultado, y anular los comicios lo que derivaría en la designación de un presidente interino por el Congreso, y abriría un espacio de 18 meses para la convocatoria a nuevas elecciones.

El tribunal se creó para resolver los conflictos en el espacio de las instituciones. Si no, el conflicto se iría a las calles y el país podría entrar en una nueva etapa de turbulencias políticas, un escenario que a su vez podría derivar en la violencia.

En principio, el equipo que rodeaba a Calderón había diseñado una nueva estrategia con base en tres objetivos clave: intentar desactivar la base social de apoyo a AMLO; articular una alianza con sectores del PRI, y cohesionar en torno a su candidato a los indecisos o a aquellos que dudaban del resultado de la elección. Dicha estrategia tenía como base los medios de difusión, desde los cuales ya habían

comenzado a incrementarse mensajes propagandísticos dirigidos, por un lado, a ganar o a neutralizar al sector intelectual liberal y a los dirigentes de la izquierda social y, por otro, a difundir el anuncio de políticas sociales —incluso aquellas que habían sido parte de la campaña de sus adversarios— para combatir la pobreza. La preocupación principal del equipo panista era el carácter conservador y católico ultramontano que rodeaba a Acción Nacional por lo que la nueva campaña buscaba convertir a Calderón en un “demócrata de centro”, de esencia “liberal”, convencido del Estado y la educación laica. Sin embargo, Calderón no la tenía fácil. López Obrador había convocado a una tercera asamblea informativa para el domingo 30 de julio. En ese lapso sin duda comenzarían a incidir las acciones de resistencia civil pacífica que estudiaba un comité de la coalición Por el Bien de Todos, que podría incluir un llamado a no consumir productos de empresas que habían financiado la *guerra sucia* mediática contra AMLO, entre las que podrían figurar Coca Cola, Jumex, Bimbo, Sabritas. Además, brigadas de contra-propaganda podrían difundir en celulares, internet, automóviles y contestadoras de teléfono el siguiente mensaje: “El fraude sí es un peligro para México”.

#### EL DISTRITO FEDERAL ESTRANGULADO POR LA RESISTENCIA CIVIL

De la mano de la teoría del caos, el proceso poselectoral en México avanzaba por caminos inéditos y peligrosos. Una ciudad estrangulada por quienes habían decidido establecer una vigilia ciudadana en las calles alimentaba los llamados de grupos conservadores a reprimirlos. La resistencia civil pacífica tenía como objetivo transparentar el resultado de los comicios del 2 de julio, pero los poderes fácticos habían criminalizado la protesta y la situación podría desembocar en violencia.

El domingo 30, tras reunir a más de dos millones de simpatizantes en el Zócalo capitalino y sus inmediaciones, que acudieron convocados por la demanda de un nuevo conteo, “voto por voto casilla por casilla”, que diera certidumbre sobre los resultados de los comicios, López Obrador decidió pasar a una nueva fase de la resistencia civil pacífica. Declaró permanente la “asamblea informativa” del movimiento ciudadano que encabezaba y convocó a establecer 47 campamentos que servirían de núcleos organizativos de la resistencia “hasta que se limpie la elección”.

Terminado el acto, que se desarrolló en medio de un clima alegre y combativo —sin que se registrara ningún incidente, agresión o acto de vandalismo—, comenzó la instalación de campamentos. Treinta y uno se concentraron en la Plaza de la Constitución, lugar cargado de simbolismo por ser el epicentro de las luchas populares de México, a razón de uno por cada estado de la República. Y otros 16 (uno por cada delegación del Distrito Federal) en tres arterias viales interconectadas:

la calle Madero, la avenida Juárez y el Paseo de la Reforma, que enlazaban el Centro Histórico, donde tiene su sede Palacio Nacional, con un corredor turístico en el que se ubican edificios de importancia política y económica como la Bolsa Mexicana de Valores, la embajada de Estados Unidos, las oficinas de los grandes corporativos nacionales e internacionales y muchos de los hoteles “cinco estrellas” de la capital.

La “toma” de la ciudad de México exhibió la voluntad política de la dirigencia de la coalición Por el Bien de Todos de pelear hasta el final por el reconocimiento de su triunfo en las urnas. Así, la confrontación se instaló en las calles, con base en la participación ciudadana y en la protesta. Un escenario en el que, en ocasiones anteriores (por ejemplo cuando el intento de desafuero contra López Obrador en 2004 y 2005), se habían estrellado las pretensiones de exterminio político de AMLO por parte de sus adversarios de la derecha política y empresarial.

Como era de esperarse, la respuesta de sus seguidores fue positiva y a partir del siguiente día el kilométrico “plantón permanente” habría de desquiciar a la capital del país.

El mismo domingo, Felipe Calderón acudió ante los siete magistrados del Tribunal Electoral para exigir que lo declararan presidente electo. Según él, la ley no contemplaba el recuento de votos. “Un millón de ciudadanos ya contaron los votos [...] es aquí y no en la calle donde deben calificarse los comicios [...] el tribunal no debe aceptar chantajes ni presiones.”

En un marco de gran tensión e irritabilidad social potenciado por los medios electrónicos, que incluyó reportes de “pérdidas millonarias” en los rubros comercial y turístico y llamados de grupos de poder a aplicar la fuerza pública contra quienes ejercían un derecho amparado por la Constitución —los plantones son un problema de tránsito, no de seguridad pública, y no se podía reducir un problema político de dimensión nacional a un asunto policial, criminalizando y tratando como “delincuentes” a quienes demandaban un recuento honesto y transparente de los sufragios—, Calderón se seguía comportando como presidente electo.

Se reunió con empresarios y dirigentes sindicales “charros” sobrevivientes del viejo corporativismo de Estado a quienes había prometido un “gobierno fuerte”. Arropado por los poderes fácticos continuó manejando un discurso maniqueo que confrontaba a los “pacíficos” y “legales” con los “violentos” y los que actúan “al margen del Estado de derecho”.<sup>41</sup> Apoyado por el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, quien calificó de “bloqueo ilegal” el megacampamento ciudadano y llamó a las autoridades capitalinas (del PRD) a “garantizar el orden y las libertades”, el candidato panista aprovechó la coyuntura para golpear a quienes, dijo, “han secuestrado” la ciudad de México; los mismos a los que el presidente Fox había llamado “renegados”.

En verdad, la situación se había agudizado por el estrangulamiento vial en las zonas céntricas donde se instalaron los plantones, con la consiguiente molestia de automovilistas y quienes habitaban, transitaban y laboraban allí. La circunstancia colocó a las autoridades de la ciudad ante la disyuntiva de garantizar, por un lado, la libre manifestación de las ideas y, por otro, el libre tránsito, ambos derechos establecidos en la Carta Magna. Pero una cosa parecía cierta: el mayor quebranto a la institucionalidad y a la convivencia democrática en la ciudad de México y el país no había empezado el 30 de julio, sino el día 2 de ese mes, cuando se consumó el fraude electoral. Los campamentos lopezobradoristas eran consecuencia, y no causa, de ese quebrantamiento.

La ofensiva de la derecha fue dura y contundente. Sus voceros y sus repetidores en los medios hablaron de “una ciudad sin ley”. Invocaron al ejército y a la mano dura para terminar con los plantones. Pero López Obrador y sus estrategias decidieron no dar un paso atrás. Aguantar fue la consigna; mantener el bloqueo. La defensa de AMLO y sus seguidores se resumía en un par de preguntas: ¿qué es más agresivo: cerrar el tránsito de Paseo de la Reforma o bloquear la transición a la democracia plena?; ¿qué es más violento para una democracia joven: vivir seis años en la desconfianza con un presidente espurio e ilegítimo o destinar seis días al recuento voto por voto?

Asimismo, y como respuesta a los trastornos que causaban los campamentos ciudadanos a la población, la dirigencia perredista había recurrido a homologar el anuncio habitual que acompaña las obras públicas ciudadanas: “Disculpe las molestias que esta obra le ocasiona”. Su traducción en tiempos de resistencia civil, en boca de Ricardo Monreal, uno de los hombres de confianza de López Obrador, fue: “Disculpe las molestias que la negativa a contar los votos ocasiona... Las molestias son temporales, pero el beneficio para nuestra democracia será permanente”. El propio AMLO había dicho que eran “medidas extremas, muy difíciles de tomar”, pero necesarias, “porque se trata de defender una causa superior, que es la democracia [...] Sin cauces democráticos el país no tendrá viabilidad”.

Un alto dirigente del círculo íntimo de López Obrador había establecido una relación dialéctica entre las urnas y las calles. Muchos perredistas pensaban que había que radicalizar las medidas, porque sólo un movimiento social creciente podría evitar un retroceso histórico. Sostenían que sólo con acciones firmes y fuertes podría frenarse la ambición de la derecha empresarial. Planteaban que se requerían reformas drásticas que transformaran a fondo al Estado —se habló incluso de refundarlo— y cambios socioeconómicos en serio. Armada de ese buen sentido, la masa de *renegados* estaba tejiendo su resistencia contra la imposición. Sabían que si no

lograban detener el fraude pasarían muchos años antes de que se les presentara otra oportunidad de cambiar la situación.

Sin embargo, para algunos simpatizantes de la coalición centroizquierdista, entre ellos el escritor Carlos Monsiváis, orador de la segunda asamblea informativa, el bloqueo callejero que se extendía por casi seis kilómetros resultaba impopular. “Es una protesta justa pero no puede ni debe convertirse en un agravio para la ciudad de México al transformarse en un bloqueo de vialidades públicas y afectar a tantos”, dijo Monsiváis en una misiva firmada por otros tres intelectuales. Algunos pensaban que el movimiento de resistencia civil pacífica se desgastaría. Que tanto AMLO como el PRD y sus aliados del Partido del Trabajo y Convergencia pagarían un alto costo político. Hubo quien lo vio, incluso, como un acto de regresión política hacia una lógica contestataria. Otros opinaron que era un “autogol”: que la medida conduciría a un fortalecimiento del Partido Acción Nacional en la ciudad de México, bastión perredista. Por eso, invitaron a López Obrador a revalorar las medidas, a levantar el megaplantón y a ensayar otras formas de resistencia civil activa.

#### ¿UN FUNERAL VIKINGO PARA AMLO?

El atrincheramiento de AMLO y Calderón en sus posiciones incrementó la presión sobre los miembros del Tribunal Electoral. López Obrador había tensado la cuerda. Era inútil minimizar la movilización del 30 de julio. Ignorada por los grandes medios electrónicos en particular por los canales del duopolio de la televisión privada que no le dieron cobertura porque no la consideraron “noticia”, fue esa la principal protesta política de la historia de México. Allí, en medio de un mar de simpatizantes que se le habían entregado por convicción o seducción —y lo seguían haciendo—, AMLO ratificó su poder de convocatoria e incrementó su liderazgo político. Tres megaconcentraciones en menos de un mes y los plantones permanentes indicaban que se estaba en presencia de un líder carismático, de un político nato que ante la presión popular parecía no tener escapatoria. Porque para él no había marcha atrás; se había jugado el todo por el todo y sus siguientes pasos tendrían que ser para adelante.

La instalación de campamentos callejeros fue una inequívoca señal de radicalidad y anunciaba, simbólicamente, que la elección había quedado rebasada. Algunos de sus adversarios sostenían que López Obrador estaba loco. Que se estaba haciendo un harakiri que se encaminaba a un suicidio político. Argumentaron que su posición antisistémica sólo tenía sentido si ya había renunciado a ser presidente de la República y había decidido convertirse en la conciencia combativa, crítica y radical del país. Ya no en Palacio Nacional sino en la plaza pública. Dijeron que AMLO enfrentaba un dilema: ser líder o leyenda. Pronosticaron, incluso, que si el fallo del

tribunal le era adverso, su siguiente medida sería la huelga de hambre. Si eso sucedía, transitaría de la posibilidad de ser un gran dirigente a un personaje de leyenda, y habría dilapidado todo su capital político y el del PRD, que en esas elecciones, con sus 15 millones de votos, se había transformado en la segunda fuerza política del país.

Sin embargo, para López Obrador la lucha no había terminado. Pensaba que “la democracia, como la justicia, como la libertad, no se implora, sino se conquista”. “No pensemos —dijo— que de arriba para abajo se hará valer la democracia. Esto sólo será posible con el esfuerzo y la movilización de los ciudadanos.” Sus voceros afirmaban que el PAN tenía pavor al recuento de los votos, como si las urnas fuesen una caja de Pandora de la cual, una vez abierta, escaparan los peores fantasmas y conjuros para México. Su lógica funcionaba así: el PAN se resistía políticamente al recuento y por eso había resistencia civil. Lo que se combinaba con un principio de la teoría del caos: no hay un nuevo orden permanente sin un caos temporal. Por eso insistían una y otra vez que Calderón debía actuar como lo habían hecho Romano Prodi en Italia y Óscar Arias en Costa Rica, cuando encabezaron elecciones cerradas y aceptaron un recuento de votos. En ambos casos, al contarse los sufragios habían ampliado su ventaja inicial y pudieron gobernar sin sombras de duda. Pero en México el candidato oficialmente ganador se oponía al recuento que validaría su triunfo y lo legitimaría, y el candidato oficialmente perdedor encabezaba un movimiento a favor de un recuento que, si le era desfavorable, pondría punto final a su resistencia.

#### LOS JUECES TOMAN EL CONTROL

No obstante, en la coyuntura no parecía haber mucho espacio para la “lógica política”. Y así, mientras azules (PAN) y amarillos (PRD) parecían empeñados en construir un México monocromático, la decisión seguía pendiente. El proceso electoral en México seguiría en suspenso hasta que los magistrados del Tribunal Electoral dieran su fallo. Finalmente, el tan esperado parto electoral de los montes ocurrió el sábado 5 de agosto, pero resultó insatisfactorio.

En sesión pública, el TEPJF resolvió por unanimidad desechar la pretensión de la coalición Por el Bien de Todos de realizar un nuevo escrutinio y cómputo de las 130 477 casillas instaladas el 2 de julio. Al sustentar su resolución, los magistrados subrayaron que la citada fuerza política sólo había impugnado el cómputo de 230 distritos electorales, “circunstancia que por sí sola revelaba la inadmisibilidad de la pretensión del recuento general de los sufragios recibidos en todas las casillas”. El tribunal ordenó abrir sólo 11 839 paquetes electorales, correspondientes a 9% del total.

Según los expertos, la decisión de recontar los sufragios de sólo 9.07% de las



casillas electorales se había sustentado en tecnicismos legales. Los integrantes del TEPJF se apegaron a la letra de la ley y a la gramática jurídica. Pero el fallo no reflejó el sentido de Estado exigible a los miembros de un órgano encargado de verificar que los resultados del proceso comicial fueran el reflejo efectivo de la voluntad popular y no consecuencia de irregularidades dolosas o fraudulentas. Los magistrados dejaron a un lado preceptos constitucionales que establecían los principios de imparcialidad, objetividad y certeza en los comicios.

En las filas de la coalición lopezobradorista existía la convicción de que al cerrar el camino a que se contaran de nuevo todos los votos, el tribunal había cerrado el paso a la conformación de una Presidencia legítima y aceptada por todos. Hubo quienes pensaron también, que la vía del Poder Judicial había quedado clausurada. Que el candidato conservador Felipe Calderón sería sentado en la silla presidencial, si hubiera sido necesario, con el apoyo de la fuerza pública.

Como dijo la magistrada Alfonsina Bertha Navarro, “no hay elección perfecta”. Los siete integrantes del TEPJF encontraron que la intervención política del presidente Vicente Fox para favorecer al candidato del PAN había puesto en “riesgo” los comicios. Asimismo en un dictamen aprobado por unanimidad, se tuvo por acreditada la transgresión de la legislación electoral en la que incurrieron los grandes capitanes de industria agrupados en el CCE (con sus mensajes publicitarios que invitaban a la ciudadanía a votar por el modelo económico vigente, proselitismo vedado por la ley), así como la confirmación de la “propaganda negativa” (campañas de miedo y de odio y *propaganda negra*) del PAN.

No obstante, las anomalías corroboradas e incluso las francas infracciones a la ley resultaron nimias para los magistrados o no fueron consideradas determinantes para impedir la declaración de validez de la elección. Es decir, algunas denuncias interpuestas por la coalición centroizquierdista pudieron ser probadas, pero lo que el tribunal no pudo o no quiso comprobar fue el impacto electoral que tuvieron. Algo así como decir que la muerte de un individuo fue causada por una bala, pero no se tiene evidencia de que el dedo que apretó el gatillo fue lo que provocó la muerte.

En el año 2000, ganar ilegalmente la Presidencia de la República le había costado al PAN 400 millones de pesos. Ése fue el monto de las multas que le impuso el IFE a Acción Nacional, por los apoyos económicos ilegales que distintos grupos empresariales —entre ellos varias transnacionales como Enron, Coca Cola y Bacardí— canalizaron a la campaña del triunfador a través del grupo Amigos de Fox. Pero refrendar el triunfo en 2006 le había resultado aún más barato: sólo un rozón, ni siquiera una reprimenda a Fox por su injerencia en la contienda. Por lo que el Tribunal Electoral confirmó la cínica tesis de que violar la ley es buen negocio, pues aun considerando el monto de la sanción (cuando la hay) es mayor la ganancia que se obtiene y la infracción se justifica. Ergo, esa invitación a violar la ley fue uno de los

saldos negativos de la conclusión del proceso electoral en México.

Como repitieron hasta el cansancio en esos días los voceros de la Presidencia, del IFE, del PAN y los círculos empresariales y sus grupos de fachada, jurídicamente el fallo del tribunal era “inatacable”. Pero éticamente era inatacable, porque no producía certeza. Casi 15 millones de personas que votaron por López Obrador<sup>12</sup> siguieron pensando que hubo fraude y que la declaración de ganador a Calderón era una imposición; una burla. El tribunal había incumplido deberes de transparencia y generado un abismo entre la verdad jurídica y la verdad popular. En vez de colocarse al margen de las posiciones partidarias, de hacer a un lado las presiones gubernamentales y de los empresarios, y fundamentar su juicio en una visión de Estado, los magistrados tomaron partido, y tal postura resultaría socialmente costosa, porque devolvía a los mexicanos a los tiempos en que campeaba la incredulidad electoral.

Tras conocerse el fallo, Calderón modificó de manera radical su discurso y llamó al diálogo y a la unidad nacional. Incluso prometió incorporar a su plan de gobierno las propuestas de sus adversarios. Llamó a dejar atrás las diferencias políticas y la confrontación. “Los mexicanos podemos pensar diferente y no ser enemigos”, expresó Calderón. Pero López Obrador desconoció la victoria del panista. Una vez más, acompañado por miles de simpatizantes en el Zócalo capitalino, que bajo una lluvia pertinaz no dejaron de llamarlo “¡Presidente!, ¡Presidente!”, AMLO rechazó el fallo del Tribunal Electoral volvió a llamar “pelele” a Calderón, dijo que nunca transaría con “el hampa de la política y los delincuentes de cuello blanco” y que tampoco se doblegaría “ante los clasistas, racistas y fascistas que hipócritamente aparentaron ser gente de buena voluntad”, y anticipó el inicio de una “revolución de conciencia y de mentalidad”.

Según el dirigente de la coalición Por el Bien de Todos, los magistrados del TEPJF “se sometieron; no tuvieron la voluntad de actuar como hombres libres”. Habían optado por convalidar el fraude electoral. Por ello, AMLO dijo que seguiría adelante con la resistencia civil pacífica y reiteró la convocatoria a una Convención Nacional Democrática para el siguiente 16 de septiembre, de la que surgiría “el gobierno del pueblo”. A su vez, la senadora electa Rosario Ibarra de Piedra, vieja luchadora por los derechos humanos, leyó una declaración en la que los legisladores de la coalición rechazaron la usurpación y afirmaron que no permitirían que “el presidente espurio” tomara posesión el 1° de diciembre.

El día que acudió al Tribunal Electoral a recibir su constancia de presidente electo, Calderón llegó en helicóptero y tuvo que entrar y salir por la puerta de atrás. Afuera del recinto, simpatizantes de López Obrador gritaban consignas en su contra y arrojaban huevos. Terminaba una etapa.

Pero lejos de restablecerse la normalidad institucional, todo indicaba que se

agravaría la crisis política en que los poderosos del gobierno, los negocios y los medios masivos habían sumido al país. No estaba claro sobre qué bases podría el panista construir su gestión presidencial. Tampoco, si la violencia represiva sería, finalmente, la que terminaría con los plantones de la oposición y con las nuevas acciones de desobediencia civil que anticipaban las huestes de López Obrador.

#### DOBLE PODER EN LA REPÚBLICA SIMULADA

En el marco de una sucesión de grandes movilizaciones de masas integradas mayoritariamente por pueblo pobre, y tras la realización de la Convención Nacional Democrática y la constitución de un Frente Amplio Progresista —instancias que contaron con el liderazgo indiscutido de Andrés Manuel López Obrador—, iría conformándose en México un nuevo bloque histórico, que en la nueva fase de luchas políticas y sociales abierta tras el fraude electoral del 2 de julio se perfilaba para disputar la hegemonía y un nuevo proyecto de nación a la alianza dominante.

En la coyuntura preelectoral se trataba, en rigor, de la disputa entre dos bloques con proyectos de nación no del todo antagónicos. Por un lado, el proyecto de una patria financiera conducido por una plutocracia apátrida y parasitaria que contaba con administradores gubernamentales y una clase política dóciles y medios masivos de propaganda. Bloque de poder legitimado por la jerarquía conservadora de la Iglesia católica mexicana en alianza subordinada con círculos del poder imperial en Washington. Por otro, un proyecto de cambio reformista, de corte nacionalista moderado, con acento en lo social y de intención redistributiva, encarnado por López Obrador, en el marco de una alianza electoral pluriclasista —no exenta de contradicciones— que había logrado reunir a tres agrupaciones políticas con representación parlamentaria (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia) ciudadanos sin partido, integrantes de sindicatos, organizaciones campesinas e indígenas, grupos populares, sectoriales y barriales creadores y difusores de la cultura y juventud estudiantil que vieron la posibilidad de acceder al gobierno por las vías legales, democráticas y pacíficas.

Sin embargo, tras la sostenida ofensiva del gran capital, que en la fase poselectoral intentó y logró imponer por la fuerza a Felipe Calderón con la intención de garantizar la implementación de la segunda generación de contrarreformas neoliberales afines al Consenso de Washington (en particular la privatización de los recursos energéticos: petróleo, gas natural, agua y electricidad), en el marco de una aguda polarización clasista, sin coyunturas electorales a la vista y de la mano de una movilización popular en ascenso, de signo radical y anticapitalista, que podría inducir al bloque dominante a utilizar el recurso desesperado de la fuerza, dicha confrontación entre

bloques podría adquirir a corto o mediano plazos un carácter antagónico.

Tras el nuevo fraude de Estado había quedado al desnudo un orden jurídico-electoral ramplón, de opereta, más propio de una república bananera que de un país que contaba en su haber con uno de los grandes procesos revolucionarios del siglo XX. A su vez, el intento por imponer *a la brava* al representante de los poderes fácticos, la derecha vernácula y el imperialismo estadounidense, redundó en una autodeslegitimación del sistema presidencialista mexicano con sus caducas instituciones de clase.

En ese contexto, la formación de un combativo movimiento de resistencia civil pacífica de carácter horizontal y asambleísta —producto de un largo proceso de acumulación de fuerzas populares que en la última fase se había nutrido de la redes de solidaridad creadas por miles de mexicanos tras los sismos de 1985, la irrupción del movimiento cardenista en la coyuntura preelectoral de 1988, la insurrección campesino-indígena liderada por el EZLN en 1994, que dio paso a una singular experiencia autonómica de signo anticapitalista, a lo que se sumaron después la rebelión de los ejidatarios de Atenco y la expresión de poder dual protagonizada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)—, refrendó el liderazgo y el poder de convocatoria de López Obrador y dio pie al nacimiento de una amplia coalición antioligárquica, estructurada sobre dos ejes: la Convención Nacional Democrática y el Frente Amplio Progresista, que se planteaba como objetivo un cambio de régimen, con la creación de una cuarta República basada en una profunda reforma constitucional y nuevas instituciones.

Integrada por un 1 025 724 delegados registrados, la Convención Nacional Democrática rechazó la “usurpación”, desconoció a Calderón como presidente, así como a los funcionarios que él designara, y todos los actos de “su gobierno *de facto*” en el marco de una “república simulada”. Los delegados designaron a López Obrador como “presidente legítimo” de México, lo autorizaron a integrar un gabinete alterno, elegir la sede de su gobierno en la capital del país con carácter itinerante y acordaron que tomara posesión el 20 de noviembre, aniversario de la Revolución mexicana. Además, la convención impulsaría de manera plebiscitaria un proceso constituyente con el propósito de que las elecciones fueran efectivamente del pueblo y para el pueblo. La caudalosa corriente ciudadana que siguió a López Obrador, que era parte de ese pueblo, no su totalidad, tenía ahora el imperativo de persuadir de sus metas al resto de la sociedad. Cabía descontar que el bloque dominante, que hasta ahora se había manejado a la ofensiva, no se quedaría cruzado de brazos.

En septiembre y hasta el cambio de mando el 1° de diciembre, México viviría una situación paradójica pero no totalmente inédita. Tendría tres presidentes: el titular del Poder Ejecutivo vigente, Vicente Fox; Felipe Calderón, declarado vencedor de las elecciones por el tribunal electoral, y Andrés Manuel López Obrador, nombrado “presidente legítimo” ante un millón de personas.

En medio de una aguda crisis institucional, Fox abdicó de su tarea a mitad de su mandato, cuando vio que no podía con el trabajo presidencial, y se dedicó a preparar a un sucesor que le cubriera las espaldas ante las denuncias por corrupción que rodearon su gestión. Felipe de Jesús Calderón fue ungido presidente por un tribunal federal que reconoció que hubo graves irregularidades en los comicios, pero que no obstante validó la elección. El tercero Andrés Manuel López Obrador, quien encabezaba un movimiento de resistencia civil pacífica contra el fraude electoral, acababa de ser designado “presidente legítimo” en la plaza pública. Allí había prometido a sus seguidores no claudicar ni rendirse, y aseguró que asumiría la presidencia paralela el 20 de noviembre, ocasión en que nombraría un “gabinete espejo” y comenzaría un gobierno itinerante en resistencia.

Fox, un ex ejecutivo de Coca Cola que en el año 2000 puso fin a una hegemonía de 71 años de gobiernos autoritarios del PRI, inició su administración como símbolo de la transición a la democracia y terminó su mandato salpicado por actos de violencia represiva, acusado de haber orquestado una nueva elección de Estado y de estar envuelto en sonados casos de corrupción que involucraban a empresas de sus hermanos y a la familia de la primera dama, Marta Sahagún. En el corto plazo, el movimiento que encabezaba López Obrador le propinaría a Fox dos derrotas simbólicas. El 1° de septiembre parlamentarios de la coalición Por el Bien de Todos le impidieron cumplir con un viejo ritual de corte monárquico, el más emblemático del sistema presidencialista mexicano: rendir su último informe de gobierno en el recinto parlamentario de San Lázaro. Y la noche del 15 de septiembre, con el Zócalo de la ciudad de México ocupado por las huestes lopezobradoristas, Fox tuvo que resignarse a dar el tradicional “grito”, con el que cada año se celebra la Independencia mexicana, en Dolores Hidalgo, Guanajuato. En la capital azteca la ceremonia conmemorativa fue encabezada por el jefe del gobierno local, Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática.

Algo insólito: un país, dos “gritos”. Rodeado de un nutrido blindaje protector, desde su “exilio” político en Guanajuato, el presidente Fox lanzó vivas a la democracia, a las instituciones y a la unidad de la patria. A su vez, desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento, ante un mar de capitalinos reunidos en la Plaza de la Constitución, centro político y administrativo del país, Encinas vitoreó a Benito Juárez y la soberanía popular. Fue, la del Zócalo, una noche con sabor a victoria para los integrantes del movimiento de resistencia civil pacífica. En la histórica plaza se

impuso un solo grito repetido hasta el cansancio: “¡Obrador!” En síntesis, dos “gritos”, dos Méxicos: el institucional, socialmente relegado pero mediáticamente exaltado frente a la verbena popular, políticamente creciente pero silenciada según decretó el duopolio de la televisión privada. Por si faltara algo, de manera torpe y provocadora, el vocero de la Presidencia dijo que Fox había decidido no dar el “grito” en Palacio Nacional porque “informes de inteligencia militar” habían alertado sobre la presencia de “grupos radicales dispuestos a matar ciudadanos”. Fue otro exabrupto de quienes cultivaban la teoría de la conspiración.

Ambos hechos fueron un anticipo de lo que tendría que enfrentar el gobierno de Felipe Calderón: la constante manifestación de descontento de amplios sectores ciudadanos en contra de su mandato. Calderón asumiría con un grave déficit de legitimidad y debía gobernar un país dividido, polarizado y con un amplio sector de la ciudadanía movilizado. Graduado en derecho y con un posgrado en administración pública en la Universidad de Harvard, ex presidente del Partido Acción Nacional, ex diputado federal, ex secretario de Energía en el gabinete foxista y miembro de una de las familias de la ortodoxia partidista, desde su designación como presidente electo Calderón vivía a salto de mata, custodiado por un ejército de guardaespaldas conformado por soldados de élite.

A donde iba, gente común, los ignorados de siempre, que se sentían burlados y agraviados porque consideraban que su designación como presidente había sido producto de un fraude y una imposición autoritaria, le expresaban su rechazo con gritos, chiflidos y pancartas. Para ellos, Calderón “el espurio” era el símbolo de la continuidad neoliberal iniciada hacía 24 años por Miguel de la Madrid. Calderón era el hombre al que una poderosa plutocracia y sus socios del exterior le habían encomendado la tarea de seguir con las privatizaciones y la entrega de la soberanía nacional. México vivía una crisis política profunda, y la supervivencia de López Obrador, así fuera bajo la discutible figura de “presidente legítimo” —en 1988, cuando el fraude que impuso a Carlos Salinas en detrimento de Cuauhtémoc Cárdenas, los panistas en resistencia civil pacífica también declararon a Manuel J. Clouthier “presidente” y éste nombró un gabinete paralelo del que el mismísimo Fox formó parte—, impedía que esa crisis fuera resuelta como otras veces, mediante arreglos cupulares. Las masas de *ninguneados* y su líder carismático habían dicho que no dejarían asumir el cargo a Felipe Calderón el próximo 1° de diciembre. Habría que esperar para ver si era cierto. Por lo pronto, quien parecía que no vendría a la asunción de Calderón era el presidente de Venezuela, Hugo Chávez quien aseguró que no reconocería su mandato, lo cual provocó una nueva crisis diplomática entre México y Caracas.

Sin duda, el camino hasta diciembre sería largo y complicado. Calderón y sus patrocinadores apostaban al desgaste del movimiento de resistencia civil pacífica y a

eventuales errores que cometiera López Obrador. Por lo pronto, la campaña de descalificación y linchamiento mediático no cedía. Desde los medios se atizaba el odio y la polarización social. Se metía miedo en la clase media. Y habían comenzado a reaccionar con desprecio y mofa ante el surgimiento de la Convención Nacional Democrática y sus resoluciones, incluida la designación de López Obrador como “presidente legítimo”. El cardenal Juan Sandoval, arzobispo de Guadalajara y hombre de la más alta estima en la curia romana, había dicho con sorna que él también ya había designado presidente a su jardinero. Según la dirigencia nacional del PAN, la proclamación de López Obrador como “presidente legítimo” por la Convención Nacional Democrática equivalía a “una declaración de guerra política, que será respondida en especie”. Junto a la convención, que había formalizado la desobediencia civil pacífica, la creación de un Frente Amplio Progresista fue un nuevo as sacado de la manga por López Obrador. Pese a los golpes recibidos, su liderazgo no había menguado. Obsesionado por su misión histórica, dueño de un instinto político que lo sacó a flote en las peores circunstancias, este “líder en estado de gracia” —como lo llamó Juan Villoro— era un hueso muy duro de roer.

Por eso, ante la dialéctica del todo o nada de ese incansable líder de la resistencia, y frente a la posibilidad de que en su presidencia paralela e itinerante López Obrador creciera y se consolidara, los barones del dinero y sus propagandistas sintieron temor. Sabían que era el símbolo del descontento popular ante las autoridades frívolas corruptas, insensibles y excluyentes que administraban el país. Por eso, nada estaba dicho todavía. México, como tantas veces antes en la historia, seguía dando sorpresas.

#### CAÓTICO CAMBIO DE MANDO

En una fugaz y caótica ceremonia, inédita en la etapa posrevolucionaria del país, Felipe Calderón asumió el 1° de diciembre de 2006 la Presidencia de la República en un México sumido en la violencia y en una profunda crisis institucional. Resguardado por un fuerte dispositivo militar, Calderón entró y salió por la puerta de atrás del salón de ceremonias del Palacio Legislativo de San Lázaro, y permaneció apenas tres minutos en el recinto, los necesarios para rendir su protesta como mandatario e irse.

Su llegada, aguardada entre expectación y tensión, morbo y crispación por una ciudadanía polarizada, fue precedida por una nueva trifulca entre legisladores de su partido y de la oposición. En un hecho insólito, diputados del PAN y del PRD mantenían ocupada de manera violenta la tribuna del Congreso desde tres días antes. Los panistas, para garantizar que Calderón pudiera jurar como titular del Ejecutivo. Los perredistas para tratar de impedirlo, ya que lo consideraban un presidente

“espurio”. Flanqueado por el mandatario saliente Vicente Fox, y por el presidente de la mesa directiva de la Cámara Diputados, Jorge Zermeno, y custodiado por elementos del Estado Mayor Presidencial (un cuerpo de élite del Ejército que responde al titular del Ejecutivo), un Calderón desencajado cumplió rápidamente con el ritual presidencialista en medio de abucheos y silbidos.

Al momento de rendir su juramento, diputados de oposición corearon la consigna: “Protestas y te vas, protestas y te vas”, en tática alusión al “Comes y te vas” que el entonces presidente Fox había “recetado” a su homólogo cubano Fidel Castro durante una cumbre de Guadalajara, tres años antes. En realidad, en previsión de que la ceremonia de cambio de mando no pudiera efectuarse en la sede del Congreso como disponía la Constitución, Calderón había sido investido de la primera magistratura por el presidente Fox en el último minuto del jueves 30 de noviembre, en un acto privado y carente de legalidad, en la residencia oficial de Los Pinos.

En un ambiente marcadamente castrense, Fox entregó la banda presidencial, máximo emblema de la Presidencia, a un cadete militar, para que éste se la pasara a Calderón. Fue, en rigor, una demostración evidente de debilidad, pero que sin embargo para algunos observadores constituyó una inequívoca amenaza de fuerza. Para otros fue un golpe de Estado técnico. Así, a medianoche, con un entorno marcial cargado de simbolismo, la caracterización de Calderón como jefe del Ejecutivo fue realizada por una voz en *off* en cadena nacional. Lo que ratificó el afán o la necesidad del grupo gobernante de sustituir a las cámaras del Poder Legislativo por las cámaras de la televisión. “Asumió por TV”, sintetizó en su nota de portada el diario *Milenio*. Sin duda, una manera dramática y distorsionada de comenzar un ejercicio de gobierno.

Casi diez horas después, Calderón se presentó ante un Congreso militarizado en varias cuadras a la redonda, como virtual presidente en funciones, antes de prestar la protesta reglamentaria. En un contexto signado por la disputa por los símbolos, Calderón, quien en julio anterior había obtenido sólo 35.9% de los votos y debería encabezar un gobierno de minoría, trató de aparentar que el resultado de la elección no estaba sujeto a una impugnación importante por la fuerza opositora liderada por el ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

Mientras Calderón hacía su fugaz irrupción en el Congreso López Obrador iba a la vanguardia de una nutrida manifestación de simpatizantes que lo reconocían como presidente legítimo. Los marchistas tenían la intención de llegar hasta el Auditorio Nacional donde Calderón recibiría a sus invitados extranjeros y a sus correligionarios del PAN, pero fuerzas de élite de la policía militarizada, con vallas y equipo antimotines, impidieron el paso.

En un mitin improvisado en pleno Paseo de la Reforma, López Obrador prometió a sus seguidores impulsar desde su “presidencia paralela” lo que definió como “la



cuarta república”. Para eso, a través de los legisladores del PRD y sus aliados reunidos en el Frente Amplio Progresista, impulsaría una reforma política que diera paso a nuevas instituciones que hicieran efectivo el derecho a la democracia y a la justicia social.

De alguna manera, ese 1° de diciembre quedaron simbolizados los dos Méxicos en que estaba dividido ideológicamente el país. Para muchos ese día marcó el fin de una época y el inicio de otra. En rigor, terminaba la era Fox y había un cambio de guardia. Pero no habría cambios de fondo en la manera de conducir el país, dado que Calderón encarnaba el más puro continuismo. En todo caso su gabinete de choque, liderado por el ex vicepresidente del Fondo Monetario Internacional, Agustín Carstens, en materia económica y por Francisco Ramírez Acuña, titular de la cartera de Gobernación y un hombre singularizado por la “mano dura” tras su gestión como gobernador de Jalisco, en el área de seguridad, no dejaba mucho lugar para el optimismo. Era predecible que México seguiría sumido en la incertidumbre, y asomaba ya en el horizonte la posibilidad de una regresión autoritaria. Sin descartar, dada la coyuntura que Calderón pudiera convertirse en la punta de lanza de un intento restauracionista de corte conservador a nivel hemisférico, bajo el control de Estados Unidos.

#### CALDERÓN CONTRA EL NARCOPODER

De la mano de Calderón, en los últimos días de 2006 volvió a tomar relieve en México una vieja discusión sobre la capacidad del Estado-nación para combatir a los cárteles de la economía criminal y la violencia que generan. La polémica, que dividió a optimistas y pesimistas, giró en torno a una pregunta: ¿era ganable la guerra contra las mafias criminales? El nuevo gobierno de Felipe Calderón pensaba que esa guerra se podía ganar porque, aducía, el Estado es más poderoso que cualquier individuo o grupo de individuos que lo desafían. Durante su campaña Calderón prometió “mano dura” contra el crimen y desde el inicio de su gestión comenzó a aplicarla. Con la asesoría del FBI y la DEA, rápidamente militarizó la lucha contra la delincuencia.

Como parte del proyecto de reingeniería al modelo de combate a la delincuencia, el nuevo gobierno se abocó a crear un Cuerpo Federal de Policía, priorizar las labores de inteligencia y volver a instrumentar la figura de un “zar” antidrogas. Era evidente que en los últimos años el poder militar y financiero de los cárteles y las mafias criminales había aumentado. Se hablaba de un “narcopoder”. En lo que fue descrito como un franco proceso de “colombianización” del país, la violencia estaba desatada y había rebasado todos los límites. Durante el sexenio de Vicente Fox se había producido un promedio de 1 500 ejecuciones anuales. El 51% de los 100 000 delitos que se cometían cada año en México estaba ligado al narcotráfico. Calderón había

dicho en campaña que tenía mano firme para restablecer el orden y la seguridad en México. Sin embargo, en política, la forma y los símbolos importan. Por eso, el “estilo personal de gobernar” del flamante titular del Ejecutivo había arrancado algunas expresiones de alerta.

Hubo quienes pensaron, por ejemplo, que con el pretexto de garantizar la seguridad pública en un país asolado por la violencia criminal, se podría estar incubando un proceso que condujera hacia un modelo autoritario de seguridad. Es decir, se estarían echando los cimientos para la edificación de un Estado de corte cada vez más policiaco-militar. Desde un primer momento, Calderón, cuya legitimidad había estado acotada por la sombra de un megafraude de Estado, quiso significar su asociación con las Fuerzas Armadas. Como se comentó antes, en el primer minuto del 1° de diciembre anterior, en una ceremonia sin precedentes en la vida republicana de México, Calderón asumió la titularidad del Ejecutivo en la residencia oficial de Los Pinos rodeado de militares. En un acto simbólico de traspaso del poder, su antecesor, Vicente Fox, se despojó de la banda presidencial y la entregó a un cadete del Colegio Militar. Acto seguido, ya investido como mandatario, Calderón tomó protesta a los miembros de su gabinete de Seguridad Nacional.

Horas después se produciría su agitada toma de mando ante un Congreso militarizado, pero lo más significativo de ese 1° de diciembre fue la presencia de Calderón en el Campo Marte, donde presencié un desfile castrense y anunció un aumento salarial para los miembros de las instituciones armadas. Con posterioridad, en el marco de una gran cobertura mediática, lanzó su “guerra” contra el *narco* y la delincuencia organizada mediante la intervención combinada de las Fuerzas Armadas y las policías de todos los niveles en Michoacán, Baja California y Sinaloa, estados detectados como los principales “focos rojos” de la criminalidad.

Previamente había ordenado transferir 7 500 efectivos de la Tercera Brigada de policía militar y 2 500 de la Marina de Guerra a la Policía Federal Preventiva, lo que entrañó una contradicción, ya que la prevención no se lleva con lo militar. En el presupuesto para el año fiscal aprobado en diciembre por el Congreso se registró un aumento significativo en el rubro de la seguridad, en detrimento de otras áreas como educación y cultura. La Secretaría de Gobernación gastaría 40% de su presupuesto en inteligencia y seguridad nacional.

Por otra parte, el 3 de enero de 2007, en la que fue su primera actividad pública, el presidente se presentó en una unidad militar de Michoacán ataviado con una gorra de cinco estrellas y casaca militar y compartió el “rancho” (el PAN y la sal según la jerga castrense), con los soldados. Desusado en México, el gesto fue interpretado como un intento por ostentarse como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pero también fue visto como una manera de demostrar que contaba con el apoyo del Ejército después de una elección muy cuestionada.

Los espectaculares y multipublicitados operativos conjuntos del Ejército, la Marina de Guerra y las distintas policías contra el *narco* y la delincuencia organizada arrojaron magros resultados desde un comienzo. Lo que sí avanzó *de facto* fue la reestructuración de todas las policías bajo un mando único a nivel federal. Pero se requerían reformas constitucionales que debían ser aprobadas por el Congreso igual que la creación de gendarmerías supervisadas por el Ejército en poblaciones con menos de 20 000 habitantes. El proyecto fue elaborado por expertos en contraterrorismo, que habían pasado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigación (AFI), con asesoría de mandos militares, de la Guardia Civil española y de otras corporaciones extranjeras como el FBI y la DEA de Estados Unidos.

Según el esquema inicial, el nuevo Cuerpo Federal de Policía estaría conformado por 40 000 hombres y operaría con esquemas similares al de los alguaciles (*marshall*) de Estados Unidos, en el ámbito de la prevención, y al del FBI para persecución. Trascendió entonces que en la creación de la figura de un “zar” antidrogas, el gobierno de Calderón había trabajado de manera estrecha con autoridades de Estados Unidos adscritas al área de seguridad nacional y con altos mandos militares. Se anticipaba que el nuevo “zar” antinarcóticos de México tendría vínculos directos con todas las áreas de los departamentos de Estado y del Tesoro, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la agencia antidrogas de Estados Unidos. Se preveía incluso la instalación de más oficinas de la DEA en territorio mexicano.

Había mucha hipocresía en todo eso. El principal motor del narcotráfico radicaba en los millones de consumidores y adictos estadounidenses. Desde hacía muchos años México era el “trampolín” para la gran “alberca” al otro lado de la línea divisoria. Un kilo de cocaína pura en la ciudad de México valía entre ocho y 12 000 dólares, en la frontera norte llegaba hasta los 25 000 y subía a 50 000 en las principales ciudades de Estados Unidos. Se trataba de un negocio muy lucrativo, igual que el tráfico de indocumentados y el lavado de dinero. La principal ganancia se quedaba en la banca estadounidense. De allí que como en el gobierno de Vicente Fox, en la era Calderón la política interior de México formaba parte de la agenda de seguridad nacional de Washington. La militarización y transnacionalización de los “esfuerzos bilaterales” del combate contra el crimen organizado significaba para México una cesión de soberanía. En ese contexto, la “guerra” del Estado contra el crimen organizado planteaba un falso dilema: se podría controlar o acotar al hampa pero no derrotarla, porque en México existía una corrupción institucionalizada.

La criminalidad organizada había tenido un desarrollo endógeno. No se trataba de un fenómeno paralelo, ajeno a las estructuras del Estado. Había crecido en el interior de la estructura de poder y atravesaba a las grandes empresas, a la banca privada, a las Fuerzas Armadas, a la Procuraduría General de la República, al aparato judicial, a

la clase política. Con medidas de tipo policial y militar, Calderón podría intentar devolver cierta autoridad al Estado y un mínimo de orden a la sociedad, que pararan las decapitaciones y la violencia extrema. Pero nada más. Para derrotar a la criminalidad se necesitaba reformar las estructuras; pero ésa no era la “misión” del proyecto conservador de Felipe Calderón. De allí que lo que se avizorara fuera un Estado autoritario, de tipo contrainsurgente, que con la excusa de combatir a los cárteles y a las mafias estaba dirigido a controlar y aplastar a la disidencia política interna. México viajaba a contracorriente de los vientos de fronda que azotaban la geografía latinoamericana.

#### EL ENEMIGO EN CASA

Cuando todavía no cumplía los simbólicos primeros 100 días como presidente de la República, Felipe Calderón tuvo que enfrentar no sólo a sus adversarios políticos sino también el “fuego amigo” de sus correligionarios del Partido Acción Nacional. Se decía incluso que su peor enemigo, el más agresivo y sin escrúpulos, era el presidente del PAN, Manuel Espino, un nacionalista beligerante que también dirigía la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), expresión de la ultraderecha internacional potenciada en los últimos años por el ex jefe del gobierno español, José María Aznar, y su Partido Popular.

En diciembre anterior, el académico estadounidense Emmanuel Wallerstein había vaticinado que México viviría un “periodo conflictivo” en dos o tres años. Vislumbró, incluso, citando al subcomandante Marcos del EZLN, la posibilidad de un levantamiento o una guerra civil. Tras varios meses de turbulencia política en el marco de una resistencia civil pacífica que se opuso al fraude electoral y luego de los actos de violencia estatal en Oaxaca, con saldo de una veintena de muertos, todo hacía prever un enero caliente en México. Sin embargo, según un primer balance del propio Calderón al cumplir 47 días de gobierno (17 de enero), existía en el país un liderazgo político “más responsable”, la crisis poselectoral había quedado atrás y el ambiente de “zozobra generalizada” se había superado.

Autor de frases ocurrentes y de espíritu un “poquito burlón” según lo describió la escritora Guadalupe Loaeza, Calderón había dicho como presidente electo que “rebasaría” a López Obrador “por la izquierda”; que su toma de posesión “podría ser un día muy divertido” —¡y vaya que lo fue!— y que no le preocupaba ser un “presidente sitiado”. En la coyuntura, ni los neozapatistas del EZLN ni el lopezobradorismo daban signos de vitalidad opositora y la insurgencia representada por la APPO había sido aplacada a sangre y fuego. Incluso, luego de la extradición de una quincena de *capos* de la economía criminal a Estados Unidos, el país no se

incendió. No obstante, Calderón era un presidente sitiado.

Pero el enemigo interno del mandatario estaba en el PAN, en el viejo partido confesional ligado a la jerarquía conservadora de la Iglesia católica, que le estaba dando guerra. La pugna entre el presidente y el partido era visible. Era parte de un enfrentamiento personal entre Calderón y Espino que había arrancado en los tiempos en que Acción Nacional debía designar a su candidato a la Presidencia de la República para los comicios de julio del año anterior. En mayo de 2004, cuando el “delfín” de Fox era el secretario de Gobernación, Santiago Creel, Calderón, entonces secretario de Energía en el gabinete foxista, fue “destapado” por el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña. Y allí empezaron las contradicciones. Fox balcóneó a Calderón por su “imprudencia” y dijo que su acción proselitista estaba “fuera de tiempo y de lugar”. Dándose por regañado, Calderón renunció a la secretaría de Estado y comenzó su campaña, que fue boicoteada por Espino.

La guerra de facciones continuó en el periodo poselectoral cuando en medio del acoso a los lopezobradoristas, que lo calificaban como “presidente espurio”, Calderón reclamó a su partido una “sana cercanía”, ante la indiferencia de Espino, quien se fue a España con todo el comité ejecutivo del PAN. De allí que Calderón declarara después al diario *El País* de Madrid: “Tuve que ser candidato y presidente sin el apoyo del presidente del partido ni del presidente de la República”. Lo cual no era del todo cierto, porque sin el apoyo, la complicidad y la campaña mediática de Vicente Fox y de su entorno Calderón no habría llegado al sillón presidencial de Los Pinos.

No en vano, con desparpajo, Fox se jactaba de ser “él único mexicano que ganó dos presidencias” en un país donde no existe la reelección. Producto de la debilidad con la que llegó al gobierno, Calderón tuvo que aceptar que la mitad de su gabinete quedara integrado por elementos foxistas. En los primeros meses de su gestión había aflorado la sombra de un cogobierno entre el foxismo y el calderonismo. Espino había dicho que Acción Nacional no sería “un partido de Estado” y acababa de incorporar a la cúpula panista a tres miembros del gabinete foxista: al ex canciller Luis Ernesto Derbez; al ex responsable de la seguridad interior, Carlos Abascal, y al ex secretario del Trabajo Francisco Salazar. La medida, a la que se sumó la idea de llamar a las tareas partidarias a Vicente Fox, fue leída como un intento por acotar el poder presidencial. Había quienes veían en esas maniobras la intención de sujetar al actual jefe del Ejecutivo al control de su antecesor.

Era un hecho que Fox, quien había prometido retirarse a su rancho y apartarse de la vida política, estaba de regreso. Apoyado por Espino y ex miembros de su gabinete, Fox, quien también controlaba la fracción panista en ambas cámaras a través del senador Santiago Creel y del diputado Héctor Larios, nombrados por Espino (en el PAN el presidente del partido designa a los líderes de las fracciones parlamentarias), estaba rompiendo las reglas no escritas del sistema político

mexicano, que indicaban que un ex mandatario debe dejar libre el camino a su sucesor, a riesgo, de no hacerlo, de provocar un cisma. Hacía tiempo que el PAN había llegado al fin de la inocencia y dejado de ser el partido eternamente opositor que quería “democratizar” a México, largamente controlado por los regímenes autoritarios priístas. El PAN, ahora, no era ajeno a las luchas por el poder, y se había corrompido y dividido. En su seno asomaban las prácticas violentas del viejo sistema mafioso encarnado por el Partido Revolucionario Institucional en su fase de descomposición. A comienzos de enero, por ejemplo, fue ejecutado en Guerrero un legislador local del PAN y las investigaciones señalaron como autor intelectual al esposo de la diputada suplente, en el marco de un complot intrapartidario inmerso en casos de corrupción y chantajes.

Las ligas de elementos del PAN con las mafias de la economía criminal tampoco eran noticia. El ex gobernador de Morelos Sergio Estrada Cajigal fue sometido a juicio político en su estado, acusado de corrupción y de presuntos vínculos con los *barones* de la droga. Y en mayo de 2005 el ex diputado panista Saúl Rubio fue ejecutado en Sinaloa, luego de cobrar fama pública por haber asistido a los funerales de un lugarteniente de Joaquín *El Chapo* Guzmán, jefe del cártel local, que se hallaba prófugo de la justicia.

Los síntomas de canibalismo político en el interior del PAN y en las estructuras gubernamentales se manifestaron, también, con el *culebrón* protagonizado por Ana Rosa Payán, una ex monja yucateca de profunda convicción conservadora, quien renunció a Acción Nacional tras haber perdido en el proceso interno para la gubernatura de su estado. En un claro pleito de familia, Payán, señalada como integrante de la organización semisecreta de ultraderecha conocida como El Yunque, cercana a Espino y con dos décadas de militar en el partido, acusó a Calderón de haber metido la mano en su estado natal y propiciar un fraude en la designación del candidato panista a gobernador. Es decir, de haber adoptado las execrables prácticas priístas que antaño el PAN había denunciado.

Manuel Gómez Morin, fundador del PAN en 1939, había advertido sobre el reto de ganar el poder, sin perder al partido, su ideología y sus principios. Durante muchos años, el viejo partido se presentó ante la sociedad como homogéneo, serio y capaz de ventilar sus diferencias de manera civilizada. Sin embargo, parecía que con el poder se habían destapado las ambiciones personales y a algunos se les estaba quemando el PAN. Para más datos, en el estado de Aguascalientes una de las plazas más significativas para Acción Nacional, estalló una rebelión en contra del gobernador panista Luis Reynoso, alentada por su antecesor, Felipe González, apoyado por Espino. Legisladores del PAN pidieron la expulsión del gobernador.

Ejecuciones, asesinatos, renunciaciones, rebeliones y la sombra de un “minimato” — expresión extraída de la historia de México en contraposición al “maximato” ejercido

por el ex presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928), quien extendió su poder detrás del trono durante el mandato de su sucesor Pascual Ortiz Rubio—, ahora vía la *foxización* del blanquiazul, auguraban tiempos difíciles para Calderón y para México.

## México: ¿hacia un Estado de excepción?

México comenzaba a vivir una nueva etapa. Desde un inicio, la administración de Felipe Calderón marchaba hacia la conformación de un Estado mafioso servil-autoritario de nuevo tipo. Un nuevo Estado controlado por una plutocracia y apoyado en una violencia reguladora estatal-criminal, para la aplicación de un modelo que podríamos definir como una suerte de colonialismo interno o una guerra de conquista y ocupación del territorio nacional y sus recursos geoestratégicos.

En el marco de una crisis generalizada, se asistía a la construcción de un nuevo modelo de Estado dependiente, más subordinado que antes a Estados Unidos; una suerte de Estado *bantustanizado*, donde las Fuerzas Armadas y las agencias de seguridad del Estado comenzarían a jugar un renovado papel al servicio de la clase dominante. Un nuevo modelo asentado en las economías criminal, informal y formal, en interacción permanente, que echaría cada vez más mano de la violencia reguladora e iría adoptando la forma contrainsurgente en la represión de los movimientos sociales, con el aval de los poderes fácticos y el capital financiero articulados en la coyuntura con una lógica de Estado.

La aplicación en la práctica del *Manual de disturbios civiles* de la sección segunda (“Inteligencia militar”) del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional,<sup>1</sup> había exhibido y desnudaba la acción anticonstitucional de los estamentos castrenses y paramilitares oficiales en los casos Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Michoacán y Atenco, Estado de México, ambos en 2006, donde se echó mano de la represión indiscriminada y mediante acciones deliberadamente aterradoras y desproporcionadas en cuanto al uso de la fuerza, se intentó sembrar un miedo con efecto “ejemplarizante” en la población, apoyándose en acciones de inteligencia y en una estrategia de difusión mediática (propagandística) consustanciales a las operaciones de guerra psicológica.

A lo que habría de sumarse en las postrimerías del foxismo la represión en Oaxaca, seguida en los primeros meses del régimen calderonista por una serie de provocaciones contra campesinos indígenas de municipios autónomos zapatistas en



Chiapas y contra ejidatarios y comuneros que se oponían a la construcción de la represa hidroeléctrica La Parota en Guerrero; los actos de hostigamiento de elementos del Ejército federal, inteligencia militar, y espías y *orejás* del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) contra los delegados de la “Comisión Sexta” del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y adherentes de *La Otra Campaña* en Nuevo León y en otras partes del país, y las ejecuciones, torturas, detenciones arbitrarias y robos —a la manera de botín de guerra, igual que las violaciones sexuales contra las presas de Atenco—, materializados por militares y miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en Nocupétaro, Michoacán, y en un retén ubicado cerca del poblado La Joya, en el municipio de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, donde perdieron la vida cinco civiles, entre ellos tres niños de dos, cuatro y siete años, y tres personas más resultaron heridas.<sup>2</sup>

Tal pareciera que Felipe Calderón decidió cambiar la forma de responder a la lucha civil pacífica de los opositores al régimen plutocrático-mafioso y quienes desafiaban su monopolio y su hegemonía y optó por confrontar a los movimientos sociales en las calles y en las cárceles.

#### UN BÚNKER, DOS BÚNKERES, TRES BÚNKERES...

Hay un búnker que desata campañas de odio y de miedo, con mensajes racistas, anticomunistas y antiintelectuales que recuerdan los gritos frenéticos del falangismo español: “¡Muera la inteligencia!” y “¡Viva la muerte!” En sus filas hay rufianes como los que atacaron a Elena Poniatowska, a Carlos Monsiváis y al cineasta “judío” Luis Mandoki, y tasajearon obras artísticas de apoyo al voto por voto. Ese búnker, constituido por profesionales del odio de extracción cristera profalangista y sinarquista, que se rearticulaban durante el foxismo a partir de los residuos de organizaciones anticomunistas semisecretas tipo el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), la Organización Nacional del Yunque y Los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es preocupante, pero no tanto. Se sabe dónde está, quiénes lo componen y dónde reciben apoyo y dirección moral y económica.

Hay un búnker-masa que integran organizaciones civiles de ultraderecha que profesan un integrismo básico, como la Asociación a Favor de lo Mejor, Red Familia, Yo Influyo, Consejo Mexicano de la Juventud, Alianza Sindical Mexicana, Liderazgo Emprendedor, Compromiso Joven, Vida y Familia, A. C., Asociación Nacional Cívica Femenina, ProVida, Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, Unión Nacional de Padres de Familia, Confederación USEM, México Unido contra la Delincuencia, que se alimentan de la mítica que ampara los valores esencialistas y

permanentes de la plutocracia gobernante, que remiten a la paz, el orden y el continuismo en el marco de una estructura opresora y antidemocrática que se escuda en un liberalismo formal.

Ese búnker-masa, cuyas organizaciones dirigentes esgrimen un prefascismo larvado, es el que se moviliza a partir de fenómenos acrílicos y emocionales (miedo). El que nutre las manifestaciones patrióticas o sale a la calle cuando el “orden” es desafiado por la “criminalidad” (por ejemplo, la Marcha del Silencio del 24 de junio de 2004). Es la misma masa que fue bombardeada mediáticamente con la consigna “López Obrador es un peligro para México”, con la intención de arrancar un voto del miedo en los comicios presidenciales de 2006. Fue a esos grupos a los que se dirigió Felipe Calderón cuando lanzó la campaña “Pintemos a México de Blanco”, en la inmediata fase poselectoral, en el marco de un discurso fascistoide que confrontaba a los “pacíficos” con los “violentos”. Fue en esos grupos, que integran la llamada Sociedad en Movimiento, que buscaron apoyarse Calderón y el PAN desde el gobierno para ensayar un autoritarismo de nuevo tipo.

Además del búnker-acción y el búnker-masa, existe un búnkerbúnker. El búnker dirigente. Dicho búnker está formado por la clase dominante en sus estratos superiores. Es el titular de los intereses que son puestos en peligro por la evolución crítica de la sociedad. En estas circunstancias, los miembros del búnker dirigente no dudan en defenderse con todo el peso de las “instituciones” y las fuerzas represivas del Estado.

Se trata del búnker institucional en cuyo seno se mueven los 10 magnates mexicanos que figuran en la lista de la revista *Forbes*, los 39 *barones* del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios que concentran 40% del PIB nacional, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, los representantes de transnacionales como Procter and Gamble, Kimberly-Clark (Claudio X. González), American Express, Grupo Carlyle (Luis Téllez), General Electric, McDonalds Johnson and Johnson, Microsoft, ING, Jumex (Eugenio y Federico López Rodea), Pepsico, propietaria de Sabritas (Rogelio Rebolledo y Pedro Padierna), unos pocos millares de industriales, jefes de la Iglesia católica y un cortejo de bunkerianos menores que los rodean y los acompañan como los asteroides escoltan a los planetas y contribuyen a su mecánica celestial.

En la inmediata coyuntura poselectoral, el verdadero problema en la batalla por las libertades públicas y la defensa del voto radicaba en el búnker institucional. A medida que se agudizaban las contradicciones, los administradores del búnker-búnker ensayaron una nueva mítica para pasaportar las posturas conservadoras. Recurrieron a una semántica democratizante (Calderón ofreció “cogobernar” con quien antes había definido como “un peligro para México” y aplicar programas que antes criticó por “populistas”) para contrabandear la mercancía reaccionaria y prolongar la

dominación estructural sobre las masas de “renegados” y “violentos”. Así, mientras la sociedad conservadora condenaba “toda” violencia, su larga mano el búnker-acción, ya sea por acción física o intelectual, pero siempre acción directa, realizaba actos vandálicos, intolerantes, como la destrucción de 53 obras que integraban la exposición de gráfica digital *de las obligaciones de la razón (al mayoreo y al menudeo)*.

¿Qué es el poder para el búnker? Ante todo una pasión. Una pasión útil, sórdida, al servicio del juego de intereses. El poder constituye un instrumento de dominio clasista, jamás un mecanismo que encarne la voluntad de la mayoría popular. Para la plutocracia el poder es la emanación jurídica y soberana de su pura voluntad de mando, que se apoya, en definitiva, sobre la necesidad de sostener unos principios inmutables que justifican cualquier medida que pueda adoptarse en el gobierno del Estado, por monstruosa o impopular que ésta sea. Es el empleo del poder como mazo que levita sobre la sociedad. Basta recordar Acteal, El Charco, El Bosque, Sicartsa Atenco, Oaxaca, las tanquetas en San Lázaro.

#### LA APPO Y EL PODER DUAL

Oaxaca es otro de los escenarios privilegiados de la violencia oficial.

En ese estado se desarrolló desde mediados de 2006 un virtual estado de guerra interna promovido por Ulises Ruiz Ortiz, gobernador surgido de un fraude electoral y, por tanto, ilegítimo. Desde su asunción, Ruiz, uno de los principales operadores político-electorales del priísta Roberto Madrazo en el sur de México, se había manejado como un sátrapa con un amplio sentido patrimonialista del poder. Al frente de una administración caciquil y autoritaria canceló *de facto* las garantías constitucionales de libre tránsito, manifestación, organización y expresión, y violó de manera sistemática y permanente los derechos humanos fundamentales.

Desde junio de 2006, a partir de las demandas gremiales de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Ruiz recurrió a los viejos usos gansteriles de dominación priísta combinándolos con tácticas contrainsurgentes típicas del terrorismo de Estado, al aplicar la violencia institucional a través de los aparatos represivos locales, legales e ilegales, públicos o clandestinos (escuadrones de la muerte, sicarios y matones a sueldo) con la intención de destruir una incipiente alianza opositora que, tras un apoyo inicial al movimiento magisterial, había devenido en un amplio espacio de unidad y participación ciudadana denominado Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

El punto de inflexión del conflicto se dio la madrugada del 14 de junio, cuando el gobernador ordenó un brutal operativo de desalojo del plantón que realizaban

maestros huelguistas y organizaciones sociales en el zócalo de la ciudad de Oaxaca. El saldo fue de 92 heridos, varios de gravedad. Tras un repliegue inicial, los maestros se reagruparon y apoyados por organizaciones populares se enfrentaron con piedras y palos a fuerzas de élite de la policía local —provistas de escudos, cascos, chalecos antibalas y macanas y apoyados por un helicóptero que arrojó decenas de granadas de gas mostaza durante tres horas—, y lograron recuperar el zócalo. Dos días después, en una megamarcha, 300 000 personas exigieron la salida de Ulises Ruiz. El 21 de junio, maestros de la Sección 22 organizaciones sindicales, de indígenas, estudiantiles, ayuntamientos populares, comités de padres de familia y colonos resolvieron crear la APPO como espacio de discusión, toma de decisiones y organización con el objetivo de restituir al pueblo su soberanía de elegir y decidir sobre sus representantes.

Expresión unitaria del campo popular, la APPO encarnó a nivel estatal —no sólo en la ciudad capital— un amplio movimiento autonómico y de autodefensa comunitaria, ciudadana, barrial, sindical municipal y ejidal. A partir de una hábil política de alianzas, supo construir una red de redes que llevó adelante acciones de resistencia y desobediencia civil pacífica. (Cabe aclarar que a lo largo del conflicto la violencia partió de las fuerzas especiales de la policía y de la unidad de intervención táctica de la procuraduría estatal, apoyados por grupos paramilitares como los que conformaron la llamada “caravana de la muerte”, la cual atacó y dio muerte a varios brigadistas desarmados que resistían en simbólicas barricadas, a las que se sumaron más tarde agencias de seguridad federales.) El movimiento se caracterizó, además, por tener una dirección colectiva y una práctica de funcionamiento horizontal para la toma de decisiones, todo lo cual, a partir de la discusión democrática y la labor organizada regida por una disciplina consciente, pudo reflejar durante varios meses una unidad de acción.

Se trató de un movimiento asambleísta de nuevo tipo, que desarrolló una práctica social autogestionaria con gérmenes de poder popular en su seno, a la manera de un doble poder. A pesar de su corto tiempo de gestación y merced a su ejemplo de sacrificio, compromiso, tenacidad, iniciativa y creatividad, la APPO contribuyó a elevar los grados de conciencia, organización y métodos de dirección de miles de oaxaqueños que hasta ese momento no habían recorrido los senderos de la participación popular y la resistencia civil activa. Por eso la clase dominante quiso destruirla.

#### OAXACA CONTRAINSURGENTE

Así, lo que comenzó como un problema gremial protagonizado por la sección 22 del

Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, se transformó en un problema político que el gobierno de Vicente Fox derivó en un asunto de seguridad nacional. En rigor, la emergencia de la APPO prendió focos rojos en el bloque dominante que vio desafiada su hegemonía y sus intereses.

Pese a sus contradicciones y matices, la alianza del gobierno de Oaxaca y del gobierno federal, en el plano político, se expresó en un desaseado amasiato entre el PAN y PRI. Y a nivel represivo exhibió dos características principales. Por un lado, el gobernador Ruiz recurrió a la acción coercitiva y violenta del aparato de seguridad del Estado, y cuando éste fue desbordado por la férrea resistencia civil pacífica de los integrantes del magisterio y de la APPO, puso en práctica una acción paralela, clandestina, estatal, vía la paramilitarización del conflicto.

Quedó claro que al intervenir en el conflicto de Oaxaca, el gobierno de Vicente Fox —en consulta con su impuesto sucesor Felipe Calderón— había optado por una salida militar de tipo contrainsurgente. No otra cosa fue el desembarco de helicópteros, tanquetas antidisturbios y cuerpos de élite de la Marina en Huatulco y Salina Cruz, el 30 de septiembre de 2006, así como el sobrevuelo de aviones y helicópteros del Ejército, la Armada y la Policía Federal Preventiva sobre la capital oaxaqueña, entre ellos, una nave espía Schweitzer dotada de alta tecnología (sistemas de grabación, rayos infrarrojos y visión nocturna).

No se trató, entonces, de una simple “acción militar disuasiva” que intentaba enviar a la APPO y a la sección 22 del magisterio un mensaje inequívoco: rendición en la mesa de negociaciones o intervención, según manejaron algunos “expertos” en asuntos de seguridad. Tampoco, dado el volumen de la tropa y el sofisticado equipo castrense, se movilizó a esos elementos para ejecutar una operación de tipo “quirúrgico”. El plan fue otro. Pero los distintos cuerpos de inteligencia (Ejército, Marina, Cisen) alertaron a las autoridades nacionales que Oaxaca no era Atenco. La rebelión popular en ascenso dibujaba un escenario posible con muchos muertos, en un país polarizado políticamente, lo que abría la posibilidad de que se desencadenara un “efecto gelatina”, que derivara, a su vez, en un eventual estallido insurreccional. Eso hizo abortar, inicialmente, el operativo.

Si bien es cierto que durante la recuperación de lugares estratégicos en la ciudad de Oaxaca (29 de octubre) y en el curso de la batalla campal que se produjo en el intento de copamiento de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (2 de noviembre) hubo muertos y heridos, la policía militarizada (PEP) y los cuerpos especiales, de inteligencia y táctica del Ejército y la Armada que participaron en las escaramuzas, no tenían orden de tirar a matar ni de aniquilar al adversario.

No obstante, con su torpe decisión, Fox dio un virtual apoyo al gobernador Ruiz y a sus aliados del PRI, y de paso identificó a la resistencia civil pacífica —protagonizada por amplios sectores sociales oaxaqueños— como el “enemigo

interno” a vencer. A partir del accionar represivo instrumentado por los gobiernos federal y estatal, Oaxaca, como antes Chiapas, se transformó en un estado militarizado de tipo contrainsurgente. Durante varios meses reinó ahí un Estado de excepción, estructurado sobre una base pública a la vez clandestina y terrorista, que buscaba, mediante el ejercicio de la violencia institucional (de poder-fuerza), la desarticulación del movimiento social y la aceptación ciudadana y el consenso forzados afines a “la ley y el orden” formales del bloque de poder dominante.

Tras la asunción militarizada de Felipe Calderón el 1° de diciembre de 2006, México transitaría hacia un régimen dual, que combinaría la fachada de una democracia formal con el terrorismo de Estado. Apoyado en una doctrina de seguridad nacional de tipo antisubversivo —que recuperaría aspectos fundamentales de la aplicada en el Cono Sur de América Latina en los años setenta y ochenta del siglo pasado—, la lógica del modelo tuvo como objetivo la destrucción del “enemigo interno”, concepto que en el desarrollo de un conflicto suele abarcar a todo actor de “desorden social”.

Como hemos reseñado, la actuación extralegal de las Fuerzas Armadas en los sucesos de 2006 en Atenco y en Oaxaca, y la conformación en 2007 de un nuevo cuerpo de élite de despliegue rápido denominado Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos —según decreto publicado en el *diario Oficial de la Federación* el 9 de mayo de 2007—, cuya misión anticonstitucional, entre otras, serían “diversas tareas” de “seguridad interna”, incluido “el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública”, habían ido modificando el carácter del arma convirtiéndola en lo que bien podía calificarse como un “ejército de ocupación” o gendarme en su propio país, ya que su verdadera misión sería la conquista y la ocupación del territorio nacional y la “pacificación” (en sentido contrainsurgente) de los insumisos (líderes y grupos sociales inconformes, y ciudadanos disidentes identificados como el “enemigo interno”), así como la eliminación de la competencia representada por otros grupos de la economía criminal.

La tendencia hacia la conformación de un régimen de fuerza de nuevo tipo se había venido confirmando con la militarización de la seguridad pública, que fue absorbida por el concepto más abarcativo de *seguridad nacional*, lo que iba en detrimento de la *seguridad ciudadana*. En esa lógica, dado que se trataba de una “guerra” —según la llamó desde un inicio Felipe Calderón—, el enemigo no estaba afuera sino adentro, en el interior del país, y era fácilmente identificado como el “antipatria” o el “elemento terrorista” al que había que aniquilar.

Pero además, por vía paralela, se avanzó en un proyecto de reingeniería de los órganos de seguridad del Estado, que comprendía la creación de un Cuerpo Federal de Policía y gendarmerías supervisados por el Ejército en localidades con menos de

20 000 habitantes. Según se anunció el 4 de abril de 2007, la nueva estructura orgánica de la futura Policía Federal quedó integrada por seis divisiones, cuatro de cuyos jefes provenían del Cisen, en tanto que el coordinador de las fuerzas federales sería el general Héctor Sánchez, ex jefe de la Sección Segunda de Inteligencia Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

En ese contexto, la sentencia dictada por el juez Alfredo Blas de Toluca, Estado de México, el 5 de mayo de 2007, quien mediante la fabricación del delito de “secuestro equiparado” condenó a 67 años de prisión a los luchadores sociales Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, no sólo constituyó un acto de venganza, escarmiento y sevicia judicial que seguía la saga de la criminalización de las protestas populares, sino que desnudó la naturaleza fascistoide del régimen *de facto* encabezado por Calderón.

Por la vía de criminalizar la protesta y transformar una acción política en un delito penal, equiparando manifestantes y delincuentes subversivos o terroristas, la justicia pasa a ser un elemento de control social y de disciplinamiento que intenta impedir el avance de las organizaciones sociales. La tendencia dominante en esa etapa parecía consistir en reducir a los actores sociales a meros espectadores y fijar sus acciones en los estrechos límites que establecían los ejecutores de la ley, muchos de los cuales eran los fiscales de la impunidad del antiguo régimen y de su continuidad en el foxismo-calderonismo.

#### EL PLAN MÉXICO

Por otra parte, el cambio de mando en México en diciembre de 2006 significaría la continuidad del proyecto “integrador” de factura estadounidense. Felipe Calderón, quien llegó al gobierno deslegitimado por la sospecha de un nuevo fraude de Estado, se recostó desde un comienzo en las Fuerzas Armadas y a medida que avanzó su gestión fue profundizando las aristas más dependientes de las relaciones de México con Estados Unidos.

En agosto de 2007, tras varios meses de incertidumbre, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, confirmó que en el marco de la “guerra” contra las drogas, el crimen organizado y el terrorismo, México y Estados Unidos negociaban un multimillonario paquete de seguridad similar al Plan Colombia. Sin revelar mayores datos, el funcionario dijo que “algo tarde o temprano se aplicará” en México y que la asistencia estadounidense superaría los alcances del Plan Colombia. Admitió, también, que el acuerdo contemplaba cursos de capacitación y el suministro de equipo y tecnología militar.

Envuelta en un manto de silencio, la negociación de lo que dio en llamarse en

algunos medios el Plan México, se había iniciado en enero de 2007 e involucraba a distintas instancias del gobierno estadounidense (los departamentos de Estado, de Justicia y de Seguridad Interna, el Pentágono, la CIA, el FBI y la DEA) y al Congreso, y por la parte mexicana a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina de Guerra, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República (PGR) y Cisen. El plan fue afinado en marzo siguiente durante la visita del presidente Bush a Mérida, Yucatán, y en mayo cuando funcionarios mexicanos del área de seguridad se reunieron en Washington con la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y establecieron los términos de un memorando de entendimiento, que contendría objetivos, metas, mecanismos y recursos.

Desde un principio quedó establecido que los costos de la “colaboración” correrían por parte de Washington; pese a los desmentidos de Medina Mora y de la canciller de México, Patricia Espinosa, se trataba de asistencia militar y policial condicionada. Dados los elevados montos de la subvención, que podría ascender a 1 200 millones de dólares para los primeros dos años —una cifra varias veces superior a los 45.67 millones de dólares de las ayudas antinarcoóticos y antiterrorista de los acuerdos bilaterales vigentes—, el presidente Bush se vería obligado a llevar la aprobación de los fondos a votación del Congreso. El mecanismo extraordinario para apropiar recursos por fuera del presupuesto regular, conocido como “suplemento de emergencia”, sería similar al utilizado por el presidente William Clinton en 2000, cuando solicitó 1 300 millones para dar inicio al Plan Colombia. En función de lo anterior, el Plan México, igual que ocurrió en Colombia, quedaría sujeto al escrutinio de los legisladores de Estados Unidos.

#### LA SOMBRA DE LA ASPAN

El Plan México se inscribía en la tendencia hacia la militarización y la transnacionalización de la “guerra contra las drogas”, fabricada e impuesta por Estados Unidos en todo el continente, a la que se sumaba, ahora, como parte de un mismo paquete de tipo contrainsurgente, la “guerra contra el terrorismo”. Tal tendencia contribuye al reforzamiento y a la relegitimación del papel doméstico de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales militarizados similar al cumplido durante las dictaduras del Cono Sur, que provocó su desprestigio y su condena por la dramática incidencia sobre los derechos humanos. Así, la “guerra contra las drogas” facilita la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones domésticas con base en el “enemigo interno” y el (re)establecimiento de alianzas militares bi y multilaterales bajo el control del Pentágono, al amparo de una redefinición dudosa de la “seguridad continental”, supuestamente amenazada por el narcotráfico.



La confirmación de que Felipe Calderón venía negociando con el gobierno de Estados Unidos un programa de asistencia en materia de seguridad similar al Plan Colombia, abonaba la teoría de que el país vivía un larvado proceso de militarización del Estado, avalado por Washington. El plan, titulado formalmente, en principio, Iniciativa de Seguridad Regional, tenía entre sus objetivos de corto plazo aumentar de manera significativa la ayuda estadounidense para fortalecer los sistemas de telecomunicaciones y el monitoreo del espacio aéreo de México. Según la jerga oficial, también contemplaba el apoyo para combatir a las bandas transnacionales del crimen organizado y a terroristas potenciales, así como el fortalecimiento de programas ya existentes destinados a profesionalizar a la policía y proveer tecnología a las agencias gubernamentales que les permitiera enfrentar a grupos delincuenciales equipados con armas modernas y sistemas de monitoreo electrónico y aéreo.

Inicialmente, la información fue divulgada en marzo de 2007 por *The Dallas Morning News*. El periódico estadounidense comparó el tipo de compromiso que negociaban México y Washington con el paquete de ayuda antinarcóticos que a finales de la década de los noventa del siglo pasado aprobó el Congreso estadounidense para Colombia. Dicho programa, que tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 fue ampliado al combate contra las guerrillas de las FARC y el ELN, permitió canalizar 4.8 mil millones de dólares al país sudamericano —en su mayor parte los recursos fueron destinados a las Fuerzas Armadas— con determinados condicionamientos, incluido el adiestramiento —por parte de oficiales del Pentágono, el FBI y la DEA— del ejército y la policía locales dentro del territorio colombiano.

Fuentes consultadas por el *The Dallas Morning News* indicaron que en el caso del Plan México no había habido “absolutamente ninguna conversación sobre el involucramiento del ejército de Estados Unidos” en territorio mexicano. Pero eso tampoco estuvo planteado en los comienzos del Plan Colombia. Más allá de la información proporcionada por el diario texano, era evidente que en los últimos años los organismos de seguridad estadounidenses —incluidos los de la llamada “comunidad de inteligencia”— habían consolidado su presencia en México. La penetración de los distintos cuerpos de seguridad, entre ellos el FBI, la DEA, la CIA y diversas instancias militares y de espionaje del Pentágono, se habían ido incrementando desde la firma de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).

A partir de ese acuerdo, suscrito por los poderes ejecutivos de Estados Unidos, Canadá y México, cuyo objetivo estratégico era la construcción de Norteamérica como un solo espacio geográfico bajo el control de Washington, México quedó integrado al llamado “perímetro de seguridad” de Estados Unidos. Al calor de la ASPAN funcionarios de los tres países suscribieron una batería de cerca de 400

regulaciones —en su mayoría vinculadas con el área de seguridad— que, entre otros rubros, contenían la homologación de las políticas de monitoreo de viajeros y bienes que llegaran de terceros países, incluidos los sistemas de visado, así como una categorización de “viajeros de alto riesgo” y “viajeros confiables”. Preveía, además la futura aplicación de una “tarjeta inteligente” o una identificación biométrica para todos los que quisieran transitar con celeridad a través de las fronteras comunes de la región.

Como quedó establecido desde entonces, la creciente cercanía y la coordinación de los aparatos de seguridad e inteligencia que promovían esas regulaciones y otras medidas no se daba sólo por la “amenaza externa” (potenciales acciones terroristas), sino también por la “inseguridad interna”, que en el caso de México remitía a la violencia desatada por los cárteles de la economía criminal y a la irrupción de nuevas formas de protesta social que fueron ilegalmente asimiladas al terrorismo. Como parte de las regulaciones firmadas México y Estados Unidos acordaron combatir en forma binacional al crimen organizado con la creación de grupos de inteligencia que actuarían en la frontera común. Como había ocurrido antes en el caso de los agentes migratorios y aduanales estadounidenses, esa “regulación” abriría, previsiblemente, la posibilidad de que agentes de seguridad e inteligencia de Estados Unidos operaran en México como lo habían hecho siempre, pero ahora con cobertura legal.

#### LA VERINT TECHNOLOGY INCORPORATION ¿UNA AVANZADA DEL PLAN MÉXICO?

Como consecuencia de esos acuerdos, de mayo de 2006 a mayo de 2007, al menos 2 100 agentes mexicanos de corporaciones federales estatales y locales fueron entrenados por la DEA en cursos especializados en “el combate a las metanfetaminas” (drogas sintéticas). La DEA transfirió seis camiones para ser utilizados en operaciones contra los laboratorios de producción de ese tipo de drogas. No parecía un dato baladí que David Gaddis, entonces jefe de la oficina de esa oficina estadounidense en México, hubiera encabezado antes la misión de la agencia en Colombia. Asimismo, de acuerdo con un informe de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) en los últimos años las Fuerzas Armadas de México habían sido las principales beneficiarias de los fondos antiterroristas de Estados Unidos en América Latina.

A su vez, un ejemplo concreto de *tercerización* o *mercenarización* de las tareas de seguridad del Estado mexicano en el territorio nacional fue la subcontratación de la empresa Verint Technology Incorporation por el Departamento de Estado estadounidense, para que realizara espionaje en materia de comunicaciones desde unas instalaciones especialmente acondicionadas en la sede de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO), en la colonia

Guerrero de la capital mexicana.

Según denuncias públicas recogidas por el diario *La Jornada*, la empresa neoyorquina especializada en inteligencia y constituida por ex militares del Pentágono y ex agentes del FBI, funcionaba en los hechos como una avanzada del Plan México en las oficinas de la PGR en Reforma y Violeta. Su misión era monitorear o “captar” todas las comunicaciones privadas (correos, *chats* y mensajes electrónicos, faxes, llamadas telefónicas de aparatos fijos, celulares y redes internas) con el pretexto de combatir “el crimen organizado y el terrorismo”. La Verint, que había ganado un contrato millonario publicado el 23 de febrero de 2007 en el sitio web de la administración pública estadounidense, se regía por los lineamientos impuestos desde la embajada de Estados Unidos en México, en el marco de un proyecto del Buró Internacional de Narcóticos y Asuntos de Aplicación de la Ley del país vecino. Es decir, la PGR hacía la *talacha* y Estados Unidos se quedaba con la información producto del “espionaje de cuello blanco” que realizaba una empresa privada. Por esa vía, el Pentágono y la comunidad de inteligencia estadounidense acentuaban la dependencia de México en un área sensible para la seguridad nacional.

#### VERACRUZ: ¿NUEVA BASE FOL DEL PENTÁGONO?

Mientras tanto, también con el disfraz de contratos civiles realizados por el gobierno de Estados Unidos, otra empresa privada dedicada al “arte de la guerra” se aprestaba a operar en México. La denuncia formulada a comienzos de septiembre por el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, señalaba que la firma Sycoleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, estaba contratando mercenarios de nacionalidad estadounidense para operar un centro de espionaje aéreo en Veracruz. El proyecto, auspiciado por el Pentágono, se inscribiría en el plan que en materia de seguridad venían negociando en secreto Estados Unidos y México, y contaba con el aval de Felipe Calderón.

La convocatoria, denominada “Centro de operaciones del *staff* de vigilancia aérea Veracruz, México”, establecía, entre otros requisitos para los aspirantes, contar con antecedentes militares mínimos de tres años, específicamente en la operación de vehículos aéreos no tripulados (aviones que cuentan con cámaras de visión nocturna y envío de imágenes en tiempo real) y mantenimiento de helicópteros o “ala fija”. De preferencia, se pedía “experiencia internacional” en aviación y en programas de seguridad, acreditada con servicios a “clientes” de Centro y Sudamérica.

De acuerdo con lo que reveló el general Roberto Badillo, diputado del PRI y secretario de la Comisión de la Defensa Nacional en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al igual que en el caso de la Verint Technology Incorporation, se trataría de

otra típica acción de *tercerización* de la “guerra” contra las drogas y el terrorismo en territorio nacional. Siguiendo la tendencia mundial, en los últimos años había sido una práctica habitual del Pentágono “subcontratar” la guerra a mercenarios que se hacen llamar contratistas militares privados. Los contratistas, también conocidos como *perros de guerra* o *soldados “freelancer”*, van a donde el Pentágono prefiere no ser visto. Esos ejércitos privados se asumen como legales, pero no rinden cuentas a nadie y son un medio efectivo para extender el alcance militar cuando el Congreso y la opinión pública estadounidenses se niegan a pagar más soldados. En años recientes han ido a Bosnia, Nigeria, Macedonia, Colombia, Ecuador y a otros lugares conflictivos del mundo.

Situados en una línea borrosa que no distingue entre lo militar y lo civil, pero dedicados cien por ciento a actividades castrenses que deben ser atendidas por las Fuerzas Armadas de México, los mercenarios, paramilitares o “técnicos” civiles estadounidenses que estaban siendo contratados por la Sycoleman Corporation para operar un centro de espionaje aéreo en Veracruz, con el control del Pentágono entrañaban un grave riesgo para la soberanía nacional. Todo indicaba que, al igual que en Colombia, la fuente de financiamiento sería el gobierno de Estados Unidos, en el marco de la “asistencia” militar contemplada en el Plan México. Sólo que hablar de “ayuda” militar era una falacia, porque de ahí saldrían los recursos para pagar los helicópteros y los aviones producidos por Estados Unidos, la contratación de las compañías privadas, las asesorías y los entrenamientos. En el caso del Plan Colombia, el presupuesto no fue ninguna donación directa de Washington al gobierno colombiano; Estados Unidos siempre mantuvo la autonomía en el manejo de esos recursos. Ante esta perspectiva, Felipe Calderón debería explicar a quién le rendirían cuentas estos *Rambos* sin dios y sin ley: ¿al gobierno de Estados Unidos o a sus contratos? Y en México, ¿quién asumiría la responsabilidad?

No quedaba duda de que las contrarreformas calderonistas en materia de seguridad eran parte, como señalara John Saxe-Fernández, de “la agenda policial-militar-judicial-penal de Washington”, ya que se encaminaban no sólo a la adopción de medidas similares a las del “Estado de excepción” estadounidense (Ley Patriota, Comisiones Militares, Ley Marcial, etcétera), sino también, vía la eventual modificación o derogación de la Ley para Conservar la Neutralidad del País, impulsada por el PAN en el Congreso, a permitir la proyección del poder militar del Pentágono (aéreo, militar y terrestre, incluyendo las fuerzas especiales), en el territorio y en los espacios marítimo y aéreo de México. Según las tendencias en curso, lo anterior facilitaría, en un futuro no muy lejano, el estacionamiento de portaaviones y de otras naves de guerra extranjeras en aguas territoriales mexicanas, e incluso podría llegar a permitir, mediante autorización del Ejecutivo, la entrada de tropas extranjeras al país y la creación de bases militares tipo Manta, en Ecuador, o

Guantánamo en Cuba.

Así, mientras la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos estrenaba contra inmigrantes indocumentados mexicanos y centroamericanos los nuevos proyectiles de plástico con gas pimienta al otro lado de la línea divisoria, y la canciller, el vicecanciller y el procurador general de México se entretenían en desmentir que el Plan México —como lo denominó el propio secretario de Defensa estadounidense Robert Gates— era un símil del Plan Colombia y argumentaban que tal denominación respondía a una “imitación extralógica” de algunos analistas, el próximo lanzamiento del plan, con sus componentes doctrinarios y operativos *made in USA*, vendría a confirmar que la diplomacia de guerra de Washington había logrado superar la otrora “sensibilidad nacionalista” de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. El primer paso había sido el Tratado de Libre Comercio de 1994. Después de la *integración silenciosa* se pasó a “la compraventa de México”. A su vez, el Comando Norte abonó el camino de la ASPAN complementado ahora por el millonario paquete de asistencia militar. Con un agregado: retomando la saga de Carlos Menem, el presidente Felipe Calderón se disponía a inaugurar una nueva fase de *relaciones carnales* con el jefe en funciones de la Casa Blanca.

#### EL QUE PAGA MANDA

Finalmente terminarían las especulaciones: el Plan México fue oficializado por los gobiernos de George W. Bush y Felipe Calderón el 22 de octubre de 2007, pero con un nuevo nombre: Iniciativa Mérida. Sin embargo, persistirían las interrogantes, ya que no era un tratado ni un acuerdo interinstitucional.

El lanzamiento del plan se dio a través de un comunicado conjunto, en el que los gobiernos de Estados Unidos y México definieron la Iniciativa Mérida como “un nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad”. Según el documento, el marco de la nueva cooperación bilateral era hacer frente a “amenazas comunes”, mismas que fueron identificadas como organizaciones transnacionales del crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, las actividades financieras ilícitas, el tráfico de divisas y la trata de personas. Todo eso, precisaba el documento, con base en el pleno respeto de la soberanía, la jurisdicción territorial y los marcos legales de cada país, y orientado bajo los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida y reciprocidad.

Después de siete meses de negociaciones secretas con el gobierno de Estados Unidos, Patricia Espinosa enumeró de manera general algunos de los contenidos del plan, aunque no especificó cantidades ni tipo de armamento. Luego se supo que el millonario paquete de asistencia militar de Estados Unidos a México incluía aviones

y helicópteros para transporte de personal, vigilancia y patrullaje; equipo para la modernización y la ampliación de un sistema de comunicaciones seguras para dependencias de seguridad nacional; escáneres de rayos gamma y rayos equis para detectar droga; *software* para análisis de datos asociados con inteligencia financiera; perros adiestrados para detección de narcóticos, armas y otras sustancias ilícitas; vehículos blindados; equipos y tecnología (*software*, bases de datos, verificación de documentos, digitalización de formas migratorias) para modernizar al Instituto Nacional de Migración; equipo de vigilancia e inspección para modernizar el servicio postal mexicano en la ciudad de México, y entrenamiento y capacitación en varias áreas incluida la profesionalización de la policía.

Cuando dos legisladores del Partido de la Revolución Democrática le pidieron tener acceso al documento firmado con Estados Unidos, saber quién lo había suscrito y con base en qué, así como qué compromisos se habían aceptado y el fundamento jurídico para hacerlo, la respuesta que recibieron fue insólita: el único documento existente era el comunicado conjunto de Estados Unidos y México. Dijo Espinosa: “No hay documento firmado. No es un tratado internacional; es un documento que refleja el compromiso de ambos gobiernos de trabajar de manera conjunta”. Más adelante, ante la insistencia de los senadores, habló de un “compromiso político” de un “acuerdo de voluntades”; de “un esquema de cooperación bilateral [...] que no contiene obligaciones regidas por el derecho internacional. Por lo tanto, no se trata ni de un tratado que deba ser sometido a aprobación del Senado [mexicano] ni de un acuerdo interinstitucional como lo define la Ley de Celebración de Tratados”.

Según el legislador Ricardo Monreal, el Senado de la República había sido *ninguneado* por la Presidencia de la República. Y tenía razón el senador cuando dijo en el recinto legislativo que “el que paga manda” y que la Iniciativa Mérida se parecía a un acuerdo interno del gobierno de Estados Unidos con gobiernos locales o países asociados, semicolonias, como Puerto Rico.

Con algunos agravantes: el Plan México no era un “simple” acuerdo de cooperación técnica, logística y de equipo, como intentó sugerir la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa. Equipo, por otra parte, que ya estaba “etiquetado”, lo que suponía que la mayor parte del paquete millonario iría a diversos rubros específicos y no saldría de Estados Unidos, ya que México debería destinarlo a la compra de aviones, helicópteros de combate, barcos, equipo bélico, radares y sofisticados instrumentos para monitoreo aéreo e intervención de telecomunicaciones, así como para sufragar cursos de entrenamiento y asesorías. Es decir, al igual que ocurría en Colombia, el Plan México sería un negocio millonario en dólares para compañías militares y de inteligencia de Estados Unidos, y ofrecería contratos de mantenimiento, entrenamiento y servicios relacionados con grandes corporaciones del complejo militar industrial. Según un artículo de Misha Glenny en *The*

*Washington Post*, un reporte reciente de la Contraloría General de Estados Unidos (GAO) sobre el Plan Colombia consigna que 70% de la ayuda a ese país nunca sale de Estados Unidos.

Pero además, como se dijo antes, la Iniciativa Mérida no era un simple acuerdo de cooperación técnica, logística y de equipo. Implicaba, también, la instrumentación de reformas judiciales, penales y de procuración de justicia. Incluía la capacitación para profesionalizar la procuración de justicia y para financiar reformas a los procesos judiciales. Es decir, a cambio de dinero Estados Unidos se abrogaba el derecho de decir cuáles reformas debían ser incorporadas a las leyes y códigos mexicanos. Comprendía, además, el reforzamiento de la administración de las prisiones así como el compromiso de compartir información migratoria (verificación de visas, etcétera). Y tal vez, lo más grave: la “ayuda” abarcaba la reorganización de los cuerpos de inteligencia y de las policías de México bajo los esquemas, las directrices y la supervisión de Estados Unidos. Es decir, la inteligencia de México quedaría al servicio de los requerimientos de seguridad de Estados Unidos.

En función de todo lo anterior se podría recapitular que la Iniciativa Mérida fue diseñada en función de la agenda de seguridad de Washington y no de las prioridades nacionales de México. Las prioridades de Estados Unidos eran, en la coyuntura: guerra contra las drogas (en territorio mexicano), guerra contra el terrorismo (también en territorio mexicano), seguridad fronteriza (en el norte y en el sur de México), control sobre la seguridad pública y las policías mexicanas, y construcción de instituciones y reglas de ley similares a las de Estados Unidos (homologación de leyes como parte de la integración silenciosa subordinada).

Era evidente que al anunciar el programa dentro de las “necesidades críticas de la seguridad nacional” de Estados Unidos, en el marco de la ley dedicada a la guerra en Afganistán e Irak y de la llamada “guerra contra el terrorismo”, Bush había logrado colocar la relación con México en la óptica de su política militarista. En ese contexto, dada la tradicional tendencia de Estados Unidos a abusar de los mecanismos de “cooperación bilateral” en materia de seguridad, que suele utilizar para realizar acciones de espionaje, intervenciones encubiertas y chantajes diplomáticos en la vida política de los países anfitriones, la Iniciativa Mérida significaba una grave amenaza a la seguridad de México.

El régimen de Felipe Calderón estaba adoptando la agenda de Washington, y al asumir como propias las preocupaciones de la Casa Blanca y renunciar a la autonomía en materia de política exterior cedía soberanía en áreas estratégicas que tenían que ver con la inteligencia y la seguridad nacional. Así, más allá del juego semántico, los cacareados principios de “confianza mutua, responsabilidad compartida y reciprocidad” entre dos países asimétricos como Estados Unidos y México, no dejaba de ser una humorada que intentaba romper la ley que rige la

relación entre el tiburón y la sardina.

#### EL APRENDIZ DE BRUJO

Avanzado 2009, México vivía una profunda crisis general: económica, financiera, política, cultural y de seguridad. Lo extraordinario tendía a convertirse en ordinario. La política económica de Felipe Calderón, continuadora de los cuatro anteriores gobiernos neoliberales, había conducido al país al caos y a la miseria. Como nunca antes, por encima de partidos, clases y estamentos, esa política era rechazada por la mayoría de la población.

¿Adónde iba el desgobierno de Calderón? El engaño marchaba acompañado de la torpeza. No fue sólo el engaño con fines electorales en 2006. Fue también un engaño para reincidir sin imaginación y sin grandeza en el error. Y para acentuarlo, con el consiguiente efecto acumulativo del mal. Un gobierno tiene la responsabilidad de gobernar; pero gobernar no se reduce a ocupar puestos de mando; tampoco es acallar ni reprimir. Menos militarizar el país con la excusa de “pacificarlo”. Nunca las medidas de emergencia fueron solución para las crisis. No lo serán tampoco en México la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional presentada al Senado por Felipe Calderón. De golpe o gradualmente, la fuerza trae la fuerza; es su ínsita lógica avasalladora. Cuando un gobierno cree o simula creer que el disgusto generalizado es obra de “agitadores” profesionales a los que identifica como “peligros para México”, o cuando potencia la criminalidad y la violencia para justificar la fuerza desmedida del Ejército, en un afán por encubrir su propia debilidad y su ilegitimidad, cae, de manera ineludible, en una sucesión de paroxismos. Calderón confundía energía con amenazas y palos de ciego.

¿Hasta qué extremos sería llevada la militarización del país? ¿La legalización de la práctica anticonstitucional de encargar la seguridad pública a las Fuerzas Armadas impondría *de facto* un Estado de excepción que, a la postre, se convertiría en permanente? ¿En verdad se justificaba la suspensión de garantías básicas como la libertad de asociación, de expresión y libre tránsito, así como la arrogación de poderes discrecionales por el Ejecutivo, con el fin de asegurar la “seguridad” y la “paz” nacionales? ¿No había nadie en el entorno cercano de Calderón que le exigiera un mínimo, nada más que un mínimo, de lucidez? ¿La necesaria para cambiar el rumbo, antes de que la maquinaria que había puesto en marcha lo hiciera su prisionero y lo triturara? ¿Antes de que el país se viera afrontado a la desesperación o a la servidumbre?

*Dictadura*, dice el diccionario, es el “gobierno que, invocando el interés público, se ejerce fuera de las leyes constitucionales del país”. Los diccionarios no marchan



siempre a la par con la semántica. Las técnicas se afinan y los hechos no se compadecen con las palabras. El arte de gobernar no es el arte del boxeo. Ni siquiera en tiempos de pánico y sensacionalismo mediático inducidos por una influencia humana benigna como cortina diversionista fraudulenta. A mediados de 2009 existían signos ominosos. Un documento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhibía la recurrencia de la tortura como método interrogatorio, aplicada por militares en el contexto de la “guerra contra las drogas” de Calderón. A lo que se agregaba el anuncio formulado por el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido, de que el Ejército seguiría en las calles hasta 2013.

El régimen de Calderón pretendía ocultar su total incapacidad tras la fuerza. Era la lógica interna del modelo de dominación clasista. Pero quienes gobiernan y disponen de la fuerza están más obligados que los gobernados a dominar el impulso de recurrir a la violencia. Resulta fastidioso tener que recordar verdades tan simples: que la violencia engendra más violencia. Y no hay que ser adivino: detrás de la militarización de algunos vendrá la de los demás. A propósito, cabe recordar una vez más el viejo apotegma de que las bayonetas sirven para todo menos para sentarse sobre ellas. Conviene agregar que las bayonetas tampoco sirven para obligar a hacer lo que no se quiere hacer. La fuerza militar no impedirá la resistencia. Y lo que es peor: la fuerza impotente y burlada puede enloquecerse. Ser cada vez más fuerza desvalida y hundirse en la violencia. Esa historia es bien conocida. Incluidos los “préstamos” del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo como complemento de una militarización *made in USA*, que llegaba ahora en clave de ASPAN e Iniciativa Mérida, santiguada por el bueno de Barack Obama.

No habrá “pacificación” mientras la crisis continúe. De manera transitoria, el garrote podrá imponer la paz. Pero será la paz de los cementerios y la de las cárceles, a la postre foco inagotable de estallidos. Era verdad, sí, que la iniciativa calderonista en materia de seguridad nacional abonaba el camino hacia el golpismo. Por decisión propia, Calderón se adentró en un tembladeral y la alternativa fue inequívoca: la violencia o el diálogo nacional. Pero el régimen no manifestó ninguna voluntad para dialogar o enmendar el rumbo. El inquilino de Los Pinos se consideraba dueño absoluto de la fuerza y de la verdad. A ratos practicaba un maniqueísmo inquisitorial. Con él estaba todo el país “sano” y quienes no estaban con él estaban contra él y eran los agentes del caos y la anarquía. El gobierno quería mandar, imponer, someter; para él la pacificación era amansamiento. El Estado soy yo; la ley soy yo; la justicia soy yo.

Después de haber montado la maquinaria, Calderón se creyó obligado a echarle más y más combustible. Pero pronto, él y los parlamentarios que se dejaron ganar por la parálisis de la complicidad descubrirían que el monstruo en marcha se les vendría

encima. ¿Y después? Ninguna noche de San Bartolomé ha logrado erradicar de la faz de la tierra a esa peste que son los que protestan. Después los gobernantes de la hora, que marchan a contramano de la historia comprobarán también que han sido otros tantos aprendices de brujo.

#### FIDEL, LA MAFIA Y EL HAIGA SIDO COMO HAIGA SIDO

A mediados de agosto de 2010, un extenso artículo de Fidel Castro titulado “El gigante de las siete leguas”, publicado en La Habana por *Cubadebate* y reproducido en *Granma Internacional*, habría de desatar otra pequeña escaramuza bilateral entre la isla y México.<sup>3</sup>

Al comentar un reciente libro de Andrés Manuel López Obrador titulado *La mafia que se adueñó de México y el 2012*, el líder histórico de la Revolución cubana formuló un par de breves afirmaciones que generaron irritación en la residencia oficial de Los Pinos. Según Fidel, en las elecciones presidenciales de 2006 López Obrador “ganó la mayoría de los votos frente al candidato del PAN. Mas el imperio no le permitió asumir el cargo”.<sup>4</sup>

Era la primera vez que el dirigente cubano hablaba públicamente sobre los resultados oficiales de esos comicios mexicanos, y sin mencionar por su nombre a Felipe Calderón, calificó como “valiente e irrefutable” la denuncia del político tabasqueño “contra la mafia que se apoderó de México”. Un par de páginas adelante aseveró que López Obrador, a quien dijo no conocer personalmente, “será la persona de más autoridad moral y política de México cuando el sistema se derrumbe y, con él, el imperio”.<sup>5</sup>

En la segunda parte del texto, con extrema mesura, y sin ofrecer ningún dato novedoso acerca del interrogatorio realizado por la seguridad cubana al empresario Carlos Ahumada, dijo a propósito de la alianza entre éste, Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos, Santiago Creel y Rafael Macedo de la Concha, que el objetivo fundamental, según el propio Ahumada, “era dañar a López Obrador y al PRD, para debilitarlo como candidato a las elecciones presidenciales de 2006”.<sup>6</sup>

Un día después, en un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó los dichos de Fidel Castro, con el argumento de que con los señalamientos del comandante se pretendía “descalificar a las instituciones mexicanas” y “se hace eco de afirmaciones sin sustento sobre el país y su desarrollo”.<sup>7</sup> A su vez, en un tono inusual, la administración de Felipe Calderón hizo votos para que “pronto el pueblo de Cuba pueda acudir a elecciones libres para designar a sus representantes y se respeten plenamente los derechos humanos en la isla”.<sup>8</sup>

Las ocho columnas de *El Universal* del 14 de agosto sintetizaron, aunque no fuera

de manera literal, la esencia del diferendo: “Hubo complot en 2006: Fidel; Cuba no vota en libertad: SRE”. Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Por un lado, el ex vicescanciller Víctor Flores Olea calificó el comunicado de Relaciones Exteriores como “casi soez”;<sup>9</sup> Porfirio Muñoz Ledo definió como “aldeana e inamistosa” la respuesta de México a alguien que, como Fidel Castro, se había expresado con libertad desde su propia convicción y fuera de las ataduras de la función pública,<sup>10</sup> en tanto que para Luis Javier Garrido el “violento comunicado” de la SRE no hacía sino exhibir el “estado colérico de quien lo ordenó”.<sup>11</sup> Del otro, varios columnistas anticastristas (entre ellos Óscar Mario Beteta, Ricardo Alemán, Emilio Rabasa Gamboa, Gabriel Guerra Castellanos, Carlos Loret de Mola y Alfonso Zárate) enfilaron sus comentarios contra las “mentiras” del “dictador”, del “octogenario tirano” que al darle “el beso del diablo” a López Obrador no hacía sino confirmar, de manera tardía, que AMLO “es un peligro para México”.

En ese contexto, de manera inopinada, el 5 de octubre siguiente el presidente Felipe Calderón volvería a ratificar la vieja matriz de propaganda negativa que utilizara durante su campaña electoral aquella que había definido a López Obrador, precisamente, como un “peligro”. Durante una entrevista radiofónica con Salvador Camarena, en W Radio, a una pregunta expresa del periodista admitió como “cierta” y “válida” la frase acuñada por su equipo de publicistas para los comicios de 2006, y agregó que eso era lo que pensaban entonces 15 millones de mexicanos.<sup>12</sup>

Calderón afirmó que AMLO “sembró una campaña de odio clasista, revanchista [y] le hizo un daño terrible a México antes y después de las elecciones”, por lo que, “honestamente, tenía yo razón y sigo considerando que fue una decisión correcta” utilizar en la campaña electoral que López Obrador era un peligro para México. Abundó que el “mexicano común”, la “gente sensata”, que “trabaja”, quiere vivir en paz y tranquilidad, y que “el rencor y el odio” sólo gusta a “sus fanáticos”, a “un extremo superradical”, a esa “especie de feligresía” que sigue a López Obrador. Y remató: “Hubiera sido catastrófico para México ser gobernados por la revancha y el rencor”.<sup>13</sup>

De paso, buscó aclarar que la frase “haiga sido como haiga sido” que él utilizó en una entrevista en junio de 2006, la pronunció en un contexto en que iba “triumfante” (en las encuestas de intención del voto), y entonces adelantó que “haiga sido como haiga sido, pues yo voy a ganar”.<sup>14</sup> Interrogado por Camarena acerca de si esa frase había sido emitida una vez pasada la elección, Calderón respondió: “No definitivamente no; además, ni siquiera [estaba] referida a procesos electorales”.<sup>15</sup>

Un día después, al participar en la Feria Alternativa del Libro en la Alameda Central de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un documento de cinco puntos, donde asentaba:

Es lamentable que quien fue impuesto por la funesta camarilla culpable de la tragedia nacional, en vez de pedir

perdón a los mexicanos por el desastre actual, siga optando por la mentira, la confrontación y la ofensa a millones de mexicanos que no se dejaron engañar, a los que llama fanáticos porque, en uso de sus derechos y libertades, siguen expresando su decisión de transformar a México por la vía pacífica.<sup>16</sup>

Durante la presentación de su libro, *La mafia que se adueñó de México y el 2012*, y en relación con la frase “AMLO, un peligro para México” —que atribuyó a los publicistas Dick Morris y Antonio Solá—, López Obrador expresó que tuvo un impacto eficaz para “manipular e infundir miedo” entre algunos sectores de la población, “porque la mafia del poder controla a la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo la televisión y, en particular, a Televisa”, pero que no reflejaba la realidad del país y “es del todo burda y ofensiva, al grado de que ni siquiera me atrevería a usarla en contra de Calderón, repitiendo que ‘Calderón es un peligro para México’ a pesar de que han perdido la vida cerca de 30 000 mexicanos por su irresponsabilidad e ineptitud”.<sup>17</sup>

El 7 de octubre, desde Acolman, Estado de México, durante una gira de trabajo, AMLO demandó de Calderón que aclarara si la frase “haiga sido como haiga sido” la había utilizado o no en el marco del proceso electoral de 2006, “porque ahora resulta que no es cierto”.<sup>18</sup> Según López Obrador, a Calderón le aquejaba un problema de conciencia, ya que, dijo, había renunciado “a los principios, ideales y valores que le inculcaron su familia y se entregó por entero a la mentira”.<sup>19</sup>

Un ejemplo claro de que dice mentiras, explicó, es que Calderón afirmó que la frase “haiga sido como haiga sido” no tuvo nada que ver con el tema electoral. Sin embargo, apuntó AMLO, la dijo en una entrevista con Denise Maerker, en el programa *Punto de Partida*, el 5 de junio de 2006, cuando la locutora de televisión lo estaba cuestionando sobre la guerra sucia mediática y le preguntó si no le preocupaba que después de la elección dijeran que “ganó por el miedo que logró provocar”, y él respondió: “Como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido”. Con esa respuesta a la periodista, argumentó López Obrador, “sólo refleja que él estaba dispuesto a ganar sin escrúpulos morales de ninguna índole”.<sup>20</sup>

En esa ocasión quedó claro que descalificar al lopezobradorismo como un “peligro para México” equivalía a equiparar esa expresión política con una amenaza que debía ser combatida y erradicada. Como se argumentó en el editorial de *La Jornada* del 7 de octubre de 2010, la reutilización de la frase de campaña cuatro años después exhibía “un ejercicio del poder intolerante, excluyente y hostil hacia cuando menos, el tercio del electorado que votó —si ha de creerse a las impugnadas cifras oficiales— por López Obrador”.<sup>21</sup> El editorial agregaba que más allá del exceso verbal, la declaración presidencial constituía una violación a las normas legales vigentes en materia electoral, que prohíben de manera expresa el uso de propaganda negativa y los pronunciamientos de los gobernantes a favor o en contra de personajes o partidos políticos.

Fue evidente que en esa coyuntura de 2010 Calderón exhibió una falta de disposición para sujetarse a dichos ordenamientos legales. Pero además se olvidaba —o fingía ignorar— que había sido su equipo de campaña el que intoxicó el ambiente político en 2006 mediante una virulenta acción propagandística ideada y operada por publicistas extranjeros, que sembraron la discordia entre el electorado y alimentaron la crispación y la polarización en la sociedad precisamente con la frase rectora de que AMLO constituía “un peligro para México”. Al presentarse como factor de tensión y confrontación nacionales, Calderón mermaba su propia autoridad y su credibilidad y profundizaba el déficit de legitimidad que su gobierno arrastraba de origen.

No quedó claro, entonces, por qué revivió Felipe Calderón uno de los episodios más traumáticos de la elección de 2006. Al respecto se manejaron todo tipo de hipótesis, desde que fue un error humano, un dislate que se le escapó; que reaccionó a los señalamientos públicos dirigidos contra él en esos días por López Obrador; que en el corto plazo AMLO podía descarrilar la alianza PRD-PAN en el Estado de México y él quería evitarlo, incluida la tesis del *gran elector*, singularizada en el hecho de que el presidente de la República estaba anunciando que participaría en las elecciones de 2012 como lo había hecho su antecesor, Vicente Fox.

#### EL EMBAJADOR GARZA Y LOS CABLES DE WIKILEAKS

Escrúpulos, descalificaciones, mentiras e intenciones aparte, algunos datos clave sobre lo que sucedió en torno a los comicios de 2006 vinieron a salir a la luz pública en febrero de 2011, tras la revelación de una serie de cables diplomáticos confidenciales enviados desde la embajada de Estados Unidos en México al Departamento de Estado en Washington, filtrados por Wikileaks a *La Jornada*. Lo más sobresaliente, por su tono injerencista, fue la decisión de la Casa Blanca de apuntalar a Felipe Calderón antes y después de los comicios, y después del 2 de julio, dada la “debilidad política” que éste exhibía, de ayudarlo a “planificar” la transición para salvaguardar la “agenda” de Washington en México.<sup>22</sup>

Los despachos daban cuenta de cuatro reuniones del embajador estadounidense Antonio Garza con Felipe Calderón entre el 10 de enero y el 27 de septiembre de 2006. Por su contenido, el cable más significativo fue el 06MEXICO4937, del 1° de septiembre de 2006 donde Garza describía a Calderón “en la mayor situación de debilidad política posible”. Calificado de “confidencial” y dirigido a la Subsecretaría de Estado de Asuntos Hemisféricos, el informe alertaba: “Corremos el riesgo de que los asuntos de mayor importancia para nosotros se estanquen, a menos que podamos enviar una enérgica señal de apoyo” para que el futuro mandatario “logre imponer su

agenda”.<sup>23</sup>

Faltaban cuatro días para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declarara oficialmente presidente electo a Felipe Calderón y la protesta popular contra el fraude en los comicios estaba en su apogeo. En el cable, el embajador Garza señaló que López Obrador había prometido “minar” la figura de Calderón a lo que se sumaban los “insultos” que le llegaban del liderazgo del Partido Acción Nacional y el desprecio que le había demostrado el presidente Vicente Fox, lo que erosionaba inevitablemente “la finísima línea de legitimidad” del político michoacano.

Ante ese escenario, el representante de George W. Bush en México anunciaba a sus superiores que una vez que el TEPJF declarara electo al panista, “un equipo de la misión, bajo mi cargo, se involucrará activamente con el equipo de transición de Calderón para promover y hacer progresar las áreas que son prioritarias para nosotros”. Y con franco espíritu intervencionista, agregaba: “Desde la embajada nos embarcaremos de inmediato en un proceso de planificación de la transición con el equipo de Calderón, empezando por una reunión con Juan Camilo Mouriño y Josefina Vázquez Mota”.<sup>24</sup>

En un cable anterior (06MEXICO4310), Garza había reseñado un encuentro con Calderón en la misión diplomática de Paseo de la Reforma 305, el 1° de agosto de 2006, solicitado por el panista para agradecer personalmente la “anticipada y amistosa” llamada telefónica de Bush desde el Air Force One, el 6 de julio anterior, cuando todavía faltaban dos largos meses para que el TEPJF revisara y calificara la elección. En esa reunión Calderón estuvo acompañado de quien entonces era su asesor de campaña en asuntos internacionales Arturo Sarukhán, luego embajador en Washington.

El despacho firmado por Garza decía que él había presionado “esperando saber más sobre las prioridades de la transición y los personajes, pero Calderón no se mostró particularmente accesible, sugiriendo que sus planes estaban aún en una etapa muy prematura”.<sup>25</sup>

El 27 de septiembre de 2006, ya como presidente electo, Calderón invitó a Garza a cenar en su domicilio particular. En el cable donde dio cuenta de su conversación con el próximo mandatario de México —que contó con la presencia de la futura primera dama, Margarita Zavala quien ofició como anfitriona—, Garza escribió que el “eje” del gobierno calderonista sería la seguridad. Según consignó Blanche Petrich en *La Jornada*, lo más destacado del despacho diplomático fue que Garza repitió una y otra vez que ante cada tema de la relación bilateral “Calderón estuvo totalmente de acuerdo” con los intereses de Estados Unidos. Quedó asentado, también, que el político republicano le insistió a Calderón sobre la necesidad de que conformara desde un primer momento “un gabinete de seguridad” muy sólido, y ambos

coincidieron en lo indeseable que sería que el siguiente fuera otro “narcosexenio”.<sup>26</sup>

Un cuarto cable filtrado por Wikileaks a *La Jornada* (06MEXICO255) hacía referencia a un desayuno de trabajo convocado por Garza, al que acudió Calderón el 10 de enero de 2006. Es decir un día antes del arranque de la campaña electoral en México. El informe documentaba el doble discurso de Calderón en torno a la agresiva Ley Sensenbrenner en materia migratoria y la construcción de una valla fronteriza. La ley que criminalizaba en extremo a los migrantes sin papeles se discutía en esos días en el Senado estadounidense en el contexto de la ley antiterrorista de George W. Bush.

Según el cable, Calderón le adelantó a Garza que iba a hacer pronunciamientos críticos contra el muro fronterizo “porque no puedo permitirme perder un solo voto frente a AMLO”.<sup>27</sup> El embajador le respondió: “Es políticamente correcto rechazar el muro fronterizo pero no es la solución. Lo que hay que hacer es resolver los problemas que crea la migración”. En la nota, Blanche Petrich consignó que Calderón estuvo de acuerdo, y añadió que no era su intención atizar un debate sino “enmarcarlo constructivamente”. El cintillo de *La Jornada* decía: “En 2006 [Calderón] pidió a Estados Unidos autorización para pronunciarse en contra de la construcción de la valla”. Quedaba exhibida la doble moral.

La dualidad entre el discurso público de Calderón en campaña y la obsecuencia hacia Washington, expuesta en su trato privado con el embajador Garza, quedó reflejada en el cable diplomático: “Calderón demostró una vez más que comparte nuestro punto de vista sobre todos los asuntos, desde migración hasta política de competencia y seguridad fronteriza”. El informe añadía que el candidato presidencial mexicano había prometido “proveer continuidad en todas las iniciativas clave de Estados Unidos en proceso en México”. Sobre migración, tal posición sería ratificada por Calderón en el encuentro con Garza del 1º de agosto, cuando “enfaticó” que no quería que la relación bilateral se “atorara en un debate monotemático”, y también en la cena del 27 de septiembre.

Al respecto, el analista John M. Ackerman opinó que los cables filtrados por Wikileaks exhibían la existencia de un “pacto secreto” entre Felipe Calderón y el gobierno de Estados Unidos. A su juicio el 10 de enero de 2006 el panista había ido a rendir “pleitesía” a Garza. “A cambio de que Calderón abdicara de su responsabilidad de defender a los connacionales del otro lado de la frontera, Estados Unidos se comprometía a apoyar de manera personal al presidente mexicano en su cruzada contra las instituciones democráticas y las fuerzas políticas de oposición en el país”, interpretó Ackerman.<sup>28</sup>

Otros cables de Wikileaks sobre la gestión gubernamental de Calderón vendrían a confirmar aquellos primeros atisbos entreguistas, así como la docilidad y la subordinación a Washington de quien fuera tildado por López Obrador como un

“presidente espurio”. Por convicción, por la fuerza de las circunstancias o por ambas razones Calderón había terminado subrogando al gobierno de Estados Unidos potestades soberanas, incluida la seguridad nacional de México.

Asimismo, los informes desnudaron el arropamiento y la complicidad que durante su endeble mandato el político michoacano recibiría de la Casa Blanca, un poder fáctico más poderoso que el Consejo Coordinador Empresarial, Televisa, la jerarquía conservadora de la Iglesia católica y Joaquín *El Chapo* Guzmán juntos.

#### LA INICIATIVA MÉXICO INSTRUMENTO PROPAGANDÍSTICO

Sin embargo, como suele primar en una relación semicolonial, no fue un trato terso. Eso se hizo evidente cuando algunos papeles de Wikileaks difundidos por *La Jornada* develaron que Calderón no había cumplido con su tarea de regente clientelar de Washington. En particular los que contenían los despachos secretos del embajador estadounidense Carlos Pascual cuestionando la incapacidad de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad del Estado mexicano, en el cumplimiento de las instrucciones y las misiones militares y policiales de una “guerra” planificada y dirigida desde el Pentágono; lo que terminó exhibiendo el fracaso del comandante en jefe local, Felipe Calderón.

A raíz del conflicto diplomático que generó la divulgación de sus textos, Pascual terminaría “renunciando” a la misión diplomática de Estados Unidos en México. La aceptación de su dimisión fue anunciada en Washington por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el 19 marzo de 2011, aunque Pascual no se fue de inmediato.<sup>29</sup>

En ese contexto de extrema debilidad de Felipe Calderón, el consorcio Televisa lanzó la segunda edición de Iniciativa México que, descrita por Miguel Ángel Granados Chapa como un “magno montaje de propaganda y relaciones públicas”, a partir del 24 de marzo de 2011, en total sintonía con la estrategia guerrerrista del jefe del Ejecutivo, se concentraría en establecer pautas de conducta periodística para la cobertura informativa de la violencia, bajo la apariencia de una “autorregulación ética”.<sup>30</sup>

La matriz de opinión de la Iniciativa México II había venido siendo construida desde meses antes por Joaquín Villalobos y Héctor Aguilar Camín: el enemigo de los medios y la sociedad es el crimen no quien lo combate.<sup>31</sup> Un argumento que exime de responsabilidad al Estado en la génesis de la violencia. Al respeto, John Pilger, en *The Guardian*, escribió que “el público necesita conocer la verdad sobre la guerra. ¿Por qué hay periodistas coludidos con los gobiernos para engañarnos?”<sup>32</sup> Se trata de periodistas a los que alguna vez el vocero de George W. Bush llamó los “facilitadores cómplices”. Para dilucidar el caso, Pilger recurrió al manual de contrainsurgencia del



ejército de Estados Unidos, donde el comandante general David Petraeus describe la de Afganistán como una “guerra de percepción... realizada continuamente mediante el uso de los medios noticiosos”. Ergo, los medios influyen directamente en la actitud de audiencias claves, porque en el fondo de lo que se trata mediante un estado de permanente conflicto es de mantener a raya a un enemigo cuyo nombre no se atreven a pronunciar: el público.

Total, que ese día, en el Museo Nacional de Antropología, 715 medios escritos, radiales y televisivos (entre ellos el duopolio Televisa/TV Azteca y las principales cadenas radiofónicas del país) suscribieron lo que un editorial de *La Jornada* describió como un acuerdo “para uniformar su línea editorial en el tratamiento noticioso de la violencia y la criminalidad” que sacudían a México.<sup>33</sup>

Es decir, para buscar una suerte de “verdad única” orwelliana al gusto de un presidente de la República que iba a la baja en su popularidad, y en torno a una circunstancia nacional de caos, terror y muerte llena de ambigüedades, zonas grises y hechos que resultaban incomprensibles con base en las versiones oficiales, y de una legalidad vulnerada por las organizaciones delictivas, pero también por las dependencias públicas, en particular por las Fuerzas Armadas y por las distintas policías del país, cuyos mandos, en algunos casos por su obsesión de exhibicionismo y lucimiento personal, terminaron haciendo la apología de los delincuentes, al obligar a los detenidos a actuar en verdaderos *reality show* televisivos.

De nueva cuenta, la sombra de los videoescándalos, del desafuero y del fraude patriótico parecía proyectarse sobre México. En un año preelectoral, la *telecracia* en acción emprendía una nueva cruzada, ahora por forjar otro imaginario nacional que desembocara en la república de Televisa. Con un nuevo formato se perseguía un mismo fin: imponer al sucesor de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto.

## La república de Televisa

Solitario en la cumbre de las encuestas durante tres largos años, a comienzos de 2012 el candidato a la Presidencia de la República por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista Enrique Peña Nieto, sufrió el acoso de un adversario inesperado: el movimiento estudiantil #YoSoy132. Un zafarrancho verbal entre Peña Nieto y estudiantes de la Universidad Iberoamericana (UIA) el 11 de mayo, reveló que el *dinosaurio* —según el microrrelato de Tito Monterroso— seguía ahí. Que el “nuevo PRI” de la profusa propaganda electoral era sólo un recurso retórico vacío y demagógico del viejo partido de Estado, y que su carismático candidato, fabricado por el consorcio Televisa como galán de telenovela representaba las añejas formas de hacer política, asociadas todas al autoritarismo de una tecnoburocracia amafiada que llegó al poder con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari en los años ochenta.

A 50 días de los comicios del 1° de julio, la fábula del candidato invencible y del resultado predeterminado se erosionó. Bastó que el personaje mediático saliera del manto protector que lo cobijó durante sus seis años como gobernador del Estado de México y se expusiera al escrutinio de un puñado de estudiantes críticos para que el mito manufacturado por el dinero, la mercadotecnia y Televisa entrara en crisis. No obstante, la mayoría de las casas encuestadoras le daban todavía una ventaja superior a los 18 puntos sobre su inmediato perseguidor, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición de centroizquierda. Pero Peña Nieto y sus patrocinadores se pusieron nerviosos. Sabían que el voto de los indecisos, en particular el de los jóvenes, podría modificar el resultado de la elección. Y aunque el lapso para cambiar la tendencia en la inflexión del voto era muy breve, la moneda estaba en el aire.

Disciplinado y consistente, Peña Nieto entendió que la publicidad está hecha de repetición. Sus maestros le enseñaron que todas las marcas deben ser construidas en el tiempo con variaciones dentro de la repetición, para no saturar al público. Pronto se convirtió en “el político más guapo del momento”, según la revista *Caras* de Televisa, y en un seductor de multitudes.

Ganó la gubernatura. Y tres años después la marca “Peña Nieto” se posicionó en las encuestas como la favorita en la disputa interna del PRI por la candidatura a la Presidencia de la República en 2012. Ante el derrumbe de su partido en 2006, la figura carismática y mediática de Peña Nieto se convirtió en el instrumento del “nuevo PRI” para el irresistible regreso al poder.

Sin embargo, “el candidato de Televisa” —como se le comenzó a mencionar en algunos medios— sufrió un resbalón a finales de 2011. El traspie ocurrió durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en diciembre, cuando tras ofrecer una “conferencia magistral” y hablar de la obra de su presunta autoría, *México, la gran esperanza*, confundió autores y olvidó los títulos de los tres libros que habían “marcado” su vida. Entre balbuceos y muletillas el priísta aseguró que *La sil a del águila*, una de las obras que lo “marcaron”, fue escrita por Enrique Krauze, no por Carlos Fuentes, y aunque no pudo completar de corrido la lista de tres lecturas, dijo que en su adolescencia leyó algunos pasajes de la *Biblia*. La pifia alimentó los rumores sobre las limitaciones intelectuales y la incapacidad de Peña Nieto para interactuar y manejarse con soltura ante gente informada.

#### EL REGRESO DEL INDESTRUCTIBLE Y LA AMLOFOBIA

Su desliz coincidió con el regreso del “indestructible” López Obrador. Ubicado como el presidenciable más conocido entre los mexicanos, a finales de 2011 AMLO poseía el mayor número de opiniones adversas, y también el porcentaje de quienes no votarían por él había crecido. De allí que, decidido a conquistar o reducir esa franja de la población conocida como “números negativos”, modificó su discurso. Ya no habló de “la mafia en el poder” que le “robó” la presidencia en 2006; tampoco de “los delincuentes de cuello blanco”, como definió a grandes magnates que en los comicios de aquel año se sumaron a la guerra sucia mediática que enarboló la consigna “López Obrador es un peligro para México” y lo tachó de “populista tropical” (Enrique Krauze *dixit*). A siete meses de los comicios se propuso fundar una “república amorosa” basada en tres ideas rectoras: la honestidad, la justicia y el amor. Por eso, en las redes sociales pronto fue conocido como “Amlove”. También se acercó a algunas cúpulas del sector privado y pudo afirmar: “No soy enemigo de empresarios; estoy, sí, contra la riqueza mal habida”.

Cuando en diciembre de 2011 el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dio a conocer su propuesta electoral, “Fundamentos de una república amorosa”, sus adversarios de la derecha vernácula le objetaron su falsa conversión de “líder radical” y “violento” a nuevo profeta de la reconciliación y el

perdón. Y reapareció con fuerza la *AMLOfobia* con un nuevo reparto. Ya no fueron Fidel Castro y Hugo Chávez los símiles por explotar en la propaganda negra contra López Obrador sino Vladimir Putin y Kim Il-Sung-kim Jon Il; ya no era el peligro para México (que ahora lo encarnaba el PRI, porque para el presidente Felipe Calderón y su partido, Acción Nacional, representaba la corrupción, negociaba con el narcotráfico y endeudaba a los gobiernos estatales), sino el regreso del nacionalismo revolucionario de los setenta y un engaño para México; ya no era el mesías tropical sino el apóstol que utilizaba una moralina política seudocristiana.

El golpe de timón reposicionó y fijó a AMLO en la agenda mediática. Para apoyarlo o denostarlo todos hablaron de él. Lo llamaron “demagogo” y “gran demiurgo”. Lo compararon con Goebbels. El ex candidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos dijo incluso de AMLO que “es una víbora con el mismo veneno, que sólo cambia de piel para llegar a la Presidencia de la República”.

¡DIOS MÍO, HAZME PRESIDENTA!

La tercera en disputa era Josefina Vázquez Mota, candidata de Acción Nacional. Graduada en economía y electa diputada por Chihuahua en 2000, hasta entonces su única conquista visible consistía en haber vendido 300 000 ejemplares de un libro de autoayuda: *¡Dios mío hazme viuda por favor!* Asesora de dos importantes confederaciones de patrones y comerciantes privados del país, había recorrido la geografía nacional ofreciendo conferencias a grupos empresariales. Católica conservadora, se le atribuían dotes de buena comunicadora de ideas y habilidades para transmitir emociones. Cuando el presidente electo Vicente Fox se dio a la tarea de armar su gabinete, la escuchó hablar en una comida con mujeres y decidió nombrarla titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Sus críticos la definieron “verde” y sin malicia política, pero pronto se convirtió en la secretaria de Estado favorita del primer mandatario del PAN.

Invitada por Felipe Calderón a su campaña en 2005, luego del triunfo fue designada secretaria de Educación Pública, donde la esperaban un millón y medio de maestros y la líder más poderosa del país, Elba Esther Gordillo, con 23 años de antigüedad en el cargo. Emblema del corporativismo clientelar y corrupto del país, el sindicato de maestros tenía tomada la secretaria. La relación entre Vázquez Mota y Gordillo no fue muy tersa. Ya entonces el físico de Vázquez Mota oscilaba entre la anorexia y la vigorexia, y su piel se había tornado ceniza. Terminaría por renunciar en 2009, pero fue electa diputada ese mismo año. Se dijo entonces que era el brazo ejecutor de Felipe Calderón en la Cámara Baja. Durante 21 meses estuvo ausente en 190 de 298 votaciones y renunció para postularse en las elecciones internas de

Acción Nacional como candidata a la Presidencia, donde compitió con el favorito del jefe del Ejecutivo, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero.

Pese a no ser la candidata oficial, en febrero de 2012 arrasó. La idea fuerza de su campaña fue que la competencia electoral no era entre tres propuestas, sino entre dos. Por un lado, estaba la del PRI que era un solo partido con dos caras: la cara nueva (Enrique Peña) y la cara vieja (López Obrador). La cara corrupta y la cara populista la cara autoritaria y la cara intolerante. Por otro, la propuesta democrática del PAN. Ubicada de febrero a mayo como segunda en las encuestas, siempre a 20 puntos de Peña, tras la incursión del candidato del PRI en la UIA, Josefina se rezagó y la tendencia se mantendría hasta el final de la contienda.

#### UNA ESTUDIANTINA MOLESTA

El ascenso de AMLO, a quien sólo un par de encuestadoras ubicaron en un virtual empate técnico con Peña Nieto, tuvo mucho que ver con el despertar estudiantil. Con un movimiento juvenil ciudadano que se declaró pacífico, sin liderazgos, apartidista pero no apolítico, y que se formó a raíz de la visita del priísta a la universidad de los jesuitas el 11 de mayo. Ese día, en un auditorio repleto, acompañado por un grupo protector de “guaruras” disfrazados, el candidato del PRI, Televisa y los poderes fácticos expuso sus ideas con calma, respondió una veintena de preguntas y pudo “aclarar” con orgullo su responsabilidad en la brutal represión policial en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, cuando era gobernador. Dijo: “Fue una acción de autoridad, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública”. Fue entonces que proliferaron los gritos de “¡Asesino!”, “¡Cobarde!” y “Todos somos Atenco”. Y creció como la espuma y al unísono el “¡Fuera! ¡Fuera!”

Por la noche, en el noticiero estelar de Televisa, el periodista Joaquín López Dóriga maquilló y desvirtuó los hechos y manipuló los audios. También dio espacio al jefe de campaña de Peña Nieto Luis Videgaray, para que hiciera un primer control de daños. Ante la maniobra desinformativa, y excitados por la adrenalina, un par de estudiantes de la carrera de comunicación recurrió a las nuevas tecnologías y convocaron por Facebook a elaborar un video simple donde aparecieran los jóvenes que protestaron con su credencial en mano, para recobrar la identidad robada y adulterada. Utilizado como una herramienta de comunicación política alternativa, el video recuperó el rostro de 131 universitarios y su pertenencia a la comunidad de la Ibero. Lo subieron a YouTube y resultó *trending topic* a nivel mundial. Así nació en la UIA el movimiento Somos Más de 131.

Después decidieron manifestarse frente a las instalaciones de Televisa y la protesta

repercutió en las redes sociodigitales y comerciales.

La bocanada de aire fresco sacudió a otros estudiantes aletargados. Contagiados por la euforia, como muestra de solidaridad alumnos de otras universidades privadas se sumaron al movimiento. En un acelerado proceso de subjetivización al margen del poder surgiría el movimiento #YoSoy132, que con el aporte de los *chavos* de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional decidió manifestarse políticamente contra el duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca) para defender la libertad de expresión y exigir la democratización de unos medios de “dudosa neutralidad”, pero también para denostar el proyecto de gobierno encarnado por el PRI y su candidato, Enrique Peña.

El fantasma de 2006 estaba de regreso. Ante la inesperada emergencia juvenil, México viviría días de tensión. No obstante, en una sociedad polarizada y signada por la violencia criminal, la *telecracia* controló el cierre de las campañas políticas. La *guerra sucia* mediática estuvo en su apogeo y la percepción de que las empresas encuestadoras beneficiaban a sus patrocinadores y engañaban a la “opinión pública” creció. En amplios sectores del electorado persistía la impresión de que un sistema cerrado estaba decidido a imponer a toda costa a Enrique Peña en la Presidencia de la República.

#### OTRA CANALLADA DEL PAN

El blindaje fue total. Ni las revelaciones del diario británico *The Guardian* sobre el contubernio entre Televisa y Enrique Peña lograron rasguñar al candidato del PRI. Tampoco las masivas manifestaciones en su contra en calles y redes sociales del movimiento estudiantil #YoSoy132. Pero la esperanza de un triunfo posible entre los seguidores de López Obrador no se desvanecía. Los cierres de campaña del político centroizquierdista fueron multitudinarios. Sin embargo para la mayoría de las encuestadoras, la “preferencia” en la intención del voto no se había movido en los últimos tres meses. Permaneció estática, con Peña Nieto cerrando 12 o 15 puntos arriba de López Obrador. Por eso, salvo un milagro, la restauración del viejo partido de Estado autoritario parecía un hecho. Y, con ello, el más puro continuismo de un modelo económico depredador que responde al Consenso de Washington y que había impedido el crecimiento de México en los últimos 29 años, sumergiendo en la pobreza y el hambre a millones de mexicanos.

Desde comienzos de junio, la intensificación de las acciones de propaganda negra contra López Obrador alimentó la idea de un nuevo fraude de Estado con una modalidad diferente. La ofensiva de las corporaciones privadas de “comunicación”, vinculadas a los poderes fácticos y a grandes grupos empresariales, tuvo como base la

difusión masiva de una matriz de opinión que intentó convencer al electorado de que ya había un “ganador” indiscutible antes de que depositara el voto en las urnas el domingo primero de julio: Enrique Peña Nieto.

Víctimas de una bajeza por parte de Vicente Fox, quien como primer presidente de la República surgido de Acción Nacional ofreció su apoyo “incondicional” a Vázquez Mota para después llamar a votar por Enrique Peña y el regreso del PRI a Los Pinos, los estrategas propagandistas del PAN incurrieron en una acción desaseada —“canallesca”, la llamó el especialista Fernando Mejía Barquera— y violatoria de un comportamiento ético elemental, al producir un *spot* donde se editaron de manera descontextualizada y burda las palabras pronunciadas por López Obrador durante un mitin en la Plaza de Tlatelolco, el 21 de mayo, para acusarlo de estar a favor de la “lucha armada”. La pieza audiovisual completa mostraba a AMLO cuando expresaba su desacuerdo con quienes piensan en la viabilidad de la lucha armada y afirmaba que él siempre iría por la “vía pacífica”.

El *spot* contenía el tufo de 2006, pero era peor que la propaganda negra de ese año, cuando se construyó la idea de que “López Obrador era un peligro para México”, una suposición basada en prejuicios ideológicos y una animadversión política dirigida a influir en los sectores políticamente más atrasados de la sociedad. El nuevo *spot* del PAN añadía al odio y las fobias ideológicas una mentira. Según Mejía Barquera, “es más que *guerra sucia* o propaganda de contraste: es tratar de alterar la realidad mediante la manipulación de un video. Inaceptable éticamente”.

#### DISPAREN CONTRA EL #YOSOY132

No fue casual que la guerra de propaganda negra que llegó a las redes sociales a través de Twitter y Facebook alcanzara al naciente movimiento *hashtag* #YoSoy132, contra el cual, a partir de un primer control de daños del monopolio Televisa a raíz del *Iberogate*, volcaron su metralla mediática insidiosa grupos de choque asimétricos alimentados por la propia televisora y por fuerzas vinculadas al PRI, que intentaron manipular los territorios de internet a través de los llamados “acarreados digitales”.

De hecho, un grupo de voluntarios muy bien organizados y coordinados por Carolina Viggiano —esposa del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, hermano del ex mandatario de esa entidad y ex presidente del PRI, Humberto Moreira—, autodenominados “ectivistas”, constituido en una fracción importante del equipo de campaña de Enrique Peña, intentó ahogar la voz crítica del movimiento estudiantil y convertirla en rumor, con el fin de someterla al discurso del poder. En particular, la campaña de confusión, amenazas y descrédito se realizó con usuarios conocidos como *bots* (cuentas falsas) o *trolls* (cuentas para agredir a opositores de manera

anónima), que habían sido contratados para contrarrestar tendencias en Twitter en contra de Enrique Peña y cuidar su imagen.

A través de columnistas mercenarios en los medios de difusión se trabajó en la destrucción del carácter apartidista del movimiento estudiantil, intentando ligarlo con López Obrador en una campaña de mentiras y lodo que cuestionaba, de paso, su espontaneidad. Para ello, se difundió la rocambolesca versión de que el movimiento #YoSoy132 había sido hechura encubierta de Manuel Camacho Solís —conocido político con pasado salinista vinculado desde hacía años al movimiento progresista—, en alianza con el ex candidato presidencial chileno Marcos Enríquez Ominami (hijo de Miguel Enríquez, fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria). La trama incluyó a un estudiante mexicano, hijo de un ex miembro del gabinete de Salvador Allende y activo miembro de la Unidad Popular; a la dirigente estudiantil chilena Camila Vallejo; a la familia Slim (cuyo patriarca es el magnate Carlos Slim, propietario del Grupo Carso y sindicado por *Forbes* como el hombre más rico del mundo); a un estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León crítico en las redes sociales de la iniciativa privada de Monterrey pero ligado al empresario regiomontano Alfonso Romo, quien en la campaña de 2012 vinculó a López Obrador con algunos capitanes de industria del norte del país; a políticos cercanos a AMLO como Alejandro Encinas; al jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y a la revista *Proceso* y los diarios *Reforma* y *La Jornada*.

Todos ellos, según Ricardo Alemán, del diario *El Universal* serían “las manos que mueven la cuna” del #YoSoy132, que habrían “secuestrado el espíritu” del movimiento, poniéndolo al “servicio” del candidato López Obrador. En ese contexto surgió un supuesto grupo disidente, GeneraciónMX, destinado a torpedear, dividir y “pudrir” por dentro al movimiento original. Después apareció el grupo YoSoy 1-2-3, una iniciativa oficial del movimiento juvenil del PRI, que no tuvo impacto. No faltarían los intentos de seducción y cooptación, propios de los usos y costumbres de la partidocracia mexicana.

Sin embargo, las maniobras no prosperaron totalmente y los estudiantes del 132 consumaron la hazaña de organizar un debate alternativo al del IFE entre los candidatos a la Presidencia el martes 19 de junio, en horario triple A (ocho de la noche), a través de YouTube, del que se autoexcluyó Enrique Peña, por considerar que no existían condiciones de imparcialidad, objetividad y neutralidad para su participación, tras caracterizar al movimiento como “antipeñista”.

Hospedados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ante el desdén y el boicot de los medios electrónicos privados (que hasta pocas horas antes del evento se habían negado a dar cobertura al mismo), y la omisión por consigna de los medios públicos (el Canal del Congreso, los canales 11 y 22, y el Instituto Mexicano de la Radio), los jóvenes dieron un ejemplo de cultura cívica y democrática



activa, que no se encuentra en libros ni en manuales sino que surge de la decisión de organizarse y participar para transformar la realidad. Sin ningún derroche económico, aunque sin la “calidad” de una telenovela o un mensaje presidencial, el debate saturó la red, aunque hubo fallas técnicas, numerosas interrupciones y el “congelamiento” frecuente de la imagen, debido a la calidad de la banda ancha que se utilizó.

Para el crítico de programas televisivos, Álvaro Cueva, “fue una cachetada con guante blanco” a la incompetencia de las instituciones. Con un formato más flexible, los tres candidatos presentes Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Quadri, más relajados que en los dos debates organizados por el IFE interactuaron por primera vez como personas de carne y hueso. No hubo monólogos. A su vez, como potenciales electores, los jóvenes ejercieron el derecho de réplica. La transmisión arrancó con casi 40 000 usuarios contactados, y fue tan numerosa la participación de los *tuiteros* que la etiqueta #DebateYoSoy132 alcanzó el primer lugar en la lista mundial de temas relevantes de esa red social.

En momentos en que locutores, publicistas y encuestadoras intentaban sustituir o modelar a la ciudadanía, con su crítica al actual estado de cosas, los jóvenes demostraron madurez y se pusieron a la vanguardia de la resistencia a la imposición. Ese round lo perdió Enrique Peña Nieto, de quien se exhibió su silla vacía. Y se tambaleó el principal teatro de la democracia hueca. Los jóvenes demostraron que la actual televisión abierta y de paga podría volverse prescindible ante la emergencia de una sociedad más consciente y ávida de información y difusión responsable y veraz, que luchara por una democratización de los medios. Como tendencia, de profundizarse el movimiento y en conexión con los grupos sociales y las redes virtuales, podría comenzar a gestarse la obsolescencia de las concesiones del espectro radioeléctrico como mecanismo ilegítimo de acumulación de poder político y económico.

De cara a la nueva realidad, en su cierre de campaña en el coloso de Televisa, el Estadio Azteca —epicentro del poder mediático— Peña Nieto reiteró lo que había repetido hasta el cansancio en sus últimos mítines regionales: que iba a dejar atrás la “política vieja” y que representaba un “cambio seguro”. Que la jornada electoral sería libre, “no coaccionada”. Pero la realidad lo desmentiría. El estadio mundialista medio se llenó con acarreados que fueron transportados en 1 600 autobuses. Mientras tanto, se prendían los focos rojos sobre la compra de votos del PRI en seis entidades: Jalisco, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco y el Distrito Federal. Los estrategas priístas sabían que en esos lugares podrían perder la elección, de allí que recurrieran al más viejo estilo de coacción electoral e intensificaran la “promoción” del sufragio vía la entrega de despensas, enseres domésticos, material de construcción, tarjetas de débito y monederos electrónicos, amén de dinero en efectivo a los “promotores”.

Según los resultados de las últimas mediciones sobre la intención del voto no habría sorpresa. El domingo 1° de julio ganaría Peña Nieto con más de 40% de los sufragios y con 12 a 18 puntos arriba del segundo, que sería López Obrador. A su vez, los candidatos de los partidos de la coalición que postulaban al priísta conseguirían el “carro completo” en ambas cámaras del Congreso. De confirmarse en las urnas esa visión homogénea de las casas encuestadoras “serias” —como repetían al grado de la saturación los hacedores de opinión pública en los medios electrónicos—, se acabaría el llamado *gobierno dividido* surgido de las elecciones intermedias de 1997 y que prevalecía hasta el presente.

La imposición de Enrique Peña fue el final casi perfecto de un guión que, mezcla de telenovela y *reality show* político, se había escrito seis años y medio antes. La del domingo 1° de julio fue otra elección de Estado que exhibió, una vez más, las miserias de un sistema político mexicano controlado por los poderes fácticos, incluidos los medios electrónicos, en particular el duopolio de la televisión. Fue un golpe mediático que incluyó la intervención ilegal del presidente Felipe Calderón en red nacional, cuando apenas iniciaba el proceso de calificación electoral.

Las cifras oficiales preliminares dieron a Enrique Peña una ventaja de 3.3 millones de votos sobre López Obrador, quien no reconoció su derrota e impugnó la contienda. Dijo que los comicios fueron “sucios” y acudió a los tribunales para tratar de “limpiarlos”. El Instituto Federal Electoral dio entrada a la demanda y aceptó el recuento de 54.5% de los votos de la elección presidencial. Con la judicialización del proceso se entró en un compás de espera. Pero quedó la impresión de que la decisión ya estaba tomada: por más que protestara de manera legal y pidiera el conteo voto por voto y casilla por casilla —lo que ahora estaba autorizado por una ley “antifraude” aprobada en 2007—, AMLO no pasaría. Por lo que después de 12 años en el llano, el Partido Revolucionario Institucional regresaría a Los Pinos.

Con el guiño aprobatorio de Barack Obama, Peña Nieto se asumió presidente electo y dijo que prepararía un paquete de iniciativas de ley en materia fiscal, laboral y energética. Se trataba de la tercera generación de contrarreformas neoliberales que responden al Consenso de Washington, con la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) como la joya de la corona. Sin embargo, la calidad de presidente electo debía definirla el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación antes del 6 de septiembre. Hasta entonces los ánimos podrían calentarse y empujar a México hacia un rumbo incierto. Un sector de la sociedad estaba enojado y frustrado. Una vez más se sentía estafado y burlado. En particular los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), nucleado en torno a López Obrador. También los jóvenes del emergente y pujante movimiento estudiantil #YoSoy132. Ellos y la vieja

guardia de la atomizada izquierda social y partidista eran la parte dinámica de un nuevo sujeto social que quería un cambio pacífico y ahora pugnaba por la anulación de los comicios.

Con independencia de las controversias que se suscitaban sobre la legalidad de la elección, con los números conocidos, 38% de los empadronados no había votado o anularon su sufragio. Peña Nieto logró su victoria con 38% de quienes sí votaron (sólo 24% de votos de todo el universo electoral), frente a 76% que lo rechazaron de una manera u otra. Junto a lo anterior destacó un par de datos. La debacle del Partido Acción Nacional, cuya candidata Josefina Vázquez Mota ocupó el tercer lugar, implicó un voto de castigo a la gestión de Felipe Calderón. A su vez, la victoria arrolladora de la coalición lopezobradora en el Distrito Federal, además de la obtención de las gubernaturas de Morelos y Tabasco y su crecimiento en otros estados, ubicó al progresismo como segunda fuerza nacional.

#### MODERNIDAD PRIASTA: SORIANAGATE Y MONEXGATE

Más allá del sentido fetichista de la democracia en México, la magnitud del financiamiento ilegal a favor del PRI mostró que los comicios no se ganan en México; se compran. No hay duda de que el proceso electoral estuvo viciado de principio a fin. Ganaron las trampas. Si bien los comicios estuvieron contaminados por malas conductas de los mercaderes de las encuestas y la colusión entre la vieja clase política corrupta y los principales consorcios mediáticos, amén de que las instituciones responsables de garantizar que fueran limpios fallaron —empezando por el árbitro de la contienda, el IFE, que exhibió una tolerancia cercana a la omisión y la complicidad—, lo cierto es que la vieja maquinaria clientelar corporativa del PRI se mostró aceiteada y volvió a funcionar de manera disciplinada en todo el territorio nacional, salvo en algunos islotes como el Distrito Federal, bastión del progresismo desde 1997.

Las denuncias sobre la coacción y la compra masiva de sufragios por el PRI, así como el amedrentamiento y la agresión de partidarios de López Obrador, se dieron antes y durante los comicios. A ello se sumó el robo de urnas con violencia y la manipulación indebida de la papelería electoral por operadores del PRI y sus aliados. Las malas artes del otrora partido de Estado casi único quedaron exhibidas en el derroche de dinero en publicidad, logística y reparto de bienes o efectivo a cambio de voluntades ciudadanas.

El caso más sonado, denunciado ante el IFE, fue la adquisición de 1 800 000 tarjetas “prepagadas” de la cadena de supermercados Soriana (560 tiendas en 181 ciudades), para comprar el voto de electores en varios estados del país. El

*Sorianagate* cobró visibilidad pública cuando aparecieron fotografías en el diario *La Jornada* que exhibían el abarrotamiento de algunas tiendas de la cadena en el Distrito Federal, ante el temor de que se descubriera el fraude y se cancelaran o bloquearan los saldos de las tarjetas.

Según López Obrador, Peña Nieto rebasó el tope de campaña permitido por la ley en un monto superior a los 5 000 millones de pesos. A su juicio, eso era un argumento suficiente para impugnar la elección presidencial. Adujo que se encontraron inconsistencias en 113 000 de las 143 000 casillas instaladas y solicitó a la autoridad electoral se realizara un recuento total de los sufragios. El IFE aceptó revisar el escrutinio en poco más de 78 000 casillas.

Al cierre de las casillas fue evidente el bombardeo mediático dirigido a proclamar unos comicios “limpios” y “en orden”. Bajo la batuta de Televisa, las grandes cadenas mediáticas cerraron filas en un intento por imponer la percepción de que Peña Nieto había ganado de manera contundente e inobjetable. Por lo que López Obrador debía admitir el resultado con “naturalidad”.

Se buscó generar una espiral de silencio porque urgía cerrar el capítulo y pasar a otra cosa. Sólo que la unción de Peña Nieto por el poder televisivo se dio con base en estimaciones parciales de 5 o 6% de los votos. De allí que lejos de ser expresión de una democracia madura, los apresurados reconocimientos de sus derrotas por parte de Josefina Vázquez Mota y del candidato comparsa, Gabriel Quadri, fueron parte de una operación de Estado destinada a fortalecer a Peña Nieto y presionar a López Obrador a aceptar su derrota. Igual la declaración del presidente del IFE, Leonardo Valdés, y la del propio presidente Felipe Calderón. Situaciones, todas, que hicieron aumentar las sospechas de inconfesables arreglos colusivos.

Era difícil que la revisión de los paquetes electorales lograra revertir una diferencia de más de tres millones de votos. Sin embargo, de creérsele a los sondeos, el logro de López Obrador había sido titánico: en 90 días de campaña logró situarse a 6 puntos porcentuales del candidato de Televisa, quien en marzo lo aventajaba por 28 puntos.

No obstante los ataques mediáticos poselectorales AMLO se mostró sereno. Dijo que la inequidad de los comicios cuestionaba la credibilidad democrática y llamó a la calma a sus seguidores. No convocó a una rebelión ciudadana, como pronosticaban sus adversarios políticos y los papagayos en los medios; anunció que esperaría el recuento de los votos para asumir una posición. El futuro era de pronóstico reservado.

#### EL MIEDO A LA DEMOCRACIA

Una vez más, la fabricación del consentimiento funcionó. En los comicios del 1º de

julio triunfaron la *telecracia* y el poder del dinero. La elección presidencial fue una gran operación de propaganda aceitada con sobornos, extorsiones y corrupción. Un montaje orquestado por los poderes fácticos a través de monopolios mediáticos y casas encuestadoras, en sociedad con el aparato del viejo partido de Estado, el PRI, destinado a ser legalizado por las “instituciones” del Estado. “Ganó México”, afirmó Enrique Peña Nieto en las primeras horas de la victoria. Y a partir de entonces, él pasaría a representar el “interés nacional”. Es decir, a gerenciar los intereses de la clase dominante. Adoctrinado por el sistema, sería su administrador de turno durante seis años.

Tras los comicios, los amos de México disfrutaron el espectáculo y se prepararon para el gran banquete. No hubo engaño: se trataba de mantener a raya a la chusma libertaria y lo lograron. En la actual selva socialdarwinista neoliberal mexicana “ganó” el corrupto más competitivo. ¿Su tarea? Mantener a la atolondrada multitud en un estado de sumisión implícita; contener el despertar de la plebe. Ganó el candidato que contó con la maquinaria más experimentada en explotar la servidumbre humana; en controlar masas subordinadas encadenadas a un orden autoritario-servil. Triunfó el más apto en el marco de un Estado de tipo delincuencial y mafioso en rápida fase de putinización.

Los nexos económico-ideológicos entre la clase política, los conglomerados mediáticos y los mercaderes de encuestas eran públicos mucho antes de la contienda electoral. Hacía varios años que las barras “informativas” de las principales cadenas de radio y televisión habían incorporado como “analistas” a los directores de las firmas demoscópicas más “profesionales” y experimentadas del mercado.

Entre ellas, Consulta Mitofsky (cuyo cliente principal era Televisa TV-Radio), GEA/ISA (propiedad de Jesús Reyes Heróles, contratada por el Grupo Multimedia Milenio), BCG Ulises Beltrán (al servicio del Grupo Imagen Multimedia que publica el diario *Excélsior*), Buendía y Laredo (*El Universal*) y Parametría (contratada por la Organización Editorial Mexicana de Mario Vázquez Raña, propietario de la cadena *El Sol de México, Esto y La Prensa*). El caso del sumo sacerdote de Mitofsky, Roy Campos, en los espacios electrónicos de Televisa y Radio Fórmula fue notable. También los de Francisco Abundis (Parametría) y Ulises Beltrán.

El trabajo de los nuevos gurús fue contribuir a la construcción social de Enrique Peña Nieto, manipular a las audiencias (“el aturdido rebaño”), fabricar una opinión pública a la carta y manufacturar un sesgo informativo a favor del bloque dominante, todo lo cual fue legitimado por las encuestas al proveerle el falso sello de la aprobación pública. Las firmas que manipularon las cifras en 2006 y legitimaron el fraude a favor de Felipe Calderón vendieron en 2012 el triunfo anticipado. A la manera de Antonio Gramsci, generaron el consenso necesario anexo a la fuerza. Mediante la repetición de una misma matriz —en la que también participaron los

intelectuales orgánicos de las cadenas de diarios bajo control monopólico—, los periodistas estrellas (*press-titutes*, los llamó Paul Craig Roberts) complementaron la faena. Ya en la recta final de las campañas, con la máscara de una “verdad técnica”, protegieron al puntero prefabricado y sembraron la desesperanza entre quienes aspiraban a un cambio.

Una sociedad salvaje —en el sentido socialdarwinista—, que durante un sexenio asistió impávida al asesinato de miles de niños jóvenes, defensores de derechos humanos, periodistas y civiles inocentes, no estuvo a la altura de la indignación del movimiento estudiantil #YoSoy132, menos pulsional y más pensante, ergo, más impermeable a los *spots* propagandísticos.

#### EL TEPJF Y EL ABUSO DE LAS FORMAS

Como era previsible, la fase poselectoral volvió a entraparse en México, país singularizado por los fraudes seriales. Pero a diferencia del *Pemexgate* y el caso Amigos de Fox en los comicios de 2000, lo novedoso ahora fue que además del financiamiento irregular de grandes patrimonios particulares y de grupos corporativos privados la candidatura de Enrique Peña Nieto pudo haber sido aceptada con *dinero sucio* de la delincuencia organizada.

No hay crimen perfecto. La compra de la Presidencia de México para el candidato fabricado por Televisa y otros grupos multimedia exhibió muchos cabos sueltos, algunos de los cuales podrían configurar asociaciones delictuosas —incluido lavado de dinero y la triangulación de fondos de procedencia ilícita a través de empresas “fantasmas”, paraísos fiscales e instituciones financieras, bancarias y comerciales— entre los operadores de campaña de Peña Nieto.

Al millonario escándalo de HSBC destapado por el Senado de Estados Unidos, seguido por el *Sorianagate* y el *Monexgate* —incluido el extraño accidente que derivó en la muerte del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del candidato y ligado al fondo financiero para la campaña peñista—, se sumaron la denuncia sobre presunto lavado de dinero a través de Scotiabank contra Luis Videgaray, *alter ego* del político mexiquense, y la admisión de culpabilidad ante una corte de Nueva York del ex gobernador en Quintana Roo, Mario Villanueva, por su participación en operaciones de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. Aunque se trataba de casos diferentes y sin aparente conexión —incluida su temporalidad—, la conjunción de hechos podría develar una trama compuesta por determinados patrones, mecanismos paralelos y oscuros *modus operandi* propios del otrora partido de Estado, lo que obligaría a limpiar los comicios por las autoridades competentes, con apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de

Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Si no cabría preguntar para qué sirve la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.

No obstante, la larga historia de corrupción, impunidad y simulación de México indicaba que eso sería casi imposible. Máxime cuando el comandante en jefe de la “guerra” contra las drogas, Felipe Calderón, se había venido haciendo el tonto frente a los reportes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Senado estadounidense, que probaban que México se había convertido en un gran bazar del lavado de dinero para las mafias delincuenciales en un mundo regido por el neoliberalismo y sus imperativos: la apertura de mercados con la falsa bandera del libre comercio, la desregulación generalizada y la obtención de tasas máximas de rentabilidad en plazos cada vez más cortos de recuperación de la inversión. Con la evidencia palpable, al igual que en Colombia o Rusia, de que el dinero de las mafias está presente en la política.

En ese contexto, no llamó la atención la rápida validación de la “victoria” de Peña Nieto por el Consejo Coordinador Empresarial y otras agrupaciones satélites como Concamín, Concanaco, Coparmex, Canacintra, la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos de México, amis, el Consejo Nacional Agropecuario y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.

Lo que sí asombró un poco fue la descarada defensa del proceso comicial por algunos consejeros del IFE. Al respecto, más allá de la evidente toma de partido de su presidente, Leonardo Valdés Zurita —que vino a confirmar que el sistema electoral está al servicio de las élites del poder—, sorprendieron algunas argumentaciones como las de la consejera María Marván Laborde, quien en su texto periodístico “Malas encuestas, ¿ciudadanos idiotas?”, hizo una velada defensa de las compañías demoscópicas, la televisión, la radio y los periódicos. Y asumiendo una actitud paternalista, exoneró de cualquier viso de manipulación al “ciudadano” de a pie. Como en 2006, la autolegitimación del fraude disfrazada de reivindicación de la “ciudadanía” encarnada en “la gente común”. El viejo recurso de elogiar al populacho, a la chusma.

Sumado a una Fepade y a una CNBV inútiles, y a un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación integrado por magistrados peñistas de corazón, lo anterior dejaba poco lugar al optimismo. Finalmente, el 30 de agosto, en un fallo unánime, falto de pulcritud y signado por una parcialidad obsecuente, el TEPJF rechazó la demanda del Movimiento Progresista para invalidar los comicios y declaró a Peña Nieto presidente electo. Con un evidente abuso de las formas y una rudeza innecesaria con atisbos de burla, los magistrados del tribunal desecharon todas y cada una de las impugnaciones presentadas por los partidos opuestos al PRI. De manera

“legal”, y aunque no fuera lo moralmente correcto, triunfó la imposición.

La validación de la elección vendría a confirmar la existencia de unas instituciones míticas, cuya función es la conservación del *statu quo*. Una vez más quedó exhibida la razón cínica del búnker dirigente —como sinónimo de una sociedad jerarquizada y clasista, opuesta al cambio y a la innovación sociales—, controlado por una minoría dominante intransigente, que cultiva un absurdo esencialismo ahistórico y siente un miedo patológico a la información, a la verdad y al pensamiento crítico.

Era previsible, también, que los grupos de poder mediáticos no tardarían en intensificar su severo repertorio ideológico con aire de cruzada en pro de los intereses de los de arriba. Con independencia de las trampas semánticas y la fraseología falsificada de la actual dirigencia priísta y los reconvertidos amanuenses en los medios los mitos del búnker se refieren, como es natural, a los valores más comercializables en el mercado: la defensa de la mexicanidad, de la patria, de la democracia, de las libertades, del Estado de derecho y de las instituciones —entre ellas el sacrosanto IFE “ciudadanizado” “blindado” y “a prueba de fraudes”—, en contraposición al “odio” y la “violencia” de quienes encarnan un “peligro para México”. Una vez más, mitos, mitos, mitos... Con la salvedad de que cuando sus intereses son puestos en peligro por la evolución crítica de la sociedad, los amos de México no dudan en defenderse con todo el peso de esas “instituciones” y las fuerzas represivas del Estado.



## Notas

### GUERRA IMPERIAL Y DESINFORMACIÓN

[1.](#) Herodoto de Halicarnaso (480-425 a.C.). Historiador griego. Su *Historia* consta de nueve libros cuyo tema principal son las guerras médicas.

[2.](#) Homero (siglo VIII a.C.). Poeta épico griego. Se le atribuyen la *Ilíada*, la *Odisea*, los *Himnos homéricos* y la *Batracomiomaquia*.

[3.](#) Stanley Newcourt-Nowodworski, *La propaganda negra en la segunda guerra Mundial*, Algaba Ediciones, Madrid, 2006.

[4.](#) Demóstenes (384-322 a.C.). Político ateniense, el más grande orador de la Antigüedad. Combatió a Filipo de Macedonia, contra quien pronunció sus famosas *Filípicas*.

[5.](#) Filipo II (382-336 a.C.). Rey de Macedonia y padre de Alejandro Magno. Derrotó a los atenienses en Queronea.

[6.](#) Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.). Orador, escritor y político romano. Nombrado cónsul, consiguió frustrar la conjura de Catilina. Combatió las dictaduras de Julio y de Marco Antonio. Murió asesinado.

[7.](#) Lucio Sergio Catilina (109-62 a.C.). Político romano, pro pretor de África. Fue acusado por conjura ante el Senado por Cicerón.

[8.](#) Alejandro Magno (356-323 a.C.). Rey de Macedonia. Sometió a Grecia y conquistó Egipto, donde fundó Alejandría. Venció a los persas en Arbelas (331 a.C.), conquistó Babilonia, Susa y Persépolis y llegó hasta el Indo.

[9.](#) Nicolás Maquiavelo (1469-1527). Político italiano. Secretario de la segunda cancillería de la República de Florencia. En *El príncipe* expone sus ideas sobre la política moderna del príncipe, en el momento en que se constituían en Europa los modernos Estados nacionales.

[10.](#) Charles Bartlett, *Political Propaganda*, citado por Jean-Marie Domenach, en *La propaganda política*, Eudeba, Buenos Aires, 2001.

[11.](#) *Communication and Public Opinion*, citado por Jean-Marie Domenach.

[12.](#) Edward F. Halifax (1881-1959). Político conservador británico. Virrey de la India y ministro de Asuntos Exteriores.

[13.](#) Winston Churchill (1874-1965). Político británico, varias veces ministro y primer lord del Almirantazgo. Fue nombrado primer ministro al estallar la segunda Guerra Mundial. Participó en las conferencias de Teherán, El Cairo y Yalta. Premio Nobel de Literatura 1953.

[14.](#) George Washington (1732-1799). Militar y político estadounidense. Fue el primer presidente de los Estados Unidos, en 1789.

[15.](#) Citado por el diputado y periodista italiano Giulietto Chiesa en “Guerra y mentira”, *Voces del Periodista* núm. 179, 1º al 15 de febrero de 2008.

[16.](#) Agencia italiana ansa, “Los que hicieron guerra a Estados Unidos eligieron su propia destrucción”, y AFP, “Bush señala a Bin Laden y se apresta a atacarlo”, *La República*, Montevideo, Uruguay, 16 de septiembre de 2001.

[17.](#) “Bush señala a Bin Laden y se apresta a atacarlo”, citado.

[18.](#) Titular de primera plana del diario *La República* de Montevideo, Uruguay, del 16 de septiembre de 2001.

[19.](#) Como dice Noam Chomsky, el tema del terrorismo no era novedoso en el lenguaje de Washington: “Ésa fue la línea del gobierno de Ronald Reagan cuando asumió el poder, y desde el comienzo [de su administración] afirmó que el terrorismo internacional representaba la amenaza principal para el gobierno de Estados Unidos [...] decir que ‘estamos bajo el ataque de los terroristas’ es igual a que Adolfo Hitler declarara que estaba bajo el ataque de los judíos”. David Brooks, “Estados Unidos debe probar que atacó a terroristas”, en *Noam Chomsky en La Jornada*, La Jornada Ediciones, abril de 2002.

[20.](#) Jim Cason y David Brooks, “En curso, guerra de la información en Estados Unidos; anuncian ‘estrictos límites’ ”, *La Jornada*, 25 de septiembre de 2001.

[21.](#) *Idem.*

[22.](#) Molly Gordy, “Patriotismo, propaganda, censura...”, *Proceso*, núm. 1302, 14 de octubre de 2001.

[23.](#) Donald Rumsfeld se refería al hecho de que durante la invasión a Normandía, en la segunda Guerra Mundial, los aliados angloestadounidenses no informaron sobre la fecha del desembarco (1944) ni el lugar de la ofensiva y realizaron operaciones

diversionistas para confundir a los alemanes, haciéndoles creer que el lugar elegido era Calais. Véase Jim Cason y David Brooks, “No se mentirá a los medios, pero ‘la verdad será protegida’: secretario de Defensa de Estados Unidos”, *La Jornada*, 26 de septiembre de 2001, y “Desinformación, una táctica de inteligencia”, *Reforma*, 21 de febrero de 2002.

[24.](#) Jacques Ellul, *Propaganda: The Formation of Men's Attitudes*, Random House/Vintage Books, Nueva York, 1973.

[25.](#) Noam Chomsky (1928), profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, es autor de una extensa bibliografía sobre la función de los medios de comunicación y el modelo de propaganda de Estados Unidos. Sobre el tema destacan, entre otros, sus libros *La quinta libertad* (1985), *Los guardianes de la libertad* (1988), *El miedo a la democracia* (1992) y *Lucha de clases* (1997).

[26.](#) El Comité de Información Pública fue dirigido por George Creel, un periodista sensacionalista que orquestó una ofensiva sin precedentes de propaganda pro bélica.

[27.](#) C. P. Otero, *Noam Chomsky. Sobre democracia y educación*, Paidós, Barcelona, 2005.

[28.](#) El comité distribuyó más de 75 millones de panfletos, boletines y hojas volantes; publicó un periódico de 100 000 ejemplares de circulación, organizó 755 000 conferencias en 5 200 comunidades y obtuvo el apoyo de empresas cinematográficas para llevar su mensaje noticioso y motivacional al personal civil y militar. Véase Luis Eladio Proaño, “Periodistas en tiempos de guerra”, *Chasqui* núm. 38, Quito, Ecuador, 1991.

[29.](#) *Idem.*

[30.](#) Noam Chomsky, *La propaganda y la opinión pública. Conversaciones con David Barsamian*, Crítica, Barcelona, 2002.

[31.](#) *Idem.*

[32.](#) Citado en Jacques Ellul, *Propaganda: The Formation of Men's Attitudes*, *op. cit.*

[33.](#) Citado en D. Lerner, *Propaganda in War and Crisis*, Nueva York, 1951.

[34.](#) Chomsky y Herman, prefacio a *Los guardianes de la libertad*, Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1990.

[35.](#) Como señalan Chomsky y Herman, los medios de comunicación de masas están inmersos en una relación simbiótica con las fuentes de información poderosas,

tanto por necesidad económica como por reciprocidad de intereses.

[36.](#) Véase Noam Chomsky, “Injusticia infinita: la nueva guerra contra el terror”, en *Noam Chomsky en La Jornada*, Ediciones La Jornada, México, abril de 2002, y N. Chomsky y Edward S. Herman, *Washington y el fascismo en el tercer mundo*, Siglo XXI Editores, México, 1981.

[37.](#) Georgui Arbátov, *El aparato de propaganda político e ideológico del imperialismo*, Akal Editor, Madrid, 1975.

[38.](#) *Idem.*

[39.](#) *Idem.*

[40.](#) Alguna vez definida como un instrumento de política exterior de Estados Unidos parecida a la OTAN, Radio Europa Libre daba trabajo a 1 600 personas (1 100 en Múnich, 100 en Nueva York y 400 en la estación de retransmisión de Portugal) y lanzaba programas en seis lenguas: checa, eslovaca, húngara, polaca, rumana y búlgara.

[41.](#) Georgui Arbátov, *El aparato de propaganda político e ideológico del imperialismo*, *op. cit.*

[42.](#) *Idem.*

[43.](#) Reporte final del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Estados Unidos, citado por Carlos Fazio en *El Tercer Vínculo: de la teoría del caos a la militarización de México*, Joaquín Mortiz, México, 1996.

[44.](#) Sobre este tema, véase Georgui Arbátov, *El aparato de propaganda político e ideológico del imperialismo*, y Stanley Newcourt-Nowodworski, *La propaganda negra en la segunda guerra Mundial*, citados.

[45.](#) Véase Víctor Marchetti y John D. Marks, *La CIA y el culto del espionaje*, Euros, Barcelona, 1974.

[46.](#) La “desinformación” (*desinformatsiya* en ruso) se convirtió en una especialidad de los servicios secretos soviéticos.

[47.](#) Andrés Oppenheimer, *La hora final de Castro*, Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 1992.

[48.](#) Ignacio Ramonet, “La mentira como arma de guerra. Cambios estructurales”, mimeógrafo, s. f.

[49.](#) El síndrome de Vietnam alude, más que a un trastorno por estrés postraumático, que como la neurosis de guerra y el síndrome de Estocolmo afecta a individuos que han participado en conflictos bélicos, a la crisis ideológica y moral de la sociedad estadounidense producida por la derrota en el sudeste asiático, que se tradujo en una “crisis de confianza” prolongada y que, combinada con el escándalo Watergate, llevaron a la caída de Richard Nixon en agosto de 1974.

[50.](#) Si bien se ha dicho que la de Vietnam fue la primera “guerra televisada”, cabe señalar que no fue filmada en tiempo real, porque las películas (rodadas en 16 mm) eran enviadas a Estados Unidos en avión y se difundían con 24 o 48 horas de distancia respecto de los hechos.

[51.](#) Material inflamable para cargar bombas incendiarias.

[52.](#) Durante más de dos décadas (1949-1975), Estados Unidos intentó sojuzgar a Vietnam mediante la fuerza y la subversión, violando en el proceso la Carta de las Naciones Unidas, los Acuerdos de Ginebra de 1954, el Código de Nuremberg, la Convención de La Haya, el Protocolo de Ginebra de 1925 y, finalmente, los Acuerdos de París de 1973. Durante casi 10 años los campesinos de Indochina sirvieron como conejillos de Indias para una tecnología militar en desarrollo: bombas de racimo, cohetes diseñados para meterse a las cuevas donde se escondía la gente que escapaba de los bombardeos de saturación, un despliegue infernal de armas antipersonales; nuevas versiones de las balas “dum-dum”, por mucho tiempo ilegales. Estados Unidos perdió 58 000 soldados y causó la muerte de millones de vietnamitas, además de varios miles de laosianos y camboyanos.

[53.](#) Ignacio Ramonet, “La mentira como arma de guerra. Cambios estructurales”, citado.

[54.](#) *Idem.*

[55.](#) Resulta una ironía que el saudita Osama Bin Laden, principal sospechoso de los ataques terroristas en Nueva York y Washington, haya sido reclutado por la CIA durante la guerra entre Afganistán y la Unión Soviética, en el marco de una operación secreta de gran envergadura, mediante la cual la llamada *jihad* islámica (o guerra santa contra las fuerzas soviéticas) se convirtió en parte integral de la estrategia de inteligencia de la CIA, apoyada por la Casa Blanca y Arabia Saudita y financiada en gran medida con fondos provenientes del narcotráfico, floreciente en la frontera afgano-paquistaní.

[56.](#) Jenaro Villamil, “Comienza la autocensura a operar en los grandes consorcios mediáticos estadounidenses”, *La Jornada*, 11 de octubre de 2001.

[57.](#) El canal de noticias por satélite Al Jazeera, con sede en Doha, Qatar, apareció en 1996; financiado con un subsidio del emir Sheik Hamad Bin Khalifa al Thani comenzó a destacar en el mundo árabe como un canal alternativo a las grandes cadenas de televisión de Occidente.

[58.](#) Carlos Fazio, “Un Estados Unidos con menos influencia y rodeado de enemigos, prevén expertos de inteligencia”, *La Jornada*, 17 de diciembre de 2001.

[59.](#) Jim Cason y David Brooks, “Oficina del Pentágono, encargada de difundir noticias falsas en el exterior”, *La Jornada*, y Horacio Santini, “Estados Unidos estudia esparcir información falsa”, *Milenio*, 20 de febrero de 2002.

[60.](#) AFP, “Niega Estados Unidos guerra de información”, *El Universal*, y DPA “Rumsfeld rechaza desinformación”, *Reforma*, 21 de febrero de 2002.

[61.](#) Sobre el tema, véase John Saxe-Fernández, “El Pentágono y la desinformación en Afganistán”, *La Jornada*, 27 de junio de 2002.

[62.](#) En medio de la campaña de histeria estadounidense se mencionó la posibilidad de que Irak contara con armas químicas tales como tabún (gas nervioso), sarín (gas inodoro e incoloro), ambos inventados en la Alemania nazi, y el agente vx (un gas venenoso producido por los ingleses). Las armas químicas no son armas estratégicas de destrucción masiva, sino armas de campo de batalla, de alcance y potencial limitado, que sirven para desatar pánico.

[63.](#) Entre las armas bacteriológicas, la campaña mencionó el ántrax y la toxina *botulinum*.

[64.](#) Véase DPA, Notimex, “Expertos contradicen a Bush: Irak no tiene armas”, *Milenio*, 9 de septiembre de 2002, y Naief Yahya, *guerra y propaganda. Mitos masivos y el mito bélico en Estados Unidos*, Paidós, México, 2003.

[65.](#) Agencia DPA, “Medios en Estados Unidos: descarada complicidad”, *La Jornada*, 12 de octubre de 2002.

[66.](#) Se conoce como *macartismo* la época en la historia de Estados Unidos caracterizada por una serie de medidas anticomunistas promovidas por el senador republicano por Wisconsin, Joseph McCarthy, quien presidió el subcomité permanente de investigaciones del Senado entre 1953 y 1954, en el clímax de la Guerra Fría con la Unión Soviética, durante el gobierno de Dwight Eisen-hower. Su búsqueda de comunistas en el seno del gobierno de Estados Unidos, sus purgas y sus “listas negras”, fueron denunciadas por sus críticos como una “cacería de brujas” y se popularizó el término *macartismo* para calificar una campaña de desprestigio.

[67.](#) La expresión está tomada del libro de David Barsamian con entrevistas a Noam Chomsky, *Mantener la chusma a raya*, Txalaparta, País Vasco, 1994.

[68.](#) El 12 de marzo de 2002 el director de seguridad interior de Estados Unidos, Tom Ridge, presentó por televisión el sistema de alerta denominado simbólicamente “Arcoiris del Terror”, que contenía cinco categorías de riesgo. La escala de colores iba del verde (bajo riesgo) seguido por el azul, el amarillo, el naranja y el rojo (máximo riesgo). Según la argumentación oficial, el sistema fue diseñado para ayudar al público a mejorar su coordinación, su preparación y su seguridad ante amenazas terroristas.

[69.](#) Como advirtió en enero de 2003 la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), la visión de una sociedad completamente vigilada, como la que describió George Orwell en su novela *1984*, “es por primera vez tecnológicamente posible”. La ACLU consideró que la principal amenaza “viene ahora del gobierno”, que por un lado obtuvo mayor autoridad para realizar actos de espionaje interno, especialmente interceptación de líneas telefónicas y programas de computadora, y por otro redujo los requisitos para que la policía pueda vigilar a los ciudadanos. Véase José Carreño, “El verdadero *Big Brother*”, *El Universal*, 22 de enero de 2003. Asimismo, un desplegado aparecido el 17 de marzo de 2003 en *The New York Times*, firmado por la agrupación Snoop Watch, denunció que “*Big Brother* ya está entre los ciudadanos”.

[70.](#) La versión original del presente subtema apareció publicada con el mismo título, “Embriaguez chovinista”, en *La Jornada*, el 7 de abril de 2003.

[71.](#) Marc Cooper, entrevista a Gore Vidal, en “Bush, especie de maniático que ataca al país que se le antoja”, *La Jornada*, 14 de noviembre de 2005.

[72.](#) AFP, “Bush ha explotado el 11-S para aplicar una política ‘sicótica’: Gore Vidal”, primera plana de *La Jornada*, 16 de octubre de 2006.

[73.](#) Patrice de Beer, “Nuevas preguntas de la prensa norteamericana”, *Milenio*, 22 de noviembre de 2003.

[74.](#) Véase Horacio Santini y Rocco Marotta, “Las pifias del *New York Times*”, *Milenio*, 29 de mayo de 2004.

[75.](#) *Idem.*

[76.](#) El texto completo de la nota editorial “El *Times* e Irak”, de *The New York Times*, fue publicado por el diario mexicano *El Universal*, con el título “Admite el *NYT* fallos en la cobertura en Irak”, el 27 de mayo de 2004.

[77.](#) Horacio Santini y Rocco Marotta, “Las pifias del *New York Times*”, citados.

[78.](#) “El *mea culpa* del diario llega tarde y mal”, *El Universal*, 27 de mayo de 2004.

[79.](#) Horacio Santini y Rocco Marotta, “Las pifias del *New York Times*”, citados.

[80.](#) Los resultados de la investigación del diario contradijeron los relatos de Kelley que explicaban la noche que pasó con terroristas egipcios, en 1997, y las conversaciones con un colono judío en 2001. El periódico tampoco halló evidencias de sus supuestos encuentros con terroristas que cruzaban la frontera entre Pakistán y Afganistán en 2002, su entrevista con la hija de un general iraquí en 2003 y su búsqueda de Osama Bin Laden ese mismo año.

[81.](#) AFP y Notimex, “Renuncia directora del *USA Today* por el caso del periodista que inventó notas”, *La Jornada*, 22 de abril de 2004.

[82.](#) Salvador Camarena, “Despide NBC a Peter Arnett”, *El Universal*, 1º de abril de 2003.

[83.](#) Véase Peter Arnett, “Esta guerra no está funcionando”, tomada por *Milenio* de *The Daily Mirror* para su edición del 2 de abril de 2003.

[84.](#) Gabriel Papa, “Decir la verdad. El *New York Times*, el periodismo e Irak”, *Brecha*, 4 de junio de 2004.

[85.](#) *Idem.*

[86.](#) David Brooks, “Revés a periodistas en EU; anulan la confidencialidad de las fuentes”, *La Jornada*, 16 de febrero de 2005.

[87.](#) *Idem.*

[88.](#) Citado por Michael C. Ruppert, “Por qué Tenet y Pavitt renunciaron en verdad a la CIA”, donde se cita un artículo en *The Financial Times*, 7 de marzo de 2002, tomado del sitio *rebelión.com*, 15 de junio de 2004.

[89.](#) *Idem.*

[90.](#) *Idem.*

[91.](#) *Idem.*

[92.](#) *Idem.*

[93.](#) AFP y DPA, “Karl Rove, asesor de Bush, habría filtrado identidad de agente de la CIA”, *La Jornada*, y Horacio Santini, “Principal consejero de Bush, implicado en



escándalo”, *Milenio*, 4 de julio de 2005.

[94.](#) Horacio Santini, “Condenan a cuatro meses de prisión a periodista de *The New York Times*”, *Milenio*, 7 de julio de 2005.

[95.](#) *Idem.*

[96.](#) Véase Andrew Buncombe, “En el caso de la periodista Judith Miller no se ha determinado si cometió delito”, *The Independent*, retomado por *La Jornada*, 11 de julio de 2005.

[97.](#) *Idem.*

[98.](#) EFE, “Sale Judith Miller de prisión”, *El Universal*, 30 de septiembre de 2005.

[99.](#) Así apodado por su hiperactividad infantil.

[100.](#) AFP, Reuters, DPA y *The Independent*, “Recién excarcelada, Judith Miller rompe el silencio ante gran jurado”, *La Jornada*, 1° de octubre de 2005.

[101.](#) Gabriel Moysen, “Miller delata a Libby: lo acusan por conspirar”, *El Financiero*, 17 de octubre de 2005.

[102.](#) Citado por David Brooks, en “Se desploma a 38 por ciento el índice de aprobación a Bush en Estados Unidos”, *La Jornada*, 17 de octubre de 2005.

[103.](#) *Idem.*

[104.](#) David Brooks, “Acción legal contra la Casa Blanca, posible principio del fin del gobierno de Bush”, *La Jornada*, 24 de octubre de 2005.

[105.](#) *Idem.*

[106.](#) David Brooks, “Renuncia el jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney”, *La Jornada*; Horacio Santini, “Estados Unidos: cae jefe de asesores de Cheney por escándalo”, *Milenio*, y José Carreño, “Acusan a Lewis Libby de mentir en el caso Plame”, *El Universal*, 29 de octubre de 2005.

[107.](#) AFP, “Cheney, implicado en la revelación de la identidad de una agente de la CIA”, *La Jornada*, 26 de octubre de 2005.

[108.](#) David Brooks, “En tela de juicio, la política belicista de Bush”, *La Jornada*, 29 de octubre de 2005.

[109.](#) *Idem.*

[110.](#) AP y Reuters, “Defensa de Libby: su falla para recordar”, *Milenio*, 31 de

octubre de 2005.

[111.](#) David Brooks, “Lewis Libby se declara inocente de perjurio y obstrucción de la justicia”, *La Jornada*, 4 de noviembre de 2005.

[112.](#) David Brooks, “Libby es declarado culpable de perjurio y obstrucción de la justicia”, *La Jornada*, 7 de marzo de 2007.

[113.](#) “Condenan a cárcel a asesor de Cheney”, *Reforma*, 6 de junio de 2007, y David Brooks, “Scooter Libby, otro que muerde el polvo”, *La Jornada*, 7 de junio de 2007.

[114.](#) AFP, DPA, Reuters y *The Independent*, “Bush no descarta condonar por completo las sanciones a Libby”, *La Jornada*, 4 de julio de 2007.

[115.](#) *Idem.*

[116.](#) David Brooks, “Libby es declarado culpable de perjurio y obstrucción de la justicia”, citado.

[117.](#) *Idem.*

[118.](#) AFP, DPA y Reuters, “El presunto arsenal nuclear iraquí, ‘error de inteligencia’, admite Bush”, *La Jornada*, y “Bush reconoce fallos de la CIA sobre Irak”, *Milenio*, 15 de diciembre de 2005.

[119.](#) AFP, Reuters y DPA, “Descarta el Pentágono vínculos entre Saddam Hussein y la red Al Qaeda”, *La Jornada*, 7 de abril de 2007.

[120.](#) “La guerra de Irak fue por el petróleo: Greenspan”, *Milenio*, 17 de septiembre de 2007.

[121.](#) Patrick Cockburn, “Asciende a 4 000 el número de militares estadounidenses muertos en Irak desde 2003”, *La Jornada*, 25 de marzo de 2008.

[122.](#) Véase John Saxe-Fernández, “Irak: más de un millón”, *La Jornada*, 27 de marzo de 2008.

[123.](#) Suy Adams, “Periodista iraquí llama ‘perro’ a Bush y le avienta zapatos en señal de desprecio”. *La Jornada*, 15 de diciembre de 2008.

#### EL CASO STANLEY Y EL GOLPISMO MEDIÁTICO

[1.](#) Francisco Jorge Stanley Albaitero (1942-1999) se inició profesionalmente en 1969 como locutor de la estación de radio XEX, donde trabajó hasta 1974, año en que

incursionó en televisión para conducir *nuestra gente*, en lo que sería el principio de una carrera de 27 años en Televisa, con programas como *El Club del Hogar*, *Alegrías del Mediodía*, *Club de la TV*, *Odisea Burbujas*, *La Carabina de Ambrosio*, *Mi Barrio* y *Eco noticias*. Al momento de su ejecución conducía los programas *Una tras otra* y *¡Sí hay... y bien!*, en TV Azteca, empresa a la que se incorporó en diciembre de 1998.

2. Durante la agresión resultó muerto un cliente del restaurante, Juan Manuel de Jesús Núñez, y fueron heridos Lourdes Hernández, el *valet parking* Pablo Hernández Pérez, y el reportero de espectáculos y compañero de Stanley, Jorge Gil.

3. La reproducción del documento de la Secretaría de Gobernación con la foto y la acreditación de Francisco Jorge Stanley Albaitero apareció en las primeras planas de los diarios *Reforma* y *La Jornada* el 9 de junio de 1999. Ese mismo día, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, Jorge Tello Peón, reconoció que hubo “irregularidades” en la concesión de la licencia para portar armas a Stanley, y reveló que el locutor también había pedido autorización para establecer una empresa de seguridad privada. Rodolfo Montes y Manuel Moreno, “Reconoce Segob anomalías en la licencia para armas de Stanley”, *El Financiero*, 10 de junio de 1999.

4. Rosalinda Palomeque, “Por Stanley vuelve Jacobo”, *Reforma*, 8 de junio de 1999.

5. Cuauhtémoc Cárdenas, “A la opinión pública”, *La Jornada*, 8 de junio de 1999.

6. Así lo calificaron Humberto Musacchio en *Reforma* y Enrique del Val Blanco en *El Universal*.

7. Diversos analistas se refirieron a la pieza oratoria de Salinas Pliego como una incitación al “golpismo” o a la “sedición”, entre ellos Javier Corral y Teresa Incháustegui en *La Crónica de Hoy*, y Jesús Silva-Herzog Márquez en *Reforma*.

8. Raúl Trejo Delarbre, “Crimen abominable; histeria peligrosa”, Sociedad y Poder, *La Crónica de Hoy*, 8 de junio de 1999.

9. Claudia Herrera Beltrán, “Hay *indicios* de que Stanley tenía relación con el narco”, *La Jornada*, 12 de junio de 1999.

10. David Vicenteño, Amparo Trejo y Daniel Lizárraga, “Ejecutan a Paco al estilo narco”, primera plana del diario *Reforma*, 8 de junio de 1999.

11. Carlos Fazio. “El sello narco en el crimen de un animador mexicano de televisión”, *Clarín*, Buenos Aires, Argentina, 9 de junio de 1999.

[12.](#) Ricardo H. Andonaegui y Javier Cabrera, “Operó a Stanley un médico de Amado Carrillo”, *El Universal*, 10 de junio de 1999.

[13.](#) Silvia Otero, Ricardo H. Andonaegui y Mario Torres, “Lo ubican como proveedor de drogas; usaba cocaína: PGJDF”, *El Universal*, 9 de junio de 1999.

[14.](#) Silvia Otero, Ricardo H. Andonaegui, Mario Torres y Javier Cabrera, “En actas de PGR, el nexo de Stanley con narcos”, *El Universal*, 11 de junio de 1999.

[15.](#) Doris Gómora y Amparo Trejo, “Lo vinculan al narco”, *Reforma*, 9 de junio de 1999.

[16.](#) Ricardo H. Andonaegui y Javier Cabrera, “Operó a Stanley un médico de Amado Carrillo”, citado.

[17.](#) Francisco Rodríguez, “Concluyen exámenes: ‘era un adicto crónico’ ”, *Reforma*, 19 de junio de 1999.

[18.](#) Silvia Otero, Ricardo H. Andonaegui y Mario Torres, “Lo ubican como proveedor de drogas; usaba cocaína: PGJDF”, citado.

[19.](#) *Idem.*

[20.](#) Alma E. Muñoz, “Atacar a Cárdenas y asegurar concesión, metas de TV Azteca”, *La Jornada*, 12 de junio de 1999.

[21.](#) Sobre este último asunto, véase Angélica Cuéllar Vázquez, *La construcción social de las verdades jurídicas. Análisis sociológico del caso Stanley*, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004.

[22.](#) Para una eventual línea de interpretación sobre los motivos de la campaña de desprestigio montada contra Cuauhtémoc Cárdenas por TV Azteca, habría que tomar en cuenta los presuntos nexos del concesionario de la televisora del Ajusco, Ricardo Salinas Pliego, con Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, enemigo político del cardenismo. Según notas periodísticas que reprodujeron investigaciones de la policía federal suiza, en 1993 fueron transferidos 29 millones de dólares a la empresa Silverstar, con sede en Panamá, propiedad de Salinas Pliego (accionista mayoritario del Grupo Elektra, cuyo rubro principal es una cadena de electrodomésticos). Ese año fueron privatizadas las redes de la televisión estatal Imevisión (canales 7 y 13), cuya concesión fue otorgada a Salinas Pliego. Se manejó entonces que las transferencias ilícitas formaban parte de una trama en la cual Salinas Pliego aparecía como prestanombres de la familia Salinas de Gortari. Hay que recordar también que Raúl Salinas de Gortari fue vinculado por la agencia antidrogas

de Estados Unidos, la DEA, con el cártel del Golfo, cuyo jefe era el narcotraficante preso Juan García ábrego.

[23.](#) El 25 de enero de 2001 el juez quincuagésimo quinto de lo penal, Rafael Santana, dictó una sentencia absolutoria a los cinco inculpados en el caso (Mario Bezares, Erasmo Pérez, Paola Durante, Luis Martínez y Jorge García), al no encontrar elementos suficientes para fincar la plena responsabilidad penal. Bezares recuperó su libertad, pero como en los casos Colosio y Digna Ochoa, la verdad sobre el asesinato de Stanley está muy lejos de conocerse.

[24.](#) Fátima Fernández Christlieb, *La responsabilidad de los medios de comunicación*, Paidós, México, 2002.

[25.](#) *Idem.*

[26.](#) Los artículos aparecieron publicados en los periódicos *La Crónica de Hoy*, *Excélsior*, *El Financiero*, *La Jornada*, *La Prensa*, *Reforma* y *El Universal*.

[27.](#) Adriana Garay, “Coordina la cobertura Ricardo Salinas Pliego”, *Reforma*, 8 de junio de 1999.

[28.](#) *Idem.* 29. En las elecciones de julio de 2000 el PRI cedería el gobierno al candidato del Partido Acción Nacional, Vicente Fox, en lo que algunos analistas consideraron como parte de una “transición pactada”.

#### A PROPÓSITO DE LA INGENIERÍA DEL CONSEJO

[1.](#) Francisco Barnés renunció a la Rectoría de la UNAM el 12 de noviembre de 2000. En su lugar fue nombrado Juan Ramón de la Fuente, doctor en psiquiatría, quien salió directamente del gabinete presidencial. Distintos comentaristas destacaron la intervención del presidente Zedillo en el operativo de Estado que culminó con la transferencia del entonces secretario de Salud a la Rectoría de la UNAM. Carlos Ramírez, por ejemplo, habló de “una sucesión priísta del rector”, para “mantener el control del Ejecutivo” sobre la Universidad Nacional. Columna “Indicador Político”, *El Universal*, 19 de noviembre de 2000.

[2.](#) Conocido como el “escándalo del Fobaproa” (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), el asunto se refiere a la conversión en deuda pública de un monto superior (inicialmente) a 65 000 millones de dólares producto de las actividades dolosas y fraudulentas de un grupo de banqueros y empresarios. El rescate fue aprobado en el Congreso con los votos de los legisladores del PRI y del PAN. Según algunas estimaciones, el costo del rescate bancario equivalía, en su momento, a 95 años del

subsidio a la UNAM.

3. En plena campaña interna del PRI, como aspirante a la Presidencia de la República, Francisco Labastida afirmó que el Ejército Popular Revolucionario “entregó armas” a los huelguistas. El presunto nexo *EPR-ultras* fue mencionado por Labastida durante una gira proselitista por Puerto Vallarta (Germán Gachuzo, “Arma a paristas *EPR*: Labastida”, *Reforma*, 3 de octubre de 1999) y reiterado ocho días después en un programa de televisión, cuando dijo que la guerrilla del *EPR* está detrás de “un grupo radicalizado” del *CGH*, según “un informe de inteligencia” que le llegó “en los últimos días que yo era secretario de Gobernación” (entrevista a Francisco Labastida en el programa *Séptimo Día*, Canal 40, el 10 de octubre de 1999).

4. En su artículo “Por un puñado de cuotas”, publicado en *La Jornada* el 30 de abril de 1999, Sergio Zermeño contabilizó una serie de desplegados que incluía 11 planas pagadas por Rectoría en *Reforma*; 22 en *La Jornada*; 17 en *Excélsior*; 17 en *El Financiero*; 12 en *Unomásuno*, y por deducción, 20 planas en el resto de la prensa escrita.

5. En el capítulo del espionaje sobre el movimiento estudiantil hay que incluir a los elementos de “Vigilancia UNAM”, que entonces dependía del director general de Protección a la Comunidad, Brígido Navarrete, y que estaba integrado por trabajadores administrativos y sindicalizados y personal de la Procuraduría General de la República contratados con fines de control político. Navarrete controlaba además al grupo de choque *Cobra*, vinculado con organizaciones porriles en las preparatorias y las escuelas dependientes de la UNAM. Según un documento del *CGH* del 1º de junio de 1999, desde la Dirección General de Información, a cargo de Gerardo Dorantes, funcionaba otro “organismo de inteligencia” que se encargaba de investigar a los universitarios en sus actividades, reuniones y asambleas.

6. En su columna “Trascendió”, del 5 de febrero de 2000, *Milenio Diario* consignó que el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, y el director del Cisen, Alejandro Alegre, tuvieron a un grupo de infiltrados en la dirigencia estudiantil. El diario señaló que el ex subsecretario de Gobernación, Jesús Murillo Karam, fue “el articulador de una *guerra sucia* contra el *CGH*”, guerra que se había iniciado cuando Francisco Labastida era el titular de la dependencia de Bucareli.

7. María Idalia Gómez, “Diario de los orejas en la UNAM”, *Milenio Diario*, 22 de abril de 2000.

8. *Idem*.

9. El conflicto de la UNAM motivó una polémica epistolar entre el subcomandante

Marcos del EZLN y el escritor Carlos Monsiváis. El primero escribió “La *H* tiene la palabra (y como es muda, la cede a la huelga)” (*La Jornada*, 13 de octubre de 1999), y el segundo respondió con un artículo titulado “De la búsqueda belicosa del *nada*” (*La Jornada*, 19 de octubre de 1999). Monsiváis repitió su posición expresada antes en otros artículos, sobre el “sectarismo”, “la cerrazón y el monólogo febril y machista” y “las posiciones irreductibles del todo o nada” de los *ultras* del CGH.

10. El 3 de febrero de 2000, un numeroso grupo de intelectuales y artistas suscribió un desplegado pagado por la rectoría de la UNAM, en el que se pedía a una “minoría intolerante” del CGH que devolviera las instalaciones de la máxima casa de estudios.

11. Cabe consignar que durante el conflicto estudiantil, sectores del PRD vinculados a la UNAM y autoasumidos como “moderados”, actuaron como aliados de la Rectoría y adoptaron en los hechos una actitud rompehuelgas.

12. Durante la campaña electoral de 1994, el candidato sustituto del oficialismo (luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio) martilleó a la opinión pública con *spots*, *slogans* y declaraciones públicas montados sobre la idea básica de que una derrota del PRI implicaría llevar al país al abismo.

13. El 2 de febrero de 2000, después de los incidentes que provocaron la intervención de la Policía Federal Preventiva en la Preparatoria 3, el sindicato de trabajadores de la UNAM identificó como responsable de la violencia a un grupo de choque denominado *Cobra*, comandado por Brígido Navarrete, director de Protección a la Comunidad, dependiente de Rectoría. Según Agustín Rodríguez, dirigente del STUNAM, la agresión fue desatada por “agentes provocadores contratados”. *La Jornada*, 3 de febrero de 2000.

14. Antes de la provocación en la Preparatoria 3, versiones de prensa dieron cuenta de un reagrupamiento de grupos porriles, y varios de ellos, como la Asociación de Alumnos Universitarios (AAU), la Tres de Marzo (3-M) y el Grupo Representativo de Estudiantes Universitarios (GREU), estuvieron coordinando acciones conjuntas violentas.

15. Véase la entrevista de Sergio Uzeta en Canal 11 a Federico Reyes Heróles en vísperas de la entrada de la Policía Federal Preventiva a la UNAM.

16. La intervención de la Policía Federal Preventiva en la UNAM fue transmitida en vivo y con comentaristas especiales por los dos consorcios televisivos, que suspendieron sus programaciones habituales. Televisa inició su cobertura a las 7:30 horas, con un *rating* de 4 puntos; a las 10:15 horas había alcanzado un puntaje de

13.2, muy elevado para un día domingo. Se estima que 54% de los televisores de todo el país sintonizaron ese día las transmisiones de Televisa y TV Azteca sobre la detención de los estudiantes del CGH. Jenaro Villamil, “El desinformante”, suplemento “Bucarelli 8” de *El Universal*, 12 de marzo de 2000.

17. La Policía Federal Preventiva, creada el 14 de enero de 1999, fue integrada por elementos de la Tercera Brigada de la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuerpo entrenado con base en el *Manual de Disturbios Civiles del Ejército*. Se trata de un grupo antiterrorista, concebido en el marco de las estrategias de Seguridad Nacional. En principio estuvo integrado por 4 899 militares y 800 agentes de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

18. Luego de la “reconquista” de la UNAM por los federales, el rector Juan Ramón de la Fuente ordenó destruir todos los murales que estudiantes habían pintado en las paredes de escuelas, preparatorias, facultades y colegios de la Universidad. Fue una apuesta al olvido y un atentado contra la libertad de expresión. Parte de ese patrimonio efímero fueron los murales *Huelga hoy, universidad siempre*, de Liliana González; *Proyecto: universidad y vida*, de Palomo, Isset y Sánchez, y *La escuela de Filos*, de Consuelo Roa y Argeo Martínez.

#### DE LOS VIDEOESCÁNDALOS A LA CRISIS CON CUBA

1. “Un video destapa fraude por 30 millones de pesos contra el GDF”, *La Jornada*, 2 de marzo de 2004.

2. Según declaraciones del procurador de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, a *La Jornada*, las empresas inmiscuidas en el fraude eran Arquitectura y Construcciones Pachocán, Jori Construcciones, Promotora y Constructora El Naranja, Ingeniería y Diseño en Construcción Banda, Centro Decorativo Nicté-há y D’Regil Creaciones. Véase “Un video destapa fraude por 30 millones de pesos contra el GDF”, citado, y Arturo Páramo y Gladis Ferrer, “Destapa caso Ponce corrupción en GAM”, *Reforma*, 3 de marzo de 2004.

3. El procurador Bátiz anunció que al momento de iniciar una averiguación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito contra Ponce, sólo existía una orden de presentación contra el ex funcionario para que testificara sobre el caso de fraude por 31 millones de pesos cometido contra la delegación Gustavo A. Madero. Pascual Salanueva, “Abren averiguación por enriquecimiento”, *Milenio*, y “Abren averiguación al as de Las Vegas”, *Reforma*, 3 de marzo de 2004.

4. Daniel Venegas, “D. F.: se fugó el secretario de Finanzas”, *Milenio*, y Ella



Grajeda, “Cesan a Ponce y se esfuma”, *El Universal*, 3 de marzo de 2004.

5. Aparte de las empresas inmiscuidas en el fraude al Gobierno del Distrito Federal: Arquitectura y Construcciones Pachocán, Jori Construcciones, Promotora y Constructora El Naranjo, Ingeniería y Diseño en Construcción Banda, Centro Decorativo Nicté-há y D’Regil Creaciones, Ahumada era propietario de otras firmas dedicadas a la construcción, entre ellas, Pagoza Urbanizadores y Constructores, Cáscata, Asfa, Austral y Pabellón Tarango. Entre sus propiedades se contabilizaban, además, un rancho de 47 hectáreas en Topilejo, un avión y un helicóptero. Según una nota periodística, las empresas de Ahumada no aparecían en la base de datos del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Véase Susana González, “Las empresas de Ahumada Kurtz no aparecen en el Registro Público”, *La Jornada*, 10 de marzo de 2006.

6. Una nota periodística publicada en la primera plana del periódico *El Independiente* señaló, dos días después de la divulgación televisiva del caso Ponce, que el ex secretario de Finanzas del Distrito Federal había sido el ariete durante el gobierno de Ernesto Zedillo para la acusación de enriquecimiento ilícito en contra de Raúl Salinas de Gortari. En ese entonces, Ponce se desempeñaba como subsecretario de Atención Ciudadana y Contraloría Social de la Contraloría y firmó la declaratoria para el ejercicio de la acción penal abierta al hermano mayor del ex presidente Carlos Salinas. La información no era nada inocente dados los estrechos vínculos personales entre el dueño del diario, Carlos Ahumada, y el clan Salinas. Véase David Aponte, “Un cazador de salinistas”, *El Independiente*, 3 de marzo de 2004.

7. Según explicó Lucianne Goldberg, la supuesta agente y publicista de Nueva York que asesoró a Linda Tripp durante el caso Clinton-Lewinsky, “carnaza es lo que se hace con la porquería, los chismes, la intriga, el escándalo [...] me encanta la carnaza, vivo de la carnaza”. Citada por John B. Thompson, en su libro *El escándalo político. Poder y visibilidad en la era de los medios de comunicación*, Paidós, México, 2001.

8. José Luis Flores, “Döring, ‘ariete’ de las polémicas”, *El Universal*, 4 de marzo de 2004.

9. Sergio Jiménez y Jorge Teherán, “La historia del casete”, *El Universal*, 4 de marzo de 2004.

10. El diputado panista Federico Döring dijo durante una entrevista que el video le fue entregado por “alguien” cuyo nombre “no me dice nada”. “Es un X, no lo ubico, me dio el nombre pero no me dice nada, ni su voz”. Jesusa Rodríguez, “Los enredos de Döring”, *Proceso*, 14 de marzo de 2004.

[11.](#) John B. Thompson, “El escándalo como acontecimiento mediático” citado.

[12.](#) Según declaró Carlos Ahumada en una entrevista que le hiciera vía telefónica Joaquín López Dóriga el 3 de marzo, el dinero entregado a Bejarano era producto de “una extorsión [...] para solucionar problemas que se me presentaban [no para] recibir algún favor”. Vicente Hernández y redacción de *Milenio*, 4 de marzo de 2004.

[13.](#) A raíz de la poderosa mediación que ejerce la prensa en la relación entre gobernantes y gobernados, algunos sociólogos como D. L. Swanson hablan de la vigencia de una singular forma de gobierno: la *mediocracia* o democracia centrada en los medios. Véase Gustavo Pandiani, *Homo zapping. Política, mentiras y video*, Jerman Editor, Texas, 2004.

[14.](#) Raúl Monge, “La trama y la trampa”, *Proceso*, núm. 1431, 4 de abril de 2004.

[15.](#) Antonio Jáquez y María Scherer Ibarra, “La televisión somete, enjuicia, condena”, *Proceso*, núm. 1433, 18 de abril de 2004.

[16.](#) *Idem.*

[17.](#) Véase “Enloda Bejarano a AMLO”, redacción de *Reforma*, ocho columnas del 4 de marzo de 2004.

[18.](#) “Descubren a René Bejarano aceptando soborno de 45 000 dólares” redacción de *Reforma*, 4 de marzo de 2004.

[19.](#) *Reforma* y *Milenio*, 4 de marzo de 2004, citados.

[20.](#) La empresa Televisa ha conformado la cultura mexicana por casi medio siglo, controla la industria del entretenimiento y provee de contenidos a más de 600 cableros, es dueña del sistema Sky que tiene 180 canales y más de un millón de suscriptores, mantiene 23 señales de televisión en tres continentes, cuatro canales de televisión sólo en la capital del país —un caso único en el mundo—, opera más de 306 estaciones de radio, y tiene sellos disqueros, de videos, cine, editoriales, internet, licencias y alianzas estratégicas internacionales, además de una escuela de educación artística y tres equipos de futbol de primer división, incluido Estadio Azteca.

[21.](#) Recupero los términos utilizados por Rolando Cordera Campos en “Obviedades”, *Etcétera*, núm. 42, 1º de abril de 2004.

[22.](#) El Comité Ejecutivo Nacional ampliado del PRD inició el 5 de marzo de 2004 un procedimiento estatutario para “suspender los derechos políticos” (expulsión) del ex secretario de Asuntos Electorales durante la presidencia de Rosario Robles, Ramón Sosamontes, y de Carlos Ímaz, quien al momento de estallar el escándalo se

desempeñaba como delegado en Tlalpan.

[23.](#) Una encuesta de María de las Heras publicada en *Milenio diario* el 22 de marzo de 2004 daba la ventaja a Santiago Creel, con 33%, seguido por Roberto Madrazo y López Obrador, ambos con 30%, contra 6% del candidato independiente Jorge G. Castañeda. Otra medición de *El Universal*, publicada el 30 de marzo, señaló que AMLO había bajado 17 puntos en igual número de días, tras revelarse los videoescándalos.

[24.](#) Bertha Teresa Ramírez, “Claras evidencias de *operativo de Estado* en videos: López Obrador”, *La Jornada*, 8 de marzo de 2006.

[25.](#) En julio de 1995 el periodista Eduardo Valle, asesor del ex procurador de la República, Jorge Carpizo, lanzó un libro sobre el “narcosalinismo” titulado *El segundo disparo. La narcodemocracia en México*. Allí documentó las andanzas de lo que dio en llamar “la banda de Los Pinos”. Valle aseguró tener “casi todas las pruebas” que conectaban al gobierno de Carlos Salinas de Gortari con el cártel del Golfo, de Juan García ábrego. Según Valle, el arquitecto de la organización fue Raúl Salinas Lozano, ex secretario de Industria y Comercio, y padre del ex presidente y de su “hermano incómodo”, Raúl, quien entonces estaba recluido en el penal de Almoloya acusado de varios delitos, entre ellos la autoría intelectual del asesinato de su ex cuñado, José Francisco Ruiz Massieu. La justicia suiza señaló a otro hermano del ex mandatario, Enrique, como la mano oculta que habría edificado la ingeniería financiera del clan familiar. Enrique fue ejecutado en 2004 y su muerte nunca se aclaró.

[26.](#) El senador Diego Fernández de Cevallos fue acusado por sus adversarios de incurrir en tráfico de influencias por participar en diversos litigios, entre ellos en el caso Punta Diamante (1996), donde habría sido beneficiado por el presidente Carlos Salinas con un terreno en el desarrollo turístico que lleva ese nombre en Acapulco, Guerrero; en el caso Jugos del Valle (2001); en el caso Grupo Financiero Anáhuac (1996), donde representó los intereses de Jorge Hurtado, sobrino del ex presidente Miguel de la Madrid, y se le vinculó con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, *el Señor de los Cielos*, y en julio de 1997 la fiscalía especial sobre drogas lo señaló como uno de los apoderados legales de la funeraria donde velaron a Amado Carrillo.

[27.](#) Después se supo que el 13 de febrero el empresario había presentado una denuncia ante la delegación metropolitana de la PGR, por supuestas extorsiones por parte de funcionarios ligados al Gobierno del Distrito Federal. Alfredo Méndez, “Fernández de Cevallos habría *asesorado* al abogado ‘oficial’ de Carlos Ahumada”, *La Jornada*, 11 de marzo de 2004.

[28.](#) Un comunicado de la Secretaría de Gobernación emitido el 13 de marzo de 2004 confirmó que el Cisen “facilitó” un salón del Centro de Negocios instalado en el Hotel Presidente Intercontinental, que había sido contratado desde principios de febrero “como un espacio de trabajo para hacer labores de inteligencia relacionadas con actividades ilícitas de extranjeros”. Dicho espacio, decía el comunicado de Gobernación, “fue ofrecido por el delegado del Cisen en el D. F., José Luis Valles, la mañana del 20 de febrero, al delegado local de la PGR, Rolando López Villaseñor, para llevar a cabo una breve diligencia, sin precisar el contenido de la misma”. De acuerdo con la dependencia, la presencia de Valles no lo involucraba de ninguna manera en la realización de la diligencia ni en su contenido, y reiteraba que el delegado del Cisen “no había tenido contacto alguno con Ahumada o sus abogados” (*sic*). *Milenio*, 14 de marzo de 2004.

[29.](#) Miguel Ángel Granados Chapa, “Historias de medios”, *Proceso*, 14 de marzo de 2004.

[30.](#) El 9 de marzo, el procurador general de la República, general Rafael Macedo de la Concha, señaló en una conferencia de prensa que el Ministerio Público tiene facultades, de acuerdo con su autonomía, para constituirse “donde él estime conveniente porque la ley así lo precisa”. Por la noche, en un breve comunicado oficial, la PGR aclaró que la diligencia “se llevó a cabo en un lugar diferente a las oficinas de la delegación metropolitana” de esa dependencia.

[31.](#) Alejandro Gutiérrez y Jorge Carrasco, “El Cisen, en el espionaje político”, *Proceso*, 14 de marzo de 2004.

[32.](#) Andrea Becerril, “Supo Diego Fernández de los videos antes de su difusión”, *La Jornada*, 10 de marzo de 2004.

[33.](#) “Acepta Fernández de Cevallos que se reunió 6 o 7 veces con Ahumada”, redacción de *La Jornada* y “Toma Diego defensa de Carlos Ahumada”, redacción de *Reforma*, 13 de marzo de 2004.

[34.](#) “Con actas y testigos, Diego dice ser ajeno al complot”, redacción de *Milenio*, 13 de marzo de 2004.

[35.](#) Julio Hernández López, “Video coincidencias”, columna “Astillero”, *La Jornada*, 23 de marzo de 2004.

[36.](#) Según publicó Gerardo Soriano Palma en su columna “Medios y Remedios” de *El Economista*, citado por Hernández López, la empresa de Sonia González se llamaba Comunicación en Línea, pero también usaba las razones sociales Paradigma y TV Imagen.

[37.](#) Julio Hernández López, “Video coincidencias”, citado.

[38.](#) Raúl Monge, “La trama y la trampa”, citado.

[39.](#) Gloria Leticia Díaz, “Cómo se manipularon los videos del escándalo”, *Proceso*, 11 de abril de 2004.

[40.](#) Véase la nota informativa publicada por Raúl Monge en *Proceso* el 16 de mayo de 2004, con el título “La PGR, bajo sospecha”, donde aparece una impresión fotográfica que exhibe a Carlos Ahumada con el procurador Macedo de la Concha, en ropas deportivas, en las instalaciones de *El Independiente*.

[41.](#) “¿Por qué sabías, Diego?”, redacción de *Reforma*, ocho columnas, 11 de marzo de 2004.

[42.](#) Según José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, José Francisco Ruiz Massieu, ex gobernador de Guerrero, fue “un personaje clave” en la vida empresarial de Carlos Ahumada. Él le proporcionó amplias conexiones con el mundo político y empresarial. Fueron socios en la explotación de una mina de oro y plata en Taxco, Guerrero, conocida como La Suriana. Véase Ricardo Ravelo, “PGR: los números no cuadran”, *Proceso*, núm. 1441, 13 de junio de 2004, y Sergio Flores, “Implican a Ahumada en fraude en Guerrero”, *Reforma*, 13 de marzo de 2006.

[43.](#) En 1994, José Francisco Ruiz Massieu fue asesinado cuando se desempeñaba como presidente del PRI, poco después del magnicidio de Lomas Taurinas contra Luis Donaldo Colosio.

[44.](#) Alejandro Almazán, “Carlos, ¿cuál es el límite de tu ambición?”, *La Revista de El Universal*, 29 de marzo de 2004.

[45.](#) Olga Wornat, “Nada es lo que parece”, *Proceso*, núm. 1427, 7 de marzo de 2004.

[46.](#) *Idem*.

[47.](#) Heliodoro Cárdenas y Diego Osorno, “Diego: no soy abogado de Ahumada, pero lo apoyo”, *Milenio*, 16 de marzo de 2004.

[48.](#) Raúl Monge, “La PGR, bajo sospecha”, *Proceso*, núm. 1437, 16 de mayo de 2004.

[49.](#) Juan Manuel Venegas, “Con cámaras del hotel Bellagio, el video sobre Ponce”, primera plana de *La Jornada*, 9 de marzo de 2006.

[50.](#) De acuerdo con un reportaje periodístico, el 17 de agosto de 2003 la esposa de Gustavo Ponce, Esperanza González Ocampo, acudió a la casa de cambio Tíber, S. A. de C. V., ubicada en Río Tíber número 112, en la colonia Cuauhtémoc, y compró 36 000 dólares. Inmediatamente después los transfirió a la cuenta número 990126419, registrada a nombre del casino del hotel Bellagio de Las Vegas, donde el ex funcionario del Distrito Federal era cliente distinguido. “Por tratarse de una operación inusual, la casa de cambio, cuya constitución fue protocolizada por el notario 116 del Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga, viejo conocido de Carlos Ahumada, puso al tanto de la transacción efectuada por González a la SHCP, vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.” Fue el inicio de una investigación que cobraría una fase inusitada casi seis meses después, cuando el 18 de febrero de 2004 la SHCP solicitó la colaboración de la Unidad de Investigación contra Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Véase Raúl Monge, “El reporte de la discordia”, *Proceso*, 25 de abril de 2004.

[51.](#) Raúl Monge, “El reporte de la discordia”, citado.

[52.](#) *Idem.*

[53.](#) El 22 de abril de 2004 la Unidad de Investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció su decisión de suspender todos los convenios de intercambio de información financiera con México, en represalia, argumentó, por la violación al secreto respecto de la indagatoria sobre el caso Ponce.

[54.](#) Fundada por el patriarca cubano-venezolano Diego Cisneros, la Organización Cisneros maneja uno de los más grandes conglomerados de comunicaciones de América Latina. Propietaria de Venevisión, es accionista mayoritaria de Univisión, tiene acciones en la filial de América Online, participa en DirectTV y en emisoras de radio en varios países del área, es dueña de la segunda empresa cervecera más grande de Venezuela (Regional), donde además controla una exitosa fábrica de telenovelas y 14 restaurantes de Pizza-Hut, y opera 44 videotiendas de Blockbuster en Puerto Rico, donde también posee la cadena de supermercados Pueblo Xtra.

[55.](#) Jesús Ramírez Cuevas, “Carlos Monsiváis: la obsesión electoral, el beso de la muerte para el PRD”, *La Jornada*, 9 de marzo de 2004.

[56.](#) Lev García y Adán García, “Fallece ex funcionario vinculado a Ahumada”, *Reforma*, 16 de marzo de 2004, y Alfredo Rodríguez y César Díaz, “Analizan si Balderas murió por accidente”, *Reforma*, 17 de marzo de 2006.

[57.](#) Luis Eduardo Zuno se encontraba preso en el penal de Almoloyita, en el Estado de México, donde enfrentaba un proceso por su probable responsabilidad en

los delitos de introducción clandestina y transportación ilícita de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea al territorio nacional, en un avión propiedad del empresario Carlos Ahumada. Al regresar de un viaje a Texas, tras una inspección fiscal aduanera en el aeropuerto de Toluca, a Zuno le fueron encontradas dos pistolas Beretta calibre .45 y 9 milímetros y un rifle Remington calibre 30.60, así como 720 cartuchos, 1 300 ojivas y dos botes con pólvora. Véase *La Revista de El Universal*, 22 de marzo de 2004, y Vicente Hernández, *Milenio*, 4 de marzo de 2004.

[58.](#) Óscar Herrera, “Huellas de Quart en un caso de homicidio”, *Reforma*, 23 de marzo de 2004.

[59.](#) *La Revista*, citado.

[60.](#) Según la Fiscalía General de Cuba, el refugio en La Habana de Carlos Ahumada era una residencia ubicada en el número 171 de la calle Kohly, en el barrio Nuevo Vedado. La casa es propiedad de cubanos, quienes rentan habitaciones a turistas extranjeros.

[61.](#) Gustavo Castillo García y Alfredo Méndez, “Ni el gobierno ni CSG protegieron a Ahumada Kurtz, asegura la PGR”, *La Jornada*, y Abel Barajas, “Ubica PGR a Ahumada por los viajes de Robles”, *Reforma*, 31 de marzo de 2004.

[62.](#) *Idem.*

[63.](#) *Idem.*

[64.](#) Gerardo Arreola, “Ahumada Kurtz, ‘riesgo’ para la seguridad del Estado cubano”, *La Jornada*, y César González-Calero, “En riesgo, la seguridad del Estado, dice Cuba”, *El Universal*, 6 de abril de 2004.

[65.](#) Gerardo Arreola, “Ahumada Kurtz, ‘riesgo’ para la seguridad del Estado cubano”, citado.

[66.](#) “Fidelazo con Ahumada”, tituló su nota principal de portada el periódico *Milenio* en su edición del 29 de abril de 2004.

[67.](#) Ricardo Ravelo, “PGR: los números no cuadran”, citado.

[68.](#) *Idem.*

[69.](#) Óscar Herrera, Silvia Otero y Rubelio Fernández, “Se ‘pelean’ PGJDF y PGR por empresario”, *El Universal*; David Vicenteño y Ricardo Zamora, “Lo pelean la PGR y Bátiz”, *Reforma*, y Jesús Aranda, Susana González y Triunfo Elizalde, “Cinco horas hizo esperar la PGR a Bernardo Bátiz”, *La Jornada*, 29 de abril de 2004.

[70.](#) Patricia Muñoz Ríos, “Fue aprehendido en La Habana el apoderado legal de Carlos Ahumada”, *La Jornada*; Manuel Juan Somoza y Julián Andrade “Detenido, el apoderado legal de Carlos Ahumada”, *Milenio*, y César González-Calero, “Cuba detiene a socio de Ahumada”, *El Universal*, 20 de abril de 2004.

[71.](#) Patricia Muñoz Ríos, “Fue aprehendido en La Habana el apoderado legal de Carlos Ahumada”, citado.

[72.](#) Jesús Aranda, Susana González y Carolina Gómez, “El apoderado de Ahumada motivó un nuevo desencuentro entre procuradurías”, *La Jornada*, 4 de mayo de 2004.

[73.](#) Georgina Saldierna, Alfredo Méndez, Raúl Llanos y Gabriela Romo “Detiene Cuba a Arcipreste, acusado de fraude en el D.F.”, *La Jornada*, 22 de abril de 2004.

[74.](#) Enrique Arcipreste reclamaba la propiedad del predio denominado Paraje San Juan, expropiado por el Gobierno del Distrito Federal en 1989. En 1998 se amparó contra la expropiación de 298 hectáreas, ganó el amparo y un magistrado ordenó al gobierno capitalino pagar una indemnización. Andrés Manuel López Obrador rechazó pagar y denunció irregularidades en el litigio. En febrero de 2000 el gobierno del Distrito Federal impugnó la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ésta ordenó devolver el expediente al juez para que determinara el monto del pago al que tenía derecho la familia Arcipreste. En octubre de 2003 una juez ordenó al Gobierno del Distrito Federal pagar una indemnización de 1 800 millones de pesos, pero López Obrador se negó a acatar el fallo. En diciembre de 2003, la procuraduría capitalina inició una averiguación previa contra Arcipreste por el delito de falsificación de documentos y desde el 5 de enero de 2004 era buscado por la Policía Judicial de la ciudad de México.

[75.](#) Una de las acusaciones en contra de Enrique Arcipreste era haber alterado elementos de prueba e incluso falsificar la firma del entonces secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, en un oficio apócrifo con fecha 29 de marzo de 1993 —año en que este último se desempeñaba como secretario general de Gobierno del Departamento del Distrito Federal, durante la administración de Manuel Camacho—, en el cual supuestamente se reconocía al padre del procesado como “único propietario del predio denominado Paraje San Juan”.

[76.](#) *Idem.*

[77.](#) César González Calero y Ella Grajeda, “Capturan en Cuba ahora a Arcipreste”, *El Universal*, 22 de abril de 2004.



[78.](#) Yolanda Martínez, “Capturan en Cuba a Enrique Arcipreste”, *Reforma*, 22 de abril de 2004.

[79.](#) *Idem.*

[80.](#) Víctor Michel y otros, “Detiene Cuba a Enrique Arcipreste”, *Milenio*, 22 de abril de 2004.

[81.](#) “Desconoce Arcipreste a Ahumada”, redacción de *Reforma*, y Georgina Saldierna, Mirna Servín y Alfredo Méndez, “El avión en que viajé a Cuba podría ser de Ahumada, admite Arcipreste”, *La Jornada*, 24 de abril de 2004.

[82.](#) *Idem.*

[83.](#) Miguel Ángel Granados Chapa, “Arcipreste”, *Reforma*, 26 de abril de 2004.

[84.](#) Dardo o lanza arrojadiza, según el diccionario.

[85.](#) Miguel Ángel Granados Chapa, “Arcipreste”, citado.

[86.](#) *Idem.*

[87.](#) *Idem.*

[88.](#) Angélica Enciso, “Pertenece a la nación el Paraje San Juan: SRA”, *La Jornada*, y Alejandro Rivero, “El GDF no debe pagar por el Paraje San Juan”, *Milenio*, 28 de mayo de 2004, y Víctor Fuentes, “Es el paraje un baldío”, *Reforma*, 29 de mayo de 2004.

[89.](#) *Idem.*

[90.](#) “Paraje San Juan: el descaró”, *La Jornada*, editorial del 28 de mayo de 2004.

[91.](#) Versión taquigráfica de la exposición del canciller cubano Felipe Pérez Roque durante una rueda de prensa en La Habana el 5 de mayo de 2004. Véase también Gerardo Arreola, “Hechos cenizas, los principios de política exterior de México: Fidel”, *La Jornada*, y Manuel Juan Somoza, “El prestigio internacional de México, cenizas: Cuba”, *Milenio*, 2 de mayo de 2004.

[92.](#) José Antonio Román, “Ordena el presidente Fox la salida inmediata del embajador de Cuba”, *La Jornada*; Arturo Zárate y Natalia Gómez, “Pide México a Cuba retirar a su embajador”, *El Universal*, y Luis Alegre y Ariadna García “Truena Fox con Cuba”, *Reforma*, 3 de mayo de 2004.

[93.](#) “Rayuela”, *La Jornada*, 3 de mayo de 2004.

[94.](#) [Ciro Pérez](#), “El problema es con Castro y con nadie más, afirma Santiago Creel”, *La Jornada*, y [Francisco Garduño](#), “El problema es con Fidel: Creel”, *Milenio*, 4 de mayo de 2004.

[95.](#) [Froylán M. López Narváez](#), “... Eros... eros”, *Reforma*, 5 de mayo de 2004.

[96.](#) La norma invocada por Santiago Creel dice, en el capítulo III y en el artículo 13, que podrá clasificarse como “información reservada y confidencial” aquella cuya difusión “pueda: I. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; II. Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado mexicano; III. Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; IV. Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado”.

[97.](#) “Lección de diplomacia” fue el título de la editorial de *La Jornada* en su edición del 6 de mayo de 2004, donde se informó de la respuesta cubana. En esa misma edición, la pequeña sección “Rayuela” del diario rezaba: “Elegía: Don Luis Padilla Nervo, don Manuel Tello, don Alfonso Reyes, don Alfonso García Robles, don Vicente Sánchez-Gavito, don Jaime Torres Bodet, ¡por favor, donde quiera que estén, regresen! Contengan esta tormenta de ignorancia y estupidez”.

[98.](#) Las señales de la televisión abierta fueron interrumpidas en México poco antes de las 16:00 horas, coincidiendo con el momento en el que Pérez Roque leía la lista de personajes mexicanos que se habían reunido con José Antonio Arbesú y Pedro Lobaina. Pero la conferencia se pudo seguir completa a través de estaciones de radio, como Formato 21, en el espacio *de Una a Tres* de Jacobo Zabludovsky, Radio Monitor y W Radio, así como en el canal 108 de Sky. Otras estaciones, como Radio Fórmula, transmitieron fragmentos importantes de la misma, igual que ocurrió con CNN Noticias en español.

[99.](#) [Blanche Petrich](#) y [Gerardo Arreola](#), “El gobierno de México, irreflexivo, causó la crisis, expresa Pérez Roque”, *La Jornada*; [Manuel Juan Somoza](#) y [Víctor H. Michel](#), “El conflicto con Cuba, una cortina de humo”, *Milenio*, y [Roberto Zamarripa](#) y [Yolanda Martínez](#), “Lanza Cuba sus misiles”, *Reforma*, 6 de mayo de 2006.

[100.](#) *Idem.*

[101.](#) En uno de los fragmentos exhibidos, Ahumada dice que su intención no era que los videos se pasaran en la televisión mexicana, pero “después me dicen ellos que sí es importante que se publiquen [*sic*] en la televisión”. Blanche Petrich y Gerardo Arreola, “ ‘Solté los videos y no me dieron nada’, revela Ahumada, grabado en Cuba”, *La Jornada*, 6 de mayo de 2004.

[102.](#) Versión taquigráfica del Consejo de Estado de Cuba de la conferencia de prensa ofrecida en La Habana por Felipe Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores, a la prensa nacional e internacional, el 5 de mayo de 2004. Véase también Blanche Petrich y Gerardo Arreola, “ ‘Solté los videos y no me dieron nada’, revela Ahumada, grabado en Cuba”, citado; Roberto Zamarripa, “El *show* de Ahumada”, *Reforma*, y Víctor Hugo Michel y Manuel Somoza, “Di al gobierno los videos por protección: Ahumada”, *Milenio*, 6 de mayo de 2004.

[103.](#) Versión taquigráfica del Consejo de Estado de Cuba de la conferencia de prensa ofrecida en La Habana por el canciller Felipe Pérez Roque, citada.

[104.](#) David Aponte y Arturo Zárate, “Sigue mano extendida”, *El Universal*, 7 de mayo de 2004.

[105.](#) David Aponte, “Derbez descarta ruptura”, *El Universal*, 7 de mayo de 2004.

[106.](#) Arturo Zárate, “Creel niega la teoría del complot”, *El Universal*, y Rosa Elvira Vargas y Georgina Saldierna, “Rechaza Creel que haya complot desde el gobierno”, *La Jornada*, 7 de mayo de 2004.

[107.](#) Enrique Méndez y Andrea Becerril, “Incluso el panista Castro refuta alegatos de Creel”, *La Jornada*, 7 de mayo de 2006.

[108.](#) Rosa Elvira Vargas y Javier Valdés, “México, ajeno a los planes de Estados Unidos contra Cuba: Fox”, *La Jornada*, 8 de mayo de 2004.

[109.](#) Javier Ibarrola, “Tregua o complicidad del silencio”, columna “Fuerzas Armadas”, *Milenio*, 5 de mayo de 2004.

[110.](#) Raymundo Riva Palacio, “La pesadilla mexicana”, columna “Estrictamente Personal”, *El Universal*, 18 de diciembre de 2006.

#### LA DANZA DEL DESAFUERO I

[1.](#) Patricia Ruiz, “Niega Fox ‘complot’ contra López Obrador”, *Milenio*, y José Luis Ruiz, “Niega Vicente Fox querer desestabilizar a AMLO”, *El Universal*, 15 de mayo de 2004.

[2.](#) Gustavo Castillo García, “PGR, en desacato si no pide desaforar a López Obrador”, *La Jornada*, y Silvia Otero, “Aplazan decisión sobre El Encino”, *El Universal*, 15 de mayo de 2004.

[3.](#) “Acorralan a AMLO. Solicita PGR desafuero del jefe de gobierno”, redacción de *Reforma*, primera plana del 18 de mayo de 2004.

[4.](#) El artículo 38 de la Constitución señala que las prerrogativas y los derechos de todo ciudadano, entre ellos ser votado para un cargo de elección popular, pueden quedar suspendidos por estar sujetos a un proceso penal y también cuando éste merezca cárcel.

[5.](#) La acusación por abuso de autoridad derivó del incumplimiento que según el juzgado noveno de distrito en materia administrativa —primera autoridad judicial que conoció el caso— cometió el jefe de gobierno al no haber respetado la orden de suspender los trabajos de apertura de vialidades de las fracciones expropiadas, que servían de acceso al predio El Encino, y abstenerse de bloquear y cancelar los accesos a dicho lote, ya que estaba en proceso un juicio para que se declarara nulo el decreto mediante el cual Rosario Robles expropió el terreno de 15 000 metros cuadrados en noviembre de 2000. El decreto expropiatorio tuvo como objeto generar un circuito a través de las avenidas Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández, que permitiera el acceso desde y hacia la lateral de la carretera México-Toluca, beneficiando fundamentalmente al hospital ABC.

[6.](#) Federico Escobedo Garduño estuvo preso en el Reclusorio Norte de la ciudad de México, en 1993, acusado de haber defraudado al Infonavit, y en el Reclusorio Oriente, en 1995, por haber defraudado al fisco. Véase Rodrigo Vera “El Encino”, *Proceso*, núm. 1439, 30 de mayo de 2004.

[7.](#) “Con el desafuero nos quieren ganar a la mala”, redacción de *Milenio*; Manuel Durán, “Embiste GDF contra juez”, *Reforma*, y Bertha Teresa Ramírez “Irresponsable y arbitraria, la decisión de la PGR, expresa Batres”, *La Jornada*, 18 de mayo de 2004.

[8.](#) “Irresponsable y arbitraria, la decisión de la PGR, expresa Batres”, *La Jornada*, citado.

[9.](#) “Las voces en contra” y “Defienden la ley”, recuadros en *Reforma*, 19 de mayo de 2004.

[10.](#) *Idem.*

[11.](#) Francisco Garduño, “No debe hacerse la víctima, dice Creel”, *Milenio*, 19 de mayo de 2004.

[12.](#) Ángel Bolaños Sánchez, “López Obrador: tuerquen la ley para inhabilitarme”, *La Jornada*, 19 de mayo de 2004.

[13.](#) Rafael Segovia, “Silencios y temores”, *Reforma*, 21 de mayo de 2004.

[14.](#) Poder Judicial de la Federación, comunicado “A la opinión pública”. Insertado en los principales periódicos de México, el documento estaba firmado por Raúl Ramos Alcántara, director general de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por J. Guillermo López Figueroa, director general de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal. Véase *La Jornada*, 19 de mayo de 2004.

[15.](#) El 7 de noviembre de 1997, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron un primer desplegado en los medios para responder a “diversos ataques” formulados por la Procuraduría General de la República en contra de varios jueces y magistrados federales por las decisiones que habían adoptado al resolver juicios de amparo.

[16.](#) El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración y vigilancia de los juzgados y tribunales federales.

[17.](#) Jesús Aranda, “Terrible error del juez en El Encino: Castro y Castro”, *La Jornada*, y “Cuestiona proceder en caso contra AMLO”, *El Universal*, 20 de mayo de 2004.

[18.](#) *Idem.*

[19.](#) Rosa Elvira Vargas, “No doy línea a jueces, magistrados ni legisladores, asegura Vicente Fox”, *La Jornada*, y José Luis Ruiz, “Rechaza Fox dar ‘línea’ a jueces”, *El Universal*, 20 de mayo de 2004.

[20.](#) *Idem.*

[21.](#) Daniel Pensamiento, “Se mofa Castañeda”, *Reforma*, 20 de mayo de 2004.

[22.](#) Ángel Bolaños y Laura Gómez Flores, “Censura López Obrador el uso de instituciones para tomar represalias”, *La Jornada*, y Daniel Venegas, “Están jugando con fuego, sostiene Alejandro Encinas”, *Milenio*, 20 de mayo de 2004.

[23.](#) Abel Barajas, “Entregan a AMLO sus colaboradores”, *Reforma*, y Héctor Gutiérrez y Rosa Emilia Porras, “Funcionarios del GDF señalan a López Obrador”, *Milenio*, 20 de mayo de 2004.

[24.](#) De acuerdo con la declaración rendida ante el Ministerio Público federal por María Estela Ríos, su despacho realizó “todos y cada uno de los trámites necesarios

para que se cumpliera la suspensión ordenada por el juez [...] habiendo ratificado el jefe de gobierno la instrucción general, en el sentido de que se acataran todas las órdenes que dieran los jueces y en especial en este asunto”. Carlos Marín, “AMLO, apuntalado por la PGR”, columna “El Asalto a la Razón”, *Milenio*, 3 de junio de 2004.

[25.](#) Entrevista con Ciro Gómez Leyva, reproducida parcialmente por Diego Osorno y Heliodoro Cárdenas en “Heredia: no acusé al jefe de gobierno; miente Vega Memije”.

[26.](#) José Agustín Ortiz Pinchetti, “El Encino, confesiones de un presunto responsable”, *La Jornada*, 23 de mayo de 2004.

[27.](#) *Idem.*

[28.](#) *Idem.*

[29.](#) Roberto Garduño, “Ortiz Pinchetti: no existe tal vialidad que cruce El Encino”, *La Jornada*, 19 de mayo de 2004.

[30.](#) *Idem.*

[31.](#) Héctor Gutiérrez, “Hay 4 688 desacatos y se fijaron en mí, se queja AMLO”, *Milenio*, 1° de junio de 2004.

[32.](#) Diego Osorno, “Desacata Fox al Poder Judicial en resolución sobre un predio”, *Milenio*, 31 de mayo de 2004.

[33.](#) *Idem.*

[34.](#) Enrique Méndez, Roberto Garduño y Ángel Bolaños, “López Obrador recibió la notificación de la instructora”, *La Jornada*, 4 de junio de 2004.

[35.](#) Julián Andrade, “Notas de periódicos, pruebas contra AMLO”, *Milenio*, 3 de junio de 2004.

[36.](#) *Idem.*

[37.](#) Ángel Bolaños Sánchez, “Manejo faccioso de evidencias, en el expediente para el desafuero: el mandatario capitalino”, *La Jornada*, 5 de junio de 2004.

[38.](#) *Idem.*

[39.](#) Daniel Venegas, “Compara AMLO su caso con el de Carlos Madrazo” *Milenio*, 5 de junio de 2004.

[40.](#) *Idem.*

[41.](#) Andrés Manuel López Obrador, “A los habitantes del Distrito Federal. A la opinión pública nacional. Caso: El Encino”, desplegado publicado en *La Jornada* el 9 de junio de 2004.

[42.](#) Daniel Barquet, “Se define Jorge Castañeda como un ‘agitador social’ ”, *Milenio*, 28 de marzo de 2003.

[43.](#) Citado por José Luis Reyna en “Una sociedad ofendida”, *Milenio*, 10 de junio de 2004.

## LA DANZA DEL DESAFUERO II

[1.](#) Rosa Elvira Vargas, “Renuncia Durazo, inconforme con *pretensiones dinásticas* de Los Pinos”, *La Jornada*; José Luis Ruiz, “Renuncia Durazo; impugna a Marta”, ocho columnas de *El Universal*, y Patricia Ruiz, “El apoyo de Fox a Marta ‘extravió’ el cambio”, ocho columnas de *Milenio*, 6 de julio de 2004.

[2.](#) Véase texto completo de la carta de renuncia de Alfonso Durazo en Rosa Elvira Vargas, “Renuncia Durazo, inconforme con *pretensiones dinásticas* de Los Pinos”, *La Jornada*, citado.

[3.](#) Ignacio Rodríguez Reyna, “No azucé a nadie”, *El Universal*, 23 de agosto de 2004.

[4.](#) Raymundo Riva Palacio, “Silenciemos los gritos”, *El Universal*, 27 de agosto de 2004.

[5.](#) Juan Arvizu Arrijoja, “¿Acuerdo para qué y entre quiénes?: Creel”, primera plana de *El Universal*, 27 de agosto de 2004.

[6.](#) Marisela López, “Critican los empresarios la marcha pro López Obrador”, *Milenio*, 28 de agosto de 2004.

[7.](#) Heliodoro Cárdenas, “Es un llamado ‘para que le mida’ Fox”, *Milenio*, 28 de agosto de 2004.

[8.](#) Jorge Fernández Menéndez, “La marcha y el error”, *Milenio*, 27 de agosto de 2004.

[9.](#) *Idem.*

[10.](#) *Idem.*

[11.](#) Javier Quijano Baz, “El desafuero es un golpe de Estado”, *Milenio*, 7 de septiembre de 2004.

[12.](#) Añagaza, señuelo para coger aves o artificio, en sentido figurado.

[13.](#) *Idem.*

[14.](#) Xavier Olea Muñoz, “El desafuero, estricta aplicación de la ley”, *Milenio*, 12 de septiembre de 2004.

[15.](#) *Idem.*

[16.](#) Germán Martínez Cázares, “¿Golpismo?”, *Milenio*, 13 de septiembre de 2004.

[17.](#) Omar Sánchez de Tagle, “Exige la Corte: ya no más desacatos”, *Milenio*, 7 de septiembre de 2004.

[18.](#) La intervención del ministro Azuela se dio en el marco de la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente al Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano.

[19.](#) Carlos Avilés Allende, “Insta Azuela a defender la ley”, *El Universal*, 9 de septiembre de 2004.

[20.](#) El Código Civil francés es mejor conocido como Código Napoleónico.

[21.](#) *Idem.*

[22.](#) Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arde el papel.

[23.](#) Valeria Berumen, Angélica Mercado y Heliodoro Cárdenas, “Critica la oposición las declaraciones de Azuela”, *Milenio*, 10 de septiembre de 2004.

[24.](#) Roberto Garduño, “Nueva andanada de legisladores de PT, PRI y PRD contra Azuela Güitrón”, *La Jornada*, 11 de septiembre de 2004.

[25.](#) Ricardo Rocha, “Con el debido respeto...”, columna política “Detrás de la Noticia”, *El Universal*, 13 de septiembre de 2004.

[26.](#) *Idem.*

[27.](#) Carlos Marín, “Diálogos pánicos en Los Pinos”, columna “El Asalto a la Razón”, *Milenio*, 13 y 14 de septiembre de 2004.

[28.](#) *Idem.*

[29.](#) Jesús Aranda y Gustavo Castillo García, “Macedo rechaza que se haya



fraguado con Azuela un complot contra el GDF”, *La Jornada*, 17 de septiembre de 2004.

[30.](#) *Idem.*

[31.](#) Luis Javier Garrido, “El desayuno”, *La Jornada*, 17 de septiembre de 2004.

[32.](#) Alberto Barranco, “Fue Durazo”, columna “Empresa”, *El Universal*, 21 de septiembre de 2004.

[33.](#) Federico Arreola, “Amigos Fox y Barranco: no fue Durazo”, *Milenio*, 22 de septiembre de 2004.

[34.](#) Carlos Marín, “Primer mandatario y primer sospechoso”, *Milenio*, 22 de septiembre de 2004.

[35.](#) “Declaración del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia”, *Milenio*, 22 de septiembre de 2004.

[36.](#) *Idem.*

[37.](#) Mirna Servín Vega, “Desnudan participación de Salinas en el complot contra López Obrador”, *La Jornada*, y Óscar Herrera, “Exhiben chantaje de Ahumada”, *El Universal*, 19 de octubre de 2004.

[38.](#) *Idem.*

[39.](#) Las imágenes completas, de una hora y 45 minutos, fueron puestas a disposición del juez 50 penal, con sede en el Reclusorio Oriente, que llevaba la causa 104/04.

[40.](#) *Idem.*

[41.](#) “La gestión de Solórzano”, *La Jornada*, 19 de octubre de 2004.

[42.](#) “El nuevo video pone nombre y apellidos de quienes fraguaron el complot contra el GDF”, *La Jornada*, 19 de octubre de 2004.

[43.](#) “Beltrones, detrás de la filtración a la prensa de los videos, sospecha Bejarano”, *La Jornada*, 19 de octubre de 2004.

[44.](#) Susana González, “Pide la PGJDF a la Cámara de Diputados desaforar a Bejarano”, *La Jornada*, 17 de marzo de 2004.

[45.](#) Gustavo Castillo García, “Bejarano: no fue López Obrador quien me ordenó recibir dinero de Ahumada”, *La Jornada*, 20 de marzo de 2004.

[46.](#) Gabriela Romero Sánchez, “Me quieren convertir en chivo expiatorio: Bejarano; actué a petición expresa, asegura”, *La Jornada*, 17 de marzo de 2004.

[47.](#) Roberto Garduño, “Dictamen por unanimidad: procede el desafuero contra René Bejarano”, *La Jornada*, 23 de octubre de 2004.

[48.](#) Gustavo Castillo, “López Obrador, blanco de un operativo de Estado”, *La Jornada*, 30 de octubre de 2004.

[49.](#) Andrés Becerril, “Ahumada documentó el complot contra AMLO”, *Milenio*, 4 de noviembre de 2004, y Andrés Becerril, “La defensa, con los documentos de la PGR”, *Milenio*, 8 de noviembre de 2004.

[50.](#) *Idem.*

[51.](#) *Idem.*

[52.](#) *Idem.*

[53.](#) Ramón Martín Huerta era en ese momento subsecretario de Gobernación.

[54.](#) *Idem.*

[55.](#) María de la Heras, “Si desafueran a López Obrador, 13 millones apoyarían su resistencia civil”, *Milenio*, 4 de noviembre de 2004.

[56.](#) Ciro Gómez Leyva, “Andrés Manuel y el fracaso de Woody Allen”, *Milenio*, 4 de noviembre de 2004.

[57.](#) En su dictamen, la sección instructora de la Cámara de Diputados defendió el valor probatorio de los videos en los cuales aparecía René Bejarano recibiendo dinero en efectivo de Carlos Ahumada, con el argumento de que las grabaciones se realizaron “por lo menos con el consentimiento de uno de los sujetos que participaron” en la conversación. Enrique Méndez y Roberto Garduño “Videos, prueba aceptada”, *La Jornada*, 5 de noviembre de 2004.

[58.](#) Intervención de René Juvenal Bejarano Martínez en la sesión del jurado de procedencia del 4 de noviembre de 2004, *La Jornada*, 5 de noviembre de 2004.

[59.](#) *Idem.*

[60.](#) *Idem.*

[61.](#) Vicente Hernández, Omar Sánchez de Tagle e Ignacio Alzaga, “Con la misma estrategia que Romero Deschamps”, *Milenio*, 5 de noviembre de 2004.

[62.](#) Gustavo Castillo García, “Bejarano: la TV, comparsa; no debe sustituir a jueces”, *La Jornada*, 6 de noviembre de 2004.

[63.](#) El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se tipifica en el artículo 250 del Código Penal del Distrito Federal como la actividad “que por sí o por interpósita persona adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita”.

[64.](#) Ese delito está tipificado en el artículo 277 del Código Penal del Distrito Federal como la actividad de “un particular que promueve una conducta ilícita de un servidor público”.

[65.](#) Alfredo Méndez, Mirna Servín y José A. Román, “Orden de aprehensión contra Bejarano; ofreció entregarse”, *La Jornada*, y “Soy preso político, afirma ex diputado”, sin firma, *Milenio*, 10 de noviembre de 2004.

[66.](#) Agustín Salgado y Jesús Aranda, “René Bejarano pide al juez considerar pruebas documentales en su favor”, *La Jornada*, 11 de noviembre de 2004.

[67.](#) Ciro Gómez Leyva, “Ahumada le entregó a Bejarano 12 millones 50 mil pesos”, columna “La Historia en Breve”, *Milenio*, 10 de noviembre de 2004.

[68.](#) *Idem.*

[69.](#) “López Obrador me condena de modo injusto y lapidario: Bejarano”, *La Jornada*, 16 de noviembre de 2004.

[70.](#) Julio Boltvinik, “Desafuero y videojuicio”, *La Jornada*, 5 de noviembre de 2004.

[71.](#) Marco Rascón, “Izquierda, medios y derecha”, *La Jornada*, 9 de noviembre de 2004.

[72.](#) Agustín Salgado, “Bejarano declara que Ana Cristina Fox visitaba frecuentemente a Ahumada”, *La Jornada*, e Ignacio Alzaga, “René Bejarano implica a 15 personajes”, *Milenio*, 14 de noviembre de 2004.

[73.](#) *Idem.*

[74.](#) “Pasaré a la historia como el que le quitó la máscara al *pinche* PRD”, *La Jornada*, y “Exhibe cinta conversación Ahumada-Sosamontes”, *El Universal*, 16 de

noviembre de 2004.

[75.](#) Omar Sánchez de Tagle y Mauricio Pérez, “Gana Bejarano a la PGJDF la primera batalla jurídica”, *Milenio*, 17 de noviembre de 2004.

[76.](#) Abel Barajas, “Exhibe Ponce a AMLO y Bejarano”, *Reforma*, 17 de noviembre de 2004.

[77.](#) *Idem.*

[78.](#) Alfredo Méndez Ortiz, “Dicta el juez Reyes formal prisión a Bejarano por lavado de dinero”, *La Jornada*, 19 de noviembre de 2004.

[79.](#) Omar Sánchez de Tagle y Heliodoro Cárdenas, “Bejarano se amparará contra formal prisión”, *Milenio*, 22 de noviembre de 2004.

[80.](#) Silvia Otero y Claudia Bolaños, “Niegan consigna contra Bejarano”, *El Universal*, 20 de noviembre de 2004.

[81.](#) *Idem.*

[82.](#) Martí Batres Guadarrama, “Andrés paró a Ahumada. ¿Fox hará algo en casa?”, *La Jornada*, 18 de noviembre de 2004.

[83.](#) *Idem.*

[84.](#) *Idem.*

[85.](#) Soledad Loaeza, “Teorema 2004”, *La Jornada*, 18 de noviembre de 2004.

[86.](#) *Idem.*

[87.](#) Omar Sánchez de Tagle y Angélica Mercado, “Exoneran a Bejarano” *Milenio*, 6 de julio de 2005.

[88.](#) Alfredo Méndez Ortiz, “Comprobaré los vínculos de Ahumada con las televisoras”, *La Jornada*, 8 de julio de 2005.

#### DE LAS MARAS Y AL QAEDA A UNA NARCOGUERRILLA

[1.](#) Véase Robinson Salazar, “Visibilizando al enemigo. Estados Unidos *versus* América Latina” y “América Latina: securitización de la política y guerra contra la ciudadanía y los movimientos populares centroamericanos”, en [insumisos-2000yahoo.com.mx](http://insumisos-2000yahoo.com.mx).

[2. \*Idem.\*](#)

[3.](#) Lorenzo Meyer, “La seguridad norteamericana: un problema para México”, *Reforma*, 30 de noviembre de 2004.

[4.](#) “Histeria, intromisión y majadería”, editorial de *La Jornada*, 3 de enero de 2004.

[5.](#) “Seguridad aérea: nueva rendición ante Estados Unidos”, editorial de *La Jornada*, 30 de diciembre de 2003.

[6.](#) Jorge Fernández Menéndez, “Terrorismo, narcotráfico y populismo radical”, *Milenio*, 29 de abril de 2004.

[7. \*Idem.\*](#)

[8. \*Idem.\*](#)

[9.](#) José Carreño, “Temen que Al Qaeda financie a los *maras*”, *El Universal*, 28 de agosto de 2004.

[10.](#) Iván Pedraza, “México y FBI, tras terrorista integrante de Al Qaeda”, *Milenio*, 21 de agosto de 2004.

[11.](#) Agencias, “Comisión: usó Al Qaeda a los polleros hispanos”, *El Universal*, 23 de agosto de 2004.

[12.](#) Silvia Otero y Juan Arvizu, “Niegan paso de terroristas por el país”, *El Universal*, 1º de octubre de 2004.

[13. \*Idem.\*](#)

[14.](#) Silvia Otero, “Rechaza PGR que México viva época de *narcoterror*”, *El Universal*, y Omar Sánchez de Tagle, “En México no hay *narcoterrorismo*: Santiago Vasconcelos”, *Milenio*, 7 de octubre de 2004.

[15.](#) Raymundo Riva Palacio, “Toc, toc, ¿hay alguien?”, columna “Estrictamente Personal”, *El Universal*, 29 de octubre de 2004.

[16. \*Idem.\*](#)

[17.](#) Horacio Santini, “México, trampolín de Al Qaeda: *Time*”, *Milenio*, 15 de noviembre de 2004.

[18. \*Idem.\*](#)

[19.](#) El formato para la dramatización de Orson Welles por CBS, el 30 de octubre de

1938, víspera de la noche de brujas, fue un boletín informativo que daba cuenta de la supuesta invasión extraterrestre en Nueva Jersey. Incluía efectos especiales y una supuesta declaración oficial del presidente Franklin Delano Roosevelt.

[20.](#) Rodolfo Villalba Sánchez, “Causa histeria colectiva falsa alerta sobre ataque de *maras* en Tapachula”, *La Jornada*, 23 de noviembre de 2004.

[21.](#) Ery Acuña, “Cierran escuelas en Tapachula por temor a los *Mara Salvatrucha*”, *Milenio*, 24 de noviembre, y Ángeles Mariscal y Ernesto Martínez, “Investigan a locutor que alertó sobre un presunto ataque de *maras* en Tapachula”, *La Jornada*, 7 de diciembre de 2004.

[22.](#) *Galladas, clicas, chapulines, cholos, bandas* son otros tantos nombres como se conoce a los grupos juveniles de las barriadas marginales de las grandes ciudades.

[23.](#) El concepto *tribus urbanas* fue acuñado por el sociólogo francés Michel Maffesoli y puede aplicarse también a las *maras*.

[24.](#) Véase Marco Lara Klahr, *Hoy te toca la muerte. El imperio de las maras visto desde adentro*, Editorial Planeta Mexicana, 2006.

[25.](#) Agencias, “Honduras: incendio mata a 104 reos”, *El Universal*, 18 de mayo de 2004.

[26.](#) Ginger Thompson, “Emplean tácticas represivas contra pandillas latinas”, *The New York Times*, en selección semanal ofrecida por el diario *Reforma*, 2 de octubre de 2004.

[27.](#) “Honduras: incendio mata a 104 reos”, citado.

[28.](#) Ginger Thompson, citado.

[29.](#) Luis Hernández Navarro, “Pandillas de la globalización”, *La Jornada*, 30 de noviembre de 2004.

[30.](#) *Idem.*

[31.](#) Francisco Garduño, “Más de 1 000 *maras salvatruchas* detenidos en los últimos años”, *La Jornada*, 3 de diciembre de 2004.

[32.](#) Véase Luis Hernández Navarro, “Pandillas de la globalización”, citado.

[33.](#) Jesús Aranda, “*Cárteles* de la droga usan *maras* como sicarios”, *La Jornada*, y Omar Sánchez de Tagle, “Los *maras*, sicarios de los *cárteles* de la droga”, *Milenio*, 14 de diciembre de 2004.

[34.](#) Véase Ginger Thompson, citado.

[35.](#) Roberto López Belloso, “Schwarzenegger contra la marabunta”, semanario *Brecha* de Montevideo, 5 de abril de 2007.

[36.](#) *Idem.*

[37.](#) Mirna Servín y Raúl Llanos, “Queman vivos a dos agentes de la PFP en Tláhuac”, portada de *La Jornada*, y Raúl Cabrera e Icela Lagunas, “Furia en Tláhuac; linchan a tres agentes”, portada de *El Universal*, 24 de noviembre de 2004.

[38.](#) Benito Jiménez y Abel Barajas, “Aflora malestar en tropa de PFP”, portada de *Reforma*, y Omar Sánchez de Tagle, “Nos impidieron salvarlos, acusan 200 agentes de la PFP”, portada de *Milenio*, 26 de noviembre de 2004.

[39.](#) En México el presidente de la República tiene la atribución de nombrar al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, lo que significa, en la práctica, una limitación a quien figura como jefe administrativo o alcalde de la capital, elegido por el voto ciudadano.

[40.](#) Rosa Elvira Vargas, Renato Dávalos y Bertha Teresa Ramírez, “A Ebrard se le juzgó incapaz: Los Pinos”, *La Jornada*, 8 de diciembre de 2004.

[41.](#) Miguel Ángel Velásquez, “El manotazo de Fox abre el camino a Marta”, *La Jornada*, 10 de diciembre de 2004.

[42.](#) Carlos Olvera, “Pide el presidente sacar al policía que se lleva dentro”, *Milenio*, 13 de diciembre de 2004.

[43.](#) Arturo Cano, “Del rumor a la barbarie”, suplemento “Masiosare”, *La Jornada*, 28 de noviembre de 2004.

[44.](#) Héctor de Mauleón, “El rumor se convirtió en tragedia”, *El Universal*, 25 de noviembre de 2004.

[45.](#) En 1997 el Cisen lo había distinguido por su destacada labor como instructor de elementos de diferentes corporaciones en fotografía de inteligencia y clandestinidad. Véase Miguel Ángel Velásquez, “En Ixtayopan los policías investigaban ligas de las FARP”, *La Jornada*, 27 de noviembre de 2004.

[46.](#) *Idem.*

[47.](#) Alfredo Méndez Ortiz, “Respuesta de la SSP federal”, *La Jornada*, 30 de noviembre de 2004.

[48.](#) *Idem.*

[49.](#) David Vicenteño, “Rastreaban a policías locales”, *Reforma*, 26 de noviembre de 2004.

[50.](#) Arturo Cano, “Del rumor a la barbarie”, citado.

[51.](#) Rafael Ruiz Harrell, “¿Ratas o ciudadanos?”, *Reforma*, 21 de junio de 1999, y Adolfo Aguilar Zinser, “La doctrina Montiel”, *Reforma*, 18 de junio de 1999.

[52.](#) David Vicenteño, “Reclaman muerte a secuestradores”, *Reforma*, 28 de junio de 2004.

[53.](#) Homero Aridjis, “Un bosque de pancartas”, *Reforma*, 28 de junio de 2004.

[54.](#) León García Soler, “Demagogia y dinero: la red llena de agujeros”, *La Jornada*, 28 de noviembre de 2004.

[55.](#) Carlos Monsiváis, “Que esta vez sí detengan a Fuenteovejuna”, *Proceso*, 28 de noviembre de 2004.

[56.](#) Fernando Solana Olivares, “Los adjetivos vacíos”, *Milenio*, 3 de diciembre de 2004.

[57.](#) Magdalena Gómez, “Linchamiento a los pueblos indígenas”, *La Jornada*, 27 de noviembre de 2004.

[58.](#) León García Soler, “Demagogia y dinero: la red llena de agujeros”, citado.

[59.](#) Fernando Solana Olivares, “Los adjetivos vacíos”, citado.

[60.](#) *Idem.*

[61.](#) Las cursivas son del autor.

[62.](#) Ciro Pérez Silva, “Ofrece Fox acabar con la *dolosa práctica* de los usos y costumbres”, *La Jornada*, 3 de diciembre de 2004.

[63.](#) Alfredo Méndez y Gustavo Castillo, “Figuroa creyó la versión de que sus agentes delinquieron”, *La Jornada*, 14 de enero de 2005.

[64.](#) *Idem.*

[65.](#) El 25 de noviembre, dos días después del linchamiento, elementos de la PFP se manifestaron y denunciaron la “negligencia” de los principales mandos de esa corporación al no haber reaccionado de inmediato. Aseguraron que aunque la PFP contaba en ese momento con más de 100 motocicletas y otros vehículos que pudieron



ser utilizados para auxiliar a sus compañeros, sus superiores les ordenaron no moverse.

[66.](#) Raúl Llanos y Gabriela Romero, “Convirtió PGR el caso Tláhuac en circo para sacar provecho: Regino”, *La Jornada*, 6 de enero de 2005.

[67.](#) El 24 de noviembre, al otro día del linchamiento, sin órdenes de aprehensión ni de cateo, elementos de la Agencia Federal de Investigación detuvieron a 33 personas por su probable responsabilidad en los hechos.

[68.](#) Andrés Becerril, “SSP: iban por *narcos* y encontraron subversivos”, *Milenio*, 10 de diciembre de 2004.

[69.](#) Jorge Fernández Menéndez, “San Juan Ixtayopan: la violencia del *narco* y los grupos armados”, *Milenio*, 25 de noviembre de 2004.

[70.](#) Miguel Ángel Velásquez, “En Ixtayopan los policías investigaban ligas de las FARP”, *La Jornada*, 27 de noviembre de 2004.

[71.](#) Los hermanos Héctor, Alejandro y Antonio Cerezo Contreras fueron acusados de hacer estallar petardos en tres sucursales bancarias el 8 de agosto de 2001, acciones que las autoridades atribuyeron a las FARP.

[72.](#) Raymundo Riva Palacio, “El gruyere de Fox”, columna “Estrictamente Personal”, *El Universal*, 29 de noviembre de 2004.

[73.](#) Jaime Avilés, “De mi padre, la casa que vigilaba la PFP en Tláhuac: Francisco Cerezo”, *La Jornada*, 30 de noviembre de 2004.

[74.](#) Alfredo Méndez Ortiz, “Respuesta de la SSP federal”, *La Jornada*, 30 de noviembre de 2004.

[75.](#) “Aclaración de Francisco Cerezo”, sección “El Correo Ilustrado”, *La Jornada*, 1º de diciembre de 2004. Las cursivas son del autor.

[76.](#) “Policías federales eran señaladores: FARP”, *La Jornada*, 2 de diciembre de 2004.

[77.](#) Omar Sánchez de Tagle, “PGR: el tema de la guerrilla en Tláhuac, cortina de humo”, *Milenio*, 2 de diciembre de 2004.

[78.](#) Jorge Fernández Menéndez, “De Chiapas a Tláhuac: no es lo mismo pero es igual”, columna “Razones”, *Milenio*, 2 de diciembre de 2004.

[79.](#) Raymundo Riva Palacio, “Ensayo de un golpe de Estado”, *El Universal*, 3 de

diciembre de 2004.

80. Raymundo Riva Palacio, “Presumen trampa de EPR”, *El Universal*, 3 de diciembre de 2004.

81. Raymundo Riva Palacio describe allí como un *santuario* la zona que habitan los miembros del EPR, donde, por lo tanto, “no hacen trabajo político, ideológico y mucho menos se embarcan en acciones militares”.

82. Jaime Avilés, “Corea del Norte en Tláhuac”, columna “Desfiladero”, *La Jornada*, 4 de diciembre de 2004.

83. Véase “Tláhuac y la estrategia de Sendero”, donde Fernández Menéndez establece una relación entre la organización peruana Sendero Luminoso, dirigida por Abimael Guzmán (preso en Lima), y los antecedentes maoístas del PROCUP, del que surgiría en 1996 el EPR, y “Mensajes cifrados de Riva Palacio”.

84. Abel Barajas, “Vincula Procuraduría a EPR en linchamiento”, *Reforma*, 8 de diciembre de 2004.

85. Andrés Becerril, “SSP: iban por narcos y encontraron subversivos”, *Milenio*, 10 de diciembre de 2004.

86. Jorge Fernández Menéndez, “La reunión de Tláhuac”, columna “Las Razones del Domingo”, *Milenio Semanal*, 13 de diciembre de 2004.

87. En relación con esa columna de Fernández Menéndez, Agustín González Cázares, miembro de la comisión política nacional del Frente Popular Francisco Villa, aclaró en una carta publicada en la sección “Buzón” de la revista *Milenio*, que la mencionada organización social y sus dirigentes realizan sus actividades de manera pública, lícita y abierta, con apego a la Constitución, y no están ligados con ningún grupo armado.

88. Juan Arvizu, “Descarta Creel que opere guerrilla urbana”, *El Universal*, 17 de diciembre de 2004.

89. Agustín Salgado y Alfredo Méndez, “Labastida: desde 98, indicios de grupos extremistas en Tláhuac”, *La Jornada*, y Claudia Bolaños, “Labastida: desde 98, guerrilla en Tláhuac”, *El Universal*, 17 de diciembre de 2004.

90. Carlos Benavides, “Cisen estuvo presente en el linchamiento”, *El Universal*, 17 de diciembre de 2004.

91. Cabe consignar que, tras presentar una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del procurador Rafael Macedo, el ex secretario de

Seguridad Pública del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, aseguró que el video estaba “manipulado”. Ver Vicente Hernández, “El nuevo video está manipulado: Ebrard”, *Milenio*, 17 de diciembre de 2004. A su vez, Miguel Ángel Velásquez, en su columna Ciudad Perdida, deslizó la sospecha de que la autoría intelectual del video exhibido, de calidad profesional, pudiera ser de un agente del Cisen. Ver Miguel Ángel Velásquez, “Crece sospechosismo sobre el video de Tláhuac”, *La Jornada*, 20 de diciembre de 2004.

[92.](#) Ángel Bolaños Sánchez, “Difunde el Cisen documentos falsos: López Obrador”, *La Jornada*, 23 de diciembre de 2004, p. 36.

[93.](#) Ángel Bolaños y Josefina Quintero, “López Obrador: las filtraciones de la PGR, parte de campaña contra Regino”, *La Jornada*, 24 de diciembre de 2004.

[94.](#) Según el manual *Operaciones de la guerra psicológica*, “la propaganda blanca es aquella que se difunde y se reconoce por la fuente o sus representantes oficiales. La propaganda gris es aquella que no identifica especialmente su fuente. La propaganda negra es aquella que aduce otra fuente y no la verdadera”. *Psychological Warfare Operations*, citado por Georgui Arbátov en *El aparato de propaganda político e ideológico del imperialismo*, Akal Editor, Madrid, 1975.

[95.](#) Georgina Saldierna y Claudia Herrera, “El gobierno del D. F. ‘de alguna manera ha tolerado’ los linchamientos: Fox”, *La Jornada*, 28 de noviembre de 2004.

[96.](#) Gustavo Castillo García, “Falta acreditar la presencia de grupos armados en Ixtayopan, dice Macedo”, *La Jornada*, 13 de enero de 2005.

### LA DANZA DEL DESAFUERO III

[1.](#) La expresión “desafuero patriótico” aludía a una situación similar, ocurrida en 1985, cuando el PAN sufrió un fraude electoral en Chihuahua y el PRI lo justificó *so pretexto* de la “defensa nacional”. El PRI dijo entonces que la “derecha panista” estaba vinculada a Estados Unidos, “y vamos a hacer el fraude, aunque sea antidemocrático, pero es un fraude patriótico”. Véase Ángel Bolaños, Gabriela Romero y Raúl Llanos, “El pueblo decidirá quién será el próximo presidente”, *La Jornada*, 10 de febrero de 2005.

[2.](#) Ángel Bolaños Sánchez, “Lo primero, evitar el desafuero; si no, lucharé aun preso: López Obrador”, *La Jornada*, 12 de febrero de 2005.

[3.](#) “Manifiesto Ladoísta”, *La Jornada*, 12 de febrero de 2005.

4. Javier Quijano Baz, “El golpe de Estado en marcha”, *Milenio*, 14 de febrero de 2005.
5. “No hay delito sin pena legal.”
6. Julio Boltvinik, “Doble golpe de Estado”, *La Jornada*, 25 de febrero de 2005.
7. Manuel Camacho Solís, “Camino inédito”, *El Universal*, 21 de febrero de 2005.
8. Octavio Rodríguez Araújo, “AMLO, un líder, un movimiento”, *La Jornada*, 17 de febrero de 2005.
9. Andrés Oppenheimer, “¿Tendrá México un presidente de izquierda?” *Reforma*, 31 de enero de 2003.
10. Jim Cason y David Brooks, “Descubre el Pentágono una nueva amenaza en América Latina: el populismo radical”, *La Jornada*, 29 de marzo de 2004.
11. *Idem*.
12. Adolfo Gilly, “Populismo radical: un sujeto político no identificado”, ponencia en el seminario “Las izquierdas en México y en América Latina”, ciudad de México, 6 a 8 de mayo de 2004.
13. Alejandro Almazán, “Los acuerdos que López Obrador rechazó”, “La Revista”, *El Universal*, 21 de febrero de 2005.
14. “Advierte CIA inestabilidad por comicios”, redacción de *Reforma*, 17 de febrero de 2005.
15. Citado en “El Apocalipsis según la CIA”, editorial de *La Jornada*, 18 de febrero de 2005.
16. Véase Horacio Santini, “*narcoguerra* en México, alerta Estados Unidos”, y Carole Simonnet, “Incapaces, las fuerzas del orden: Tony Garza”, *Milenio*, y “*Seria inseguridad* en México, advierte Estados Unidos”, *La Jornada*, 27 de enero de 2005.
17. Andrea Merlos, “Demanda Estados Unidos fortalecer apoyo contra terrorismo”, *Reforma*, 25 de febrero de 2005.
18. Raymundo Riva Palacio, “¡Mayday, mayday!”, columna “Estrictamente Personal”, *El Universal*, 11 de febrero de 2005.
19. General brigadier diplomado de estado mayor Efrén Martínez Guzmán “De la Secretaría de la Defensa Nacional”, “Voz del Lector”, *El Universal*, 12 de febrero de 2005.

[20.](#) *Idem.*

[21.](#) David Aponte, “Los zetas poseen misiles, según Estados Unidos”, *El Universal*, 12 de febrero de 2005.

[22.](#) “Probar lo de los misiles”, editorial de *El Universal*, 12 de febrero de 2005.

[23.](#) José Carreño, “Desconoce Estados Unidos si venden SAM-7 en América Latina”, *El Universal*, 13 de febrero de 2005.

[24.](#) Silvia Otero, “Verifican reporte de narcomisiles”, *El Universal*, 13 de febrero de 2005.

[25.](#) Silvia Otero, “PGR: Los zetas están pasando a la historia”, *El Universal*, 13 de febrero de 2005.

[26.](#) Véase Noam Chomsky, *Estados fallidos. El abuso de poder y el ataque a la democracia*, Ediciones B, Barcelona, 2007.

[27.](#) Federico Berruelo, “AMLO, Fox, Madrazo y la parodia nacional”, *Milenio*, 27 de febrero de 2005.

[28.](#) Blanca Valadez, “Moviliza el PRD a 40 000 personas contra el desafuero de AMLO”, *Milenio*, 21 de febrero.

[29.](#) José Antonio Román, “Apoyar a López Obrador no es el *apocalipsis*: Rivera”, *La Jornada*, 21 de febrero de 2005.

[30.](#) “Carta abierta a la opinión pública. Sí a la democracia, no al desafuero”, *Milenio*, 28 de febrero de 2005.

[31.](#) Karina Avilés, “Cerrarle el paso a la izquierda llevará el país al caos, advierte González Casanova”, *La Jornada*, 16 de marzo de 2005.

[32.](#) Andrés T. Morales y Martín Sánchez, “López Obrador será presidente; ‘es el que tiene más cojones’: brujos de Veracruz”, *La Jornada*, 5 de marzo de 2005.

[33.](#) Raúl Castro y José Yuste, “Exigen los empresarios alto al enfrentamiento Fox-AMLO”, *Milenio*, 24 de febrero de 2005.

[34.](#) Claudia Herrera Beltrán, “Cuidado con el populismo, alerta el presidente y le imputa la crisis de 1994”, *La Jornada*, 26 de febrero de 2005.

[35.](#) Juan Balboa, “Insiste Fox en su rechazo a estatismo y populismo”, *La Jornada*, 28 de febrero de 2005.

[36.](#) Víctor Ballinas, “Niega Creel haber dicho que con López Obrador la economía sería un desastre”, *La Jornada*, 17 de marzo de 2005.

[37.](#) Jorge Fernández Menéndez, “AMLO, el regreso al pasado y el *NYT*”, *Milenio*, 18 de marzo de 2005.

[38.](#) David Brooks, “Eliminar a López Obrador, retroceso democrático: *Post*”, *La Jornada*, 7 de abril de 2005, y grupo parlamentario del PRD, “La prensa extranjera se pronuncia sobre el desafuero: que los ciudadanos decidan”, *La Jornada*, 12 de abril de 2005.

[39.](#) *Idem.*

[40.](#) *Idem.*

[41.](#) Georgina Saldierna y Ciro Pérez, “Grupo civil *fantasma* patrocina onerosa campaña televisiva contra López Obrador”, *La Jornada*, 7 de abril de 2005.

[42.](#) Jaime Avilés, “Con manos de santa, el manejo de la multitud”, *La Jornada*, 8 de abril de 2005.

[43.](#) Ángel Bolaños y Gabriela Romero, “López Obrador convoca desde el Zócalo a movilizaciones pacíficas”, *La Jornada*, 8 de abril de 2005.

[44.](#) Simbólicamente, la manifestación convocada por AMLO recorrería la misma ruta que la Marcha del Silencio del 13 de septiembre de 1968 contra el diazordacismo: del Museo de Antropología al Zócalo.

[45.](#) Enrique Méndez y Roberto Garduño, “¡No estás solo!, coro de los perredistas en San Lázaro”, *La Jornada*, 8 de abril de 2005.

[46.](#) Véase el discurso completo en Renato Dávalos y Andrea Becerril, “Fox actuó con dolo para degradar las instituciones, acusa López Obrador”, *La Jornada*, 8 de abril de 2005.

[47.](#) El dictamen de la sesión instructora fue aprobado por 206 diputados del PRI, 145 del PAN, ocho del Partido Verde y el ex futbolista Roberto Ruiz Esparza, quien dejó el *blanquiazul* para convertirse en “independiente”. Véase Roberto Garduño y Enrique Méndez, “Al proceso por El Encino podrían sumarse otras causas”, *La Jornada*, 8 de abril de 2005.

[48.](#) De un total aproximado de 60 priístas que habían dicho desafiarían la “cultura de la línea”, sólo 11 al final votaron en contra: Manuel García, Roberto Campa, Sergio Chávez, María H. Domínguez, Armando Leyson, Cruz López Rosalía Mazari, Luis A. Ramírez, Benjamín Sagahón y Roberto Vega. En las filas de Acción Nacional

sólo la veracruzana Regina Vázquez no acató la orden presidencial y de su dirigencia partidaria de votar en bloque por la inhabilitación de López Obrador. Los otros votos en contra fueron 96 de la bancada del PRD, ocho diputados del Partido Verde, los seis diputados del PT y los cinco de Convergencia.

[49.](#) Agustín Basave, “No trunquemos nuestra transición”, *La Jornada*, 16 de abril de 2005.

[50.](#) Jorge Camil, “Honorable diputados (hoy como ayer..)”, *La Jornada*, 22 de abril de 2005.

[51.](#) Leonor Flores y Fernando Pescador, “Mensaje de AMLO calma a inversionistas”, *Milenio*, y Roberto González Amador y otros, “López Obrador tranquiliza los mercados”, *La Jornada*, 8 de abril de 2005.

[52.](#) David Brooks, “Decisión ‘desafortunada’: medios de Estados Unidos” *La Jornada*, 9 de abril de 2005.

[53.](#) Roberto González Amador, “*The Economist*: amenazados, derechos políticos en México”, *La Jornada*, 16 de abril de 2005.

[54.](#) *Idem.*

[55.](#) Jorge Fernández Menéndez, “Perdió López, no ganó nadie”, columna “Razones”, *Milenio*, 8 de abril de 2005.

[56.](#) “La oligarquía de siempre”, editorial de *La Jornada*, 8 de abril de 2005.

[57.](#) *Idem.*

[58.](#) Gustavo Castillo, “La consignación tardará varias semanas”, *La Jornada*, 16 de abril de 2005.

[59.](#) Enrique Galván Ochoa, “Le tembló la mano al Tucope: aplazan la consignación del *Peje*”, *La Jornada*, 16 de abril de 2005.

[60.](#) Jaime Avilés, “El tiempo corre contra Fox”, columna “Desfiladero”, *La Jornada*, 16 de abril de 2005.

[61.](#) Octavio Rodríguez Araujo, “*Foxestein* y el desafuero”, *La Jornada*, 21 de abril de 2005.

[62.](#) Patricia Ruiz, “Presidencia no contempla el indulto”, *Milenio*, 15 de abril de 2005.

[63.](#) Daniel Venegas, “No lo aceptaría: López Obrador”, *Milenio*, 15 de abril de 2005.

2005.

[64.](#) Luis Javier Garrido, “La consignación”, *La Jornada*, 22 de abril de 2005.

[65.](#) Véase el artículo de opinión de Miguel Ángel Granados Chapa en *Reforma*, 22 de abril de 2005.

[66.](#) Raúl Llanos, Gabriela Romero y Mirna Servín, “Acusan perredistas a Vega Memije de *filtrar* a panistas información judicial”, *La Jornada*, 21 de abril de 2005.

[67.](#) Miguel Ángel Granados Chapa, citado.

[68.](#) A. Becerril y otros, citado, y Georgina Saldierna y Mariana Chávez “La fianza ‘pone al PAN en entredicho’: Barrio”, *La Jornada*, 22 de abril de 2005.

[69.](#) *Idem.*

[70.](#) La referencia del vocero de la Presidencia, Rubén Aguilar —en una alocución formal del gobierno mexicano—, a Andrés Manuel López Obrador como el “señor López” pareció adherir en la coyuntura a la moda desdeñosa de nomenclatura recortada que mantenían los más furibundos opositores del tabasqueño en los medios, en particular el diario salinista *La Crónica*.

[71.](#) Alfredo Méndez y Ángel Bolaños, “Exige López Obrador al juez designado la revocación de la libertad caucional”, *La Jornada*, 22 de abril de 2005.

[72.](#) Gustavo Castillo, Alfredo Méndez y Gabriela Romero, “Niega juez orden de presentación contra López Obrador; devuelve el expediente”, *La Jornada*, 23 de abril de 2005.

[73.](#) Carlos Monsiváis, “La fianza o el ridículo como virtud teologal”, *Proceso*, 24 de abril de 2005.

[74.](#) José Galán, “*Extraño*, que la PGR descuidara tanto las formas legales, advierte Carrancá”, *La Jornada*, 24 de abril de 2005.

[75.](#) Ángel Bolaños, “La devolución del expediente, ardid contra la marcha”, *La Jornada*, 24 de abril de 2005.

[76.](#) “Trascendió...”, *Milenio*, 24 de abril de 2005.

[77.](#) “Condenan escritores asalto a la democracia”, *La Jornada*, 24 de abril de 2005.

[78.](#) Alfredo Méndez, “La marcha reunió a ‘120 000 personas’, según la SSP federal”, *La Jornada*; Mauricio Pérez y otros, “Realiza la izquierda su más grande



movilización”, *Milenio*, y Fabiola Cancino y otros, “Pide López Obrador detener el encono”, *El Universal*, 25 de abril de 2005.

[79.](#) Véase Jaime Avilés, “La enjundia antifoxista, clamor en el ensayo de la marcha de la victoria”, *La Jornada*, y Juan Pablo Becerra Acosta, “Identidad en silencio: ‘Nosotros los López, ustedes los jijos’”, *Milenio*, 25 de abril de 2005.

[80.](#) Armando Tejeda, “José Saramago encabeza la protesta de los mexicanos en Barcelona”, *La Jornada*, y “Apoyan en el extranjero a López Obrador”, redacción de *Milenio*, 25 de abril de 2005.

[81.](#) Carlos Fazio, “México. La rendición de Fox”, semanario *Brecha* de Montevideo, 5 de mayo de 2005.

[82.](#) *Idem.*

[83.](#) *Idem.*

[84.](#) *Idem.*

[85.](#) *Idem.*

[86.](#) *Idem.*

[87.](#) En su renuncia formal a la Procuraduría General de la República, el general Rafael Macedo de la Concha esgrimió el argumento de que lo hacía “en aras de la gobernabilidad democrática” y no quería ser un obstáculo para el presidente de la República. Con él dejaron la institución el subprocurador Carlos J. Vega Memije y otros funcionarios. Macedo fue sustituido por Daniel Cabeza de Vaca.

[88.](#) Véase el discurso completo en Rosa Elvira Vargas, “Renuncia Macedo, revisión total al expediente de López Obrador: Fox”, *La Jornada*, 28 de abril de 2005.

[89.](#) *Idem.*

[90.](#) La reacción de Roberto Madrazo fue difundida en la primera plana del diario *Milenio* con un titular que decía: “Trina Madrazo contra Fox por el caso AMLO”, *Milenio*, 29 de abril de 2005.

[91.](#) Miguel Ángel Granados Chapa, “La ley y la gente”, columna “Plaza Pública”, *Reforma*, 1º de mayo de 2005.

[92.](#) Véase Luis Javier Garrido, “La resaca”, *La Jornada*, 6 de mayo de 2005.

[93.](#) Carlos Ordoñez, “Se revierte repunte del presidente”, *El Universal*, 25 de abril

de 2005.

[94.](#) Luis Javier Garrido, “La resaca”, citado.

[95.](#) Véase Raymundo Riva Palacio, “Claudicación”, *El Universal*, 2 de mayo de 2005.

[96.](#) *Idem.*

[97.](#) Ciro Pérez y *La Jornada de Oriente*, “Concordia y diálogo, el mejor camino para defender nuestra democracia: Fox”, *La Jornada*, 6 de mayo de 2005.

[98.](#) Rosa Elvira Vargas, “El encuentro Fox-López Obrador, ‘punto de inflexión’, Los Pinos”, *La Jornada*, 6 de mayo de 2005.

#### ESTRATEGIA DE LODO Y ODIO

[1.](#) Una primera versión de “Polémica por izquierda” fue publicada por el autor en el semanario *Brecha* de Montevideo, Uruguay, el 19 de agosto de 2005.

[2.](#) La versión original del texto recogido con el título “AMLO, el PRD y la gente” fue publicada por el autor en las páginas de opinión de *La Jornada*, el 29 de agosto de 2005.

[3.](#) “Mi legado, una nueva forma de hacer política”, *La Jornada*, 29 de julio de 2005.

[4.](#) Enrique Galván Ochoa, “Enchilada Sanborns para un país de pobres”, *La Jornada*, 30 de septiembre de 2005.

[5.](#) Véase Sandra Ruso, “En el Tren del Alba, Maradona, Morales y Kusturica urdieron el repudio a Bush”, *La Jornada*, 6 de noviembre de 2005.

[6.](#) Walter Goobar y Víctor Hugo Michel, “Kirchner acusa a Fox de ser sumiso ante Estados Unidos”, *Milenio*, 9 de noviembre de 2005.

[7.](#) Véase el titular de primera plana de *La Jornada*, “Fox confunde la diplomacia con pleitesía: Kirchner”, 9 de noviembre de 2005.

[8.](#) La expresión *relaciones carnales* fue acuñada por el ex canciller argentino Guido di Tella para calificar la política exterior del gobierno de Carlos Menem (1989-1999), basada en el alineamiento automático con Estados Unidos.

[9.](#) Citado por Walter Goobar en “Fox, más bushista que Bush”, *Milenio*, 7 de noviembre de 2005.

[10.](#) Fernando Damián, “Fox, cabildero de Bush, dicen PRI y PRD”, *Milenio*, 7 de noviembre de 2005.

[11.](#) Según las cuentas alegres del canciller mexicano Luis Ernesto Derbez en Mar del Plata, “90 por ciento del producto interno bruto (PIB) del continente americano está dispuesto a formar parte del área de Libre Comercio de las Américas”. Agregó que 29 países apoyaron la propuesta mexicana de relanzar el ALCA. No obstante, el ALCA no pasó. Como dijo Néstor Kirchner, fue “histórico” resistir sin fisuras a la presión de Washington. Véase Rosa Elvira Vargas y Stella Calloni, *La Jornada*, 7 de noviembre de 2005.

[12.](#) A modo de ejemplo, el escritor Carlos Fuentes dijo que era un error que el gobierno mexicano entablara una disputa con un “payaso” como Hugo Chávez, mientras en *Milenio* Federico Arreola llamó “gorila” al presidente venezolano, y el director del periódico, Carlos Marín, lo catalogó como un “golpista bloquiflojo”. Véase Inder Bugarin, “Exhorta Fuentes: ignoren *payaso*”, *Reforma*, 20 de noviembre de 2005; Carlos Marín, “Chávez, el bloquiflojo”, y Federico Arreola, “Hugo Chávez, un gorila”, *Milenio*, 10 de noviembre y 16 de noviembre de 2005, respectivamente.

[13.](#) Jorge Enrique Botero, “Da tristeza el entreguismo de Fox, afirma Chávez”, *La Jornada*, y Víctor Hugo Michel y Diego Osorno, “Arremete Chávez contra Fox: Se arrodilla ante el imperio”, *Milenio*, 10 de noviembre de 2005.

[14.](#) David Carrizales, “Urde el PAN embate a Chávez en Venezuela”, *La Jornada*, 18 de noviembre de 2005.

[15.](#) Agencias, “Cabildea Estados Unidos contra Chávez”, *Reforma*, 18 de noviembre de 2005.

[16.](#) Josetxo Zaldúa y Jorge E. Botero, “Acusa Caracas a Fox de agresión sin sentido”, *La Jornada*, y Ricardo Alanís, “México y Venezuela retiran sus embajadores”, *Milenio*, 15 de noviembre de 2005.

[17.](#) Rosa Elvira Vargas, “México, dispuesto a llegar a la ruptura de relaciones con Venezuela, advierte Fox”, *La Jornada*, 15 de noviembre de 2005.

[18.](#) La expresión “primer poder”, en sustitución de la más clásica “cuarto poder”, fue utilizada por el investigador Javier Esteinou Madrid en un artículo que tituló “El primer poder”, reproducido por la revista *Etcétera*, núm. 42, México, 1º de abril de 2004.

[19.](#) Andrea Becerril, “Culpa AMLO a banqueros de la *guerra sucia* en medios”, *La Jornada*, 9 de abril de 2006.

[20.](#) *Idem.*

[21.](#) Ana Rodríguez, Fabiola Palapa y Adriana Castañeda, “Atroci­dad, el *spot* donde aparece Poniatowska: intelectuales y artistas”, *La Jornada*, 10 de abril de 2006.

[22.](#) *Idem.*

[23.](#) *Idem.*

[24.](#) Carlos Monsiváis, “El turno del IFE”, *La Jornada*, 10 de abril de 2006.

[25.](#) Ricardo Gómez, “Los comicios, una guerra, dice Calderón”, *Milenio*, 12 de marzo de 2006.

[26.](#) Claudia Herrera Beltrán, “Calderón: no creo que Slim respalde a AMLO”, *La Jornada*, 19 de abril de 2006.

[27.](#) Claudia Herrera Beltrán, “Espino: fantochería, eso de que López Obrador es el candidato de los pobres”, *La Jornada*, 18 de abril de 2006.

[28.](#) Claudia Herrera Beltrán, “Calderón: no creo que Slim respalde a AMLO”, citado.

[29.](#) Véase “PAN: Kramer vs. Kramer”, editorial de *La Jornada*, 19 de abril de 2006.

[30.](#) Véase “Rayuela”, *La Jornada*, 19 de abril de 2006.

[31.](#) David Brooks, “López Obrador, ‘ultraizquierdista ligado a Chávez y Castro’: Morris”, *La Jornada*, 17 de abril de 2006.

[32.](#) *Idem.*

[33.](#) *Idem.*

[34.](#) Véase Eva Golinger y Romain Migus, *La telaraña imperial. Enciclopedia de injerencia y subversión*, Centro Internacional Miranda y Fundación Centro de Estudios Estratégicos, Caracas, 2008.

[35.](#) Véase Alfredo Valadez, “Desmiente el gobierno cubano a Morris: Fidel Castro no está detrás de AMLO”, *La Jornada*, 18 de abril de 2006, y DPA, “El PAN no arrastrará a Venezuela a la contienda mexicana: Alí Rodríguez”, *La Jornada*, 19 de abril de 2006.

[36.](#) Gabriel León, “Desconoce Presidencia relación de Venezuela con campaña de AMLO”, *La Jornada*, 18 de abril de 2006.

[37.](#) Andrea Becerril, “Perredistas piden datos sobre situación migratoria del publicista Antonio Solá”, *La Jornada*, 18 de mayo de 2006.

[38.](#) *Idem.*

[39.](#) Jenaro Villamil, “Silencio cómplice”, *Proceso*, núm. 1537, 16 de abril de 2006.

[40.](#) Carlos Monsiváis, “Estrategia del odio” *Proceso*, núm. 1537, 16 de abril de 2006.

[41.](#) Carlos Fazio, “Preparando el voto del miedo”, *La Jornada*, México, 13 de marzo de 2006.

[42.](#) Francisco Reséndiz, “Células chavistas apoyan aquí eje Caracas-La Habana-México” y “Operan grupos bolivarianos 10 centros logísticos en el Distrito Federal”, *La Crónica*, 7 y 8 de marzo de 2006, respectivamente.

[43.](#) Las cursivas son del autor.

[44.](#) Raymundo Riva Palacio, “Armas para el EPR”, columna “Estrictamente Personal”, *El Universal*, 9 de mayo de 1995.

#### EL CASO ATENCO

[1.](#) Javier Salinas, René Ramón, Roberto Garduño, Gustavo Castillo, “Sitian 500 granaderos a atenguenses y floricultores”, *La Jornada*, 4 de mayo de 2006.

[2.](#) Cabe consignar que la cotización del dólar guardaba una relación aproximada de 11 pesos por una unidad de divisa estadounidense.

[3.](#) “Atenco: Estado de derecho a la medida. Informe de observación del 3 al 10 de mayo de 2006”, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C.

[4.](#) La Policía Federal Preventiva, diseñada en gran parte por el vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid con las características de la Policía Nacional de Chile y de la Guardia Civil española, comenzó a operar en 1999 con una estructura cuasimilitar, ya que se integró con 4 899 soldados, 1 862 armas, 352 vehículos y 99 perros policías adscritos a la Tercera Brigada de la Policía Militar. Los soldados fueron reasignados a la dirección de las Fuerzas Federales de Reacción y Apoyo Inmediato (FFRAI) de la PFP. Al mismo tiempo, un agrupamiento de fuerzas especiales de origen secreto, posiblemente del Ejército Mexicano y de la Marina de Guerra, entrenado con tácticas y estrategias contrainsurgentes y adoctrinadas con la ideología “antiterrorista”, también fue incorporado a la PFP.

5. La Agencia de Seguridad Estatal es un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, cuyo titular es Humberto Benítez Treviño. La ase sustituyó a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México y, según el diputado panista Gustavo Parra, al nacer no se reformó la ley de seguridad estatal, por lo cual, durante los hechos de Atenco, carecía de sustento legal. Desde su creación, Wilfrido Robledo se desempeñó como comisionado de la ase. Véase Silvia Chávez González, “Ilegítimo poder de Robledo: diputado panista”, *La Jornada*, 28 de mayo de 2006.

6. El 5 de mayo el procurador general de Justicia del Estado de México, Abel Villicaña, y el gobernador Enrique Peña Nieto reconocieron que el fallecimiento de Francisco Javier Cortés fue a consecuencia de un impacto de arma de fuego, calibre.38, “similar al que utilizan los policías del estado”. Véase *La Jornada*, 6 de mayo de 2006. Por su parte, el 10 de mayo siguiente, el Centro Pro presentó una videograbación con entrevistas a tres integrantes de la policía del Estado de México que participaron en la operación en San Salvador Atenco. Los entrevistados denunciaron que la bala que mató a Francisco Javier Cortés fue disparada por un policía estatal y que los uniformados recibieron órdenes de “golpear a todo lo que se moviera”.

7. Ollin Alexis Benhumea, de 20 años, quien estudiaba en la Facultad de Economía de la UNAM, fue alcanzado por un proyectil de gas lacrimógeno en la región parietal y permaneció 15 horas en una vivienda después de haber sido herido porque el cerco policial impidió que se le atendiera. El impacto le provocó muerte cerebral y falleció tras una agonía de 34 días. Véase Víctor Ballinas “Murió Alexis Benhumea, estudiante herido durante el operativo en Atenco”, *La Jornada*, 8 de junio de 2006.

8. Arnulfo Pacheco Cervantes, acusado por una mujer policía de ser uno de los dirigentes campesinos que “estaban dando órdenes el día del operativo”, fue sacado a golpes de su casa cuando estaba acostado, pues, según el testimonio de familiares, “padece una enfermedad degenerativa —olivo pongo cerebelos— que acelera el envejecimiento y deteriora sus facultades. La enfermedad lo imposibilita para caminar y le cuesta trabajo hablar”. Golpeado con saña (cinco costillas rotas y lesiones mayores en todo el cuerpo), el anciano fue recluido en el penal de Santiaguito acusado de delitos graves: “secuestro equiparado” y “ataques a las vías de comunicación”. Véase Hermann Bellinghausen, “Anciano minusválido, otra víctima inocente de la brutalidad policiaca”, *La Jornada*, 2 de junio de 2006, y Víctor Ballinas, “Acusan a hombre parapléjico de dirigir la resistencia en Atenco”, *La Jornada*, 10 de junio de 2006.

9. Véase Carlos Fazio, “Guadalajara pudo ser un laboratorio para refinar las técnicas de tortura”, *La Jornada*, 5 de junio de 2004.

10. Arturo Jiménez y José Galán, “Las mujeres violadas de Atenco ‘nombraron lo innombrable’ ”, *La Jornada*, 26 de mayo de 2006.

11. Experto en labores de contrainteligencia formado en los sótanos de los órganos de seguridad del Estado, perseguidor de guerrilleros y reputado como un “operador marca diablo” por el ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Tello Peón, el vicealmirante CGPH (del Cuerpo General Piloto Helicopista), Wilfrido Robledo Madrid, primo del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, recluido en el penal de La Palma por sus vínculos con el cártel de Juárez, ingresó al servicio activo de la Armada en 1964, fue miembro del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Luis Echeverría y se desempeñó luego como director de Protección del Cisen (su brazo operativo), encabezando el poco conocido Grupo Antiterrorista (GAT). En 1998 participó en la creación de la PFP, corporación paramilitar de la que Robledo fue su segundo comisionado tras el efímero paso de Omar Fayad por la corporación. Con ese carácter, Robledo comandó el llamado “operativo UNAM”, la acción protagonizada el 6 de febrero de 2000 por 2 260 efectivos de la PFP que, con el objetivo de retomar las instalaciones de la Ciudad Universitaria, ocupadas por estudiantes en huelga, violaron la autonomía de la casa de estudios. Al principio del gobierno de Vicente Fox, Robledo se confrontó con el nuevo secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, y fue investigado por la Secretaría de la Contraloría por uso indebido de atribuciones, a raíz de la adquisición irregular de 12 aeronaves para la PFP. La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo lo inhabilitó hasta por 12 años, pero fue protegido por el secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot, y por el procurador general de la República, general Rafael Macedo de la Concha, desempeñándose luego como asesor en materia de seguridad del Grupo Carso, del magnate Carlos Slim. Pese a estar inhabilitado, fue contratado como titular de la Agencia de Seguridad Estatal por el gobernador mexicano Enrique Peña Nieto.

12. El general de brigada Ardelio Vargas Fosado fue designado jefe del Estado Mayor de la PFP el 29 de septiembre de 2005. Hasta entonces se desempeñaba como director de Investigaciones del Cisen, donde fue alumno y subalterno de Wilfrido Robledo, destacándose en los círculos de inteligencia por sus actividades en los estados de Oaxaca y Chiapas.

13. Tras declarar el restablecimiento de la “paz social” en Atenco, Wilfrido Robledo aseguró que los miembros del FPDT eran “secuestradores, homicidas, personas a las que es más fácil señalar qué delitos no han cometido, que enumerar los

ilícitos en los que han estado involucrados”. Señaló, también, que Ignacio del Valle es un delincuente “que merece estar en La Palma, sin necesidad de ningún estudio” que determine su peligrosidad. Véase Roberto Garduño, Gustavo Castillo, René Ramón y Javier Salinas, *La Jornada*, 5 de mayo de 2006.

14. Carlos Marín y Ciro Gómez Leyva, “Wilfrido: ni violaciones ni escopetas”, *Milenio*, 8 de mayo de 2006.

15. Es de hacer notar el uso deliberado del tuteo, acción que denota familiaridad o cercanía entre el entrevistado y los entrevistadores, lo que a su vez sugiere cierta parcialidad en el tratamiento de la información contenida en la entrevista.

16. Carlos Marín y Ciro Gómez Leyva, citado.

17. Silvia Chávez González, “Nada pasó en el traslado, dice Wilfrido Robledo”, *La Jornada*, 26 de mayo de 2006.

18. “Soy el jefe, yo coordiné el operativo. Cuando vas a un operativo de esos y te reciben con armas y explosivos no puedes esperar salir limpio, aunque tratas de que sea así. Tiene que haber gente golpeada.” Agregó que en Atenco puso en práctica “tácticas paramilitares” y todos los “conocimientos” acumulados durante 20 años de policía. Gabriel León, “Prueba del polígrafo exculpa a 50 agentes de abuso sexual”, *La Jornada*, 30 de mayo de 2006.

19. *Idem.*

20. Distintos expertos y organizaciones humanitarias han puesto en entredicho la prueba del polígrafo, ya que sólo mide los estados de estrés o miedo, pero no precisamente la mentira ni las respuestas simuladas. Véase Eugenia Jiménez, “El polígrafo no demuestra nada, asegura la CNDH”, *Milenio*, 31 de mayo de 2006.

21. Véase Alejandro Gutiérrez, “Me dejan actuar o renuncio”, *Proceso*, 14 de mayo de 2006; Jorge Teherán y Sergio J. Jiménez, “Anomalías en la PFP por más de 40 mdp”, *El Universal*, 17 de mayo de 2004; Jorge Medellín, “Niega la PFP manejo irregular de recursos”, *El Universal*, 18 de mayo de 2004, y “Precisan nota sobre PFP”, suscrita por el oficial mayor de la PFP, Genaro Pérez Rocha, *El Universal*, 18 de mayo de 2004.

22. Carlos Marín y Ciro Gómez Leyva, “Que me enseñen a un tipo con un escopetazo”, *Milenio*, 8 de mayo de 2006.

23. Según el informe del Centro Pro, las declaraciones del vicealmirante Robledo son contrarias a los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el cual señala: “Los



gobiernos procurarán que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, y posean actitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones”.

[24.](#) Emir Olivares y Gustavo Castillo, “Presentan ante la PGR denuncia por violaciones”, *La Jornada*, 14 de mayo de 2006.

[25.](#) *Idem.*

[26.](#) Alejandro Gutiérrez, “Me dejan actuar o renuncio”, citado.

[27.](#) Fabiola Martínez, “El uso de la fuerza llevó paz a Atenco ante la ‘embestida de violencia’: Fox”, *La Jornada*, 12 de mayo de 2006.

[28.](#) El testimonio pertenece a una estudiante universitaria detenida. Para preservar su identidad, las organizaciones humanitarias emplearon un seudónimo. Véase el informe del Centro Pro, y Jesús Ramírez Cuevas, “Estudiantes presas narran abusos”, *La Jornada*, 11 de mayo de 2006.

[29.](#) *Idem.*

[30.](#) Alma Muñoz y Elio Henríquez, “Pide Rivera investigar las violaciones en Atenco”, *La Jornada*, 15 de mayo de 2006.

[31.](#) Israel Dávila, “Ni encerradas nos vamos a callar: detenidas”, *La Jornada*, 11 de mayo de 2006.

[32.](#) Armando G. Tejeda, “Los policías también violaron a un muchacho: Cristina Valls”, *La Jornada*, 10 de mayo de 2006.

[33.](#) Armando G. Tejeda, “Ciudadanas españolas dan cuenta de vejaciones a manos de policías”, *La Jornada*, 8 de mayo de 2006.

[34.](#) *Idem.*

[35.](#) Gustavo Castillo, “Villicaña me dijo que no había mujeres presas: Pérez Duarte”, *La Jornada*, 12 de mayo de 2006.

[36.](#) El Instituto Nacional de Migración, a cargo de Hipólito Treviño, expulsó el 5 de mayo a las ciudadanas españolas Cristina Valls y María Sastres, a los ciudadanos chilenos Valentina Palma Novoa y Mario Alberto Aguirre Tomic, y a la alemana Samantha Dietmar, por considerar que participaron en actividades políticas de acuerdo con el artículo 33 de la Constitución. Lo anterior en flagrante violación de derechos humanos consistentes en expulsión sin garantías de ley, negación de atención médica, negación de presunción de inocencia, negación al derecho a

información pronta y detallada, intimidación, abuso sexual, violación y tortura.

[37.](#) Roberto Garduño y Enrique Méndez, “En Atenco no hubo violaciones sino abusos deshonestos: Yunes”, *La Jornada*, 12 de mayo de 2006.

[38.](#) “El respeto a derechos, farsa: Soberanes”, *La Jornada*, 11 de mayo de 2006, y Víctor Ballinas, “Recibe CNDH 16 quejas por abuso sexual y 7 por violación”, *La Jornada*, 10 de mayo de 2006.

[39.](#) Liliana Alcántara, “San Salvador Atenco: las fichas del horror”, *El Universal*, 20 de mayo de 2006.

[40.](#) Durante una conferencia de prensa celebrada el 4 de mayo, el jefe del Estado Mayor de la PFP, general Ardelio Vargas Fosado, aseguró que el FPDT había quedado “desarticulado”. A su vez, el secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, dijo que “si bien hay algunas células del grupo, su capacidad de movimiento quedó reducida, ya que el cerebro era Ignacio del Valle”. Véase Emilio Fernández y Miriam Vidal, “PFP asegura que desarticuló el movimiento de Atenco”, *El Universal*, 5 de mayo de 2006. Ignacio del Valle, líder del FPDT, y sus compañeros Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo, fueron internados en el penal de máxima seguridad de La Palma, donde se les siguieron las causas penales 91/06 y 92/06, donde se les imputó secuestro equiparado. Sin embargo, la captura de Del Valle no significó la “desarticulación” del movimiento. Otros líderes del FPDT permanecieron libres, en la clandestinidad; entre ellos, según un reportaje del periódico *La Jornada*, David Pájaro, Miguel Buendía, Jorge Flores, Jesús Adán Espinoza, Bernardino Cruz, Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, y sus hijos América y Ulises del Valle. El 26 de mayo de 2006, un juez del fuero común de Toluca obsequió una orden de aprehensión, por el delito de secuestro, en contra de América del Valle, una joven de 25 años, pasante de la carrera magisterial. De ser detenida, por ser delito grave no alcanzaría fianza y sería recluida en el penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya de Juárez, administrado por la PFP.

[41.](#) María Esther Piña Soria, “Atenco, crónica de una muerte azuzada”, *Voces del Periodista*, núm. 137, 15 al 31 de mayo de 2006.

[42.](#) David Brooks, “Yo ordené el operativo en Atenco: Peña Nieto en Estados Unidos”, *La Jornada*, 16 de junio de 2006.

[43.](#) *Idem.*

[44.](#) Carlos Marín y Ciro Gómez Leyva, “Que me enseñen a un tipo con un escopetazo”, citado.

[45.](#) Israel Dávila, “Sólo nueve de 2 000 policías han sido sancionados por la toma de Atenco”, *La Jornada*, 13 de junio de 2006.

[46.](#) Israel Dávila, Javier Salinas y Silvia Chávez, “En la lista de responsables por el operativo atenquense, 23 policías”, *La Jornada*, 15 de junio de 2006.

[47.](#) *Idem.*

#### UNA ELECCIÓN ENVENENADA Y LA PROTESTA CIUDADANA

[1.](#) Ya entonces se denunciaba a la familia del coordinador de campaña de Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, por tráfico de influencias, en particular al jefe del clan, Manuel Carlos Mouriño Atanes, presidente del Grupo Energético del Sureste, a quien autoridades mexicanas le habían iniciado una investigación penal por presunto “blanqueo de capitales”. Véase Rosa Santana, “Mouriño: más tráfico de influencias”, *Proceso*, 18 de junio de 2006, y Homero Campa, “Papá Mouriño, bajo investigación penal”, *Proceso*, 25 de junio de 2006.

[2.](#) Daniel Lizárraga, “Golpe brutal”, *Proceso*, 18 de junio de 2006.

[3.](#) Álvaro Delgado, “La conexión española”, *Proceso*, 18 de junio de 2006.

[4.](#) Álvaro Delgado, “Con dinero baila... Televisa”, y José Reveles, “La rapacidad del PAN”, *Proceso*, 25 de junio de 2006.

[5.](#) Véase Jorge Carrasco Araizaga, “Ariete empresarial”, *Proceso*, 25 de junio de 2006; Fabiola Martínez y Juan Balboa, “Divide a consejeros negativa del CCE de cesar spot contra López Obrador”, *La Jornada*, 24 de junio de 2006, y el editorial “El IFE y los spots”, *La Jornada*, 28 de junio de 2006.

[6.](#) Abraham Nuncio, “El voto patronal”, *La Jornada*, 16 de junio de 2006; Alonso Urrutia y Fabiola Martínez, “Molestia de consejeros del IFE por tibia respuesta de Ugalde a spot del CCE”, *La Jornada*, y Arturo Zárata, “Preocupa a IFE injerencia de IP en competencia electoral”, *El Universal*, 23 de junio de 2006.

[7.](#) Andrea Becerril, “Hay ‘traficantes de influencias’ en la campaña panista del miedo: AMLO”, *La Jornada*, 25 de junio de 2006.

[8.](#) Jorge Carrasco Araizaga, “Ariete empresarial”, citado.

[9.](#) Jesusa Cervantes, Jenaro Villamil y Oswaldo Zavala, “El juego oculto”, *Proceso*, 9 de julio de 2006.

[10.](#) Gloria Leticia Díaz, “El cochinerito versión 2006”, *Proceso*, 16 de julio de 2006.

2006.

[11.](#) Véase José Luis Piñeyro, “¿Pacíficos y legales?”, *El Universal*, 22 de julio de 2006.

[12.](#) Conforme a los datos oficiales Felipe Calderón obtuvo 14 916 927 votos (35.71%), frente a 14 683 096 de Andrés Manuel López Obrador (35.15%). Es decir, una diferencia de 233 831 sufragios (0.56%).

MÉXICO: ¿HACIA UN ESTADO DE EXCEPCIÓN?

[1.](#) Véase Gilberto López y Rivas, “Sedena: el manual de la represión”, *La Jornada*, 4 de mayo de 2007.

[2.](#) Enrique Méndez y Roberto Garduño, “Denuncian la posible operación de ex militares de Estados Unidos en territorio nacional”, *La Jornada*, y Francisco Nieto, “Hágase espía de Estados Unidos en México”, *El Centro*, 8 de septiembre de 2007.

[3.](#) Fidel Castro, “El gigante de las siete leguas”, *Cubadebate*, La Habana, Cuba, 12 y 13 de agosto de 2010.

[4.](#) *Idem.*

[5.](#) *Idem.*

[6.](#) *Idem.*

[7.](#) Silvia Otero, “SRE pide respeto a derechos en la isla”, *El Universal*, y Georgina Saldierna, “Cárdenas, otra víctima de fraude: Fidel; habla sin sustento, dice SRE”, *La Jornada*, 14 de agosto de 2010.

[8.](#) *Idem.*

[9.](#) Víctor Flores Olea, “AMLO se internacionaliza”, *La Jornada*, 16 de agosto de 2010.

[10.](#) Georgina Saldierna, “Aldeano, que la SRE respondiera a dichos de Castro sobre AMLO, señala Muñoz Ledo”, *La Jornada*, 15 de agosto de 2010.

[11.](#) Luis Javier Garrido, “El comandante”, *La Jornada*, 20 de agosto de 2010.

[12.](#) Jorge Ramos Pérez y Javier Cabrera, “Calderón: AMLO sí era un peligro para México”, ocho columnas de *El Universal*, 6 de octubre de 2010.

[13.](#) Jorge Ramos, “Calderón: AMLO hizo un daño terrible a México”, *El Universal*,

y “AMLO sí ‘es un peligro para México’, afirma Calderón”, *La Jornada*, 6 de octubre de 2010.

[14.](#) Jorge Ramos, “Calderón: AMLO hizo un daño terrible a México”, citado.

[15.](#) *Idem.*

[16.](#) Víctor Ballinas, “En vez de pedir perdón a los mexicanos, Calderón opta por la mentira, revira AMLO”, *La Jornada*, 7 de octubre de 2011.

[17.](#) *Idem.*

[18.](#) Francisco Reséndiz, “Calderón cayó en la deshonestidad”, *El Universal*, versión por internet, y “Que Calderón aclare si la expresión ‘haiga sido como haiga sido’ se usó con fines electorales, pide López Obrador”, *Prensa gobierno Legítimo*, internet, 7 de octubre de 2010.

[19.](#) *Idem.*

[20.](#) *Idem.*

[21.](#) “Descalificaciones y fractura nacional”, editorial de *La Jornada*, 7 de octubre de 2011.

[22.](#) Blanche Petrich y Arturo Cano, “EU apuntaló a Calderón tras diagnosticar ‘debilidad’ ”, portada de *La Jornada*, 21 de febrero de 2011.

[23.](#) Blanche Petrich, “EU, preocupado por la ‘debilidad política’ de Felipe Calderón”, *La Jornada*, 21 de febrero de 2011.

[24.](#) *Idem.*

[25.](#) *Idem.*

[26.](#) *Idem.*

[27.](#) Blanche Petrich, “Documentan el doble discurso de Felipe Calderón en materia de muro fronterizo”, *La Jornada*, 21 de febrero de 2011.

[28.](#) John M. Ackerman, “El pacto de Calderón”, *La Jornada*, 28 de febrero de 2011.

[29.](#) Jaime Hernández y Silvia Otero, “Renuncia el embajador Carlos Pascual”, *El Universal*, y Georgina Olson, “El embajador Carlos Pascual deja México”, *Excélsior*.

[30.](#) Miguel Ángel Granados Chapa, “Solidaridades profesionales”, *Reforma*, 27 de marzo de 2011.

[31.](#) Al respeto, véase Héctor Aguilar Camín, “Acuerdo y (des)acuerdo”, *Milenio*, 28 de marzo de 2011.

[32.](#) John Pilger, “Por qué no nos informan honestamente sobre las guerras”, *The Guardian*/ICH, reproducido por Comcosur, Montevideo, Uruguay, 13 de diciembre de 2010.

[33.](#) “Medios: la uniformidad como norma”, editorial de *La Jornada*, 25 de marzo de 2011.

# Índice

- [1.](#) Guerra imperial y desinformación. La mentira del Pentágono como arma de guerra
- [2.](#) El caso Stanley y el golpismo mediático
- [3.](#) A propósito de la ingeniería del consenso. Los megaultras del poder y la reconquista de la UNAM
- [4.](#) De los *videoescándalos* a la crisis con Cuba
- [5.](#) La danza del desafuero I. La PGR como instrumento político del poder
- [6.](#) La danza del desafuero II. El *affaire* Bejarano
- [7.](#) De las *maras* y Al Qaeda a una narcoguerrilla mexicana
- [8.](#) La danza del desafuero III. Tiempo de canallas
- [9.](#) Estrategia de lodo y odio en una República plutocrática
- [10.](#) El caso Atenco: ¿laboratorio para un Estado contrainsurgente?
- [11.](#) Una elección envenenada y la protesta ciudadana
- [12.](#) México: ¿hacia un Estado de excepción?
- [13.](#) La república de Televisa